

ABRIR PRIMERA PARTE

Segunda parte

LA IGLESIA CONQUENSE EN SUS RELACIONES DE PODER

Una vez analizada la estructura institucional de la Iglesia conquense, y conocida ya su organización interna, a continuación nos centraremos en el análisis de su proyección social a través de las relaciones de poder mantenidas a lo largo de la Edad Media[1]. De este modo se tratará de demostrar cómo la Iglesia conquense, junto al indudable desempeño una funcionalidad eclesiástica y religiosa, también se vio inmersa desde el mismo momento de su fundación dentro de todo un complejo entramado de relaciones de poder de la más variada índole, tanto de orden interno como externo. Con este tipo de enfoque metodológico no pretenderé sino llamar la atención sobre una importante faceta de la realidad histórico-eclesiástica que hasta ahora considero que no había sido puesta suficientemente de relieve a través de un análisis metódico que se volcara de lleno en el estudio sistemático de todo el amplio abanico de relaciones de poder susceptibles de ser constatadas en el análisis de una diócesis concreta durante un periodo cronológico amplio.

Las relaciones mantenidas con la Monarquía castellana constituirán el primer ámbito temático de estudio. Desde el siglo XIII hasta fines del XV la Monarquía irá ejerciendo un control cada vez mayor sobre toda la Iglesia, a la vez que la presencia de eclesiásticos en la política y gobernación del reino será cada vez más acusada. Habiendo sido ya estudiadas estas relaciones con

[1]Para ello he partido del estudio inicial que realizara José Manuel Nieto Soria en su Memoria de Licenciatura, en la cual se analizaron las relaciones de poder mantenidas por la Iglesia de Cuenca durante el periodo cronológico comprendido entre los años 1180-1280. Mi análisis personal se inicia desde este último año, a pesar de lo cual para cada tipo de relación he incorporado las conclusiones fundamentales en lo que respecta a las tendencias observadas durante todo el siglo anterior, añadiendo frecuentemente nuevos datos con el fin de completar la información ya recogida por dicho autor para el periodo 1180-1280.

carácter general para todo el conjunto de la Iglesia castellana[2], la aplicación de su estudio al análisis individualizado de la diócesis conquense permitirá comparar de qué modo se desarrollaron estas relaciones con respecto a la tónica general constatable para el conjunto de la Iglesia de Castilla.

Las relaciones de orden intraeclesial constituirán otro ámbito temático de análisis: relaciones con el Papado; con la archidiócesis de Toledo y otras diócesis; relaciones de los obispos de Cuenca con el cabildo catedralicio; relaciones de los componentes de este último con el cabildo como institución; relaciones del obispo y cabildo catedralicio con el clero diocesano, así como las de orden interno entre los clérigos parroquiales; relaciones con algunos monasterios de religiosos; por último, se estudiarán las relaciones del obispo y cabildo con las Órdenes militares de la diócesis, primordialmente la de Santiago. Todo ello posibilitará el ofrecer una clara exposición sobre la enorme diversidad de situaciones de poder que se daban en el seno de la propia Iglesia.

El último campo de análisis vendrá dado por el estudio de las relaciones mantenidas con los laicos y otras comunidades religiosas de la diócesis. De este modo, se analizarán las relaciones Iglesia-concejos, sobre todo con el de Cuenca y aquellos que eran de señorío episcopal, así como las relaciones con la nobleza conquense y, en último lugar, con las comunidades hebrea y musulmana. De esta forma se cerrará la obra, cuyas conclusiones fundamentales espero que contribuyan a abrir las puertas a un amplio campo de estudio de enormes posibilidades e importancia primordial para un mejor conocimiento de la Iglesia y sociedad castellana bajomedievales, y que aquí no quedará sino esbozado mediante el ejemplo conquense.

---

[2] Me refiero a las tres obras fundamentales del profesor José Manuel Nieto Soria sobre esta cuestión: *Las relaciones Monarquía-Episcopado castellano como sistema de poder, 1252-1312*, 2 vols., Madrid, 1983; *Iglesia y poder real en Castilla. El Episcopado, 1250-1350*, Madrid, 1988; e *Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480)*, Madrid, 1993.

Capítulo sexto

RELACIONES CON LA MONARQUÍA CASTELLANA

El conjunto de la Baja Edad Media hispánica constituye una época de importancia fundamental en la configuración de unas relaciones Iglesia-Monarquía cuyas características esenciales habrán de estar presentes durante todo el Antiguo Régimen e incluso, con ciertas variantes, hasta tiempos más recientes.

Por un lado se irá produciendo un paulatino proceso de *estatalización de la Iglesia*, en el sentido de que la Iglesia de cada reino irá quedando bajo el control de la Monarquía a través de cauces institucionales cada vez más definidos. Pero por otra parte, y como contrapartida de lo anterior, también se dará una *eclesiastización de Estado*, configurándose de este modo una permanente presencia de la Iglesia en los principales órganos de decisión política del reino. Este proceso de interpenetración Iglesia-Estado jugará a favor del afianzamiento de la soberanía real, por lo que las relaciones Iglesia-Estado durante los siglos bajomedievales deben ser consideradas como un aspecto básico del triunfo de la soberanía regia a fines de la Edad Media, desempeñando un papel esencial dentro del proceso de génesis bajomedieval del Estado Moderno.

Según el profesor José Manuel Nieto Soria, que ha estudiado a fondo estas relaciones para el caso castellano, pueden distinguirse dos etapas básicas en el desarrollo de las mismas en Castilla. La primera de ellas iría desde mediados del siglo XIII hasta el advenimiento de la dinastía Trastámara, y durante este periodo se definirán los fundamentales aspectos que van a caracterizar a este sistema de relaciones en épocas posteriores. La segunda etapa abarcaría, en líneas generales, desde los inicios de la dinastía Trastámara hasta una fecha que giraría en torno al año 1520, y en esta fase es cuando tendrá lugar la institucionalización de los resultados obtenidos a lo largo del periodo anterior, lo que habrá de constituir un fundamento

esencial de la Monarquía Hispánica Moderna, que se autodefinirá como Monarquía Católica Hispana.

En función de lo arriba expuesto, y en beneficio de una mayor claridad expositiva, en el análisis que a continuación se realizará sobre el desarrollo de estas relaciones en el caso concreto de la Iglesia conquense también distinguiremos dos etapas, antes y después de la llegada de los Trastámara al poder.

PRIMERA ETAPA: DE LOS INICIOS AL ADVENIMIENTO DE LOS TRASTÁMARA

I-CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS

Tal como se acaba de apuntar, en la Corona de Castilla, y en general para todo Occidente, el periodo de tiempo que va desde mediados del siglo XIII hasta comienzos del último tercio del siglo XIV, constituye una etapa crucial en las relaciones Iglesia-Estado, marcada por el auge del poder monárquico que, tras el gran avance experimentado por la *Reconquista*, se enfrenta a los proyectos y dificultades propios de una vasta transformación política que coincide y se integra con las primeras crisis de fondo propias de los tiempos bajomedievales.

Durante esta etapa podemos encontrar indicios de lo que se podría entender como la teoría política de las relaciones Monarquía-Iglesia y, más específicamente, de las relaciones Monarquía-Episcopado. Este pensamiento teórico, que se constituyó en el soporte conceptual de toda una política regia respecto del Episcopado y del conjunto de la Iglesia, tuvo tres principios básicos que conviene tener en cuenta: el de proteccionismo paternalista, el de intervencionismo y el de relación armónica, siendo durante el reinado de Alfonso X cuando se pusieron las bases del desarrollo conceptual de tales principios[3].

[3]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real en Castilla. El Episcopado, 1250-1350*, p. 21.

El principio de *proteccionismo paternalista* cabría definirlo como el sentido de la responsabilidad adquirido por la Monarquía que la empuja a adoptar una postura protectora y paternalista hacia el conjunto de la Iglesia castellano-leonesa, inspirándose para ello en justificaciones basadas en la Teología política y en la tradición, siendo este principio el núcleo teórico fundamental sobre el que se asienta la acción política de la Monarquía castellano-leonesa respecto del Episcopado. Por su parte, el principio de *intervencionismo* vendría a ser la capacidad que la Monarquía reconoce en sí misma para intervenir sobre la Iglesia en asuntos de toda índole, en razón de concepciones de orden teológico y filosófico que señalan a la Monarquía como la institución de máximo rango, bajo cuya dirección y control debe hallarse todo lo que afecta a la vida del reino; es en el *Fuero Real* y en *Las Partidas* donde este principio teórico alcanza una justificación más clara. Por último, respecto al principio de *relación armónica*, hay que decir que tiene un doble sentido en cuanto que, por un lado, hace referencia a la necesidad de mantener una actitud de colaboración entre poder político y poder religioso y, a su vez, a la importancia de alcanzar una cierta armonía o nivelación entre los otros dos principios ya enunciados, consintiendo el poder eclesiástico en el intervencionismo regio a cambio de convertirse en beneficiario de la protección real[4].

Pero esta teoría política de lo que debían ser las relaciones entre Monarquía e Iglesia sólo se plasmó en la realidad de forma parcial y fragmentaria, salvo algunos momentos en que se aplicó en su totalidad con todas sus consecuencias. En efecto, frecuentemente la realidad cotidiana desbordaría el marco teórico. Algunos monarcas castellanos, tal vez todos, trataron en sus comienzos de adaptar su política eclesiástica a este pensamiento político recién expuesto, pero frente a ello se imponía la necesidad de vincular de forma incontestable el conjunto de la Iglesia a sus objetivos políticos, no estando esto plenamente garantizado por los principios teóricos ya enunciados,

[4] *Ibid.*, pp. 21-24.

capaces tan sólo, en caso de aplicarse todos sus contenidos, de asegurar una cierta cooperación entre el poder político y eclesiástico y una cierta capacidad de acción de aquél sobre éste. Para la Monarquía esto no era suficiente, por lo que la realidad intentó superar a la teoría, consiguiéndolo en algunos momentos[5].

Hechas estas previas y necesarias consideraciones, a continuación pasaremos ya a estudiar el modo como se desenvolvieron las relaciones de la Iglesia de Cuenca con la Monarquía castellana hasta el advenimiento de los Trastámara, cuyo análisis se realizará siempre en estrecha conexión con la tónica general de las relaciones Monarquía-Iglesia en el conjunto del reino castellano[6]. Para ello, y haciendo uso de la misma metodología empleada por el profesor José Manuel Nieto Soria, se distinguirán diversos planos de realización de estas relaciones: social, eclesiástico, político y económico, lo cual facilitará enormemente la tarea de análisis en beneficio de una mayor claridad expositiva.

II-EL PLANO SOCIAL

Un primer aspecto de las relaciones mantenidas entre la Iglesia conquense y la Monarquía castellana viene dado por la pertenencia de muchos obispos de Cuenca a familias muy vinculadas a la Monarquía. Por ello en estos casos cabe pensar que el acceso de tales personajes a la mitra conquense fue posible sobre todo gracias a la mediación del monarca, que de esta forma recompensaba los sucesivos servicios que le venían prestando determinadas familias, a la vez que así obtenía garantías de que la titulari-

---

[5] *Ibid.*, pp. 24-25.

[6] Las relaciones de la Iglesia conquense con la Monarquía castellana entre los años 1180-1280 ya fueron en su día analizadas por José Manuel Nieto Soria: «El carácter feudal de las relaciones Monarquía-Episcopado en el ámbito castellano. El caso del obispado de Cuenca (1180-1280)», *En la España Medieval*, III (1982), pp. 197-217. Por ello, en el análisis que a continuación se realizará iremos también incorporando las conclusiones básicas obtenidas por dicho autor para el mencionado periodo.

dad de la diócesis quedaba en manos de una persona de confianza por la fidelidad de su familia con la Realeza.

Para los siglos XII y XIII un rasgo común de la mayoría de los prelados conquenses es su procedencia toledana, así como su condición de mozárabes. Por lo que se refiere al nivel social de sus familias, hay que señalar que en muchos casos corresponde al de los linajes mozárabes toledanos más elevados[7].

Así, el primer obispo de Cuenca, don Juan Yáñez (1182-1197), procedía de una ilustre familia mozárabe de Toledo muy vinculada con la Monarquía, puesto que su padre y su tío habían intervenido en la toma de Cuenca. Su sucesor, San Julián (1197-1208), según demostró González Palencia, también procedía de una familia de mozárabes toledanos, siendo hijo de un tal Tauro, aunque en este caso no se puede asegurar que su familia mantuviese algún tipo de relación con la Monarquía.

Respecto al obispo García Ruiz (1208-1224), sabemos que era hijo de Rodrigo Ruiz y nieto de Gonzalo Ruiz. Esta familia de los Ruiz era un importante linaje mozárabe muy vinculado con la Monarquía, y a ella pertenecía también el siguiente obispo conquense, don Lope Ruiz, que era sobrino de su predecesor en la sede conquense[8].

Otra importante familia de mozárabes toledanos muy estrechamente relacionada con la Monarquía castellana era la de los Palomeque. El primer miembro de esta familia en ocupar la sede de Cuenca fue don Gonzalo Ibáñez Palomeque. Su padre, Juan Ponce, había ocupado en Toledo el cargo de alguacil-alcalde[9]. Respecto al siguiente obispo de Cuenca, Mateo Reinal (1247-1257), se desconoce su origen social. No sucede lo mismo, en cambio, con Rodrigo Juanes (1258-1261), perteneciente también a una familia de mozárabes toledanos, mientras que para el caso de Pedro Lorenzo (1261-1272) sus orígenes familiares nos son desconocidos.

El siguiente obispo de Cuenca, futuro arzobispo de Toledo y cardenal, fue don Gonzalo Pérez Gudiel (1273-1275), quien por

---

[7] José Manuel Nieto Soria, «El carácter feudal de las relaciones Monarquía-Episcopado...», p. 210.

[8] José Manuel Nieto Soria, *El obispado de Cuenca en sus relaciones de poder*, pp. 157-158.

[9] *Ibid.*, p. 158.

vía materna era sobrino del anterior obispo conquense Rodrigo Juanes. Respecto a la familia toledana de los Gudiel hay que señalar que se trata de uno de los linajes mozárabes más elevados, muchos de cuyos miembros prestaban frecuentemente servicios a la Monarquía. Nada se puede señalar, en cambio, respecto a los orígenes familiares del obispo sucesor, don Diego Martínez (1275-1279), que nos son desconocidos.

El elemento social de nuevo volverá a ser determinante en el caso de los dos últimos obispos que ocuparon la sede conquense a fines del siglo XIII. Así, sabemos que don Gonzalo García Gudiel (1280-1288) era pariente del anterior obispo conquense Gonzalo Pérez Gudiel[10], perteneciendo a esta familia de mozárabes toledanos tan estrechamente vinculada con la Monarquía. Respecto a don Gonzalo Díaz Palomeque (1289-1299), también natural de Toledo, hay que señalar que era hijo de Diego Sánchez Palomeque y Teresa Gudiel, la cual a su vez era hermana de don Gonzalo Pérez Gudiel[11]. Por lo tanto este prelado pertenecía a dos familias de mozárabes tradicionalmente serviciales para con la Monarquía, como eran los Palomeque y los Gudiel.

Absolutamente nada, en cambio, sabemos sobre la procedencia social del siguiente prelado, don Pascual (1299-1320), por lo que también desconocemos si sus ignorados orígenes familiares pudieron haber desempeñado algún papel en su acceso a la sede de Cuenca. Igual sucede con Fray Esteban (1322-1326), prelado de origen portugués, seguramente franciscano, sobre cuyas raíces familiares no nos ha llegado ningún dato, aunque en este caso, dada su condición de extranjero, parece más difícil aceptar la posible vinculación de su familia con la Monarquía castellana.

No ocurre lo mismo con don Fernando Gutiérrez (1326-1327). Probablemente se trate de don Fernando Gutiérrez de los Ríos, hijo segundo de don Gutierre Fernández de los Ríos y doña Leonor López de Haro, y nieto del conquistador de Córdoba don Fernando Gutiérrez de los Ríos[12]. Pertenecía, pues a una importante

---

[10] AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 7, f. 7r.

[11] *Ibid.*, f. 7v.

[12] Juan Gómez Bravo, *Catálogo de los obispos de Córdoba*, I. p. 285.

familia de la aristocracia cordobesa y andaluza, que había llegado a tal encumbramiento por destacados servicios a los monarcas.

En cuanto a los dos siguientes obispos, don Juan del Campo (1327-1328) y don Odón (1328-1340), de nuevo nos encontramos con el problema de la carencia absoluta de datos referentes a su posible origen familiar, por lo que no se puede determinar si este factor influyó o no en su elevación a la sede de Cuenca.

En cambio, respecto a don Gonzalo Pérez de Aguilar (1341-1342), las cosas parecen más claras. Natural de Aguilar de Campóo, este prelado pertenecía al linaje de los Aguilar, muchos de cuyos miembros habían desempeñado frecuentemente acciones militares contra los musulmanes al servicio de la Monarquía castellana. Por ello cabe sospechar que la vinculación de esta familia con la Realeza tuvo que favorecer de algún modo la promoción de don Gonzalo a la mitra conquense.

Finalmente, respecto a los dos últimos prelados de esta etapa, don García (1342-1362) y don Bernal Zafón (1362-1373), sólo cabe lamentar la carencia absoluta de información sobre sus orígenes familiares.

III-EL PLANO JURÍDICO

Para los siglos XII y XIII, en el aspecto jurídico, debe llamarse la atención sobre dos cuestiones de interés relativas a las relaciones de la Monarquía castellana con los obispos de Cuenca. Por un lado, tenemos la aparente inexistencia de un pacto de carácter contractual que asegure la vinculación de los prelados con respecto a la persona del rey. Pero, por otra parte, el régimen jurídico que se da en el proceso de dotación regia de la diócesis conquense viene caracterizado por su identidad con el que solemos encontrar en el conjunto de las recompensas que aparecen en los regímenes feudovasalláticos a través de la entrega de beneficios[13].

[13] José Manuel Nieto Soria, «El carácter feudal de las relaciones Monarquía-Episcopado...», p. 204.

Es cierto que la documentación conquense de esta época no recoge ningún testimonio que nos hable de forma fehaciente de la existencia de un pacto contractual entre monarcas y prelados, pacto que en la terminología feudal de suele conocer como *homenaje*. Ello podría parecer razón suficiente para dudar de que algún obispo de Cuenca hubiera sido, desde un punto de vista estrictamente jurídico, vasallo real, sin olvidar que el hecho de que jurídicamente los obispos conquenses no se muestren como vasallos reales no quiere decir que en la práctica cotidiana no se comporten como tales.

Según José Manuel Nieto Soria, pueden esgrimirse varios argumentos en defensa de ello. En primer lugar, el que se redacte un acta en que se recoja la celebración de un acto de entrada en homenaje es algo absolutamente inhabitual. Por otro lado, hay que tener en cuenta la existencia del llamado homenaje recognoscitivo o sucesorio por el que los nobles, prelados y concejos llevaban a cabo el correspondiente acto de homenaje cuando un nuevo monarca ascendía al trono. Acaso esta acción hacía innecesaria cualquier otra demostración de dependencia vasallática por parte de los obispos con respecto al monarca. Pero, además, la propia posesión por los obispos conquenses de ciertos señoríos de procedencia real constituiría otra razón de peso para sospechar la posible existencia de un homenaje previo[14].

De este modo, para el caso de algunos obispos de Cuenca cabe pensar en la existencia de una cierta dependencia vasallática. Así sucede con don Gonzalo Ibáñez Palomeque, sobre el que algunos autores antiguos señalan que tras ocupar la sede de Cuenca fue vasallo de Alfonso X. Otro prelado conquense en que no sería raro que concurriera la circunstancia de que se tratara de un vasallo real es Gonzalo Pérez Gudiel, quien ocupó la sede entre 1273 y 1275. Por un lado, sabemos de la vinculación de algunos de sus parientes con Alfonso X, y por otra parte los documentos nos dicen que llegó a ocupar el cargo de notario real, función ésta que a menudo solía ir asociada a la condición de vasallo regio.

---

[14] *Ibid.*, pp. 205-206.

Así, pues, en función de lo dicho hasta ahora, si bien no podemos afirmar con absoluta certeza la existencia sistemática de una forma de homenaje rey-obispos conquenses, al margen de los ya mencionados homenajes recognoscitivos, no se puede obviar, sin embargo, la valoración del modelo feudovasallático como horizonte interpretativo del modo en que se condujeron aspectos relevantes de las relaciones reyes-obispos[15].

Por último, para complementar estas consideraciones de índole jurídica, es interesante hacer algunas observaciones sobre el régimen de disfrute de la propiedad que se dio en todas las donaciones reales a favor de la Iglesia conquense. Así, debe llamarse la atención sobre el hecho de que siempre existió una distinción entre el *ius eminens*, que estaba en manos del rey, y el *ius utile*, correspondiente al obispo. En este mismo sentido de vinculación de las propiedades episcopales con respecto al rey cabría interpretar el derecho que éste tenía a aparecer como depositario de los bienes del obispo fallecido hasta la elección de otro nuevo, aspecto que se nos detalla para el caso conquense en un documento real dado en Valladolid el 17 de octubre de 1255[16].

En definitiva, todo parece apuntar a que durante los siglos XII y XIII las relaciones de carácter jurídico entre la Monarquía y los obispos conquenses en absoluto se hallaban al margen de lo que habitualmente eran los usos jurídicos típicamente feudales.

IV-EL PLANO ECLESIÁSTICO

1-Las elecciones episcopales

Otra dimensión básica de las relaciones Iglesia-Monarquía es la que viene dada por la intervención directa o indirecta de esta última en las elecciones episcopales. En este sentido las *Partidas* se harían eco de toda la tradición legislativa, sobre

---

[15] *Ibid.*, p. 206.

[16] *Ibid.*, p. 207.

todo de origen conciliar, que existía en el momento de su redacción sobre las elecciones episcopales, haciéndose así referencia tanto al papel que podían desarrollar en ellas los cabildos catedralicios, como a las tres formas -sufragio, compromisarios e inspiración- que podían seguirse para llevar a efecto una elección episcopal. En las *Partidas* también se señalarán los derechos del rey en las elecciones episcopales, sobre la base de que los monarcas castellanos habían conquistado tierras a los musulmanes fundando en ellas nuevas iglesias para posteriormente dotarlas. Así, en una elección episcopal de esta época las atribuciones del monarca eran las siguientes:

-Serle notificada por el cabildo la vacante.
-Conceder licencia para proceder a la elección.
-Otorgar su aprobación al electo.
-Colaborar en la guarda de los bienes episcopales en tanto durase la vacante.
-Devolver estos bienes una vez que fuese confirmado el nuevo prelado.

Así, pues, a través de estas atribuciones el monarca tenía muchas posibilidades de influir en las elecciones con el fin de conseguir un obispo lo más adicto posible a la Corona[17].

Por otro lado, en 1237 el papa Gregorio IX había otorgado a Fernando III lo que se podría entender como derecho de presentación para aquellas iglesias que arrebatase a los musulmanes. Pero al amparo de esta concesión los monarcas posteriores a menudo se extralimitarían en sus atribuciones, respetando aparentemente la normativa canónica pero haciéndose representar extraoficialmente por algún canónigo particularmente vinculado a la Corona que defendiera sus intereses en el proceso electoral[18].

Centrándonos ahora en el caso conquense, ya desde fines del siglo XII, y a lo largo de toda la etapa que aquí se analiza, en

---

[17] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 197-198.

[18] *Ibid.*, p. 199.

la mayoría de los casos, aunque no en todos, resulta evidente la intervención directa o indirecta de la Monarquía en la elección de los obispos de Cuenca.

Así, el primer prelado en ocupar la sede, don Juan Yáñez, hasta entonces arcediano de Calatrava, parece que fue nombrado directamente por Alfonso VIII, con una posible intervención del arzobispo toledano, e igual sucedió con San Julián, que también había sido arcediano de Calatrava[19]. En cambio para el caso de García Ruiz y Lope Ruiz, a pesar de la vinculación de su familia con la Monarquía, no puede asegurarse un intervencionismo directo del monarca en su elección, aunque sí es probable que hubiese algún tipo de influencia indirecta junto con el arzobispo toledano.

Más determinante parece el intervencionismo regio en la elección de don Gonzalo Ibáñez Palomeque, que ya antes había sido obispo de Osma y Burgos, y detrás de cuyo progreso en la carrera eclesiástica hay que ver la mano del monarca. Respecto a su sucesor, don Mateo Reinal, ya figura como electo nombrado por Inocencio IV el 4 de agosto de 1247; este prelado era capellán del papa y persona muy allegada al pontífice[20], lo que explica la intervención de éste en su designación para la sede de Cuenca.

En la elección del siguiente obispo, Rodrigo Juanes, procedente de una familia de mozárabes, es probable que influyeran tanto la Monarquía como el arzobispo toledano. En cuanto a don Pedro Lorenzo, elegido el 7 de diciembre de 1261 por el cabildo catedralicio conquense mediante sistema de compromisarios[21], no cabe menos que sospechar que en esta elección hubo una intromisión regia, dado que se trataba de un estrecho colaborador de Alfonso X. Lo mismo puede decirse respecto a don Gonzalo Pérez Gudiel, elegido por el cabildo conquense mediante compromisarios el 4 de marzo de 1273 pero con un claro intervencionismo regio, dada la estrecha vinculación de este personaje con el monarca castellano. En cambio con Diego Martínez, hasta

---

[19] José Manuel Nieto Soria, «El carácter feudal de las relaciones...», p. 208.

[20] Beltrán, *Cartulario*, I, pp. 72-73.

[21] ACT, X.1.E.2.4

entonces deán de Cuenca, sería nombrado obispo por provisión pontificia de Gregorio X el 27 de septiembre de 1275, no pudiendo asegurarse en su elección algún tipo de intervención regia.

El caso de don Gonzalo García Gudiel, elegido por el cabildo catedralicio conquense el 19 de marzo de 1280 por vía de compromisarios, resulta particularmente complejo a la hora de determinar qué instancia de poder fue la que en realidad tuvo un mayor peso en su elección, contra la cual poco después apelarían al papa un canónigo conquense y sus partidarios. Desde luego parece indudable algún tipo de intromisión de Alfonso X, dada la vinculación de los Gudiel con la Monarquía, pero también hay que sospechar que detrás de todo el proceso electoral estuvo el arzobispo de Toledo. Un análisis minucioso de esta complicada elección podrá encontrarlo el lector más adelante, en el capítulo que dediquemos a estudiar las relaciones de la Iglesia conquense con la metrópoli toledana.

De gran interés resulta también la elección de don Gonzalo Díaz Palomeque realizada mediante compromisarios por el cabildo catedralicio conquense en 1289[22], que en su forma presenta todas las características de un proceso electoral acorde con la normativa canónica, a pesar de lo cual parece más que probable una intromisión indirecta de Sancho IV, dada la estrecha vinculación de la familia mozárabe de este prelado con la Monarquía a través de la prestación de numerosos servicios. Veamos a continuación cómo se desarrolló esta elección episcopal.

El 25 de diciembre de 1288 había tenido lugar la muerte del prelado anterior, don Gonzalo García Gudiel, y los canónigos de Cuenca entonces presentes decidieron reunirse en febrero del año siguiente para elegir nuevo obispo. Pero llegado dicho momento surgirían algunos problemas, sin llegarse a un acuerdo concreto, por lo que hubo que posponer la elección para el mes siguiente:

"Adveniente vero termino supradicto, presentibus omnibus qui voluerunt, debuerunt et potuerunt, commode interese convenientes in unum in choro eiusdem ecclesie ad pulsationem campane, ut moris est, invocata Sancti Spiritus

---

[22] ACC, caj. 12, nº 221 / BN, Ms. 13071, ff. 11r-13v / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 49r-51v y nº 4, ff. 20v-24v.

gratia, ceperunt de electione tractare et quia eodem die, et etiam post tractatos multiplices in unum non potuerunt convenire, propositum prorrogaverunt terminum in diem sabbati, videlicet XV Kal. Aprilis proximo venientis. Quo termino adveniente, pulsata campana, ut moris est, capitulum ad celebrandam electionem in eadem ecclesia convenuerunt et per forma compromisi procederunt unanimiter concordarunt, cuius compromisi forma talis est. In nomine Domini, Amen. Anno Domini MCCLXXXIX, noverint universi presentem literam inspecturi quod ecclesia conchensis...die sabbati, XV Kal. Aprilis, canonici eiusdem ecclesie qui debuerunt, voluerunt, et potuerunt commode interese, pulsata campana, ut moris est, ad tractandum de electione futuri pontificis simul in choro eiusdem ecclesie convenuerunt, ubi capitulum consuevit celebrari, qui omnes unanimiter in eadem electione per formam compromisi procedere concordarunt..."

Finalmente sería nombrado compromisario para llevar a cabo la elección Domingo Lobo, deán conquense, quien tras diversas deliberaciones, el sábado 18 de marzo de 1289, eligió en nombre del cabildo al hasta entonces canónigo conquense Gonzalo Díaz, procediéndose acto seguido a la publicación y aprobación común de la elección, cantando después el *Te Deum Laudamus*:

"Provideo ecclesie conchensis de venerabili viro Gundisalvo Didaco, canonico eiusdem ecclesie conchensis, et nomine meo et sociorum et capituli predictorum eligo ipsum Gundisalvum Didaci supradictum in episcopum et pastorem conchensem ecclesie memorate. Dictam vero electionem, sic canonice et solemniter celebratam et publicatam in commun, omnes unanimiter receperunt et approbarunt, Te Deum Laudamus more solito decantando..."

Precisamente durante esta época se observa en Castilla una particular preocupación por parte de la Iglesia para que se respetara la normativa canónica en los procesos electorales de los prelados, aunque no por ello desaparecería la intromisión regia en las elecciones. De este modo, recién llegado al trono Fernando IV, muchos prelados de Castilla le expondrían sus quejas diciendo que a menudo los cabildos catedralicios tenían que elegir como obispo por la fuerza y en contra de su voluntad al candidato presentado por el monarca. Además, a veces sucedía algo

similar con la provisión de ciertas dignidades y beneficios eclesiásticos. Por todo ello, el 11 de agosto de 1295 Fernando IV mandaría que las elecciones episcopales las llevaran a cabo los cabildos libremente y que se respetasen los bienes de los obispos durante las vacantes. La alusión que en el documento se hace a las intromisiones regias es de enorme significación: <<Que les non fagamos premia ninguna en sus elecciones, ni en dar los beneficios, mas que fagan sus elecciones liberalmente, sin premia ninguna, assi como manda el derecho...>>[23].

Todo esto viene a reforzar la hipótesis de que en la elección de don Gonzalo Díaz Palomeque llevada a cabo por el cabildo catedralicio conquense hubo algún tipo de intromisión por parte de Sancho IV, máxime si tenemos en cuenta la estrecha vinculación existente entre la familia de este prelado y la Monarquía. De este modo, favoreciendo dicha elección el rey estaba premiando los servicios que don Gonzalo y su familia le prestaban, a la vez que se beneficiaba al tener como titular de una sede episcopal a un personaje sin duda fiel a la Corona, algo imprescindible en una época en que la institución episcopal estaba revestida de una fuerte significación política.

Por último, también hay que hacer notar la posible influencia que asimismo pudo haber tenido en este proceso electoral el entonces arzobispo toledano y anterior obispo de Cuenca don Gonzalo Pérez Gudiel, dado que era tío de don Gonzalo Díaz Palomeque.

Pasando ya al siguiente prelado, don Pascual, ya se señaló en el Episcopologio que fue proveído de la sede conquense por Bonifacio VIII el 22 de febrero de 1299. Hasta entonces había sido canónigo y arcediano de Olmedo en la Iglesia de Ávila. Pero lo que resulta imposible determinar es si la provisión pontificia fue realizada o no a instancias de Fernando IV, pues desconocemos los orígenes familiares de este obispo y tampoco sabemos si previamente había realizado algún tipo de servicios para la Monarquía.

---

[23] ACC, caj. 12, nº 230 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 6, ff. 8v-10v / BN, Ms. 13071, ff. 13v-15v / A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, doc. nº 17.

En cambio, para el caso de su sucesor, Fray Esteban, parece que hay que descartar cualquier tipo de intervención o influjo del monarca castellano, en este caso Alfonso XI, debido fundamentalmente a que este prelado era extranjero, de origen portugués, y cuando los reyes suplicaban al papa para que nombrase algún obispo lo hacían siempre a favor de naturales del reino[24]. Su provisión para Cuenca fue realizada por Juan XXII el 21 de agosto de 1322, mientras se encontraba refugiado en Aviñón debido a sus enfrentamientos con el rey Dionis de Portugal, y hasta entonces ostentaba la titularidad de la sede episcopal de Lisboa. Así, esta provisión pontificia, y el hecho de haber recaído en un extranjero, vendría a ser un claro reflejo en la diócesis conquense del proceso de centralización aviñonesa.

También por provisión pontificia de Juan XXII es como se efectuó el traslado desde Córdoba a Cuenca del obispo don Fernando Gutiérrez el 11 de abril de 1326, aunque en este caso sí que cabe sospechar, aunque no asegurar, que la provisión pudo haberse realizado como respuesta a una súplica previa de Alfonso XI, dado que este prelado y su familia se encontraban bastante vinculados con la Monarquía.

Similares consideraciones, y por iguales motivos, pueden hacerse respecto a su sucesor, don Juan del Campo, nombrado obispo de Cuenca por Juan XXII el 8 de agosto de 1327, y a su vez muy relacionado con Alfonso XI, a cuyo servicio aparece desempeñando importantes cargos. Así, por ejemplo, 3 de enero de 1328 le encontramos como <<obispo de Cuenca e notario mayor de la Andalusia>> confirmando un privilegio rodado de Alfonso XI[25], y el 9 de marzo de este mismo año sería enviado por el monarca castellano, junto con el obispo de Cartagena y el noble Fernán Sánchez de Valladolid, como embajador de Castilla ante el papa para solicitar de éste ayuda económica para la guerra contra los

---

[24]La ocupación de las sedes episcopales castellanas por extranjeros siempre fue mal vista desde dentro del reino, entre otros motivos por los perjuicios económicos que ello ocasionaba. Así, por ejemplo, en las Cortes de Madrid de 1329 se pedirá a Alfonso XI que intente que el papa no nombre a extranjeros como obispos de Castilla. *Cortes*, I, p. 432.

[25]AHN, *Clero*, carp. 1768, nº 20 / Esther González Crespo, *op. cit.* nº 124. Se trata de un privilegio por el que Alfonso XI confirma al monasterio de Armenteira (en Pontevedra) todos sus privilegios anteriores.

musulmanes[26], lo cual puede dar una clara idea de las estrechas relaciones que mantenía este prelado con Alfonso XI.

El siguiente obispo de Cuenca, don Odón, fue trasladado a esta sede desde la de Oviedo por Juan XXII el 7 de mayo de 1328. Pero al desconocer si este prelado venía manteniendo o no especiales relaciones con la Monarquía, resulta imposible determinar si la provisión pontificia se realizó a instancias de Alfonso XI. En cambio puede sospecharse que sí sucedió esto último en el caso de don Gonzalo Pérez de Aguilar, nombrado obispo de Cuenca por Benedicto XII el 10 de enero de 1341. Se trataba de un personaje vinculado a la Universidad de Salamanca, y a su vez miembro de un linaje que había prestado bastantes servicios militares a la Monarquía castellana.

Los dos últimos obispos de esta etapa fueron don García, hasta entonces chantre de Palencia, nombrado para la sede de Cuenca por Clemente VI el 18 de julio de 1342, y don Bernal Zafón, nombrado obispo conquense por Urbano V el 8 de noviembre de 1362, y hasta entonces tesorero en la Iglesia de Toledo. En ambos casos desconocemos cuál era su origen social y si mantenían algún tipo de colaboración con la Monarquía, lo que nos impide saber si pudo haber existido algún tipo de mediación de esta última ante el pontífice para que se efectuara el nombramiento correspondiente.

En conclusión, de todo lo dicho hasta ahora se infiere que en un porcentaje mayoritario de las elecciones episcopales de esta etapa, aunque no en todas, fue determinante la intervención de la Monarquía de cara a conseguir que finalmente resultara elegido un candidato lo más fiel posible a la Corona. Junto al papel desempeñado por el monarca en estas elecciones, también tuvo un cierto peso el de los arzobispos toledanos durante los siglos XII y XIII, así como el papel jugado por el papa fundamentalmente desde el siglo XIV, mientras que la potestad electoral del cabildo catedralicio fue mínima y casi siempre estuvo mediatizada por los intereses regios.

---

[26]Demetrio Mansilla Reoyo, *La documentación española del archivo de Castel S. Angelo*, p. 66.

2-La provisión de beneficios

Aunque la influencia de la Monarquía fue determinante sobre todo en las elecciones episcopales, los reyes castellanos también trataron de favorecer la provisión de beneficios capitulares para algunos clérigos reales, y en el caso conquense tenemos varios ejemplos al respecto para esta etapa.

El primero de ellos lo encontramos precisamente en el mismo momento de la fundación del nuevo cabildo catedralicio llevada a cabo por don Juan Yáñez el 28 de julio de 1183[27], pues entre los canónigos nombrados aparece un tal Geraldo, sobre el que se nos dice de forma expresa que era canciller real: <<Magistrum Geraldum regis cancellarium>>. Sin duda su nombramiento como canónigo del nuevo cabildo se realizó por mediación de Alfonso VIII.

Ya en el siglo siguiente tendría lugar una importante intervención pontificia de Urbano IV, en concreto el 12 de diciembre de 1263, y a través de ella este papa, a solicitud de Alfonso X, concedería autorización al obispo conquense para que hiciese recibir como canónigos de la Iglesia de Cuenca a dos clérigos del rey[28].

Pero es en el siglo XIV cuando comenzaremos a tener datos más concretos. Así, por ejemplo, en 1319 encontramos a un tal Juan Sánchez, clérigo de la reina doña María, ostentando sendas canonjías en Cuenca y Toledo, obtenidas por provisión de Juan XXII[29]. Algunos años más tarde, el 16 de febrero de 1324, este mismo pontífice proveerá una canonjía en Cuenca a favor de Fortunio Sánchez, clérigo de Alfonso XI, a suplicación de éste[30]. Interesante resulta, asimismo, la provisión también realizada por Juan XXII el 9 de mayo de 1327, a través de la cual entregó una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia

---

[27] ACC, caj. 1, nº 4 / Antonio Chacón, <<Las bulas de fundación...>>, doc. nº 4.

[28] Jean Guiraud, *Les Registres d'Urbain IV (1261-1264)*, II, nº 2346.

[29] G. Mollat, *Jean XXII. Lettres Communes*, II, nº 9580.

[30] *Ibid.*, V, nº 19032.

de Cuenca a Juan de Trajecto, clérigo del rey Alfonso de Portugal, en consideración al cual se hizo la provisión[31].

Al menos otros dos ejemplos pueden citarse para el pontificado de Benedicto XII. El primero de ellos data del 30 de agosto de 1336, fecha en que este papa confirió una canonjía en Cuenca a favor de Rodrigo Fernández de Guadalajara, clérigo de la diócesis de Toledo y <<Alfonsi regis Castellae continuo servitori>>[32]. El otro ejemplo lo encontramos el 23 de septiembre del mismo año, cuando el pontífice, en consideración a Alfonso XI, confirió una canonjía en Cuenca a un tal Mateo Pérez, quien por ello habría de renunciar a la canonjía extravagante que ya poseía en esta misma iglesia[33].

Los ejemplos hasta ahora señalados no son todas las provisiones de beneficios en Cuenca realizadas durante esta etapa por el papa previa súplica de los monarcas castellanos, pues seguramente hubo otras provisiones sobre las que no nos ha quedado información. Pero lo cierto es que la política beneficial de la Monarquía durante este periodo, aún no muy desarrollada, sentará las bases para su verdadero desarrollo ya en época Trastámara en que, como se verá más adelante, el número de súplicas regias y provisiones de beneficios aumentará extraordinariamente.

V-EL PLANO POLÍTICO

Durante la Baja Edad Media fue siempre muy frecuente la intervención activa del Episcopado castellano en gran cantidad de actividades de contenido político. Dentro de este contexto, la Monarquía comprendió lo conveniente que resultaba para sus intereses políticos el que la alta jerarquía eclesiástica del reino estuviera ampliamente representada en el núcleo principal

---

[31] *Ibid.*, VI, nº 28685.

[32] M. Vidal, *Benoit XII (1334-1342). Lettres Communes*, I, nº 3068.

[33] *Ibid.*, I, nº 3084.

de decisión política, es decir, en la Corte[34]. Este importante papel político ejercido por el Episcopado debe ser atribuído a su prestigio ante los monarcas, su preparación cultural y su especial respetabilidad de cara al conjunto del pueblo gobernado[35]. También muchos obispos de Cuenca participarían activamente en política durante esta etapa, tal como a continuación se verá.

1-Relaciones personales de los obispos conquenses con los monarcas castellanos

A la hora de estudiar la participación de los obispos en política hay que fijarse en primer lugar en las relaciones personales que existieron entre éstos y los monarcas, que sin duda constituirían una de las bases principales de la actitud política de la Monarquía respecto del Episcopado.

De forma general para Castilla, durante el reinado de Alfonso X las relaciones de tipo personal monarca-obispos fueron más amplias de lo que serían en los tres reinados posteriores[36]. Centrados en el caso conquense, hay que destacar ante todo las estrechas relaciones personales que con Alfonso X mantuvieron los obispos don Pedro Lorenzo y don Gonzalo Pérez Gudiel.

Tan sólo en los últimos cinco años de su reinado mostró Alfonso X un cierto abandono hacia esta preocupación por mantener vinculados a su persona a un gran número de prelados y eclesiásticos, siendo en gran medida consecuencia de ello la oposición puesta de manifiesto por la mayor parte del Episcopado castellano hacia su persona en los momentos más significativos de la revuelta encabezada por el infante don Sancho[37]. Esto explica-

---

[34] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 27.

[35] *Ibid.*, p. 33.

[36] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 31.

[37] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 28.

ría, por ejemplo, las estrechas relaciones que siempre mantuvo el obispo conquense don Gonzalo García Gudiel con Sancho IV[38].

Su sucesor, don Gonzalo Díaz Palomeque, obispo de Cuenca hasta 1299 y desde este año arzobispo de Toledo, fue uno de los dos prelados castellanos que más estrechamente vinculados estuvieron a la persona de Fernando IV, siendo el otro don Álvaro Carrillo, obispo de Palencia durante nueve años desde 1297[39].

En cuanto a los dos obispos siguientes, don Pascual y Fray Esteban, carecemos de noticias que nos indiquen si tuvieron algún tipo de relación personal con el monarca castellano. Para el caso de Fray Esteban, obispo de Lisboa antes de ser trasladado a Cuenca, hay que aludir a los conflictos que le enfrentaron con el rey Dionis de Portugal, motivo por el cual al parecer tuvo que refugiarse en la Corte pontificia de Aviñón, desde donde sería trasladado a Cuenca[40]. Respecto a don Fernando Gutiérrez, sabemos que siendo obispo de Córdoba había mantenido estrechas relaciones personales con Fernando IV[41], siendo probable que también las mantuviera posteriormente con Alfonso XI, si bien esto último no es del todo seguro, pues su muerte acaeció poco después de la llegada del monarca a la mayoría de edad.

En cambio don Juan del Campo sí es seguro que mantuvo muy estrechas relaciones personales con Alfonso XI, tratándose de uno de los prelados castellanos que estuvo más firmemente vinculado al monarca, tanto durante su breve pontificado conquense como a lo largo de su posterior ocupación de las sedes de Oviedo y León. Así, las actuaciones políticas de este obispo encontrarían su origen en las frecuentes relaciones con el monarca en los medios cortesanos. Por ello no es de extrañar que en la Crónica de Alfonso XI se haga empleo del término <<devoción>> para definir

---

[38] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias...*, p. 92.

[39] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 31.

[40] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias...*, pp. 102-103.

[41] *Crónica de Alfonso XI*, B.A.E, vol. LXVI, p. 179.

la actitud del rey respecto a este prelado a lo largo de las dilatadas relaciones entre ambos[42].

Respecto a los dos siguientes obispos, don Odón y don Gonzalo Pérez de Aguilar, no tenemos noticias de que hubiesen mantenido estrechas relaciones personales con Alfonso XI. También desconocemos si don García tuvo alguna relación con este monarca durante el periodo de su pontificado que coincidió con su reinado, pero en cambio sí que sabemos que al parecer se encontraba entre el grupo de prelados que más tarde se enemistarían personalmente con Pedro I, lo que motivaría su huída a la Corte de Aviñón[43]. Por último, respecto a don Bernal Zafón, desconocemos si mantuvo algún tipo de relación personal con Pedro I o Enrique II.

2-Los obispos de Cuenca como servidores de la política regia

El papel desempeñado durante esta etapa por algunos obispos conquenses en la política del reino fue casi siempre consecuencia de la relación personal mantenida con los monarcas castellanos.

Una actividad que se debe destacar respecto al apoyo político de los obispos conquenses hacia el rey es la que venía dada por la propaganda promonárquica. Ejemplo de ello es la predicación de cruzada que en 1264 llevó a cabo el obispo de Cuenca don Pedro Lorenzo contra el rey de Granada a petición de Alfonso X[44].

Este mismo prelado, sin haber ejercido ningún cargo oficial que nosotros sepamos, permaneció colaborando en las actividades de gobierno junto al rey durante la mayor parte de su etapa como obispo de Cuenca. Entre 1262 y 1264 lo encontramos en Sevilla trabajando con el rey con el fin de organizar las tierras

---

[42] José Manuel Nieto Soria, <<Los obispos de la diócesis de León en sus relaciones con la Monarquía, 1250-1350>>, pp. 204-205.

[43] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias*..., p. 109.

[44] José Manuel Nieto Soria, <<El carácter feudal de las relaciones Monarquía-Episcopado...>>, pp. 212-213.

recientemente incorporadas a lo largo del valle del Guadalquivir, y hacia esas mismas fechas también se ocuparía de la repoblación de Niebla. Asimismo, debe destacarse su actuación como acompañante del rey en la entrevista mantenida por éste con el monarca portugués en 1271 en Badajoz[45].

Otro aspecto importante a señalar dentro de esta actividad de los obispos conquenses en el plano político es el que se refiere a las intervenciones de carácter militar. Los momentos de actividad guerrera por parte de los obispos conquenses sobre los que disponemos de más información son cuatro, estando referidos a las ocupaciones de Córdoba (1236), Requena (1238), Sevilla (1246-1248) y Niebla (1262).

Sobre la intervención de don Gonzalo Ibáñez Palomeque en la ocupación de Córdoba junto a Fernando III no parecen existir dudas. La Primera Crónica General y la Crónica Latina de los Reyes de Castilla nos hablan de la presencia de este obispo en el momento de la entrada triunfal del monarca en la ciudad recién ocupada. Poco después, en 1238, don Gonzalo Ibáñez también intervendría en la toma de Requena en unión de las tropas del concejo conquense.

Por otra parte, la presencia del obispo don Mateo Reinal en la toma de Sevilla queda bien evidenciada a través de algunos documentos reales emitidos durante el asedio de la ciudad. Una vez concluída la ocupación militar, este prelado aún permanecería durante varios años en Sevilla ayudando en las tareas de gobierno al monarca.

En cuanto a la intervención del obispo de Cuenca don Pedro Lorenzo en la toma de Niebla, aunque no poseemos ninguna fuente que pueda confirmar o negar tal hecho, si tenemos en cuenta que en la fecha en que se produjo dicha ocupación (1262) este prelado estaba trabajando junto al rey en las tareas de gobierno y que, llegado el momento de iniciar la repoblación tras la conquista, es este obispo el encargado de llevarla a cabo en unión del infante Alfonso Fernández, parece conveniente mantener la

[45] *Ibid.*, p. 213.

sospecha razonable de que don Pedro Lorenzo intervino en esta ocupación[46].

Durante el reinado de Sancho IV el número de prelados castellanos que intervienen de forma personal en las campañas militares de este monarca es menos importante que durante el reinado anterior, canalizándose más bien esta intervención a través de la ayuda económica[47].

En el momento de producirse la muerte de Alfonso X en 1284, su hijo don Sancho se encontraba en Ávila, y en la iglesia de San Salvador de esta misma ciudad se hizo reconocer como sucesor de su padre en el trono. Es muy probable que los nobles y prelados que le acompañaban le hicieran en ese momento el correspondiente homenaje recognoscitivo, que era el juramento de obediencia que el conjunto del reino, incluídos los eclesiásticos, hacían al monarca en el comienzo de su reinado. Posiblemente, aunque ello no se puede asegurar, los prelados presentes en Ávila fueron los que luego acompañaron al monarca a Toledo para proceder en la catedral a su coronación, siendo estos prelados los obispos de Cuenca, Burgos, Coria y Badajoz[48].

Dentro del terreno de la política, especial mención debe hacerse de la recién aludida participación del obispo de Cuenca, don Gonzalo García Gudiel, en la coronación de Sancho IV y María de Molina realizada en 1284 en la catedral toledana. La intervención de una representación del Episcopado en las coronaciones regias alcanzó durante la Baja Edad Media una enorme significación política, al considerar los monarcas que los prelados, de alguna manera, actuaban como validadores y legitimadores de dicha coronación[49]. Es evidente que Sancho IV, que llegó al trono tras una sublevación contra su padre, necesitaba otorgar la máxima legitimidad a su coronación, para lo cual escogió a cuatro prelados que le habían sido afines durante la revuelta contra su

---

[46] *Ibid.*, pp. 214-215.

[47] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 69-70.

[48] *Ibid.*, pp. 149-150.

[49] *Ibid.*, p. 58.

padre. Ya se ha dicho que estos cuatro obispos fueron los de Burgos, Cuenca, Coria y Badajoz, tal como se señala en la Crónica de Sancho IV:

"E luego fuese para Toledo, e fizose coronar a el e a la reina doña Maria, su mujer, e coronaronlo cuatro obispos. El uno fue don Fray Fernando, obispo de Burgos; e el otro fue don Gonzalo, obispo de Cuenca; e el otro fue don Alonso, obispo de Coria; e el otro fue don Gil, obispo de Badajoz"[50]

El siguiente obispo de Cuenca, don Gonzalo Díaz Palomeque, el mismo año en que fue designado titular de la sede también participaría en otro acto de relieve político y marcado contenido propagandístico de la Monarquía. El acontecimiento tuvo lugar el lunes 21 de noviembre de 1289 en la catedral toledana, y consistió en la celebración de la solemne ceremonia de apertura de los túmulos que contenían los cuerpos de Alfonso VII *el Emperador*, de su hijo don Sancho, y de Sancho Capelo, el monarca portugués que había muerto en el destierro. Se encontraban en la capilla del Espíritu Santo, y los féretros fueron llevados a un nuevo monumento funerario construído en la capilla de San Salvador, en la misma catedral toledana. El acto revistió gran importancia, pues lo presidió el rey Sancho IV, efectuando el sepelio el arzobispo de Toledo don Gonzalo Pérez Gudiel asistido de otros seis prelados, entre ellos su sobrino el obispo de Cuenca don Gonzalo Díaz Palomeque[51].

Tiempo más tarde el mismo don Gonzalo Díaz, ya como arzobispo de Toledo, sería el gran artífice de la bula de legitimación pontificia de los hijos de Sancho IV y María de Molina otorgada por Bonifacio VIII en septiembre de 1301, lo que pondría término al conflicto de los infantes de la Cerda, coincidiendo casi ello con el fin de la minoría de Fernando IV[52].

---

[50] *Crónica de Sancho IV*, B.A.E, vol. LXVI, p. 69.

[51] Mercedes Gaibrois, *Historia del reinado de Sancho IV de Castilla*, II, p. 24.

[52] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 85-88.

Centrándonos ahora en el reinado de Alfonso XI, puede destacarse que don Fernando Gutiérrez, siendo aún obispo de Córdoba, estuvo presente en la campaña de la Vega de Granada de 1319 en que perdieron la vida los infantes don Pedro y don Juan[53], si bien no tenemos noticias de su participación en alguna actividad política de relieve durante su breve pontificado conquense.

Pero desde luego el obispo que más intensamente participó en política al servicio de Alfonso XI fue don Juan del Campo, tanto durante el poco tiempo que ostentó la titularidad de la mitra conquense como a lo largo de sus posteriores pontificados en Oviedo y León. Siendo obispo de Cuenca, destaca ante todo su intervención en actividades diplomáticas.

La falta de profesionalización de las funciones diplomáticas fue algo común a todos los reinos occidentales durante los siglos XIII y XIV, siendo generalmente prelados y miembros de la alta nobleza los que se ocuparon del desempeño de estas funciones, ostentando así la representación real ante las cortes extranjeras. Es por ello que, también en este campo, los monarcas castellanos emplearon a un amplio número de prelados. A menudo su actuación en empresas de política exterior fue consecuencia de su dedicación a colaborar con el monarca en los asuntos habituales de la política interna, lo que provocaba la confianza del rey hacia estos prelados de cara a encomendarles algún aspecto de sus relaciones exteriores. Esta utilización por los monarcas castellanos de prelados en actividades diplomáticas se produjo sobre todo en las relaciones con Francia y con la Santa Sede[54]. Por ejemplo, entre 1255 y 1275 había habido un continuo desfilar de prelados castellano-leoneses ante la Corte romana enviados por Alfonso X para reivindicar los derechos de éste a la Corona imperial que, como es sabido, no conseguiría[55]. Terminada esta aventura diplomática, y hasta fines del siglo XIV, las referencias sobre intervenciones de prelados castellano-

---

[53] *Crónica de Alfonso XI*, B.A.E, vol. LXVI, p. 183.

[54] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 48-49.

[55] *Ibid.*, p. 54.

leoneses en misiones ante los pontífices en representación de su monarca se hacen muy escasas, sin que por ello dejen de producirse.

Un ejemplo de esto último lo tenemos precisamente en el obispo de Cuenca don Juan del Campo, pues en un documento fechado el 9 de marzo de 1328 consta cómo Alfonso XI envió como procuradores suyos ante la Santa Sede al obispo de Cuenca don Juan; a don Pedro, obispo de Cartagena; y al noble Fernán Sánchez de Valladolid, para que recabasen de Juan XXII ayuda económica en favor de la guerra recientemente emprendida contra los musulmanes[56], ayuda que finalmente se conseguiría. Por su parte, la Crónica de Alfonso XI también da noticia del mismo hecho: <<Avia el rey enviado sus mandaderos al papa a pedirle que le feciese ayuda para la guerra que avia con los moros, los quales fueron Fernan Sanchez de Valledolit, et don Joan del Campo, que fue despues obispo de Leon, et Pero Martinez, que fue obispo de Cartagena>>[57].

Don Juan del Campo poseía una buena formación en las labores administrativas de la Corte, y su posterior elevación a las mitras de Oviedo y León fue precisamente una consecuencia de su prestigio en los asuntos de orden burocrático y diplomático junto a Alfonso XI. En 1332, el mismo año que alcanzó la mitra leonesa, lo encontramos convertido en notario mayor de Castilla, y al año siguiente formaba parte del Consejo del rey[58]. Además, según señala la Crónica de Alfonso XI, el monarca delegaría en parte en este prelado sus bien difíciles relaciones con el infante don

---

[56] Demetrio Mansilla Reoyo, *La documentación española del Archivo de Castel S. Angelo*, p. 66.

[57] *Crónica de Alfonso XI*, B.A.E, vol. LXVI, p. 213.

[58] José Manuel Nieto Soria, <<Los obispos de la diócesis de León...>>, pp. 206-207. Un cargo en que se refleja muy bien la política regia de integración del Episcopado en las instituciones de gobierno fue el de *notario real*. Estos notarios a menudo ejercieron también actividades de contenido hacendístico y de representación real, siendo precisamente gracias a este tipo de funciones, más que por las propiamente notariales, por lo que los que ejercieron el cargo alcanzaron un mayor peso político. José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 39. Frente al predominio de los prelados en el ejercicio de las notarías reales durante los reinados de Alfonso X y Sancho IV, con Fernando IV, en cambio, se produciría una radical secularización de las notarías. Posteriormente, con Alfonso XI, los prelados regresarán a la Corte para ocupar de nuevo cargos político administrativos como lo eran las notarías reales. *Ibid.*, p. 43.

Juan Manuel, quien parecía tener una cierta confianza en el obispo don Juan[59].

Por último, respecto a los siguientes obispos que ocuparon la sede de Cuenca hasta el advenimiento de los Trastámara, no consta su participación en actividades políticas de relieve al servicio de la Realeza. Ni siquiera sabemos que hubiese un obispo de Cuenca presente en la llamada batalla del Estrecho, entre 1340 y 1343, en la que se produjo una multitudinaria participación de prelados en las acciones militares en torno a Algeciras[60]. De este modo, habrá que esperar a la época Trastámara para encontrar de nuevo a obispos conquenses desempeñando importantes actividades políticas al servicio de la Monarquía, actividades en las que el grado de protagonismo ejercido por los titulares de la sede conquense será mayor que en la etapa anterior.

3-La participación de los obispos de Cuenca en Cortes

Otro aspecto básico de la dimensión política del Episcopado castellano-leonés es el que viene dado por la presencia de los prelados en bastantes reuniones de las Cortes medievales, presencia que según las épocas será mayor o menor en función de diferentes razones. Esta participación del alto clero en Cortes, de forma general para toda la Corona de Castilla, ha sido objeto de un extenso estudio en forma de Tesis Doctoral realizado por Ana Arranz Guzmán[61].

Según esta autora, los motivos por los que los miembros del alto clero, sobre todo los obispos, acudían a Cortes eran diversos, pudiendo señalarse, entre otros, los siguientes: por el deber de consejo que tenían respecto al monarca; por intereses sociales, económicos o políticos particulares de cada prelado; por defender las prerrogativas de su estamento; por hallarse

---

[59] *Crónica de Alfonso XI*, pp. 223-224.

[60] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 71.

[61] *Cortes medievales castellano-leonesas. Participación eclesiástica y mentalidades religiosas.* Tesis Doctoral presentada en la Universidad de Alcalá de Henares en 1988.

algunos miembros del alto clero al servicio del rey, ejerciendo cargos no eclesiásticos; porque les concernía el pago de subsidios en ciertas ocasiones; por una determinada coyuntura política; o bien para evitar que los representantes de las ciudades pudieran obtener privilegios reales contrarios a los de la Iglesia[62]. Muchos de estos motivos también habrían de determinar la presencia de algunos obispos de Cuenca en ciertas reuniones de Cortes a lo largo de la Plena y Baja Edad Media, cuestión sobre la que a continuación nos centraremos.

Esta participación de prelados conquenses en Cortes se iniciaría de forma bien temprana, pues en las de Carrión de 1188 sabemos que estuvo presente don Juan Yáñez. En ellas Alfonso VIII de Castilla armó caballero a Alfonso IX de León y a Conrado de Hohenstaufen. Sin duda la asistencia de varios obispos daba el relieve necesario a este acto, que colocaba al rey castellano a la cabeza de los monarcas peninsulares[63].

Habrá que esperar al reinado de Alfonso X para tener de nuevo noticias de la asistencia de obispos de Cuenca a Cortes. Así, en las primeras Cortes celebradas en este reinado, que fueron las sevillanas de 1252, es probable que estuviese presente el obispo don Mateo Reinal[64]. Por otro lado, también parece posible la asistencia del obispo don Rodrigo a las Cortes de Toledo de 1259, convocadas con motivo del proyecto de Alfonso X de ir a Roma para recibir la corona imperial[65]. Pero desde luego el prelado conquense que más asistió a Cortes durante este reinado fue don Pedro Lorenzo, pues estuvo presente en las de Burgos de 1269, en las vallisoletanas de 1271, donde actuó como embajador del rey ante los *ricos omes*, y en las burgalesas de 1272[66].

---

[62] Ana Arranz Guzmán, «Reconstrucción y verificación...», p. 38.

[63] Ana Arranz Guzmán, «Reconstrucción y verificación...», p. 46.

[64] *Ibid.*, p. 51.

[65] *Ibid.*, p. 54.

[66] *Ibid.*, p. 56.

Dejando ahora momentáneamente al margen la celebración de Cortes, conviene hacer una breve referencia al Concilio Provincial de Peñafiel que fue convocado y presidido en 1302 por el arzobispo de Toledo y anterior obispo de Cuenca don Gonzalo Díaz Palomeque, y al que asistieron los obispos de Palencia, Segovia, Osma, Sigüenza y Cuenca (don Pascual), junto con los procuradores de los de Córdoba y Jaén[67]. En esta reunión conciliar, entre otras cosas, se insistiría en defender la inmunidad de las personas y bienes eclesiásticos, repetidamente conculcada por los poderes civiles en una época de inestabilidad política propiciada por la minoría regia.

El obispo de Cuenca don Pascual también asistiría junto con otros prelados a las Cortes de Valladolid de 1307, en las cuales, ante las quejas que expuso el tercer estado por la constante merma que sufrían las tierras realengas en beneficio de las abadengas, el monarca saldría en defensa de la Iglesia diciendo que los obispos y cabildos catedralicios tenían privilegios de los reyes anteriores para poder adquirir nuevas tierras, otorgando de este modo legalidad al paso de tierras del realengo al abadengo[68]. Imposible resulta, en cambio, determinar si asistió o no don Pascual a las Cortes de Palencia celebradas en agosto de 1313, en las que se decidió nombrar un consejo para asegurar la guarda del monarca -Alfonso XI-, del que formarían parte cuatro prelados y seis caballeros y hombres buenos[69]. Todos los datos parecen indicar la presencia de una importante representación episcopal en estas Cortes, pero sólo sabemos a ciencia cierta que asistió el arzobispo de Santiago don Rodrigo, sin que se pueda identificar a los demás prelados participantes.

Por último, centrándonos ahora en las Cortes de Valladolid de 1351, podría plantearse la hipótesis de la asistencia a ellas del obispo de Cuenca don García. Al ser las primeras Cortes del reinado de Pedro I, es probable que la presencia del alto clero en ellas fuese numerosa, aunque el gran número de confirmaciones

---

[67] J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones de todos los concilios...*, III, pp. 433-444.

[68] Ana Arranz Guzmán, <<Reconstrucción y verificación...>>, p. 70.

[69] *Cortes*, I, p. 235.

generales de privilegios eclesiásticos que se expidieron hace pensar que, en muchos casos, serían los procuradores de los obispos y abades quienes realmente acudirían[70]. Lo cierto es que carecemos de datos que nos permitan asegurar la asistencia personal a estas Cortes del obispo don García, aunque, dado que en ellas también se otorgó la correspondiente confirmación general de privilegios a la Iglesia conquense[71], puede suponerse que, en caso de no asistir personalmente don García, al menos acudiría algún procurador en representación del obispo y cabildo catedralicio de Cuenca.

4-La ciudad e Iglesia de Cuenca bajo los conflictos políticos del reinado de Pedro I

Las relaciones mantenidas entre Pedro I y el clero castellano constituyen un aspecto esencial pero poco atendido por la historiografía reciente, si bien en la actualidad hay sobre el tema un estudio en vías de realización[72]. Un aspecto que dificulta en gran medida el conocimiento de estas relaciones es la notable carencia de documentación para el reinado de Pedro I, debiendo buscarse la causa de tal pobreza documental en la implantación de una nueva dinastía que acusaba de *tirano* a su predecesor, procurando que la mayor parte de la documentación desapareciera, principalmente aquella que hubiera podido ser comprometedora para el buen hacer de los Trastámara o apta para reivindicar el buen nombre del monarca asesinado en Montiel[73].

El reinado de Pedro I supuso un paréntesis de tipo personal, no estructural, en lo que atañe a las relaciones Monarquía-Iglesia, y ello estuvo motivado por la política religiosa del monarca, la excesiva utilización indebida de rentas eclesiásti-

---

[70] Ana Arranz Guzmán, <<Reconstrucción y verificación...>>, p. 88.

[71] AHN, Micr., rollo 14216, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 82 (1-X-1351).

[72] Este estudio corre a cargo de la profesora Ana Arranz Guzmán (Universidad Complutense).

[73] Ana Arranz Guzmán, <<Pedro I y el clero castellano en la historiografía contemporánea>>, p. 740.

cas, la confrontación del rey con la práctica económica de la curia aviñonesa y, en parte, por los problemas de su matrimonio con Blanca de Borbón. Sabemos que el monarca persiguió con dureza a algunos miembros del Episcopado, provocando su destierro o expulsión y el que una parte importante se fuera alineando en el bando opositor encabezado por Enrique de Trastámara e hiciera causa común con el grupo de exiliados eclesiásticos en la Corte de Aviñón.

Con todo, recientes estudios están demostrando que incluso en el plano de lo puramente personal la oposición hacia Pedro I por parte del Episcopado castellano no fue tan generalizada como hasta ahora se pensaba, aunque desde luego fue siempre mayor el grupo de eclesiásticos en contra del monarca que el formado por aquellos que permanecieron largo tiempo a su favor. Pero, al margen de esta ruptura en lo personal, desde un punto de vista institucional no se observan grandes cambios en la caracterización de las relaciones Monarquía-Iglesia castellana durante este reinado con respecto a lo que venía sucediendo en épocas anteriores, y el caso conquense constituye un claro ejemplo de ello.

A la subida al trono de Pedro I resurgieron en Castilla los bandos nobiliarios para intentar controlar al monarca. Siendo de por sí la situación política muy delicada, los recelos contra el rey y su privado, Juan Alfonso de Alburquerque, aumentarían cuando Pedro I puso fin a la alianza francesa en la Guerra de los Cien Años y abandonó a su esposa Blanca de Borbón. Con su actuación el monarca logró que los diversos grupos nobiliarios, apoyados por gran parte del estamento eclesiástico, se unieran contra él. De este modo, Pedro I acabaría haciéndose cargo personalmente del gobierno, abandonando la privanza de Alburquerque y apoyándose en el grupo de los juristas, mercaderes, prestamistas, baja nobleza, clase media urbana e incluso judíos, como Samuel Leví, cuya comunidad fue ostensiblemente protegida.

Por otro lado, el papa no sería en absoluto ajeno a todos estos acontecimientos políticos. Así, cuando Pedro I abandonó a doña Blanca, Inocencio VI se declararía a favor de ésta, lo que explica que el 7 de marzo de 1355 dirigiese un comunicado a todos

los arzobispos, obispos y abades de Castilla instándoles a que socorriesen caritativamente a la reina, que se hallaba en apurada situación económica[74]. De este modo la postura pontificia vino a reforzar la inclinación más o menos generalizada de la Iglesia castellana en favor de doña Blanca.

Dentro de este contexto, la ciudad de Cuenca, encabezada por algunos miembros de la familia Albornoz, pasaría pronto a formar parte del bando opositor al monarca que en 1355 se sublevó contra éste declarándose en favor de la reina. Asimismo, el obispo y cabildo catedralicio también formarían parte de este grupo opositor al rey y favorable a doña Blanca. El prelado que en aquel momento ostentaba la titularidad de la sede era don García, sobre quien Muñoz y Soliva señala, basándose en otros autores, que huyendo de Pedro I acabaría refugiándose en Aviñón, donde murió[75]. También es prácticamente seguro que el cabildo catedralicio conquense se opusiera al monarca durante aquella coyuntura, máxime si tenemos en cuenta la enorme influencia que por entonces el cardenal Gil de Albornoz, abiertamente enfrentado a Pedro I, ejercía sobre la Iglesia conquense, en la cual había iniciado su carrera eclesiástica formando parte ya desde muy joven del propio cabildo catedralicio.

Ello explica la confianza que éste depositó en algunos familiares directos del cardenal don Gil cuando estallaron los primeros conflictos del reinado de Pedro I. Así, por ejemplo, el 16 de noviembre de 1354, el cabildo encomendaría la guarda de la fortaleza de Pareja a Gómez García, hijo de Alvar García de Albornoz, a causa de la inestable situación política en que estaba sumido el reino[76].

Alvar García de Albornoz era hermano del cardenal don Gil, e hijo mayor de García Álvarez de Albornoz y doña Teresa de Luna. Fue uno de los embajadores que en 1351 concertaron en Francia el

---

[74] José Zunzunegui Aramburu, *Bulas y cartas secretas de Inocencio VI*, doc. nº 145.

[75] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias...*, p. 109.

[76] *Sanz*, nº 437.

matrimonio de Pedro I con Blanca de Borbón[77]. No obstante, años más tarde, cuando ésta fue abandonada por el rey, se pondría al frente de la ciudad de Cuenca en contra del monarca, logrando detener en la aldea de Jábaga durante unos quince días a las tropas regias, lo que sucedió en junio de 1355. En la Crónica de don Pedro López de Ayala han quedado recogidos estos sucesos:

"Despues desto partio el rey de Toledo, e fuese para la cibdad de Cuenca, que estaba alzada, e estaba en ella don Alvar Garcia de Albornoz, e don Ferrand Gomez, su hermano, e otros sus parientes, los quales eran en esta demanda de la reyna doña Blanca. E tenia en Cuenca don Alvar Garcia de Albornoz a don Sancho, fijo del rey don Alfonso e de doña Leonor de Guzman, ca don Alvar Garcia le criara. E llego el rey a una aldea que dicen Javega, que es a una legua de la cibdad de Cuenca, e estovo alli el rey unos quince dias, e trajo sus pleytesias con don Alvar Garcia e con don Ferrand Gomez, su hermano, porque la cibdad es muy fuerte e non la podia cobrar por fuerza nin podia cercarla...e por tanto fizo el rey su pleytesia con estos caballeros que estaban en la cibdad de Cuenca que non ficiesen guerra della, e el rey que non entrase estonce nin tomase otro apoderamiento della"[78]

De este modo se llegaría momentáneamente a una tregua. Además, el 21 de septiembre de ese mismo año de 1355 el papa Inocencio VI, por mediación del cardenal Albornoz, rogaría a Pedro I que dispensase un trato favorable a Alvar García de Albornoz y Ferrand Gómez, hermanos del cardenal[79], solicitando también de la reina Leonor de Castilla, viuda de Alfonso *el Benigno* de Aragón, que intercediese ante el monarca castellano para que éste dispensase un buen trato a los hermanos del cardenal don Gil[80]. Esta mediación pontificia, unida a otros factores de carácter más bien coyuntural, contribuiría a que el 4 de noviembre el rey expidiese una carta de perdón para la

---

[77] Ángel González Palencia, *Miscelánea conquense*, p. 153.

[78] Pedro López de Ayala, *Crónica de Pedro I*, B.A.E., vol. LXVI, p. 464.

[79] *Diplomatario*, nº 356.

[80] *Diplomatario*, nº 357.

ciudad de Cuenca y los que *habían tomado* parte en la sublevación a favor de la reina doña Blanca, especialmente Alvar García de Albornoz, Ferrand Gómez, García Álvarez y Gómez García de Albornoz[81].

Pero en 1356, cuando Pedro I logró vencer a sus enemigos en Toro, Alvar García y su hermano Ferrand Gómez, según señala nuevamente la Crónica de Pedro López de Ayala, <<tomaron a don Sancho, hermano del rey...que ellos tenian, e fueron con el para el reyno de Aragon, nonca osaron estar en Castiella>>[82]. El 13 de febrero de ese mismo año Inocencio VI había agradecido a Pedro I de Castilla el buen trato que de momento dispensaba a los hermanos del cardenal don Gil[83], pero apenas un mes más tarde, el 8 de marzo, el papa se dirigiría de nuevo al rey lamentándose del odio que ahora éste manifestaba sentir no sólo hacia Alvar García y Ferrand Gómez de Albornoz, sino también contra el mismo cardenal don Gil, cuyos bienes y documentos había mandado incautar[84].

La derrota nobiliaria y el destierro de Castilla de muchos nobles coincidiría con el inicio de la guerra castellano-aragonesa en 1356. A pesar de salir perdedor Pedro *el Ceremonioso* de Aragón, éste continuó las hostilidades hasta 1366, influyendo decisivamente en el desarrollo de la guerra civil castellana entre 1366 y 1369. Al estallar ésta, en el grupo opositor a Pedro I se integraban la nobleza y el alto clero, los intereses de Francia y la Santa Sede, que aportaron gran parte del soporte económico, Pedro *el Ceremonioso*, que apoyaba a los rebeldes contra Pedro I, y Enrique de Trastámara, que fue reconocido secretamente como rey de Castilla.

Durante el desarrollo de todos estos acontecimientos Alvar García de Albornoz y su hermano Ferrand Gómez, que desde hacía

---

[81] Esta carta aparece transcrita por Eusebio Ramírez en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. XLIV, año XXVII (mayo 1923), pp. 341-351.

[82] Ángel González Palencia, *Miscelánea conquense*, p. 153.

[83] *Diplomatario*, nº 435.

[84] *Diplomatario*, nº 442 / Beltrán, *Bulario*, I, nº 90 / J. Zunzunegui Aramburu, *Bulas y cartas secretas de Inocencio VI*, nº 201.

varios años permanecían exiliados en Aragón, siempre se mostraron firmemente partidarios de Enrique II, el cual, poco después de iniciarse la contienda civil, mandaría que les fuesen restituídos todos sus bienes en Castilla, que Pedro I les había embargado[85]. Igualmente partidarios del monarca Trastámara acabarían mostrándose el obispo conquense don Bernal Zafón y el cabildo catedralicio, a quienes ya en 1366 Enrique II confirmó algunos privilegios[86]. Sabemos que la ciudad de Cuenca, junto con otros enclaves importantes de la diócesis, como por ejemplo Uclés, pasó definitivamente a manos de Enrique II en 1368, mientras duraba el cerco sobre Toledo. El 30 de agosto de este año el monarca se encontraba en Cuenca, donde otorgó concesión a Pedro Ruiz Carrillo de la aldea de Priego de Escabias[87].

Los efectos materiales que tuvo la guerra civil sobre Cuenca y su Iglesia fueron notorios, y un vivo testimonio de ello queda recogido en las peticiones que el cabildo catedralicio dirigió a Enrique II poco después de finalizada la contienda:

"Bien sabedes en como esta çibdat es destroyda, e las conpainias que dejaisteis aqui annos tomado el pan que tenemos en las aldeas et extroydo lo que teniemos en la çibdat, porque vos pedimos que sea la vuestra merçed de catar manera porque non finquemos tan extroydos, que sabredes en verdat, sennor, que se nos han quemado e extroydo treinta pares de casas..."[88]

En definitiva, de todo lo dicho se infiere que el obispo y cabildo catedralicio de Cuenca, apoyándose en la familia de los Albornoz, se enfrentarían al menos en determinadas ocasiones a Pedro I, lo que les llevaría finalmente a mostrarse partidarios de Enrique II durante la guerra civil castellana[89]. No obstante,

---

[85] Ángel González Palencia, Miscelánea conquense, p. 154.

[86] ACC, siglo XIV, nº 275.

[87] Pedro López de Ayala, *Crónica de Pedro I*, p. 581.

[88] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 134r.

[89] El testimonio de la muerte de Pedro I quedaría recogido en el *Necrologio-Obituario* de la catedral conquense del siguiente modo: <<Anno Domini millessimo trecentessimo sexagessimo nono, quarta decima die mensis marcii, obit dominus Petrus, rex Castelle et Legionis, in villa de Montiel, quoquidem Petri fuit davitus cum

y al margen de estos sucesos, en el plano de lo puramente institucional no hubo cambios notables en las relaciones Iglesia-Monarquía con respecto a lo que venía sucediendo en épocas anteriores. Así, durante el reinado de Pedro I la Iglesia de Cuenca recibiría de nuevo confirmación de sus privilegios, e incluso en el transcurso de la guerra civil este monarca llegó a exigir a la Iglesia conquense contribuciones económicas para la guerra contra los musulmanes, como se verá páginas más adelante. Ello viene a ser un ejemplo de las situaciones de ambiguedad que en el terreno eclesiástico se observan durante estos años, pues no hay que olvidar que poco después de iniciada la contienda Enrique II confirmaba sus privilegios a la Iglesia conquense, que acabaría por inclinarse claramente a su favor.

VI-EL PLANO ECONÓMICO

Las primeras relaciones de la Iglesia conquense con la Monarquía castellana en el plano económico son las que vinieron dadas por el proceso inicial de dotación regia y posteriores donaciones de bienes y rentas y otorgamiento de privilegios por parte de la Monarquía. Todos estos aspectos, en lo relativo al primer siglo de existencia de la diócesis, ya fueron analizados por José Manuel Nieto Soria[90], y asimismo han quedado recogidos en la primera parte de esta obra, en los apartados dedicados al estudio del patrimonio y rentas del obispo y cabildo catedralicio de Cuenca. Aquí no se repetirá de nuevo lo ya dicho entonces, por lo que a continuación partiremos fundamentalmente del año 1280 a la hora de estudiar los diversos tipos de relaciones económicas mantenidas entre la Monarquía y la Iglesia conquense a lo largo de esta etapa, hasta los inicios de la época Trastámara.

---

sarracenis secum venientibus et cum adiuvantibus a dompno Enrico rege, fratre suo>>. ACC, *Necrologio-Obituario*, f. 7r.

[90]José Manuel Nieto Soria, <<El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de nueva creación: Cuenca, 1180-1280>>, *AEM*, 12 (1982), pp. 311-340.

1-La protección regia para la economía de la Iglesia conquense

A) *Donación e intercambio de bienes inmuebles*

Durante el reinado de Alfonso X las donaciones reales de bienes inmuebles a favor de la Iglesia castellana fueron relativamente abundantes, pero durante los reinados de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI estas donaciones serán escasísimas[91]. Buen ejemplo de ello lo constituye el caso de la Iglesia conquense, pues para la época posterior al reinado de Alfonso X sólo contamos con un testimonio, además indirecto, sobre una donación de este tipo a favor de la Iglesia conquense por parte de la Monarquía castellana. El dato lo recoge Mateo López en sus *Memorias históricas*, en un apartado de esta obra donde aparecen reseñas de diversos documentos del Archivo Catedralicio conquense, señalándose en una de ellas lo siguiente: <<Privilegio del rey don Alonso XI de la dehesa de la Parra a la Iglesia de Cuenca, era de 1376, que es año de 1338>>[92]. No obstante, el dato, aun sin negar su posible veracidad, debe tomarse con ciertas reservas, pues lo cierto es que el documento original de dicha donación actualmente no se conserva. Desde luego se trata de la única noticia que hasta ahora tenemos sobre alguna posible donación de bienes inmuebles a favor de la Iglesia conquense por parte de la Monarquía castellana realizada con posterioridad al reinado de Alfonso X.

En cambio sí que conservamos el documento original de otra donación regia de bienes inmuebles a favor del cabildo catedralicio de Cuenca, aunque en este caso no sería efectuada por el monarca castellano. Se trata de una donación realizada el 31 de octubre de 1347 por doña Leonor, reina de Aragón, quien entregó al cabildo catedralicio todo el heredamiento que poseía en Fresneda de Altarejos, aldea conquense, más 300 mrs. para ayudar a la compra de bueyes, con la carga de un aniversario perpetuo por el alma de su abuela doña María, reina de Castilla, y por la

---

[91] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 99.

[92] Mateo López, *Memorias...*, I, p. 180.

suya propia que se habría de celebrar en el altar mayor de la catedral, y con la obligación de que el cabildo las recordase en otros actos litúrgicos[93].

En lo referente a los intercambios de bienes, el único y sin duda destacado ejemplo que puede citarse es el del trueque que tuvo lugar el 1 de febrero de 1305, y a través del cual la infanta doña Blanca, señora de las Huelgas e hija del rey Alfonso de Portugal, hizo entrega al obispo don Pascual y al cabildo catedralicio conquense de la aldea de Gascoñuela, situada cerca de Alcocer, a cambio del castillo de las Peñas de Viana, que había sido concedido por Alfonso VIII a la Iglesia conquense durante el proceso inicial de dotación de la diócesis[94]. Previamente doña Blanca había comprado Gascoñuela con todas sus pertenencias a Juan Martínez, repostero mayor de Sancho IV, y dicha compra sería confirmada por Fernando IV el 26 de enero de 1305[95]. Cabe sospechar que sin duda la compra de esta aldea se realizó con la intención de intercambiarla poco después con la Iglesia conquense, para lo cual el mismo Fernando IV concedería la necesaria autorización el 28 de enero de 1305, puesto que inicialmente el rey Sancho IV había donado dicha aldea a su repostero Juan Martínez con la condición de que nunca se enajenase a favor de la Iglesia[96], lo que finalmente no se cumpliría.

A la hora de buscar una interpretación a este intercambio hay que tener en cuenta la importancia que, desde un punto de vista militar y defensivo, revestía para la Iglesia conquense la posesión del castillo de las Peñas de Viana durante los momentos iniciales de existencia de la diócesis, pues Alfonso VIII había realizado la donación pensando sin duda en la colaboración militar que la Iglesia conquense le prestaría en la lucha contra las incursiones musulmanas. Pero pasado el tiempo, y alejado el

---

[93]ACC, siglo XIV, nº 203.

[94]ACC, siglo XIV, nº 326 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 159r-160v.

[95]ACC, siglo XIV, nº 329.

[96]ACC, siglo XIV, nº 323.

peligro musulmán tras los grandes avances reconquistadores de la primera mitad del siglo XIII, la posesión del mencionado castillo iría perdiendo importancia para el obispo y cabildo catedralicio, sobre todo teniendo en cuenta que en aquel lugar no había llegado a constituirse ningún señorío episcopal, al contrario de lo sucedido, por ejemplo, en torno a las fortalezas de Paracuellos y Monteagudo. Por ello, y habida cuenta de que el mantenimiento de estos castillos siempre suponía un gasto importante, el obispo y cabildo catedralicio decidirían que les resultaba mucho más rentable económicamente intercambiarlo por la aldea de Gascoñuela, cuya posesión les sería más cómoda y beneficiosa, y por ello finalmente se procedió a efectuar el mencionado intercambio.

Por último conviene señalar que durante los reinados de Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI, y en general para el conjunto de la Iglesia castellana, hubo también algunas, aunque escasas, donaciones reales de rentas. Durante estos reinados se observa una cierta tendencia a la sustitución por los monarcas de donaciones de bienes inmuebles, generalmente incluídos en el realengo, por donaciones de rentas, lo que pone bien de manifiesto la progresiva conciencia que fueron tomando los monarcas castellanos de lo conveniente que era desarrollar una política de protección del realengo[97]. No obstante, para el caso conquense no tenemos ningún testimonio de que durante esta etapa se efectuara alguna donación real de rentas a favor del obispo o cabildo catedralicio.

B) *Confirmación y otorgamiento de privilegios*

El otorgamiento de privilegios a favor de la Iglesia castellana por parte de la Monarquía, si bien no careció de cierta tipificación jurídica, lo cierto es que no encontraría una definición jurídica definitiva hasta el siglo XVI en que se hizo distinción de la llamada *inmunidad real*, refiriéndose ésta a la exención de las cargas públicas de que gozaba el patrimonio eclesiástico. Esta falta de precisión jurídica favoreció el que

[97] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 101-102.

no hubiera una observancia exacta de los contenidos de estos privilegios, por lo que los obispos y cabildos siempre reivindicaron su estricto cumplimiento así como la reiterada confirmación de los mismos. Las confirmaciones de carácter general por parte de la Monarquía de todos los privilegios de cada diócesis van a tener lugar casi siempre en momentos de especial significación política, como lo son el acceso al trono de un nuevo monarca, los inicios de una tuturía o situaciones particulares de tensión política. En todos estos casos los monarcas necesitaban ganarse el favor de los prelados y cabildos catedralicios, a la vez que éstos querían ver asegurado a toda costa el mantenimiento de sus privilegios. Así, los años 1255, 1285, 1295-97, 1311, tutoría de Alfonso XI, y 1326-1329 serán algunos de los momentos claves de estas confirmaciones generales de privilegios a todas las diócesis castellanas[98].

Centrándonos ya en el caso conquense, el 11 de marzo de 1264 Alfonso X confirmaría todos los privilegios de la Iglesia conquense[99], y el 20 de marzo de 1285 Sancho IV, poco después de iniciado su reinado, y a petición del obispo don Gonzalo García Gudiel, otorgará otra confirmación general de todos los privilegios concedidos a la Iglesia de Cuenca por los monarcas anteriores[100].

Un privilegio en torno al cual a menudo veremos desarrollarse una especial conflictividad es el que fue otorgado el 21 de mayo de 1287 por Sancho IV al cabildo catedralicio eximiéndole del pago de 600 mrs. para su yantar[101]. Más adelante tendremos ocasión de ver cómo a menudo los recaudadores de este tributo no tendrán en cuenta el privilegio de exención de que gozaba el cabildo, exigiendo de este modo su pago, lo que provocará la consiguiente protesta del cabildo ante el monarca y la intervención de éste en defensa de los canónigos conquenses.

---

[98] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 108-109.

[99] Sanz, nº 110.

[100] ACC, caj. 11, nº 204.

[101] ACC, caj. 12, nº 211.

El 25 de junio del mencionado año de 1287 Sancho IV otorgará a la Iglesia conquense otra nueva confirmación general de privilegios[102], y el 28 de julio del mismo año confirmará el privilegio de Alfonso VIII por el que se concedía al obispo y cabildo catedralicio de Cuenca potestad para poseer todas las heredades que comprasen en la diócesis o que les donaran los fieles[103].

En agosto de 1295, con motivo de la celebración de Cortes en Valladolid, tendría lugar el homenaje recognoscitivo de todos los asistentes, entre ellos algunos prelados, en favor de *Fernando IV como sucesor legítimo de Sancho IV en el trono*[104]. Esta circunstancia será aprovechada por el nuevo monarca para otorgar un gran número de confirmaciones generales de privilegios no sólo de la Iglesia castellana, sino también de otras instituciones del reino. La confirmación de los de la Iglesia conquense tendrá lugar el 11 de agosto de 1295[105], en la misma fecha en que también se confirmaron los de la Iglesia toledana[106]. Tres días antes el monarca había otorgado el amplio uso de todas sus franquezas y libertades a los *ricos hombres*, prelados, caballeros y concejos de todo el reino[107].

Pero por otro lado, junto a las confirmaciones de carácter amplio a favor de toda la Iglesia conquense o del obispo y cabildo catedralicio, también encontramos otras dirigidas a ciertos colectivos clericales de la diócesis, como por ejemplo la *confirmación general de privilegios otorgada al cabildo de*

---

[102] ACC, caj. 12, nº 212.

[103] *Sanz*, nº 189.

[104] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 83.

[105] ACC, caj. 13, nº 231 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 153v-155r.

[106] A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, doc. nº 16.

[107] *Ibid.*, II, doc. nº 13.

clérigos beneficiados de Huete por Fernando IV el 10 de octubre de 1295[108].

En años posteriores tendrán lugar algunas confirmaciones de ciertos privilegios concretos del cabildo catedralicio conquense. Así sucedió el 10 de abril de 1301, fecha en la cual el mencionado monarca confirmó al cabildo el privilegio que les había concedido Alfonso VIII para no pagar portazgo por el pescado y otros alimentos que anualmente llevasen a Cuenca en cuatro acémilas para consumo particular del cabildo[109]. El cobro de portazgos suponía un ingreso sustancioso para muchos concejos, y ello explica el hecho de que en la anterior confirmación el rey también mande a todos los concejos del reino que respeten este privilegio de exención del cabildo catedralicio conquense. En la misma fecha Fernando IV también confirmó al cabildo catedralicio el privilegio que tenía concedido por los monarcas anteriores para que cinco arrancadores de piedra, cinco maestros asentadores del canto y dos carreteros que lo trasladasen para la obra de la catedral estuviesen exentos de todo pecho y fonsadera[110], y dos años más tarde, el 24 de marzo de 1303, habría de otorgarse otra nueva confirmación, en concreto la del privilegio de Sancho IV por el que éste eximía al cabildo catedralicio del pago de 600 mrs. para el yantar del monarca[111].

En ocasiones también sucedía que algunos privilegios afectaban a un grupo de diócesis concretas. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en la concesión que el 8 de diciembre de 1305 hizo Fernando IV a favor de todas las diócesis de la provincia eclesiástica toledana, entre las cuales se encontraba Cuenca, otorgando que los clérigos casados estuviesen exentos de pechos

---

[108]AEH, *Inventario*, leg. 1º, nº 3. Uno de los primeros privilegios reales a favor del cabildo de clérigos beneficiados de Huete de que tenemos noticia es el que al parecer concedió Alfonso X para que treinta miembros de esta institución pudieran ser vecinos a fuero de Huete y excusados de pecho y pedido, exención esta última que también afectaría a sus paniaguados, yugueros, pastores y hortelanos. La concesión parece que se hizo a cambio de que el cabildo celebrase anualmente dos aniversarios perpetuos por el rey. *Ibid.*, leg. 1º, nº 1. Este mismo privilegio será confirmado por Sancho IV el 14 de diciembre de 1289. *Ibid.*, leg. 1º, nº 2.

[109]ACC, siglo XIV, nº 322.

[110]ACC, siglo XIV, nº 324.

[111]AHN, Micr., rollo 14222, s.a. letra H, nº 2.

y tributos, así como sus hijos y viudas que no se casasen de nuevo[112].

Al iniciarse la minoridad de Alfonso XI, María de Molina tomó de nuevo las riendas del reino, encargándose de encauzar las acciones del Episcopado en favor del sostenimiento de Alfonso XI durante su minoría. Mientras doña María deseaba que fuera su hijo el infante don Pedro quien asumiera la tutoría, don Juan, hijo del infante don Manuel, y don Juan Núñez de Lara formaban su propio partido opuesto a don Pedro. De este modo, entre octubre de 1312 y agosto de 1314 se desarrollará un periodo de intrigas, conversaciones, acuerdos y forcejeos destinados a determinar quiénes ocuparían los puestos de tutores reales mientras durase la minoría del rey, y durante este proceso varios prelados serán utilizados en uno u otro sentido[113]. Es en este contexto donde debe situarse un documento emitido el 5 de octubre de 1312 mediante el cual don Juan, hijo del infante don Manuel, toma bajo su protección todos los bienes del cabildo catedralicio de Cuenca[114], sin duda con la intención de ganarse el apoyo de éste hacia su causa.

Tras haberse llegado a un compromiso entre don Pedro y don Juan en la reunión de Palazuelos, tuvo lugar a mediados de septiembre de 1315 una reunión entre los tutores y una amplia representación del Episcopado castellanc en la que se presentaron con precisión las reivindicaciones de los prelados en el sentido de obtener un compromiso de absoluto respeto por parte de los tutores para todo el conjunto de sus privilegios[115]. De este modo, el 15 de septiembre de dicho año se otorgará una confirmación general de todos los privilegios de la Iglesia castellana[116].

---

[112]ACC, siglo XIV, nº 331.

[113]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 89-90.

[114]ACC, siglo XIV, nº 325.

[115]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 9[illegible].

[116]ACC, siglo XIV, nº 257.

Al morir los infantes don Juan y don Pedro en el desastre de la Vega de Granada de 1319, María de Molina trataría de dirigir ahora las acciones de algunos prelados en favor de su candidato, el infante don Felipe, a quien se opondrá don Juan Manuel. Precisamente este último figura como tutor del monarca en la confirmación general de privilegios otorgada por Alfonso XI a la Iglesia de Cuenca el 1 de febrero de 1320[117].

El fin de una minoridad regia y la llegada de un monarca a la mayoría de edad era otro momento de relieve político en que se otorgaban generalizadas confirmaciones de privilegios. En el caso de la Iglesia conquense la nueva confirmación general de todos sus privilegios por parte de Alfonso XI se produjo el 2 de mayo de 1326[118], y además muy pocos días después se confirmarían de forma particular ciertos privilegios del cabildo catedralicio. Así sucedió el 6 de mayo, fecha en que Alfonso XI confirmó al cabildo un privilegio de Sancho IV que a su vez confirmaba otro de Alfonso VIII por el que se les otorgaba el diezmo de todas las rentas reales en el obispado de Cuenca excepto pedidos y fonsaderas[119]. Poco después, el 12 de mayo, Alfonso XI concederá al cabildo otra nueva confirmación de varios privilegios anteriores relativos a cuestiones diversas[120].

Tras todas estas confirmaciones coincidentes con los inicios de la mayoría regia, para años sucesivos cabe destacar las que se otorgaron en favor de ciertos monasterios de la diócesis. Por ejemplo, en 1334 Alfonso XI confirmó de forma general todos los privilegios de la abadía cisterciense de Santa María de Monsalud[121], y el 1 de julio de 1338 confirmaría a las monjas del monasterio de San Julián situado cerca de Huete el privilegio que

---

[117] ACC, siglo XIV, nº 9.

[118] ACC, siglo XIV, nº 295.

[119] ACC, caj. 2, nº 24.

[120] ACC, siglo XIV, nº 10. Estos privilegios que se confirmaron fueron los siguientes: concesión del diezmo del peso, portazgo y caloñas del arcedianato de Cuenca (Haro, 28-VII-1268); concesión del diezmo de todas las salinas del obispado de Cuenca (Miranda, 25-X-1268); privilegio a favor del cabildo para que no se abriesen más tablas de carnicería en la ciudad de Cuenca (Burgos, 13-IX-1295).

[121] AHN, *Clero*, libro 4235, ff. 10r-11v.

tenían concedido por los monarcas anteriores para que sus pastores, yugueros, hortelanos y molineros estuviesen excusados de pagar pechos reales, estableciendo además Alfonso XI que en adelante dichos excusados fuesen los siguientes: dos yugueros, un hortelano, un molinero y un pastor[122].

Los dos últimos privilegios de Alfonso XI relativos a la Iglesia conquense de que tenemos noticia datan ambos del año 1344. El primero de ellos se otorgó el 20 de enero de este año, y consistió en la confirmación del privilegio anterior que tenían los canónigos, racioneros, capellanes y clérigos de coro de la catedral para no pechar moneda[123]. El segundo fue concedido el 20 de marzo, y a través de él se eximió del pago de alcabala a los que arrendaban los frutos de las iglesias y beneficios[124].

Poco después de iniciarse el reinado de Pedro I, y coincidiendo con la celebración de las Cortes de Valladolid de 1351, las primeras del reinado, el monarca otorgará gran cantidad de confirmaciones generales en favor de la Iglesia y otras instituciones del reino. La confirmación de todos los privilegios de la Iglesia conquense tuvo lugar el 1 de octubre de 1351[125]. Se trata de la única confirmación general concedida por Pedro I en favor de la Iglesia conquense, pues años más tarde tan sólo nos encontraremos con un privilegio otorgado por este monarca al cabildo de clérigos beneficiados de Huete para que pudiesen llevar los rediezmos de las tercias reales con destino a las sacristías, concesión que al parecer tuvo lugar el 15 de abril de 1359[126].

---

[122] AHN, *Clero*, carp. 558, nº 4.

[123] ACC, siglo XIV, nº 4.

[124] ACC, siglo XIV, nº 3.

[125] AHN, Micr., rollo 14216, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 82.

[126] AEH, *Inventario*, libro 15, escritura 3ª.

C) *El intervencionismo regio en la conflictividad Iglesia-concejos*[127]

Durante esta etapa, así como durante toda la época Trastámara, la Monarquía intervendrá frecuentemente de cara a intentar resolver gran parte de los conflictos tanto económicos como jurisdiccionales suscitados entre el cabildo catedralicio y los concejos de la diócesis, fundamentalmente el de la ciudad de Cuenca, y estas intervenciones casi siempre se caracterizarán por el apoyo manifiesto de los monarcas hacia el cabildo. A su vez, ello debe enmarcarse dentro de un proceso de paulatino y creciente control por parte de la Monarquía sobre el medio urbano, al considerar ésta que los conflictos Iglesia-concejos eran cuestiones que revestían el suficiente relieve como para no poder quedar al margen del control regio. Debido a la estructuración de la presente obra, todas las numerosas intervenciones regias en dichos conflictos no serán analizadas aquí, sino más adelante, en el capítulo dedicado al estudio de las relaciones Iglesia-concejos.

2-Entre la fiscalización y el proteccionismo regios: el diezmo

Actualmente se considera incuestionable la existencia de una crisis en la estructura socioeconómica castellana que se inició en la segunda mitad del siglo XIII y se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIV[128]. Es por ello que durante este periodo abundan, para todo el conjunto del reino de Castilla, las noticias que hablan de una casi constante conflictividad en la percepción del diezmo. Un claro indicativo de esta conflictividad para la segunda mitad del siglo XIII viene dado por las actuacio-

---

[127]Esta cuestión, para un periodo cronológico concreto, aparece analizada en mi trabajo <<Monarquía y conflictos Iglesia-concejos en la Castilla bajomedieval. El caso del obispado de Cuenca (1280-1406)>>, *En la España Medieval*, 17 (1994), pp. 133-156.

[128]Sobre los primeros síntomas de la crisis bajomedieval en el territorio europeo puede verse el volumen correspondiente a las Actas de la XXI Semana de Estudios Medievales de Estella: *Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350)*, Pamplona, 1995.

nes normativizadoras que sobre la percepción decimal tienen lugar durante estos años, debiendo ser destacada la labor realizada en este sentido por Alfonso X, quien se ocupará del tema tanto en privilegios de aplicación local como en sus grandes obras legislativas, el *Fuero Real* y las *Partidas*[129].

En este sentido no hay que olvidar que las irregularidades en la entrega del diezmo no iban sólo en detrimento de los intereses eclesiásticos, sino también de los reales, dado que desde 1247 las tercias reales se habían convertido para la Monarquía castellano-leonesa en un ingreso de gran importancia económica, y dichas tercias procedían de la recaudación del diezmo. Además, a partir de 1265 el papa otorgará en ocasiones al monarca castellano el derecho de percibir décimas sobre las rentas eclesiásticas, con lo cual aumentaría el interés regio para que se efectuase una buena percepción del diezmo. Por todas estas razones los reyes castellanos emprenderán a menudo acciones ejecutivas, desarrolladas a través de la intervención directa de los oficiales regios, encaminadas a conseguir una buena percepción del diezmo por parte de la Iglesia, dado que los monarcas eran conscientes de que cuanto mejor se efectuase la recaudación de las rentas decimales más correctamente podría hacer frente la Iglesia a sus obligaciones fiscales con respecto a la Monarquía. Por ello las intervenciones regias en esta materia pueden ser interpretadas como acciones protectoras hacia la economía de la Iglesia pero con una clara finalidad de favorecer a su vez los propios intereses fiscales de la Monarquía.

Centrándonos ahora en la Iglesia conquense, durante el reinado de Alfonso X ya se producirían algunas actuaciones en el terreno decimal por parte de este monarca, como la que tuvo lugar el 17 de octubre de 1255 mandando pagar bien el diezmo a todos los concejos del obispado de Cuenca[130]. A fines del reinado tendría lugar otra intervención regia, en concreto el 24 de abril de 1281, y a través de ella el rey mandó a Alfonso Pérez, su alcalde en Cuenca, que hiciese que quienes recaudaban los

---

[129]José Manuel Nieto Soria, <<La conflictividad en torno al diezmo...>>, pp. 211-214.

[130]ACC, caj. 6, nº 98.

derechos del peso de la ciudad pagasen al cabildo catedralicio el diezmo correspondiente, cosa que a menudo no hacían[131]. En lo tocante a este punto conviene señalar que, en general para toda Castilla, la percepción del diezmo sobre rentas encontró con frecuencia diversas dificultades que, en la mayor parte de los casos, sólo con la intervención de los monarcas pudieron ser superadas. Las dificultades de las autoridades eclesiásticas para conocer el verdadero montante de algunas rentas y la dependencia respecto de los oficiales regios para el cobro de estos diezmos, adoptando dichos oficiales en ocasiones posturas obstruccionistas, fueron factores que favorecieron los litigios[132], como el acaecido en Cuenca con la renta del peso.

También el diezmo eclesiástico sobre las salinas será uno de los más conflictivos al ser objeto las salinas de arrendamiento y resistirse los arrendadores a la entrega de dicho diezmo. De este modo diócesis como Burgos o Cuenca, donde las salinas tenían gran importancia, se verán muy afectadas por este tipo de conflictividad en la que frecuentemente los concejos y sus autoridades se verán implicados al favorecerla o, cuando menos, no contribuir a su desaparición[133]. Para el caso conquense un primer ejemplo al respecto lo tenemos el 21 de abril de 1282, fecha en la cual el infante don Sancho mandó a los arrendadores de las salinas de Fuente el Manzano, en término de Moya, y de las otras salinas del obispado que pagasen puntualmente al cabildo los derechos del diezmo correspondientes[134], mandato que será reiterado de nuevo el 25 de octubre de 1288, siendo ya don Sancho rey de Castilla[135]. Ya al final de su reinado, el 8 de enero de 1295, Sancho IV intervendrá de nuevo sobre la Iglesia conquense, a petición del obispo don Gonzalo Díaz Palomeque, mandando guardar el privilegio que Alfonso VIII había otorgado al cabildo

---

[131]ACC, caj. 10, nº 189.

[132]José Manuel Nieto Soria, <<La conflictividad en torno al diezmo...>>, pp. 223-224.

[133]José Manuel Nieto Soria, <<La conflictividad en torno al diezmo...>>, p. 226.

[134]ACC, caj. 11, nº 192.

[135]ACC, caj. 12, nº 219.

catedralicio para poder percibir el diezmo de todas las rentas reales en el obispado, excepto el de pedidos y fonsaderas[136].

Algunas veces eran los propios eclesiásticos quienes se negaban a hacer frente a sus obligaciones decimales. Buen ejemplo de ello es la sentencia dada el 12 de marzo de 1308 por el obispo don Pascual contra los herederos del arcipreste de Cuenca Pedro López, condenándoles a pagar 10000 mrs. por los diezmos que durante largo tiempo no había entregado dicho arcipreste mientras vivía. Al día siguiente Sancho Fernández de Olmedo, en nombre del obispo, recibiría en pago de la deuda los bienes que había poseído dicho arcipreste en Pareja y Chillarón[137]. Aunque el litigio no daría lugar a ningún tipo de intervención regia, sí que constituye otra buena muestra de las intensas dificultades existentes durante esta época para percibir el diezmo, a cuyo pago no sólo se negaban algunos legos, sino también los propios eclesiásticos, como acaba de verse.

Otro tipo de conflicto decimal característico de este periodo, y que también encontraremos en épocas posteriores, es el que se daba entre los propios clérigos parroquiales de la diócesis por la percepción del diezmo del ganado, cuya movilidad originaba frecuentes problemas al respecto. Siendo Cuenca una de las áreas de mayor actividad ganadera dentro del conjunto de todo el reino castellano, no es de extrañar que en su ámbito diocesano el diezmo sobre el ganado pudiera convertirse en motivo de disputa. Buen ejemplo de ello lo constituye el conflicto que en 1311 aún estaba latente entre los clérigos de la ciudad de Cuenca y los de las aldeas de su término en razón del diezmo del ganado de aquellas personas que tras la muerte de Sancho IV habían abandonado las aldeas y se habían avecindado en la ciudad, lo que a su vez viene a ser un indicio de cierto proceso de despoblamiento en algunas zonas rurales. Parece que los clérigos de las aldeas reclamaban para sí parte de dicho diezmo, a pesar de lo cual el 6 de noviembre de 1311 don Pascual daría sentencia favorable a los clérigos de la ciudad de Cuenca, mandando que el

---

[136] ACC, caj. 12, nº 228-229.

[137] ACC, siglo XIV, nº 127.

diezmo del ganado de los nuevamente avecindados en las parroquias de la ciudad se pagase del mismo modo que lo pagaban los otros vecinos de Cuenca[138].

Dentro de este contexto de conflictividad en torno a la percepción del diezmo deben de situarse también algunas confirmaciones de privilegios sobre cuestiones decimales que fueron realizadas por Alfonso XI a favor del cabildo catedralicio en 1326, poco después de haberse iniciado el periodo de mayoría regia. Así sucedió el 6 de mayo de este año, fecha en que el monarca confirmó al cabildo el privilegio de Sancho IV que a su vez confirmaba otro de Alfonso VIII por el que se les otorgaba el diezmo de todas las rentas reales en el obispado de Cuenca, excepto pedidos y fonsaderas[139]. Poco después, el 12 de mayo, Alfonso XI concederá al cabildo otra nueva confirmación de varios privilegios anteriores, algunos de ellos relativos a cuestiones decimales[140].

Pero a pesar de todo, puede señalarse que durante esta época, tanto en Cuenca como a nivel general de todo el reino castellano, el importante grado de desconexión aún existente entre el poder central y los poderes locales impediría que la Monarquía pudiera dispensar a la Iglesia el suficiente respaldo en este tipo de conflictos, dándole los medios coercitivos que garantizasen a las instituciones eclesiásticas poder actuar de forma expeditiva frente a los atentados contra sus derechos decimales. El aparato institucional de intervención regia en el marco local, sin embargo, no progresó tan rápidamente como las circunstancias lo exigieron. Pero además, el progresivo avance de la presión fiscal regia redundaría inmediatamente en la fiscalidad eclesiástica, pues, al carecer ésta de las posibilidades coercitivas de la fiscalidad real, es contra ella contra la que se manifiesta más abiertamente la actitud de resistencia, a

---

[138] ACC, siglo XIV, nº 190.

[139] ACC, caj. 2, nº 24.

[140] ACC, siglo XIV, nº 10. Estos privilegios que se confirmaron fueron los siguientes: concesión del diezmo del peso, portazgo y caloñas del arcedianato de Cuenca (Haro, 28-VII-1268); concesión del diezmo de todas las salinas del obispado de Cuenca (Miranda, 25-X-1268); privilegio a favor del cabildo para que no se abriesen más tablas de carnicería en la ciudad de Cuenca (Burgos, 13-IX-1295).

pesar de haber tenido la fiscalidad real un mayor porcentaje de culpabilidad en provocar el estado de descontento[141].

A partir del segundo cuarto del siglo XIV, y hasta los inicios de la época Trastámara, la documentación conquense no vuelve a aludir a la existencia de conflictos en torno a la percepción del diezmo, lo cual no significa que no se produjeran de nuevo en ocasiones, sino más bien que no adquirieron el suficiente relieve como para dar lugar a testimonio escrito. Pero en el último tercio de siglo la situación cambiará, aflorando de nuevo la información documental sobre conflictos decimales, tal como más adelante se verá.

3-La fiscalización regia de las rentas eclesiásticas

Durante la Baja Edad Media se produjo en todos los reinos del Occidente europeo una profunda transformación en los sistemas fiscales que daría lugar a la creación de una nueva fiscalidad regia que habrá de permanecer vigente en sus rasgos esenciales durante los tiempos modernos. En Castilla los cambios produjeron incrementos de la presión tributaria muy fuertes durante el periodo 1260-1370, y la necesidad de redistribuir de nuevas formas la renta que así obtenía la Monarquía es fundamental para comprender la lenta maduración del Estado durante siglos[142]. Tras este periodo en la evolución de la fiscalidad regia castellana llegará otro que se corresponde con la época de la dinastía Trastámara. En él no aparecen ya -no era necesario- nuevos tipos de rentas, pero se consolida el aparato legislativo e institucional de gestión de la Hacienda regia, que apenas había existido en el periodo anterior. Entre 1369 y 1400 habrá un fortísimo aumento de la presión tributaria, al que seguiría un debilitamiento del sistema hacendístico monárquico a medida que avanzaba el siglo XV, hasta que los Reyes Católicos consiguieron

---

[141]José Manuel Nieto Soria, <<La conflictividad en torno al diezmo...>>, p. 234.

[142]Miguel Ángel Ladero Quesada, *Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)*, pp. 11-12.

sanearlo y, en gran medida, restaurarlo, a la vez que lo reforzaban con nuevos tipos de ingresos extraordinarios[143].

Dentro de este contexto, los reyes de Castilla también pudieron disponer durante los siglos XIII al XV de grandes cantidades de dinero procedentes de las rentas e instituciones de la Iglesia castellana. Pocos monarcas europeos disfrutaban de tantas ventajas en lo que se refería a sus relaciones con el Papado y con el clero de su propio reino, pero pocos también habían vinculado tanto las razones de su poder a argumentos religiosos y la teoría política sobre el ser de su reino a la realidad de una interminable lucha contra el Islam[144].

De este modo, la política económica de la Monarquía respecto a la Iglesia tuvo entre sus objetivos convertir muy frecuentemente las rentas eclesiásticas en objeto de una fiscalidad regia que se desarrollaría con mayor o menor intensidad según las necesidades materiales de cada momento. Esta era la compensación económica que obtenía la Monarquía por su actitud de proteccionismo hacia los intereses económicos de la Iglesia. En este sentido, además de los consabidos tributos dedicados específicamente al mantenimiento de las campañas militares de los monarcas -tercias reales, décimas y cruzadas-, también existieron otras aportaciones de carácter extraordinario que, reclamadas por la Monarquía en forma de servicios y teniendo, por tanto, una validez general para todo el reino, comprometieron directamente a la Iglesia en el mantenimiento económico de las actividades militares más costosas de los monarcas castellanos.

Las rentas de la Iglesia de Cuenca, lógicamente, también serían objeto de esta fiscalización por parte de la Monarquía, y a ello, siempre en función de la documentación disponible, dedicaremos nuestro estudio en las páginas siguientes.

El 14 de octubre de 1275 el papa Gregorio X había concedido a Alfonso X que pudiese percibir una décima sobre las rentas eclesiásticas de Castilla por el tiempo de seis años. Cabe interpretar este otorgamiento como una compensación del pontífice

---

[143] *Ibid.*, pp. 13-14.

[144] Miguel Ángel Ladero Quesada, *El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal*, p. 190.

al rey castellano tras la renuncia de éste a la corona imperial después de la entrevista entre ambos en Beaucaire, a lo que se sumaba la preocupante situación militar en la que había quedado la frontera con los musulmanes tras el ataque benimerín del verano de aquel mismo año de 1275. Sabemos que la recaudación de esta décima presentó muchas dificultades en casi todos los obispados del reino[145], y el de Cuenca no será una excepción. Un indicio de ello es que el 25 de junio de 1278 el cabildo catedralicio tuvo que dirigirse al cabildo de clérigos beneficiados de Huete instándoles a que pagasen la décima que el papa había concedido al rey[146].

Algunos años más tarde, en 1286, se sabe que estaba teniendo lugar la recaudación de una cruzada en todo el reino, aunque nada se puede afirmar en torno al momento preciso de su concesión por el pontífice romano. En 1293, Sancho IV obtendría una nueva bula pontificia de cruzada[147]. No obstante, sobre el modo como se llevó a cabo la recaudación de ambas cruzadas en el obispado de Cuenca no nos ha llegado ningún tipo de noticia.

Otro punto importante de las exacciones fiscales sobre la Iglesia es el que venía dado por la imposición de servicios extraordinarios. En el Derecho Canónico de la época se había desarrollado una normativa bien concreta por la que se restringía la aplicación de exacciones extraordinarias al clero. Desde un punto de vista jurídico, los laicos no tenían ningún derecho sobre los bienes de la Iglesia, no pudiendo imponer sobre ellos ninguna contribución extraordinaria tan sólo por su decisión particular. Sólo el obispo, de acuerdo con su clero y después de haber obtenido el *consilium papae*, podía conceder dones gratuitos. Pero, en la práctica, todo esto fue a menudo objeto de violación. Generalmente, los reyes castellanos impusieron servicios extraordinarios sobre los bienes de la Iglesia, contando con la aprobación de los prelados y sin haber sido solicitado previamente el *consilium papae* por parte de estos

---

[145] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real*..., pp. 124-125.

[146] AEH, *Inventario*, nº 34.

[147] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real*..., p. 129.

últimos. La preocupación fundamental que tuvieron los obispos sobre los servicios extraordinarios fue que el rey tuviera siempre presente que tan sólo podían ser percibidos una vez que hubieran sido consultados los propios obispos y hubieran dado su aprobación. Para ello era necesario ofrecer a estos últimos contrapartidas suficientemente interesantes[148].

Así, por ejemplo, durante las Cortes de Haro de 1288, tras conceder los asistentes servicios extraordinarios durante los próximos diez años, Sancho IV les otorgó exención de todas las pesquisas y pechos que habían sido arrendados a Abraham el Barchillón, afectando de forma muy directa esta exención a los prelados y cabildos catedralicios, en particular por lo que había *pasado del realengo al abadengo, cuya pesquisa quedó sobreseída*[149]. Poco tiempo después, entre 1291 y 1294, el Episcopado castellano se convirtió en una base fundamental de las campañas desarrolladas por Sancho IV en torno a Tarifa y Algeciras. Deseando Sancho IV en 1291 llevar a cabo la ocupación de Algeciras, tenía graves dificultades económicas para llevar a efecto tal campaña. Debido a ello el monarca reclamó la ayuda económica del Episcopado, convocando en Medina del Campo a <<todos los prelados de la su tierra>> para demandarles el respaldo económico de la Iglesia para el cerco de Algeciras. Así, la cantidad que se obtuvo fue de un millón cuatrocientos mil maravedís[150].

Sabemos que por dicho servicio extraordinario en 1291 correspondió pagar al obispado de Cuenca la cantidad de 25.000 mrs. Además, el 28 de diciembre de ese mismo año el cabildo catedralicio expondría ante el obispo don Gonzalo Díaz que sólo por esta vez estaba dispuesto a contribuir al pago de dicho servicio con más de la cuarta parte, que era lo que en realidad le correspondía pagar, para de este modo hacer merced a la

---

[148]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 130-132.

[149]*Cortes*, I, pp. 99 y ss.

[150]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 13.

clerecía del obispado[151]. Dado que la norma a la hora de repartir el pago de los pechos reales era que el obispo y cabildo catedralicio pagasen la mitad, cada uno una cuarta parte, y la clerecía diocesana la otra mitad, puede inferirse que si el cabildo se comprometió a entregar algo más por esta vez, sin duda ello estuvo motivado por la difícil situación económica que probablemente atravesaba el clero diocesano por aquellas fechas.

Tres años más tarde, entre el 3 y el 20 de marzo de 1294, con vistas a la campaña de Tarifa, el obispado de Cuenca aportaría 15.000 mrs., la misma cantidad que los de Segovia, Córdoba y Jaén, mientras que el arzobispado de Toledo y los obispados de Palencia, Sigüenza y Osma aportaron 100.000, 60.000, 40.000 y 20.000 mrs. respectivamente. Así, pues, la Monarquía era consciente de que debía existir una proporcionalidad entre la riqueza de cada sede y su aportación económica[152].

Las tercias reales -dos terceras partes del tercio decimal correspondiente a las fábricas parroquiales-, cuyo cobro había comenzado en 1247 por concesión pontificia, pronto constituyeron también otra fuente básica de ingresos sobre rentas eclesiásticas de gran importancia para la Monarquía. A fines del reinado de Sancho IV su cobro ya era tan habitual en Castilla que estaban puestas *en cabeça* para cada lugar. Se percibían siguiendo las demarcaciones administrativas eclesiásticas, puesto que eran parte del diezmo, y su importancia era muy desigual de unas regiones a otras porque dependía tanto de los niveles de población como de los de producción. Sabemos que en 1292, por ejemplo, el obispado de Cuenca contribuyó con 22.000 mrs., el de Osma con 22.200 y el de Sigüenza con 16.000. Por otra parte, el cálculo de las tercias de los obispados de Osma, Sigüenza, Cuenca, Ávila, Segovia y Toledo se hacía a razón de un maravedí de *moneda nueva* por cuatro de moneda de la guerra, y no por seis, como era lo habitual, sin que sepamos el motivo de ello[153].

---

[151] ACC, caj. 12, nº 225.

[152] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real*..., pp. 63-64.

[153] Miguel Ángel Ladero Quesada, *Fiscalidad y poder real*..., pp. 195-196.

Por otro lado, no fue inusual que en ocasiones la Monarquía enajenase algunas de estas tercias reales en favor de laicos o incluso de instituciones eclesiásticas concretas, y para el caso de la Iglesia conquense también sabemos que a veces sucedió esto[154], lo que viene a ser una prueba de que no siempre todas las tercias reales iban destinadas al fin para el que teóricamente se habían cobrado, que era la lucha contra los musulmanes. Resultado de ello fue la intervención de Bonifacio VIII el 28 de enero de 1301, amenazando al monarca castellano y a los ricoshombres con pena de excomunión en caso de persistir en sus apropiaciones ilegales de tercias. No obstante, el 16 de octubre de ese mismo año el papa otorgará a Fernando IV el derecho a percibir tercias por un tiempo de tres años, cuyo montante se aplicaría a la lucha contra los infantes de la Cerda[155].

Por entonces reinaba un importante clima de descontento en el seno de la Iglesia castellana contra la fuerte presión fiscal de la Monarquía, y una buena prueba de ello lo constituye el hecho de que en el Concilio Provincial de Peñafiel celebrado en 1302, en el que estuvo presente, entre otros, el obispo de Cuenca don Pascual, se expresara el disgusto de los reunidos por los servicios extraordinarios recaudados por el monarca sin contar con la autorización de obispos y cabildos catedralicios[156].

Es dentro de este contexto cuando el maestre de Santiago don Juan Osórez solicitó permiso de Fernando IV para predicar una bula de cruzada en el arzobispado de Toledo y en los obispados de Cuenca, Córdoba y Jaén, con el fin de mantener algunos castillos santiaguistas limítrofes con el reino de Granada. De este modo, el 1 de julio de 1303, el rey se dirigió a todas las autoridades civiles y religiosas de dichos obispados para que favoreciesen a los caballeros santiaguistas en la publicación y

---

[154]Por ejemplo, sabemos que Alfonso X había hecho merced al cabildo catedralicio conquense de las tercias de Iniesta, aldea de Cuenca. ACC, caj. 11, nº 207. Ya en el siglo XIV, Alfonso XI, el 20 de enero de 1346, concedería a Alvar García de Albornoz las tercias de las salinas de Monteagudo, con lo que en adelante el cabildo catedralicio tendría que pagarle 8000 mrs. anuales por dichas tercias. ACC, siglo XIV, nº 164. Y en el siglo XV proseguirá y se intensificará la enajenación de tercias en favor de la nobleza local.

[155]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 119-120.

[156]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 132.

recaudación de la cruzada, para cuyo cobro en el obispado de Cuenca parece que surgieron dificultades, lo que hizo necesaria una intervención directa del monarca en su recaudación[157].

El 29 de abril de 1309 Clemente V concedió a Fernando IV una décima a percibir por espacio de tres años, para la guerra de Granada[158]. Sin duda esta décima estaba destinada a contribuir a sufragar los gastos de la campaña que se pensaba realizar en torno a Algeciras. En cuanto a la contribución del obispado de Cuenca para esta décima, sabemos que se efectuó con cierto retraso, pues el 28 de julio de 1314 el obispo don Pascual recibía la carta de finiquito por lo que le había correspondido pagar en esta décima[159], cuyo montante exacto desconocemos al no conservarse el documento original de dicha carta.

En los comienzos de la minoría de Alfonso XI sabemos que el infante don Pedro estaba percibiendo tercias y décimas, y además en 1317 recibiría nueva autorización pontificia, en este caso de Juan XXII, para ordenar recaudar en los próximos tres años, hasta 1320, tercias y décimas que en ningún caso podrían sobrepasar la cantidad de 150.000 florines[160]. Los colectores en este caso fueron el arzobispo de Toledo y el obispo de Córdoba. En las diócesis de Sigüenza y Cuenca, Roy Martínez, escribano, fue la persona designada por el infante don Pedro para que percibiera en su nombre las rentas recaudadas por los colectores[161], cuyo montante se desconoce para el caso de la diócesis conquense.

En cambio sí que conocemos la contribución realizada por ésta última en el servicio extraordinario impuesto por Alfonso XI en 1326. Así, en la primera paga le correspondió entregar 24.350 mrs., y en la segunda paga 32.000[162].

---

[157]José Goñi Gaztambide, *Historia de la bula de Cruzada*, pp. 263-265.

[158]A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, doc. nº 443.

[159]Sanz, nº 261.

[160]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 120-121.

[161]*Ibid.*, p. 126.

[162]Miguel Ángel Ladero Quesada, *Fiscalidad y poder real...*, p. 213.

Desde 1327 se vuelven a recaudar tercias y décimas a la vez para la continuación de las campañas contra los musulmanes, pero parece que, en esta ocasión, sin que hubiera autorización pontificia para ello, al menos en los momentos iniciales[163]. Prueba de esto último es la querella que el cabildo catedralicio de Cuenca presentó ante el rey porque el cogedor de esta décima en el obispado de Cuenca pretendía cobrarla sin que el obispado tuviese aún autorización pontificia para ello. Debido a esta protesta del cabildo, el 7 de febrero de 1329 Alfonso XI mandará al cogedor de la décima en el obispado de Cuenca que se abstenga de recaudarla hasta que se otorgue la correspondiente autorización *pontificia*[164].

Sabemos que en 1332 el papa otorgaría al monarca castellano la percepción de una nueva décima por cuatro años. Por ello el 13 de febrero de 1333 Alfonso XI mandó al obispo, cabildo catedralicio y clero conquense que pagasen dicha décima, cuyo montante se destinaría al mantenimiento de la guerra contra los musulmanes[165]. El recaudador nombrado en el obispado de Cuenca fue Fernando Rodríguez, camarero de Alfonso XI. El 20 de septiembre de 1334 éste se dirigirá de nuevo al cabildo informándoles de que debían pagar a dicho Fernando Rodríguez la décima correspondiente al periodo que iba desde el día de la Ascensión de 1334 hasta el mismo día de 1335, y cuyo pago se habría de realizar en dos plazos de 6532 y 6830 mrs. El 6 de octubre de 1334 Fernando Rodríguez notificó que Juan Ferranz, camarero regio, actuaría como procurador suyo para la recaudación de dicha décima. En cuanto al pago efectivo de las cantidades arriba indicadas, el 7 de marzo de 1335 Juan Ferranz recibiría los 280 mrs. que faltaban para completar la suma de 6532 mrs. correspondientes al primer plazo, y muy poco tiempo después recibiría los 6830 mrs. del segundo plazo[166]. Posteriormente aún continuará la

---

[163]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 127.

[164]ACC, siglo XIV, nº 296.

[165]ACC, siglo XIV, nº 15.

[166]ACC, siglo XIV, nº 268.

recaudación de la décima hasta completar el periodo de cuatro años que contemplaba la concesión pontificia, y el 13 de febrero de 1337 Alfonso XI aún se dirigía de nuevo al obispo y cabildo conquense para que hiciesen frente al pago de dicha décima[167].

En 1340 el monarca logró de nuevo, por medio de sus embajadores Juan Martínez de Leyva y Pedro Diego de Córdoba, la concesión pontificia de tercias y décimas por un trienio, así como la Cruzada. Por deseo del papa la predicación de ésta en Castilla correría a cargo de los obispos de Cuenca y Ávila, y las limosnas entregadas por los fieles serían recibidas por los comisarios y empleadas en la lucha contra los musulmanes[168]. Gracias a estas nuevas concesiones del papa la Monarquía impondrá fuertes exacciones sobre la Iglesia con vistas a las campañas llevadas a cabo en el Estrecho, en torno a Algeciras, entre 1342 y 1343. Aunque apenas hay para estas nuevas empresas guerreras datos cuantitativos, sí se sabe que el propio monarca realizó una gira por varias ciudades, entrevistándose con sus representantes laicos y eclesiásticos y obteniendo importantes ayudas, como, por ejemplo, la entrega de las alcabalas. La Crónica de Alfonso XI también habla de la aportación en plata que para la campaña de 1343 le hicieron al monarca los ricoshombres y prelados[169], pero ningún dato concreto puede señalarse para el caso de la diócesis conquense.

Algunos años más tarde, el 11 de marzo de 1347, Clemente VI otorgaría a Alfonso XI una nueva percepción de décimas para poder resarcirse con ello de las deudas que el monarca se había obligado a contraer con motivo de la campaña en torno a Algeciras. En esta ocasión de nuevo el obispo de Cuenca sería nombrado colector pontificio, junto con el obispo de Zamora. Además, es este un caso de concesión de décimas particularmente curioso, en cuanto que no se produce con vistas a desarrollar una campaña contra los musulmanes, sino para compensar los gastos de otra

---

[167]Sanz, nº 359.

[168]José Goñi Gaztambide, *Historia de la bula de Cruzada*, pp. 323-324.

[169]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 64-65.

campaña ya realizada[170]. Sabemos que para la recaudación de esta décima hubo bastantes problemas en toda Castilla, y en lo que atañe a la Iglesia conquense sabemos que el 22 de abril de 1350 el cabildo de clérigos beneficiados de Huete apelaría ante el cabildo catedralicio conquense por una cuestión referente al pago de esta décima[171]. Aunque el documento original de dicha apelación no se conserva, puede aventuarse la hipótesis de que la protesta de los clérigos optenses estaría probablemente motivada bien por una simple negativa al pago de la décima o bien por un desacuerdo con la tasación hecha por el cabildo catedralicio de lo que a ellos les correspondía pagar.

Mientras tanto en el obispado de Cuenca se estaba cobrando un servicio a favor de la Monarquía correspondiente al año 1349. De este modo, en 1351 el obispo don García mandará que toda la clerecía de la diócesis pague los 4456 mrs. de dicho servicio que aún faltaban por entregar y que les demandaban los oficiales regios[172].

Poco después sabemos que el papa concedería de nuevo una décima al monarca castellano, en este caso a Pedro I, para percibir por espacio de seis años, sin que se pueda precisar el momento exacto en que tuvo lugar dicha concesión. Sí es seguro que en 1355 ya se había iniciado en el obispado de Cuenca la recaudación de esta décima, y el 24 de enero de 1358 Pedro I exigiría de la Iglesia conquense el pago de la décima correspondiente al penúltimo año, cuya tasación para la diócesis ascendía a 16.850 mrs. Es significativo que en este mandato regio el monarca recuerde la obligación que también tiene la clerecía diocesana de entregar su parte correspondiente de esta décima, lo que puede dar una clara idea de la resistencia que había por parte del bajo clero a la hora de hacer frente a sus obligaciones fiscales con la Monarquía[173].

---

[170] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 127.

[171] AEH, *Inventario*, leg. 1º, nº 23.

[172] ACC, siglo XIV, nº 110.

[173] AHN, Micr., rollo 14216, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 84.

Por otro lado, el 22 de noviembre de ese mismo año de 1358, el cabildo catedralicio conquense se obligó a pagar antes de fin de año a Samuel Leví, tesorero mayor del rey, los 10.000 mrs. que le correspondía entregar en el repartimiento de una nueva imposición de 40.000 mrs. que debía pagar al monarca el conjunto del obispado de Cuenca[174], aunque el documento no indica a qué tipo fiscal en concreto se refiere. Lo que sí que parece claro es que por estas fechas la Monarquía estaba particularmente necesitada de dinero, y no sería extraño que Pedro I utilizase indebidamente parte de las rentas obtenidas de la Iglesia para sufragar con ellas algunos de los gastos de la guerra con Aragón que se había iniciado dos años antes.

Mientras tanto, en los años siguientes continuaría la resistencia por parte de la clerecía diocesana a la hora de contribuir en sus obligaciones con el fisco regio, lo que debe de ponerse en relación con la situación de crisis económica que por entonces aún afectaba a gran parte del reino, y que sin duda repercutía de manera muy especial en el bajo clero. Por ejemplo, en 1361, cuando el cabildo catedralicio envió a Sevilla por petición regia al arcediano de Cuenca Gil Sánchez, quien debía hablar con el monarca, la clerecía del obispado se negó en principio a pagar la parte que le correspondía en los gastos del viaje a Sevilla de dicho arcediano, lo que motivaría el descontento por parte del cabildo catedralicio, que no quería afrontar él sólo el pago de la totalidad de dichos gastos. Por ello los canónigos expondrían sus quejas ante el monarca, quien, en octubre de 1361, mandaría a las justicias laicas de Cuenca que obligasen a la clerecía de la diócesis a pagar lo que debía, cuya cifra exacta desconocemos al no venir indicada en el documento[175].

El final del reinado de Pedro I, coincidiendo con la guerra civil castellana, será también una época de muy fuerte presión fiscal por parte de este monarca no ya sólo sobre la Iglesia conquense, sino en general sobre todo el conjunto del clero

---

[174] ACC, siglo XIV, nº 116.

[175] ACC, siglo XIV, nº 297 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 2, ff. 44r-45r.

castellano. La explicación de este hecho sin duda viene dada por las apremiantes necesidades económicas del monarca para sufragar los gastos de la contienda contra su hermano Enrique de Trastámara, lo que le llevaría a exigir importantes cantidades de dinero de la Iglesia bajo la excusa de utilizarlo en la lucha contra los musulmanes, cosa que no siempre se cumpliría.

Para el caso de la Iglesia conquense, contamos con algunos ejemplos de estas exigencias fiscales por parte de Pedro I durante el transcurso de la guerra civil. La primera intervención regia tuvo lugar el 9 de junio de 1367, fecha en la cual el monarca mandó a Garci Fernández de Villodre, mayordomo mayor de su hijo don Sancho, que cobrase el préstamo de 1000 doblas que *había solicitado de los judíos de Cuenca, así como también las* 2000 doblas que había exigido al obispo y cabildo catedralicio, dinero del cual se hallaba en extremo necesitado. Además, en el mismo documento el rey también expresa su deseo de que se haga todo lo posible para mantener los castillos de Cuenca y Huélamo a su servicio[176], lo que viene a ser un claro indicativo de la necesidad que el monarca tenía de controlar algunos puntos *estratégicos de importancia militar.*

Por otro lado, al día siguiente, 10 de junio, Pedro I se dirigirá en esta ocasión al cabildo catedralicio conquense mandándole enviar lo más pronto posible un emisario a su presencia <<por algunas cosas que tengo de fablar convosco que cunplen mucho a mio serviçio>>, sin que en el documento se especifique qué cuestiones en concreto son las que el monarca deseaba tratar con el cabildo[177], aunque es de suponer que lo que ante todo quería el rey era asegurarse el apoyo de la Iglesia conquense a su causa frente a las pretensiones de Enrique II. No obstante, nada se puede asegurar sobre si el cabildo cumplió o no el mandato regio, sobre todo si tenemos en cuenta que un año antes, en 1366, Enrique II ya había confirmado sus privilegios a la Iglesia conquense, que probablemente no tardaría mucho en inclinarse definitivamente a favor del monarca Trastámara.

---

[176] Biblioteca de la Real Academia de la Historia, *Colección Salazar y Castro*, M-46, f. 109r-v.

[177] *Ibid.*, f. 109v.

Pero a pesar de todo Pedro I continuó exigiendo contribuciones económicas de la Iglesia de Cuenca. Así, el 22 de agosto del ya mencionado año de 1367, mandaba que, estando a punto a de acabarse las treguas con los musulmanes de Granada y de reiniciarse la guerra contra ellos, la Iglesia conquense contribuyese con el pago de 36 ballesteros para ayuda del ejército cristiano[178], aunque no cabe menos que sospechar que probablemente también estaría en la mente del monarca utilizar dicha ayuda militar en la guerra civil que le enfrentaba a su hermano Enrique.

No se puede asegurar si la Iglesia conquense contribuyó finalmente o no con el pago de dichos 36 ballesteros, así como con las 2000 doblas que el rey Pedro I había exigido dos meses atrás, habida cuenta de que en 1366, tal como se ha señalado más arriba, Enrique II ya trataba de ganarse el apoyo del clero conquense hacia su causa. Sea como fuere, algunos años más tarde, en las peticiones dirigidas por el cabildo catedralicio de Cuenca a Enrique II tras la finalización de la contienda civil, quizá en las Cortes de Toro de 1371, los canónigos conquenses se quejaban ante el monarca de los muchos pechos que habían tenido que pagar a Pedro I:

"En tienpo de don Peydro fueron tantos los pechos e los agravios que nos fasian, que non lo podiamos conplir de lo nuestro, para lo cual toviemos de enpennar lanparas e inçensarios e caliçes e otros ornamentos de plata a los judios a logro..."

Aunque es probable que en el documento se exagere algo la gravedad de la situación, tampoco se puede negar la existencia de un cierto fondo de verdad. Dadas las circunstancias arriba expuestas, el cabildo catedralicio solicitaría a Enrique II que mandase a sus oficiales en Cuenca que, una vez satisfecho a los judíos lo principal del empeño, obligasen a éstos a devolver los ornamentos que se les habían entregado[179].

---

[178]Luis Vicente Díaz Martín, *Itinerario de Pedro I...*, nº 980.

[179]ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, ff. 134v-135r.

En definitiva, parece que durante el reinado de Pedro I la presión fiscal de la Monarquía sobre la Iglesia conquense fue particularmente acusada, aunque no por ello se debe restar importancia a las contribuciones fiscales que se exigieron durante los reinados anteriores. Todo ello, en última instancia, venía a ser la compensación económica que obtenía la Monarquía castellana por su constante actitud de proteccionismo hacia los intereses económicos de la Iglesia, proteccionismo que, lógicamente, también redundaba en beneficio de los propios intereses del fisco regio.

4-La dimensión conflictiva de las relaciones económicas de la Monarquía castellana con la Iglesia conquense

A) *La pugna realengo-abadengo*

Un aspecto particularmente conflictivo de las relaciones económicas mantenidas entre la Monarquía y la Iglesia castellana en general a lo largo de la Baja Edad Media es el que viene dado por el constante incremento que durante estos siglos experimentaron los territorios de abadengo a costa del realengo. Teóricamente, y en función de la llamada *regalía de amortización*, sólo los monarcas tenían el derecho exclusivo para autorizar la conversión en abadengo de bienes que antes no lo eran[180]. Pero, si esto era la teoría, la práctica demuestra que no hubo una observancia estricta de dicha regalía de amortización, lo que permitió un crecimiento continuo e incontrolado de los abadengos ante la pasividad de los monarcas hacia el problema.

Pero el tema de las relaciones realengo-abadengo no afectaba tan sólo a la Iglesia y a la Monarquía. Por el contrario, sus implicaciones eran lo suficientemente importantes como para concernir a otros dos sectores de poder: el concejil y el nobiliario. Es por ello que tanto concejos como nobles, pero en especial los primeros, trataron de presionar repetidamente sobre

---

[180] Sobre el tema puede verse la obra de P. Rodríguez Campomanes: *Tratado de la Regalía de Amortización*, Madrid, 1765.

los monarcas a fin de que éstos adoptasen medidas tendentes a evitar un crecimiento excesivo de las tierras de abadengo a costa del realengo. Pero a pesar de que desde el reinado de Alfonso X los monarcas fueron conscientes del enriquecimiento de los abadengos y de la necesidad de cambiar el curso de esta tendencia, en general siempre adoptaron conscientemente actitudes muy relajadas a este respecto, y las pocas iniciativas tomadas carecieron de verdadera efectividad, pues a lo sumo se ordenaron algunas pesquisas esporádicas que raramente se efectuaban en su totalidad[181]. Sólo iniciado el siglo XVI, Carlos V y Felipe II, movidos por las imperiosas necesidades de sus respectivas haciendas, se decidieron a poner en práctica algunas acciones desamortizadoras, en especial sobre bienes pertenecientes a los maestrazgos de las tres Órdenes militares[182].

En el caso de la diócesis conquense, las bases para el incremento de los abadengos quedarían sentadas mediante la concesión que el 3 de abril de 1199 hizo Alfonso VIII a San Julián y a sus sucesores en la Iglesia de Cuenca para poder poseer todos los bienes raíces que adquiriesen por compra o donación en el territorio del obispado[183].

Sin embargo, es extraño que el Fuero de Cuenca apenas trate el tema, limitándose todo a una disposición mediante la cual se establece que nadie pueda donar o vender bienes raíces a los monjes[184]. Ello explica que en una de las reformas del Fuero efectuadas con posterioridad, en concreto la llevada a cabo por Alfonso X el 11 de agosto de 1268, se aborde con algo más de precisión el problema de las relaciones realengo-abadengo:

---

[181] José Manuel Nieto Soria, «Abadengo episcopal y realengo en tiempos de Alfonso XI de Castilla», pp. 709-711.

[182] Sobre estas desamortizaciones puede verse el trabajo de Salvador de Moxó: «Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI», *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXI (1961), pp. 327-361.

[183] ACC, caj. 2, nº 26 / BN, Ms. 13072, f. 22r-v.

[184] *Fuero de Cuenca*, edic. de Alfredo Valmaña Vicente, cap. II, nº 2, p. 47.

"Otrosi, mandamos et defendemos que ningun regalengo non pase a abadengo ni a omes de orden ni de religion por conpras ni por mandamientos ni por canbios ni en ninguna manera que ser pueda sin nuestro mandado..."[185]

Por lo demás, se trata de la única alusión al tema que aparece en las reformas del Fuero, pues en las efectuadas anteriormente no se menciona nada sobre ello, ni tampoco en la llamada *carta de mejoría* de Sancho IV, otorgada a favor del concejo conquense el 24 de marzo de 1285[186].

Mientras tanto, y en general para toda Castilla, las pesquisas que se hicieron en 1258 y 1273, durante el reinado de Alfonso X, no habían repercutido lo más mínimo en el decidido avance de los abadengos eclesiásticos. Pero desde la subida al trono de Sancho IV la preocupación general por el asunto comenzaría a plantearse insistentemente en las reuniones de Cortes. Así, en el Ordenamiento otorgado en las palentinas de 1286 se anunció que se estaba realizando una pesquisa para saber con exactitud qué tierras habían pasado del realengo al abadengo, aunque finalmente la propia dinámica del problema y la necesidad de contar con el apoyo del estamento eclesiástico frenarían la decisión inicial de Sancho IV de llevar a cabo una pesquisa. De este modo, desde 1287, el monarca comenzó a otorgar privilegios particulares a favor de las diversas diócesis del reino para que los clérigos no pecharan por sus abadengos que habían pertenecido al realengo, hasta que finalmente, en las Cortes de Haro de 1288, se diera por sobreseída la pesquisa antes aludida[187].

En lo que atañe al caso conquense, una vez iniciada la pesquisa, Sancho IV mandará el 5 de abril de 1287 que los pesquisidores no se excedan ocupando los bienes de la Iglesia de Cuenca[188], y el 15 de agosto del mismo año ordenará que final-

---

[185]AMC, leg. 997, exp. 1, f. 3r. Es una copia del siglo XIX, pues el original se ha perdido.

[186]AMC, leg. 1, exp. 17 / Rafael Ureña, edición del *Fuero de Cuenca*, pp. 863-865.

[187]Ana Arranz Guzmán, <<El tercer estado castellano ante las relaciones realengo-abadengo>>, pp. 445-447.

[188]ACC, caj. 11, nº 110 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 5, ff. 14v-15v.

mente no se realice pesquisa alguna[189], disposición que será reiterada también el 14 de noviembre[190].

Al subir al trono Fernando IV, el retroceso que en toda Castilla había experimentado el realengo, unido a la situación de inestabilidad política que representaba la débil situación de la Monarquía durante la minoridad regia, provocarían una lluvia de protestas por parte de los procuradores de los concejos en casi todas las Cortes celebradas a lo largo de este reinado. Pero tanto las actas de las Cortes de 1298 como las de 1299 y posteriores indican que la resolución de Haro de 1288 mantuvo su vigencia durante todo el mandato de Fernando IV, pues este monarca manifestó siempre una clara indecisión para afrontar con firmeza el problema y buscarle una clara solución[191].

Pasando ahora al reinado de Alfonso XI, en julio de 1315 tuvo lugar en Burgos una sesión de Cortes en la que los tutores reales se reunieron por separado con los concejos y prelados para tratar el tema de los realengos y abadengos, determinándose finalmente iniciar una pesquisa. Pero entre abril y agosto de 1316 la reina doña María y los infantes don Juan y don Pedro, como tutores de Alfonso XI, expidieron en su nombre varios documentos comunicando a los prelados del reino su decisión de revocar lo acordado en las Cortes de Burgos del año anterior en el sentido de iniciar una pesquisa para hacer que aquello que había pasado contra derecho del realengo al abadengo fuera devuelto. Esto fue debido a que, tras las mencionadas Cortes de Burgos, se había acordado en Medina del Campo, y más tarde en Olmedo, todo un pacto entre prelados y tutores por el que se consolidaba como abadengo el realengo ocupado por eclesiásticos. Si bien esto traía consigo ciertas contrapartidas fiscales, como la entrega de un servicio extraordinario por la Iglesia, cabe

---

[189]ACC, caj. 12, nº 213.

[190]ACC, caj. 12, nº 214 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 5, ff. 15v-16r.

[191]Ana Arranz Guzmán, <<El tercer estado...>>, pp. 447-448.

pensar que la solución tomada sólo paliaba en muy escasa medida el perjuicio causado al patrimonio real[192].

En el caso de la Iglesia conquense la intervención regia en el tema tuvo lugar el 18 de abril de 1316, a través de una carta por la que los tutores revocaban en nombre del monarca la decisión que habían tomado en Burgos de iniciar una pesquisa, y mediante la cual también se confirmaron varios privilegios de la Iglesia de Cuenca que le habían sido concedidos por Sancho IV y Fernando IV[193]. En función de la anterior disposición, dos días más tarde don Juan, hijo del infante don Manuel, mandaría a los cogedores del realengo que pasó a abadengo en el obispado de Cuenca que devolviesen al cabildo catedralicio 5000 mrs. que le habían tomado en una pesquisa realizada algún tiempo atrás[194].

Durante las Cortes de Medina del Campo de 1318, así como en las reunidas en Valladolid en 1322, los concejos expondrían de nuevo sus quejas ante la degradada situación en que se encontraba el realengo. Pero las posibilidades de acción de los tutores regios en el tema de las relaciones entre abadengos y realengos ya estaban muy limitadas por el compromiso que habían adquirido con el conjunto del Episcopado castellano-leonés en Toro en el año 1316. Por ello los tutores no hicieron nada en las Cortes arriba mencionadas para tratar de resolver el problema, lo que provocaría que en las Cortes celebradas en Valladolid en 1325 se denunciase la crisis del realengo con un ímpetu mayor que en ocasiones anteriores[195]. En la diócesis de Cuenca la pasividad regia ante la merma del realengo quedaría manifiesta a través de una intervención de Alfonso XI que tuvo lugar el 18 de septiembre de 1323, mediante la cual el monarca, además de confirmar todos los privilegios de la Iglesia conquense, mandaría que no se

---

[192]José Manuel Nieto Soria, <<Abadengo episcopal y realengo en tiempos de Alfonso XI de Castilla>>, p. 715.

[193]ACC, siglo XIV, nº 333 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 5, ff. 3v-6r.

[194]ACC, siglo XIV, nº 332.

[195]José Manuel Nieto Soria, <<Abadengo episcopal y realengo...>>, pp. 716-718.

realizase ningún tipo de pesquisa sobre las heredades que habían pasado del realengo al abadengo[196].

Poco después de llegar Alfonso XI a la mayoría de edad, tendrá lugar una reunión del Episcopado castellano-leonés con el monarca en Valladolid, el 15 de febrero de 1326. En esta reunión los obispos presentaron sus quejas ante el rey solicitando la protección del monarca, sobre todo de cara a la conservación de los abadengos. Por ello en marzo o abril de ese mismo año el rey firmaría en Medina del Campo un acuerdo con los prelados a través del cual, si bien no consigue recuperar el realengo perdido, sí logra, en cambio, la concesión de un servicio extraordinario de considerable valor cuya obtención en esos momentos era más apremiante que la recuperación de los bienes patrimoniales perdidos. En definitiva, la pérdida del realengo acabaría utilizándose como un elemento más de la fiscalidad real[197].

Sabemos que tiempo más tarde, en una fecha no muy lejana al año 1339, Alfonso XI mandaría hacer una pesquisa sobre los bienes que habían pasado del realengo al abadengo desde 1326, lo que levantaría las quejas inmediatas por parte de la Iglesia de Cuenca contra los oficiales regios que tomaban las heredades dejadas por los fieles a cambio de aniversarios. Debido a ello, y a solicitud del obispo conquense, el 25 de agosto de 1339 el monarca mandará a sus recaudadores que no embarguen nada de las heredades donadas por los fieles a la Iglesia de Cuenca para la dotación de aniversarios y capellanías[198]. En este caso la actuación del monarca apoyando al clero conquense estaba plenamente justificada, pues en el acuerdo de Medina del Campo de 1326 sí que se había admitido el paso de heredamientos realengos a manos de la Iglesia por razones de orden piadoso[199].

Los años finales del reinado de Alfonso XI, con la Peste Negra, incidirían decisivamente en el problema de las relaciones

---

[196]ACC, siglo XIV, nº 11 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 5, ff. 19v-22r.

[197]José Manuel Nieto Soria, <<Abadengo episcopal y realengo...>>, pp. 721-723.

[198]ACC, siglo XIV, nº 300 y 304.

[199]José Manuel Nieto Soria, <<Abadengo episcopal y realengo...>>, p. 721.

realengo-abadengo en todo el reino, contribuyendo de este modo a avivar la tensión latente, de tal suerte que, al iniciarse el reinado de Pedro I, el tema volvía a ser denunciado como un problema plenamente vigente en las Cortes de Valladolid de 1351[200].

En lo que atañe al obispado conquense, contamos con una intervención regia muy significativa que guarda relación con la problemática de la constante expansión de los abadengos. Se trata de un mandato que Pedro I efectuó el 12 de diciembre de 1358 para que las justicias laicas del obispado no obligasen al cabildo catedralicio a comprar los bienes que habían sido de Alvar García de Albornoz, Ferrand Gómez y otros familiares suyos, a la sazón exiliados en Aragón debido a sus enfrentamientos con el monarca castellano. En el documento en cuestión se alude al tema de las relaciones realengo-abadengo al exponerse las quejas presentadas por el cabildo:

"Et que les prendedes et tomades sus bienes por ello a ellos, non seyendo tenidos de los conprar por quanto non puede pasar lo regalengo a lo abadengo, segund se contiene en el ordenamiento que es fecho en esta razon"[201]

Ello quizá podría interpretarse como un intento por parte de Pedro I de cara a frenar la constante expansión del abadengo, aunque por otro lado se trata de la única alusión al tema que para este reinado aparece en la documentación conquense consultada. Sea como fuere, lo cierto es que al menos en aquel momento el monarca era consciente de la necesidad de proteger los ya muy mermados bienes realengos. No obstante, suponiendo que el mandato regio surtiese en la práctica algún tipo de efecto de cara a preservar el realengo, lo cierto es que ello no lograría frenar del todo la expansión del abadengo, que también se dará durante los reinados siguientes como continuación del proceso de constante incremento ya iniciado en el siglo XIII.

---

[200] José Manuel Nieto Soria, <<Abadengo episcopal y realengo...>>, pp. 726-727.

[201] AHN, Micr., rollo 14216, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 80.

B) *La usurpación de rentas*

Otro aspecto de la dimensión conflictiva que a veces se dio en las relaciones económicas de la Monarquía castellana con la Iglesia conquense es el que venía dado por algunos intentos del rey o sus recaudadores de exigir indebidamente al cabildo catedralicio el pago de algunos tributos que en realidad no le correspondía entregar.

Así sucedió repetidas veces con el yantar. Por ejemplo Sancho IV, al comienzo de su reinado, había exigido al cabildo conquense el pago de 600 mrs. para su yantar, lo que motivaría las quejas de los canónigos, que decían que ellos nunca habían tenido obligación de pagar dicho tributo. Por ello el 21 de mayo de 1287 el monarca mandará a su recaudador en el obispado de Cuenca, Juan López de Bermeo, que no demande del cabildo los 600 mrs. que antes les había pedido para su yantar[202], disposición que será confirmada de nuevo a solicitud del cabildo el 13 de septiembre de 1293[203].

Pero esta exención del pago de yantar a favor del cabildo no impedirá que en ocasiones los oficiales regios, quizá por desconocimiento de la misma, intentasen exigir el yantar a los canónigos. Por ejemplo, el 24 de marzo de 1303 Fernando IV confirmaría la exención del pago de este tributo que había sido otorgada a favor del cabildo por Sancho IV[204], pero el 25 de octubre del mismo año Fernando IV tendría que internenir de nuevo mandando a sus oficiales que devolviesen al cabildo los 600 mrs. que le habían cobrado por el yantar[205].

Los recelos del cabildo contra los oficiales regios, que le exigían el pago del yantar, también se produjeron durante el reinado de Alfonso XI, y ello hizo necesarias dos intervenciones de este monarca mandando a sus oficiales que no demandasen este

---

[202] ACC, caj. 12, nº 211.

[203] ACC, caj. 12, nº 227.

[204] AHN, Micr., rollo 14222, s.a. letra H, nº 2.

[205] *Ibid.*, letra H, nº 3.

tributo del cabildo conquense, intervenciones que se produjeron el 14 de febrero de 1329[206] y el 15 de diciembre de 1331[207]. Igualmente Pedro I, el 27 de enero de 1351, mandará que los recaudadores regios no obliguen al cabildo a pagar yantar[208].

Por último, aparte de los conflictos suscitados en torno al yantar, a veces también se produjeron otros por motivos diferentes. Así, por ejemplo, en 1339 el obispo don Odón se quejaría al rey de que los recaudadores de las rentas de las salinas de Monteagudo se negaban a entregar al cabildo los 1200 mrs. anuales a que tenía derecho sobre la renta de dichas salinas. Por ello el 17 de marzo del mencionado año Alfonso XI mandará a Gonzalo Martínez, maestre de Calatrava y su despensero mayor, que se paguen al cabildo los 1200 mrs. arriba indicados[209].

En definitiva, puede decirse que durante todos los reinados analizados siempre se produjo algún conflicto motivado por la usurpación o impago de rentas al cabildo por parte de los oficiales regios, que a menudo desconocían el contenido exacto de todos los privilegios de que gozaba el cabildo. No obstante, parece que estos conflictos nunca llegarían a adquirir el relieve e importancia de los motivados por la problemática de las relaciones realengo-abadengo. En todo caso, sí que eran un síntoma más de las dificultades que a veces se producían en las relaciones económicas de la Monarquía con la Iglesia.

---

[206] ACC, siglo XIV, nº 182.

[207] ACC, siglo XIV, nº 8.

[208] AHN, Micr., rollo 14217, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 86.

[209] ACC, siglo XIV, nº 7.

SEGUNDA ETAPA: LA ÉPOCA TRASTÁMARA

I-IGLESIA Y GÉNESIS DEL ESTADO MODERNO EN CASTILLA

Tal como se señaló con anterioridad, durante la época Trastámara y a nivel general para toda Castilla se habría de desarrollar un complejo proceso de institucionalización de los resultados obtenidos en la etapa anterior en lo que respecta a las relaciones Iglesia-Monarquía. De este modo, con los Trastámara la interpenetración Realeza-Iglesia será significativamente mayor que en la etapa anterior, alcanzando tal proceso una primera culminación con los Reyes Católicos[210].

Pero también conviene matizar que la época Trastámara representó, a pesar de los signos de debilidad política de la Realeza, un momento de evolución hacia el definitivo desequilibrio en favor del principio intervencionista del esquema de principios teóricos de relación tácitamente aceptados por Iglesia y Monarquía. Si este esquema experimentó ese fenómeno de desequilibrio sin posibilidad de retroceso fue, en gran medida, por la falta de oposición coordinada de una Iglesia que entendió como preferible la conservación de una cierta posición privilegiada, aunque mermada, que arriesgar tal posición con la adopción de posturas irreductibles y de resultados impredecibles[211].

En opinión de José Manuel Nieto Soria, los fenómenos de integración eclesiástica en el aparato político de la Realeza, la progresiva atomización <<nacional>> de la Iglesia occidental, la dimensión eclesiástica de la soberanía regia y la nueva concepción que del universalismo pontificio tuvieron los papas de la época, así como su preocupación por consolidar a la Santa Sede como una Monarquía soberana de ámbito italiano, fueron factores y síntomas que contribuyen a considerar razonablemente

---

[210] José Manuel Nieto Soria, <<La configuración eclesiástica de la Realeza Trastámara en Castilla...>>, p. 134.

[211] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480)*, p. 33.

que la configuración eclesiástica de la Monarquía Trastámara formó parte de una dinámica estatalizadora[212].

Lo hasta ahora señalado nos ofrece claros indicios de cómo la génesis del Estado Moderno en Castilla, al igual que sucede en otros países occidentales, no puede entenderse plenamente al margen de la valoración de lo que el elemento eclesiástico significó en su proceso de configuración. Esta valoración comporta dos puntos de vista que deben ser necesariamente considerados como elementos esenciales de una misma realidad histórica. Por un lado, el que la vinculación de la Iglesia con la génesis del Estado Moderno en Castilla deba ser valorada como manifestación de un proceso de aportación de elementos configuradores que contribuyen a conformar en algunos de sus aspectos el sistema político resultante; por otra parte, el que uno de los rasgos caracterizadores de la génesis del Estado Moderno consistirá en el desarrollo de todo un programa de integración de las estructuras eclesiásticas en el sistema político-institucional en curso de desarrollo. Así, podría hablarse de una suerte de intercambio de influencias[213].

Sin embargo, este intercambio de influencias tuvo como una de sus consecuencias más tangibles la importante reducción de la autonomía de acción de la Iglesia castellana y, en definitiva, más adelante, de la Iglesia española, en favor de los cada vez mayores derechos de intervención sobre la misma por parte de la Realeza. Tal hecho, que en el caso hispánico con el tiempo acabará conociéndose en su máxima expresión como *regalismo*, se desarrolló sin demasiados choques ni estridencias, como resultado de un proceso continuado cuyo origen se remonta al siglo XIII.

Tal como señala José Manuel Nieto, consecuencia de todo ello es, en primer lugar, que el proceso de génesis del Estado Moderno en Castilla pueda interpretarse en una de sus componentes como una fórmula de integración eclesiástica que representó un resorte más, no poco importante, para la mayor disponibilidad de poder político en manos de una Monarquía con aspiraciones absolutas.

---

[212] José Manuel Nieto Soria, «La configuración eclesiástica...», p. 139.

[213] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 34.

En segundo lugar, el que la fórmula de Estado Moderno en Castilla nazca con unas importantes aportaciones eclesiásticas desde el punto de vista de su infraestructura y también de su superestructura organizativa, así como con una ineludible impronta religiosa en lo ideológico. En tercer lugar, y por último, el que esta evolución contribuya mucho a matizar la caracterización del clero como estamento privilegiado con caracteres definidos. Tales circunstancias afectarán de lleno al núcleo del proceso de génesis del Estado Moderno, es decir, a la modelación de una determinada forma de soberanía real[214].

Dicho todo esto, a continuación pasaremos ya a analizar de qué modo se desarrollaron las relaciones de la Iglesia conquense con la Monarquía Trastámara y en qué medida estas relaciones no pueden ser entendidas plenamente al margen del proceso de génesis bajomedieval del Estado Moderno en Castilla al que se acaba de hacer referencia.

II-EL PLANO SOCIAL

Al igual que sucedió en la etapa anterior, también durante la época Trastámara bastantes de los prelados que ocuparon la sede conquense, aunque no todos, pertenecían a familias vinculadas en mayor o menor medida con la Monarquía, siendo éste un factor que sin duda facilitó el ascenso de estos personajes en la carrera eclesiástica gracias a la mediación regia.

Comenzando por el obispo Pedro Alfonso de Toledo (1373-1378), hay que señalar que hasta ahora desconocemos cuáles eran sus orígenes familiares, aunque sí que sabemos que antes de llegar a Cuenca perteneció al círculo de influencia del cardenal Gil de Albornoz, de quien había sido capellán y tesorero[215].

Sí que conocemos, en cambio, los orígenes familiares del obispo Nicolás Fernández de Biedma (1378-1381). Era hijo de don Diego Fernández de Biedma, señor de la Casa de Biedma en el reino

---

[214] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 34-35.

[215] ASVat., *Reg. Suppl.* 39, f. 136v.

de Galicia, tratándose de un linaje muy vinculado a la Monarquía a través de la prestación de servicios militares. También sabemos que un hermano suyo fue Juan Fernández de Biedma. Por otro lado, otros miembros de este linaje también aparecen ostentando importantes cargos eclesiásticos: tal es el caso de Sancho de Biedma, arcediano de Jaén, o Alvar Páez de Biedma, que en 1335 era obispo de Mondoñedo[216].

En cuanto al obispo don Álvaro Martínez (1381-1396), su procedencia familiar se desconoce, y parece ser que era de baja extracción social[217], lo que sin embargo no impediría que, gracias a sus dotes intelectuales y valía personal, lograra obtener un decidido apoyo regio que le facilitaría hacer una brillante carrera tanto eclesiástica como política.

Don Juan Fernández Cabeza de Vaca (1396-1407), en cambio, pertenecía a un importante linaje de caballeros castellanos, muchos de cuyos miembros ejercieron importantes cargos laicos y eclesiásticos al servicio de la Monarquía. Por ejemplo, Fernán Ruiz Cabeza de Vaca fue deán de la catedral de Toledo en la segunda mitad del siglo XIV, y Pedro Fernández Cabeza de Vaca, hermano del obispo de Cuenca, era maestre de Santiago en 1384[218]. También hay que destacar el hecho de que este linaje debía de guardar algún tipo de vinculación con la familia aragonesa de los Luna, pues en un documento del 1 de abril de 1405 don Jaime de Luna aparece como sobrino del obispo conquense don Juan Fernández Cabeza de Vaca[219].

Respecto a don Diego de Anaya Maldonado (1407-1418), era natural de Salamanca, donde había nacido en el seno de la noble familia de los Anaya[220]. El siguiente obispo de Cuenca, don Álvaro Núñez de Isorna (1418-1445), de orígenes gallegos, era hijo de Juan Núñez de Isorna y Constanza Vázquez de Insoa.

---

[216]Alberto y Arturo García Carraffa, *Diccionario heráldico y genealógico...*, vol. XIV, pp. 187-192.

[217]AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 7, f. 10r.

[218]Alberto y Arturo García Carraffa, *Diccionario...*, vol. IX, pp. 84-86.

[219]Sanz, nº 607.

[220]José Goñi Gaztambide, <<Los españoles en el Concilio de Constanza>>, p. 151.

Además, se trata de un personaje que pronto pasaría a formar parte del círculo de familiares del arzobispo toledano don Pedro Tenorio[221], lo que sin duda le abriría las puertas para el ascenso en la carrera eclesiástica.

También debe tenerse en cuenta la procedencia familiar del dominico Fray Lope de Barrientos (1445-1469). Nacido en Medina del Campo hacia 1382, era hijo segundo del caballero Pedro Gutierre de Barrientos. En esta época el linaje Barrientos era uno de los principales de la villa de Medina, gozando de especiales preeminencias gracias a sus servicios a la Realeza[222]. En cuanto al cardenal Antonio Jacobo de Veneris (1469-1479), ya se aludió con anterioridad a sus orígenes italianos.

Del siguiente prelado que ocupó la mitra conquense, Fray Alonso de Burgos (1482-1485), debe llamarse ante todo la atención sobre sus orígenes conversos[223], y por último, en cuanto a Fray Alonso de Fonseca (1485-1493), hay que destacar su pertenencia a la importante familia gallega de los Fonsecas, algunos de cuyos miembros habían ejercido importantes cargos laicos y eclesiásticos al servicio de la Monarquía; por ejemplo, dos personajes de esta familia, padre e hijo, ocuparían sucesivamente la sede compostelana a fines de la Edad Media.

III-EL PLANO ECLESIÁSTICO

1-Las elecciones episcopales

En general para el reino de Castilla, si bien antes del siglo XV las intromisiones regias en las elecciones episcopales habían sido abundantes, será sobre todo a partir de esta última centuria cuando el papel jugado por los monarcas en estas elecciones sea más decisivo, no faltando sonados enfrentamientos con los papas cuando éstos pretendían imponer a un candidato que

---

[221]Beltrán, *Cartulario*, I, p. 344.

[222]Luis Alonso Getino, *Vida y obras de Fray Lope de Barrientos*, pp. 17 y ss.

[223]Tarsicio de Azcona, *La elección y reforma del Episcopado español...*, p. 218.

no era del agrado de los monarcas. Desde luego, a partir del siglo XV los cabildos catedralicios quedarían en la práctica definitivamente arrinconados de las elecciones episcopales, y si ejercieron algún tipo de papel en estas últimas, siempre fue de muy escaso relieve[224].

Por otro lado, sobre todo a partir de mediados del siglo XIV, el procedimiento de reserva pontificia, mediante el cual el prelado era elegido en la Curia Romana por decisión última del propio pontífice, tuvo cada vez más incidencia en las nominaciones episcopales. En este caso el recurso a la suplicación regia en favor de un candidato era lo que procedía, y por ello se producirá un salto decisivo en el proceso de consolidación del control regio sobre la Iglesia castellana en el momento en que, a partir de 1421, se institucionalice el derecho de suplicación de los reyes de Castilla, dándose así un paso muy importante hacia el más amplio derecho de presentación, vigente en España hasta tiempos contemporáneos[225].

Centrándonos ya en el caso conquense, la primera provisión pontificia realizada en época Trastámara fue la de Pedro Alfonso de Toledo, trasladado por Gregorio XI de la diócesis de Osma a la de Cuenca el 4 de marzo de 1373[226]. Pero si tenemos en cuenta que este personaje poco tiempo antes había formado parte del bando opositor a Pedro I y favorable a Enrique II, parece probable que hubiese habido una súplica previa al pontífice por parte de este último monarca. Además, Pedro Alfonso de Toledo había sido familiar del cardenal Albornoz, factor que sin duda incidiría también algo en su nombramiento como obispo de Cuenca.

También debe sospecharse la existencia de una súplica previa ante el papa por parte del rey de Castilla en el caso de Nicolás Biedma, trasladado de Jaén a Cuenca por Urbano VI en mayo de

---

[224]Tarsicio de Azcona, *La elección y reforma...*, p. 306.

[225]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 364-365.

[226]ASVat., *Reg. Aven.* 190, ff. 40v-41v.

1378[227], dado que se trataba de un personaje bastante vinculado familiarmente con la Monarquía.

En cuanto a don Álvaro Martínez, fue trasladado por Clemente VII de la Iglesia de Zamora a la de Cuenca en 1381[228]. Sabemos que don Álvaro estaba en Roma en 1378 cuando tuvo lugar la elección de Urbano VI, y salió de la curia acompañando a los cardenales disidentes que semanas después elegían en Fondi a Clemente VII. En 1380 se encontraba en Medina del Campo junto con los embajadores enviados por el rey a Aviñón y a Roma, Álvaro Meléndez y Fernando de Illescas, y pudo informar como testigo sobre las dos sucesivas elecciones según las conversaciones tenidas con los electores del papa aviñonense, quien premiaría estos servicios encumbrándole al gobierno de la diócesis de Cuenca[229], siendo también probable una previa intercesión a su favor del rey de Castilla ante Clemente VII, dado que por entonces don Álvaro Martínez ya era un estrecho colaborador de la Monarquía.

El siguiente obispo de Cuenca, don Juan Cabeza de Vaca, fue trasladado a esta sede desde la de Coimbra por Benedicto XIII el 15 de noviembre de 1396[230]. A la hora de interpretar este nombramiento pontificio, y en función de la procedencia familiar de este prelado, cabría pensar que la elección pudo haberse realizado tanto por súplica previa de Enrique III, dada la vinculación familiar del obispo don Juan con la Monarquía castellana, como por decisión personal del propio Benedicto XIII, puesto que, tal como se señaló más atrás, este prelado estaba también vinculado con la familia aragonesa de los Luna, a la que pertenecía el papa aviñonés.

En cuanto a don Diego de Anaya Maldonado, trasladado de Salamanca a Cuenca por Benedicto XIII el 13 de septiembre de

---

[227]ASVat., armario LIV, vol. 14, f. 181v, y vol. 18, f. 31r.

[228]ASVat., *Reg. Aven.* 279, f. 80v.

[229]Beltrán, *Cartulario*, I, p. 646, nota 1.

[230]ASVat., *Reg. Aven.* 303, ff. 137v-138v.

1407[231], parece muy probable que en este caso hubiera también una mediación ante el papa por parte de la Monarquía, puesto que por entonces don Diego de Anaya, perteneciente al círculo de familiares del arzobispo toledano don Pedro Tenorio, ya era un estrecho colaborador de la Realeza castellana.

Algo similar cabe señalar para el caso de don Álvaro de Isorna, trasladado de León a Cuenca por Martín V el 16 de marzo de 1418[232]. No mucho tiempo después, el 5 de agosto del mismo año, Juan II mandaría a todas las autoridades laicas de la diócesis de Cuenca que obedeciesen en todo al nuevo obispo don Álvaro y le entregasen las fortalezas y rentas que le pertenecían en el obispado conquense[233], tratando de evitar de este modo las posibles injerencias que a veces se daban contra la autoridad episcopal por parte de algunos laicos poderosos.

Fue por aquella época cuando la Monarquía castellana obtendría el denominado <<derecho de suplicación>> que, si hasta entonces era una práctica común por vía de hechos, ahora se convertiría en una institución plenamente reconocida por el Pontificado mediante la bula *Sedis Apostolicae* concedida en 1421 por Martín V a Juan II, a través de la cual, a la vez que el papa confirmaba las tradiciones legales reconocidas en las *Siete Partidas* y respaldaba el derecho de los monarcas a proponer candidatos para una sede episcopal, manifestaba su intención de apoyar, siempre que fuera posible, esta propuesta, si bien no se obligaba necesariamente a favorecerla en todos los casos. Con ello se daba un paso de indudable importancia en el control regio de las elecciones episcopales, más por lo que legitimaba una práctica habitual que por lo que aportaba de novedad, si bien aún quedaba una larga distancia por recorrer hasta la obtención del derecho de presentación propio de la fórmula de patronato real alcanzada por los Reyes Católicos[234].

---

[231] ASVat., *Reg. Aven.* 326, ff. 132r-133r.

[232] ASVat., armario XII, vol. 121, f. 100 / ACC, original, s.s.

[233] BN, Ms. 13072, ff. 244r-245v.

[234] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 367.

Pasando ahora a analizar la provisión de Fray Lope de Barrientos, hay que señalar que este prelado entraría en dos proyectos regios de nombramiento episcopal que no llegarían a cumplirse conforme a los deseos iniciales del monarca. Habiéndose producido la muerte del arzobispo de Santiago, Lope de Mendoza, Juan II le ofreció en 1445 a Fray Lope de Barrientos esta mitra, en compensación por los servicios políticos prestados, pero éste la rechazaría, por lo que el rey propuso al obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, quien la aceptaría, promoviendo entonces a Barrientos a la vacante de Cuenca[235]. De este modo, el 7 de abril de 1445 Eugenio IV otorgaría las bulas oficiales del traslado de Fray Lope de Barrientos, hasta entonces obispo de Ávila, a la diócesis de Cuenca[236]. Al año siguiente quedaba vacante la sede de Toledo que, al parecer, la había prometido el rey a Barrientos, pero esta vez se interpuso don Álvaro de Luna, quien la pidió para Alfonso Carrillo, accediendo a ello el monarca, que hizo la consiguiente suplicación ante el papa, quien la otorgaría[237].

En 1469, a la muerte de Barrientos, se produciría una peculiar situación de choque de intereses por la designación de nuevo prelado, viéndose implicados en el conflicto Enrique IV, el papa Paulo II, el marqués de Villena, el cabildo catedralicio conquense y hasta el propio concejo de la ciudad, lo que viene a ser un claro ejemplo de las fuertes implicaciones políticas y

---

[235]Fernán Pérez de Guzmán, *Crónica de Juan II*, año XXXIX, p. 625. Tomado de José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 370. La *Crónica del Halconero* también ofrece testimonio de ello: <<E luego el rey como lo supo, envio dezir a don Lope de Varrientos, obispo de Avila, que si queria aquel arçobispado, el qual le respondio que ge lo tenia en mucha merced, pero que no avia voluntad de yr en su vejez a Galizia. Entonçe le envio el rey una firme seguridad para el primero arçobispado que vacase, e le envio rogar que tomase por estonçe aquella seguridad con el obispado de Quenca, que adelante el avria memoria de sus grandes servicios. El obispo ge lo tomo en mucha merced, e asy el obispo de Quenca tomc el arçobispado de Santiago, e el de Avila ovo el obispado de Quenca>>. Pedro Carrillo de Huete, *Crónica de Juan II*, p. 456. En cambio la *Crónica de don Álvaro de Luna* atribuye a la intercesión de éste el nombramiento de Barrientos como obispo de Cuenca: <<E porque non es de dexar de explicar aqui algunos de los perlados, asi arçobispos como obispos, que por intercession de este nuestro Maestre fueron fechos... e del avian sus acostamientos e merçedes, fuesen aqui puestos, e son don Juan de Riaza, arçobispo que fue de Toledo, don Lope Barrientos, que fue obispo de Avila e despues de Cuenca...>>. *Crónica de don Álvaro de Luna*, p. 450.

[236]ASVat., *Reg. Lat.* 421, ff. 179v-180v; *Oblig. et Solut.*, vol. 75, f. 8r.

[237]Pedro Carrillo de Huete, *Crónica de Juan II*, p. 470.

sociales que podía llegar a revestir una elección episcopal. Veamos a continuación cómo se desarrollaron los hechos.

El 30 de mayo de 1469 el concejo conquense se dirigió en una carta al rey y al maestre de Santiago para comunicarles la muerte del anciano obispo Barrientos, solicitando además del monarca que entregase la guarda de la ciudad al noble Juan Hurtado de Mendoza[238]. Al día siguiente el concejo escribiría de nuevo al rey para notificarle que habían hablado con el cabildo catedralicio y todos en común habían acordado que sería conveniente para la ciudad que Juan Hurtado de Mendoza fuese nombrado nuevo obispo, pues era un personaje muy fiel al monarca. Por ello el concejo solicitó al rey que suplicase al papa en favor de la provisión de dicho Juan Hurtado como obispo[239].

De este modo, poco tiempo después Enrique IV mandaría una carta al obispo electo de Tuy, su procurador en la Corte de Roma, para que suplicase en su nombre al papa en favor de la provisión del obispado de Cuenca para Juan Hurtado de Mendoza, a la sazón clérigo de órdenes menores. En la carta el monarca califica a éste como un hombre <<a mi muy fiable e acepto>>, lo que ofrece una clara idea de la importancia que para el rey tenía que, en unos momentos de gran conflictividad política en todo el reino, las sedes episcopales fuesen ocupadas por personas favorables a su bando[240]. No obstante, la súplica regia no surtiría el efecto deseado, pues el 6 de octubre de 1469 Paulo II proveía la sede de Cuenca en favor del cardenal Antonio Jacobo de Veneris, hasta entonces obispo de León[241].

Pero para entender el por qué de esta provisión pontificia es necesario tener en cuenta que algunos meses atrás, el 2 de mayo, poco antes de la muerte de Barrientos, se había firmado un acuerdo entre don Juan Pacheco, marqués de Villena, y el todavía obispo de León y legado pontificio, Antonio Jacobo de Veneris,

---

[238] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 42v-43r.

[239] *Ibid.*, ff. 52v-53r.

[240] BN, Ms. 13072, ff. 253r-254r. Documento sin fecha.

[241] ASVat., *Reg. Lat.* 700, ff. 50r-52r; *Obl. et Solut.*, vol. 82, f. 27r, y vol. 83, f. 14v.

para que éste obtuviese de la Santa Sede la Iglesia de Cuenca cuando quedara vacante, pasando la Iglesia de León al administrador de Tuy y recibiendo a cambio don Juan Pacheco, para él, el mando de las fortalezas de Cuenca a favor de personas de su confianza que le hicieran pleito homenaje, y para su hijo el arcedianato de Calahorra y otros beneficios[242]. Fue sin duda por ello por lo que el 6 de octubre Paulo II, lógicamente como respuesta a los deseos del propio cardenal y de don Juan Pacheco, entregó la mitra conquense a Antonio Jacobo de Veneris.

La protesta concejil no se hizo esperar, y el 4 de diciembre el concejo conquense escribió de nuevo al rey en defensa de Juan Hurtado de Mendoza, quien había sido finalmente elegido por el cabildo catedralicio conquense, y en contra de la provisión pontificia del cardenal Veneris, que era un extranjero. En esta carta el concejo expondría también al monarca que no debía permitir que el papa le arrebatase su derecho de presentación de los prelados <<aviendo estado e estando como esta vuestra altesa e los gloriosos reyes vuestros progenitores, de esclaresçida memoria, en posesion de nonbrar e presentar prelados en las eglesias de vuestros regnos, a cuya suplicaçion e presentaçion el santo padre sienpre los acostunbro ynstituyr e promover>>[243]. Poco después, el 19 de diciembre, Enrique IV respondería al concejo conquense manifestando que seguía estando de acuerdo en que Juan Hurtado fuese obispo de Cuenca, por lo que les mandaba que no se aceptase a ningún otro prelado que no fuese el dicho Juan Hurtado[244].

Mientras tanto, el 17 de diciembre del mismo año, Paulo II, enterado de que el cabildo catedralicio, en contra de las disposiciones pontificias, había nombrado por su cuenta como obispo a Juan Hurtado de Mendoza, manifestaría su determinante oposición a este nombramiento, conminando al cabildo y a los alcaides de las fortalezas del obispado a aceptar como prelado al cardenal Antonio Jacobo de Veneris, a quien se le deberían

---

[242] Pilar León Tello, *Inventario del Archivo de los duques de Frías*, II, nº 326.

[243] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 138r-139r.

[244] *Ibid.*, ff. 142v-143r.

entregar todas las rentas de la mesa episcopal[245]. Además, en aquel momento la situación económica de la sede era complicada, pues los bienes de la mesa episcopal habían sido enajenados, por lo que el papa, en una nueva bula del 13 de enero de 1470, tendría que conminar a los retenedores a que los devolvieran, repitiendo de nuevo el mandato el 27 de enero, fecha en que parece que algunos ya comenzaban a reconocer al obispo nombrado por el papa, pues éste facultaba al nuncio para absolver a quienes así actuasen[246].

Desconocemos cómo se desarrollaron los acontecimientos en los meses siguientes, pero lo cierto es que finalmente Antonio Jacobo de Veneris fue aceptado como nuevo obispo, triunfando de este modo el candidato pontificio en contra de los deseos iniciales del monarca castellano, cabildo catedralicio y concejo conquense. Pero además, por otro lado, el resultado final del conflicto también supuso un triunfo para el marqués de Villena, que con su apoyo al cardenal Antonio Jacobo de Veneris había conseguido evitar que la mitra conquense fuese a parar a manos de un candidato afín al concejo de la ciudad y a Enrique IV, como era Juan Hurtado de Mendoza, el cual había sido una de las cabezas de la defensa militar de Cuenca en favor del rey y contra el marqués de Villena durante los alzamientos nobiliarios de 1464-1465, cuestión esta última sobre la que se hablará con detalle más adelante.

Las cosas se resolverían de otra forma, en cambio, en el conflicto que de nuevo se suscitó entre la Santa Sede y la Monarquía al quedar vacante la diócesis de Cuenca tras la muerte del cardenal Veneris, como pronto se verá.

En enero de 1475 tendría lugar la llamada Concordia de Segovia, mediante la cual, a la vez que se establecían algunas normas sobre el funcionamiento institucional del gobierno ejercido por Isabel y Fernando, se tomaba el acuerdo de que, en adelante, la provisión de todo tipo de beneficio eclesiástico, incluídos obispados y arzobispados, sería el resultado de dirigir

---

[245] ASVat., *Reg. Vat.* 533, ff. 209v-214r.

[246] Tarsicio de Azcona, *La elección y reforma...*, pp. 80-8..

una súplica común por los dos monarcas al papa, si bien, para Castilla, sólo la reina podía elegir la persona que se proponía, debiendo poseer ésta un título universitario[247].

Al acaecer en 1479 la muerte del obispo de Cuenca y cardenal de San Clemente, Antonio Jacobo de Veneris, Sixto IV, en una *sesión secreta del Consistorio celebrada* el viernes 13 de agosto del mencionado año, reservó la Iglesia de Cuenca en favor del joven Rafael Riario, cardenal de San Jorge[248]. Pero inmediatamente entraría en escena la oposición regia a esta provisión, puesto que el 7 de septiembre el rey don Fernando se dirigió al cabildo catedralicio conquense manifestándose en contra de esta provisión hecha a favor de un extranjero, y mandando que si alguien les presentase las bulas de dicha provisión en ninguna manera debían obedecer su contenido, sino que, por el contrario, debían prender a quien les llevase dichas bulas y conducirlo a la corte regia. El monarca deja bien claro su deseo de que el papa provea el obispado <<a mi suplicaçion e de la dicha *serenisima reyna mi mui cara e mui amada muger a persona a nos* acepta>>[249]. Por otro lado, en la misma fecha, el concejo de Cuenca también recibiría un mandato regio para que en modo alguno aceptasen como obispo al cardenal de San Jorge, dada su condición de extranjero[250].

Sobre los problemas derivados de esta provisión de la sede conquense, así como sobre la importancia que para los monarcas tenía que el papa proveyese siempre las sedes episcopales a suplicación suya y en favor de personas naturales del reino, nos ha dejado un vivo testimonio la *Crónica de los Reyes Católicos* de Hernando del Pulgar:

"E porque el Padre Santo avia proveido de la yglesia de Cuenca, que era vaca, a un cardenal su sobrino, natural de Genova, la cual provision el Rey

---

[247]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 372.

[248]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 82, f. 119r, y vol. 83, f. 89v.

[249]BN, Ms. 13072, ff. 255v-256v.

[250]Timoteo Iglesias Mantecón, *Índice del Archivo Municipal de Cuenca*, p. 176.

e la Reyna no consyntieron, por ser fecha a persona estrangera e contra la suplicaçion que ellos avian fecho, a la qual provision se opusieron et suplicaron al papa que le plugiese hacer aquella y las otras provisiones de las yglesias que vacasen en sus reynos a personas naturales dellos e por quien ellos suplicasen, e no a otros algunos. Lo qual con justa causa acostumbraron hazer los pontifiçes pasados, consyderando que los reyes sus progenitores, con grandes trabajos e derramamiento de su sangre, e como cristianisimos principes, avian ganado la tierra de los moros, enemigos de nuestra santa Fe catolica, colocando en ella el nombre de nuestro Redentor Jesu Cristo e estirpando el nombre de Mahomad, lo qual les dava derecho de patronadgo en todas las iglesias de sus reynos e señorios para que deviesen ser proveidas, a suplicaçion suya, personas naturales, gratas e fieles a ellos, e no otros algunos, consyderando la poca notiçia que los estrangeros tenian en las cosas de sus reynos"[251]

El motivo de esta tajante oposición regia contra la provisión del cardenal Rafael Riario radicaba en que, además de ser éste un extranjero, los monarcas deseaban que la sede de Cuenca fuese proveída por el papa en favor del dominico Fray Alonso de Burgos, estrecho colaborador y confesor de la reina Isabel, hasta entonces obispo de Córdoba.

Una vez originado el conflicto, una preocupación básica de los Reyes Católicos consistió en controlar los bienes y fortalezas de la mesa episcopal en tanto durase la vacante, para así evitar que pudieran caer en manos de los agentes pontificios o algunos hombres poderosos de la diócesis. De este modo, el 30 de septiembre de 1479 los monarcas mandarían al protonotario y arcediano de Alarcón Gabriel Condulmario, provisor del obispado en tiempo del cardenal Antonio Jacobo de Veneris, que retuviese todos los bienes y lugares pertenecientes a la mesa episcopal mientras durase la vacante, tarea en la que debía ser auxiliado por el cabildo catedralicio y por el corregidor de Cuenca don Juan Osorio[252]. Poco tiempo después, el 21 de octubre, el rey se dirigirá al cabildo mandándole enviar a Toledo ante su presencia

---

[251] Hernando del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos*, I, pp. 452-453.

[252] AGS, *Registro General del Sello*, 30-IX-1479, ff. 140-143.

al maestrescuela de Cuenca con poder para negociar todo lo tocante a los bienes, rentas y fortalezas de la mesa episcopal durante la vacante, poder que dicho maestrescuela recibiría del cabildo el 30 de octubre[253].

La siguiente intervención regia tendrá lugar el 19 de diciembre, y en esta ocasión los monarcas mandarán al cabildo entregar las fortalezas episcopales (Paracuellos, Monteagudo, Pareja, Casasana y Huerta) al mariscal Per Afán de Ribera, quien ahora se encargaría de retenerlas secuestradas hasta que la diócesis fuese proveída a suplicación regia. Al parecer el cabildo se resistía a entregar dichas fortalezas, lo que incluso había motivado que algunos canónigos fueran apresados por mandato de los monarcas y llevados a la corte. Ahora los reyes otorgan al cabildo plenas garantías de que la entrega de las fortalezas no supondrá ningún daño para los bienes de la mesa episcopal ni para la jurisdicción de la Iglesia de Cuenca. Además se determina que el mencionado mariscal y los alcaides que en su nombre tuviesen las fortalezas habrían de jurar guardarlas correctamente para luego entregarlas al nuevo prelado en quien fuese proveída la diócesis[254].

Pocas semanas más tarde, el 15 de enero de 1480, los monarcas conminarán también al protonotario Gabriel Condulmario para que las fortalezas fuesen entregadas al mariscal Per Afán de Ribera, garantizándole que, aunque obedezca el mandato regio contrario a los designios pontificios, sus beneficios eclesiásticos no correrán ningún peligro[255]. Además, cinco días después los reyes mandarán a las autoridades laicas de Cuenca y Huete que ayuden a Per Afán de Ribera para que le sean entregadas dichas fortalezas[256], lo que puede dar una clara idea de la resistencia

---

[253]ACC, original, s.s.

[254]BN, Ms. 13071, ff. 15v-20v.

[255]AGS, *Registro General del Sello*, 15-I-1480, f. 109 y f. 156. Sobre el linaje de los Ribera puede verse: Miguel Angel Ladero Quesada, <<De Per Afán a Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-1514)>>, *En la España Medieval*, 4 (1984), pp. 447-497; sobre el cargo de mariscal ejercido por la rama toledana de esta familia ver pp. 456 y ss.

[256]AGS, *Registro General del Sello*, 20-I-1480, f. 115.

que mostraban el cabildo catedralicio y el protonotario Condulmario a la hora de obedecer las órdenes regias. Sin duda ello explica que también el 20 de enero de 1480 los Reyes Católicos tuvieran que dirigirse al regidor conquense Alfonso de Alcalá para que interviniese en la administración de las rentas de la sede vacante junto con el protonotario y cabildo catedralicio[257]. En definitiva, vemos cómo los monarcas deseaban ejercer a toda costa el derecho que tenían para poder controlar los bienes episcopales en época de sede vacante, lo que motivaría una resistencia inicial por parte del cabildo catedralicio, dado que éste también defendía sus prerrogativas a la hora de administrar dichos bienes episcopales durante la vacante.

También en relación con la misma temática estarán algunas de las sucesivas intervenciones de los monarcas, que ahora se dirigirán directamente a los alcaides de las fortalezas de la Iglesia conquense. Así, por ejemplo, el 26 de enero de 1480 los Reyes Católicos mandarán al alcaide de Paracuellos, Álvaro de Valenzuela, que entregue dicha fortaleza al mariscal Per Afán de Ribera en tanto el papa provea el obispado en una persona adepta a la Corona[258]. Algún tiempo después, el 20 de febrero, tendrá lugar otra intervención regia mandando al mariscal Per Afán de Ribera que obligase a todos los alcaides de las fortalezas episcopales a entregárselas; si no lo hicieran así, habrían de ser tomadas por la fuerza[259]. Por otro lado, en la misma fecha, los monarcas también se dirigieron directamente a los alcaides de las fortalezas para que realizaran dicha entrega[260], a la vez que ordenaban embargar todas las rentas y beneficios del protonotario Gabriel Condulmario, quien trataba de retener bajo su control las fortalezas episcopales haciendo caso omiso de los mandatos regios[261]. No obstante, el protonotario acabaría

---

[257]AGS, *Registro General del Sello*, 20-I-1480, f. 146.

[258]AGS, *Registro General del Sello*, 26-I-1480, f. 83.

[259]*Ibid.*, 20-II-1480, f. 188.

[260]*Ibid.*, f. 265.

[261]*Ibid.*, f. 189.

desistiendo de su empeño, por lo que el 28 de abril los Reyes Católicos mandaron desembargar los bienes que le tenían secuestrados[262].

Entretanto, el 8 de marzo de 1480 los Reyes Católicos se habían dirigido de nuevo al cabildo catedralicio agradeciéndole su conformidad en no aceptar al cardenal de San Jorge como obispo, y recordando su obligación de obedecer siempre los mandatos regios[263].

La siguiente intervención regia tendrá lugar el 20 de mayo, y en esta ocasión tuvo como objeto ordenar a Per Afán de Ribera, quien ya tenía en su poder las fortalezas episcopales, que se las entregase a Sancho del Campo, criado de los monarcas[264]. Pocos días después, el 25 de mayo, los reyes informaron al cabildo catedralicio conquense de que las fortalezas iban a pasar a estar bajo la tenencia del mencionado Sancho del Campo, a quien debían aceptar sin oponerle resistencia[265].

Pero no debemos olvidar que a los monarcas también les interesaba ganarse el favor de todo el clero de la diócesis, para así evitar que éste pudiera decantarse del lado del papa y del cardenal Rafael Riario. De este modo adquiere pleno sentido el amparo regio otorgado el 20 de junio, también de 1480, por los Reyes Católicos en favor de los canónigos y todos los otros clérigos del obispado contra cualquier persona que pretendiera ofenderles a causa de su lealtad a la Corona durante los disturbios motivados por la sede vacante[266].

No obstante, ello no impediría que, llegado el caso, los reyes tomasen también severas medidas en contra de algunos eclesiásticos que no obedecían sus mandatos. Tal fue el caso del arcediano de Cuenca Gómez Ballo y el del chantre Pedro de Villalobos, que según los monarcas <<fisieron e cometieron

---

[262] *Ibid.*, 28-IV-1480, f. 146.

[263] BN, Ms. 13072, ff. 256v-258r.

[264] AGS, *Registro General del Sello*, 20-V-1480, f. 207.

[265] BN, Ms. 13072, f. 259r-v.

[266] AGS, *Registro General del Sello*, 20-VI-1480, f. 225.

algunas cosas en deserviçio nuestro e contra nuestra real prehemynençia e en menospreçio de nuestras cartas e mandamientos>>, siendo castigados por ello con la pérdida de naturaleza del reino, lo que a su vez motivaría que el 30 de septiembre de 1480 los Reyes Católicos mandasen al regidor conquense Alfonso de Alcalá secuestrar las rentas de los beneficios pertenecientes a los mencionados Gómez Ballo y Pedro de Villalobos, que se destinarían a la armada organizada contra el turco[267].

Mientras todo esto ocurría en la propia diócesis conquense, ya se habían iniciado las negociaciones de los monarcas con Sixto IV sobre la provisión de la sede. El conflicto, iniciado en 1479, habría de durar casi tres años, tiempo durante el cual hubo diversos acuerdos diplomáticos y envío de embajadas a Roma. La solución final llegó en 1482, año en que el enviado pontificio Domingo Centurión entró en contacto con los monarcas, probablemente en Córdoba, donde el rey Fernando llevó toda la dirección de los negocios, firmándose el 3 de junio de dicho año un pequeño concordato a través del cual, entre otras resoluciones, se accedió a la combinación de iglesias presentada por los reyes, concediéndose la Iglesia de Cuenca a Alonso de Burgos, la de Salamanca al cardenal de San Jorge, la de Osma al cardenal de España, y la de Córdoba al obispo de Osma. Domingo Centurión confirmó y ratificó en nombre del papa todas las resoluciones del acuerdo, poniéndose de este modo término a un conflicto que se había prolongado durante casi tres años[268]. Finalmente, el 15 de julio de 1482 Sixto IV expediría las bulas oficiales de nombramiento de Fray Alonso de Burgos como obispo de Cuenca, a través de las cuales también se renunciaba a la anterior provisión realizada en favor del cardenal de San Jorge[269].

El obispo Alonso de Burgos gobernaría la sede conquense durante tres años, hasta que el 26 de agosto de 1485 fuese

---

[267] AGS, *Registro General del Sello*, 30-IX-1480, f. 158.

[268] Un análisis detallado sobre este conflicto entre los monarcas y el papa por la provisión de la sede de Cuenca y otros asuntos puede verse en: Tarsicio de Azcona, *La elección y reforma...*, pp. 109-136. En cuanto al acuerdo firmado en Córdoba el 3 de junio de 1482 entre los Reyes Católicos y Domingo Centurión, su texto lo publicó Justo Fernández Alonso, *Legaciones y nunciaturas...*, I, doc. nº 166.

[269] ASVat., *Reg. Lat.* 821, ff. 273r-274v.

trasladado por Inocencio VIII a Palencia[270], a la vez que en la misma fecha el papa nombraba como nuevo obispo de Cuenca a Fray Alonso de Fonseca, hasta entonces titular de la sede abulense[271]. Sabemos que el nombramiento fue realizado por el papa en atención a una súplica previa de los monarcas[272], por lo que en esta ocasión la provisión de la sede conquense no originaría ningún tipo de conflicto, y de hecho el 31 de marzo de 1486 los propios reyes mandarían que se recibiese al nuevo prelado y se le diese posesión de sus rentas[273].

Fray Alonso de Fonseca fue obispo de Cuenca hasta 1493, aunque durante todo este tiempo practicaría un absentismo casi total. El 24 de mayo de dicho año de 1493 Alejandro VI le trasladaría a la diócesis de Osma, entregando la Iglesia de Cuenca a Rafael Riario, cardenal de San Jorge[274]. Llama la atención que en esta ocasión fuese nombrado obispo de Cuenca el cardenal Rafael Riario, cuando años atrás los Reyes Católicos se habían opuesto tajantemente a su nombramiento para esta sede. Pero ahora los monarcas habían llegado a un acuerdo previo con el papa, accediendo finalmente a suplicar en favor del cardenal Riario. En definitiva, ello viene a ser un claro ejemplo de cómo una elección episcopal, en última instancia, podía depender sobre todo de la coyuntura específica que atravesaran en un momento dado las relaciones de la Monarquía con la Santa Sede, tal como sucedió en este caso.

Poco después de ser proveída la Iglesia de Cuenca en favor del cardenal de San Jorge, los monarcas reclamarían el derecho a controlar en nombre de éste las fortalezas de la diócesis. Así, el 13 de julio de 1493 mandarán a Alonso de Fonseca, ya obispo de Osma, que entregue la fortaleza de Pareja a Francisco de

---

[270] ASVat., *Reg. Lat.* 839, f. 259r.

[271] ASVat., *Reg. Lat.* 854, ff. 5r-6r; *Obl. et Solut.*, vol. 83, f. 125r.

[272] Hernando del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos*, II, p. 140.

[273] BN, Ms. 13072, f. 202r.

[274] ASVat., *Reg. Lat.* 933, ff. 28r-30v; *Arch. Concist.-Acta Camerale*, vol. I, f. 56r.

Gudiel, quien la gobernaría en nombre de la Corona[275]. Días más tarde, el 22 de julio, los monarcas se dirigirán de nuevo a Alonso de Fonseca, en esta ocasión mandándole entregar las fortalezas de Huerta y Monteagudo al maestresala Antonio de Fonseca, que sería el encargado de su gobierno[276].

Dado que el cardenal Riario nunca se personaría en la Iglesia conquense, ésta sería gobernada en su nombre desde un primer momento por el provisor Pedro de Costa, quien habría de ejercer tal cargo durante muchos años. De este modo, el 31 de julio de 1493 los Reyes Católicos mandarían al cabildo catedralicio de Cuenca que aceptasen al nuevo obispo y obedeciesen en todo al provisor que iba a actuar en su nombre[277], mandato detrás del cual es fácil vislumbrar la resistencia del cabildo a aceptar a un prelado extranjero así como a su provisor, lo cual pronto se pondría de manifiesto a través de airadas protestas contra las primeras actuaciones de don Pedro de Costa.

En definitiva, podemos concluir que durante la época Trastámara, y salvo alguna ocasión en que se impusieron los criterios pontificios, la Monarquía ejerció un control casi total sobre las elecciones episcopales de la Iglesia conquense mediante el sistema de súplica ante el papa en favor de un candidato afín a la Corona, con lo cual se acabaría consolidando la tendencia al control regio de los cargos episcopales que se había iniciado desde los primeros tiempos de existencia de la diócesis.

2-El sistema beneficial

A) *Las suplicaciones reales de beneficios*

Una dimensión esencial de las aspiraciones de subordinación del poder eclesiástico a los intereses de la preeminencia regia fue la designación de clérigos para ocupar los beneficios

---

[275] AGS, *Registro General del Sello*, 13-VII-1493, f. 65.

[276] *Ibid.*, 22-VII-1493, f. 68.

[277] ACC, AC-1493, f. 190r.

eclesiásticos, lo que suponía, en definitiva, la intromisión de la soberanía regia en el funcionamiento del complejo sistema beneficial. Existían, desde luego, precedentes de estas aspiraciones de la Monarquía, pero será sobre todo durante la época Trastámara cuando el control regio sobre los beneficios eclesiásticos adquiera un mayor relieve.

Las aspiraciones esenciales de los monarcas en esta materia quedaban enunciadas en dos objetivos: que la designación de las personas para beneficios eclesiásticos dentro del reino se produjera exclusivamente entre los naturales del mismo, y que, en un nivel más elevado de pretensiones, toda designación quedase sometida a la previa presentación del clérigo por el rey. Asegurando tales objetivos, parecían obtenerse garantías muy razonables del sometimiento del designado a la preeminencia regia. Será sobre todo el primero de estos fines el que sea objeto de más intensa reivindicación durante la época Trastámara, dejándose el siguiente, en lo que se refiere a su plena definición jurídica, para una fase más tardía, aunque produciéndose aproximaciones importantes también durante esta época[278].

Desde luego, la adjudicación de beneficios eclesiásticos cursada por orden de los monarcas a través de sus procuradores ante el Pontificado constituirá una típica manifestación del intervencionismo regio en la configuración personal de la Iglesia del reino, puesto que, por esta vía, se garantizaba la presencia de los que se podrían denominar como <<clérigos del rey>>, que se encontraban distribuídos por toda la geografía del reino y a lo largo de toda la jerarquía eclesiástica[279].

Bien es verdad que la suplicación de beneficios eclesiásticos ante el papa no se limitó a la iniciativa regia, sino que también algunos nobles la practicaron en favor de sus protegidos, del mismo modo que también la utilizaron miembros de la alta jerarquía eclesiástica, cuestión que más adelante tendremos ocasión de ejemplificar para el caso conquense. Sin embargo, de forma general para todo el reino de Castilla, ni una ni otra

---

[278] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis*..., pp. 344-345.

[279] *Ibid.*, p. 356.

manifestación admiten comparación por la diferencia de volumen del número de súplicas y por la frecuencia de las mismas con lo que se puede observar en el caso regio.

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, debe señalarse en primer lugar que es para la época del Cisma cuando más datos tenemos sobre súplicas reales ante el papa para la concesión de beneficios, siendo también en esta época cuando más abunda la información para el resto de las diócesis, pues durante estos años el sistema habitual de súplicas se realizaba mediante la presentación ante el papa de rótulos colectivos de mayor o menor extensión, lo que facilita enormemente la localización de estas súplicas, que se encuentran recogidas en los *Registros de Súplicas* del Archivo Secreto Vaticano. En cambio, con posterioridad al Cisma dejaría de ser frecuente la presentación de rótulos conteniendo un conjunto de súplicas, por lo que éstas se realizarán más bien de forma individualizada, siendo éste un factor que dificulta extraordinariamente su localización.

En función de todo ello, a continuación se indicarán un importante número de súplicas regias de beneficios en la diócesis de Cuenca, la mayoría de las cuales se corresponden con la época del Cisma. De este modo, aunque la relación que se ofrezca no constituya la totalidad de súplicas regias que hubo durante el periodo Trastámara en lo que concierne a la Iglesia conquense, sí que servirá como ejemplo de la extraordinaria actividad que mostraron los monarcas en este terreno.

Durante el reinado de Juan I, y como consecuencia de las circunstancias del Cisma, ya se daría un importante impulso a las iniciativas regias en el campo de las súplicas de beneficios. Así, en un largo rótulo de súplicas presentado el 26 de mayo de 1381 por la reina de Castilla doña Leonor al papa Clemente VII, entre los muchos beneficios que se piden figuran algunos referidos a Cuenca: para Juan Fernández del Castillo, beneficiado en la iglesia de Santa María de Castrojeriz, diócesis de Burgos, se solicita una ración íntegra en la iglesia de Cuenca; para Francisco Rodríguez de Villalpardo, clérigo conquense, otra ración íntegra; para Juan Pedro, clérigo de la diócesis de Albarracín, una canonjía con expectativa de prebenda y prestimo-

nios; para Diego Martínez de Altaracio, clérigo toledano, otra canonjía con expectativa de prebenda y prestimonios, a pesar de que ya poseía beneficios en Toledo; para Fernando Gómez de Pastrana, clérigo toledano, otra canonjía con expectativa de prebenda y prestimonios[280].

Por otro lado, en un rótulo que contiene un total de once súplicas presentado el 11 de diciembre de 1381 por el clérigo conquense Juan López, familiar del obispo de Zamora y embajador del rey de Castilla ante el papa, se solicita a Clemente VII la concesión de los siguientes beneficios en la Iglesia de Cuenca: para Juan López, clérigo conquense, una canonjía con expectativa de prebenda y dignidad, prestimonios y porciones prestimoniales; para su hermano Pedro López, clérigo conquense y lector de Gramática en la ciudad de Cuenca, similar petición a la anterior; para Francisco Martínez, clérigo conquense, una ración o prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales; para Juan López, clérigo conquense, un beneficio con cura o sin ella, o una vicaría o arciprestazgo; para Fernando García, clérigo conquense, un beneficio sin cura, vicaría o arciprestazgo; para Pascual Sánchez, clérigo conquense, un beneficio con cura o sin ella; para Pedro Martínez, clérigo conquense, un beneficio con cura o sin ella; para Juan Martínez, clérigo conquense, un beneficio sin cura; para Juan Sánchez, clérigo conquense, otro beneficio sin cura[281].

Para el reinado de Enrique III aún son más las noticias que tenemos sobre suplicaciones regias de beneficios[282]. Comenzando por un rótulo de 41 súplicas presentado en 1391 por este monarca a Clemente VII para la provisión de los beneficios vacantes tras la muerte del cardenal Gutierre Gómez, algunas de estas súplicas están referidas a Cuenca: para Lope de Mendoza, joven de diecisiete años estudiante de Derecho Canónico en Salamanca, hijo

---

[280] ASVat., *Reg. Suppl.* 63, ff. 50r-53r.

[281] ASVat., *Reg. Suppl.* 62, ff. 19v-20r.

[282] Sobre las suplicaciones regias de beneficios eclesiásticos durante el reinado de este monarca puede verse: José Manuel Nieto Soria, «Enrique III de Castilla y la promoción eclesiástica del clero: las iniciativas políticas y las súplicas beneficiales (1390-1406)», *Archivum Historiae Pontificiae*, 33 (1995).

legítimo del noble Juan Hurtado de Mendoza, se suplica la concesión del arcedianato de Huete, con canonjía, prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, por un valor total que no exceda los 800 florines de oro; paradójicamente, de nuevo se suplica la concesión del arcedianato de Huete, en esta ocasión para Pedro de Luna, joven de dieciocho años estudiante de Derecho Canónico en Montepesulano, nepote del cardenal Pedro de Luna e hijo legítimo del noble Juan Martínez de Luna. Quizá esta doble súplica del mismo beneficio se deba a un error del documento, o bien a que la concesión de dicho beneficio en favor de uno u otro candidato se deje a la libre elección del pontífice[283].

La siguiente noticia nos la proporciona un documento fechado el 25 de octubre de 1394, y a través del cual Benedicto XIII, en atención a una súplica previa del rey Enrique III, concedió una canonjía en Cuenca a Juan Pérez de Paredes de Nava, estudiante de Derecho Canónico en Valladolid[284].

También sabemos de varias súplicas presentadas a Benedicto XIII por el infante don Fernando de Castilla. Por ejemplo, el 13 de octubre de 1395 éste suplicará al papa que conceda a Alfonso Fernández de Cascales, Licenciado en Leyes y clérigo de la diócesis de Calahorra, una canonjía con expectativa de prebenda o dignidad en la Iglesia de Cuenca[285]. Además, dos días después, el infante volverá a presentar un rótulo con bastantes súplicas, a través de alguna de las cuales se solicitan beneficios en la Iglesia de Cuenca: para Alfonso Ruiz de Peñalver, clérigo toledano estudiante de Derecho Civil, una canonjía y prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales; para Pedro Sánchez, clérigo de Alarcón, una ración íntegra o media con prestimonios y porciones prestimoniales[286].

Pero sin duda la información más rica y extensa es la que nos proporciona un largísimo rótulo fechado el 17 de octubre de

---

[283] ASVat., *Reg. Aven.* 54, ff. 489-492 / Beltrán, *Bulario*, I, nº 211.

[284] Beltrán, *Bulario*, III, nº 1425.

[285] ASVat., *Reg. Suppl.* 95, f. 222r.

[286] *Ibid.*, ff. 225v-226r.

1403 mediante el cual Enrique III solicitó a Benedicto XIII la concesión de un total de 589 beneficios, que finalmente serían otorgados por el papa[287]. Un número importante de las súplicas que contiene este rótulo están referidas a la concesión de beneficios en la Iglesia de Cuenca, siendo en concreto las siguientes:

-Para Cipriano Sánchez, cantor de la capilla real, una canonjía con expectativa de prebenda y porciones prestimoniales, a pesar de que ya poseía una ración íntegra y perpetua en Toledo y otros beneficios[288].

-Para Fernando Alfonso de Guadalajara, clérigo conquense e hijo del maestro Alfonso, médico del rey, una canonjía con expectativa de prebenda y prestimonios hasta la suma de 60 libras tornesas[289].

-Para Juan López de La Parrilla, clérigo conquense e hijo de Miguel Sánchez, comensal del rey, una canonjía con expectativa de prebenda y prestimonios.

-Para Luis Sánchez de La Parrilla, clérigo conquense y también hijo del comensal arriba citado, una ración íntegra o media.

-Para Juan López, clérigo conquense e hijo del comensal regio Juan López, una ración íntegra o media[290].

-Para Gonzalo Jiménez, racionero perpetuo de Burgos y en otro tiempo secretario del difunto obispo de Cuenca don Álvaro Martínez, un arciprestazgo o vicaría perpetua.

-Para Martín Sánchez de Pareja, clérigo conquense, nepote del capellán y comensal regio Juan Sánchez, una ración íntegra[291].

---

[287] ASVat., *Reg. Suppl.* 100, ff. 216r-234v.

[288] *Ibid.*, f. 216v.

[289] *Ibid.*, f. 217v.

[290] *Ibid.*, f. 218r.

[291] *Ibid.*, f. 220r.

-Para Juan Martínez Serrano, mediorracionero de Cuenca, una canonjía con expectativa de prebenda, debiendo dimitir previamente de la mediarración que posee así como del beneficio curado que tiene en la parroquia de San Nicolás de Cuenca.

-Para Miguel Sánchez, canónigo extravagante en Cuenca, una ración entera y perpetua con prestimonios, cuya colación correrá a cargo del obispo y cabildo catedralicio, debiendo dimitir de su canonjía extravagante así como del beneficio curado que tiene en la parroquia de Fuenteanaya, en la diócesis conquense.

-Para Fernando Martínez de Ribagorda, Fernando Sánchez de Huete, Sancho Martínez del Castillo y Alfonso Martínez del Castillo, todos ellos clérigos conquenses, una ración íntegra o media a cada uno, a colación del obispo y cabildo catedralicio.

-Para Lope Sánchez de Torralba, canónigo extravagante de Cuenca, una ración íntegra y perpetua, debiendo dimitir de su canonjía extravagante.

-Para Alfonso Sánchez de Torralba, canónigo extravagante en Cuenca y regente de la escuela de Gramática de esta ciudad, una ración íntegra o media, o bien un arciprestazgo o vicaría perpetua, a colación del obispo y cabildo catedralicio, debiendo dimitir de la canonjía extravagante así como de una porción prestimonial que posee en la iglesia de La Trinidad de Uclés[292].

-Para Fernando Sánchez, clérigo conquense, una ración íntegra o media con prestimonios, o bien un arciprestazgo o vicaría perpetua[293].

-Para Álvaro Pérez, presbítero conquense, similar petición a la anterior.

-Para Gil Fernández de Requena, clérigo de la diócesis de Cuenca, una ración íntegra o media con prestimonios[294].

-Para Rodrigo Juan, clérigo de Segovia, otra ración íntegra o media[295].

---

[292] *Ibid.*, f. 221v.

[293] *Ibid.*, f. 223v.

[294] *Ibid.*, f. 224r.

[295] *Ibid.*, f. 225r.

-Para Gil Sánchez, clérigo conquense y bachiller en Teología, una canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, a pesar de que ya posee un beneficio sin cura en la iglesia de San Nicolás de Medina, en Huete.

-Para Fernando Martínez de Montalbo, clérigo conquense, otra canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales[296].

-Para Juan Sánchez de Ortega, clérigo conquense, una ración íntegra.

-Para Alfonso Fernández de Fuentes, mediorracionero conquense, otra ración íntegra.

-Para Sancho López, canónigo extravagante de Cuenca, una ración íntegra o media, debiendo dimitir de su canonjía extravagante y de la capellanía perpetua que tiene en la capilla de Santa Ágata de la catedral conquense.

-Para Pedro Martínez de Utiel, clérigo conquense, una ración íntegra o media.

-Para Juan Fernández de Olmeda, canónigo extravagante de Cuenca, otra ración íntegra o media, debiendo dimitir de la canonjía extravagante.

-Para Martín García de Huete, canónigo extravagante de Cuenca, similar petición a la anterior.

-Para Alfonso Fernández de Cuenca, canónigo extravagante en Cuenca, similar petición.

-Para Aparicio Martínez, beneficiado perpetuo en la parroquia de San Pedro de Ocaña, diócesis de Toledo, una ración íntegra[297].

-Para Diego Fernández de Cigales, clérigo palentino, una ración íntegra y perpetua con prestimonios y porciones prestimoniales hasta la suma de 30 libras tornesas.

-Para Juan López del Castillo, clérigo de la diócesis de Cuenca, una canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales hasta la suma de 40 libras tornesas.

---

[296] *Ibid.*, f. 226v.

[297] *Ibid.*, f. 227r-v.

-Para Alfonso Fernández Gallardo, presbítero conquense, un beneficio con cura o sin ella en la Iglesia o diócesis de Cuenca, a colación del obispo y cabildo catedralicio.

-Para Fernando Alfonso de Bobadilla, presbítero y capellán perpetuo en la parroquia de San Juan de la villa de Castillo de Garcimuñoz, una ración íntegra o media, o bien un arciprestazgo o vicaría perpetua.

-Para Martín Sánchez, presbítero y beneficiado perpetuo en la parroquia de San Miguel de Valdemoro de Yuso, similar petición a la anterior.

-Para Diego Martínez, presbítero y beneficiado perpetuo en la parroquia de San Esteban de Huete, una ración íntegra o bien un arciprestazgo o vicaría perpetua, a colación del obispo y cabildo catedralicio conquense.

-Para Juan García, presbítero y beneficiado perpetuo en la parroquia de La Trinidad de Moncalvillo, un beneficio con cura o sin ella en la diócesis de Cuenca, a colación del obispo y cabildo catedralicio[298].

-Para Fernando López del Castillo, clérigo conquense, un beneficio con cura o sin ella en la diócesis de Cuenca, debiendo dimitir de la capellanía perpetua que tiene en la parroquia de San Juan de la villa de Castillo de Garcimuñoz.

-Para Gil Sánchez de Huete, presbítero conquense, otro beneficio con cura o sin ella.

-Para Alfonso Fernández del Castillo, presbítero conquense, similar petición a la anterior, debiendo dimitir de la capellanía perpetua que tiene en la parroquia de San Juan de la villa de Castillo de Garcimuñoz.

-Para Fernando López de Alarcón, presbítero y capellán perpetuo en la parroquia de San Juan de Castillo de Garcimuñoz, un beneficio con cura o sin ella, debiendo dimitir de dicha capellanía perpetua[299].

---

[298] *Ibid.*, f. 228r-v.

[299] *Ibid.*, f. 229v.

-Para Alfonso Sánchez del Castillo, clérigo conquense, una ración íntegra[300].

-Para Álvaro Martínez de Jábaga, clérigo conquense, una ración íntegra o media[301].

De la lectura de la anterior relación de súplicas salta a la vista que la inmensa mayoría de los candidatos son clérigos conquenses. En cuanto a los beneficios que se solicitan, predominan las raciones o mediasrraciones, y en menor medida las canonjías, arciprestazgos, vicarías o simples beneficios parroquiales con cura o *sine cura*.

A partir de ahora las noticias que se han podido encontrar sobre nuevas súplicas regias ante el papa son ya mucho más esporádicas. No obstante, algunos ejemplos sí que se pueden señalar. Así, la súplica realizada el 10 de junio de 1414 por la reina Catalina de Lancaster a Benedicto XIII para que concediese una canonjía en Cuenca y el arcedianato de Alarcón a su pariente Pedro de Castilla, escolástico de Orense y Zamora[302]. Para el reinado de Juan II, sabemos que en 1427 este monarca suplicaría la concesión del deanazgo de Cuenca a Pedro de Bocanegra[303]. Por último, situándonos ahora en el reinado de Enrique IV, el 30 de enero de 1456, en atención a una súplica previa del monarca castellano, al ser promovido a la mitra de Ávila el deán de Sevilla, los beneficios de éste fueron conferidos a varios clérigos vinculados al rey, entre ellos Alfonso Iranzo, clérigo conquense y capellán real, a quien se le concedió un beneficio por valor de 100 libras[304]; y el 16 de abril de 1457 Bernardo de Cuenca, clérigo conquense, obtuvo por súplica regia varios prestimonios por valor de 20 libras[305].

---

[300] Ibid., f. 230v.

[301] *Ibid.*, f. 233v.

[302] Beltrán, *Bulario*, II, nº 490.

[303] Beltrán, *Cartulario*, I, p. 357.

[304] José Rius Serra, *Regesto Ibérico de Calixto III*, nº 1480.

[305] *Ibid.*, nº 2991.

B) *Los capellanes reales*[306]

La Capilla Real tuvo en Castilla, sobre todo durante el siglo XV, una importante significación en cuanto que institución eclesiástica especial directamente vinculada, por funciones y por nombramientos, al rey, formando parte de los servicios cortesanos que rodeaban al monarca[307]. Independientemente de lo que era su función básica, es decir, la realización de los servicios litúrgicos cotidianos de la familia real y de la Corte y de aquéllos otros que, en razón de los testamentos reales o de otro tipo de mandas, establecían los monarcas para las distintas capillas reales existentes en el reino, en algunas de las cuales se hallaban los sepulcros de distintos miembros de la familia regia castellana, la Capilla Real adquiere especial significación por el protagonismo que desempeñó tanto en lo político como en lo eclesiástico.

Así, en lo político los capellanes reales formaron parte destacada de buen número de las actividades ceremomiales de carácter propagandístico y legitimador que tenían lugar en torno a la Monarquía, a la vez que fue gracias a su condición de capellanes reales como muchos eclesiásticos consiguieron impulsar su carrera política. En lo eclesiástico, debe destacarse ante todo el decidido empeño de los monarcas por la promoción beneficial en favor de sus capellanes, tanto en lo relativo a beneficios normales como en lo que respecta a los pertenecientes al patronato real[308].

Centrándonos ya en la Iglesia y obispado de Cuenca, contamos con bastantes ejemplos de capellanes reales ocupando diversos tipos de beneficios eclesiásticos. Antes de nada hay que recordar, tal como ya se señaló en su lugar, que en la villa de Alcocer, situada en la diócesis de Cuenca, había tres centros

---

[306]Sobre la organización de la Capilla Real castellana puede verse: José Manuel Nieto Soria, <<La Capilla Real castellano-leonesa en el siglo XV: constituciones, nombramientos y quitaciones>>, *Archivos Leoneses*, 85-86 (1989), pp. 7-54.

[307]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis*..., p. 375.

[308]*Ibid.*, pp. 377-379.

eclesiásticos muy vinculados al patronato real: la parroquia de Santa María y los monasterios de Santa Clara y San Miguel del Monte. En ellos Enrique III había fundado siete capellanías perpetuas, tres en la parroquia de Santa María, otras tres en el monasterio de Santa Clara -donde estaba el supulcro de su fundadora, doña Mayor Guillén, favorita de Alfonso X-, y la restante en el de San Miguel del Monte, siendo nombrado inicialmente como patrón de las mismas Sancho Fernández, contador de Enrique III. En adelante dichas capellanías serían de patronato regio, sustentándose con las rentas reales de las ollerías de Sevilla[309].

Ello es lo que explica que en la documentación encontremos algunas alusiones a la presencia de capellanes reales en Alcocer. Así, por ejemplo, sabemos de un tal Gil Martínez, mayordomo del obispo conquense don Diego de Anaya, que en 1415 era capellán del rey en la iglesia de Santa María de Alcocer[310], siéndolo todavía en abril de 1419[311]. Otra noticia nos llega ya hacia fines de siglo, el 12 de junio de 1489, fecha en que, a petición de doña Juana de Mendoza, dueña de la reina, un capellán real de nombre Luis de Torres fue presentado para una capellanía en Santa María de Alcocer[312].

Pero independientemente de esta presencia de capellanes reales en Alcocer, durante esta época, y sobre todo en el reinado de los Reyes Católicos, otros capellanes reales obtendrían también beneficios diversos en la Iglesia de Cuenca gracias al favor de los monarcas.

Una primera prueba de ello nos la proporciona un documento regio fechado el 12 de julio de 1430, mediante el cual Juan II comunicó al cabildo catedralicio de Cuenca que el papa le había otorgado el privilegio de que 20 capellanes reales elegidos por el monarca, mientras estuviesen al servicio de éste, pudiesen

---

[309] AGS, *Registro General del Sello*, 15-V-1492, f. 391.

[310] ACC, AC-1415, f. 78r.

[311] AHN, *Clero*, carp. 568, nº 13.

[312] AGS, *Registro General del Sello*, 12-VI-1489, f. 14.

recibir todos los frutos y rentas de sus beneficios como si residieran en ellos. Uno de dichos capellanes era el bachiller Alfonso Sánchez de Valladolid, arcediano de Huete y abad de Jerez, por lo que el rey notificó al cabildo conquense que dicho Alfonso Sánchez, joven de 25 años, estaba constantemente a su servicio en la Capilla Real, por lo que se le debían entregar puntualmente todos los frutos del arcedianato de Huete que poseía en Cuenca, a lo cual parecer ser que se resistía el cabildo[313].

Durante el reinado de Enrique IV también tenemos algún caso de capellanes regios ostentando beneficios en la Iglesia de Cuenca gracias al favor del monarca. Así, por ejemplo, el 6 de octubre de 1463 Pío II, en atención a una súplica previa del rey de Castilla, hizo provisión de una canonjía y la maestrescolía que se habían quedado vacantes en Cuenca a favor de Gómez de Mata, capellán de la Capilla Real[314]. Hay que destacar el hecho de que en el documento pontificio se insiste en la plena validez que ha de tener la provisión realizada por el papa, que en modo alguno podrá ser anulada por cualquier estatuto particular de la Iglesia de Cuenca, de lo cual se deduce la resistencia que muchas veces oponía el cabildo catedralicio a la hora de aceptar la provisión de beneficios en favor de personajes probablemente absentistas, lo que iba en contra de los intereses económicos del cabildo. En la misma fecha Pío II también se dirigiría al obispo de Oviedo, al arcediano de Medinaceli y al canónigo toledano Fernando Pérez de Ayala, comisionándoles para que se encargaran de que se otorgase a Gómez de Mata o su procurador la corporal posesión de dichos beneficios en Cuenca, así como asiento en el coro y sala capitular de la catedral[315].

Pero será a lo largo del reinado de los Reyes Católicos cuando encontremos más casos de capellanes reales ostentando beneficios en Cuenca. Por ejemplo, el 23 de diciembre de 1477 fue nombrado consejero y capellán real Alfonso García de San Felices, que ya entonces era maestrescuela de Calahorra y canónigo de

---

[313] BN, Ms. 13072, ff. 245v-246v.

[314] ASVat., *Reg. Vat.* 493, ff. 210r-211v.

[315] *Ibid.*, ff. 211v-212r.

Cuenca[316]. Diez años más tarde, el 13 de diciembre de 1487, los monarcas se dirigirán al cabildo catedralicio de Cuenca comunicando que Inocencio VIII les había concedido que pudiesen nombrar a la primera dignidad que vacase en la Iglesia de Cuenca, y que dicho nombramiento había recaído en Diego de Ribera, criado y capellán real, por lo que los reyes mandan al cabildo que cuando quede vacante una dignidad den posesión de ella al mencionado Diego de Ribera[317].

En los años siguientes fueron frecuentes los nuevos otorgamientos de beneficios en favor de capellanes reales por parte de los Reyes Católicos. El 10 de agosto de 1488 éstos se dirigieron al corregidor de Cuenca y Huete para que prestase ayuda Miguel de Salcedo, capellán y cantor real, a quien se le habían concedido ciertos préstamos en las iglesias de Barajas y Villar de Águila con sus anejos, en la diócesis de Cuenca[318]. Parece ser que Miguel de Salcedo se había quejado a los monarcas de que Juan de Tapia, contador del obispo de Cuenca, y otras personas, se negaban a entregarle los frutos y rentas de dichos préstamos, lo que haría necesaria otra nueva intervención de los Reyes Católicos que tuvo lugar el 17 de marzo de 1489, ordenando a Juan de Tapia y a varias personas más que entregasen a Miguel de Salcedo todas las rentas de sus beneficios en Cuenca[319].

Mientras tanto, el 30 de octubre de 1488, los monarcas habían requerido a Fray Alonso de Burgos, anterior obispo de Cuenca y ahora titular de la mitra palentina, para que, en virtud de un privilegio de Inocencio VIII en favor de los capellanes y cantores de la Capilla Real, y extensivo también a los inquisidores y ministros de la Inquisición, se encargase de reservar la primera canonjía y prebenda que vacasen en el cabildo catedralicio de Cuenca para el maestre Alfonso Sánchez de Alarcón,

---

[316] AGS, *Registro General del Sello*, 23-XII-1477, f. 562.

[317] BN, Ms. 13072, f. 242r.

[318] AGS, *Registro General del Sello*, 10-VIII-1488, f. 120.

[319] *Ibid.*, 17-III-1489, f. 339.

inquisidor de Zaragoza, poniéndole en posesión de ellas[320]. Dos años más tarde, el 13 de febrero de 1490, los Reyes Católicos se dirigirán de nuevo al obispo Fray Alonso de Burgos para que, también en virtud del mencionado privilegio de Inocencio VIII, se encargase de proveer otra canonjía que vacase en Cuenca en favor del maestre Pedro de Agni[321].

En abril de 1491 los monarcas informarían al cabildo catedralicio conquense de que el papa, en atención a una súplica regia, había reservado varios beneficios en la Iglesia y obispado de Cuenca a favor de Alfonso Cortés, sacristán real, por lo que a medida que dichos beneficios fuesen quedando vacantes se debería hacer entrega de ellos al mencionado Alfonso Cortés[322]. Por otro lado, en diciembre de este mismo año de 1491, también nos encontramos a Diego de Segovia, capellán real, ostentando una mediarración en el cabildo catedralicio de Cuenca[323].

En 1493 nos encontraremos con un caso de oposición de la Iglesia conquense a un otorgamiento de beneficios por parte de los monarcas en favor de un capellán real. Tras el fallecimiento del bachiller Rodrigo de Fuensalida, en el cabildo catedralicio de Cuenca se había quedado vacante una canonjía, para la cual los Reyes Católicos nombraron a Martín de Córdoba, clérigo cordobés y capellán real, en virtud de un privilegio pontificio de Inocencio VIII. Pero el provisor del obispado conquense y el cabildo harían caso omiso de este nombramiento regio, otorgando por su parte dicha canonjía al doctor de Gálvez, residente en la Corte de Roma, y desposeyendo de ella a Martín de Córdoba, quien presentaría de inmediato sus quejas ante los monarcas. Por ello éstos, el 26 de marzo de 1493, mandarían al corregidor y justicias laicas de Cuenca que interviniesen a fin de que se otorgase posesión de la canonjía a Martín de Córdoba[324].

---

[320] *Ibid.*, 30-X-1488, f. 25.

[321] *Ibid.*, 13-II-1490, f. 104.

[322] BN, Ms. 13072, f. 260.

[323] ACC, AC-1491, f. 114v.

[324] AGS, *Registro General del Sello*, 26-III-1493, f. 55.

Otro nombramiento para la primera canonjía que quedase vacante en Cuenca por parte de los Reyes Católicos es el que tuvo lugar el 16 de agosto de 1495, siendo el beneficiado el bachiller Álvaro de Baeza, clérigo palentino[325].

Por último, especialmente interesante resulta también la posesión de importantes cargos monásticos por algunos capellanes reales, de lo que viene a ser un claro ejemplo el otorgamiento que el 12 de agosto de 1500, previa súplica de los Reyes Católicos, realizó el papa Alejandro VI de la abadía cisterciense de Santa María de Monsalud, vacante por la muerte de Gabriel Condulmario, en favor de Fray Luis Castejón, maestro en Teología y capellán real, quien al parecer moriría dos años más tarde[326].

IV-EL PLANO POLÍTICO

1-El desempeño de cargos políticos por los obispos conquenses

Durante la época Trastámara, al igual que sucedió en la etapa anterior, aunque ahora con matices y caracteres algo diferentes, también es posible identificar a un nutrido grupo de miembros del clero castellano que ejercieron un importante papel en la gestión político-administrativa del reino. Esta participación del clero a través de una serie de individuos prominentes que, a la vez que descuellan en la vida política, ocupan posiciones destacadas en la cúpula de la jerarquía eclesiástica castellana, fue sin duda uno de los fenómenos que aportó mayor significación política a la Iglesia desde el punto de vista de la configuración de nuevas soluciones políticas en el ejercicio cotidiano del poder real.

Tal participación eclesiástica resultó ser de gran importancia, no sólo por la capacitación específica que pudieran exhibir determinados eclesiásticos para el ejercicio de la actividad político-administrativa, sino sobre todo porque una cuota

---

[325] AGS, *Patronato real*, leg. 38, nº 12; *Registro General del Sello*, 16-VIII-1495, f. 220.

[326] Fray Bernardo Cartes, *Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Monsalud*, pp. 157-158.

significativa de la legitimación del poder regio tenía un origen eclesiástico-religioso, lo que necesariamente exigía de una participación cualitativamente relevante del poder eclesiástico, sobre todo representado por los miembros más destacados del alto clero, en el ejercicio cotidiano de la administración política del reino. En suma, con ello se respondía a un factor tan relevante como lo era la propia legitimidad del sistema político[327].

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, deben ser destacados ciertos prelados que durante la época Trastámara ejercieron un importante papel en la gestión político-administrativa del reino. En primer lugar hay que citar a don Álvaro Martínez, quien lograría hacer una brillante carrera eclesiástica y de servicios a la Monarquía, llegando a ser preceptor del futuro Enrique III y oidor de su Consejo por encargo expreso de Juan I, así como canciller mayor de Castilla con Enrique III[328].

Respecto al Consejo Real hay que decir que, a partir de su configuración inicial con Juan I, garantizaría la presencia sistemática y privilegiada de toda una serie de eclesiásticos castellanos en una posición de gran influencia en la gobernación del reino. Cuatro de los doce miembros del Consejo habían de ser eclesiásticos, preferentemente prelados, debiendo ser ocupada siempre la presidencia por uno de ellos[329]. En cuanto a los cargos de canciller, conviene destacar que tenían unas muy importantes implicaciones políticas, conociendo todavía una relevante presencia eclesiástica durante los primeros Trastámara que, desde luego, irá en paulatino retroceso a lo largo del siglo XV[330].

Por otro lado, el obispo don Álvaro Martínez también colaboraría ocasionalmente en algunas labores fiscales de la Monarquía, de lo que viene a ser un ejemplo el nombramiento que

---

[327]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 130-131.

[328]Mateo López, *Memorias históricas...*, I, p. 224.

[329]José Manuel Nieto Soria, «Iglesia y orígenes del Estado Moderno en la Castilla Trastámara», p. 144.

[330]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 165.

en 1384 le hizo el papa como ejecutor, junto a los obispos de Zamora y Osma, de una nueva décima que se había concedido al rey castellano[331].

Otro prelado conquense que habría de desempeñar algún cargo político de relieve fue don Álvaro de Isorna, quien en ocasiones actuaría como oidor de la Audiencia Real. Esta institución representa, indudablemente, la mejor expresión del proceso de reorganización de la justicia pública del rey que se experimenta durante la época Trastámara, convirtiéndose en uno de los legados más relevantes de la estructura institucional de la Monarquía castellana bajomedieval a los tiempos modernos, y tratándose también de uno de los organismos en que la participación eclesiástica tuvo una significación más relevante, ya no sólo por el número de clérigos en ella participantes, sino sobre todo por la operatividad concreta que éstos tuvieron en su seno[332]. En lo que respecta al obispo don Álvaro de Isorna, sabemos que en las Cortes de Madrid de 1419 fue designado por el rey, junto a otros eclesiásticos, como oidor-prelado de la Audiencia[333], lo cual ofrece una clara idea de la confianza en él depositada por el monarca.

Un prelado que ya desde mucho tiempo antes de su llegada a Cuenca comenzó a ejercer importantes cargos políticos al servicio de la Monarquía fue el dominico Fray Lope de Barrientos. Su actividad política en la Corte comenzaría sobre todo a partir de 1429, año en que Juan II le nombró preceptor de su hijo, el futuro Enrique IV, cargo que desempeñaría durante cierto tiempo y gracias al cual lograría ejercer una notable influencia sobre el príncipe y futuro monarca, siendo por otro lado, al menos desde 1434, confesor real[334]. Fue gracias al apoyo de Juan II, con quien llegaría a ser también consejero real, privado en la Corte durante algún tiempo y desde 1440 oidor de la Audiencia

---

[331]ASVat. *Reg. Aven.* 242, f. 38.

[332]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 172-173.

[333]*Ibid.*, p. 176.

[334]Luis Alonso Getino, *Vida y obras de Fray Lope de Barrientos*, pp. XVII y ss.

Real, como obtuvo en 1438 el obispado de Segovia[335], y el de Ávila en 1440, acudiendo al año siguiente como embajador del monarca castellano ante el rey de Navarra[336]. Parece ser que por esta misma época, o poco después, fue también nombrado canciller mayor del príncipe[337], de quien fue confesor por algún tiempo[338], figurando asimismo como tenedor de los sellos de la Chancillería al menos desde 1445[339], año en que pasaría a la diócesis de Cuenca.

Al desaparecer don Álvaro de Luna en 1453 fue llamado junto al rey el obispo Barrientos, que ya había ejercido un importante protagonismo político durante la privanza del condestable. Don Lope y el prior de Guadalupe, Fray Gonzalo de Illescas, se encargarán de asegurar la gobernación del reino durante los últimos meses del reinado de Juan II, asumiendo también la función de albaceas testamentarios, por lo que debieron atender un buen número de encargos reales[340].

Durante el reinado de Enrique IV el obispo Barrientos mantendría aún una importante influencia política hasta su muerte en 1469, pero sin el predominio en los medios cortesanos que había caracterizado a otros privados de tiempos atrás. Desde luego continuó desempeñando diversos cargos al servicio de la Realeza. Así, el 2 de agosto de 1454 el monarca le confirmó la posesión de los oficios de confesor real, oidor de la Audiencia y tenedor de los sellos de la Chancillería, con sus correspon-

---

[335]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 426. Su consagración como obispo tendría lugar en Roa, donde se hallaba la Corte, produciéndose con la máxima solemnidad en presencia de la familia real, siendo ello una prueba evidente del reconocimiento regio de que gozaba este personaje. Pedro Carrillo de Huete, *Crónica de Juan II*, p. 253.

[336]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 426.

[337]José Manuel Nieto, *Iglesia y génesis...*, p. 158.

[338]L.G. Alonso Getino, <<Dominicos españoles confesores de los reyes>>, p. 409.

[339]AGS, *Quitaciones de Corte*, leg. 4, ff. 6r-9v.

[340]José Manuel Nieto, *Iglesia y génesis...*, p. 139.

dientes quitaciones[341]. En cuanto al cargo de confesor real, el 27 de agosto de 1462 el obispo don Lope suplicaría a Enrique IV que le permitiese abandonar dicho oficio, aceptando en su lugar como nuevo confesor a su recomendado el doctor Fray Pedro de Villacastín, dominico, a lo que el monarca accedería el 15 de febrero del año siguiente[342].

Conviene destacar que durante la época Trastámara cada vez tendió a ser más importante el papel político desempeñado por los confesores reales, de modo que el confesor no será sólo alguien que escucha los pecados del rey, le impone una penitencia y le absuelve, sino que también se convertirá en un consejero íntimo que, gozando de la plena confianza del monarca, conocerá las preocupaciones políticas de éste, pudiendo influir en sus criterios. Por ello es posible comprobar cómo en algunos casos el confesor real se convertiría en una persona en quien el rey delega todo su poder para llevar a cabo ciertas misiones políticas delicadas[343], siendo el obispo Barrientos un claro ejemplo de ello.

Otro prelado conquense que desempeñó importantes cargos políticos fue el dominico de origen converso Fray Alonso de Burgos. El 17 de abril de 1473 fue nombrado capellán mayor de Isabel la Católica, con 17.400 mrs. anuales de quitación por el desempeño de dicho oficio, estableciéndose además que pasara a formar parte del Consejo Real[344], y al menos desde 1476 ya figura como confesor de la reina[345]. Colaborador asiduo y hombre de confianza Isabel la Católica, en 1476 llegaría a ostentar junto con el obispo de Cartagena la presidencia de la Santa

---

[341]AGS, *Quitaciones de Corte*, leg. 4, ff. 6r-9v. Las quitaciones que le fueron confirmadas son las siguientes: 14.400 mrs. anuales que recibía desde 1434 como confesor real; 18.000 mrs. anuales que, como tenedor de los sellos de la Chancillería, recibía desde 1445; y 30.000 mrs. anuales que desde 1454 se le asignan como oidor de la Audiencia real. En el documento también se recogen las libranzas de estas quitaciones realizadas entre 1455 y 1464.

[342]*Ibid.*, ff. 455r-456r.

[343]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 140.

[344]AGS, *Casa y Sitios reales*, leg. 11, 1ª parte, nº 2.

[345]AGS, *Patronato Real*, leg. 16, nº 56.

Hermandad. Fue gracias a esta relevante participación en política y al apoyo regio por lo que entre 1477 y 1482 ostentó la titularidad de la sede episcopal cordobesa, pasando este último año a Cuenca, diócesis que gobernaría durante tres años[346].

Por último, hay que señalar también que al comienzo del reinado de los Reyes Católicos se produjeron algunas otras incorporaciones al Consejo Real, buena parte de las cuales podrían considerarse como compensaciones personales a algunos de los eclesiásticos que más abiertamente habían mostrado su apoyo a la princesa Isabel durante los conflictos políticos que habían precedido su acceso al trono. Entre estos eclesiásticos cabe citar al arcediano de Alarcón y provisor de Cuenca, Gabriel Condulmario, nombrado consejero el 10 de abril de 1475[347], así como al maestrescuela de Calahorra y canónigo de Cuenca, Alfonso García de San Felices, nombrado el 23 de diciembre de 1477[348].

2-La participación de los obispos de Cuenca en Cortes

Durante la época Trastámara en Castilla seguirá siendo importante la presencia de algunos prelados en las reuniones de Cortes, sobre todo de aquéllos que se encontraban en pleno ejercicio de cargos político-administrativos al servicio de la Monarquía. Esta motivación fue cada vez más determinante según se avanza en el siglo XV, pudiendo ser valorada como una de las razones que contribuiría al vaciamiento de significado político de la institución, puesto que tal circunstancia contribuía especialmente al predominio sobre la misma de los intereses exclusivos de la Monarquía. De este modo, sobre todo durante el siglo XV, entre los eclesiásticos presentes en Cortes van a predominar los cancilleres, consejeros, oidores, capellanes, confesores y preceptores reales, llegándose al extremo de que en

---

[346] José Manuel Nieto, *Iglesia y génesis...*, pp. 427-428.

[347] AGS, *Registro General del Sello*, 10-IV-1475, f. 436.

[348] *Ibid.*, 23-XII-1477, f. 562.

algunas reuniones de Cortes todos los eclesiásticos asistentes son miembros del Consejo o de la Audiencia Real[349].

En términos generales puede afirmarse que, mientras que la Monarquía no toma habitualmente la iniciativa a través de las Cortes frente a aquellas realidades eclesiásticas que, de alguna manera, le perjudicaban, en cambio sí lo van a hacer los procuradores de las ciudades, predominando entre sus denuncias las referidas a la intervención clerical en las instituciones políticas y los excesos cometidos en los derechos señoriales y en el ejercicio de determinados privilegios. No obstante, durante esta época las quejas referidas a la intervención del clero en política poco a poco van a tener menor relieve, dando la impresión de que éste era un hecho mucho más aceptado que, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIII o primera mitad del XIV. En cambio, en época Trastámara se va a insistir más en el intervencionismo excesivo y perjudicial del Pontificado, sobre todo por los efectos perjudiciales de la fiscalidad pontificia que contribuía a empobrecer el reino, así como por lo que se entendía exagerada presencia de extranjeros como poseedores de beneficios eclesiásticos en Castilla[350].

En lo que respecta a la Iglesia de Cuenca, la participación de sus obispos en Cortes a lo largo de estos años se produciría con mayor o menor intensidad según los momentos, debiendo ser destacado que, tal como se señaló antes, los prelados que más frecuentemente asistieron a Cortes fueron precisamente los que ejercían cargos importantes en la gestión político-administrativa del reino.

Comenzando por las Cortes de Burgos de 1367, sabemos que un cuaderno de las decisiones tomadas se remitió al cabildo catedralicio conquense[351], pero no nos consta la presencia en ellas del obispo conquense don Bernal Zafón. En cambio, un prelado que sí que asistiría frecuentemente a Cortes fue don Álvaro Martínez. Así, durante el reinado de Juan I, estuvo

---

[349]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 151-152.

[350]*Ibid.*, p. 153.

[351]Ana Arranz Guzmán, «Reconstrucción y verificación...», p. 91.

presente en las Cortes de Segovia de 1386[352] y en las de Briviesca de 1387[353]. Ya en época de Enrique III, el obispo don Álvaro asistiría también a las Cortes de Burgos de 1392. Su presencia en estas últimas, al igual que la de don Diego de Anaya Maldonado, entonces obispo de Orense, estaba justificada por el hecho de que ambos prelados se ocupaban de la educación del monarca. Por otro lado, en esta reunión terminaría la pleamar de las Cortes, comenzando su reflujo, pues desde ahora prescindir en lo posible de ellas sería uno de los empeños del equipo de gobierno que rodeaba a Enrique III[354].

Pero fue sobre todo a partir de 1407 cuando las Cortes entraron en un declive irremediable. Juan II y Enrique IV se limitarán a recibir los cuadernos de peticiones, a los cuales responderán casi siempre cuando ya se hayan votado los subsidios y los procuradores hayan regresado a sus ciudades. El clero y la nobleza, además, dejaron de participar en las deliberaciones como estamentos. De este modo, los arzobispos y obispos presentes en Cortes sólo actuarían en misiones encomendadas por los monarcas, como la de intervenir ante los procuradores para explicar las necesidades del reino en un momento concreto. El contexto social y político de Castilla es lo que explica este declive de la institución, y es que la fuerza política había pasado definitivamente al poder real, por lo que los eclesiásticos prefirieron participar antes como individuos al servicio del monarca que como miembros de las Cortes, en las que sólo podían desempeñar un papel muy secundario[355].

Las primeras Cortes celebradas durante el reinado de Juan II fueron las de Segovia de 1407, continuación de las toledanas reunidas por Enrique III y suspendidas al morir el monarca. Entre los muchos eclesiásticos asistentes se encontraba el obispo de Cuenca don Juan Cabeza de Vaca, que asistió junto con los otros

---

[352] *Ibid.*, p. 100.

[353] *Ibid.*, p. 101.

[354] *Ibid.*, p. 104.

[355] *Ibid.*, pp. 109-110.

para que ante su presencia y la de los procuradores la reina madre doña Catalina y don Fernando, tío de Juan II, jurasen sus cargos de tutores[356].

El siguiente prelado conquense sobre el que consta su concurrencia a Cortes fue don Álvaro de Isorna. En primer lugar asistiría a las Cortes de Madrid de 1419, en las que sería designado por el monarca como oidor de la Audiencia Real por espacio de seis meses, para ocupar después su lugar el obispo de Zamora. En estas Cortes, entre otras cosas, se prometería hacer todo lo posible para que los beneficios eclesiásticos sólo fuesen entregados a los naturales del reino[357]. Otras Cortes en las que también estuvo presente don Álvaro de Isorna fueron las de Palenzuela de 1425[358] y las del Real sobre Olmedo de 1445, a las que también asistiría Fray Lope de Barrientos aún como obispo de Ávila[359], quien ese mismo año sería trasladado a la diócesis de Cuenca.

La importante presencia del obispo Barrientos en los principales órganos de gestión política del reino explica perfectamente su frecuente participación en Cortes, que también se había dado siendo obispo de Ávila y Segovia. Así, en 1447 asistiría a las Cortes de Valladolid, más como representante regio que en nombre de su estamento, y en 1453 es probable que también estuviese presente en las celebradas en Burgos, que habrían de ser las últimas del reinado de Juan II. Al morir este monarca los representantes de las ciudades juraron al nuevo rey en el verano de 1454, y aunque no se convocaron Cortes con tal motivo la presencia del estamento eclesiástico en el solemne acto fue nutrida, asistiendo también el obispo Barrientos. Años más tarde, en 1462, Enrique IV convocaría varios Ayuntamientos <<itinerantes>> con intención de llevar a cabo una restauración del poder real a través del esfuerzo de las Hermandades, en cuya

---

[356] *Ibid.*, p. 111.

[357] *Ibid.*, p. 113.

[358] *Ibid.*, p. 116.

[359] *Ibid.*, p. 119.

organización, para mantener la paz y el orden, el obispo conquense jugaría un papel de primera magnitud. Pero el rey, a pesar de los consejos del prelado, quien deseaba una acción militar enérgica, iniciaría poco después unas negociaciones escalonadas en varias fases con los procuradores de las ciudades[360].

Fray Lope de Barrientos fue probablemente el último obispo conquense medieval que participó en Cortes, además de forma muy activa, aunque lo haría ante todo como servidor de la Monarquía más que como representante del estamento eclesiástico. El siguiente obispo de Cuenca, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris, no nos consta que asistiese a Cortes, lo que se explica por su condición de extranjero, y tampoco tenemos noticias de que lo hicieran en alguna ocasión los prelados inmediatamente sucesores Fray Alonso de Burgos y Fray Alonso de Fonseca, al menos durante el tiempo que ocuparon la sede conquense[361].

3-Los obispos de Cuenca y la ceremonialización de la vida política

Tal como recientemente ha demostrado el profesor José Manuel Nieto Soria, el conjunto de la época Trastámara puede ser considerado como un periodo de la historia del reino de Castilla caracterizado por observar una intensa ceremonialización de la vida política[362]. Ello supuso, por un lado, que se tomara conciencia de la eficacia propagandística y legitimadora de la ceremonia en sí misma, y por otra parte, como resultado de esta circunstancia, el que todo acontecimiento político más o menos relevante implicase casi siempre alguna forma de celebración

---

[360]Ana Arranz Guzmán, <<Reconstrucción y verificación...>>, pp. 120-123.

[361]Entre los prelados castellanos asistentes a Cortes durante el periodo 1480-1515 no consta la presencia de ningún obispo de Cuenca. J.M. Carretero Zamora, *Cortes, Monarquía, ciudades...*, p. 414.

[362]Sobre ello puede verse su libro *Ceremonias de la Realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara*, Madrid, 1993.

ceremonial mediante la cual se trataba de conseguir un efecto amplificador para las consecuencias del mismo.

Un rasgo típico de toda la época medieval es el que venía dado por las interferencias entre rituales litúrgicos y rituales políticos, con lo que se puso de relieve el lugar principal que ocupaba lo sagrado en la definición del poder político. En la propia Realeza Trastámara es posible detectar cómo buena parte del sistema ceremonial recién aludido fue el resultado de la aplicación a objetivos político-seculares de un formato ceremonial de origen litúrgico-religioso. Por todo ello, no resulta extraño que en la mayoría de las ceremonias políticas más relevantes de la Realeza Trastámara hubiese una significativa participación de eclesiásticos ejerciendo funciones específicas durante su desarrollo y colaborando, por lo general, a producir amplios efectos propagandísticos y legitimadores[363].

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, hay que destacar la participación de ciertos obispos en algunas ceremonias políticas de la Realeza Trastámara, revistiendo esta participación mayor o menor relieve según los casos.

En primer lugar se debe citar a don Álvaro de Isorna, quien desempeñaría un papel destacado en varias de estas ceremonias. Con motivo de la mayoría de edad del rey Juan II, en 1419, en el alcázar de Madrid se produciría una ceremonia de reconocimiento de los plenos derechos políticos del monarca. En tal acontecimiento, para el que se reunieron Cortes, llamará la atención el importante número de eclesiásticos reunidos con este motivo, entre los que se encontraba el obispo conquense don Álvaro de Isorna. Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo, fue el encargado de pronunciar el discurso con el que se abrió el acto. Con esta ceremonia se estaba tratando de asegurar la legitimidad política para los derechos y pretensiones del rey, otorgando la presencia eclesiástica una cierta dimensión litúrgica al acto[364].

Durante el reinado de Juan II, y como consecuencia de las difíciles relaciones del rey con importantes sectores de la

---

[363]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 223-224.

[364]José Manuel Nieto Soria, *Ceremonias de la Realeza...*, pp. 29-30.

nobleza, se convertirá en un acontecimiento normal la jura de los príncipes con derecho a sucesión al trono, a pesar de la corta edad de éstos. Así, en 1423 tiene lugar en el alcázar de Toledo la jura, como primogénita, de la infanta Catalina, quien habrá de fallecer al año siguiente. Tras producirse el solemne recibimiento de la infanta en la ciudad a título de primogénita, y reunidos en el alcázar los representantes en Cortes, así como los miembros del Consejo del rey, junto con muchos caballeros, eclesiásticos y doctores, pronunció un discurso en nombre del monarca el obispo don Álvaro de Isorna, justificando y exigiendo el juramento de la infanta como primogénita al trono. Después de ello comenzó el acto de besamanos y de homenaje personal, acompañado del correspondiente juramento sobre el misal que el obispo don Álvaro tenía en sus manos. Esta ceremonia venía a simbolizar una forma de pacto entre la aspirante al trono y una representación del reino, para así poner de manifiesto el reconocimiento por esa representación del reino de los derechos o pretensiones al trono de esa aspirante, asegurándose así la legitimidad política para esos derechos o pretensiones[365].

Dos años más tarde, el 5 de enero de 1425, tenía lugar en Valladolid el nacimiento del que habría de ser Enrique IV, produciéndose su bautismo ocho días después, con la intervención del obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, quien lo bautizó, y siendo apadrinado por algunos de los miembros más destacados de la más elevada nobleza cortesana, entre los que no podía faltar el condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. Acto seguido, para exteriorizar el acontecimiento, se celebraría una procesión en la que participaron varios prelados y todos los clérigos y religiosos de la ciudad de Valladolid, teniendo su correspondiente en otras procesiones que se celebrarían con el mismo motivo en las distintas ciudades del reino. Esta ceremonia se incluye entre las que el profesor José Manuel Nieto Soria demonina de <<tránsito vital>>, las cuales suponen la celebración de acontecimientos referentes a los momentos más relevantes de la trayectoria vital personal de algún miembro de la familia real

---

[365] *Ibid.*, p. 30.

que tienen, por sí mismos, una cierta significación política que queda, en buena medida, manifestada en la realización de ritos específicos utilizados para exaltar esa dimensión política[366].

También en 1425, el 21 de abril, en el monasterio de San Pablo de Valladolid, tendría lugar el juramento del recién nacido príncipe Enrique como heredero del trono, llevándose a cabo para ello una prolija ceremonia. Estuvieron presentes el rey, nobles, prelados y procuradores de diversas ciudades. Tras besar la mano al príncipe y ser hecho el correpondiente homenaje por el infante de Aragón, don Juan, fue pronunciado el discurso previo al homenaje de los demás presentes. Dicho discurso, en nombre del rey, corrió por cuenta, una vez más, del obispo don Álvaro de Isorna, tras lo cual tuvo lugar el homenaje individualizado de todos los asistentes[367].

Tres años después de la celebración en 1437, en Alfaro, de los desposorios entre el príncipe don Enrique y la princesa doña Blanca de Navarra, tendría lugar la boda entre ambos en Valladolid, el 15 de septiembre de 1440, para lo que acudirían a la ciudad los reyes de Castilla y Navarra. En los actos ceremoniales, de gran contenido propagandístico, que rodearon a la boda estuvo presente, entre otros, el obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, que en ese momento se hallaba junto al rey. La ceremonia de casamiento, oficiada por el cardenal Juan de Cervantes y celebrada en el monasterio de San Pablo, no presentó ningún aspecto ritual relevante[368].

El obispo Fray Alonso de Burgos también participaría en algunos actos ceremoniales con relieve político. Así, por ejemplo, el 1 de abril de 1480, siendo aún obispo de Córdoba, estuvo presente entre los prelados y nobles que, durante la celebración de Cortes en Toledo, juraron al príncipe don Juan como sucesor del reino de Castilla: <<estando todos en la yglesia de Santa Maria, delante del altar mayor, juraron sobre un libro misal, que tenia en sus manos el saçerdote que avia çelebrado la

---

[366] *Ibid.*, p. 48.

[367] *Ibid.*, p. 31.

[368] *Ibid.*, p. 54.

misa, de tener por rey destos reynos de Castilla e de Leon al prinçipe don Juan, fijo mayor del rey e de la reyna, para despues de los dias de la reyna...e asymismo fizieron pleyto omenage de lo cunplir e guardar...>>[369].

Por otro lado, el 15 de mayo de 1483, ya como obispo de Cuenca, lo encontramos en Burgos acompañando al cardenal de España en la visita que hicieron a esta ciudad la reina y el príncipe don Juan, que se desarrolló en medio de un gran boato y solemnidad bajo las aclamaciones de todo el pueblo. Al mediodía la ciudad recibió a la reina, dejando para la entrada del príncipe, según deseos de doña Isabel, el boato dispuesto al efecto. Por la tarde hizo su entrada don Juan en medio de una gran solemnidad y aclamado por toda la ciudad, formándose una comitiva en la que iba el príncipe llevado en unas andas. Al llegar a la puerta de la catedral, el cardenal de España, acompañado del obispo Fray Alonso de Burgos, bajó de las andas al príncipe y en sus brazos le llevó hasta la misma entrada del templo, donde don Juan hizo la adoración de la Cruz. Varios días después el concejo burgalés haría un obsequio al obispo conquense por su colaboración en los actos[370]. No mucho más tarde, el 14 de octubre de este mismo año, Fray Alonso de Burgos se encontraba en Córdoba, donde en ese momento estaba la Corte, junto con los obispos de Jaén, Palencia y Calahorra, algunos grandes y el cardenal de España, para asistir a las fiestas reales que se celebraron en esta ciudad en conmemoración de las victorias recientemente obtenidas sobre los musulmanes de Granada[371].

El último obispo de Cuenca que participaría en alguna ceremonia de contenido político fue Fray Alonso de Fonseca. Durante la primavera de 1486 las tropas castellanas obtuvieron algunas importantes victorias en la frontera granadina. Tras haberse producido la ocupación de diversas plazas, como Loja[372],

---

[369]Hernando del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos...*, I, pp. 425-426.

[370]Luciano Serrano, *Los Reyes Católicos y la ciudad de Burgos*, p. 211.

[371]Diego de Valera, *Crónica de los Reyes Católicos*, p. 170.

[372]En el *Necrologio-Obituario* de la catedral de Cuenca se recogen dos versiones de la toma de Loja. Sobre ello puede verse: José Trenchs Odena, <<El Necrologio-Obituario...>>, pp. 357-358.

Illora, Colomera y Montefrío, el rey don Fernando decidió acabar su participación personal en la campaña regresando a Córdoba. Allí se realizaría una ceremonia típica de conmemoración de una victoria militar, y en los actos celebrados en la catedral cordobesa participó, entre otros prelados, el obispo Alonso de Fonseca[373].

4-Los conflictos políticos

Desde el punto de vista político, uno de los aspectos más característicos de la génesis del Estado Moderno en Castilla durante el periodo Trastámara consistió en la recurrencia de conflictos políticos que afectaron directamente al ejercicio del poder regio, de forma que se produce la paradoja de que el conflicto político se convierte en compañero inseparable del propio proceso de transformación experimentado por el modelo monárquico hacia unas pretensiones más autoritarias. Además, esta situación de conflictividad no puede ser considerada como algo exclusivo de Castilla, sino que forma parte de una realidad de dimensión occidental, lo que tiene como reflejo la internacionalización de sus efectos y, en consecuencia, la intensificación de las actividades de negociación diplomática entre unos reinos y otros. Tanto en el desarrollo de la conflictividad política interna castellana como en la intensificación de la diplomacia internacional el papel jugado por los eclesiásticos fue muy significativo, y la Iglesia de Cuenca y, más en concreto, los obispos que ostentaron la titularidad de la sede durante esta época, no serán en absoluto una excepción a la regla, tal como a continuación tendremos ocasión de comprobar.

---

[373]José Manuel Nieto Soria, *Ceremonias de la Realeza...*, p. 154.

A) *La Iglesia y el Episcopado conquense en las coyunturas políticas convulsivas del reino*

Recientemente se ha señalado, de forma general para el conjunto del reino de Castilla, que con frecuencia se dio una tendencia a la diversificación de posturas políticas entre los eclesiásticos ante algunos de los conflictos políticos que se desarrollaron durante la época Trastámara[374]. El objetivo de este apartado será establecer cuál fue la postura de la Iglesia de Cuenca ante los principales conflictos políticos que se produjeron en este periodo, y qué importancia tuvo el papel jugado por algunos obispos conquenses en el desarrollo de los mismos.

Sobre la posición de la Iglesia de Cuenca durante la guerra civil que entre 1366 y 1369 enfrentó a Pedro I con su hermano Enrique de Trastámara ya se habló páginas atrás, por lo que aquí no será necesario repetirlo de nuevo.

Centrándonos a continuación en el reinado de Juan II, antes de nada conviene establecer ciertas valoraciones generales. Las continuas convulsiones políticas que afectaron al conjunto del reinado de Juan II implicaron, de hecho, a la totalidad de los estamentos sociales, no pudiendo ser ajeno a ellas el clero. Si nos remitimos al mismo momento en que se produce el reconocimiento de la mayoría de edad del monarca, cuya ceremonia tendría lugar en el alcázar de Madrid el 7 de marzo de 1419, hallándose reunidas las Cortes, ya se puede observar la importante presencia eclesiástica, sobre todo episcopal, que puede considerarse como todo un símbolo del notable protagonismo político que los prelados castellanos habrían de desempeñar en los años sucesivos. Sin embargo, un criterio que hay que precisar desde el principio es que esta implicación del clero tuvo siempre un carácter eminentemente personal, no pudiéndose afirmar que los prelados intervinientes en los distintos lances de los conflictos acaecidos representasen líneas de actuación con definidos intereses políticos dentro del conjunto de la Iglesia castellana,

---

[374]José Manuel Nieto Soria, Iglesia y génesis..., p. 251.

sino que actuaban en respuesta a criterios y compromisos personales. Dichas actuaciones irán desde la actitud de permanente oposición a la Realeza hasta la actitud de estricta lealtad al rey, pasando por posiciones intermedias y actitudes mediadoras[375].

Este último tipo de actitud es la que se observa en el obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, quien ya en 1420 aparece negociando al servicio de la Monarquía con los infantes de Aragón, misión para la que contaría con el apoyo como asesor de don Alfonso de Cartagena. Precisamente el obispo don Álvaro de Isorna será uno de los grandes especialistas en mediaciones complejas en nombre de la Realeza con motivo de los enfrentamientos políticos internos. Así sucederá, por ejemplo, cuando intente infructuosamente hacer retornar al servicio del rey, por encargo de éste, a su primo el maestre de Alcántara, don Juan de Sotomayor, en 1432. En situación aún más extrema, a punto de producirse una batalla frente a Maqueda, se prestará de nuevo a negociar en compañía de don Alfonso de Cartagena, esta vez con el almirante Fadrique Enríquez y el conde de Benavente que tenían dispuesta una tropa de 1300 hombres de armas y 200 de a caballo, evitándose en el último momento la lucha[376].

Otra situación de conflictivad bélica en que también estuvo presente el obispo don Álvaro de Isorna fue en la toma provisional de Medina del Campo por las tropas del monarca castellano en junio de 1441. Concretamente en la noche del 8 al 9 de junio del citado año de 1441 es cuando las fuerzas de Juan II encabezadas por don Álvaro de Luna, el arzobispo de Toledo y el maestre de Alcántara entraron en Medina del Campo. Pero los partidarios que el rey de Navarra tenía en Medina le facilitarían la entrada en la noche del 28 al 29 de junio. Debido a ello don Álvaro de Luna huyó seguido de sus partidarios, y Juan II se puso en manos de la facción vencedora, sin que tampoco en esta ocasión la batalla llegara a producirse[377]. Según la *Crónica del Halconero*, entre

---

[375]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 263-264.

[376]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 268-269.

[377]Luis Suárez Fernández, *Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV*, pp. 170-171.

los nobles y prelados castellanos que en aquel momento se encontraban junto a Juan II también estuvo el obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna[378], aunque desconocemos qué papel concreto desempeñó en el desarrollo de los acontecimientos.

Otro obispo que habría de intervenir activamente en algunos conflictos políticos relevantes tanto durante el reinado de Juan II como en el de Enrique IV fue Fray Lope de Barrientos. Durante la primera etapa de su pontificado conquense, uno de los acontecimientos político-militares más relevantes protagonizados por el obispo Barrientos fue la defensa armada que en 1447 y 1449, por mandato de Juan II, hizo de la ciudad de Cuenca contra el noble don Diego Hurtado de Mendoza y sus partidarios, que en aquel momento estaban enfrentados con el monarca castellano, saliendo en ambas ocasiones vencedor el obispo[379]. Paradójicamente, años atrás don Lope, siendo obispo de Ávila, había actuado en algunas ocasiones contra Juan II[380], lo que viene a ser un ejemplo de la variabilidad de actitudes políticas que a veces se daba en algunos prelados de la época.

Por otro lado, ya hacia el final de su pontificado, en 1464-1465, al tener lugar en Castilla los levantamientos proalfonsinos, don Lope de Barrientos actuaría en Cuenca y su diócesis como dirigente del movimiento de defensa de la causa de Enrique IV, llegando por este motivo a ser apresado en 1465 por el marqués de Villena, don Juan Pacheco, aunque su prisión sólo duraría algunos meses[381]. Hay que señalar que ante la destitución de Enrique IV la división del clero castellano fue profundísima, no

---

[378]Pedro Carrillo de Huete, *Crónica de Juan II*, p. 417.

[379]Pedro Carrillo de Huete, *Crónica de Juan II*, pp. 482-487 y 513-516.

[380]Según un atento observador de los vaivenes políticos de la época, como lo fue Fernán Gómez de Cibdarreal, el obispo Barrientos, ocupando la mitra de Ávila, habría sido uno de los principales instigadores del distanciamiento entre Juan II y el príncipe Enrique, señalando también el mismo autor cómo en uno de los acontecimientos bélicos más simbólicos de la conflictividad política de la época, la batalla de Olmedo, mientras que Barrientos aparece como eclesiástico que encabeza las fuerzas de los seguidores del príncipe Enrique, el obispo de Sigüenza, don Alfonso Carrillo, precisamente uno de los prelados que, pasado el tiempo, ya como arzobispo de Toledo, mostrará mayor oposición al poder real, hace otro tanto en el lado del rey. Fernán Gómez de Cibdarreal, *Centón Epistolario*, BAE, vol. XIII, epistolas XCI y XCII; tomado de José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 267.

[381]AMC, leg. 197, exp. 3, ff. 20r-22v.

consiguiendo la unificación de posturas ni siquiera la acción mediadora del Pontificado, claramente favorable a la consolidación del monarca depuesto. Durante los últimos años de su vida don Lope ejercería también, por mandato regio, el cargo de guarda mayor de la ciudad de Cuenca[382], controlando de este modo una gran cantidad de asuntos concejiles, y sin duda fue gracias a su mediación ante el rey como se llevó a cabo la concesión a Cuenca, por Real Cédula del 12 de noviembre de 1465, del título de *muy noble e muy leal*[383].

En ambas ocasiones, tanto durante la defensa de Cuenca en apoyo de Juan II en 1447 y 1449 como cuando Barrientos se puso al frente de la causa de Enrique IV contra los partidarios del infante don Alfonso en 1464-1465, la participación nobiliaria en el desarrollo de los conflictos políticos fue de importancia incuestionable, y de hecho sería a la alta nobleza a quien tendría que enfrentarse el obispo Fray Lope en su defensa de la causa regia. Por ello la cuestión será retomada de nuevo más adelante, en el apartado dedicado al estudio de las relaciones de poder mantenidas entre la Iglesia de Cuenca y la nobleza local, en el cual se analizarán más en profundidad los conflictos recién aludidos.

Por otra parte, durante el reinado de Enrique IV también algunos eclesiásticos conquenses ejercerían un papel destacado junto al obispo Barrientos en la defensa de la causa regia. Tal fue el caso del provisor de la diócesis Alfonso García de San Felices, quien en fecha que nos es desconocida tomó la villa de Requena y su fortaleza por mandato de Enrique IV, encargándose después de su defensa e impidiendo así que el noble don Álvaro de Mendoza se apoderase de ella[384]. Hay que llamar la atención

---

[382] AMC, leg. 197, exp. 5, ff. 37v-38r.

[383] AMC, leg. 197, exp. 1, f. 17r.

[384] Por ello posteriormente Alfonso García de San Felices recelaría de don Álvaro de Mendoza así como de sus parientes, criados y demás allegados, temiendo que pudieran ocasionarle algún daño, lo que motivaría que finalmente, en 1477, solicitase el amparo regio. De este modo, en agosto de dicho año, los Reyes Católicos tomaron bajo su protección a Alfonso García de San Felices y a sus criados y familiares, mandando además a las justicias laicas de Cuenca que les auxiliasen frente a algún posible ataque por parte de Álvaro de Mendoza. AGS, *Registro General del Sello*, VIII-1477, f. 432.

sobre la importancia estratégica que revestía Requena, al encontrarse muy próxima a la frontera con el reino de Valencia, lo que explica el interés del monarca castellano por su control, debiéndose recordar también que se trataba de una villa perteneciente a la diócesis conquense.

Años después del levantamiento nobiliario contra Enrique IV, algunos de los prelados castellanos que entonces habían mostrado su apoyo al infante don Alfonso acabarían enfrentándose a los Reyes Católicos, aunque ahora sus planteamientos tendrán un marcado carácter personalista. Tal fue el caso del arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo, que acabará cayendo con su actitud de oposición a los Reyes Católicos en una situación de cada vez mayor aislamiento dentro del contexto convulsivo del momento[385]. No sucedería lo mismo, en cambio, con la Iglesia y concejo conquenses, quienes manifestaron su apoyo incondicional a los monarcas desde muy pronto.

La proclamación en Cuenca de los Reyes Católicos tuvo lugar el 28 de diciembre de 1475, estando presentes Juan Hurtado de Mendoza, guarda mayor de la ciudad y su tierra, su hijo Honorato de Mendoza y Mosén de Alarcón, lugarteniente del guarda, así como las justicias, regidores, caballeros, escuderos y otros muchos simples vecinos de la ciudad. Saliendo todos ellos de la catedral, donde se acababan de celebrar unas honras fúnebres por Enrique IV, a continuación, en las gradas del templo, se procedió a proclamar a los nuevos monarcas, sobre lo cual las actas concejiles nos han dejado un vivo testimonio:

"El dicho sennor Juan Furtado alço con sus manos en una lança darmas un pendon de çendal colorado, pintado en el las armas reales de leones e castillos, disiendo el a altas boses e todos los otros que con el estavan juntos al dicho acto: Castilla, Castilla, Castilla por la muy alta e muy poderosa prinçesa donna Ysabel nuestra sennora, reyna de Castilla e de Leon, e por el muy alto e muy poderoso prinçipe, rey e sennor [don Fernan]do nuestro sennor, el rey de Castilla e de Leon, commo su legitimo marido, lealtad, lealtad, lealtad, *tannendo tronpetas e atabales e tanb[uri]nos, e fasiendo las*

[385]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 287-289.

mas alegrias que podian. E luego de ay cavalgo el dicho sennor Juan Furtado a cavallo e la justiçia e regidores e todos los cavalleros e escuderos de la dicha çibdat, e con ellos grand presença de gente de la dicha çibdat andando por las calles della con el dicho pendon e tronpeta e atabales e tanburinos, disiendo a altas boses todos: Castilla, Castilla, Castilla...*E luego sallieron al canpo t[oda] la dicha gente con el dicho pendon, e tornaron a entrar en la dicha çibdat por la puerta que disen del Postigo della, que esta en [medio] de la dicha çibdat, en entrando en ella todos disiendo a altas boses:* Castilla, Castilla, Castilla..., *tanniendo los dichos tronpeta e atabales e tanburinos, e subieron el dicho pendon en la torre que esta ençima de la dicha puerta de la dicha çibdat, e dexaronlo ende puesto*"[386]

Este temprano apoyo de Cuenca a los Reyes Católicos explica que éstos, el 22 de febrero de 1476, mandasen a las ciudades y villas del obispado juntarse con don Pedro Carrillo, conde de Priego, Juan Hurtado de Mendoza, guarda mayor de Cuenca y consejero real, y su hijo Honorato de Mendoza, para hacer la guerra a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, y a Lope Vázquez de Acuña, los cuales estaban <<en la conpannia del adversario de Portugal>>[387].

Dos años más tarde, en mayo de 1478, los monarcas se dirigieron en una carta al cabildo catedralicio conquense para que enviase algún representante a la congregación del clero que se iba a celebrar en Sevilla ese mismo año[388]. Se trata del denominado <<concilio nacional>> de Sevilla, que se celebró en esta ciudad entre el 8 de julio y el 1 de agosto de 1478 y que no sería, en realidad, otra cosa que una asamblea clerical,

---

[386]AMC, leg. 199, exp. 4. Se trata de un documento de enorme interés que, por desgracia, se encuentra extremadamente deteriorado. Años más tarde, el 4 de diciembre de 1504, pocos días después de tenerse noticia de la muerte de la reina doña Isabel, se celebrarían en la catedral conquense solemnes exequias fúnebres por la reina difunta, procediéndose acto seguido, ante la puerta del templo, a alzar el pendón por la nueva reina, doña Juana. Luego, al igual que se había hecho cuando se proclamó a los Reyes Católicos, se recorrieron las calles de la ciudad pregonando la noticia con acompañamiento de atabales y tambores. Se llegó a la Puerta de Huete y luego a la del Postigo, y encima de esta última se colocó una bandera blanca con las armas reales, y después se continuó con gran algarabía por las calles de la ciudad, diciendo siempre: <<Castilla, Castilla, Castilla por la reina doña Juana...>>, hasta llegar de nuevo a la catedral, donde se entregó el pendón a Pedro de Villar de Olalla, *clérigo, en nombre del tesorero del cabildo*. AMC, leg. 219, exp. 1, ff. 165r-166r.

[387]AGS, *Registro General del Sello*, 22-II-1476, f. 86.

[388]BN, Ms. 13072, f. 199v.

aunque sin duda la más ambiciosa en cuanto a sus objetivos de las realizadas hasta entonces, puesto que en ella se abordarían casi todas las cuestiones que más preocupaban al clero y que más interesaban a la política eclesiástica de los monarcas[389]. Sabemos que a esta asamblea asistió el provisor Gabriel Condulmario en representación de todo el clero de la diócesis de Cuenca, junto con los procuradores del clero de los otros obispados del reino[390].

La reunión fue convocada personalmente por los Reyes Católicos, quienes, sin estar presentes en su desarrollo, sí lo siguieron de cerca desde el alcázar de Sevilla, donde residieron mientras duró. Hay que destacar el hecho de que su convocatoria tuvo lugar en unos momentos de convulsión política motivada por los conflictos de sucesión al trono castellano, y de hecho uno de los temas fundamentales que se trataron fue la actitud de la Iglesia castellana ante la guerra con Portugal[391], buscando sin duda con ello los Reyes Católicos asegurarse el apoyo de los asistentes a su causa frente a las pretensiones de la Beltraneja.

Desde luego la ciudad e Iglesia de Cuenca siguieron permaneciendo en todo momento fieles a los monarcas. Precisamente al año siguiente, en concreto el 18 de octubre de 1479, a la entrada de la puerta del Postigo de la ciudad de Cuenca, el rey don Fernando juró guardar todos los privilegios de la urbe <<poniendo su mano derecha commo la puso en una crus de plata, en un libro misal que merçed en sus manos tenia el religioso fray Guyllen, guardian de la casa e monasterio de sennor Sant Françisco, que es de fuera de la dicha çibdad>>[392].

---

[389]Las actas de esta asamblea fueron publicadas por Fidel Fita: <<Concilios españoles inéditos: Provincial de Burgos de 1261 y Nacional de Sevilla de 1478>>, *Boletín de la Real Academia de la Historia*, XXII (1893), pp. 209-257. Sobre el mismo tema también puede verse: F.J. Villalba Ruiz de Toledo, *Aproximación al Concilio Nacional de Sevilla, 1478*, Madrid, 1984.

[390]ACC, s.a. caj. 2, leg. 9, nº 115.

[391]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 409. Otros temas importantes que también se abordaron en la reunión fueron el respaldo al procedimiento de suplicación real para la provisión de beneficios, el rechazo de los extranjeros en las vacantes producidas y la delimitación de la jurisdicción eclesiástica.

[392]AGS, *Cámara de Castilla-pueblos*, leg. 7, doc. 23.

Un prelado conquense sobre el que debe destacarse su colaboración ocasional en algunas empresas militares al servicio de los Reyes Católicos es don Alonso de Fonseca. Ya en 1477, siendo todavía obispo de Ávila, fue uno de los capitanes del ejército de los Reyes Católicos que tomó la ciudad de Toro durante la guerra contra el rey de Portugal, manifestando de este modo su apoyo incondicional a doña Isabel[393]. Diez años más tarde, en 1487, ya como obispo de Cuenca, don Alonso de Fonseca enviaría gentes de armas y peones a Córdoba, para auxiliar a las tropas regias en la guerra de Granada[394], en la que también sabemos que intervino indirectamente el arcediano de Alarcón y protonotario apostólico Gabriel Condulmario, auxiliando en diversos asuntos a los monarcas[395].

B) *La internacionalización de los conflictos políticos. Participación de los obispos de Cuenca en actividades diplomáticas durante el Cisma y años posteriores*

La entronización de la dinastía Trastámara supuso, como es sabido, un fuerte incremento de las relaciones exteriores, alcanzando la Monarquía castellana un destacado protagonismo en el marco occidental como consecuencia de su participación en los conflictos políticos de dimensión internacional más señalados del momento. Los individuos vinculados a la materialización concreta de esa política internacional, sobre todo en forma de actividad negociadora ante otras monarquías, generalmente se caracterizarán por su vinculación a los medios cortesanos y por la proximidad personal a los monarcas Trastámara, así como por disponer de una cierta formación cultural superior habitualmente a la media de la que cabe encontrar entre otros personajes cortesanos. Así, letrados y clérigos van a tener en esta esfera política un papel

---

[393]Hernando del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos*, I, pp. 281-283.

[394]*Ibid.*, II, p. 258.

[395]El 22 de enero de 1488 los Reyes Católicos se dirigieron en una carta al cabildo catedralicio conquense comunicando que el protonotario Gabriel Condulmario se encontraba ocupado por mandato regio en varios asuntos relativos a la guerra de Granada, por lo que debían hacerle presente como si residiese en sus beneficios, entregándole todas las rentas de su dignidad y canonjía. BN, Ms. 13072, f. 202v.

relevante, contrariamente a lo que sucede con los miembros de la nobleza, cuya intervención será mucho más infrecuente.

En la participación de los clérigos en las relaciones exteriores habría de jugar en esta época una enorme influencia la extraordinaria intensificación de la actividad negociadora que conllevó el Cisma que, por su naturaleza eclesiástica, favorecía el protagonismo clerical, formándose con tal motivo un compacto grupo de eclesiásticos especialmente dedicados a la representación política en el exterior, continuando también dicha presencia eclesiástica en otros momentos y situaciones muy distintos con posterioridad a la resolución del Cisma[396]. La participación de la Iglesia de Cuenca, sobre todo a través de sus prelados, en la política exterior durante estos años fue especialmente destacada, tal como a continuación se verá.

Juan I tuvo particular interés por incrementar los contactos políticos con los pontífices durante los primeros tiempos de su reinado. Así, en 1381, Juan López, clérigo conquense, estudiante de Derecho Canónico, familiar y comensal del obispo de Zamora, actuaba como procurador del monarca castellano ante el papa, a fin de obtener por súplica del rey algunos beneficios eclesiásticos, ocupándose el propio obispo de Zamora, Juan Rodríguez, de transmitir las posturas regias a los miembros del Sacro Colegio Cardenalicio. Este paulatino acercamiento al Pontificado tendría como una de sus consecuencias el compromiso de Castilla a colaborar con Clemente VII y con Francia en la campaña contra Urbano VI y el reino de Sicilia, circunstancia que sería a su vez aprovechada por Juan I para demandar en 1385 numerosos beneficios eclesiásticos a través de la mediación de Juan Cabeza de Vaca, entonces obispo de Coimbra y futuro obispo conquense[397].

El obispo de Cuenca don Álvaro Martínez también habría de ejercer un destacado papel en la política exterior de Castilla durante las etapas iniciales del Cisma. Andaba por Roma en 1378 cuando tuvo lugar la elección de Urbano VI, y salió de la curia acompañando a los cardenales disidentes que semanas después

---

[396] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 290-291.

[397] *Ibid.*, pp. 45-46.

elegían en Fondi a Clemente VII. En 1380 se encontraba en Medina del Campo junto con los embajadores enviados por el rey a Aviñón y a Roma, Álvaro Meléndez y Fernando de Illescas, y pudo informar como testigo sobre las dos sucesivas elecciones según las conversaciones tenidas con los electores del papa aviñonense, el cual premió estos servicios encumbrándole al gobierno de la diócesis conquense[398]. Años más tarde, en abril de 1390, el obispo don Álvaro Martínez fue uno de los testigos que estuvieron presentes en Guadalajara en el acto mediante el cual la princesa doña Catalina de Lancaster abandonó la obediencia al papa de Roma para adherirse a Clemente VII de Aviñón[399], y en 1395 marchaba como embajador del rey castellano para reanudar los contactos con el monarca francés y tratar de hallar nuevas soluciones para el Cisma[400].

Don Juan Cabeza de Vaca, ya como obispo de Cuenca, también participaría en algunas actividades relacionadas con el Cisma. Así, por ejemplo, el 29 de abril de 1403 estuvo presente en la ceremonia que se desarrolló en Santa María de Valladolid con motivo de la restitución por parte de Castilla de la obediencia al papa Luna, y a la que también asistieron, entre otros, el rey, el cardenal de España Pedro Fernández de Frías y los obispos de Burgos, Salamanca, Calahorra, Astorga, Zamora, Orense y Palencia[401].

En la década siguiente la evolución del Cisma se acercaría a su fin con la celebración del Concilio de Constanza, en cuya preparación tendría un lugar relevante el secretario real don Pedro Fernández de Laguardia, arcediano de Grado y de Madrid, quien realizaría alguna misión en los medios pontificios. Las informaciones obtenidas por el propio Fernández de Laguardia seguramente influirían mucho en la posición de sustracción de obediencia hacia Benedicto XIII por parte de Juan II, quien

---

[398] Beltrán, *Cartulario*, I, nº 70, nota 1, p. 646.

[399] Demetrio Mansilla Reoyo, *La documentación española del archivo de Castel S. Angelo*, pp. 96-97.

[400] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias...*, p. 129.

[401] José Goñi Gaztambide, <<Los españoles en el Concilio de Constanza>>, p. 211.

invitaría a este pontífice a la renuncia, suponiendo la negativa la efectiva sustracción el 15 de enero de 1416. Este edicto de sustracción suponía la confrontación de los criterios del rey con los de algunos de los principales negociadores eclesiásticos de Castilla en el Cisma, tales como Sancho de Rojas o Alfonso de Egea, entre otros, lo que contribuiría a explicar el limitado número de clérigos enviados para representar al monarca ante el Concilio, siendo todos ellos individuos de probada afinidad personal con el rey, lo que da idea de cómo se trataba de una representación personal del monarca y no del reino ni, menos aún, de la Iglesia castellana[402].

Dentro de la embajada enviada por el rey al Concilio de Constanza habría de desempeñar un papel de primer orden el obispo de Cuenca don Diego de Anaya. Fue el 19 de junio de 1416 cuando Juan II tomó el acuerdo de enviar al concilio una embajada con plenos poderes en orden a la unión de la Iglesia, algunos de cuyos miembros aún eran, en el fondo, partidarios de Benedicto XIII, entre ellos el obispo conquense. La lista definitiva de embajadores estuvo constituída por los siguientes personajes, la mayoría de ellos eclesiásticos: Diego de Anaya Maldonado, obispo de Cuenca; Fernán Pérez de Ayala, merino mayor de Guipúzcoa; Juan Rodríguez de Villalón, obispo de Badajoz; Martín Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles; Fray Fernando de Illescas, confesor de Juan I; Fernando Martínez de Ávalos, deán de Segovia; Diego Fernández de Valladolid, deán de Palencia; Fray Luis de Valladolid, confesor del rey; Juan Fernández de Peñaflor, Doctor en Decretos; y Pedro Fernández de Laguardia, secretario real y arcediano de Grado[403].

En el mes siguiente, en concreto el 4 de julio, Juan II enviaría una carta dirigida al obispo y cabildo catedralicio de Cuenca exhortándoles a que diesen a conocer en todo el obispado la noticia de la convocatoria del concilio, y mandando además al obispo don Diego que acudiese personalmente a reunirse con la embajada que partiría hacia Constanza. Poco después, el 17 de

---

[402]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 299.

[403]José Goñi Gaztambide, <<Los españoles en el Concilio de Constanza>>, pp. 146-147.

julio, el cabildo catedralicio recibió esta carta del rey de manos del mensajero Fernando Díaz de Torquemada, escudero regio, a quien se le comunicó que el obispo don Diego ya había partido hacia la Corte para incorporarse a la embajada[404].

El viaje hacia Constanza fue largo y complicado, y por fin los miembros de la embajada llegaron el 30 de marzo de 1417. Pero todavía entonces se sospechaba de la vinculación de algunos de ellos a Benedicto XIII, quien a fines de ese mismo año aún intervenía en la Iglesia de Cuenca[405], e incluso después de la incorporación definitiva de la embajada al concilio, rompiendo definitivamente con el papa de Peñíscola, la reina madre doña Catalina, tutora de Juan II, se mantendría a la expectativa hasta la elección final de Martín V[406].

Llegados a este punto resulta inevitable hacer una breve referencia a lo que a veces se ha denominado como <<Concordato de 1418>>, que fue un acuerdo realizado en dicho año entre los embajadores de Juan II y el papa Martín V, por cuanto representa un hito de la posición negociadora que va a caracterizar las relaciones entre la Monarquía castellana y el Pontificado durante el resto de la centuria, en el sentido de que a partir de ahora algunas atribuciones pontificias esenciales irán experimentando un paulatino sometimiento a un marco legal estricto, convirtiéndose la propia Monarquía en fiscalizadora del cumplimiento de ese marco legal[407].

---

[404]ACC, AC-1416, f. 138r-v.

[405]Se trata de la provisión de una canonjía y prebenda en la Iglesia de Cuenca a favor de Juan González de Frómista realizada por Benedicto XIII el 3 de noviembre de 1417. ASVat., *Reg. Vat.* 329, ff. 71v-72r.

[406]José Goñi Gaztambide, <<Los españoles en el Concilio de Constanza>>, pp. 148-149.

[407]Lo que queda reflejado en el texto del acuerdo, que se firmó el 13 de mayo de 1418, es que el Papado deberá tener, en los cinco años siguientes que se establecen como marco temporal de aplicación, unos límites concretos en el ejercicio de determinadas atribuciones de carácter tan propiamente eclesiástico como eran los nombramientos de cardenales, la reserva y colación de beneficios y la percepción de annatas y servicios comunes. Los efectos de este acuerdo de valor tan simbólico van a pesar sobre toda la evolución posterior, puesto que, a la vez que se inauguraba una nueva actitud en las relaciones Monarquía-Pontificado, pasados los cinco años previstos para su aplicación las atribuciones pontificias se irán limitando más por la fiscalización monárquica, siguiendo los planteamientos expresados en este texto. José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 48-49.

Las aproximadamente dos décadas que seguirán a los acuerdos de 1418 conocerán un fuerte impulso en lo que se refiere a la obtención de prerrogativas por parte de Juan II gracias a las concesiones pontificias resultantes de diversas embajadas castellanas. Es ahora cuando comienza la participación del obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna en tareas diplomáticas, siendo un primer ejemplo de ello la embajada realizada por este prelado en 1421 a Roma, mediante la cual suplicaría que se concediesen perpetuamente a Juan II las tercias de fábrica para ayuda de la guerra contra los moros de Granada, a la vez que se solicitaban compensaciones con cargo a las rentas eclesiásticas por los gastos de Castilla para colaborar en la unidad de la cristiandad. Todo ello, en realidad, formaba parte de las compensaciones exigidas por algunos monarcas, como el castellano, por su participación en la elección de Martín V[408]. Resultado de la buena gestión del prelado conquense sería la concesión de forma estable de las tercias de fábrica, según se contiene en una bula del 8 de octubre de 1421[409].

Al año siguiente se produciría un grave incidente entre don Álvaro de Isorna y el obispo cicastrense Tomás, embajador de Enrique V de Inglaterra. Sucedió el día de Pascua de Resurrección, 12 de abril de 1422, celebrando la misa solemne en San Pedro el propio Martín V. Isorna y el obispo inglés discutieron sobre el puesto a ocupar durante la celebración, y el inglés, sin reparar en la solemnidad del acto, dio dos bofetadas al prelado conquense, huyendo luego con los suyos a refugiarse en su posada. Temiendo ser agredidos por los embajadores castellanos, los ingleses pidieron ayuda a los portugueses, sus aliados, pero al parecer Isorna, de temperamento sereno, trató de imponer la reconciliación.

No obstante, el papa al día siguiente, impresionado por el escándalo de la víspera, sin esperar a mejores informes, dirigió a Juan II la bula *Cum pridem*, en cuyo texto se condenaba por

---

[408] *Ibid.*, pp. 49-50. Sobre este último punto véase: José Goñi Gaztambide, <<Recompensas de Martín V a sus electores españoles>>, *Hispania Sacra*, 11 (1958), pp. 259-297.

[409] Beltrán, *Bulario*, I, p. 107.

igual el proceder de ambos prelados: <<...in ipso pene consecrationis articulo contendentes de loco in rixam inhonestam devenerunt, qui tumulto suscitato, omni Deo et nostra reverentia postposita, in seipsos manus violenter et turpiter injecerunt...>>[410]. Debido a ello Isorna expresaría sus quejas al pontífice, por lo que Martín V finalmente, el 12 de junio, y tras haberse enterado de la verdad de lo sucedido, dirigiría una nueva bula a Juan II haciendo encomio y defensa del obispo conquense[411]. A pesar de todo el conflicto seguiría latente y años después, en el Concilio de Basilea, se producirían nuevos enfrentamientos entre ingleses y castellanos por la cuestión de la preferencia.

Las intensas actividades diplomáticas en torno a la restauración de un poder pontificio plenamente legítimo se encaminaron hacia su definitivo final en 1434, con la preparación del Concilio de Basilea. Ello supuso un esfuerzo último por parte de la diplomacia castellana y, en particular, de un buen número de eclesiásticos que durante los últimos años habían estado trabajando a fin de acelerar la llegada de esa solución. La larga duración del concilio y su propia importancia exigió de una nutrida representación eclesiástica castellana en el mismo. Los personajes principales de la embajada de Castilla en el concilio, que desempeñaban de hecho una posición de jefatura en la misma, estaban caracterizados por poseer una importante experiencia de representación exterior del rey de Castilla en muy diversas misiones, a la vez que por haber dado repetidas muestras de adhesión personal al monarca. Este era el caso, sobre todo, del obispo don Álvaro de Isorna y de don Alfonso de Cartagena[412].

Al principio se dio la presidencia de la embajada castellana en el concilio al protonotario don Alfonso Carrillo, por tratarse de un sobrino del cardenal fallecido meses antes, pero vista la deslealtad del mismo a las instrucciones recibidas del rey castellano, se acabaría prescindiendo de él, tomando entonces la

---

[410]Vicente Beltrán de Heredia, <<La embajada de Castilla en el Concilio de Basilea>>, pp. 16-17.

[411]Beltrán, *Bulario*, I, pp. 107-108.

[412]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis*..., pp. 302-303.

dirección Isorna como prelado más antiguo de la embajada, quien después compartió esa función con Alfonso de Santa María, promovido a Burgos en 1435. En las discusiones sinodales ambos tuvieron que enfrentarse repetidas veces con algunos exaltados que trataban de restringir los poderes y derechos del papa, para de esta forma moderar la marcha del concilio. Durante el mismo, Isorna siempre se comportó como firme partidario del papa, tratando de llegar a un acuerdo con los conciliaristas[413]. También debe destacarse la presencia en la embajada, como auxiliares de los prelados, de algunos clérigos conquenses, como Antonio Gil, doctor en cánones y canónigo de Cuenca, o Nuño Álvarez de Fuentencalada, bachiller en decretos y beneficiado en la Iglesia conquense.

Durante el desarrollo del concilio de nuevo se plantearía la discusión entre la embajada castellana y la inglesa acerca de la preferencia en cuanto a los puestos a ocupar. El 22 de octubre de 1434 el protonotario apostólico Alfonso Carrillo y el obispo conquense fueron colocados <<in altis sedibus>> después de los embajadores de Francia. Pero Inglaterra no se resignaba a ceder la preferencia a Castilla, por lo que pronto hubo discusiones sobre si el puesto inglés era o no de más preferencia que el castellano. Durante el desarrollo del conflicto, don Álvaro de Isorna y su fiel auxiliar Nuño Álvarez de Fuentencalada defendieron con ahínco los derechos de Castilla, y en diciembre de 1435 Isorna insistiría en que el concilio declarase que a los castellanos se les concedía el primer puesto después de Francia. Finalmente, el 6 de mayo de 1436, el concilio revocó sus acuerdos en materia de asientos, dejando a las partes en su derecho. Entonces los castellanos ocuparon el banco de la izquierda que tenían los ingleses, y sin resistencia de nadie los obispos de Cuenca y Burgos se colocaron después del patriarca de Aquileya, hasta que el 28 de julio el concilio asignase a los embajadores castellanos el primer lugar <<in honore et voce>> inmediatamente

[413] Beltrán, *Cartulario*, I, pp. 346-347.

después de los franceses, ante lo cual, lógicamente, protestarían los representantes de Inglaterra y otros reinos[414].

Mientras tanto, en enero de 1436, Juan II había enviado a Florencia al deán conquense Pedro de Bocanegra para informar a Eugenio IV de su decisión de permanecerle fiel fuese cual fuere el resultado del concilio, cuya agitación inspiraba al monarca grandes inquietudes. Para mayor firmeza de su adhesión, el rey otorgó a Bocanegra amplias facultades para <<tractandi, firmandi pro nobis et nomine nostro regnorumque subditorum et adhaerentium nostrorum cum praefato sanctissimo Eugenio...amicitias, confederationes et ligas ad perpetuum vel ad tempus sub quacumque forma>>. Una vez cumplido el mandato regio, en julio de 1436 Pedro de Bocanegra dispuso su regreso a Castilla con su comitiva, compuesta de veinticinco personas[415].

Resultado de toda esta destacada participación conquense en el Concilio de Basilea será, por ejemplo, la autorización que el 8 de julio de 1435 otorgó el concilio a don Álvaro de Isorna para que pudiese disponer por testamento de la cantidad de hasta 12.000 florines de oro de cámara procedentes de los bienes recibidos del rey o por herencia o bien adquiridos por su industria personal que no estuviesen gravados con destino al culto o servicio de la Iglesia[416]. Por otro lado, con fecha 15 de junio de 1436, el Concilio concedería a la catedral conquense siete años y siete cuarentenas de perdón en las fiestas de la Asunción y Natividad[417].

Tres años más tarde, en la primavera de 1439, sin haberse resuelto aún del todo el problema conciliarista, don Álvaro de Isorna acudiría en representación de Castilla y Portugal a la Dieta de Maguncia, donde se mostró como un acérrimo propulsor de la paz para llegar a un acuerdo entre los representantes del

---

[414]Vicente Beltrán de Heredia, <<La embajada de Castilla al Concilio de Basilea>>, pp. 10-27.

[415]Beltrán, *Cartulario*, I, pp. 360-361.

[416]Beltrán, *Cartulario*, I, p. 348.

[417]Sanz, nº 696.

concilio y los del papa[418]. Mientras Isorna estaba en Maguncia, se fraguó una combinación para comprometerle en los planes del Concilio de Basilea a fin de dividir el bloque de la resistencia castellana. Habiendo quedado vacante la Iglesia de Sevilla por muerte de don Diego de Anaya, los conciliaristas proyectaron que Isorna ocupase esta sede, pudiendo entonces disponer de la vacante de Cuenca en favor de don Alfonso Carrillo, nepote del cardenal difunto, que tenía la titularidad de Sigüenza, y entregando ésta a Diego Rapado, obispo de Orense. Pero Isorna no se prestó a tal juego, manteniendo su fidelidad al rey y a su decisión de defender la autoridad del pontífice. En julio de aquel año el obispo conquense se encontraba en Estrasburgo con la legación castellana, en espera de órdenes de Juan II[419].

Con el Concilio de Basilea se había llegado al cenit del protagonismo eclesiástico en la representación diplomática del rey de Castilla. A partir de ese momento comienza una fase de cierta reducción de esa presencia del clero castellano en este tipo de funciones, pero sin que llegue a producirse una ruptura, sino persistiendo ciertos signos de continuidad que no llegarían a alcanzar en lo cuantitativo los niveles de tiempos anteriores, advirtiéndose una mayor profesionalización de estas actividades diplomáticas, lo que favorecerá a los letrados, e incidiendo en favor de esa reducción, por un lado, la definitiva extinción del problema del Cisma que tanto influía en el conjunto de las relaciones internacionales de la época, y, por otro lado, el menor peso que el Pontificado, a raíz de Basilea, ejerció en el conjunto de la política de las monarquías occidentales[420].

Esta reducción generalizada de la presencia del clero castellano en actividades diplomáticas al servicio de la Monarquía habría de tener un fiel reflejo en la Iglesia conquense, cuyos obispos habían jugado un destacado papel en etapas anteriores, pues tras el problema conciliarista, y durante el resto de la Baja Edad Media, ya no volveremos a encontrar nuevas

---

[418]Beltrán, *Bulario*, I, p. 108.

[419]Beltrán, *Cartulario*, I, pp. 347-348.

[420]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 304.

noticias que aludan a la participación destacada del clero conquense en la diplomacia regia.

V-EL PLANO ECONÓMICO

1-La protección regia para la economía de la Iglesia conquense

A) *Confirmación de privilegios y nuevas concesiones*

De forma general para el conjunto del reino castellano, lo que caracteriza más significativamente la época Trastámara en lo que se refiere a los privilegios eclesiásticos en el marco de las relaciones Iglesia-Monarquía es el predominio absoluto de las confirmaciones reales de estos privilegios. De este modo se consolidará la posición privilegiada de la Iglesia que, en sus rasgos más característicos, ya había quedado definida, en particular, durante la segunda mitad del siglo XIII. Estas confirmaciones, tal como se expresaban a veces en su texto, convertían en incuestionable el hecho de que la violación de los privilegios eclesiásticos no suponía sólo un atentado contra derechos particulares, sino que también era, en cierta forma, un acto de traición hacia el poder real mismo[421].

Si el reinado de Enrique II fue un momento de confirmaciones masivas de privilegios eclesiásticos, utilizándose en ellos, generalmente, como más reciente referencia de legitimidad la alusión al rey Alfonso XI, sin tener en cuenta al monarca precedente, las instituciones eclesiásticas más relevantes tenderán a asegurarse, al margen de las confirmaciones generales de privilegios de cada monarca en el momento de acceder al trono, la confirmación individualizada de sus privilegios particulares al principio de cada reinado, tendiéndose a sistematizar tal procedimiento en tiempos de los Reyes Católicos a través del Consejo Real, coincidiendo con el momento en que la estabilización de privilegios para las principales instituciones eclesiás-

[421] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 95-97.

ticas, sobre todo mitras episcopales y cabildos catedralicios, parece definitiva[422].

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, durante la época Trastámara, y de acuerdo con la tónica general de todo el reino, también se observa un predominio de las confirmaciones reales de privilegios ya preexistentes, pues el otorgamiento de nuevas mercedes será muy limitado, como más adelante se verá.

Ya el 13 de mayo de 1366, al comienzo de la guerra Trastámara, Enrique II confirmó de forma general todos los privilegios de la Iglesia castellana[423], y el 17 de noviembre del mismo año haría otro tanto con los privilegios del cabildo catedralicio conquense referentes a salinas, diezmos y portazgos[424].

Durante las Cortes de Burgos de 1367 Enrique II otorgaría de nuevo numerosas confirmaciones generales de privilegios en favor no sólo de la Iglesia castellana, sino también de los concejos y la nobleza del reino. De este modo, fue en el transcurso de la celebración de estas Cortes cuando el monarca, a 7 de febrero, confirmó todos los privilegios del cabildo catedralicio conquense[425], siendo en la misma fecha cuando se otorgó otra confirmación general en favor del concejo de Cuenca[426]. Algunos días más tarde, el 20 de febrero, Enrique II concedería a la aldea de Belmonte, situada en la diócesis de Cuenca, un privilegio mediante el cual en adelante pasaría a ser villa independiente con respecto a la jurisdicción de Alarcón[427].

Otro momento de confirmación generalizada de los privilegios de las principales instituciones del reino, incluídas las eclesiásticas, fue durante las Cortes de Toro de 1371. Es probablemente con ocasión de la convocatoria de esta reunión de

---

[422] *Ibid.*, p. 98.

[423] ACC, siglo XIV, nº 273.

[424] ACC, siglo XIV, nº 275.

[425] AHN, Micr., rollo 14217, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 92.

[426] AMC, leg. 3, exp. 7.

[427] Eusebio Ramírez, «*Privilegio eximiendo a la aldea de Belmonte...*», pp. 356-360.

Cortes cuando el cabildo catedralicio conquense redactó un cuaderno de peticiones dirigidas al monarca, exponiendo los diversos agravios económicos y jurisdiccionales que se sufrían, los abusos en materia decimal cometidos por la Orden de Santiago y algunos nobles, y solicitando del rey la confirmación general de todos los privilegios que poseían[428].

Situándonos ya en el reinado de Juan I, el 7 de agosto de 1379 este monarca, recién iniciado su mandato, otorgaría la confirmación general de sus privilegios al cabildo catedralicio conquense[429], y el 26 de agosto del mismo año haría otro tanto con el cabildo de clérigos beneficiados de Huete[430]. Varios años más tarde, el 18 de febrero de 1385, a petición del obispo de Cuenca don Álvaro Martínez, Juan I confirmará de forma específica algunos privilegios de la Iglesia conquense[431].

La primera confirmación otorgada por Enrique III en favor de la Iglesia de Cuenca fue la del privilegio para que no pechasen moneda forera los clérigos *in sacris*, teniendo lugar dicha confirmación el 20 de febrero de 1392[432]. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1393, el monarca confirmaría todos los privilegios del cabildo de clérigos beneficiados de Huete[433], otorgando también la confirmación general de todos los privilegios de la Iglesia conquense el 15 de diciembre de dicho año[434].

Para el reinado de Juan II son dos las confirmaciones generales de privilegios de que tenemos noticia. Por un lado, la otorgada en favor del cabildo catedralicio el 6 de abril de 1408, poco después del inicio del reinado[435], y por otro la concedida

---

[428]ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, ff. 129r-135r.

[429]ACC, siglo XIV, nº 306.

[430]AEH, *Inventario*, leg. 1º, nº 6.

[431]ACC, siglo XIV, nº 252.

[432]Sanz, nº 571.

[433]AEH, *Inventario*, leg. 1º, nº 5.

[434]ACC, siglo XIV, nº 312.

[435]ACC, original, s.s.

el 30 de octubre de 1433 en favor del cabildo de clérigos beneficiados de Huete[436]. Algunos años antes, el 26 de julio de 1428, este mismo monarca había otorgado a la hasta entonces villa de Huete el título de *ciudad*[437].

No nos han quedado noticias sobre las confirmaciones generales realizadas durante el reinado de Enrique IV, aunque es evidente que éstas tuvieron que producirse, debiendo ser atribuída la falta de información a una pérdida documental. Por otro lado, conviene también señalar que fue Enrique IV quien el 12 de noviembre de 1465, por Real Cédula, concedió a la ciudad de Cuenca el título de *muy noble e muy leal*[438].

Centrándonos por último en el reinado de los Reyes Católicos, la confirmación general de los privilegios de la Iglesia de Cuenca por parte de los monarcas tendría lugar el 19 de agosto de 1478, durante la celebración en Sevilla de la asamblea general del clero, a la que asistió el provisor de la diócesis Gabriel Condulmario, quien solicitaría de los reyes dicha confirmación general[439]. Tres años antes, el 20 de enero de 1475, la reina Isabel había otorgado otra confirmación general de privilegios en favor de concejo conquense[440], y el 28 de febrero 1477 los monarcas concederían a la ciudad de Huete el título de *muy noble e muy leal*[441].

Ya se apuntó antes cómo, al margen de todas estas confirmaciones generales, el otorgamiento de nuevos privilegios en favor de la Iglesia conquense por los monarcas durante la época Trastámara fue muy limitado. En concreto son sólo dos las nuevas concesiones de que tenemos noticia, ambas en favor del cabildo catedralicio.

---

[436] AEH, *Inventario*, nº 7.

[437] Archivo Municipal de Huete, original, s.s. / Juan Julio Amor Calzas, *Curiosidades históricas de la ciudad de Huete*, pp. 75-76.

[438] AMC, leg. 197, exp. 1, f. 17r.

[439] ACC, s.a. caj. 2, leg. 9, nº 115.

[440] AMC, leg. 8, exp. 20.

[441] Archivo Municipal de Huete, original, s.s. / Juan Julio Amor Calzas, *op. cit.*, pp. 76-78.

La primera consistió en un privilegio otorgado por Enrique IV el 11 de febrero de 1466, y a través del cual se concedió al cabildo que pudiera elegir anualmente, en los lugares de Noheda y Olivares, en la diócesis de Cuenca, 60 vecinos que quedarían excusados y exentos de todo pecho regio y concejil[442]. Esta concesión de excusados en favor de determinados colaboradores de las instituciones eclesiásticas constituyó una de las fórmulas de privilegio fiscal que, con relación a la Iglesia, experimentó mayor expansión durante la época Trastámara, lo que a la larga habría de dar lugar a algunos conflictos entre catedrales y concejos[443]. Por otro lado, la concesión de excusados sería frecuentemente utilizada por los monarcas, entre otras cosas, para impulsar algunas actividades económicas específicas desarrolladas por ciertas instituciones eclesiásticas, de lo que vendría a ser un claro ejemplo la mencionada concesión en favor del cabildo conquense de 60 vecinos excusados en Noheda y Olivares, pues era precisamente en estos lugares donde el cabildo poseía sus más importantes y productivos molinos hidráulicos. Por ello, en adelante los beneficios derivados de este privilegio habrían de constituir un claro incentivo para muchos vecinos de estos lugares de cara a trabajar en la explotación de los molinos hidráulicos del cabildo, lo que beneficiaría el impulso de esta actividad económica.

El otro nuevo privilegio en favor del cabildo catedralicio de que tenemos noticia fue el concedido el 21 de junio de 1485 por la reina Isabel a petición del obispo Fray Alonso de Burgos y del cabildo de la catedral, mandando que los renteros de las aceñas que el cabildo tenía en Olivares pudieran entrar a pacer con sus ganados en los términos de la ciudad de Cuenca, especialmente en el término de Villaverde, sin pagar por ello derecho alguno[444]. Este privilegio debe interpretarse como un complemento del anterior, pues con él también se buscaba como objetivo favorecer la economía hidráulica del cabildo catedralicio.

---

[442]AHN, Micr., rollo 14213.

[443]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 100.

[444]AGS, *Registro General del Sello*, 21-VI-1485, f. 320.

B) *El intervencionismo monárquico en la conflictividad de la Iglesia conquense con los concejos y la Orden de Santiago*

Durante este periodo, al igual que ya había venido sucediendo en la etapa anterior, la Monarquía intervendrá frecuentemente de cara a intentar resolver gran parte de los conflictos tanto económicos como jurisdiccionales que se produjeron entre la Iglesia conquense y los concejos de la diócesis, fundamentalmente el de la ciudad de Cuenca, así como aquellos otros conflictos económicos, cada vez más frecuentes, de la Iglesia de Cuenca con la Orden de Santiago, y estas intervenciones casi siempre se caracterizarán por el apoyo manifiesto de los monarcas hacia los eclesiásticos, fundamentalmente el cabildo catedralicio. Debido a la estructuración de la presente obra, todas las numerosas intervenciones regias en dichos conflictos no serán analizadas aquí, sino más adelante, en los apartados dedicados al estudio de las relaciones Iglesia-concejos e Iglesia-Órdenes militares.

2-La fiscalización regia de las rentas eclesiásticas

En general, el sistema de relaciones fiscales entre la Iglesia y la Monarquía que se observa en Castilla durante la época Trastámara no aporta apenas novedades en la tipología de los tributos con respecto a etapas anteriores: tercias, décimas, subsidios y cruzadas siguen siendo sus manifestaciones más habituales. No obstante, deben hacerse algunas matizaciones al respecto. Por un lado, la Monarquía, a través de sus exacciones fiscales sistemáticas sobre la Iglesia, actuó como perpetuadora de las grandes diferencias existentes entre las diversas instituciones eclesiásticas del reino. A la vez, parte de los ingresos obtenidos por los monarcas por vía de tercias o décimas fueron enajenados en favor de la nobleza de forma mucho más manifiesta que en la etapa anterior, contribuyendo así a la consecución de solidaridades nobiliarias por parte de la Monarquía. Además, la actuación recaudadora directa de la Realeza en la percepción de algunos tributos de origen eclesiástico, como

las tercias, pudo contribuir a mejorar la eficacia de la fiscalidad real por lo que suponía de mayor control de rentas[445].

Pero quizá lo que más deba destacarse es que, junto al mantenimiento global del sistema de fiscalización regia de las rentas eclesiásticas desarrollado entre 1252 y 1369, en lo que se refiere a las fuentes de renta, puede advertirse cómo entre 1369 y 1489 tuvo lugar, como tendencia más característica, la conversión en exacciones ordinarias, en unos casos, o frecuentes, en otros, de las que en el periodo anterior habían sido extraordinarias o infrecuentes, teniendo lugar, a la vez, una consolidación de las referencias legitimadoras sobre las que la Monarquía asentaba sus derechos de fiscalización, a lo que no fue ajena la actitud pontificia que, pensando en sus propios intereses financieros, fue particularmente condescendiente con los planteamientos hacendísticos de la Realeza castellana, contribuyendo así a acelerar un proceso cuyo resultado final será, ya en los tiempos modernos, que sólo aproximadamente la mitad de las rentas eclesiásticas se conviertan verdaderamente en un ingreso eclesiástico, mientras que la otra mitad quede integrada en la Hacienda Real[446].

A continuación pasaremos a analizar de qué forma se manifestó en el obispado de Cuenca este proceso de consolidación del fisco regio, y lo haremos a través del estudio de las principales fuentes de renta eclesiástica de que pudo disponer la Monarquía: tercias reales, por un lado, y cruzadas, subsidios y décimas, por otro.

A) *Las tercias reales*

El cambio fundamental que va a tener lugar durante este periodo en lo referente a este tributo con relación a la etapa anterior consistirá en su definitiva transformación en un ingreso ordinario de la fiscalidad regia, en contra de los criterios que

---

[445] José Manuel Nieto Soria, «La configuración eclesiástica de la Realeza Trastámara...», pp. 144-145.

[446] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 316-317.

originariamente dieron lugar a su aparición. Así, al margen de toda autorización pontificia, es probable que en el mismo comienzo de la dinastía Trastámara, con Enrique II, fuese ya habitual el cobro ordinario de tercias. A comienzos del siglo XV se observa una especial preocupación por la Monarquía en todo lo referente a establecer normas precisas que aseguren la puntual recaudación del impuesto, quedando reflejadas en el primer cuaderno de arrendamiento de tercias conocido, el de 1412 y, sobre todo, en el de 1433, cuyas condiciones de recaudación no sufrirían modificación en los años siguientes[447].

En este punto conviene llamar la atención sobre la prohibición que en el obispado de Cuenca existía de que los clérigos fuesen arrendadores ni recaudadores de cualquier tipo de renta real, tal como se contiene en las constituciones sinodales de don Juan Cabeza de Vaca de 1399[448] y en las de Fray Lope de Barrientos de 1446[449], tratándose de evitar con ello que los eclesiásticos y sus bienes pudieran sufrir algún tipo de daño con ocasión de dichos arrendamientos.

Sabemos que el recaudador de las tercias reales en el obispado de Cuenca correspondientes al año 1414 fue Alfonso Álvarez de Toledo. Así, el 11 de octubre de 1416 un tal Francisco Sánchez, clérigo cura de la parroquia de San Andrés de Cuenca, se obligaría a pagar antes del próximo 25 de octubre a dicho recaudador 529 mrs. correspondientes a las tercias de 1414[450], lo que viene a ser un claro indicativo de las dificultades y retrasos que a menudo se producían en el complicado cobro de este tributo.

Precisamente para el año 1414 se tiene testimonio de las quejas expuestas por Benedicto XIII por la percepción indebida y sin autorización pontificia de las tercias reales que a menudo realizaban los reyes de Castilla. Fue seguramente esta contradic-

---

[447] *Ibid.*, pp. 317-318.

[448] ACC, *Estatutos*, f. 35v.

[449] *Sínodo de 1446*, f. 12r.

[450] ACC, AC-1416, f. 148v.

ción entre lo que era práctica habitual por parte de los monarcas castellanos, exigiendo sistemáticamente el cobro de tercias, y lo que era la doctrina pontificia al respecto, entendiendo que su percepción sólo podía ser resultado de una concesión previa, lo que llevaría a Juan II a aprovechar una situación idónea como la que se produce tras el Concilio de Constanza, en que Martín V había quedado en deuda con algunos monarcas, como el castellano, para enviar a Roma al obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, a fin de que se encargase de gestionar la suplicación de gracia perpetua de las tercias reales en favor de la Monarquía castellana para, teóricamente, ser utilizadas en la lucha contra el Islam, siendo el fruto de esta suplicación la bula *Quoniam Malígno* otorgada por Martín V el 8 de octubre de 1421, en la que se contempla la concesión de forma estable de las tercias de fábrica, siempre y cuando persistiera la amenaza islámica[451].

Con posterioridad a esta fecha es cuando comenzamos a tener con cierta regularidad noticias sobre el valor de los arrendamientos de tercias por parte de la Monarquía en los diversos obispados del reino. En lo que respecta a la Iglesia conquense, a continuación se ofrecen las cifras recogidas por el profesor Miguel Ángel Ladero sobre el valor en maravedíes de las tercias reales arrendadas por la Corona entre 1429 y 1465, en particular las referentes a los partidos de Cuenca y Huete[452]:

AÑOS	PARTIDO DE CUENCA	PARTIDO DE HUETE
1429	67.120	53.782
1430	67.125	53.782
1431	67.125	53.782
1432-1434	68.828	55.030
1439	96.733	71.154
1440-1443	101.733	71.154
1444-1445	155.215	85.904
1448-1450	155.000	114.000

[451]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 319-320. El texto de la bula puede verse en: ASVat., *Reg. Vat.* 354, ff. 86-87; BN, Ms. 13104, ff. 71r-72v; y Beltrán, *Bulario*, II, doc. 638.

[452]Miguel Ángel Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, cuadro final nº 1.

1451-1452	155.000	-
1453-1454	150.000	78.000
1455-1458	200.000	140.225
1459-1462	197.054	92.672
1463-1465	237.364	90.672

Para fechas posteriores también pueden ofrecerse otras cifras. Por ejemplo, en lo relativo a Cuenca, en 1477 las tercias se arrendaron por 84.000 mrs.; en 1478 por 90.000 mrs.; en 1479 por 85.000 mrs.; en 1480 por 71.000 mrs; y en 1495 por 43.108 mrs. en dineros y 1330 fanegas de trigo por mitades. Respecto a Huete, en 1479 se arrendaron por 80.000 mrs.; en 1481 por 137.000 mrs. y 100 fanegas de cebada; en 1482 por 143.500 mrs.; en 1485 por 190.000 mrs.; en 1488 por 160.000 mrs.; en 1492 por 150.000 mrs.; y en 1495 por 240.000 mrs. Por último, también podemos señalar que en 1489 las tercias de las parroquias de la Orden de Santiago en Uclés y su tierra se arrendaron al precio de 52.000 mrs.[453].

Otro aspecto importante en lo relativo a las tercias reales que conviene recordar es el que viene dado por la enajenación de algunas de estas tercias en favor de nobles realizada por la Monarquía, cuestión que sería denunciada por los pontífices, quienes a pesar de todo no conseguirían erradicar dicha enajenación. En el obispado de Cuenca, durante la época Trastámara, también encontraremos varios ejemplos de ello, debiendo asimismo recordar que ya en la primera mitad del siglo XIV, aunque de forma menos intensa, se había iniciado el proceso de privatización de algunas tercias.

Para el siglo XV, un primer ejemplo que puede señalarse es el de los condes de Priego, quienes, al menos desde la segunda mitad de esta centuria, percibían 8000 mrs. anuales sobre las alcabalas y tercias de su señorío de Cañaveras, y 12.000 mrs. sobre las alcabalas y tercias de su señorío de Priego[454]. Por otro lado, el 24 de noviembre de 1471 Enrique IV confirmaría la

---

[453] AGS, *Expedientes de Hacienda*, leg. 8, s.f.

[454] Mª Concepción Quintanilla Raso, <<El condado de Priego de Cuenca...>>, pp. 396-397.

donación que había hecho a Diego López Pacheco, marqués de Villena, de las tercias reales de Chinchilla, Belmonte, Villena y otras tierras de los obispados de Cuenca y Cartagena y del arcedianato de Alcaraz[455]. Un último ejemplo que podemos indicar es el de Pedro Carrillo de Albornoz, alcalde mayor de los fijosdalgo de Castilla y señor de Beteta, quien el 23 de febrero de 1487 llegaría a un acuerdo con el cabildo catedralicio conquense mediante el cual éste se comprometió a celebrar varios aniversarios perpetuos a cambio de 9600 mrs. de juro sobre las alcabalas y tercias que dicho Pedro Carrillo poseía en ciertos lugares de la diócesis de Cuenca: Arrancacepas (1000 mrs.), Bólliga (1600 mrs.), Ribagorda (1000 mrs.), Ribatajada (1000 mrs.), Villarejo (1000 mrs.), Torrecilla (1000 mrs.), Arcos de la Sierra (1000 mrs.), Villalba (1000 mrs.), Valdecañas (500 mrs.) y Bascuñana (500 mrs.)[456].

De este modo vemos cómo las tercias reales, que teóricamente debían destinarse a la lucha contra el Islam, en algunas ocasiones acabarían convirtiéndose en una merced particular otorgada a ciertos nobles por el rey, quien así recompensaba algunos servicios prestados por la nobleza.

B) *Cruzadas, subsidios y décimas*

En la Castilla Trastámara, la idea de cruzada entró en una profunda decadencia a partir de mediados del siglo XIV y hasta el advenimiento de los Reyes Católicos en que parece volver a rehabilitarse. Pero, si bien esto es cierto desde un punto de vista ideológico, no supone lo mismo desde el punto de vista de sus implicaciones financieras, suponiendo, sobre todo durante el siglo XV, un importante ingreso de origen eclesiástico para las

---

[455]Pilar León Tello, *Inventario del Archivo de los duques de Frías*, II, nº 425.

[456]En el acuerdo se especifica también que, de dichos 9600 mrs. anuales, 1000 se destinarán a un aniversario por Enrique IV, 2000 para otros dos aniversarios por los padres de Pedro Carrillo, 1000 para la conservación y reparo de la capilla de los Albornoz de la catedral de Cuenca, y el resto para la dote y fundación de una capellanía perpetua en la mencionada capilla, sobre la que Pedro Carrillo tendrá derecho de patronato y podrá presentar un capellán, quien estará obligado a servir en el coro y a decir cuatro misas semanales en la capilla. No obstante, se determina que en el primer año los 9600 mrs. se gasten íntegramente en alargar la capilla y arregrarla. ACC, AC-1487, ff. 103v-104v.

arcas reales. Al igual que sucedía con las tercias, también en aquellas otras concesiones graciosas de origen pontificio que se agrupaban bajo el concepto de cruzadas, subsidios y décimas, parece predominar la continuidad en los planteamientos con respecto a los que ya se observaron en tiempos anteriores, a partir de mediados del siglo XIII, aunque ahora habrán de producirse algunas novedades en lo referente a formas de recaudación y motivos de su otorgamiento.

Por un lado, durante esta época, sobre todo en el siglo XV, la diferenciación conceptual entre cruzadas, subsidios y décimas fue mucho menos precisa que en periodos anteriores, si bien se mantuvo la fórmula según la cual la recaudación quedaba vinculada a la actividad de los colectores pontificios. Por otra parte, la mayoría de estos impuestos fueron concedidos por el Papado para subvencionar empresas contra los infieles con motivo de campañas que se pretendían desarrollar fuera de la Península, pero, dada la presencia islámica en el territorio peninsular, y ante las reclamaciones regias, el Papado acabaría aceptando que una parte de estas concesiones fuese entregada a los monarcas castellanos en la creencia de que éstos la aplicarían a la conquista del reino de Granada, lo que habitualmente no sucedió[457].

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, la primera noticia relacionada con este tipo de impuestos es la que viene dada por las peticiones que el cabildo catedralicio dirigió a Enrique II probablemente en las Cortes de Toro de 1371, indicando entre otras cosas cómo tradicionalmente, cuando los reyes exigían un subsidio para luchar contra los musulmanes, solían demandar del obispo, cabildo y clerecía diocesana de Cuenca la cantidad de 18.000 mrs. <<segunt la tasa antigua>>, pero Alfonso XI la había acrecentado tanto que les resultaba difícil hacer frente a dicho pago. Por ello ahora el cabildo solicitaría de Enrique II, para cuando les demandase algún servicio, <<que paguemos segunt la tasa que se fallare por los libros antiguos>>[458]. De este modo, el cabildo estaba tratando ante todo de defender sus intereses

---

[457] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 322-324.

[458] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 132r.

económicos pretendiendo que se recortaran en lo posible las cantidades a entregar a la Monarquía, máxime si tenemos en cuenta que por esas mismas fechas todavía estaba pendiente de cobro una décima sexenal que había sido otorgada a Alfonso XI por Clemente VI, así como un subsidio impuesto por el papa Urbano V[459].

El 29 de septiembre de 1381 era impuesta una décima bienal, justamente cuatro meses después de la adhesión de Castilla a Clemente VII, siendo luego renovada, el 14 de julio de 1383, por dos años más y, terminados éstos, por otros tres años, siendo concedida desde el principio en su totalidad al rey castellano[460]. Debemos destacar que en 1384 el obispo de Cuenca don Álvaro Martínez, junto a los obispos de Zamora y Osma, sería nombrado por el papa ejecutor de esta décima[461], cuyo montante en lo relativo al caso concreto de la diócesis conquense se desconoce.

Años más tarde, en 1398, encontramos al obispo de Cuenca don Juan Cabeza de Vaca como colector de un subsidio de 30.000 florines que Enrique III había solicitado de la Iglesia castellana en una junta que tuvo en Salamanca con el cardenal de España, el arzobispo de Toledo y varios prelados más. El obispo conquense, en dicho año de 1398, hará un requerimiento al prior santiaguista de Uclés, don Alonso Díaz, para que pagase la cantidad que le correspondía en el repartimiento de dicho subsidio[462].

Llegados a este punto es necesario aludir a un interesante documento carente de fecha que se nos ha conservado y que, de forma aproximada, en función de sus características paleográficas, podría datarse hacia fines del siglo XIV o bien durante la primera mitad del siglo XV. Se trata de una relación de cuestiones que el cabildo catedralicio conquense deseaba tratar con su obispo, algunas de las cuales están referidas a la Orden de

---

[459] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 324.

[460] *Ibid.*, p. 324.

[461] ASVat., *Reg. Aven.* 242, f. 38; Jean Favier, *Les finances pontificales...*, p. 124.

[462] AHN, OOMM-Uclés, carp. 13, vol. I, nº 17. Dicha cantidad no se puede leer debido al pésimo estado de conservación del documento.

Santiago. En concreto el cabildo se quejaba de que los cojedores de los tributos que la Iglesia entregaba al rey a menudo obligaban al clero diocesano a pagar, además de la parte que le correspondía en el repartimiento de dichos tributos, también la correspondiente a la Orden de Santiago. Por ello el cabildo deseaba que, en caso de quedar exenta la Orden del pago de algún subsidio, las rentas santiaguistas se descontasen del valor total de las rentas eclesiásticas del obispado a la hora de hacer el repartimiento del subsidio, para que de esta forma la clerecía pagase lo que realmente le correspondía. Aparte de todo esto, el cabildo solicita al obispo que interceda ante el rey para que cesen las numerosas exacciones a que se veían sometidos, y que asimismo haga saber al monarca que <<las rentas desta eglesia han fama de valer mucho mas de lo que valen, por razon de los grandes beneficios que algunos cardenales e otros de la corte han en ella>>[463].

Ello, en definitiva, viene a ser un vivo testimonio de la fuerte reticencia que a menudo manifestaban el cabildo catedralicio y el clero diocesano a la hora de hacer frente a sus obligaciones fiscales para con la Monarquía, a la vez que también se contemplaba de forma negativa la posesión de beneficios por extranjeros, máxime si se daba la circunstancia añadida de que algunos beneficios cuantiosos existentes en la diócesis contribuían a que correspondiese pagar mayores cantidades en el repartimiento de los subsidios. No obstante, sin negar la verdad de las quejas capitulares, tampoco se debe olvidar el deseo que el cabildo tenía de dar la impresión ante el monarca de que las rentas eclesiásticas de la diócesis valían menos de lo que se pretendía, buscando con ello el objetivo de contribuir con menor cantidad en el pago de los subsidios.

El 22 de agosto de 1405 se producirá una intervención de Enrique III informando al obispo don Juan Cabeza de Vaca de que, dado que estaban a punto de acabarse las treguas con el rey de Granada, había solicitado de la Iglesia que contribuyese al mantenimiento de la guerra que se iba a iniciar con el pago de

---

[463] ACC, original, s.s.

1000 lanzas, en vez de las 1500 que tradicionalmente se venían exigiendo. De estas 1000 lanzas, a la Iglesia de Cuenca correspondía pagar 36. De este modo, el 14 de septiembre de ese mismo año, y tras haberse reunido el obispo don Juan con el cabildo catedralicio, el abad del cabildo de clérigos de Cuenca y los arciprestes y vicarios de la diócesis, se procedió al reparto del pago de los 55.000 mrs. que costaría el mantenimiento de los 36 lanceros, correspondiendo pagar al cabildo catedralicio 18.333 mrs. y dos cornados[464].

Concluído el Cisma con la elección de Martín V, los embajadores castellanos aprovecharon la ocasión para solicitar del nuevo pontífice un subsidio de 150.000 florines de Aragón, en concepto de compensación por los gastos desembolsados en las negociaciones conducentes al Concilio de Constanza. Martín V, deseando dar satisfacción al rey castellano, pero sin perjudicar demasiado al clero del reino, otorgaría un subsidio de 80.000 florines sobre las rentas de la Iglesia castellana, encargando su percepción a los arzobispos de Toledo, Sevilla y Santiago[465]. De este modo, el 20 de octubre de 1424, Juan II se dirigirá al obispo, cabildo catedralicio y demás eclesiásticos del obispado de Cuenca comunicándoles la concesión de dicho subsidio y recordándoles la obligación que tenían de contribuir a su pago, aunque en el documento no se especifica la cantidad concreta que correspondía pagar a la Iglesia conquense[466].

Estos subsidios eran la versión castellana de aquellas décimas de renta eclesiástica entregadas en diversas ocasiones a la Cámara Apostólica para sufragar los gastos de cruzada. Pero en el caso de los subsidios a la Corona se acordaba casi siempre una cantidad global que no coincidía forzosamente con la décima parte de la renta eclesiástica, sino que solía ser menor. Una comisión de obispos efectuaba el reparto de la contribución por diócesis y, cuando había concluído su cobro, se entregaba a la

---

[464]BN, Ms. 13071, ff. 21r-24r / BN, Ms. 13072, ff. 249v-253r / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 2, ff. 30v-34r; y nº 6, ff. 16r-19r.

[465]José Goñi Gaztambide, <<Recompensas de Martín V...>>, p. 489.

[466]ACC, s.a. caj. 2, leg. 9, nº 109.

Corona la mayor parte del subsidio. Otra, menor, tomaba el obligado camino de la Cámara Apostólica.

La siguiente concesión de un nuevo subsidio a la Monarquía castellana por el papa tendría lugar en 1430, y en esta ocasión sí que sabemos que al obispado de Cuenca le tocó contribuir con 4376 florines de Aragón, lo que suponía un 4,2 % de la cantidad global -103.697 florines- con que debía contribuir el conjunto de la Iglesia castellana. En este subsidio, con un porcentaje aproximadamente similar al de Cuenca contribuirían diócesis como Oviedo o León[467].

Habrán de pasar más de veinte años para que tengamos nuevas noticias sobre la contribución del obispado conquense en otro subsidio. En 1456 se establecía la imposición en Castilla, al igual que en el resto de la cristiandad, de una décima en forma de subsidio, valorada, en el caso castellano, en 200.000 florines de Aragón, para la lucha contra el turco, pero de la que también se podía beneficiar el rey castellano para la guerra de Granada, pudiendo reservarse la mitad del montante. Las dificultades del proceso de recaudación de este impuesto resultan bien evidentes si se tiene en cuenta que año y medio más tarde, el 15 de octubre de 1457, y a petición de Enrique IV, el papa Calixto III reducía a 100.000 florines, una vez deducidos los gastos, la cantidad total a recaudar por esta décima-subsidio, mitad para el rey y mitad para el papa, a la vez que se daban instrucciones para eximir de su pago a aquellos eclesiásticos e instituciones que no tuvieran realmente bienes suficientes para hacer frente a la carga.

Tres días después, el 18 de octubre, tendría lugar en Olmedo, en la iglesia de San Andrés, una congregación del clero del reino en la que se procedió al reparto porcentual de la carga entre el clero de cada diócesis, correspondiendo pagar a la de Cuenca la cantidad de 4292 florines de Aragón, que suponían un 4,21 % del total de 101.804 florines que se repartieron[468]. De este modo, puede observarse cómo el porcentaje de lo que

---

[467]Miguel Ángel Ladero Quesada, <<Renta eclesiástica en la Castilla del siglo XV>>, p. 194.

[468]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 330-332.

correspondió pagar al obispado de Cuenca en este subsidio no experimentó ninguna variación con respecto al subsidio de 1430, ocurriendo algo similar en el resto de las diócesis.

Finalmente, hay que señalar que la recaudación en Castilla del subsidio de 1457 no concluiría hasta cuatro años después, siendo en febrero de 1461 cuando el sucesor de Calixto III dé orden para que se retenga la mitad de tal recaudación para la Cámara Apostólica, entregando el resto al rey castellano[469]. En lo que respecta al caso concreto de Cuenca, carecemos de datos sobre el modo como se desenvolvió dicha recaudación.

Pero, por si fuera poco, en 1460, sin haber finalizado aún la recaudación del subsidio de 1457, Pío II impondría una nueva décima sobre las rentas eclesiásticas para financiar la lucha contra el turco, de cuyo montante Enrique IV podría retener una tercera parte, así como la mitad de lo recaudado por la cruzada[470]. Sin embargo, esta última décima impuesta por el papa parecía a todas luces excesiva para el clero castellano.

Un buen reflejo de ello en el obispado de Cuenca es la reunión que el 12 de septiembre de 1462 tuvo lugar entre el cabildo catedralicio, los arciprestes, vicarios y representantes del clero secular y regular del obispado, y en la cual el chantre don Nuño Álvarez de Fuentencalada presentó unos acuerdos que habían hecho todos los obispos de Castilla en contra de esta nueva décima. En la reunión también se puso de manifiesto la oposición generalizada que existía contra el colector y legado pontificio Antonio Jacobo de Veneris, y se nombraron procuradores para que acudiesen en representación de la Iglesia de Cuenca a una congregación del clero castellano que próximamente iba a celebrarse para exponer al rey sus agravios contra la nueva imposición[471].

Dicha congregación tendría lugar en Salamanca el 8 de noviembre de ese mismo año, acordándose solicitar una entrevista con Enrique IV, ante quien debería comparecer una comisión

---

[469] *Ibid.*, p. 332.

[470] *Ibid.*, p. 333.

[471] ACC, s.a. caj. 7, leg. 38, nº 766.

formada por los obispos de Burgos y Salamanca a fin de presentarle sus agravios referidos, sobre todo, a lo abusivo que consideraban que se les impusiera una nueva décima. Estas gestiones darían lugar a que, a petición del rey, el papa ordenase a los colectores que redujesen en lo posible la décima que estaban recolectando, la cual, finalmente, se convertiría en un subsidio que representaría una cantidad muy inferior a la inicialmente prevista, y que se situaría en 100.000 florines[472]. A pesar de todo, ello no evitaría que se produjeran muchos problemas generalizados en torno a su recaudación, aunque para el caso concreto de la diócesis conquense desconocemos de qué forma se desenvolvió dicha recaudación.

Situándonos ya en el reinado de los Reyes Católicos, hay que destacar que durante el periodo final de la guerra de Granada, sobre todo desde comienzos de los años ochenta, la concesión y cobro de subsidios sobre las rentas eclesiásticas habría de producirse de manera particularmente frecuente, dada la circunstancia de la intensificación del conflicto bélico. Así, se cobraron subsidios en los años 1482, 1485, 1487, 1489, 1491 y 1492, coincidiendo ello con cada documento de concesión o renovación de la indulgencia de cruzada, la cual, al igual que el subsidio, se seguiría cobrando también en años posteriores a la conquista de Granada, y es bien sabido que estas fuentes de ingresos se convertirían en habituales en el siglo XVI[473].

A raíz de las conversaciones mantenidas entre los monarcas y el enviado pontificio Domingo Centurión entre 1481 y 1482, los Reyes Católicos solicitaron la concesión por el papa de una bula de cruzada que equiparase plenamente la guerra de Granada con las campañas contra los turcos, lo que sería concedido. Tanto para esta cruzada como para el subsidio correspondiente que se pensaba imponer, los monarcas solicitaron no la mitad de los ingresos, como había sucedido hasta entonces, sino las dos terceras partes, quedando el resto para el papa. Pero ni siquiera esta tercera parte llegaría a ser percibida por la Cámara Apostólica, pues ya

---

[472]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 334.

[473]Miguel Ángel Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, p. 234.

en 1485 fue sustituída por un donativo de 10.000 ducados, lo que era mucho menos de esta tercera parte acordada.

En cuanto a aspectos de organización, con los Reyes Católicos también habrían de producirse novedades importantes, puesto que los monarcas consiguieron, a partir de los acuerdos firmados con Domingo Centurión en 1482, que la recaudación de la cruzada y el subsidio quedase plenamente bajo su jurisdicción, de manera que ahora ya no bastaba para proceder a la misma con la presencia de un colector pontificio, sino que también se exigía de la intervención de unos comisarios generales que actuasen como agentes reales que vigilaban para salvaguardar los intereses económicos de la Corona que ahora se convertían en predominantes, dándose, además, la circunstancia de que, con este mayor protagonismo de los oficiales regios, las cantidades percibidas fueron mucho más cuantiosas que antes, cuando todo quedaba en manos de los colectores pontificios[474].

En la asamblea clerical que tuvo lugar en Córdoba en 1482 los reyes manifestarían su intención de percibir por propia iniciativa un subsidio de 100.000 florines sobre las rentas eclesiásticas[475]. Al año siguiente, el 24 de febrero de 1483, la reina Isabel se dirigiría a las justicias laicas de Cuenca y su diócesis comunicándoles cómo Sixto IV había otorgado facultad al colector Francisco Ortiz y a Fray Hernando de Talavera, su confesor, para poder recaudar este nuevo subsidio para la guerra de Granada. Al parecer, poco tiempo antes el cabildo catedralicio conquense se había quejado de que los monasterios, colegios, hospitales y cofradías de laicos de la diócesis no querían contribuir al pago de este subsidio, a pesar de que estaban obligados a ello. Por ésto, ahora la reina mandaría a dichas justicias laicas que auxiliasen al cabildo conquense obligando a contribuir a los monasterios, colegios, hospitales y cofradías[476].

---

[474] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 336-337.

[475] *Ibid.*, p. 411.

[476] ACC, original, s.s.

Tres meses más tarde, el 26 de mayo, la reina recordó en una carta al cabildo catedralicio y obispo de Cuenca cómo el año anterior los procuradores de la Iglesia conquense que asistieron a la asamblea del clero celebrada en Córdoba se habían obligado a contribuir en el subsidio con lo que correspondiese al obispado de Cuenca, pagándolo en la Iglesia de Toledo antes de fines de abril de 1483. Pero dado que dicho plazo ya había pasado y el obispado de Cuenca aún no había satisfecho la totalidad de la suma, ahora la reina apremia a que se pague con la mayor presteza posible[477]. Por eso el 7 de junio doña Isabel mandará también a Juan de Villalpando, canónigo de Jaén y capellán real, que se encargue del cobro del subsidio en los obispados de Cuenca (2847 florines), Cartagena (1173 florines) y Sigüenza (2415 florines), indicándole asimismo que el pago se habría de realizar bien directamente en florines de oro, o bien en maravedíes de a 270 mrs. cada florín. Como consecuencia de estas intervenciones regias, el 17 de julio el cabildo catedralicio conquense entregaría a dicho Juan de Villalpando 400.000 mrs. como pago de dos terceras partes de los 2847 florines correspondientes al obispado de Cuenca[478], ignorándose si se llegó a pagar la cantidad restante.

En esta ocasión, los 2847 florines que correspondieron a la diócesis de Cuenca en el reparto del subsidio supusieron un 3,4 % de la cantidad total con que se gravaron las rentas de la Iglesia castellana[479]. Así, pues, el porcentaje de contribución resultaría ser algo menor que el que había correspondido a Cuenca en el reparto de anteriores subsidios, como el de 1430 ó 1457, que, como se recordará, había sido del 4,2 %.

Mientras tanto, a la vez que se cobraba el subsidio de 1482, también se estaba efectuando el cobro de la nueva bula de cruzada concedida por el papa ese mismo año. El otorgamiento de estas bulas para su predicación había venido siendo frecuente en ciertos momentos a lo largo del siglo XV, coincidiendo casi

---

[477]BN, Ms. 13072, f. 258r-v.

[478]ACC, AC-1487, ff. 147v-148v (traslado del 19-IX-1487).

[479]Miguel Ángel Ladero Quesada, <<Renta eclesiástica en la Castilla del siglo XV>>, p. 194.

siempre con la concesión de subsidios o décimas. Se trataba de bulas pontificias que permitían obtener la indulgencia a quienes diesen limosna para llevar adelante la cruzada contra Granada. La indulgencia que mejor se conoce es la del periodo 1482-1492, y con su dinero se financió buena parte de la conquista de Granada. Los beneficios de la cruzada eran todos de tipo espiritual: indulgencia plenaria, absolución de pecados reservados, conmutación de votos, perdón y omisión de censuras, entredichos y horas canónicas, amplias facultades a los sacerdotes en campaña para celebrar misa y exención de ayuno y descanso dominical a los combatientes. Para lograrlos era preciso tomar parte en la guerra, enviar otra persona a sueldo o bien dar una limosna para contribuir al pago de sus gastos. Las limosnas eran de dos, tres, cuatro y seis reales, de un florín o, también, de 82 mrs. y 4 cornados[480].

La recaudación de cruzadas también tendría lugar, con mayor o menor éxito, en el obispado de Cuenca, al igual que en el resto de las diócesis, pero el problema es que, hasta comienzos de la década de los años ochenta, para el caso específico conquense carecemos de datos concretos referentes a su cobro. La primera noticia nos llega el 28 de mayo de 1480, fecha en que los Reyes Católicos otorgaron poder para cobrar las bulas de la cruzada de Canarias en la diócesis de Cuenca al maestre Diego Guillén y al bachiller Diego Rodríguez de Alcañiz, tesoreros de dicha bula en la diócesis[481].

Tras haber concedido el papa en 1482 una nueva bula para la cruzada de Granada, el 22 de octubre del año siguiente los monarcas informarán de ello al cabildo catedralicio conquense para que éste se encargue de su publicación y predicación en el obispado[482]. Después, el 24 de febrero de 1484, los reyes mandarán a los tesoreros y recaudadores de la cruzada en el arzobispado de Toledo y en los obispados de Cuenca, Sigüenza, Cartagena y Plasencia que entreguen lo recaudado a Pedro Jiménez

---

[480] Miguel Ángel Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, pp. 228-230.

[481] AGS, *Registro General del Sello*, 28-V-1480, f. 208.

[482] BN, Ms. 13072, f. 201r-v.

de Préxamo, deán de Toledo, a quien se otorga poder para recibirlo[483].

El proceso de cobro de las bulas de cruzada era lento y complicado, surgiendo frecuentemente problemas al respecto, como sucedería en el obispado de Cuenca. Buen ejemplo de ello es el mandato regio del 25 de febrero de 1485, realizado a petición de los tesoreros de la cruzada en las diócesis de Toledo y Cuenca, para que los herederos de Fernando Vázquez de Toledo, que había sido el distribuidor y recaudador de las bulas de cruzada en el obispado de Cuenca, pagasen lo que el mencionado Fernando Vázquez había quedado a deber al tiempo de su muerte. Al parecer dichos herederos se negaban a pagar la cantidad debida, y de ahí el mandato regio[484].

No obstante, posteriormente estos herederos expondrían a los Reyes Católicos que cuando Fernando Vázquez recibió el encargo de cobrar la cruzada en el obispado de Cuenca elaboró padrones de todas las personas que se comprometían a comprar las bulas de indulgencia, pero ahora muchas de dichas personas se negaban a efectuar el pago correspondiente, por lo que mientras ello sucediese no sería posible entregar la recaudación a los tesoreros de la cruzada. De este modo, el 20 de diciembre de ese mismo año el rey don Fernando mandará a todas las justicias laicas del obispado de Cuenca ejecutar los padrones de la bula de cruzada, para que así los herederos de Fernando Vázquez pudieran cobrar lo que se les debía, otorgando incluso autorización para que se pudiesen vender en pública almoneda algunos bienes de las personas que se negaban a pagar[485]. Así, pues, vemos cómo a veces resultaba imprescindible la colaboración de la justicia laica a la hora de efectuar el cobro de la cruzada, para cuya completa percepción los monarcas no dudarían en escatimar recursos al tratarse de una cuestión que les concernía muy directamente, dado que el montante de dicha cruzada iría a parar a las arcas reales.

---

[483] AGS, *Registro General del Sello*, 24-II-1484, f. 245.

[484] AGS, *Registro General del Sello*, 25-II-1485, f. 251.

[485] AGS, *Registro General del Sello*, 20-XII-1485, f. 52.

Mientras esto sucedía, el 30 de enero de 1485 Inocencio VIII otorgó una nueva renovación de la bula de cruzada, pero manifestando que una tercera parte de la recaudación debería ir a parar a la Cámara Apostólica para ser empleada en la defensa de Italia y en la preparación de una flota contra los turcos[486], a pesar de lo cual el 26 de agosto de ese mismo año acabaría renunciando a dicha tercera parte[487]. Al año siguiente, a 24 de mayo, los Reyes Católicos nombrarían jueces ejecutores de esta bula de cruzada en el obispado conquense a Juan de la Fuente y a Álvaro de Cañizares, ambos vecinos de Cuenca[488], y el 7 de agosto instarían a pagar a todas aquellas personas que aún no lo hubiesen hecho[489].

Pero además de haber sido concedida en 1485 la renovación de la cruzada, este mismo año se impondría también un nuevo subsidio sobre las rentas eclesiásticas. El 14 de junio la reina agradecerá a la Iglesia de Cuenca la buena disposición que había mostrado a la hora de contribuir en esta nueva imposición, prometiendo a su vez que, en caso de que en el futuro se estableciese algún nuevo subsidio, el obispado conquense quedaría exento de su pago[490], cosa que, evidentemente, no se cumpliría. En el subsidio de 1485 al obispado de Cuenca correspondió pagar la cantidad de 2847,5 florines de Aragón de a 270 mrs. cada florín, obligándose el 24 de julio el obispo, cabildo y clerecía a efectuar el pago antes del próximo día de Todos los Santos[491]. Vemos, pues, cómo la cantidad que correspondió pagar a la diócesis de Cuenca en el reparto de este subsidio es similar a la que hubo que entregar en el subsidio de 1482.

---

[486] José Goñi Gaztambide, *Historia de la bula de Cruzada*, pp. 669-670.

[487] *Ibid.*, pp. 676-680.

[488] AGS, *Registro General del Sello*, 24-V-1486, f. 189.

[489] AGS, *Registro General del Sello*, 7-VIII-1486, f. 49.

[490] BN, Ms. 13072, ff. 254r-255v.

[491] ACC, AC-1485, f. 16v.

En 1487, a 26 de febrero, Inocencio VIII concederá a los Reyes Católicos una nueva prórroga de la bula de cruzada[492], y ese mismo año el papa también otorgará a los monarcas otro nuevo subsidio para la guerra de Granada. De este modo, el 8 de agosto se presentaría ante el cabildo catedralicio conquense la bula del subsidio, enviada por los delegados pontificios, los obispos de Ávila y León, quienes también enviarían una carta en la que se mandaba al obispo, cabildo y clero diocesano de Cuenca pagar la cantidad de 3274,5 florines de oro en ciertos plazos, que era la cantidad que había correspondido al obispado de Cuenca en el repartimiento del subsidio. Dos días después, el 10 de agosto, el cabildo catedralicio nombró como recaudador del subsidio en la diócesis al abad de Santiago don Fuy Gómez de Anaya[493]. En esta ocasión, por tanto, la cantidad que correspondió pagar al obispado conquense fue mayor que en los anteriores subsidios.

Entretanto la guerra de Granada avanzaba y se iban cosechando importantes éxitos, como lo fue la toma de Málaga por esas mismas fechas. En conmemoración de este acto, el 27 de agosto de 1487 el cabildo catedralicio conquense mandó que se celebrase una procesión general <<commo el dia de Corpus Christi, por las buenas...que vynieron que era ganada Malaga>>[494].

En lo que respecta a la bula de cruzada que había renovado el papa, de nuevo surgirían en Cuenca ciertos problemas en torno a su cobro. Ello hizo necesaria una intervención de los Reyes Católicos el 16 de junio de 1488, a petición de Ferrand Núñez y Gonzalo de Medina, tesoreros de la cruzada, mandando que se ejecutasen algunos padrones de personas que habían tomado la bula de cruzada en el arzobispado de Toledo y en la ciudad de Cuenca y todavía no la habían pagado[495].

En 1489 la cruzada sería prorrogada de nuevo, concediéndose asimismo otro subsidio. La recaudación de este último presentó

---

[492]José Goñi Gaztambide, *Historia de la bula de Cruzada*, pp. 680-681.

[493]ACC, AC-1487, ff. 135r-136v.

[494]ACC, AC-1487, f. 140v.

[495]AGS, *Registro General del Sello*, 16-VI-1488, f. 32.

serias dificultades, y el 6 de marzo de 1490 el obispo de Ávila, ejecutor del subsidio, prorrogaría el plazo dado a la Iglesia de Cuenca para que informase del verdadero valor de sus rentas hasta el próximo 15 de mayo, dado que al parecer algunas parroquias y las Órdenes militares se retrasaban bastante a la hora de dar a conocer la cuantía de sus rentas, y sin esta información resultaba imposible proceder al reparto del subsidio[496]. Finalmente, sabemos que una vez realizado dicho reparto, al obispado conquense correspondió pagar 867.623 mrs[497].

A medida que pasaban los meses la guerra de Granada iba tocando a su fin, y el 7 de abril de 1491 la reina Isabel se dirigiría al cabildo catedralicio conquense pidiendo que se rogase a Dios por un feliz resultado del conflicto bélico:

"El rey mi señor entra poderosamente a guerrear la çibdad de Granada, y porque, como saveis, las oraçiones, misas y los otros sufragios pueden para ello mucho ayudar y aprovechar, por ende mucho vos ruego y encargo que deis orden como se hagan en esa iglesia y en toda esa çibdad y su obispado las proçesiones y sufragios acostunbrados porque Nuestro Señor, continuando los vençimientos que su mui poderosa mano le ha dado de aquellos enemigos de su santa fee catholica, le quiera dar agora cunplida victoria..."[498]

Finalmente, en enero de 1492 se tomaba Granada, culminando de este modo el largo proceso de siglos de Reconquista y lucha contra el Islam, cuya presencia política en la Península quedaba de este modo definitivamente erradicada. En la Iglesia de Cuenca, al igual que en el resto del reino, la noticia fue recibida con júbilo, habiendo quedado recogido en el *Necrologio-Obituario* de la catedral conquense un testimonio de tan señalado suceso:

"En el anno del nasçimiento de nuestro redentor e maestro Ihesu Christo, nuestro sennor, lunes, dos dias del mes de enero, anno eiusdem dicte Nativitatis millesimo quadrigentessimo nonagesimo secundo, el esclaresçido

---

[496]ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 230.

[497]Miguel Ángel Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, p. 235.

[498]BN, Ms. 13072, f. 242v.

prinçipe, rey e sennor don Fernando, fijo del muy catolico rey e sennor don Juan, rey de Aragon, e junto con la muy illustre e esclaresçida prinçesa, reina e nuestra sennora, fija del muy alto, esclaresçido prinçipe y muy catolico rey e sennor nuestro, rey don Juan, de muy esclaresçida memoria, rey de Castilla, los dichos rey e reina nuestros sennores de Castilla e de Leon ganaron la çibdat de Granada, que estovo usurpada e en sennorio de los moros infieles, enemigos de nuestra fe catolica, por espaçio de setesçientos LXXXII annos, los quales dichos sennores, rey don Fernando e reina donna Isabel, tovieron çercada la dicha çibdat de Granada tan estrechamente que ni uno salia ni otro entrava, e fizieron e edificaron e mandaron fazer la çibdat de Santa Fe, quasi una legua de la dicha çibdat de Granada. Fasta que el dicho dia los moros della ge la entregaron, padesçieron los dichos nuestros sennores e reyes muy grandes trabajos e fatigas en el dicho çerco"[499]

Mientras tanto continuaba, no sin algunos problemas, la recaudación de un nuevo subsidio que había sido impuesto en 1491. El 4 de febrero de 1492 Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila y ejecutor principal del subsidio, prorrogaría por espacio de un mes a la Iglesia y diócesis de Cuenca el término de la primera paga de lo que les había correspondido entregar en el reparto de dicho subsidio[500]. Apenas un mes más tarde, el 1 de marzo, el cabildo catedralicio conquense nombraría como contadores y repartidores de la cantidad que había tocado pagar a la Iglesia de Cuenca en el subsidio al protonotario Gabriel Condulmario, al abad de Santiago Ruy Gómez de Anaya, a Fernán Pérez de Párraga y al bachiller Rodrigo de Fuensalida, todos ellos canónigos de Cuenca[501]. Pero en el documento no se indica qué cantidad en concreto es la que en esta ocasión correspondió entregar al obispado conquense.

En lo que respecta a las cantidades globales obtenidas por vía de cruzada durante estos años, las cuentas de lo recaudado en los obispados de Toledo y Cuenca en el periodo 1484-1492 indican la cifra de 60.314.506 mrs., aunque faltan la mayoría de

---

[499] ACC, *Necrologio-Obituario*, f. 63r.

[500] ACC, original, s.s.

[501] ACC, AC-1492, f. 129r.

las cuentas de bulas propiamente dichas desde 1487 en adelante[502].

En 1494 el papa concedería a los Reyes Católicos un nuevo subsidio, que en esta ocasión gravaría las rentas eclesiásticas con un porcentaje situado en torno al 8 %. En el reparto realizado, al obispado de Cuenca le correspondió pagar 4567 florines del cuño de Aragón, lo que suponía un 3,4 % del montante global con que tuvieron que contribuir la Iglesia castellana y Órdenes militares (158.507 florines)[503]. A la vez también se recaudaba una nueva bula de cruzada, en cuyo cobro se cometerían numerosos fraudes en varios obispados, como el de Cuenca, tal como se deduce de la comisión de los Reyes Católicos a Antón Sánchez de Aguirre, realizada el 13 de septiembre de 1494, para que les informase sobre los fraudes que al respecto tenían lugar en la diócesis conquense[504].

También surgirían problemas para el cobro del subsidio de 1494. Prueba de ello es el malestar que mostró el cabildo catedralicio conquense cuando el 25 de febrero del año siguiente se recibieron unas cartas de los obispos de Ávila y Salamanca informando de la obligación que la Iglesia de Cuenca tenía de contribuir al pago del nuevo subsidio concedido por el papa a los monarcas para ayuda de la guerra contra los moros infieles de <<allende>>. El cabildo catedralicio y la clerecía conquense se opondrían en un principio al pago de este subsidio, y por ello dos días más tarde presentaron una apelación a los obispos de Ávila y Salamanca en contra de su pago[505]. No obstante, parece que finalmente el cabildo acabaría cediendo, pues el 23 de diciembre de 1495 el bachiller Diego de Molina, receptor del subsidio en el obispado conquense, se daría por pagado de lo que

---

[502]Miguel Ángel Ladero Quesada, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, p. 233.

[503]Miguel Ángel Ladero Quesada, <<Renta eclesiástica en la Castilla del siglo XV>>, p. 194.

[504]AGS, *Registro General del Sello*, 13-IX-1494, f. 142.

[505]ACC, AC-1495, ff. 7r-9v.

ese año correspondía entregar a los beneficiados de la catedral, cuya cifra no se nos indica[506].

Al año siguiente, en 1496, sabemos que se estaba recaudando en el reino otra bula de cruzada, como siempre en medio de dificultades, lo que haría necesaria una nueva intervención de los monarcas el 28 de mayo mandando que la justicia civil de las diócesis de Zamora, León, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Cuenca, Cartagena y otros lugares auxiliase a Gonzalo de Medina, vecino de Illescas, en la tarea que se le había encomendado de predicar y hacer predicar la cruzada en dichas diócesis[507]. Y por otro lado, ante la persistencia de los problemas, el 6 de noviembre de ese mismo año los Reyes Católicos se verían obligados a comisionar a Antonio de Soler, vecino de Madrid, para que hiciese una pesquisa en los obispados de Cuenca y Sigüenza con el fin de averiguar qué personas habían cometido cohecho en la recaudación y predicación de la cruzada, mandando además que los culpables fuesen apresados y sus bienes embargados[508].

Mientras tanto, a la vez que continuaba la recaudación de subsidios y cruzadas para la lucha contra el turco, en el antiguo reino nazarí de Granada se había establecido un nuevo arzobispado, convirtiéndose al cristianismo un buen número de los musulmanes que allí habitaban. Debido a ello aumentaría la demanda de personal eclesiástico que se encargara de adoctrinar a los recién convertidos, lo que motivó que los monarcas solicitasen a todos los obispados del reino el envío a Granada de un cierto número de clérigos para que se encargasen de tal tarea al menos por espacio de un año. Fue por ello por lo que el 5 de octubre de 1500 los Reyes Católicos rogaron al cabildo catedralicio conquense el envío al arzobispado de Granada de ocho sacerdotes y ocho sacristanes procedentes de la diócesis de Cuenca[509].

---

[506] ACC, AC-1495, f. 41v.

[507] AGS, *Registro General del Sello*, 28-V-1496, f. 171.

[508] AGS, *Registro General del Sello*, 6-XI-1496, f. 83.

[509] BN, Ms. 13072, ff. 260v-261r.

Finalmente, no queda sino señalar que, durante todo el siglo XVI, la lucha contra el turco constituirá el principal argumento teórico que esgrimirá la Monarquía española para recaudar constantes subsidios y cruzadas, por lo que la Iglesia, ya bajo un control absoluto por parte de la Corona, continuará viéndose sometida a una fuerte presión fiscal si cabe aún mayor que durante la centuria anterior, situándose las raíces de todo ello en el periodo bajomedieval. El obispado conquense no será en absoluto una excepción a la regla, y de hecho nos han quedado muy numerosos testimonios documentales relativos a la recaudación en la diócesis de subsidios y cruzadas durante los reinados de Carlos I y Felipe II, quienes a menudo también solicitarían de la Iglesia de Cuenca ayuda espiritual, en forma de rogativas y procesiones, para la lucha contra el turco. Pero todas éstas son cuestiones en cuyo análisis aquí no se entrará, por quedar ya fuera del marco cronológico propuesto para la presente investigación.

3-La dimensión conflictiva de las relaciones económicas de la Monarquía castellana con la Iglesia conquense

A) *La pugna realengo-abadengo*

En el conjunto del reino de Castilla, durante la época Trastámara continuaría el proceso de creciente expansión de los bienes abadengos ya iniciado en el siglo XIII, y ello a pesar de las frecuentes denuncias de los procuradores de las ciudades reclamando en Cortes la adopción de medidas que impidiesen la expansión irregular de los abadengos a costa de las tierras de realengo. Las intervenciones más relevantes de Enrique II en esta materia van a orientarse sobre todo a evitar que la anarquía resultante de la guerra civil contribuyese a que se produjeran desmembraciones de los abadengos[510]. En las Cortes de este reinado apenas aparecen alusiones a la problemática de los

[510]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 107.

abadengos, lo que prueba que durante estos años se conseguiría frenar algo esta expansión[511].

No ocurrió lo mismo, en cambio, durante el reinado de Juan I, pues este monarca, movido por motivaciones políticas y también religiosas, otorgaría aún una mayor protección a la Iglesia, lo cual favorecería el avance irregular de los abadengos en detrimento del realengo, y ello a pesar de las reiteradas quejas expuestas por los procuradores de las ciudades durante las Cortes de este reinado, quejas que también se repetirán a lo largo del reinado de Enrique III[512].

A partir de los primeros años del mandato de Juan II se puede constatar una mayor insistencia en la necesidad de cumplimiento de las normas que afectaban a la amortización de bienes realengos, incidiéndose, sobre todo, en que la incorporación de propiedades realengas al patrimonio de instituciones eclesiásticas no debía suponer disminución de los derechos fiscales y jurisdiccionales de la Realeza, salvo privilegio específico de ésta, exigiéndose también que no se dejen bienes raíces a eclesiásticos sin conocimiento real previo. No obstante, a pesar de ésto continuaría el avance irregular de los abadengos a costa del realengo, y Enrique IV no pondrá reparos en otorgar a algunas catedrales privilegios por los que daba por consolidada e irreversible la ampliación de sus bienes obtenidos por vía de donación, venta o trueque[513].

En lo que atañe al caso de la Iglesia de Cuenca, no se conserva para la época Trastámara ningún tipo de documentación referente a nuevas intervenciones regias en relación a la problemática de la expansión de los abadengos, intervenciones que tan frecuentes habían sido en etapas anteriores. No obstante, es indudable que los bienes abadengos, de acuerdo con la tónica general del reino, continuarían expandiéndose en la diócesis conquense durante este periodo, de lo que constituyen un claro ejemplo las constantes donaciones recibidas por el cabildo

---

[511]Ana Arranz Guzmán, <<El tercer estado castellano ante las relaciones realengo-abadengo>>, p. 465.

[512]*Ibid.*, pp. 465-467.

[513]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 108-109.

catedralicio así como las numerosas compras realizadas a título personal por algunos eclesiásticos.

Sólo las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI supondrán una clara y efectiva toma de conciencia por parte de la Monarquía sobre hasta qué punto había llegado la expansión de los abadengos a costa del realengo, incorporándose de este modo a la Corona numerosos bienes de la Iglesia y Órdenes militares. El obispado conquense sufrió la enajenación de los dominios de la Orden de Santiago, y también se enajenaron algunos bienes de la Iglesia, tales como la villa de Valdeloso, del monasterio de Monsalud, hacia 1556, los señoríos episcopales de Paracuellos y Poveda en 1578, y la villa de Monteagudo, también de la mitra episcopal, en 1590[514].

B) *La confiscación de bienes eclesiásticos por la Inquisición*

Un conflicto que ya a fines de la Edad Media se planteó frecuentemente fue el motivado por las actuaciones de algunos agentes reales encargados de recaudar los bienes confiscados por el Santo Oficio que se aplicaban a la Hacienda regia, dado que frecuentemente dichos agentes reales confiscaban también algunos bienes de la Iglesia que estaban entregados a censo perpetuo a personas que resultaban ser condenadas por delito de herejía. Establecido el Tribunal de la Inquisición en Cuenca en 1489[515], muy poco tiempo después comenzarán a plantearse algunos conflictos de esta índole.

El 30 de enero de 1491 los Reyes Católicos habían otorgado poder a Juan Flores, receptor de los bienes confiscados por el Santo Oficio por razón de herejía en la diócesis de Cuenca, para que pudiese recaudar dichos bienes[516]. Pero al parecer Juan Flores pretendió confiscar también ciertos bienes de la Iglesia entregados a censo a personas ahora condenadas por la Inquisi-

---

[514] María Emma Espoille de Roiz, <<Repoblación de la tierra de Cuenca>>, pp. 223-224.

[515] Sobre ello puede verse: Dimas Pérez Ramírez, <<Los orígenes de la Inquisición en Cuenca>>, *AEM*, 12 (1982), pp. 399-410.

[516] AGS, *Registro General del Sello*, 30-I-1491, f. 133.

ción. Así sucedió, por ejemplo, con algunas propiedades pertenecientes al cabildo de clérigos beneficiados de Huete, por lo que éstos expondrían de inmediato sus quejas ante los monarcas, quienes, el 9 de mayo de 1492, mandarían a Juan Flores que devolviese dichos bienes a los clérigos de Huete, siempre y cuando éstos mostrasen sus cartas de propiedad de los bienes confiscados[517]. Tres días más tarde los monarcas dirigirán un mandato similar a Juan Flores, pero esta vez con relación a los bienes de todos los eclesiásticos del obispado[518]. Finalmente, la última intervención regia en esta materia a la que aquí se aludirá es la que tuvo lugar el 5 de enero de 1495, mediante la cual los monarcas mandaron al recaudador de bienes confiscados por la Inquisición que no vendiese aquellos bienes de las personas condenadas por delito de herética pravedad ni de las reconciliadas sobre los que el cabildo catedralicio de Cuenca tuviese censo perpetuo[519].

En definitiva, parece que, si bien la posición de los monarcas en relación a esta problemática estuvo bien clara desde un principio, en el sentido de salvaguardar a toda costa los bienes de la Iglesia, no sucedería lo mismo, en cambio, con los recaudadores regios, quienes, bien por desconocimiento o premeditadamente, trataron en ocasiones de tomar bienes de la Iglesia que estaban acensuados a personas condenadas por delito de herejía.

---

[517] *Ibid.*, 9-V-1492, f. 350.

[518] AHN, Micr., rollo 14215.

[519] AHN, Micr., rollo 14223, s.a. letra H, nº 9.

Capítulo séptimo

RELACIONES INTRAECLESIALES

Un aspecto esencial que siempre debe tenerse en cuenta a la hora de abordar el estudio de la Iglesia es la fuerte jerarquización interna que existía dentro del propio estamento eclesiástico, lo que estaba en consonancia con la gran variedad de situaciones socioeconómicas que diferenciaban profundamente a los diversos integrantes del clero. Así, desde la cúspide representada por el papa hasta los más humildes clérigos rurales, el estamento clerical acogía en su seno a individuos de muy diferentes posiciones, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista de su situación en la jerarquía eclesial.

Es por ello que otro ámbito de estudio fundamental para analizar las relaciones de poder mantenidas por la Iglesia conquense durante la Edad Media es el que viene dado por las propias ralaciones de orden intraeclesial que se desarrollaron a lo largo de los siglos medievales. De este modo, en el presente capítulo se estudiarán dichas relaciones intraeclesiales siguiendo en lo posible un cierto orden jerárquico.

En primer lugar se analizarán las relaciones de la Iglesia conquense con la cúpula eclesiástica, es decir, el Papado, siendo éste un aspecto de gran importancia sobre el que la información que poseemos es relativamente abundante. Las relaciones con la metrópoli toledana y algunas diócesis limítrofes constituirán otro ámbito de estudio. A continuación situaremos el análisis de las relaciones que se pueden constatar en el seno de la propia Iglesia conquense: relaciones obispo-cabildo catedralicio, relaciones de éste con algunos capitulares, relaciones del obispo y cabildo con el clero diocesano, relaciones entre los clérigos del obispado, y relaciones del obispo y cabildo catedralicio con algunos monasterios de religiosos. Ya para terminar, se estudiarán las relaciones entre la Iglesia conquense y las Órdenes militares, fundamentalmente la Orden de Santiago, cuya presencia

en el obispado de Cuenca era especialmente relevante, sobre todo en torno a la sede santiaguista de Uclés.

Como anticipo a lo que pronto se dirá, puede señalarse que con frecuencia la documentación deja entrever situaciones conflictivas en el desarrollo de algunas de estas relaciones intraeclesiales, siendo más o menos abundantes e intensos los conflictos según los momentos y características concretas de cada caso, pero también hay que tener en cuenta que los documentos tienden sobre todo a resaltar el elemento contencioso, no quedando recogidas de este modo muchas y abundantes situaciones en que las relaciones se desenvolvían con normalidad y sin apenas conflictos.

I-RELACIONES CON EL PAPADO

Una cuestión de gran importancia a la hora de estudiar la evolución histórica de cualquier diócesis es la que viene dada por las diversas intervenciones pontificias, más o menos frecuentes, que se producían, cuyos objetivos podían ser muy diversos pero que siempre buscaban consolidar la dependencia de todas las diócesis de la cristiandad occidental hacia el Papado. Contamos con algunos estudios globales sobre intervenciones pontificias en la Iglesia castellano-leonesa durante el siglo XIII[1] y, asimismo, el intervencionismo pontificio sobre el caso particular de la Iglesia conquense, también en lo que respecta al siglo XIII, ha sido objeto de un análisis por parte de José Manuel Nieto Soria[2].

Las primeras intervenciones pontificias que tuvieron lugar sobre la Iglesia de Cuenca, como se recordará, fueron las del papa Lucio III en los años 1182-1183, estando relacionadas con

---

[1]Así, por ejemplo, el libro de Demetrio Mansilla, *Iglesia castellano-leonesa y Curia romana en tiempos del rey San Fernando*, Madrid, 1945, y la obra de Peter Linehan, *Iglesia española y Papado en el siglo XIII*, Salamanca, 1975.

[2]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio sobre la Iglesia conquense en el siglo XIII>>, *Hispania*, XLV/159 (1985), pp. 33-58.

el propio proceso fundacional de la diócesis mediante la unión de las antiguas sedes visigodas de Ercávica y Valeria, así como con la creación del nuevo cabildo catedralicio, cuestiones que ya fueron analizadas pormenorizadamente al comienzo de esta obra.

A continuación, y en función de la documentación disponible, estudiaremos el modo como se desarrollaron las relaciones de la Iglesia conquense con el Papado durante el conjunto de la Baja Edad Media en los diversos ámbitos beneficial, fiscal y de otro tipo, incorporando asimismo las conclusiones fundamentales del análisis elaborado por José Manuel Nieto Soria para el siglo XIII.

1-La política beneficial

A) *Las provisiones episcopales*

Tal como recordará el lector, ya durante el siglo XIII habían tenido lugar algunas provisiones episcopales de la sede conquense realizadas por el papa. Sin embargo, fue a partir del siglo XIV cuando la provisión por el pontífice se convirtió en el sistema habitual de nombramiento de los obispos de Cuenca. Cuando tenía lugar una provisión pontificia, tal como se contempla en los registros vaticanos, el papa siempre informaba de ello mediante el envío de las correspondientes bulas de nombramiento al propio electo conquense, al cabildo catedralicio de Cuenca, al clero de la ciudad y diócesis, al pueblo de la ciudad y diócesis, a los vasallos de la Iglesia conquense, al arzobispo de Toledo y al rey de Castilla. En total son 21 las provisiones pontificias de que tenemos noticia para la época medieval.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que muchas de estas provisiones las realizó el papa en atención a una súplica previa del monarca castellano. En algunas provisiones, sin embargo, pudieron influir tanto los deseos del rey como los del propio pontífice, mientras que sólo en contadas ocasiones la provisión fue realizada por clara iniciativa del papa y como respuesta a

los deseos de éste: así sucedió en el caso de Mateo Reinal (1247), Fray Esteban (1322), y los cardenales Antonio Jacobo de Veneris (1469) y Rafael Riario (1493).

Al haber sido ya analizadas todas las provisiones pontificias tanto en el Episcopologio como en el capítulo que hemos dedicado al estudio de las relaciones de la Iglesia conquense con la Monarquía castellana, aquí no se repetirá de nuevo lo ya dicho entonces, remitiendo al lector a los mencionados apartados en que se analizan pormenorizadamente todas estas provisiones.

B) *Los beneficios eclesiásticos*

B.1) *El cabildo catedralicio y las legaciones de los cardenales Juan de Abbeville y Gil de Torres*

En el siglo XIII se produjeron dos importantes intervenciones pontificias sobre la estructura beneficial del cabildo catedralicio conquense a través de la mediación de legados pontificios.

La primera legación fue la del cardenal Juan de Abbeville, cuya intervención más importante sobre la Iglesia de Cuenca tuvo lugar el 21 de junio de 1229. La finalidad principal de su actuación en Cuenca fue conseguir una racionalización en el reparto de <<canonie mansionarie et vestiaria et portiones mansionarie>>, pretendiendo con ello un mejoramiento de la gestión material de la Iglesia conquense. Así, un punto sobre el que se hará especial hincapié será el evitar que la posesión de varios beneficios por un mismo eclesiástico sea práctica habitual. Relacionado con lo anterior también estaba el tratar de conseguir una cierta continuidad de permanencia de los canónigos en sus respectivos beneficios; así, por ejemplo, se exigirán seis meses al menos de residencia continuada en la Iglesia conquense para poder recibir la renta del *vestuario*. Con todo ello, en cierto modo, se estaba elevando el papel de la canonjía en el conjunto de la estructura catedralicia al exigirse una mayor dedicación de sus poseedores a las funciones que les eran propias como canónigos, tratándose de paliar en lo posible

su tradicional absentismo[3], aunque es bien sabido que esto último no siempre se conseguiría.

La otra legación, de gran trascendencia posterior, fue la del cardenal Gil de Torres. Entre 1245 y 1252 este personaje intervendría en numerosas diócesis de la Iglesia hispana, sobre todo con el fin de ajustar el reparto de rentas entre los cabildos catedralicios y sus obispos, así como para determinar el número de racioneros y mediorracioneros de cada cabildo catedralicio.

Su intervención sobre la Iglesia conquense tuvo lugar el 24 de abril de 1251. La finalidad principal de esta legación queda claramente expresada en el documento resultante de su actuación: <<reformandum statum conchensis ecclesie tam in numero servitorum quam in beneficiis prestimoniis>>. A la vez, se pretendía que el nombramiento de beneficiados se adaptara de forma estricta a las formas canónicas. Pero sin duda la verdadera preocupación del cardenal Gil de Torres en su intervención sobre la Iglesia conquense fue detener el aumento desproporcionado del número de raciones del cabildo catedralicio, determinando por ello que el número de racioneros fuese de diez y el de mediorracioneros de doce. Además, prohibirá que en el futuro se trate de introducir algún cambio en este número de beneficiados, aspirando así a conseguir una continuidad para su reforma.

En definitiva, el cardenal Gil de Torres era consciente de la necesidad de llevar a cabo una reducción de gastos en la Iglesia conquense, lo que podría conseguirse disminuyendo el número de beneficiados del cabildo catedralicio, que hasta entonces estaba por encima de las verdaderas posibilidades económicas de la institución capitular. Por otro lado, si el cardenal alude a la necesidad de que los beneficiados se elijan de acuerdo a la normativa canónica, no puede ser por otra razón que porque esta normativa era objeto de violación. De hecho, en no pocas ocasiones los beneficiados de las catedrales eran elegidos pensando más en la devolución de favores o en intereses

[3]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio sobre la Iglesia conquense...>>, pp. 53-54.

personales que en las necesidades reales del servicio eclesiástico a prestar o en su idoneidad[4].

Las reformas del cardenal Gil de Torres necesitaron de algunas medidas posteriores que sirvieran de protección a lo ya establecido por él, y en este sentido se puede interpretar una resolución pontificia del 13 de junio de 1257 por la que Alejandro IV determinó que ni el obispo ni el cabildo catedralicio conquense pudieran ser obligados por la Santa Sede a recibir o proveer beneficios en persona alguna determinada[5].

Pero sin duda lo que más llama la atención de las reformas de Gil de Torres es su gran estabilidad posterior, pues, por ejemplo, sabemos que en el siglo XVII el número de raciones del cabildo catedralicio conquense seguía siendo de diez enteras y doce medias[6]. Así, pues, debe destacarse la trascendencia ulterior que en materia beneficial tuvieron estas intervenciones pontificias del siglo XIII.

B.2) *La concesión pontificia de beneficios eclesiásticos*

Al margen de las recién señaladas intervenciones pontificias en la estructura beneficial del cabildo catedralicio conquense, la intervención más destacada del Papado en materia beneficial es la que se produjo mediante el otorgamiento de beneficios en la Iglesia y obispado conquense a favor de determinados eclesiásticos, muchas veces como respuesta a una súplica previa presentada ante el papa por ciertos personajes. En las páginas siguientes tendremos ocasión de analizar un buen número de estas concesiones beneficiales que se produjeron con mayor o menor intensidad, según los momentos, a lo largo de la Baja Edad Media, cuestión sobre la cual en los registros pontificios se nos ha conservado una rica información.

---

[4] *Ibid.*, pp. 54-55.

[5] I. Rodríguez de Lama, *La documentación pontificia de Alejandro IV*, nº 263.

[6] Juan Pablo Mártir Rizo, *Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca*, pp. 122-123.

B.2.1) *Algunas concesiones de beneficios hasta mediados del siglo XIV*

Las primeras noticias que tenemos sobre otorgamiento de beneficios por el papa en la Iglesia conquense se remontan al siglo XIII. El 26 de julio de 1249 Inocencio IV había concedido al cabildo catedralicio conquense libertad plena para la recepción o provisión de beneficios eclesiásticos[7], a pesar de lo cual en fechas inmediatamente posteriores comenzamos a tener algunos testimonios documentales sobre personajes extranjeros ostentando beneficios en el cabildo catedralicio conquense, que sin duda les fueron conferidos por mediación pontificia. Así, por ejemplo, el 20 de diciembre de 1252 nos encontramos a un tal *Guillelmus* como <<archipresbytero de Cusiliano, canonico conchensi>>[8]. Algunos años más tarde, el 6 de marzo de 1264, figura también como canónigo conquense el maestro Juan de Monte Albano, a quien en dicha fecha le fue conferida por el papa Urbano IV una ración con prestimonios que había quedado vacante en la Iglesia toledana[9]. Por otro lado, el 4 de mayo de 1289 Nicolás IV otorgaría facultad para testar al maestro Juan Romanucio, corrector de documentos pontificios que en aquel momento era ya canónigo de Cuenca[10], cargo que aún seguía ostentando en 1302[11]. Ni qué decir tiene que todos estos personajes eran absentistas de sus respectivos beneficios en la Iglesia conquense.

El traslado de la Curia pontificia a Aviñón a principios del siglo XIV conllevó, entre otras cosas, un considerable aumento en el grado de centralización eclesiástica en torno a la sede aviñonense, lo que se manifestaría de un modo particularmente acusado durante el pontificado de Juan XXII (1316-1334). Esta

---

[7] ACC, caj. 5, nº 84.

[8] E. Berger, *Les Registres d'Innocent IV*, III, nº 6183.

[9] Jean Guiraud, *Les Registres d'Urbain IV*, III, nº 1415.

[10] Ernest Langlois, *Les Registres de Nicolas IV*, I, nº 776.

[11] G. Digard, *Boniface VIII*, III, nº 4882.

mayor centralización se plasmó también, lógicamente, en el terreno beneficial, con lo que aumentaría muy notablemente la provisión pontificia de beneficios eclesiásticos en casi todas las diócesis de Occidente.

La de Cuenca no fue en absoluto una excepción a la regla, y para el pontificado de Juan XXII contamos con un buen número de ejemplos de otorgamiento de beneficios por el papa en la Iglesia conquense. Una primera muestra de ello es la concesión que el 20 de agosto de 1317 hizo Juan XXII a favor de Guillermo Vitalis de San Juan de la maestrescolía de Cuenca con canonjía y prebenda que se habían quedado vacantes por muerte de Álvaro Sánchez[12]. Otra concesión, también a favor de un extranjero, es la que tuvo lugar el 31 de octubre de 1322, otorgándose una canonjía en Cuenca a favor de un tal Guillermo Bernardo[13].

Juan XXII también confirió algunos beneficios a clérigos de origen hispano. Por ejemplo, el 21 de marzo de 1324 otorgaría a Fernando García el deanato de Cuenca que se había quedado vacante por consagración del anterior deán, Pedro, como obispo de Évora, y ello a pesar de que dicho Fernando García ya poseía numerosos prestimonios en ciertos lugares de la diócesis conquense (parroquia de San Martín de Cuenca, Zarzuela, Bólliga, La Trinidad de Huete)[14]. Pocos meses después, el 5 de octubre del mismo año, Juan XXII proveyó una canonjía en Cuenca a favor de Fernando García de Alcaldeto, quien ya poseía canonjías y prestimonios en otras diócesis y varias porciones prestimoniales en algunos lugares del obispado de Cuenca, como la parroquia de Santa María de Lara, en Huete, o la parroquia de Cañaveruelas, debiendo renunciar a la ración que también tenía en el cabildo catedralicio conquense[15]. Además, el 1 de marzo de 1325 el papa también concedió a este mismo personaje la expectativa para la próxima dignidad que quedase vacante en Cuenca, quedando obligado

---

[12] G. Mollat, *Jean XXII. Lettres Communes*, I, nº 4800.

[13] *Ibid.*, IV, nº 16541.

[14] *Ibid.*, V, nº 19161.

[15] *Ibid.*, V, nº 20770.

a renunciar a algunos prestimonios que poseía en ciertas diócesis pero conservando a la vez bastantes porciones y medias porciones en otros lugares[16].

La siguiente intervención pontificia tuvo lugar el 16 de septiembre de 1327, fecha en que Juan XXII proveyó a favor de Juan de Luna una canonjía con prestimonios que había quedado vacante en Cuenca, prohibiendo además que el cabildo catedralicio se opusiera a esta provisión pontificia[17]. Este Juan de Luna estaba emparentado con el entonces arzobispo de Tarragona don Jimeno de Luna, y la concesión de dicha canonjía en Cuenca a favor de un miembro de esta familia aragonesa debe ser puesta inevitablemente en relación con los vínculos familiares que entonces ya existían entre los Luna y la familia conquense de los Albornoz. Dos años más tarde, el 2 de diciembre de 1329, el papa intervendría de nuevo, en esta ocasión reservando una canonjía con prestimonios en Cuenca a favor de Nerio de Maynectis, de Montelupone, y ello a pesar de los múltiples beneficios que este personaje ya poseía en otras diócesis[18]. Finalmente, una última concesión de que tenemos noticia es la que tuvo lugar el 11 de agosto de 1330, fecha en la cual Juan XXII otorgaría a Velasco Alfonso el arcedianato de Cuenca, que se había quedado vacante al serle concedido a su anterior titular, Gil Álvarez de Albornoz, el arcedianato de Calatrava en la Iglesia de Toledo[19].

Para el pontificado de Benedicto XII (1334-1342), contamos con algún caso de otorgamiento por el papa de beneficios en Cuenca a favor de clérigos extranjeros. Así, por ejemplo, el 7 de diciembre de 1337 se confirió una canonjía en el cabildo catedralicio conquense, con prebenda y prestimonios, a favor de Juan de Rubeo Monte, estudiante de Derecho Canónico y familiar del cardenal de San Jorge *ad Velum Aureum*[20]. Otra intervención

---

[16] *Ibid.*, V, nº 21674.

[17] ASVat, *Reg. Vat.* 85, f. 35r-v, nº 78.

[18] G. Mollat, *Jean XXII*, IX, nº 47606.

[19] *Ibid.*, IX, nº 50534.

[20] M. Vidal, *Benoit XII. Lettres Communes*, I, nº 4374.

es la que tuvo lugar el 7 de junio de 1338, fecha en que el papa otorgó una canonjía y prebenda con prestimonios que se habían quedado vacantes en la Iglesia de Cuenca, por consagración de Gil Álvarez de Albornoz como arzobispo de Toledo, a favor de Juan Jandre de Aviñón, familiar del cardenal diácono de Santa María La Nueva, Raimundo[21].

Por último, durante el pontificado de Clemente VI (1342-1352) también se produjo alguna concesión pontificia de beneficios a favor de extranjeros, como la que tuvo lugar el 6 de junio de 1351, mediante la cual el papa confirmó a Juan de Trajecto, hombre de <<probitatis et virtutum merita>>, en la posesión de la chantría de Cuenca[22].

Este otorgamiento por los papas de beneficios a favor de clérigos extranjeros adquiriría un importante desarrollo a partir del pontificado de Aviñón, afectando de forma general a todo el reino de Castilla, lo que pronto motivaría que se presentasen numerosas quejas al respecto en las reuniones de Cortes, puesto que dichos clérigos, además de ser absentistas, sacaban de Castilla importantes cantidades de dinero procedentes de las rentas de sus beneficios, lo que contribuía al empobrecimiento del reino. Así, por ejemplo, en las Cortes de Madrid de 1329 se prohibió la concesión de beneficios a clérigos no naturales del reino[23], repitiéndose similar prohibición en las Cortes de Palencia de 1388[24], a pesar de lo cual la presencia de clérigos extranjeros ostentando beneficios en algunas diócesis castellanas nunca sería erradicada del todo.

B.2.2) *Las suplicaciones reales de beneficios*

Una dimensión esencial de las aspiraciones de subordinación del poder eclesiástico a los intereses de la preeminencia regia

---

[21] *Ibid.*, II, nº 5393.

[22] ASVat., *Reg. Vat.* 145, f. 17.

[23] *Cortes*, I, pp. 432-433.

[24] *Cortes*, II, p. 417.

fue la designación de clérigos para ocupar los beneficios eclesiásticos, lo que suponía, en definitiva, la intromisión de la soberanía regia en el funcionamiento del complejo sistema beneficial. Existían, desde luego, precedentes de estas aspiraciones de la Monarquía, pero será sobre todo durante la época Trastámara cuando el control regio sobre los beneficios eclesiásticos adquiera un mayor relieve.

Las aspiraciones esenciales de los monarcas en esta materia quedaban enunciadas en dos objetivos: que la designación de las personas para beneficios eclesiásticos dentro del reino se produjera exclusivamente entre los naturales del mismo, y que, en un nivel más elevado de pretensiones, toda designación quedase sometida a la previa presentación del clérigo por el rey. Asegurando tales objetivos, parecían obtenerse garantías muy razonables del sometimiento del designado a la preeminencia regia. Será sobre todo el primero de estos fines el que sea objeto de más intensa reivindicación durante la época Trastámara, dejándose el siguiente, en lo que se refiere a su plena definición jurídica, para una fase más tardía, aunque produciéndose aproximaciones importantes también durante esta época[25].

Desde luego, la adjudicación de beneficios eclesiásticos cursada por orden de los monarcas a través de sus procuradores ante el Papado constituirá una típica manifestación del intervencionismo regio en la configuración personal de la Iglesia del reino, puesto que, por esta vía, se garantizaba la presencia de los que se podrían denominar como <<clérigos del rey>>, que se encontraban distribuídos por toda la geografía del reino y a lo largo de toda la jerarquía eclesiástica[26].

Bien es verdad que la suplicación de beneficios eclesiásticos ante el papa no se limitó a la iniciativa regia, sino que también algunos nobles la practicaron en favor de sus protegidos, del mismo modo que también la utilizaron miembros de la alta jerarquía eclesiástica, cuestión que en seguida tendremos ocasión de ejemplificar para el caso conquense. Sin embargo, de forma

---

[25] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 344-345.

[26] *Ibid.*, p. 356.

general para todo el reino de Castilla, ni una ni otra manifestación admiten comparación por la diferencia de volumen del número de súplicas y por la frecuencia de las mismas con lo que se puede observar en el caso regio.

Centrándonos ya en la Iglesia conquense, debe señalarse en primer lugar que es para la época del Cisma cuando más datos tenemos sobre súplicas reales ante el papa para la concesión de beneficios, siendo también en esta época cuando más abunda la información para el resto de las diócesis, pues durante estos años el sistema habitual de súplicas se realizaba mediante la presentación ante el papa de rótulos colectivos de mayor o menor extensión, lo que facilita enormemente la localización de estas súplicas, que se encuentran recogidas en los *Registros de Súplicas* del Archivo Secreto Vaticano. En cambio, con posterioridad al Cisma dejaría de ser frecuente la presentación de rótulos conteniendo un conjunto de súplicas, por lo que éstas se realizarán más bien de forma individualizada, siendo éste un factor que dificulta extraordinariamente su localización. Respecto a los numerosos ejemplos concretos que conocemos de súplicas reales ante el papa relativas a la concesión de beneficios en la Iglesia y diócesis de Cuenca, remitimos al lector al capítulo que se dedicó al análisis de las relaciones de la Iglesia conquense con la Monarquía Trastámara, en el cual se recogen muchas de dichas súplicas, por lo que aquí no se repetirá de nuevo lo ya señalado entonces.

B.2.3) *El cardenal Albornoz y los beneficios de la Iglesia conquense*

Con anterioridad ya se indicó la gran influencia que ejerció el cardenal Albornoz sobre la Iglesia conquense en muy diversos terrenos. Por ello no es de extrañar que también en materia beneficial su influjo fuese grande, lo que se manifestaría a través de frecuentes súplicas ante el papa para la concesión de beneficios en la Iglesia y diócesis de Cuenca a favor de sus numerosos nepotes.

Pero antes de nada conviene aludir a algunos beneficios eclesiásticos que desde fechas muy tempranas obtuvo por concesión pontificia el joven y futuro cardenal Gil Álvarez de Albornoz. Este personaje, natural de Cuenca y miembro de la noble familia de los Albornoz, bastante arraigada ya entonces en la ciudad, iniciaría pronto su brillante carrera eclesiástica en la catedral conquense, obteniendo del papa importantes prebendas gracias a su preeminente posición social y buenas dotes intelectuales.

Por ejemplo, el 20 de julio de 1325 Juan XXII le otorgó una canonjía con prestimonios en la Iglesia de Toledo, a pesar de que ya entonces poseía otra canonjía y el arcedianato de Huete en la Iglesia de Cuenca, así como bastantes prestimonios y porciones prestimoniales en algunos lugares de la diócesis conquense: Torralba, Recuenco, Palomares, Huerta Vellida, Carrascosa, Arrancacepas, Córcoles, Chillarón, Cólliga, Colliguilla, Fuente el Espino, Santa María de Lara y Santa María de Atienza en Huete, Santa Cruz de Cuenca, Albendea, Atalaya y Oteros; todos estos prestimonios sumaban un valor global de 100 florines de oro[27].

Al año siguiente, el 21 de agosto de 1326, el papa concedería a Gil Álvarez dispensa pontificia para poder obtener nuevos prestimonios o porciones prestimoniales en la ciudad o diócesis de Cuenca hasta una cuantía de 200 libras tornesas, no obstante lo cual seguiría conservando sendas canonjías con prestimonios en Cuenca y Toledo, así como el arcedianato de Huete en el cabildo catedralicio conquense[28]. Fue precisamente en dicho año de 1326, así como al año siguiente, cuando el cabildo catedralicio de Cuenca elegiría infructuosamente como obispo de la ciudad al joven Gil Álvarez de Albornoz, oponiéndose el papa en ambas ocasiones a esta elección; sobre ello ya se habló páginas atrás. Por otro lado, algún tiempo después Gil Álvarez también obtendría el arcedianato de Calatrava en la Iglesia toledana, cuya posesión, junto con la del arcedianato de Cuenca, le sería confirmada el 9 de octubre de 1332 por el arzobispo de Zaragoza

---

[27] G. Mollat, *Jean XXII. Lettres Communes*, V, nº 22858.

[28] *Ibid.*, VI, nº 26274.

Pedro López de Luna, quien tenía facultad apostólica para ello[29].

Los numerosos deberes tanto eclesiásticos como políticos que pronto tuvo que afrontar Gil Álvarez de Albornoz acabarían motivando que no pudiese hacerse cargo personalmente de la visita de los varios arcedianatos que poseía en diversas diócesis. Por ello, el 12 de diciembre de 1355, siendo ya cardenal, el papa Inocencio VI le concedería facultad para delegar en otras personas la visita de su arcedianato de Huete, en la diócesis de Cuenca, durante los cinco años siguientes[30]. En función de esto, en la misma fecha Inocencio VI también mandaría al obispo de Tarazona, a Tello García, canónigo de esta misma diócesis, y al chantre de Mondoñedo que se encargasen de introducir al procurador designado por el cardenal Albornoz para visitar su arcedianato de Huete[31].

Al año siguiente habría de producirse una nueva intervención pontificia sobre la misma materia, aunque en esta ocasión referente a los arcedianatos que el cardenal Albornoz poseía en otras diócesis. Así, el 29 de enero de 1356 el papa mandó al deán de Cuenca, al maestrescuela de Zamora y a Martín Sánchez de Cuenca, canónigo zamorano, que introdujesen a los procuradores designados por el cardenal Albornoz para visitar sus arcedianatos de Ledesma[32] y Saldaña[33]. Una última intervención de Inocencio VI que citaremos es la que tuvo lugar el 8 de octubre de 1356, a través de la cual el papa nombró al abad del monasterio de San Facundo, al deán de Córdoba y al arcediano de Cuenca conservadores de los bienes que el cardenal Albornoz recibiría de su arcedianato de Lisboa durante los cinco años siguientes[34].

---

[29] ASVat., *Instrumenta Miscellanea*, nº 1224.

[30] *Diplomatario*, nº 413.

[31] Diplomatario, nº 414.

[32] *Diplomatario*, nº 429.

[33] *Diplomatario*, nº 431.

[34] *Diplomatario*, nº 497.

Pero además de gozar de todos estos y otros muchos beneficios en diversas diócesis, el cardenal Albornoz también se cuidó mucho de que el papa favoreciera con beneficios eclesiásticos y privilegios a todos aquellos numerosos clérigos que formaban parte de su círculo de influencia[35]. Ello se consiguió mediante la presentación al papa de un elevadísimo número de súplicas para la concesión de beneficios en muy diferentes diócesis, tanto castellanas como de otros reinos, a favor de los numerosos clérigos allegados al cardenal. Por ello, y dada la fuerte influencia que Gil Álvarez de Albornoz ejercía sobre la Iglesia y diócesis conquense, no es de extrañar que una cierta cantidad de estas súplicas estén referidas a la concesión de beneficios diversos en Cuenca. A continuación se expondrán algunos ejemplos al respecto.

Un primer caso que podemos citar es el de Fernando Álvarez de Albornoz, sobrino del cardenal que al menos en 1354 figura como canónigo de Cuenca, beneficio al que sin duda habría accedido gracias a la mediación de su tío. Además, el 2 de noviembre de dicho año el cardenal don Gil suplicaría a Inocencio VI que concediese también a este sobrino suyo una canonjía con prebenda y prestimonios en Toledo, a lo que el papa accedería[36]. El 19 de diciembre tuvo lugar una nueva súplica, que en esta ocasión se canalizó a través del arzobispo de Zaragoza don Lope de Luna, quien solicitó al papa que concediese a Pedro García de Rada, bachiller en ambos derechos y comensal suyo, una canonjía en Cuenca o Toledo en atención a los servicios que dicho Pedro García había prestado en la legación del cardenal Albornoz[37]. Inocencio VI, en atención a esta súplica, accedería a la petición, concediendo una canonjía con expectativa de prebenda,

---

[35] Una breve relación de algunos de los eclesiásticos, tanto castellanos como extranjeros, que formaban parte del círculo de influencia del cardenal Albornoz puede verse en: Juan Beneyto Pérez, «Albornoz y sus amigos», *AEM*, 18 (1988), pp. 305-307.

[36] *Diplomatario*, nº 155-156.

[37] *Diplomatario*, nº 195.

prestimonios y porciones prestimoniales en Cuenca a favor de Pedro García de Rada[38].

La siguiente súplica de que tenemos noticia se canalizaría a través de Pedro Calvillo, obispo de Tarazona, quien el 27 de mayo de 1355 solicitó al papa que concediese a Gonzalo García, presbítero y familiar del cardenal Albornoz, una canonjía en la catedral conquense y, *sub expectatione*, una prebenda con prestimonios también en Cuenca y su diócesis, a pesar de que ya poseía una canonjía extravagante en el cabildo catedralicio conquense, un beneficio servidero en el lugar de Almonacid y diversos prestimonios y porciones prestimoniales en las diócesis de Toledo, Cuenca y Sigüenza, habida cuenta de que estos beneficios no sobrepasaban los 80 florines anuales[39]. En la misma fecha Inocencio VI, en atención a esta súplica, concedería al mencionado Gonzalo García los beneficios solicitados, siempre y cuando el valor de su renta no sobrepasase las treinta libras tornesas[40].

El 15 de junio de 1355 habrían de producirse varias nuevas súplicas efectuadas directamente por el cardenal Albornoz. Éste, en la mencionada fecha, suplicaría al papa que concediese a sus familiares los beneficios que pertenecieron a Gil Pérez, deán de la catedral de Cuenca que había sido su maestro en primeras letras y después su acompañante y familiar continuo, así como procurador y administrador general de sus bienes en los reinos hispánicos. Esta súplica ya había sido presentada antes oralmente al papa, que había respondido favorablemente, por el obispo de Tarazona Pedro Calvillo, tan pronto como se supo la muerte de Gil Pérez. En primer lugar el cardenal suplicó a Inocencio VI que concediese a Fernando Pérez de Casasola, tesorero de la catedral conquense y familiar suyo, el deanato de Cuenca, puesto que a su juicio no había nadie más indicado para ocupar dicho cargo, siendo además el mencionado Fernando Pérez de Casasola natural

---

[38] *Diplomatario*, nº 196.

[39] *Diplomatario*, nº 299.

[40] *Diplomatario*, nº 300.

de la misma ciudad de Cuenca[41]. Por otro lado, el cardenal Albornoz también solicitó del papa que concediese a Juan Martínez, canónigo conquense, familiar suyo y administrador de su casa, que ahora se encontraba con él en Italia, la tesorería de la catedral de Cuenca que quedaría vacante al serle entregado a Fernando Pérez de Casasola el deanato[42]. Por último, el cardenal suplicó a Inocencio VI que otorgase a Juan López, racionero de la catedral conquense y camarero suyo, que también estaba en Italia acompañándole, la canonjía y prebenda de Cuenca que habían pertenecido al deán fallecido[43].

Tan sólo diez días más tarde, el 25 de junio, el cardenal Albornoz volvería a presentar las mismas súplicas ante el papa[44], solicitando también que se reservase a favor de Juan Martínez, familiar suyo, la ración perpetua en la catedral conquense que poseía Juan López y que éste dejaría vacante al tomar posesión de la canonjía y prebenda cuya concesión se había suplicado[45].

En función de todas estas súplicas, el mismo 25 de junio de 1355 Inocencio VI procedería a la concesión efectiva de los beneficios que se habían solicitado. Por un lado el papa entregó a Fernando Pérez de Casasola, familiar del cardenal, el deanato de Cuenca, y ello a pesar de que se trataba de una dignidad con *cura animarum* que se solía proveer por elección. El concesionario debería renunciar al cargo de tesorero que hasta entonces había ocupado en Cuenca, pero podría conservar las canonjías y prebendas que tenía en las catedrales de Cuenca y Segorbe-Albarracín, así como una ración en la de Toledo y diversos prestimonios y porciones prestimoniales en las mencionadas

---

[41] <<Videlicet de decanatu predicto dilecto familiari meo Fernando Petri de Casasola, thesaurario dicte ecclesie conchensis, qui de ipsa civitate est oriundus, et licet non sit maioris valoris quam thesauraria, tamen secundum conscientiam meam nullum in dicta ecclesia sufficientiorem reputo ad eum obtinendum...>>. *Diplomatario*, nº 306.

[42] *Diplomatario*, nº 307.

[43] *Diplomatario*, nº 308.

[44] *Diplomatario*, nº 315, 318 y 320.

[45] *Diplomatario*, nº 322.

diócesis[46]. Por último, el papa comisionó al deán de Silves, al arcediano de Sigüenza y al tesorero de Mondoñedo para que en nombre de la Santa Sede diesen posesión del deanato de Cuenca a Fernando Pérez de Casasola[47].

Por otra parte, también el 25 de junio del mencionado año Inocencio VI mandaría al obispo de Osma que diese posesión a Juan Martínez, familiar y administrador de la casa del cardenal Albornoz, de la tesorería de Cuenca que quedaría vacante al serle entregado el deanato a Fernando Pérez de Casasola. A pesar de esta concesión, dicho Juan Martínez podrá seguir conservando la canonjía y prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales que tiene en Cuenca, así como un beneficio simple en la parroquia de Santa María de Guadalajara[48].

En la misma fecha el papa otorgó a Juan López, camarero del cardenal Albornoz, una canonjía con prebenda en la catedral conquense, a pesar de que ya poseía un beneficio perpetuo *sine cura* en la parroquia de Loeches y diversos prestimonios y porciones prestimoniales en las diócesis de Toledo y Cuenca, que podría conservar, debiendo renunciar, en cambio, a la ración perpetua que hasta entonces había tenido en la catedral de Cuenca[49]. Finalmente, Inocencio VI también reservaría a favor de Juan Martínez, familiar del cardenal, la antedicha ración perpetua que vacaría en la catedral conquense al serle entregada la canonjía a Juan López. No obstante esta reserva, el mencionado Juan Martínez podría seguir conservando el beneficio servidero y curado que tenía en la parroquia de Las Portarizas, situada en la diócesis de Toledo[50].

Para el pontificado de Urbano V también ha podido localizarse un importante número de súplicas del cardenal solicitando al papa la concesión de beneficios en la Iglesia y diócesis de

---

[46] *Diplomatario*, nº 316.

[47] *Diplomatario*, nº 317.

[48] *Diplomatario*, nº 319.

[49] *Diplomatario*, nº 321.

[50] *Diplomatario*, nº 323.

Cuenca a favor de algunos de sus familiares. Un primer ejemplo de ello viene dado por la súplica presentada el 20 de noviembre de 1362 para que el papa reservase el arcedianato de Moya y una canonjía y prebenda con prestimonios y porciones prestimoniales en Cuenca a favor de su familiar y cubiculario Juan Martínez[51]. El 10 de julio de 1363, habiéndose quedado ya vacante el arcedianato de Moya, el cardenal suplicaría de nuevo su concesión a favor del mencionado Juan Martínez[52].

Por otro lado, en la relación de súplicas que había presentado el cardenal el 20 de noviembre de 1362 nos encontramos a un tal Arnaldo Vigneri, presbítero de la archidiócesis de Auch, procurador del cardenal y administrador de su casa, que además de poseer numerosos beneficios en diversas diócesis, en la de Cuenca también también tenía los siguientes gracias a la mediación del cardenal: una ración perpetua en la catedral, el arciprestazgo de Pareja, una porción prestimonial en Sacedón y media en Millana, así como un beneficio *sine cura* y otras tres porciones prestimoniales y media en ciertos lugares del obispado conquense[53]. El 12 de diciembre del mismo año el cardenal también suplicaría a Urbano V que concediese a Juan Sánchez, clérigo burgalés familiar suyo, una canonjía y prebenda en la Iglesia de Zamora, señalándose además en el documento que el citado Juan Sánchez ya poseía previamente diversas porciones prestimoniales en la diócesis de Cuenca -en Tarancón, Villar del Saz, Fuenteanaya y Las Pedroñeras-, así como un beneficio *sine cura* en Zafra, también en el obispado conquense[54].

En otra súplica del 26 de junio de 1363 nos encontramos al futuro obispo conquense Pedro Alfonso de Toledo, tesorero del cardenal Albornoz, ostentando en ese momento una canonjía en la catedral conquense, con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, además de poseer también numerosos

---

[51] ASVat., *Reg. Suppl.* 36, f. 248v.

[52] ASVat., *Reg. Suppl.* 39, f. 174v.

[53] ASVat., *Reg. Suppl.* 36, f. 249r.

[54] ASVat., *Reg. Suppl.* 36, f. 250v.

beneficios de considerable importancia en otras diócesis, como por ejemplo el arcedianato de Alcaraz o el de Calatrava[55].

Un personaje que obtendría por provisión pontificia gran cantidad de beneficios gracias a la mediación del cardenal fue su camarero y capellán Alfonso Fernández de Toledo, quien en 1365 ya poseía una canonjía en Cuenca con prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, además de otros muchos beneficios en otras diócesis[56]. El 14 de septiembre de este mismo año el cardenal Albornoz suplicó a Urbano V que concediese a Domingo de Juan, familiar suyo y rector de la parroquia de Valdeolivas, en la diócesis de Cuenca, una ración íntegra en el cabildo catedralicio conquense con prestimonios y porciones prestimoniales, así como una capellanía perpetua curada en el altar de Santiago de la catedral, todo lo cual se había quedado vacante recientemente[57].

Lógicamente, tampoco podían faltar los casos en que el cardenal Albornoz suplicó la concesión de beneficios a favor de alguno de sus parientes más directos, y prueba de ello es que en 1366 Fernando Álvarez de Albornoz, doctor en Decretos y nepote del cardenal, aparece poseyendo sendas canonjías y prebendas con prestimonios y porciones prestimoniales en Toledo y Cuenca, lo que no sería impedimento para que el 17 de marzo de dicho año Urbano V, previa súplica del cardenal, le concediese también una canonjía y prebenda en la Iglesia de Valencia[58].

Un último ejemplo que citaremos de otorgamiento de beneficios en Cuenca gracias al influjo del cardenal es el que viene dado por una provisión pontificia que se produjo el 24 de septiembre de 1367, recién fallecido Gil de Albornoz. En dicha fecha Urbano V concedería a Álvaro Martínez, estudiante de

---

[55]ASVat., *Reg. Suppl.* 39, f. 136v.

[56]M.H. Laurent, *Urbain V. Lettres Communes*, IV, nº 14143. Diversos ejemplos de concesión por Urbano V, a instancias del cardenal, de otros beneficios en diferentes diócesis a favor de este personaje quedan recogidos en la citada obra, nº 989, 4829, 14143, 14462, 18118, 18795, 19063, 19069, 20898, 23131, 23167, 23401, 23687, 24859, 24982, 25313, 25558, 25579 y 26978.

[57]ASVat., *Reg. Suppl.* 43, f. 215r.

[58]M.H. Langlois, *Urbain V. Lettres Communes*, V, nº 16900.

Derecho Canónico que había servido durante varios años como capellán al cardenal, el arcedianato de Huete y canonjía con prebenda que se habían quedado vacantes en la Iglesia de Cuenca tras la muerte de don Gil Álvarez de Albornoz, su anterior titular. Según el documento pontificio, el valor de los mencionados beneficios se estimaba en unos 300 florines de oro anuales[59].

La relación de súplicas y otorgamiento de beneficios que se acaba de indicar constituye una buena parte de las concesiones beneficiales en la Iglesia y diócesis de Cuenca que realizaron diversos pontífices a instancias del cardenal Gil Álvarez de Albornoz, aunque no se trata de una relación completa de absolutamente todos los beneficios concedidos de esta forma, cosa cuyo estudio requeriría muchísimo tiempo de búsqueda paciente en los Registros de Súplicas del Archivo Secreto Vaticano, pues hoy por hoy sólamente se encuentra bien catalogado el contenido de algunos pocos de estos registros. No obstante, la relación que aquí se ha ofrecido constituye sin duda una parte, creemos que significativa, de las muchas concesiones beneficiales en Cuenca realizadas por mediación del cardenal Albornoz, quien durante muchos años, gracias a su preeminente posición en la jerarquía eclesiástica y al gran influjo que tuvo sobre la Santa Sede -recordemos su importante papel en la pacificación de los Estados Pontificios-, ejercería un fuerte control sobre los beneficios eclesiásticos de la ciudad y diócesis de donde era oriundo y se había iniciado su brillante carrera eclesiástica.

Pero no por ello debemos olvidar, tal como se apuntó al principio de este apartado, que el cardenal Albornoz también ejercería una importante influencia en materia beneficial en muchas otras diócesis, sobre todo castellanas e italianas. Respecto a estas últimas, por ejemplo, debe destacarse la colación de beneficios eclesiásticos por parte del cardenal don Gil, quien había recibido potestad pontificia para ello, en diversas diócesis del territorio que actualmente ocupa la región

[59] *Ibid.*, VI, nº 19062.

italiana de la Emilia Romaña durante el tiempo de sus dos legaciones en Italia, de 1353 a 1367[60].

En definitiva, puede concluirse señalando que la influencia del cardenal Albornoz sobre la Iglesia conquense fue siempre enorme, y aún seguiría latente incluso después de su muerte. Una clara prueba de ello la constituye el nombramiento pontificio como obispo de Cuenca realizado el 4 de marzo de 1373 por Gregorio XI a favor de Pedro Alfonso de Toledo, que había sido familiar y tesorero del cardenal[61]. Por otro lado, tras la fundación del Colegio de San Clemente de Bolonia por el cardenal Albornoz, habría de ser siempre frecuente el paso por sus aulas de algunos clérigos conquenses, e incluso contamos con ciertos ejemplos de eclesiásticos de Cuenca que ejercieron el cargo de rector en el Colegio: Álvaro Martínez, familiar del cardenal, en 1368; Rodrigo de Cuenca, en 1380; o Gome Carrillo de Albornoz, en 1488 y 1491[62]. Esto explica que casi un siglo después de la muerte del cardenal su recuerdo aún continuase latente en Cuenca y, sobre todo, en los que habían sido colegiales del centro por él fundado en Bolonia. Por ello el chantre del cabildo catedralicio conquense don Nuño Álvarez de Fuentencalada, antiguo colegial boloñés, encargaría en 1450 la celebración en la catedral de un aniversario <<por el anima del sennor cardenal don Gil de Albornoz, que Dios aya, et por las animas de los otros a quien el dicho chantre era obligado>>[63]. Finalmente, a pesar de lo anecdótico del dato, tampoco deja de ser significativo que el 23 de febrero de 1487 el cabildo catedralicio de Cuenca encargase a un tal Rodrigo, platero, labrar sobre la plata de ciertos

---

[60]Estos beneficios los concedería el cardenal básicamente a sus familiares y capellanes, así como a estudiantes y clérigos de la región. Durante el tiempo de sus dos legaciones el cardenal otorgó en esta región italiana un total de 62 beneficios, siendo la procedencia de los beneficiados fundamentalmente italiana, francesa y belga. Sobre todo ello puede verse: Carlos Sáez, <<El cardenal Gil de Albornoz y los beneficios eclesiásticos en Emilia-Romaña (1353-1367)>>, *En la España Medieval. I. Estudios dedicados al profesor don Julio González González*, Madrid, 1980, pp. 423-442.

[61]ASVat., *Reg. Aven.* 190, ff. 40v-41v.

[62]Beltrán, *Bulario*, I, pp. 260-262.

[63]José Trenchs Odena, <<La cultura jurídico-piadosa...>>, p. 35.

cetros e inciensarios las armas del cardenal don Gil de Albornoz <<porque la memoria del no peresca>>[64].

B.2.4) *Otras suplicaciones de beneficios realizadas por la alta jerarquía eclesiástica*

Es indudable que entre los miembros del alto clero fue el cardenal Albornoz quien en más ocasiones suplicó a los pontífices la concesión de beneficios en el obispado de Cuenca a favor de sus nepotes y familiares. No obstante, también se debe destacar que, en menor medida, otros personajes diversos de la alta jerarquía eclesiástica, y entre ellos ciertos obispos de Cuenca, también a veces presentarían algunas suplicaciones de beneficios para sus familiares. Veamos a continuación algunos ejemplos de ello.

En primer lugar tenemos ciertas súplicas presentadas por algunos cardenales. El 7 de septiembre de 1316 Juan XXII concedería una canonjía con prestimonios en la Iglesia de Cuenca a favor de un tal Francisco, clérigo familiar del cardenal de San Jorge *ad Velum Aureum*, a petición de éste, y ello a pesar de que el concesionario ya poseía otros beneficios diversos en algunas diócesis italianas[65]. Algunos años más tarde, el 29 de junio de 1322, el mismo pontífice otorgó una canonjía con prebenda y prestimonios en la Iglesia de Cuenca a favor de Cazanimico de Soldanerinis, de Florencia, antiguo familiar de Jacobo, cardenal de San Jorge[66]. Ya hacia el final de su pontificado, el 14 de enero de 1333, Juan XXII concedería otra canonjía en Cuenca, con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales, a favor de Raimundo de Mireteng, y en atención a una súplica presentada previamente por el cardenal Guillermo, obispo Sabiniense[67].

---

[64] ACC, AC-1487, f. 103v.

[65] G. Mollat, *Jean XXII. Lettres Communes*, I, nº 758.

[66] *Ibid.*, IV, nº 15686.

[67] *Ibid.*, XII, nº 59367.

Para el pontificado de Benedicto XII (1334-1342) también pueden señalarse algunos casos de súplicas realizadas por cardenales. Por ejemplo, el 7 de diciembre de 1337 el papa confirió una canonjía con prebenda y prestimonios en la Iglesia de Cuenca a favor de Juan de Rubeomonte, estudiante de Derecho Canónico y familiar de Jacobo, cardenal de San Jorge *ad Velum Aureum*, en consideración a una súplica presentada por éste[68]. Y el 7 de junio de 1338 también se otorgaría una canonjía con prebenda y prestimonios en Cuenca, vacantes por consagración de Gil de Albornoz como arzobispo de Toledo, a favor de Juan Jandre de Aviñón, familiar de Raimundo, cardenal diácono de Santa María La Nueva, en atención a una súplica de éste[69].

Un último ejemplo de suplicaciones de cardenales que se citará corresponde al pontificado de Benedicto XIII (1394-1423). El 12 de junio de 1416 el cardenal Alfonso Carrillo suplicaría al papa la concesión de una canonjía en Cuenca a favor de su pariente Fernando Carrillo, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico en Salamanca, siendole finalmente otorgada dicha canonjía por el pontífice[70].

Otro grupo importante de súplicas de la alta jerarquía eclesiástica es el que vendría dado por las que a veces presentaron los propios obispos de Cuenca en favor de algunos de sus familiares. Por ejemplo, el 14 de mayo de 1333 Juan XXII concedería una canonjía en la Iglesia de Cuenca con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales a favor de un tal Guillermo Flori de Lodeva, bachiller en Leyes, en atención al obispo de Cuenca don Odón, de quien era servidor, y ello a pesar de que este personaje ya poseía otros beneficios en la diócesis conquense[71].

Un caso aún más significativo lo tenemos en el pequeño rótulo de súplicas presentado a Clemente VII por el obispo de

---

[68] M. Vidal, *Benoit XII. Lettres Communes*, I, nº 4374.

[69] *Ibid.*, II, nº 5393.

[70] ASVat., *Reg. Suppl.* 104, f. 286r / Beltrán, *Bulario*, II, nº 517.

[71] G. Mollat, *Jean XXII. Lettres Communes*, XII, nº 60350.

Cuenca el 19 de noviembre de 1381, y a través del cual se solicita la concesión de los siguientes beneficios: a Pedro Fernández, racionero de Cuenca, cubiculario y familiar suyo, una canonjía en la Iglesia de Cuenca con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales por un valor de hasta 40 libras tornesas; a su familiar y tesorero Martín Sánchez, racionero de Zamora, un arciprestazgo o vicaría en la diócesis de Cuenca, y ello a pesar de que poseía también un beneficio en la parroquia de San Vicente de Zamora y otro beneficio *sine cura* en la parroquia de San Andrés de Cuenca; a García de Albornoz, hijo del noble Gómez de Albornoz, clérigo conquense, una canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en la Iglesia, ciudad y diócesis de Cuenca, por un valor de hasta 60 libras tornesas, y ello a pesar de que ya poseía ciertos prestimonios en el obispado conquense; por último también se solicita la concesión a Pedro Rembti de Storeguebto, clérigo de la diócesis de Lyon, bachiller en Leyes, de una canonjía en la Iglesia de Lyon[72].

El obispo don Álvaro de Isorna también se cuidaría mucho de que el papa favoreciese con beneficios en Cuenca a algunos de sus familiares más allegados, y de hecho Martín V le había conferido facultad para poder conferir los beneficios de sus nepotes y familiares que vacasen. Así, entre otros familiares de Isorna que aparecen en una súplica del 26 de abril de 1435, nos encontramos a Juan Hurtado, deán de Burgos y arcediano de Huete; Ruy Bernal, arcediano de Alarcón; o Alfonso López, chantre de Cuenca[73].

También Fray Lope de Barrientos, el 14 de marzo de 1446, recibiría autorización pontificia de Eugenio IV para proveer a favor de sus familiares los beneficios de otros familiares suyos que fuesen quedando vacantes en la diócesis de Cuenca, tanto curados como no curados[74].

Aunque de forma más excepcional, en ocasiones el papa también conferiría algunos beneficios regulares en el obispado

---

[72]ASVat., *Reg. Suppl.* 65, f. 3v.

[73]Beltrán, *Cartulario*, I, pp. 349-353.

[74]Beltrán, *Bulario*, II, nº 1065.

conquense previa súplica del prelado titular de la mitra. El ejemplo más claro de ello lo tenemos en la concesión que en 1474 hizo Sixto IV de la encomienda de la abadía cisterciense de Santa María de Monsalud a favor del protonotario apostólico y arcediano de Alarcón Gabriel Condulmario, familiar y hombre de confianza del cardenal y obispo conquense Antonio Jacobo de Veneris[75], gracias a cuya intercesión ante el papa se le otorgó dicha encomienda, lo que a la larga favorecería el empobrecimiento del cenobio alcarreño debido a la renta anual que éste se vio obligado a entregar a Condulmario, quien además siempre practicó un total absentismo con respecto al cargo abacial que ostentaba[76].

Otro grupo de súplicas sería el constituído por las que a veces fueron presentadas por los prelados de otras diócesis. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 1381 el obispo de Ávila presentaría a Clemente VII, entre otras súplicas, dos referentes a Cuenca: para su familiar y continuo comensal, Gonzalo Fernández de Carrión, clérigo beneficiado en la parroquia de San Martín de Ocaña, diócesis de Toledo, se solicita la concesión de la primera vicaría perpetua que quede vacante en el obispado de Cuenca; y para Juan Fernández de Azañón, clérigo conquense, se pide una ración íntegra y perpetua con prestimonios y porciones prestimoniales en la Iglesia y diócesis de Cuenca[77]. Por otra parte, también en otro rótulo de súplicas presentado a Clemente VII, en esta ocasión por el arzobispo de Sevilla, el 17 de diciembre de 1384, figura una referente a Cuenca: se pide la concesión de un beneficio con cura o sin ella en la Iglesia de Cuenca a favor de Martín Fernández, clérigo conquense[78].

---

[75]El 8 de agosto de 1474 Gabriel Condulmario prometió pagar a la Cámara Apostólica y al Sacro Colegio Cardenalicio 56 florines de oro con dos tercios, en concepto de servicios comunes por la encomienda que se le había otorgado de la abadía cisterciense de Monsalud, en el obispado de Cuenca. ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 81, f. 8v.

[76]Fray Bernardo Cartes, *Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Monsalud*, p. 157.

[77]ASVat., *Reg. Suppl.* 65, f. 33r.

[78]ASVat., *Reg. Suppl.* 68, f. 12v.

Para el pontificado de Benedicto XIII pueden citarse asimismo varios ejemplos de este mismo tipo de súplicas. Uno de ellos es el que vendría dado por el rótulo presentado por el obispo de Amiens a este papa el 20 de octubre de 1394, y en el cual, entre otros personajes, figura un tal Pedro Rodríguez, diácono conquense, para quien se solicita la concesión de un beneficio, siendo de este modo probable que el mencionado Pedro Rodríguez guardase algún tipo de relación con el obispo de Amiens[79]. Por otro lado, en un largo rótulo de súplicas presentado el 16 de octubre de 1395 por el arzobispo de Toledo a Benedicto XIII también figura una referente a Cuenca: se pide para Miguel Martínez de Moya, presbítero de la diócesis conquense, la concesión de una ración íntegra o media en la catedral de Cuenca, con prestimonios y porciones prestimoniales, y ello a pesar de que dicho personaje ya poseía una capellanía en Moya[80]. Algunos años más tarde, el 13 de octubre de 1403, el electo toledano suplicaría a Benedicto XIII la concesión de una canonjía en la Iglesia de Cuenca a favor del clérigo conquense Álvaro Moro de Cañaveras, bachiller en Decretos, antiguo nepote del difunto obispo de Cuenca don Álvaro Martínez y ahora familiar del noble conquense y arcediano de Moya Alfonso Carrillo[81].

Dejando ya los casos de súplicas realizadas por algunos obispos y arzobispos, cabría mencionar también las que en ciertas ocasiones fueron presentadas por algunos personajes eclesiásticos de relieve. Así, por ejemplo, el 27 de abril de 1258 Alejandro IV se dirigiría al electo toledano para que se confiriese a un tal Arnaldo de Devesa, <<pauperem clericum secularis ecclesie Sancti Felicis Gerundensis>>, cierta canonjía que se había quedado vacante en la Iglesia de Cuenca, todo ello por consideración pontificia hacia Raimundo de Peñafort, quien previamente

---

[79] José Rius Serra, <<Rótulos presentados a Benedicto XIII>>, p. 79.

[80] ASVat., *Reg. Suppl.* 95, f. 178v.

[81] Beltrán, *Bulario*, I, nº 314.

había suplicado al papa que realizase dicha concesión a favor de su protegido Arnaldo de Devesa[82].

B.2.5) *Las suplicaciones de centros universitarios*

Otro conjunto bastante importante de súplicas es el que estaba constituído por las que en diversas ocasiones fueron presentadas por algunos centros universitarios de relieve solicitando del papa la concesión de beneficios eclesiásticos a favor de determinados estudiantes. Fue éste un sistema muy frecuentemente practicado durante la Baja Edad Media por las principales universidades de Castilla y el resto de Occidente, pues de este modo se facilitaba el mantenimiento de muchos estudiantes durante el tiempo que cursaban sus estudios, y por lo general los papas casi siempre condescendieron favorablemente a las peticiones que ante ellos fueron presentadas con este fin. A veces, en cambio, la concesión excesiva de beneficios a favor de estudiantes no era vista con buenos ojos por los cabildos catedralicios, pues este tipo de beneficiados siempre estaban ausentes y no colaboraban en el servicio litúrgico de la catedral, llevándose además un cierto volumen de las rentas capitulares. Páginas atrás ya se señaló cómo a veces el cabildo catedralicio conquense manifestó una clara reticencia a la hora de entregar su correspondiente renta a algunos de estos estudiantes que poseían beneficios en Cuenca.

Los diversos centros universitarios solicitaban al papa que concediese a sus estudiantes beneficios en las diferentes diócesis castellanas, incluída también la conquense. Un primer ejemplo que puede señalarse al respecto viene dado por el rótulo de 27 súplicas que el 18 de enero de 1380 presentó a Clemente VII el Colegio de San Clemente de Bolonia para que el papa otorgase ciertos beneficios a sus estudiantes. De entre todas estas súplicas, dos de ellas contienen peticiones referidas a Cuenca: para Rodrigo Arias, clérigo de la diócesis de Cuenca y bachiller en Decretos, se solicita la concesión de una dignidad con cura

[82] M.M.C. Bourel de la Roncière, *Les Registres d'Alexandre IV*, II, nº 2683.

o sin ella, así como una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia de Cuenca; y para Fernando de la Torre, también clérigo conquense y bachiller en Decretos, se pide un oficio con cura o sin ella y una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia conquense[83].

Pero fueron sin duda los estudiantes de la Universidad de Salamanca los que más beneficios habrían de recibir en la diócesis de Cuenca por mediación pontificia. Así, por ejemplo, en un largo rótulo que contiene un total de 342 súplicas de beneficios y otras gracias presentado a Clemente VII entre los días 29-31 de mayo de 1381 por el personal académico y estudiantes de la Universidad de Salamanca, se recoge un buen número de suplicaciones solicitando del papa la concesión de ciertos beneficios en Cuenca: para Diego Fernández de Valladolid, clérigo palentino y estudiante de Derecho Canónico, una canonjía en la Iglesia de Cuenca; para Martín Fernández, canónigo prebendado en Calahorra y estudiante de Derecho Canónico, similar petición; para Juan Sánchez de Valdemoro, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición; para Miguel Fernández de Salmerón, compañero en el cabildo catedralicio conquense y estudiante de Derecho Canónico, una ración perpetua en el mismo cabildo; para Diego Fernández, clérigo conquense, un beneficio a colación del obispo de Cuenca; para Juan Sánchez de Valdeolmos, presbítero conquense, similar petición a la anterior; para Gómez Fernández de Alarcón, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición; para Lope Sánchez de las Cuevas, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición[84].

También son varias las súplicas referentes a Cuenca que aparecen contenidas en el rótulo presentado el 9 de agosto de 1393 por la Universidad salmantina a Clemente VII: para Juan López de Heredia, bachiller en Leyes y clérigo conquense, una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia de Cuenca; para Diego Fernández de Huete, también bachiller en Leyes y

---

[83]Beltrán, *Bulario*, I, nº 154.

[84]Beltrán, *Bulario*, I, nº 162.

clérigo conquense, un beneficio en la ciudad o diócesis de Cuenca; para Juan Martínez de La Puerta, clérigo conquense y bachiller en Decretos, una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia de Cuenca; para Alfonso López del Castillo, clérigo conquense y estudiante de Derecho Civil, un beneficio a colación del obispo de Cuenca; para Juan Martínez de Sotos, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición a la anterior; para Juan Sánchez de Cifuentes, clérigo de la diócesis de Sigüenza, similar petición; para Juan Martínez de Castejón, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición; para Juan Rodríguez de Moya, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico, similar petición[85].

Benedicto XIII concedió también bastantes beneficios en Cuenca a favor de estudiantes salmantinos. Por ejemplo, el 23 de octubre de 1394, recién elegido como nuevo papa, mandó reservar un beneficio en la diócesis conquense a favor de Pedro Sánchez de Cuenca, estudiante en Salamanca[86], así como otro beneficio para Juan Sánchez de Valdeolivas, estudiante en la misma Universidad[87], y al día siguiente reservará de nuevo otro beneficio en la diócesis de Cuenca a favor de Juan Sánchez, estudiante de Gramática en Salamanca[88].

Por otro lado, en un rótulo que contiene un total de 324 súplicas presentado por la Universidad de Salamanca al papa Luna, y que está fechado entre los días 19 y 23 de octubre de 1403, se solicita también la concesión de un beneficio en la Iglesia de Cuenca a favor de cada uno de los siguientes eclesiásticos: para Mateo Pérez, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico; para Pedro de Belmonte, clérigo conquense y estudiante de Derecho Civil; para Fernando Martínez de Montalvo, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico; para Alfonso de Palma, clérigo de la diócesis de Córdoba <<qui per annum studit in theologia>>;

---

[85]Beltrán, *Bulario*, I, nº 220.

[86]Beltrán, *Bulario*, I, nº 273.

[87]Beltrán, *Bulario*, I, nº 278.

[88]Beltrán, *Bulario*, I, nº 279.

para Juan Sánchez de Loranca, clérigo conquense y estudiante de Derecho Canónico; para Alfonso Fernández de Uclés, clérigo conquense; para Alfonso Martínez de Fontepudico, presbítero de la diócesis de Cuenca y estudiante de Derecho Canónico[89].

Dos años más tarde, el 4 de junio de 1405, Benedicto XIII concedería la expectativa de una canonjía en Cuenca a favor de Fernando de Biedma, legista salmantino, recomendado ante el papa por la viuda del senador romano Gome de Albornoz[90].

Dejando ya la Universidad de Salamanca, y como último ejemplo de este tipo de súplicas de beneficios, puede mencionarse también un rótulo presentado en este caso por la Universidad de Valladolid a Benedicto XIII que está fechado entre los días 21 y 24 de octubre de 1394, y que entre otras muchas súplicas contiene dos relativas a Cuenca: para García Fernández de Bobadilla, clérigo palentino y estudiante por cuatro años de Derecho Canónico, se pide una canonjía con expectativa de prebenda en la Iglesia de Cuenca; y para Alfonso Fernández de Castromocho, presbítero palentino, se solicita la concesión de un beneficio en la diócesis conquense[91].

B.2.6) *Las suplicaciones de la Nobleza castellana*

Un último grupo de súplicas que conviene poner de relieve es el constituído por aquéllas que fueron presentadas por algunos miembros de la nobleza castellana que intercedieron ante el papa para que éste favoreciese con beneficios a algunos de sus protegidos. Como primer ejemplo podría citarse la súplica presentada por el conde de Trastámara a Clemente VII el 1 de junio de 1381 solicitando, entre otras cosas, que a Juan Fernández de Paredes de Nava, presbítero palentino, se le concediese una canonjía con prestimonios y porciones prestimoniales en la Iglesia de Cuenca, y ello a pesar de que dicho

---

[89]Beltrán, *Bulario*, I, nº 341.

[90]Beltrán, *Bulario*, I, nº 367.

[91]Beltrán, *Bulario*, III, nº 1424.

personaje ya poseía un beneficio prestimonial en la parroquia de Paredes de Nava[92].

Fue también el conde de Trastámara quien, dentro de un largo rótulo de 79 súplicas presentado a Clemente VII el 1 de julio de 1385, solicitó al papa que otorgase algunos beneficios en la Iglesia de Cuenca a favor de ciertos clérigos que seguramente se encontraban bajo su protección: para Pedro Martínez de Valdeolivas, presbítero de la diócesis conquense, un beneficio curado o no curado a colación del obispo de Cuenca; para Juan Fernández de Valdeolivas, clérigo conquense, similar petición a la anterior; para Álvaro Sánchez de Valdeolivas, clérigo conquense, similar petición; para Juan Martínez de Valdeolivas, subdiácono conquense, similar petición; para Pedro Sánchez de Valdeolivas, diácono conquense, similar petición; para Fernando Martínez, clérigo conquense, similar petición; para Juan Martínez, clérigo conquense, similar petición; para Juan Sánchez de Valdeolivas, clérigo conquense, un beneficio *sine cura* a colación del obispo de Cuenca, y ello a pesar del defecto de nacimiento que padece; para Lope Fernández de Solís, clérigo de la diócesis de Toledo, una canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en la Iglesia de Cuenca[93].

También en un rótulo de varias súplicas presentado a Benedicto XIII el 4 de junio de 1405 por doña Constanza de Villena, viuda del senador romano Gome de Albornoz, figuran algunas referentes a Cuenca: para su nepote Fernando de Biedma, clérigo de la diócesis de Toledo y estudiante de Leyes en Salamanca, se pide una canonjía con expectativa de prebenda, prestimonios y porciones prestimoniales en la Iglesia de Cuenca, cuyo valor no podrá sobrepasar las cien libras tornesas; para su capellán Miguel Sánchez, beneficiado perpetuo en la parroquia de Santa María de Sacedón, en la diócesis conquense, una ración íntegra o media en la Iglesia de Cuenca, o bien un arciprestazgo, cuya colación correrá a cargo del obispo y cabildo catedralicio conquense; para Bartolomé Cerezo, clérigo sevillano, similar

---

[92] ASVat., *Reg. Suppl.* 63, f. 42r.

[93] ASVat., *Reg. Suppl.* 68, ff. 215r-218r.

petición a la anterior[94]. Teniendo en cuenta la vinculación de los Albornoz con el obispado de Cuenca, no resulta nada extraño que la mencionada Constanza de Villena, que había estado casada con Gome de Albornoz, solicitase del papa la concesión de varios beneficios en la Iglesia conquense.

Finalmente, como último ejemplo de súplicas presentadas por algunos personajes destacados de la nobleza castellana, puede señalarse la realizada el 3 de diciembre de 1405 por el noble don Nuño Fernández Cabeza de Vaca, pariente del prelado que en aquel momento ocupaba la mitra conquense, solicitando de Benedicto XIII que se concediese a Pedro Fernández de Santoyo, clérigo de la diócesis de Palencia, una ración íntegra o media en la Iglesia de Cuenca[95].

******

Tras lo dicho en las páginas precedentes ha quedado bien claro que, fundamentalmente durante los siglos XIV y XV, las suplicaciones diversas presentadas ante los pontífices solicitando la concesión de beneficios en la Iglesia de Cuenca fueron bastante frecuentes, descollando en importancia las súplicas reales, sobre todo durante el Cisma, y las realizadas por el cardenal Albornoz, y viéndose ello complementado con otro buen número de súplicas que presentaron ciertos miembros de la alta jerarquía eclesiástica, algunas universidades, sobre todo la de Salamanca, y algunos personajes de la nobleza castellana. De este modo, fue fundamentalmente en atención a todas estas súplicas como muchos papas intervendrían con frecuencia en la provisión de beneficios, sobre todo capitulares, en la Iglesia de Cuenca. Por último, no queda más que poner de relieve que las intervenciones pontificias en materia beneficial no constituyen ni mucho *menos un fenómeno exclusivo de los tiempos medievales, sino* que también serán frecuentes durante los siglos del Antiguo Régimen,

---

[94] ASVat., *Reg. Suppl.* 101, f. 182r-v.

[95] ASVat., *Reg. Suppl.* 101, f. 299r.

habiendo llegado hasta nosotros un buen número de ejemplos de ello para el caso del obispado conquense[96].

2-La fiscalidad pontificia

A) *El pago de servicios comunes y menudos por los obispos de Cuenca*

Uno de los impuestos más importantes que, sobre todo desde el siglo XIV, percibía el Papado sobre las rentas eclesiásticas de las diversas diócesis de Occidente eran los *servicios comunes* que todo obispo o abad, instituído por el papa, satisfacía a la Cámara Apostólica por el derecho de nombramiento en el caso de que las rentas del beneficio alcanzasen los cien florines de oro anuales. La cuantía de este tributo se fijó inicialmente en una tercera parte de los ingresos anuales del beneficio episcopal o abacial. De la cantidad cobrada en concepto de servicios comunes la mitad quedaba en la Cámara para el papa, y la otra mitad se entregaba al Colegio Cardenalicio para ser repartida por igual entre los cardenales que estuvieron presentes en el momento de la provisión. La tasa se computaba en florines de oro de Cámara, equivalentes a florines de oro de Florencia.

Por otro lado, además, los nuevos dignatarios tenían que abonar también unas gratificaciones para los familiares y oficiales de la Curia pontificia, llamadas *servicios menudos* -que eran cinco-, a lo que se añadían los derechos que la cancillería exigía por la expedición de las bulas de nombramiento. Cada uno de estos cinco servicios, de los que tocaban cuatro a los familiares y oficiales del papa y uno a los de los cardenales,

---

[96]Entre otros, pueden citarse los siguientes: Gregorio XIII, en 1572, provee la maestrescolía de Cuenca a favor de Pedro Pacheco (Sanz, nº 995), en 1573 provee un beneficio en Utiel a favor del arcediano de Moya Juan Zapata (Sanz, nº 997), en 1579 hace provisión de una canonjía en Cuenca para Pedro Pacheco (Sanz, nº 1001), y en 1580 provee otra canonjía y la tesorería de Cuenca a favor de Juan Hurtado de Mendoza (Sanz, nº 1003); por otro lado, Paulo V, en 1606, proveyó la abadía de Santiago a favor de Rodrigo de Sandoval (Sanz, nº 1051); y Clemente XI, en 1709, proveyó el arcedianato de Alarcón a favor de Manuel José Hendaya (Sanz, nº 1152), a quien en 1712 se le entregaría también una canonjía en la Iglesia de Cuenca (Sanz, nº 1153), haciendo provisión el mismo pontífice en 1720 de la dignidad de prior a favor de José de Heredia y Bazán (Sanz, nº 1157).

tenía que ser igual a la parte que tocó a cada uno de los cardenales en el reparto de los servicios comunes[97].

Para el caso de la Iglesia de Cuenca, al igual que sucede con casi todas las demás diócesis, es a partir de comienzos del siglo XIV cuando empezamos a tener datos sobre el pago de esta tributación forzosa por parte de los prelados titulares de la mitra, pues fue precisamente en esta época cuando se generalizó en casi todo el Occidente cristiano la entrega de servicios comunes y menudos a la Cámara Apostólica que todos los obispos se comprometían a realizar muy poco después de su nombramiento. En efecto, por un lado los prelados se obligaban a pagar la cantidad que, según el nivel económico de la mitra, les correspondía entregar en concepto de servicios comunes y menudos, lo que ha quedado fielmente recogido en el fondo de *Obligationes et Solutiones* (Cámara Apostólica) del Archivo Secreto Vaticano, y por otra parte, en los plazos establecidos, debían hacer efectivo el pago de la cantidad correspondiente, estando esto último recogido, aunque de forma muy fragmentaria, en el fondo de *Introitus et Exitus* (Cámara Apostólica) del Archivo Secreto Vaticano.

Veamos a continuación qué cantidades tuvieron que pagar los obispos de Cuenca a partir de don Pascual, dado que es con este prelado cuando comenzamos a tener información sobre este tipo de imposiciones fiscales.

-*Don Pascual.* El 30 de enero de 1300 el recién nombrado obispo de Cuenca don Pascual prometió pagar a la Cámara Apostólica en ciertos plazos 500 florines de oro en concepto de servicios comunes, *más los correspondientes servicios menudos*[98].

-*Fray Esteban.* El 13 de septiembre de 1322 el obispo de Cuenca Fray Esteban prometió pagar a la Cámara Apostólica 500 florines de oro en concepto de servicios comunes, *más los cinco* servicios menudos correspondientes[99].

---

[97] Quintín Aldea, <<La economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna>>, pp. 31-33.

[98] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 1, f. 11v.

[99] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, f. 32r.

-*Don Fernando Gutiérrez*. El 12 de junio de 1326 el obispo conquense don Fernando prometió pagar como servicios comunes a la Cámara Apostólica 500 florines de oro, más los cinco servicios menudos[100].

-*Don Juan del Campo*. El 30 de agosto de 1327 el obispo de Cuenca don Juan del Campo prometió pagar a la Cámara Apostólica como servicios comunes 500 florines de oro más otros 250 florines que había quedado a deber su predecesor don Fernando, y los cinco servicios menudos[101].

-*Don Odón*. El 21 de junio de 1328 el obispo de Cuenca don Odón prometió pagar a la Cámara Apostólica 500 florines de oro como servicios comunes, más otros 125 florines que aún se debían de los servicios comunes del obispo don Fernando[102]. Por otro lado, también sabemos que el 18 de agosto de 1329 don Odón hizo entrega efectiva de 156 florines de oro[103], desconociéndose el momento en que se efectuó el pago de la cantidad restante.

-*Don Gonzalo Pérez de Aguilar*. El 19 de enero de 1341 el aún electo de Cuenca don Gonzalo prometió pagar a la Cámara Apostólica en concepto de servicios comunes 500 florines de oro, más los cinco servicios menudos correspondientes[104].

-*Don García*. El 6 de agosto de 1342 el obispo don García prometió pagar como servicios comunes a la Cámara Apostólica 500 florines de oro, y los cinco servicios menudos[105].

-*Don Bernal Zafón*. El 9 de julio de 1362 el obispo de Cuenca don Bernal Zafón prometió pagar a la Cámara Apostólica en concepto de servicios comunes 500 florines de oro, más los cinco servicios menudos[106]. Por otro lado, también sabemos que el 26

---

[100] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, ff. 54v-55r.

[101] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, f. 63v.

[102] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, f. 71v.

[103] ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 92, f. 20v, y vol. 100, f. 22v.

[104] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, f. 172r; vol. 14, f. 39r; y vol. 16, f. 44v.

[105] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 6, f. 181v; vol. 14, f. 45v; y vol. 16, f. 54v.

[106] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 35, f. 32r.

de junio de 1363 don Bernal hizo entrega efectiva de 75 florines correspondientes a uno de los plazos de pago de sus servicios comunes, realizándose dicha entrega a través de Guillén Barral[107].

-*Don Pedro Alfonso de Toledo*. El 1 de julio de 1373 el obispo de Cuenca don Pedro prometió pagar a la Cámara Apostólica 500 florines de oro en concepto de servicios comunes, y los correspondientes cinco servicios menudos[108].

-*Don Nicolás Biedma*. No se han localizado datos referentes a este prelado.

-*Don Álvaro Martínez*. El 3 de agosto de 1381 el obispo de Cuenca don Álvaro Martínez prometió pagar a la Cámara Apostólica 500 florines de oro como servicios comunes, más los cinco servicios menudos[109].

-*Don Juan Cabeza de Vaca*. El 24 de noviembre de 1396 don Juan Cabeza de Vaca prometió pagar 500 florines de oro a la Cámara Apostólica en concepto de servicios comunes, y los cinco servicios menudos[110]. Por otra parte, sabemos que el 23 de junio de 1397 el obispo don Juan hizo entrega de 50 florines correspondientes a sus servicios comunes[111], el 23 de diciembre del mismo año pagó otros 70 florines[112], y el 19 de junio de 1398 realizó otra entrega de 100 florines[113], ignorándose el momento en que se pagó la cantidad restante.

-*Don Diego de Anaya Maldonado*. No se han localizado datos referentes a este prelado.

-*Don Álvaro de Isorna*. El 29 de abril de 1418 el obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna prometió pagar a la Cámara Apostólica

---

[107]ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 300, f. 16r.

[108]ASVat., *Obl. et Solut*, vol. 35, f. 175v.

[109]ASVat., *Reg. Aven.* 279, f. 80v.

[110]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 49, f. 102v; vol. 43, f. 164v.

[111]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 53, f. 123v.

[112]*Ibid.*, f. 133v.

[113]*Ibid.*, f. 145r.

500 florines de oro en concepto de servicios comunes y los cinco servicios menudos[114]. Poco después, el 16 de junio del mismo año, don Álvaro pagaría 100 florines correspondientes a sus servicios comunes, realizándose la entrega a través del arcediano de Lugo Alonso Arias[115], y el 14 de agosto de 1421 pagó otros 125 florines[116].

-*Fray Lope de Barrientos*. El 29 de abril de 1445 el obispo de Cuenca Lope de Barrientos prometió pagar 500 florines de oro a la Cámara Apostólica en concepto de servicios comunes, más los cinco servicios menudos[117], y al día siguiente, 30 de abril, ya entregó la cantidad de 250 florines por mediación del banquero italiano Cosme de Medicis[118].

-*Don Antonio Jacobo de Veneris*. El 12 de febrero de 1470 el obispo de Cuenca y cardenal Antonio Jacobo de Veneris prometió pagar a la Cámara Apostólica 3000 florines de oro en concepto de servicios comunes, más los cinco servicios menudos correspondientes[119]. Ese mismo mes el cardenal Veneris ya pagó 1500 florines[120], y en el mes siguiente, a 15 de marzo, hizo entrega de otros 1000 florines[121].

-*Don Rafael Riario*. El 26 de agosto de 1479 el cardenal Rafael Riario, recién proveído por Sixto IV para la sede de Cuenca, prometió pagar a la Cámara Apostólica 3000 florines de oro en concepto de servicios comunes[122]. No obstante, dicha cantidad no llegó a pagarse ante el conflicto levantado entre el

---

[114]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 58, f. 16v y f. 50v.

[115]ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 379, f. 3r.

[116]*Ibid.*, f. 41r.

[117]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 71, f. 52r.

[118]ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 412, f. 5r.

[119]ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 84, f. 110r.

[120]ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 479, f. 108r.

[121]*Ibid.*, f. 135v.

[122]ASVat., *Schedario Garampi*, vol. 43, f. 80r. Se trata de una simple cita que aparece recogida en el *Schedario*, pues el documento original no ha podido localizarse, y probablemente se encuentra perdido.

papa y los Reyes Católicos por esta provisión de la diócesis conquense que, finalmente, en 1482, sería entregada a Fray Alonso de Burgos.

-*Fray Alonso de Burgos.* El 31 de julio de 1482 el obispo de Cuenca Fray Alonso de Burgos prometió pagar en concepto de servicios comunes a la Cámara Apostólica 3000 florines de oro, más los correspondientes cinco servicios menudos[123]. Poco después, el 29 de agosto de dicho año, Fray Alonso de Burgos realizaría una primera entrega de 1425 florines para el pago de parte de sus servicios comunes[124].

De la lectura de estos datos se observa que hasta el pontificado del cardenal Antonio Jacobo de Veneris (1469-1479) la cantidad que debían pagar los obispos de Cuenca en concepto de servicios comunes por la provisión hecha a su favor era de 500 florines de oro. A título comparativo resulta interesante indicar algunas cifras sobre las cantidades que, según los libros de *Obligationes et Solutiones* del Archivo Vaticano, debían pagar en concepto de servicios comunes los prelados de otras diócesis castellanas: Salamanca, 600 florines; Albarracín-Segorbe, 1000 florines; Segovia, 1320 florines; León, 1500 florines; Oviedo, 1600 florines; Osma, 1800 florines; Palencia, 2000 florines; Sigüenza, 2600 florines; Toledo, 8000 florines.

No obstante, aunque teóricamente estas cantidades se establecían según el nivel de rentas de cada beneficio episcopal, hay que tener en cuenta que muchas veces no se correspondían con la realidad económica de las mitras episcopales, y un claro ejemplo de esto último lo tenemos en la diócesis conquense. Prueba de ello es que, si en 1300 el obispo don Pascual debía pagar 500 florines de oro por sus servicios comunes, un siglo y medio más tarde, en 1445, Fray Lope de Barrientos también tuvo que pagar la misma cantidad, y ello a pesar de que en este último año el nivel de rentas de la mitra conquense era ya varias veces superior al de un siglo y medio atrás. De ello se deduce

---

[123] ASVat., *Obl. et Solut.*, vol. 84 A, f. 113v.

[124] ASVat, *Introitus et Exitus*, vol. 507, f. 54r.

fácilmente que durante todo este largo periodo de tiempo la Cámara Apostólica no se tomó la molestia de actualizar la cantidad que debían pagar los obispos conquenses como servicios comunes para que estuviese en correspondencia con el verdadero nivel de rentas de la mitra. Esta situación se mantendría hasta febrero de 1470, que es cuando dicha cantidad aparece por primera vez actualizada, pues en la mencionada fecha el cardenal Antonio Jacobo de Veneris ya se comprometió a pagar 3000 florines de oro como servicios comunes, seis veces más de lo que habían tenido que pagar los obispos anteriores, tratándose, ahora sí, de una cifra mucho más acorde con el verdadero nivel de rentas de la diócesis conquense.

En cuanto al tiempo que tardaba en llevarse a cabo el pago efectivo de los servicios comunes en diferentes plazos, se observa una gran diferencia de unos prelados a otros. Así, por ejemplo, el obispo y cardenal Antonio Jacobo de Veneris, sin duda gracias a su gran solvencia económica, en febrero de 1470, nada más realizar la promesa de pago de sus servicios comunes, ya satisfizo la cantidad de 1500 florines, y al mes siguiente pagó otros 1000 florines. En otros casos, en cambio, la entrega se realizó con mucha más lentitud. Así sucedió, por ejemplo, con don Juan Cabeza de Vaca, que en 1396 prometió pagar sus servicios comunes y dos años más tarde aún no había terminado de efectuar dicho pago, ocurriendo también algo similar con el obispo don Álvaro de Isorna. En todo caso, las noticias que tenemos sobre el pago efectivo de los servicios comunes son bastante incompletas, y no es seguro que dicho pago se llevase siempre a cabo en su totalidad.

Por último, conviene poner también de manifiesto que si un prelado fallecía antes de haber satisfecho todos sus servicios comunes, el siguiente obispo debía pagar también la cantidad adeudada por su antecesor, tal como sucedió con don Juan del Campo y don Odón, que tuvieron que prometer pagar cierta cantidad de florines que había quedado a deber el obispo don Fernando Gutiérrez.

B) *Otras contribuciones fiscales de la Iglesia conquense*

Aunque el pago de servicios comunes por los obispos constituye sin duda un aspecto esencial de la fiscalidad pontificia, al tratarse de una importantísima fuente de ingresos, también hay que tener presente que el Papado dispuso durante la Baja Edad Media de otros tributos de diversa importancia que contribuían a engrosar las arcas pontificias, y a cuyo pago estaban obligadas la mayoría de las diócesis, no siendo la de Cuenca una excepción a la regla, como pronto se verá.

No hay que olvidar que muchas veces la fiscalidad pontificia marchaba de la mano de la fiscalidad regia, pues teóricamente el Papado debía dar su autorización a la Monarquía castellana cuando ésta deseaba percibir determinados tributos de la Iglesia para proseguir la lucha contra el Islam, tributos que, como ya se vio páginas atrás, en ocasiones debían repartirse entre las arcas reales y pontificias, tal como sucedió con algunos subsidios y décimas durante los siglos XIV y XV. Al ser esta última una cuestión que ya hemos analizado al estudiar las relaciones económicas de la Iglesia conquense con la Monarquía, aquí no se repetirá de nuevo lo dicho entonces, por lo que en este apartado sólo analizaremos, en función de los datos disponibles, las principales exacciones pontificias que tuvo que pagar la Iglesia conquense y que iban a parar en su integridad a las arcas papales.

Una de las primeras intervenciones pontificias en materia fiscal de que tenemos noticia, a comienzos del siglo XIII, y que afectó al conjunto del Episcopado castellano, es la que estuvo motivada por la pretensión del Papado de forzar a los obispos al pago del *vigésimo*, según lo acordado en el IV Concilio de Letrán, cuyo montante -una vigésima parte de las rentas eclesiásticas- se destinaría teóricamente a los gastos para la recuperación de Tierra Santa. Este tributo ya provocó protestas y resistencias por parte de la mayoría de los obispos, aumentando cuando en diversas ocasiones los prelados percibieron que el montante del vigésimo era dirigido a intereses ajenos a la recuperación de Tierra Santa.

Si sobre la percepción del vigésimo para el caso particular de Cuenca no poseemos datos concretos, sí existe, en cambio, documentación relativa a esta cuestión para todo el conjunto de la provincia eclesiástica toledana en que se incluía la Iglesia conquense, concentrándose la información, sobre todo, en el pontificado de Honorio III. Las noticias más abundantes se refieren a las continuas dilaciones de los obispos sufragáneos de Toledo en el pago de sus deudas por el vigésimo a los colectores pontificios, así como a las actitudes de fraude que casi siempre encuentran perdón en el pontífice romano. Así, por ejemplo, el 24 de febrero de 1218 Honorio III tratará de urgir a los prelados de la provincia eclesiástica toledana para que paguen sus vigésimos, procurando evitar posibles fraudes so pena de excomunión[125].

Pero el gran golpe para las rentas eclesiásticas se produjo entre 1247 y 1248 mediante varios breves de Inocencio IV dirigidos a los obispos comunicando la institucionalización de una nueva figura fiscal, las *tercias reales*, siendo ésta una cuestión que entra ya de lleno en el ámbito de la fiscalidad regia. No obstante, hay que señalar que la institucionalización de las tercias reales fue en realidad el resultado final de un proceso anterior a través del cual los monarcas castellanos habían tratado de convertir algunas rentas eclesiásticas en ingresos habituales de la Corona para la realización de actividades militares, no estando ajeno a dicho proyecto el Papado, tal como se puede apreciar, sobre todo, durante el Pontificado de Gregorio IX. Para el caso de la Iglesia de Cuenca, la comunicación pontificia ordenando la entrega de las tercias se produjo en abril de 1248 a través de un documento de Inocencio IV. El papa, al justificar esta orden, aludía a la deuda que la Iglesia tenía contraída con los reyes castellanos por su labor frente al Islam, a la vez que declaraba como única finalidad válida del subsidio la lucha contra los musulmanes[126].

---

[125] José Manuel Nieto Soria, «El intervencionismo pontificio sobre la Iglesia conquense en el siglo XIII», pp. 36-37.

[126] *Ibid.*, p. 39.

Si durante la primera mitad del siglo XIII las protestas del Episcopado frente a la fiscalidad pontificia no fueron demasiado contundentes, no ocurrirá lo mismo a partir de los años sesenta de esta centuria. Así, con motivo de una nueva petición de subsidios realizada por Urbano IV en 1262 al conjunto del Episcopado hispano con el fin de salvaguardar las reliquias abandonadas en Constantinopla tras su pérdida, dicho Episcopado enviaría una carta a la curia cardenalicia y al papa quejándose de las continuas exacciones a que se les sometía, a pesar de lo cual su petición de ser eximidos de pagar el nuevo subsidio fue rechazada el 23 de octubre de 1263.

Es dentro de este contexto donde se producen las reclamaciones que entre 1262 y 1263 presentó el obispo de Cuenca don Pedro Lorenzo como respuesta a unas exacciones impuestas sobre su obispado por Urbano IV y sus legados. El 2 de enero de 1262 el obispo don Pedro expondrá sus quejas por lo gravoso del subsidio, mostrándose en contra de la actitud de los legados pontificios y apelando a la actitud de pobreza que atravesaba la diócesis[127].

Al año siguiente volverán a producirse situaciones similares de protesta, afectando igualmente al obispado conquense y en general al resto de las diócesis del reino. Urbano IV había comisionado al arcediano de Guadalajara Viviano y a Ramón Bernárdez, canónigo toledano, para proveer de alimento y vestido durante tres años a Paolo de Sulmona y su familia, protegidos del pontífice. Así se llegó al acuerdo de que bastaría para este fin con una cantidad de 2500 áureos. El arcediano de Lara, Pedro de Peñafiel, actuó como ejecutor al encargarse del reparto de la cantidad entre varias diócesis, así como de su percepción. En dicho reparto al obispado de Cuenca correspondió pagar 250 mrs., lo que motivó de inmediato las protestas del obispo conquense don Pedro Lorenzo, quien se quejó de la forma en que se había realizado el reparto pues, por ejemplo, al arzobispado de Toledo, que era por lo menos cuatro veces más rico que la diócesis conquense, le había correspondido entregar 400 mrs., y a la

[127] *Ibid.*, pp. 40-41.

Iglesia de Sigüenza, que era el doble de rica que la de Cuenca, se le había asignado la entrega de 250 mrs., cantidad, por tanto, similar a la de la diócesis conquense[128].

Las siguientes noticias que han podido localizarse sobre contribuciones fiscales de la Iglesia conquense al Papado se corresponden ya con el pontificado de Juan XXII, época en que se agudizó bastante la presión fiscal pontificia, lo cual debe ponerse en relación con el mayor grado de centralización en torno a la Santa Sede propio de la época aviñonesa, así como con las apremiantes necesidades económicas que el papa tenía para poder sufragar los gastos de la lucha contra Luis de Baviera, motivando todo ello la creación de nuevos impuestos y la generalización de otros que hasta entonces sólo se cobraban esporádicamente. El *ius spolii* -derecho de expolio- aplicado por el papa a los bienes muebles de los obispos difuntos y de las dignidades catedralicias fue uno de los tributos que tropezó con mayores resistencias en los reinos hispánicos, sobre todo en Castilla, e igual sucedió con los derechos de sede vacante.

En lo que concierne a la Iglesia de Cuenca, en 1322 el papa se reservó el expolio del obispo don Pascual -recordemos que había muerto en 1320- y los frutos de la vacante[129]. Fue por ello por lo que el 27 de septiembre de dicho año el maestro Raimundo Ebrardi, tesorero de Coimbra, sería enviado a Castilla por Juan XXII con la misión de exigir y recibir los frutos de la mesa episcopal conquense correspondientes a todo el tiempo que la sede había estado vacante y hasta pasada la próxima fiesta de San Juan Bautista, asignando dichos frutos a la Cámara Apostólica[130]. Como consecuencia de este mandato pontificio, el 14 de agosto de 1324 Raimundo Ebrardi, ya como deán de Coimbra, entregaría a la Cámara Apostólica, del expolio de don Pascual y de los frutos de la vacante, 233 florines de oro, 133 doblas de oro de Marruecos, 364 doblas de Mir, 40 marcas y otras cantidades

---

[128] *Ibid.*, pp. 41-42.

[129] José Goñi Gaztambide, «El fiscalismo pontificio en España en tiempo de Juan XXII», p. 67.

[130] ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 54, f. 91r.

pequeñas[131], y el 29 de diciembre de 1325 hará otra nueva entrega de 25 florines de oro por el mismo concepto[132]. Mientras tanto, el 24 de agosto de 1324, el papa había mandado también a Pedro de Brunia que se hiciese cargo en adelante de la percepción de los frutos de la vacante de Cuenca que aún faltaban por pagar[133].

En 1326 el conflicto seguía sin resolverse, pues el 2 de febrero de dicho año se pagó al maestro Guillermo de Hugato el sueldo correspondiente a su trabajo como notario en el proceso que aún estaba pendiente entre la Cámara Apostólica y el cabildo catedralicio conquense sobre el pago de los frutos de la vacante de Cuenca tras la muerte de don Pascual[134]. Dos años más tarde, el 30 de abril de 1328, el cabildo conquense entregaría 625 florines por dicho concepto[135], y el 16 de noviembre de 1330 pagaría otros 1875 florines[136]. Finalmente, el 23 de marzo de 1333, el cabildo entregó una última suma de 2500 florines de oro a cambio de que la deuda quedase definitivamente cancelada, a lo que el papa accedería[137].

Sin duda el cobro del expolio de don Pascual y los frutos de la vacante supuso la intervención pontificia de naturaleza fiscal más importante que se produjo sobre la Iglesia conquense durante el mandato de Juan XXII. No obstante, también durante estos años se tuvieron que entregar otro tipo de tributaciones. Así, por ejemplo, el 23 de agosto de 1321 el provisor y cabildo catedralicio de Cuenca pagaron al cardenal legado Guillermo, obispo Sabiniense, la cantidad de 18.300 mrs. correspondientes

---

[131] José Goñi Gaztambide, «El fiscalismo pontificio...», p. 81.

[132] *Ibid.*, p. 82.

[133] ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 58, f. 173r; vol. 65, f. 71r; vol. 66, f. 78r.

[134] ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 72, f. 69v; vol. 73, f. 69v.

[135] José Goñi Gaztambide, «El fiscalismo pontificio...», p. 84.

[136] *Ibid.*, p. 87.

[137] *Ibid.*, p. 68, y doc. nº 8.

a las procuraciones del mencionado cardenal en dicho año de 1321[138]. Y el 15 de diciembre de 1324 Ferrand García, deán de Cuenca, satisfizo a la Cámara Apostólica 150 florines de oro por los frutos de un año de su dignidad[139].

Aparte de estas exacciones, también hubo otras que recayeron de forma general sobre el conjunto de la Iglesia de Castilla y Aragón. Por ejemplo, en 1325 el papa se dirigió a los obispos castellanos y aragoneses solicitando un subsidio caritativo para la lucha contra Luis de Baviera y sus aliados. En 1329 el clero castellano aún no había satisfecho el impuesto, por lo que el papa tendría que escribir al arzobispo de Santiago, Berenguer, y al colector Pedro de Labruna para que urgiesen su pago[140]. Pero para el caso concreto de la diócesis conquense no se ha localizado ningún dato sobre el modo como se llevó a cabo la recaudación de este tributo.

Situándonos ya en el pontificado de Benedicto XII, habiendo reservado este papa para su provisión la Iglesia de Cuenca el 27 de diciembre de 1340[141], tras la muerte del obispo don Odón, al día siguiente el papa encargará a Almeratio de Cabrespina, canónigo de Lérida, que exija y reciba la renta de bienes muebles correspondientes al expolio del mencionado prelado conquense, y que la conserve temporalmente hasta realizar su entrega a la Cámara Apostólica[142]. Poco después, el 30 de enero de 1341, Benedicto XII, volverá a repetir el mismo mandato, encargando también en esta ocasión a Pedro Girardo, arcediano Gaviagense en la diócesis de Bazas, en Francia, que auxilie a Almeratio de Cabrespina en la mencionada tarea[143]. No obstante, desconocemos cuál fue el montante que hubo que pagar por el expolio del obispo don Odón.

---

[138]ACC, s.a. caj. 2, leg. 8, nº 364.

[139]José Goñi Gaztambide, «El fiscalismo pontificio...», p. 82.

[140]*Ibid.*, pp. 74-75.

[141]ASVat., *Reg. Vat.* 135, f. 118v, nº 308.

[142]*Ibid.*, ff. 118v-119r, nº 310.

[143]ASVat., *Reg. Vat.* 136, f. 6v.

Las siguientes noticias que han podido localizarse concernientes a la fiscalidad pontificia vienen dadas por el pago de las procuraciones de ciertos cardenales legados, procuraciones que, dicho sea de paso, generalmente no eran bien vistas por el conjunto del clero castellano, que con frecuencia las consideraba abusivas. El 10 de febrero de 1356 el legado pontificio Guillermo, cardenal diácono del título de Santa María *in Cosmedin*, emitió un breve monitorio para que el conjunto del clero secular y regular de Castilla le pagase las procuraciones correspondientes a su legación, manifestando además que disponía de autorización pontificia para poder castigar con censuras a quienes se opusieran a dicha paga[144]. Como consecuencia de este mandato, el 22 de abril del mismo año, el obispo y cabildo catedralicio conquense ya entregaron al procurador del cardenal Guillermo la cantidad de 7687 mrs. en concepto de dichas procuraciones[145], y el 30 de octubre de 1358 harían una nueva entrega de 5125 mrs. destinados al mismo fin[146]. Un año después, con fecha 13 de agosto de 1359, el legado pontificio Guido, obispo de Oporto, reconoció haber recibido del obispo de Cuenca don García y del cabildo catedralicio y clero de la diócesis la cantidad de 150 doblas de oro correspondientes a las procuraciones del primer año de su legación[147].

Al iniciarse el Cisma, las recaudaciones pontificias en Castilla quedarían momentáneamente paralizadas, pues Enrique II, al tener noticia de la doble elección pontificia, mandó embargar los bienes de la Cámara Apostólica en todo el reino en tanto no se decidiese a qué candidato había que apoyar. Finalmente, el Domingo 19 de mayo de 1381, Juan I se decantaría a favor de Clemente VII[148]. Por ello poco después el maestrescuela de Cuenca y subcolector de la Cámara Apostólica, Guillén Barral,

---

[144] AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 17v-18r.

[145] Sanz, nº 442.

[146] ACC, siglo XIV, nº 115.

[147] ACC, s.a. caj. 4, leg. 15, nº 212.

[148] *Crónica de Juan I*, B.A.E, vol. LXVIII, p. 71.

solicitaría al rey que desembargara ya los bienes que había mandado embargar su padre. El monarca, en atención a esta petición, el 4 de julio de ese mismo año dirigió una carta al aún obispo de Cuenca don Nicolás Biedma comunicándole su apoyo al papa Clemente VII, y mandando, además, que se desembargasen todos los bienes de la Cámara Apostólica y rentas beneficiales que algunos cardenales tenían en el obispado de Cuenca, todo lo cual había estado hasta entonces retenido[149].

Tras estas vicisitudes, la Iglesia conquense se vería de nuevo sometida a nuevas exacciones pontificias, como lo fueron las procuraciones que hubo que pagar a favor del cardenal legado Pedro de Luna. Sin duda la legación pontificia en Castilla más importante durante la segunda mitad del siglo XIV fue la realizada en nombre de Clemente VII por el cardenal Pedro de Luna entre 1379 y 1390. Resulta evidente la decisiva incidencia de esta legación para inclinar a Castilla hacia la obediencia clementina, precisamente cuando el criterio que había recomendado Enrique II a su hijo Juan I consistía en mantener la máxima neutralidad. Sus iniciativas de reforma, tanto en materia universitaria como propiamente eclesiástica, de lo que el Concilio de Palencia de 1388 sería máxima expresión, contribuirían mucho a prestigiar al papa aviñonés, cuya obediencia promovía[150].

Ya el 26 de junio de 1381 el cardenal don Pedro de Luna había solicitado del obispado de Cuenca que se le pagasen las procuraciones correspondientes a su legación[151]. Pero hasta tres años más tarde no tenemos las primeras noticias sobre contribuciones efectivas de la Iglesia conquense realizadas por dicho concepto. El 26 de abril de 1384 Juan Fernández, procurador del cardenal, reconoció haber recibido de Pedro Fernández de Montiel, racionero de Cuenca y mayordomo del obispo don Álvaro Martínez,

---

[149]ACC, siglo XIV, nº 301.

[150]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 85. Un estudio detallado sobre esta legación puede verse en: José Zunzunegui Aramburu, «La legación en España del cardenal Pedro de Luna, 1379-1390», *Miscellanea Historiae Pontificiae*, VII (1943), pp. 83-137.

[151]BN, Ms. 13071, f. 69r-v.

1700 mrs. correspondientes a las medias procuraciones del año anterior otorgadas a don Pedro de Luna para su mantenimiento[152]. Poco después, el 23 de junio del mismo año, Aparicio Pérez, racionero toledano y también receptor de las medias procuraciones del cardenal, recibiría de Juan Domínguez, compañero y procurador del cabildo catedralicio conquense, 78 mrs. que aún quedaban por pagar de dichas medias procuraciones en lo que había tocado al obispado de Cuenca; además, en el mismo documento también se establece que antes del próximo día de Santa María de agosto la Iglesia de Cuenca tendría que pagar otros 2000 mrs. ó 100 florines de oro de Aragón correspondientes a otras medias procuraciones del cardenal don Pedro[153].

Precisamente durante los años ochenta del siglo XIV, y también durante la década de los noventa, se van a intensificar notablemente las actuaciones de los colectores pontificios en Castilla. La promoción de algunos subcolectores, que acceden a la condición de colectores, supone un buen indicio de ello. Así, por ejemplo, el ya mencionado Guillén Barral, canónigo y subcolector de la Cámara Apostólica en el obispado de Cuenca, sustituirá como colector de la colectoría toledana a Fulco Périer al marchar éste a la Curia en octubre de 1384. También otro subcolector, el de Orense, Pascual García, siendo ya obispo de esta sede, se convertiría en colector en febrero de 1384[154].

Durante la época Trastámara las diversas colectorías que se sucedieron en Castilla fueron sin duda la manifestación más relevante de la intervención pontificia de índole fiscal. Pero

---

[152]ACC, siglo XIV, nº 111.

[153]AHN, Micr., rollo 14225, s.a. caj. 4, leg. 15, nº 221.

[154]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 70. Durante esta época España se encontraba dividida por la Cámara Apostólica en tres distritos recaudatorios: Castilla-León, Aragón y Navarra. El conjunto del territorio castellano-leonés fue dividido en dos colectorías completamente independientes en su gestión, la correspondiente aproximadamente a las diócesis de la mitad norte, conocida como la colectoría de Burgos, y la colectoría de Toledo, para la mitad sur, predominando más un planteamiento geográfico que eclesiástico en tal división. El proceso recaudatorio se basaba en la mediación de los subcolectores, como oficiales locales, directamente nombrados y subordinados por el colector, y que participaban de todos los privilegios de los oficiales apostólicos, otorgándoseles la categoría de familiares pontificios, si bien sus competencias estaban fuertemente limitadas, reduciéndose a las cuestiones que se deducían de manera directa de su misión recaudadora. Solían ser nombrados de entre el clero catedralicio de la sede correspondiente, debiendo conocer muy bien la geografía del ámbito territorial que se les encomendaba, generalmente su propia diócesis.

para los monarcas era evidente que una excesiva presión pontificia a través de los colectores podía suponer un importante recorte a la fiscalidad regia. Los pontífices solicitaron habitualmente la colaboración de la Monarquía a fin de hacer factibles las colectorías, pero dicha colaboración, por lo general, debió de estar muy lejos de obtenerse, lo que contribuye a explicar en parte el reiterado fracaso que a nivel general se observa en las colectorías de esta época. En este sentido, tal como ha señalado recientemente el profesor José Manuel Nieto Soria, a juzgar por la escasez de aportación de recursos del clero castellano a la Cámara Apostólica, en comparación con otros reinos vecinos, puede decirse que la Monarquía castellana fue de las menos perjudicadas fiscalmente por la intervención de los colectores[155].

A fines del siglo XIV tendría lugar una importante intervención pontificia de naturaleza fiscal sobre la Iglesia conquense, consistente en el cobro del expolio del obispo don Álvaro Martínez, fallecido en 1396. De este modo, en un libro de cuentas pontificias redactado por Juan Román, y correspondiente al tercer año del pontificado de Benedicto XIII, entre los muchos ingresos también figura la renta procedente del expolio de don Álvaro Martínez, cobrado en mayo de 1397, y que ascendió a la cantidad de 9565 gros[156].

Situados ya en el siglo XV, hay que comenzar destacando que durante el periodo 1404-1408 la presión fiscal de la Cámara Apostólica en la Península aumentaría significativamente, de forma que los 142.110 florines recaudados en ese intervalo supusieron el 79 por ciento de todo lo ingresado por los distintos territorios fieles a Aviñón. Sin embargo, tal consideración no es del todo aplicable a Castilla, puesto que las diócesis de la colectoría toledana, a la que pertenecía Cuenca, no sólo no aportaron proporcionalmente más ingresos que en años anteriores, sino que incluso disminuyeron al pasar del 2 al 1,5 por ciento, con 1821 florines. A la vez, las diócesis de la

---

[155] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 82.

[156] ASVat., *Instrumenta Miscellanea*, nº 5356, ff. 28r-29r.

colectoría de Burgos doblaban su participación proporcional, con el 3 por ciento, lo que suponía 3269 florines. Cantidades difícilmente comparables con lo 73.660 florines entregados por Aragón, lo que equivalía al 63 por ciento de los ingresos totales durante este periodo de 1404 a 1408. Entre los colectores activos por entonces se sabe de Pedro Fernández de Montiel, nombrado colector para Castilla el 1 de julio de 1405 y hasta el 16 de julio de 1407, siendo canónigo de Cuenca[157]. Aunque no se han podido obtener datos concretos sobre aportaciones de la diócesis conquense durante estos años, es de suponer que las cantidades entregadas serían mínimas, lo que se deduce de la escasa aportación general realizada por el conjunto de diócesis de la colectoría toledana, en la que se incluía Cuenca.

Sí que poseemos, en cambio, algunos datos sobre ciertas aportaciones particulares efectuadas algunos años más tarde por el clero conquense. Así, por ejemplo, el 27 de febrero de 1414 Andrés Fernández, clérigo cura en la parroquia de San Juan de Alarcón, se obligaría a pagar a Pedro Fernández de la Parrilla, canónigo de Cuenca y subcolector de la Cámara Apostólica en la diócesis conquense, la cantidad de 12 florines de oro del cuño de Aragón correspondientes a los frutos de la media annata de su beneficio curado del que acababa de ser proveído[158]. Por otro lado, el 11 de mayo del mismo año, Diego Ruiz de Béjar, clérigo de Montalbanejo, en el obispado de Cuenca, se obligó a pagar también al subcolector Pedro Fernández 23 florines de oro de Aragón por los frutos correspondientes a la media annata del beneficio que se había proveído a su favor[159].

En 1415 sabemos que se estaba recaudando en la diócesis de Cuenca un servicio que el papa había demandado de la clerecía. Así, el 29 de marzo de este año el deán de Cuenca don Guillén Barral, en nombre del cabildo catedralicio y clero del obispado conquense, pagó al subcolector Pedro Fernández de la Parrilla, recaudador de dicho servicio, la cantidad de 194 florines de oro

---

[157]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 73-74.

[158]ACC, AC-1414, f. 40v.

[159]ACC, AC-1414, f. 50r.

de Aragón correspondientes al primer plazo dado para la paga del servicio[160]. El 1 de septiembre se pagaron al mencionado subcolector 9747 mrs. por el mismo concepto, comprometiéndose además el deán don Guillén Barral y el tesorero de Cuenca a pagar en el plazo de quince días, en nombre del cabildo y clerecía, otros 9747 mrs. que aún faltaban por entregar[161].

Entre 1418 y 1427 la colectoría correspondiente a la mitad sur de Castilla fue atribuída a Alfonso de Cartagena, por entonces deán de Compostela, quien, apenas producido su nombramiento, designará los subcolectores que habrán de responsabilizarse de las recaudaciones en cada una de las diócesis de su ámbito. En la de Cuenca el nombramiento de subcolector recaería en Gil Fernández de Nuévalos, racionero conquense y vicario de Iniesta. Las cantidades aportadas por el obispado de Cuenca en esta colectoría debieron ser escasas si se tienen en cuenta las cifras globales de lo entregado por el conjunto de diócesis de la mitad sur de Castilla. Así, lo percibido hasta 1424, inclusive, sumó sólo un total de 6877 florines, si bien en otras cuentas que llegan hasta 1427 se da la cifra total de 14.539 florines, lo que supondría que más de la mitad de lo recaudado se consiguió entre los años 1425 y 1427[162].

Otra colectoría que conviene destacar aquí de entre las que tuvieron lugar por esta época es la que se desarrolló entre 1437 y 1441 pues, además de ser nombrado colector general para todo el reino castellano-leonés Bautista de Padua, doctor en Leyes, también fue designado en esta ocasión, de forma excepcional, un subcolector general, cargo que asumirá el racionero conquense Benito Fernández de Salamanca[163]. Con todo, no tenemos noticias de que la Iglesia de Cuenca contribuyera con alguna cantidad en esta colectoría.

---

[160]ACC, AC-1415, f. 75v.

[161]ACC, AC-1415, f. 94v.

[162]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 75-76.

[163]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 77.

El siguiente dato que ha podido localizarse sobre nuevas intervenciones pontificias de orden fiscal en el obispado conquense se corresponde ya con el pontificado de Fray Lope de Barrientos, el cual, el 24 de octubre de 1461, haría entrega a la Cámara Apostólica de la cantidad de 100 florines de oro como pago del derecho que el papa le había concedido para poder testar hasta la suma de 20.000 florines[164].

En 1463 Pío II impuso una décima por tres años sobre las rentas eclesiásticas de Castilla, cuyo montante se destinaría exclusivamente para la lucha contra el turco, siendo el responsable de su recaudación el colector pontificio y futuro obispo conquense Antonio Jacobo de Veneris, y prometiendo el papa, a petición de Enrique IV, que no se exigirían nuevas tributaciones extraordinarias, salvo las que con carácter general se aprobasen para toda la cristiandad, manifestándose a su vez en la documentación pontificia la preocupación por los muchos gastos con que se estaban viendo gravadas las rentas eclesiásticas de Castilla, por lo que finalmente se ordenará al colector Veneris que la décima se convierta en un subsidio de 200.000 florines[165].

Pero además de Antonio Jacobo de Veneris, el arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo también intervendría en la recaudación de este subsidio. Sabemos que hubo una resistencia generalizada por parte del conjunto de la Iglesia castellana frente al pago de este nuevo subsidio pontificio, no siendo en absoluto el obispado de Cuenca una excepción a la regla. Prueba de ello es que en 1464 el rey Enrique IV se vería obligado a mediar en apoyo del papa mandando al obispo, cabildo catedralicio y clerecía conquense que pagasen lo antes posible a los recaudadores la cantidad que correspondiese a la Iglesia de Cuenca en el reparto del subsidio pontificio, cuya cifra no se indica en el documento[166], y ordenando además a la justicia civil de la diócesis que interviniese obligando a todos los eclesiásticos al pago del subsidio, dada la reiterada resistencia que éstos mostraban a la

---

[164] ASVat., *Introitus et Exitus*, vol. 449, f. 16r.

[165] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 80.

[166] ACC, s.a. caj. 2, leg. 9, nº 112.

hora de contribuir[167]. Paralelamente también se llevaría a cabo la predicación de una nueva cruzada contra el turco, y el 11 de mayo de ese mismo año de 1464 el provisor del obispado conquense, Alfonso García de San Felices, reconoció como auténticas las bulas de indulgencia que con tal fin se habían recibido recientemente del papa[168].

En 1472 Sixto IV enviaría al cardenal Rodrigo Borja para predicar en Castilla una cruzada exclusivamente aplicada a la lucha contra el turco, recaudándose también entre 1474 y 1479 un subsidio con el mismo fin, pero sin consentirse tampoco su aplicación para intereses específicos castellanos, siendo enteramente recaudado en favor de la Cámara Apostólica[169].

Inicialmente el subsidio que se impuso fue de 100.000 florines, aunque al final quedaría reducido a 60.000 florines. Como ejecutor del mismo fue nombrado el cardenal de España don Pedro González de Mendoza, quien el 23 de noviembre de 1475 levantaría las censuras que habían recaído sobre el cabildo catedralicio y clero conquense debido a su retraso en el pago de los 849 florines de oro de Aragón que habían correspondido a la diócesis de Cuenca en el reparto del segundo plazo de dicho subsidio, concediéndoles una nueva prórroga para efectuar la entrega[170]. Finalmente, el 12 de febrero de 1476, se pagaría al nuncio y colector del subsidio, Francisco Ortiz, la cantidad de 203.760 mrs. a que equivalían los 849 florines que tocaron al obispado de Cuenca[171]. Algún tiempo antes la Iglesia conquense ya había satisfecho 848 florines y medio correspondientes al

---

[167]BN, Ms. 13072, ff. 246v-249v.

[168]ACC, AC-1464, f. 13v.

[169]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 335.

[170]ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 229.

[171]AHN, Micr., rollo 14225. Poca suerte es la que corrió como colector pontificio en Castilla el canónigo capiscol de Toledo y arcediano de Palenzuela Francisco Ortiz, quien, por sus discrepancias con los monarcas, será finalmente encarcelado, a la vez que le era secuestrado todo lo recaudado, lo que puede considerarse claro indicio de cómo los monarcas, en esta época, estaban ya en condiciones de ejercer un fuerte control de hecho sobre los enviados de la Cámara Apostólica. José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 81-82.

primer plazo de pago del subsidio[172], cantidad algo por encima de la que entonces pagaron diócesis como Córdoba (718,5 florines) o Salamanca (768 florines)[173].

Por otro lado, en mayo de ese mismo año de 1476 la Iglesia de Cuenca también contribuyó con 125.138 mrs. en una recaudación que se hizo con destino al primer jubileo, de cuyo cobro se encargarían Francisco Pinelo y Manfredo de Camila en nombre del legado pontificio Nicolás Franco. La diócesis de Oviedo, por ejemplo, contribuiría con 73.768 mrs., la de Sigüenza con 244.319 mrs. y la de Astorga con 594.765 mrs.[174]. En cambio en la relación de cantidades que, también en nombre del mismo legado pontificio, se cobraron en 1479 con ocasión del segundo jubileo no consta ninguna aportación de la Iglesia conquense.

El último dato que ha podido obtenerse sobre fiscalización pontificia de las rentas de la Iglesia de Cuenca es el que viene dado por un mandato pontificio de Sixto IV del 3 de noviembre de 1479 mediante el cual se ordenó al colector Francisco Ortiz tomar posesión del expolio del difunto obispo de Cuenca Antonio Jacobo de Veneris y de los frutos de la vacante en nombre del cardenal Rafael Riario, en quien había sido proveída la diócesis por el papa[175]. No obstante, dado que inmediatamente los Reyes Católicos se opondrían a dicha provisión, la toma de posesión efectiva de las mencionadas rentas por el colector pontificio no se llevaría a cabo, puesto que los monarcas habían dado orden de que se retuviesen hasta que el obispado de Cuenca fuese proveído a favor del candidado que ellos designaran, que finalmente sería Fray Alonso de Burgos.

En definitiva, de todo lo antedicho se deduce fácilmente que la presión fiscal pontificia sobre la Iglesia conquense durante la Baja Edad Media, independientemente del obligado pago de servicios comunes y menudos por los prelados que accedían a la

---

[172]Justo Fernández Alonso, *Legaciones y nunciaturas...*, doc. 146, p. 322.

[173]*Ibid.*, doc. 146.

[174]Justo Fernández Alonso, *Legaciones y nunciaturas...*, doc. 148, p. 333.

[175]*Ibid.*, doc. 139.

mitra, también se manifestó muy frecuentemente a través de la imposición de diversas exacciones que adquirirían una mayor o menor importancia e intensidad según las épocas. Habrá podido comprobarse que para el siglo XIII los datos que se nos han conservado sobre esta materia son francamente escasos, comenzando ya a abundar algo más la información a partir de la primera mitad del siglo XIV, que es precisamente cuando la presión fiscal pontificia comenzó a cobrar un mayor vigor en todo el Occidente cristiano.

Con todo, es necesario dejar bien claro que las noticias que para los siglos XIV y XV se conservan sobre fiscalidad pontificia en lo referente a la diócesis conquense son incompletas y fragmentarias, de tal forma que son bastantes las aportaciones concretas realizadas por la Iglesia de Cuenca sobre las que no nos ha quedado información, impidiendo ello el que pueda realizarse una adecuada valoración de conjunto sobre la presión fiscal del Papado en este obispado durante todo el periodo bajomedieval. No obstante, alguna apreciación sí que puede hacerse. Así, por ejemplo, hay que destacar la importancia cuantitativa de los subsidios contra el turco que se cobraron durante el siglo XV. Por otro lado, los datos que se conservan sobre el cobro de derechos de expolio tras el fallecimiento de algunos obispos también nos indican cifras de cierta consideración, mientras que las cantidades pagadas en concepto de procuraciones a ciertos legados suelen ser menores.

En conclusión, la Iglesia de Cuenca tuvo que hacer frente durante la Baja Edad Media a una fiscalidad pontificia más o menos intensa según los momentos, a lo que se venía a añadir la constante fiscalización de que eran objeto las rentas eclesiásticas por parte de la Monarquía, explicándose de este modo los frecuentes retrasos y protestas en el pago de ciertas exacciones pontificias que se consideraban a todas luces abusivas, tal como hemos tenido ocasión de ver en las páginas precedentes.

3-Intervenciones pontificias de naturaleza disciplinaria

Otro ámbito de intervención pontificia es el que vino dado por la mediación del papa en algunos conflictos que en ocasiones se produjeron referentes al mantenimiento de un cierto orden disciplinario y de un determinado nivel moral en el Episcopado y clero de la diócesis, siendo el Papado ante estas cuestiones particularmente sensible. Son varios los ejemplos con que contamos sobre actuaciones pontificias en esta materia.

Entre 1217 y 1221 tendrá lugar un grave enfrentamiento entre el obispo don García y algunos miembros del cabildo catedralicio conquense, que le atribuían una gran diversidad de faltas e inmoralidades de distinto orden, aunque fue un asunto que tuvo implicaciones que iban mucho más allá de la simple moralidad del prelado conquense, pues detrás de todo ello es probable que estuviese el propio arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada[176]. El 15 de diciembre de 1217 Honorio III mandaba al abad de Óvila y al arcediano y al tesorero de Osma que se informaran sobre las acusaciones de que era objeto el obispo de Cuenca. Al parecer el iniciador de estas acusaciones fue un miembro del propio cabildo catedralicio conquense, el canónigo y arcipreste de Huete don Julián, quien atribuía al obispo don García *gravísimas faltas*[177].

Al año siguiente, el 22 de junio de 1218, el papa se dirigió de nuevo al abad de Óvila y a los dos eclesiásticos de Osma mencionados para que le enviasen cartas con la información que hubieran recabado sobre el asunto, recomendando además que los documentos le fuesen remitidos a él directamente para evitar así

---

[176] *Desde 1215 el arzobispo toledano estaba tratando de conseguir la desmembración del obispado* conquense, reclamando para sí toda la parte occidental del mismo. Por ello le interesaba presentar ante el pontífice una mala imagen del obispo don García, que se negaba a la desmembración de su obispado, para de este modo intentar lograr que el pontífice se inclinase del lado toledano. Pero fracasaría en su intento al darse en 1220 una resolución contraria a sus intereses por el tribunal eclesiástico formado al efecto y presidido por el obispo de Burgos. José Manuel Nieto Soria, <<La fundación...>>, p. 126.

[177] Una gran variedad de faltas eran las que se atribuían al obispo don García: <<Denuntiando itaque predictus archipresbiter coram nobis et fratribus nostris exposuit quod prefatus episcopus simonie lepra repersus vitio dilapidationis effusus, incontinenti libidine inquinatus ac aliis facinoribus multipliciter irretitus, pactum cum morte fecisse videtur eamque manibus et pedibus accersisse>>. José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, p. 49.

algún intento de falsificación. El conflicto aún se prolongaría durante dos años más hasta que, finalmente, en varios documentos pontificios emitidos entre 1221 y 1222 se reconozca definitivamente la inocencia del obispo conquense respecto a las acusaciones sobre él vertidas, cerrándose así definitivamente el pleito[178].

Por otro lado, también en 1221 tuvo lugar un litigio de este mismo prelado con el clero diocesano conquense, que se negaba a pagarle las procuraciones de visita, lo cual haría igualmente necesaria una intervención de Honorio III en favor del obispo conquense[179].

En ocasiones el mantenimiento de un cierto nivel de moralidad en la diócesis de Cuenca estuvo relacionado con intereses y móviles económicos. Así, por ejemplo, en 1234 Gregorio IX facultaría al obispo de Cuenca don Gonzalo para conceder la absolución a aquellos de sus diocesanos que aprovechando su proximidad con los musulmanes les vendías armas, encubriendo estas acciones con la venta de otras mercancías. En 1247 se produjo otra intervención idéntica de Inocencio IV, lo que nos indica que por entonces este tipo de acciones, prohibidas por el canon 24 del III Concilio de Letrán, aún seguían produciéndose, quizá debido al mantenimiento de una cierta actitud permisiva por parte de la propia Iglesia conquense, que no hacía demasiado por controlar y evitar de forma estricta este comercio ilegal[180].

También parece que fueron intereses económicos, en esta ocasión de carácter decimal, los que, ya a comienzos del siglo XIV, provocarían un conflicto entre algunos párrocos de la diócesis, por un lado, y ciertos clérigos y canónigos conquenses, por otro, desembocando finalmente todo ello en una situación de desorden disciplinario que haría necesaria la mediación pontificia. Por este motivo Juan XXII, el 25 de octubre de 1322, comisionaría al obispo de Segorbe para que escuchase las quejas

---

[178]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, pp. 49-51.

[179]AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 33v-38r.

[180]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, p. 51.

que dichos párrocos -los de Santa María del Campo, Santa María de Alberca, Santo Domingo de Montalbo, Santa María de Alcolea, San Pedro de Fuenteanaya y Santa María de Montalbanejo, todos ellos del obispado de Cuenca- le habían presentado contra algunos canónigos y otros clérigos conquenses a causa de ciertas injurias recibidas por desavenencias en materia decimal, y para que, oídas ambas partes, pronunciase sentencia definitiva en el pleito pendiente[181].

Una de las intervenciones pontificias de orden disciplinario más importantes que se produjeron en la Iglesia conquense en el periodo bajomedieval fue la que tuvo lugar durante el pontificado del segundo obispo don García. Sin duda el hecho más destacado acaecido en la diócesis durante su pontificado fue el gravísimo y escandaloso incidente que, según firmes acusaciones contra él vertidas, protagonizó este prelado en sus señoríos episcopales de Pareja y Casasana. Tras ser realizada por mandato pontificio una investigación por parte de Pedro, cardenal de Santa Susana, éste descubrió que al parecer el obispo conquense trabajaba en negocios que se califican de infames. Además don García, y he aquí lo más grave del asunto, había mandado dar muerte a quince vasallos de su señorío de Casasana, encarcelando por otra parte a un médico llamado Pedro y dándole poco después muerte ante el temor de que revelara sus crímenes. También se le acusaba de cometer adulterio, incesto y de tener públicamente concubinas, así como de haber violado la inmunidad de la iglesia de San Juan de Pareja. Ante la gravedad de las acusaciones, el 1 de marzo de 1352, Clemente VI comisionará al arcediano de Talavera y al tesorero de Cuenca para que citen al obispo don García y le manden comparecer personalmente ante la curia pontificia en el plazo de dos meses, para ser juzgado por los delitos de que se le acusaba[182].

---

[181] ACC, caj. 5, leg. 20, nº 284.

[182] <<Dudum proposito in consistorio coram nobis quod Garsias, episcopus conchensis, inter cetera crimina et excessus per eum seu de mandato suo commissa olim ad ecclesiam Sancti Iohannis de Paralia, conchensis diocesis...vulnerarat seu vulnerari fecerat in ipsam ecclesiam et cimiterio contiguo...et quod insuper in quadam sua domo vocata Casasana, dicte diocesis tunc existens, procuraverat, mandaverat et fecerat interfici quindecim homines et per medium secari aliquos ex eisdem, quodque adulteria et incestus commiserat, et habuerat et tenuerat plures publice ac notorie concubinas...>>. ASVat., *Reg. Vat.* 145, ff. 200v-201r / Cit.

En agosto de este mismo año el concejo de Pareja, respaldado por Pedro I, prohibiría a don García, pero no al cabildo catedralicio, la entrada en el lugar, así como en Casasana, hasta que se resolviese el pleito pendiente ante la Santa Sede[183]. Sabemos que en agosto de 1353 don García se encontraba en Aviñón[184], probablemente compareciendo ante el Consistorio a causa de las gravísimas acusaciones contra él vertidas. Desconocemos cuál fue el veredicto dado por el tribunal pontificio, pero lo cierto es que los serios incidentes protagonizados por el obispo conquense ponen de manifiesto los momentos de conflictividad no exenta de violencia por que a veces pasaban las relaciones de los obispos con sus vasallos, aunque acontecimientos de tanta gravedad no volverán a darse durante el resto de la Edad Media.

Situándonos en el siglo XV, conviene recordar el ya aludido y grave incidente que se produjo en 1422 entre el obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna y el obispo cicastrense Tomás, embajador de Enrique V de Inglaterra ante el papa, para cuya resolución sería necesaria la mediación pontificia. Sucedió el día de Pascua de Resurrección, 12 de abril de 1422, celebrando la misa solemne en San Pedro el propio Martín V. Isorna y el obispo inglés discutieron sobre el puesto a ocupar durante la celebración, y el inglés, sin reparar en la solemnidad del acto, dio dos bofetadas al prelado conquense, huyendo luego con los suyos a refugiarse en su posada. Temiendo ser agredidos por los embajadores castellanos, los ingleses pidieron ayuda a los portugueses, sus aliados, pero al parecer Isorna, de temperamento sereno, trató de imponer la reconciliación.

No obstante, el papa al día siguiente, impresionado por el escándalo de la víspera, sin esperar a mejores informes, dirigió a Juan II la bula *Cum pridem*, en cuyo texto se condenaba por igual el proceder de ambos prelados: <<...in ipso pene consecrationis articulo contendentes de loco in rixam inhonestam

---

E. Déprez, *Clément VI (1342-1352). Lettres closes*, I, nº 2590.

[183] Juan Catalina García López, *Relaciones topográficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara*, p. 116.

[184] AHN, OOMM-Uclés, carp. 206, nº 5.

devenerunt, qui tumulto suscitato, omni Deo et nostra reverentia postposita, in seipsos manus violenter et turpiter injecerunt...>>[185]. Debido a ello Isorna expresaría sus quejas al pontífice, por lo que Martín V finalmente, el 12 de junio, y tras haberse enterado de la verdad de lo sucedido, dirigiría una nueva bula a Juan II haciendo encomio y defensa del obispo conquense[186]. A pesar de todo el conflicto seguiría latente y años después, en el Concilio de Basilea, se producirían nuevos enfrentamientos entre ingleses y castellanos por la cuestión de la preferencia.

Otro litigio para cuya resolución también acabaría siendo necesaria la mediación pontificia es el que estaba latente a comienzos de 1427 entre el obispo don Álvaro de Isorna y el arzobispo de Sevilla y anterior obispo conquense don Diego de Anaya, a causa de cierta suma de dinero que aquél debía a este último. Previamente ambos prelados habían puesto el caso en manos del oficial de Segovia, quien había determinado que Isorna entregase a Anaya 2000 florines de oro que le debía. Martín V, a petición de don Diego de Anaya, intervino en el conflicto, y en una bula del 28 de enero de 1427 comisionaría al arcediano de Zamora, al chantre de Palencia y al oficial de Salamanca para que hiciesen cumplir la sentencia dada por el oficial segoviano[187].

En definitiva, las intervenciones del Papado en asuntos de carácter disciplinario, aun no siendo tan abundantes como en otros terrenos, frecuentemente alcanzarían una importante significación en el sentido de que venían a patentizar la necesaria mediación pontificia para la resolución de algunos conflictos de cierta entidad, lo que en última instancia constituía una clara manifestación del creciente grado de control que el Papado aspiraba a ejercer sobre los más variados ámbitos de la realidad eclesiástica diocesana.

---

[185]Vicente Beltrán de Heredia, <<La embajada de Castilla en el Concilio de Basilea>>, pp. 16-17.

[186]Beltrán, *Bulario*, I, pp. 107-108.

[187]Beltrán, *Cartulario*, I, p. 346.

4-Licencias, mercedes e indulgencias pontificias

Una extensa manifestación del intervencionismo pontificio fue también la que estuvo constituída por todo un conjunto de actuaciones del Papado mediante las que se concedieron licencias y mercedes de carácter diverso, siempre de índole eclesiástica, a favor de algunos laicos y nobles del obispado conquense, así como indulgencias a favor de los fieles cristianos, produciéndose la mayor parte de estas intervenciones en los siglos XIV y XV.

A) *Fundación de monasterios y centros hospitalarios*

Algunas de las intervenciones pontificias de este tipo sobre las que tenemos noticia, ya para el siglo XV, tuvieron como fin la concesión de licencia a algunos nobles de la diócesis conquense, como, por ejemplo, el marqués de Villena don Juan Pacheco, para la fundación de centros hospitalarios y monásticos.

Hacia principios del siglo XV don Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena, ya había fundado en su villa de Belmonte el hospital de San Andrés, dotándolo muy bien para poder curar y atender a enfermos pobres y hospedar peregrinos, así como para proveer de lo necesario a algunos de sus escuderos que hubiesen caído en estado de pobreza y poder sustentar a un capellán que dijese misa a los enfermos[188]. Parece probable que con el tiempo este hospital viniese a menos hasta dejar de funcionar, puesto que a mediados de la centuria el nuevo marqués de Villena, don Juan Pacheco, solicitaría autorización pontificia para fundar un nuevo hospital de pobres en su villa de Belmonte. En atención a esta súplica Calixto III, con fecha 23 de marzo de 1455, concedió dicha autorización, estableciendo que el nuevo centro fuese dotado con los correspondientes bienes, y que tuviese rectores, capellanes y otras personas a su servicio, así como un confesor para atender espiritualmente a los pobres y miserables que allí acudiesen. El carácter benéfico de esta fundación hospitalaria queda bien patente en el documento pontificio: <<pro sustenta-

[188]Luis Andújar Ortega, *Belmonte, cuna de Fray Luis de León. Su Colegiata*, pp. 39-40.

tionem enfermorum et miserabilium, pauperorum et aliarum personarum>>[189].

A través de otro documento dado el 27 de enero de 1456, el mismo pontífice mandaría al obispo de Burgos que se informase sobre el carácter de las donaciones y concesiones hechas por don Juan Pacheco a favor del hospital por él fundado en Belmonte, y que, una vez habida la oportuna información, las confirmase en nombre de la Santa Sede[190]. Ello nos está indicando que para entonces el centro hospitalario ya había iniciado su funcionamiento.

Además, por otra parte, el 4 de febrero de 1457 Calixto III también otorgó autorización a don Juan Pacheco para fundar un monasterio de franciscanos observantes en Belmonte, eximiéndole de la licencia del obispo diocesano. El nuevo centro contaría con todos los privilegios concedidos por la Santa Sede a los franciscanos observantes[191]. Esta autorización pontificia para crear el nuevo monasterio debe ser puesta en relación con el impulso que Juan II y Enrique IV otorgaron al desarrollo de la Observancia franciscana en Castilla. Parece probable que su fundación efectiva se llevase a cabo poco después de la concesión otorgada por Calixto III, aunque carecemos de noticias concretas al respecto. Desde luego, lo que sí es seguro es que a principios del siglo XVI este monasterio de franciscanos ya existía, estando integrado por una pequeña comunidad de frailes observantes con un *guardián* a su frente.

Años más tarde, el 16 de junio de 1483, Sixto IV concedería licencia a Isabel Pacheco, viuda del conde de Medellín, para que pudiese fundar dos conventos de hermanas terciarias de la Orden de San Francisco, uno en la fortaleza de Belmonte, en el obispado

---

[189] ASVat., *Reg. Vat.* 457, f. 2r-v.

[190] ASVat., *Reg. Vat.* 446, f. 176r-v.

[191] ASVat., *Reg. Vat.* 459, f. 151 / Ulricus Hüntemann, *Bullarium franciscanum*, vol. II, nº 245. Algunos años atrás, en concreto el 14 de mayo de 1446, el papa Eugenio IV ya había concedido licencia a don Juan Pacheco para fundar un monasterio de franciscanos observantes en la ciudad o diócesis de Cuenca, aunque sin especificar nada relativo a Belmonte. Ulricus Hüntemann, *op. cit.*, vol. I, nº 995. Pero parece que esta fundación no debió de llevarse a cabo en los años inmediatos, lo que explica la posterior intervención de Calixto III.

de Cuenca, y el otro en la diócesis toledana, los cuales permanecerían bajo dependencia del vicario general de los franciscanos observantes y del provincial de Castilla[192]. No obstante, desconocemos si finalmente su fundación se llevó o no a cabo, pues con posterioridad a la fecha arriba indicada no se ha localizado ningún nuevo dato documental en que se aluda a la existencia de este monasterio de terciarias franciscanas en Belmonte.

Por otro lado, en algunas ocasiones también se producirían intervenciones pontificias destinadas, no ya a autorizar la fundación de un nuevo monasterio, sino a promover la introducción de la reforma observante en centros monásticos ya preexistentes. Así sucedió, por ejemplo, con el monasterio de San Agustín de la villa de Castillo de Garcimuñoz, que había sido fundado en la primera mitad del siglo XIV por don Juan Manuel. Sabemos que ya Eugenio IV había mandado que el monasterio <<in capite et in membris reformari et ad regularem observantiam reduci>>, puesto que desde hacía tiempo se venían produciendo graves irregularidades en el comportamiento de los frailes. No obstante, tiempo después el marqués de Villena, don Juan Pacheco, expondría ante el papa Pío II la dificultad que existía para que esta reforma se llevara a cabo, puesto que en la comarca había escasez de frailes agustinos observantes, lo cual dificultaba que el monasterio pudiera ser proveído de suficientes frailes reformados. Por todo ello, don Juan Pacheco solicitó al papa que tomase alguna determinación al respecto:

"...quae pro eo quod in illis partibus copia fratrum de observantia dicti ordinis non reperiebatur, seu aliquibus aliis forte obstantibus impedimentis hactenus votive caruerunt et carent exsecutionis effectu, nec est spes quod dicta domus per fratres dicti ordinis eremitarum ad debitum reformationis cultum reducatur. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, praefatus marchio cupiat ut in praefata domo vigeat observantia regularis, pro parte dicti marchionis nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis opportune providere dignaremur"

---

[192] ASVat., *Reg. Vat.* 632, f. 246v / Ulricus Hüntemann, *op. cit.*, vol. III, nº 1756.

A raíz de todo ello Pío II, a través de un documento emitido el 18 de enero de 1459, se dirigió al arzobispo de Toledo para que éste mandase al provincial de la Orden de San Agustín en Castilla que en un plazo de tiempo razonable se encargara de reformar al prior y frailes del monasterio de la villa de El Castillo, o bien les sustituyese por otros frailes agustinos ya reformados conforme a la Observancia de la Orden. En caso de que ninguna de ambas cosas se cumpliese en el plazo de tiempo determinado para ello, el papa establece que entonces el monasterio habría de ser ocupado por franciscanos observantes, que tendrían los mismos privilegios que las demás casas de franciscanos observantes de Castilla[193].

Aunque desconocemos de qué forma y cuándo se aplicó este mandato pontificio, lo cierto es que parece probable que no mucho después el monasterio fuese finalmente reformado en la Observancia agustiniana, puesto que en ningún momento tenemos noticia de que el monasterio pasase a estar ocupado por franciscanos. En 1504, a raíz de un capítulo extraordinario de la Congregación agustiniana celebrado en Toledo, se decidió distribuir a los conventos observantes en cuatro provincias: toledana, salmantina, burgalesa e hispalense; de esta forma, el monasterio de frailes agustinos de Castillo de Garcimuñoz quedaría integrado dentro de la provincia toledana[194].

B) *Mercedes pontificias de carácter diverso*

Durante la Baja Edad Media algunos pontífices también concederían determinadas mercedes y dispensas sobre diferentes cuestiones en favor de algunos laicos, sobre todo nobles, de la diócesis conquense.

Las absoluciones *in articulo mortis* constituyeron una de estas gracias pontificias, de las cuales se beneficiaría, por ejemplo, la noble familia conquense de los Albornoz. Así, el 12

---

[193] ASVat., *Reg. Vat.* 502, f. 60r-v.

[194] Luis Álvarez Gutiérrez, *El movimiento reformador de la Observancia en la provincia agustiniana de España* (resumen de Tesis Doctoral), pp. 32-34.

de septiembre de 1338 Benedicto XII concedería a Teresa de Luna, viuda de García Álvarez de Albornoz -se trata de los padres del futuro cardenal don Gil- una carta de absolución *in articulo mortis*[195]. Y años más tarde, el 11 de junio de 1366, Urbano V concedió una gracia similar en favor de Ferrand Gómez de Albornoz y Toda, su mujer, por un lado, así como otra absolución para Alvar García de Albornoz y Teresa, su mujer[196]; puesto que se trata de los dos hermanos del cardenal Gil de Albornoz, no cabe sino sospechar que la concesión se otorgó por mediación de este último ante el papa.

Otro tipo de merced pontificia de la que se beneficiarían algunos laicos conquenses fueron las dispensas de matrimonio. Por ejemplo, el 31 de julio de 1347 Clemente VI se dirigiría al obispo de Cuenca don García para comunicarle que otorgaba validez y dispensa al matrimonio contraído entre García Remigio y María Martínez, laicos de la diócesis de Cuenca, quienes después de haberse casado se habían enterado de la existencia entre ellos de una consanguineidad de tercer grado, por lo que habían solicitado la correspondiente dispensa pontificia[197]. Pocos años después, el 13 de julio de 1355, Inocencio VI concedería otra dispensa en favor del matrimonio contraído entre Andrés Martínez y Romeria Ferrández, laicos del obispado de Cuenca, quienes tras casarse supieron que había entre ellos un vínculo de consanguineidad de cuarto grado, solicitando por este motivo dispensa pontificia[198]. Una nueva dispensa matrimonial que puede citarse es la que el 9 de octubre de 1387, y en consideración a una súplica de Juan I de Castilla, concedió Clemente VII a Pedro Sánchez, doctor en Leyes, y María Sánchez, ambos laicos de la diócesis conquense, quienes deseaban casarse a pesar de que existía entre ellos una consanguinidad de cuarto grado[199].

---

[195] M. Vidal, *Benoit XII. Lettres Communes*, II, nº 5942.

[196] M. H. Laurent, *Urbain V. Lettres Communes*, V, nº 15897 y 15898.

[197] ASVat., *Reg. Vat.* 174, f. 274r, ep. 748.

[198] ASVat., *Reg. Vat.* 229, f. 196r.

[199] ASVat., *Reg. Vat.* 298, f. 187v.

También en ocasiones algunos pontífices otorgarían dispensas de nacimiento. Tal fue el caso, por ejemplo, de Clemente VI, quien el 5 de junio de 1351 facultaría al obispo de Cuenca don García para dispensar por una sola vez del defecto de nacimiento a diez personas: <<sex, videlicet, de parentibus solutis seu coniugatis, et quatuor de presbiteris aut clericis et mulieribus solutis seu coniugatis genitis>>[200].

A veces los pontífices concedieron otras gracias especiales en favor de la nobleza conquense, como sucedió con los Albornoz. Por ejemplo, el 11 de junio de 1366, y probablemente por mediación del cardenal don Gil, Urbano V concedería a Alvar García de Albornoz y Teresa, su mujer, así como a Ferrand Gómez de Albornoz y Toda, su mujer, que pudiesen tener un altar portátil para celebrar en él la misa, y que también pudiesen elegir como confesor a cualquier presbítero idóneo[201]. Y al día siguiente el papa también otorgaría similares gracias en favor del noble Gómez de Albornoz y su mujer Constancia[202].

Situándonos ya en el siglo XV, entre otras mercedes particulares concedidas por los pontífices puede citarse la licencia que el 4 de abril de 1452 otorgó Nicolás V a Diego Muñoz de Belmonte, licenciado en Decretos y clérigo conquense, casado con María Díez, de cuyo matrimonio había tenido cinco hijos, para que pudiese ingresar en la Orden militar de Calatrava bajo la regla cisterciense, siempre y cuando su mujer recibiese como penitencia el hábito terciario de la Orden franciscana e hiciese votos de perpetua castidad[203]. Y algunos años más tarde, el 4 de diciembre de 1459, Pío II otorgaría licencia a María Portocarrero, mujer del marqués de Villena don Juan Pacheco, para que durante ocho días al año pudiese permanecer y pernoctar en

---

[200] ASVat., *Instrumenta Miscellanea*, nº 1861.

[201] M. H. Laurent, *Urbain V. Lettres Communes*, V, nº 17190, 17191 y 17192 (Alvar García de Albornoz y su mujer Teresa); 17193, 17194 y 17195 (Ferrand Gómez de Albornoz y su mujer Toda).

[202] *Ibid.*, V, nº 15990, 15991 y 17759.

[203] Ulricus Hüntemann, *Bullarium Franciscanum*, vol. I, nº 1571.

cualquier monasterio de la Orden de Santa Clara con sus hijas y cuatro mujeres honestas[204].

C) *Concesión de indulgencias*

El otorgamiento de indulgencias en favor de los fieles cristianos también fue otra manifestación del intervencionismo pontificio sobre la diócesis conquense, situándose en la segunda mitad del siglo XIV una buena parte de las concesiones de este tipo de que tenemos noticia. He aquí algunos ejemplos sobre otorgamiento de indulgencias pontificias a los fieles de la ciudad y obispado de Cuenca durante la Baja Edad Media:

-Concesión por Inocencio IV, el 27 de agosto de 1248, de cuarenta días de perdón a todos aquellos que visitasen la catedral de Cuenca el día de la Asunción de Nuestra Señora[205].

-Concesión por Alejandro IV, en 1258, de cuarenta días de indulgencia a todos los fieles de las diócesis de Cuenca, Zaragoza y Sigüenza que contribuyesen con limosnas a la reparación de la catedral de Santa María de Albarracín[206].

-Concesión por Urbano V, el 26 de agosto de 1368, de cien días de perdón en favor de los fieles que visiten la catedral conquense, estando verdaderamente arrepentidos, en alguna de las siguientes fiestas: Navidad, Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Corpus Christi, Todos los Santos, Natividad de Nuestra Señora, Anunciación, Purificación, Ascensión, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, y el día de la dedicación de la iglesia catedral[207].

-Concesión por Urbano V, el 25 de septiembre de 1369, de cien días de perdón a todos aquéllos que verdaderamente arrepentidos ayuden con limosnas a la construcción de cierta capilla en

---

[204] *Ibid.*, vol. II, nº 720.

[205] ACC, caj. 5, nº 83.

[206] José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, p. 45

[207] ACC, s.s.

el claustro de la catedral de Cuenca, capilla que se destinaría tanto al culto divino como a la celebración de ciertas reuniones capitulares, y que, debido a la guerra reciente, aún no había podido terminarse de construir[208].

-Concesión por Urbano V, también el 25 de septiembre de 1369, de cuarenta días de perdón a todos aquéllos que, arrepentidos y confesados, visiten la catedral conquense en la fiesta de la Asunción de la Virgen, que en esta iglesia se celebra solemnemente[209].

-Concesión por Gregorio XI, el 13 de agosto de 1373, de cien días de indulgencia en favor de los fieles que, arrepentidos y confesados, ayuden con limosnas o con sus manos a la reconstrucción de un hospital para pobres que se encontraba anejo al eremitorio de Santa María Magdalena, situado en el lugar de Almoradiel, en la diócesis conquense, dado que dicho hospital había quedado muy destruído debido a la reciente guerra civil castellana[210].

-Concesión por Gregorio XI, el 19 de febrero de 1375, de una indulgencia a todos los que visitasen devotamente en ciertas fiestas del año una capilla en honor de Santa María que había sido fundada en la catedral conquense. Las fiestas que se señalan son las siguientes: Santa María, Navidad, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, y los seis días inmediatamente siguientes a Pentecostés[211].

-Concesión por Gregorio XI, también el 19 de febrero de 1375, de cien días de indulgencia en favor de los fieles que, con devoción, arrepentidos y confesados, visiten la iglesia de Santa María de la Sey, en la diócesis conquense, en las siguientes fiestas del año: Navidad, Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi, Natividad de la Virgen, Anunciación, Purificación, Asunción, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo,

---

[208] ASVat., *Reg. Aven.* 169, f. 537.

[209] ASVat., *Reg. Aven.* 169, f. 537.

[210] ASVat., *Reg. Vat.* 284, f. 104r.

[211] ASVat., *Reg. Vat.* 286, f. 32r.

Todos los Santos y festividad de la dedicación de dicha iglesia[212].

-Concesión por Gregorio XI, el 19 de febrero de 1375, de cien días de indulgencia a todos aquellos que, con devoción, arrepentidos y confesados, visiten la iglesia de San Blas *de Albornotio*, en el obispado de Cuenca, en estas fiestas del año: Navidad, Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi, Pentecostés, Natividad de la Virgen, Anunciación, Purificación, Asunción, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, San Blas obispo y mártir, Todos los Santos, y seis días inmediatamente siguientes a Pentecostés[213].

-Concesión por Gregorio XI, el 19 de febrero de 1375, de cien días de indulgencia a quienes dovotamente visitasen la iglesia de Santa Ana, que se encontraba situada cerca de la fortaleza de Tunsalva (?), en la diócesis conquense, en las fiestas de los Santos Pedro y Pablo y Santa Ana[214].

-Concesión por Clemente VII, el 19 de julio de 1387, de otros cien días de indulgencia en favor de los fieles que, arrepentidos y confesados, ayudasen con limosnas o con sus manos a la reconstrucción del hospital para pobres anejo al eremitorio de Santa María Magdalena, en Almoradiel, que aún no se había finalizado[215].

-Concesión por Clemente VII, el 26 de julio de 1393, de cuarenta días de indulgencia a todos aquellos que devotamente visitasen en ciertas fiestas de año la iglesia del monasterio de Santa María de La Merced de Huete, otorgando limosnas para su reparación[216].

-Concesión por el Concilio de Basilea, el 15 de junio de 1436, de siete años y siete cuarentenas de perdón en favor de la

---

[212] ASVat., *Reg. Vat.* 286, ff. 31v-32r.

[213] ASVat., *Reg. Vat.* 286, f. 32r-v.

[214] ASVat., *Reg. Vat.* 286, f. 32v.

[215] ASVat., *Reg. Vat.* 298, f. 108.

[216] *Bullae et privilegia sacro ac regali Ordini beatae Mariae de Mercede...*, ff. 62v-63r. La concesión se realiza para que «ipsius domus congruis honoribus frequentetur ac domus ipsa reparetur et fratres in ea degentes sustententur ac ut Christi fideles eo libentius causa devotionis confluant ad eandem ecclesiam...».

catedral conquense, para las fiestas de la Asunción y Natividad[217].

5-La participación conquense en grandes concilios generales de la Iglesia

Otro ámbito muy importante de manifestación de las relaciones mantenidas entre la Iglesia de Cuenca y el Papado durante la Baja Edad Media es el que vino dado por la participación del Episcopado conquense y otros miembros del clero catedralicio y diocesano en algunas de las más importantes asambleas conciliares de carácter general que se celebraron en el transcurso de los siglos bajomedievales. En concreto fueron al menos tres los grandes concilios generales de la Iglesia que contaron con la participación del clero conquense: el IV Concilio de Letrán, el Concilio de Constanza y el Concilio de Basilea, reuniones todas ellas, como es bien sabido, de singular trascendencia.

El IV Concilio de Letrán de 1215 fue sin duda una de las más importantes asambleas conciliares celebradas durante el siglo XIII, sobre todo debido a la enorme influencia posterior que habrían de tener las disposiciones de él emanadas. Ya en abril de 1213 Inocencio III se había dirigido a todos los obispos hispanos comunicándoles la convocatoria del concilio; con el fin de que cada prelado preparara su asistencia, les concedía un plazo que concluiría el día 1 de noviembre de 1215, ordenándose asimismo que, por cada provincia eclesiástica, asistieran la totalidad de sus obispos con excepción de uno o dos, que se quedarían al cargo de los servicios religiosos en ausencia de los demás prelados.

La representación de la Iglesia conquense en el IV Concilio de Letrán fue importante, en cuanto que estuvieron presentes en el mismo cuatro de sus integrantes: el obispo don García Ruiz; el capellán del obispo, Asensio; el arcediano de Huete, Lope Rodrigo, sobrino del obispo conquense; y el arcipreste de Cuenca,

---

[217] Sanz, nº 696.

Munio Rodríguez. Esta participación, dentro de la provincia eclesiástica toledana, sólo sería superada por las representaciones del arzobispado de Toledo y de la diócesis de Segovia. También conviene indicar que el propio obispo conquense tendría que pedir un préstamo a fin de costearse su asistencia a la reunión conciliar.

Pero, desde un punto de vista canónico, la consecuencia más importante que se puede extraer en torno al IV Concilio de Letrán en lo referente a la Iglesia de Cuenca es la falta de puesta en práctica de las decisiones tomadas en la asamblea conciliar, pues en octubre de 1219 Honorio III tendría que dirigirse a todos los sufragáneos del arzobispo de Toledo con el fin de hacerles ver la necesidad de que las decisiones conciliares fuesen puestas en práctica. Y no mucho tiempo después, mediante la legación pontificia llevada a cabo en la Iglesia conquense por el cardenal Juan de Abbeville en 1229, se trataría, entre otras cosas, de llevar a la práctica algunos de los preceptos fundamentales del IV Concilio Lateranense, que no siempre se cumplirían en épocas posteriores[218].

En lo que respecta a la muy destacada participación conquense en el Concilio de Constanza y el Concilio de Basilea, el lector recordará que la cuestión fue analizada con detalle en el capítulo dedicado al estudio de las relaciones de la Iglesia de Cuenca con la Monarquía castellana durante la época Trastámara, por lo que aquí no repetiremos de nuevo lo ya dicho entonces.

6-Comisiones pontificias

Un último tipo de manifestación del intervencionismo pontificio sobre la Iglesia conquense fue el que vino dado por aquellas intervenciones del Papado mediante las cuales se comisionó a algunos obispos de Cuenca para que en nombre de la Santa Sede colaborasen en la ejecución de determinadas empresas.

Ya a comienzos del siglo XIII empezamos a tener ejemplos

[218]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, pp. 46-48.

sobre situaciones de este tipo. Entre 1215 y 1216 hubo una intervención de mutuo acuerdo entre Enrique I y Alvar Núñez de Lara por la que fueron usurpadas ciertas rentas pertenecientes al arzobispo de Toledo. Por ello el 22 de noviembre de 1216 Honorio III mandaría al obispo de Cuenca, en unión con los de Sigüenza y Plasencia, que se ocupara de la restitución de los bienes usurpados. A pesar de que no tenemos noticias sobre las gestiones llevadas a cabo por estos obispos en cumplimiento del encargo pontificio, parece que no debieron existir muchas dificultades a la hora de cumplir su misión, ya que rápidamente Alvar Núñez y el monarca se retractaron de su acción[219].

Un tipo de comisión pontificia que se produjo en varias ocasiones fue aquella mediante la cual el papa encargó a ciertos obispos de Cuenca su intervención en asuntos relacionados con la Orden de Santiago. La importante presencia santiaguista en la diócesis conquense es sin duda un factor que contribuye a explicar que el papa hiciera a veces este tipo de encargos a los obispos conquenses, a la vez que ello también servía para reafirmar la autoridad del obispo diocesano.

Una intervención de este tipo ya tuvo lugar el 5 de febrero de 1289, fecha en la cual Nicolás IV comisionaría al obispo de Cuenca para que hiciese restituir al prior y convento de Uclés todos sus bienes y diezmos que estuviesen enajenados[220].

Años más tarde se produciría otra comisión pontificia, en esta ocasión relacionada con el maestre de Santiago Velasco López. Previamente, el 19 de mayo de 1339, Benedicto XII había mandado a los oficiales del reino de Navarra que hiciesen restituir a dicho maestre ciertos bienes que le habían sido usurpados[221], ordenando el 13 de junio del mismo año al obispo de Pamplona que liberase de la cárcel al mencionado maestre Velasco López y le otorgase un salvoconducto para dirigirse hacia

---

[219]José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, pp. 35-36.

[220]AHN, OOMM-Uclés, carp. 4, vol. II, nº 17.

[221]José Trenchs Odena, <<Benedicto XII y las Órdenes militares hispanas...>>, p. 143, nº 5.

Aviñón[222]. Es precisamente dentro de esta línea de proteccionismo pontificio donde debe situarse la nueva intervención de Benedicto XII que tuvo lugar el 1 de octubre de 1339, y mediante la cual el papa mandaría al arzobispo de Toledo y a los obispos de Cuenca y Jaén que pagasen diariamente cuatro florines de oro al maestre santiaguista Velasco López[223], si bien ninguna noticia tenemos sobre el modo en que los antedichos prelados cumplieron el encargo pontificio.

No mucho tiempo después se producirían varias intervenciones de Inocencio VI de nuevo en relación con la Orden de Santiago, aunque en esta ocasión el pontífice no comisionaría al obispo de Cuenca para que interviniese directamente en el asunto. La actuación del papa estuvo encaminada a tratar de resolver ciertas disputas que se venían produciendo entre Francisco de San Máximo, notario y secretario papal que poseía una canonjía en la Iglesia de Cuenca, y la Orden de Santiago. Seguramente los conflictos comenzaron ya en 1352, o quizá antes, pues el 31 de enero de 1353 el papa rogaba al infante don Fadrique, maestre de Santiago, que interviniese a fin de que el comendador mayor Ruy Chacón no impidiese a Francisco de San Máximo la percepción de ciertos prestimonios que le pertenecían en la diócesis de Cuenca, y que estaban situados en territorio santiaguista: <<Corral de Almager, Cabeça Messada, Cuzques et Cabeça Lebrera prestimonia, conchensis diocesis>>[224]. En otro documento de idéntica fecha al anterior el papa rogará directamente a Ruy Chacón que no impida a Francisco de San Máximo la percepción de dichos prestimonios[225].

Sin duda lo que más llama la atención de esta primera intervención pontificia en dicho conflicto es la ineficacia que tuvo para resolver el problema en cuestión. Así, en años posteriores no sólo seguirá latente el mismo problema, sino que incluso se agudizará, a pesar de las reiteradas intervenciones

---

[222] *Ibid.*, p. 143, nº 6.

[223] *Ibid.*, p. 144, nº 9.

[224] José Zunzunegui Aramburu, *Bulas y cartas secretas de Inocencio VI*, doc. 5.

[225] *Ibid.*, doc. 6.

de Inocencio VI en el caso. De este modo, durante los años siguientes no sólo será Ruy Chacón el que impida a Francisco de San Máximo la percepción de sus prestimonios, sino que también otros comendadores y el mismo maestre don Fadrique harán lo mismo, siendo ello motivo de nuevas intervenciones pontificias para tratar de cortar el conflicto[226].

Así, pues, a lo largo de los años en que la documentación nos informa sobre este conflicto se puede apreciar, por un lado, la progresiva ineficacia de las intervenciones pontificias para resolver el problema, y, por otro lado, el fuerte sentimiento de solidaridad que se dio entre los miembros de la Orden de Santiago, siempre dispuestos a defender a toda costa sus intereses económicos en aquellos territorios de la diócesis sometidos a su control.

Un último ejemplo, ya mucho posterior, que puede citarse en relación a la Orden de Santiago es el que viene dado por la bula que el 6 de noviembre de 1471 dirigió Sixto IV al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Cuenca y Burgos, nombrándoles jueces conservadores de los bienes de la Orden[227]. En lo que atañe al prelado conquense, y si tenemos en cuenta la gran cantidad de propiedades que poseía la Orden en esta diócesis, el nombramiento pontificio venía indudablemente a reforzar la posición de máxima autoridad eclesiástica ejercida por el obispo en su diócesis.

En alguna ocasión el papa también comisionaría al prelado conquense en asuntos relativos a la Orden de Calatrava, cuya presencia en la diócesis era mínima. Tal fue el caso, por ejemplo, de una intervención de Benedicto XII que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1338, y a través de la cual el papa comisionó a los arzobispos de Toledo y Zaragoza y al obispo de Cuenca para que citasen a Alfonso Pérez, que se autotitulaba maestre de Calatrava, y a otro maestre de la misma Orden, Juan Núñez, y

---

[226] *Ibid.*, docs. 74 (13-IV-1354), 144 (7-III-1355), 215 (29-III-1356), 271 (6-XI-1356). En el conflicto acabaría interviniendo también el noble conquense Fernando Gómez de Albornoz. Prueba de ello es que el 26 de marzo de 1355 Inocencio VI mandaría al arzobispo de Zaragoza, Pedro López de Luna, que hiciese restituir a Francisco de San Máximo el dinero de su canonjía y prebenda conquense que Fernando Gómez de Albornoz había mandado usurpar al mercader que lo llevaba a la Curia aviñonesa. AVat., *Instrumenta Miscellanea*, nº 2020.

[227] AHN, OOMM-Uclés, carp. 4, vol. I, nº 25.

resolviesen a quién correspondía realmente al cargo, que ambos personajes se disputaban[228]. Por otro lado, ya hacia el final del siglo, el 12 de octubre de 1394, Benedicto XIII comisionaría al arzobispo de Toledo y al obispo de Cuenca para que amparasen en la posesión de su maestrazgo de Calatrava al maestre Gonzalo Núñez de Guzmán, cuya elección se había realizado en virtud de un breve de Clemente VII[229].

Pero además de estas comisiones pontificias relacionadas con las Órdenes militares, también hubo algunas sobre otros asuntos de índole diversa. Así, por ejemplo, con fecha 23 de septiembre de 1300 Bonifacio VIII expidió la bula *Ad apostolicae dignitatis apicem*, poniendo en manos de los obispos Pascual de Cuenca y Fernando de Calahorra, junto con el obispo de Sigüenza don Simón, la secularización del cabildo catedralicio de esta última diócesis, que hasta entonces había sido regular. El 1 de enero de 1301 estaban en Sigüenza los prelados y, leída la bula, procedieron a elaborar los estatutos por los que habría de regirse en adelante el nuevo cabildo secular[230]. Quizá como premio a su actuación en esta empresa, el 7 de marzo de este mismo año el papa concederá al obispo conquense facultad para testar[231].

Otra comisión pontificia sobre una cuestión diferente fue la que se produjo el 13 de septiembre de 1373, fecha en que Gregorio XI encomendaría al obispo conquense, Pedro Alfonso de Toledo, la visita del Colegio de San Clemente de Bolonia, donde habían surgido parcialidades, para restablecer en él la disciplina[232], encargándole también el 7 de enero de 1375 la reforma de

---

[228]José Trenchs Odena, <<Benedicto XII y las Órdenes militares hispanas>>, p. 145, nº 4.

[229]AHN, OOMM-Calatrava, carp. 447.

[230]Toribio Minguella Arnedo, *Historia de la diócesis de Sigüenza*, II, p. 3.

[231]ASVat., *Reg. Vat.* 50, f. 16r, ep. 63 / G. Digard, *Boniface VIII*, III, nº 3989.

[232]Beltrán, *Bulario*, I, nº 142.

los estatutos del Colegio[233]. Además, en atención a los méritos contraídos en la puesta en marcha del centro, al obispo Pedro Alfonso de Toledo se le concedió de manera excepcional que, junto con Alfonso Fernández, obispo de Ávila, que había sido camarero del fundador, pudiera residir en él[234].

El 27 de abril de 1386 nos encontramos con una nueva comisión pontificia, en este caso de Clemente VII, para que el obispo de Cuenca don Álvaro Martínez, previo examen, confirmase una concordia realizada entre el convento de San Clemente de Toledo y el arzobispo don Pedro Tenorio sobre los derechos de tránsito por un puente construído por éste en el Tajo[235].

Finalmente, como último ejemplo de este tipo de intervenciones del Papado, conviene recordar algunas ocasiones en que el obispo Barrientos actuó en determinadas misiones por encargo pontificio. Un primer testimonio de ello lo tenemos en el mandato de Nicolás V del 20 de abril de 1453 mediante el cual se le encomendó que visitase la Provincia dominicana de Castilla, nombrándole juez reformador para poner remedio en ella a los síntomas de relajación de la Observancia que se estaban produciendo a causa de las claudicaciones del provincial. Don Lope cumplió lo que se le mandó y, una vez terminada la visita, convocó un capítulo de la Orden en Toledo, deponiendo al provincial Esteban Soustello, que fue sustituído por Pedro de Villaviciosa, con lo que las cosas volvieron momentáneamente a su cauce[236]. De esta forma el obispo Barrientos se nos presenta como uno de los dominicos que primero se implicaron en la reforma de su Orden, mostrándose firme partidario de la implantación de las tendencias observantes entre los predicadores.

---

[233] *Ibid.*, nº 144. Estos estatutos están publicados por Vicente Beltrán de Heredia, <<Primeros estatutos del Colegio español de San Clemente de Bolonia>>, *Hispania Sacra*, 11 (1958), pp. 187-224. Sobre el Colegio de San Clemente también puede verse: B.M. Martí, *The Spanish College at Bologna in the Fourteenth Century*, Philadelphia, 1966.

[234] Beltrán, *Cartulario*, I, p. 158.

[235] Beltrán, *Bulario*, I, nº 181.

[236] Beltrán, *Bulario*, I, p. 144.

Poco antes, el 24 de marzo de dicho año de 1453, el papa le había otorgado un privilegio de dispensa del juramento de realizar la visita *ad limina* que hizo al ser promovido a Cuenca[237], y mediante una nueva intervención pontificia de Pío II, datada el 28 de febrero de 1461, le serían ratificadas y confirmadas todas las fundaciones y donaciones realizadas por él hasta ese momento[238].

******

En conclusión, tras todo lo dicho hasta ahora, puede afirmarse que las intervenciones pontificias sobre la Iglesia conquense fueron constantes y diversas durante todo el periodo bajomedieval, comenzando ya en el mismo momento fundacional de la diócesis. El Papado aspiraba a ejercer un control lo más firme posible sobre todas las diócesis de la Cristiandad occidental, cosa que sólo se conseguiría parcialmente debido a la existencia de similares pretensiones por parte de las monarquías europeas; con todo, un buen número de asuntos de orden eclesiástico serían objeto de frecuente control por parte de la Santa Sede.

La provisión de beneficios fue uno de los ámbitos donde más frecuentemente se manifestarían las intervenciones pontificias, sobre todo desde mediados del siglo XIV, pudiendo señalarse algo similar respecto a las numerosas exacciones fiscales a que se vería sometida la Iglesia conquense por parte del Papado, y que no pocas veces provocarían airadas protestas contra el pago de algunos tributos que se consideraban abusivos. Finalmente, diversos asuntos de orden disciplinario, la concesión de diferentes mercedes y licencias, y las comisiones pontificias vendrían a completar, en líneas generales, el cuadro de intervenciones pontificias sobre la diócesis.

---

[237]Beltrán, *Bulario*, III, nº 1140.

[238]Beltrán, *Bulario*, III, nº 1193.

II-RELACIONES CON EL ARZOBISPADO DE TOLEDO Y CON OTRAS DIÓCESIS LIMÍTROFES

1-Relaciones con el arzobispado de Toledo

A) *La dependencia de la Iglesia de Cuenca hacia el arzobispo toledano*

Dentro del sistema de organización diocesana peninsular, el obispado conquense quedaría integrado, ya desde el mismo momento de su fundación, dentro de la provincia eclesiástica toledana. Pero, además, es necesario recordar que, antes de la conquista de Cuenca y creación de la nueva diócesis, el arcedianato de Huete ya dependía eclesiásticamente de Toledo. Una vez finalizados los grandes avances reconquistadores de la primera mitad del siglo XIII, la provincia eclesiástica toledana tenía ya las siguientes diócesis sufragáneas: Palencia, Osma, Sigüenza, Segovia, Albarracín-Segorbe, Cuenca, Córdoba y Baeza-Jaén.

Por otro lado, además de encabezar una provincia eclesiástica, la sede toledana también poseía el derecho de primacía eclesiástica sobre el conjunto de los reinos hispánicos. El 6 de mayo de 1187 el papa Urbano III, a petición del arzobispo de Toledo don Gonzalo, había reconocido la primacía eclesiástica toledana en los reinos hispánicos, concediendo además al arzobispo facultad para restaurar las antiguas sedes episcopales y nombrar obispos en las mismas, y confirmando la sujección de las diócesis sufragáneas hacia Toledo[239]. Algunos años más tarde, el 4 de marzo de 1210, Inocencio III reiterará de nuevo todas estas disposiciones[240].

Una clara manifestación de la dependencia con respecto a Toledo de todas sus diócesis sufragáneas es la que viene dada por la promesa de obediencia al arzobispo de Toledo que, en el momento de su consagración, debían realizar los obispos de la

---

[239] <<...episcopales praeterea sedes, quas in presentiarum iuste et quiete possides, scilicet, Palentiam, Segobiam, Oxonam, Segunciam et Concam eidem Toletane ecclesie, tanquam metropoli subditas esse decernimus>>. Demetrio Mansilla Reoyo, *La documentación pontificia hasta Inocencio III*, nº 126.

[240] *Ibid.*, nº 422.

provincia eclesiástica toledana. Para el caso de los prelados conquenses, son varios los testimonios documentales relativos a esta cuestión que han llegado hasta nosotros. Así, se conservan las cartas conteniendo las promesas de obediencia de los obispos de Cuenca don Juan Yáñez[241], don Lope Ruiz[242], don Gonzalo Pérez Gudiel[243], don Gonzalo Díaz Palomeque[244] y don Odón[245].

Por ejemplo, el primer obispo de Cuenca, don Juan Yáñez, realizó su promesa de obediencia hacia Toledo del siguiente modo:

"Ego Iohannes, sancte Conchensis ecclesie nunc ordinandus episcopus, subiectionem et reverentiam et obedientiam a sanctis patribus constitutam secundum constituta canonum ecclesie Toletane rectoribusque eius in presentia domini archiepiscopi G. perpetuo me exhibiturum promitto, et super sanctum altare propria manu confirmo"

Muy elocuente resulta también la promesa de obediencia realizada en Alcalá de Henares el 22 de octubre de 1273, al ir a ser consagrado, por el obispo don Gonzalo Pérez Gudiel, futuro arzobispo de Toledo y cardenal:

"Ego Gundissalvus, Conchensis ecclesie nunc consecrandus episcopus, profitens et in veritate recognoscens conchensem ecclesiam Toletane ecclesie de iure subiectam fidelitatem, reverentiam et subiectionem a sanctis patribus constitutam secundum constituta canonum Toletane ecclesie rectoribusque eius et vobis domine Sanci, eiusdem archiepiscopo Hispaniarum primati, perpetuo me exhibiturum promitto, et super hoc sanctum altare iuro et propria manu firmo"

En ocasiones también podía suceder que el arzobispo de Toledo comisionase al obispo conquense para la consagración y toma del juramento de fidelidad de otros sufragáneos de Toledo.

---

[241] ACT, X.1.E.1.6 / BN, Ms. 13035, f. 101r.

[242] ACT, X.1.E.1.1 / BN, Ms. 13035, f. 100r.

[243] ACT, X.1.E.1.1a / BN, Ms. 13035, f. 104r (22-X-1273).

[244] ACT, X.1.E.1.4 / BN, Ms. 13035, f. 102r.

[245] ACT, X.1.E.1.5 / BN, Ms. 13035, f. 105r-v (15-VIII-1328).

Un ejemplo de ello lo tenemos en un documento fechado el 5 de noviembre de 1297 mediante el cual el arzobispo de Toledo don Gonzalo Pérez Gudiel, que en aquel momento se encontraba en Orvieto, en virtud de un mandamiento apostólico de Bonifacio VIII, encomendó al obispo conquense don Gonzalo Díaz Palomeque que confiriese en su nombre la consagración episcopal a don Juan Ascarón, electo de Osma, tomándole además juramento de fidelidad a la metrópoli toledana y su arzobispo, y dándole después cuenta de ello para que él lo pudiese transmitir al papa, que es quien lo había nombrado[246]. El 19 de marzo del año siguiente don Gonzalo Díaz cumplió con lo que se le había encomendado, recibiendo dicho día de don Juan Ascarón el juramento de fidelidad y obediencia al arzobispo toledano[247].

En el Concilio Provincial de Alcalá de 1326 el arzobispo de Toledo don Juan recordaría lo ya establecido con anterioridad respecto a sus obispos sufragáneos: éstos debían ser consagrados por el metropolitano o al menos con su licencia, y en caso de no ser así, en el término de un año, no habiendo impedimento legítimo, debían presentarse al arzobispo para prometerle respeto y obediencia[248]. No obstante, a partir de mediados del siglo XIV la realización de estas promesas de obediencia comenzará a ser más infrecuente y, de hecho, al menos para el caso del obispado conquense, desde la segunda mitad del siglo XIV en adelante ya no se conservan cartas de obediencia de los obispos hacia el arzobispo toledano como las que tenemos para épocas precedentes.

Otra manifestación de la dependencia hacia Toledo de sus diócesis sufragáneas es la que venía dada por el hecho de ser la sede toledana tribunal de apelación para algunos pleitos eclesiásticos. Entre los muchos ejemplos que podrían citarse tenemos la apelación que el cabildo catedralicio conquense presentó el 8 de noviembre de 1308 ante el arzobispo de Toledo, acusando al obispo conquense don Pascual de querer entrometerse en ciertos asuntos que no eran de su competencia relativos al

---

[246]ACT, X.1.E.1.13 / BN, Ms. 13035, ff. 236r-237r.

[247]A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, nº 115.

[248]José Sánchez Herrero, *Concilios provinciales y sínodos toledanos...*, p. 108.

gobierno y distribución de las rentas de la mesa capitular[249]. En el fondo a quien más perjudicaba este recurso al arzobispo toledano era a sus obispos sufragáneos, pues ello suponía un cierto sometimiento de la potestad jurisdiccional de estos últimos a la del metropolitano. Lo antedicho explica que frecuentemente algunos sufragáneos trataran de impedir las apelaciones a Toledo, haciéndose necesaria finalmente una intervención de Sixto IV el 14 de julio de 1477 mandando que ningún obispo sufragáneo de Toledo impidiese dicho recurso de las apelaciones al arzobispo toledano[250]. Ya a fines de la Edad Media, otra apelación a Toledo que cabría destacar es la que presentaron en 1496 el cabildo catedralicio y clerecía del obispado conquense contra el doctor don Pedro de Costa, provisor del obispado en nombre del cardenal de San Jorge, a quien se acusaba de cometer numerosísimos agravios[251].

La celebración cada cierto tiempo de concilios provinciales también venía a ser un reflejo más de la supremacía toledana con respecto a sus diócesis sufragáneas. Ya el IV Concilio de Letrán de 1215, en su canon 6, recuerda la obligación que tenían los metropolitanos de celebrar anualmente con sus sufragáneos concilio provincial para la reforma y vigilancia de las costumbres del clero. Con el fin de lograr esto último, en cada diócesis se habrían de designar varias personas idóneas para que investigasen durante todo el año lo que fuese digno de corregir y reformar, para dar cuenta de ello al metropolitano en el concilio siguiente. Dos siglos más tarde, en la sesión XV del Concilio de Basilea, celebrada el 26 de noviembre de 1433, se determinó que los concilios provinciales habrían de celebrarse una vez durante los dos años inmediatos a la conclusión del concilio general, y después una vez cada tres años; en cambio, no se celebrarían durante el concilio general ni seis meses

---

[249] ACC, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 682.

[250] ACT, X.1.B.1.1.

[251] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 766 bis.

antes[252]. Cuando se celebraba el concilio provincial, el metropolitano debía convocar a todos sus sufragáneos, que en teoría tenían la obligación de asistir.

Pero, en la práctica, la periodicidad con que los arzobispos toledanos celebraron concilios provinciales con sus sufragáneos fue mucho menos frecuente de lo que establecía la normativa canónica anteriormente señalada. Con todo, tenemos constancia de la asistencia de algunos obispos de Cuenca a concilios provinciales convocados por el arzobispo de Toledo. Por ejemplo, ya se indicó con anterioridad cómo don Pascual estuvo presente en el Concilio de Peñafiel convocado en 1302 por el arzobispo don Gonzalo Díaz Palomeque. Años más tarde, en 1326, el arzobispo toledano don Juan de Aragón reuniría en Alcalá de Henares otro concilio provincial con el fin de formalizar y unificar las pretensiones del clero, asistiendo los obispos de Segovia, Cuenca, Jaén y Osma, y los procuradores de los de Palencia, Sigüenza y Córdoba; el tema principal del concilio fue el mantenimiento de la inmunidad eclesiástica, y su objetivo ponerse de acuerdo sobre lo que se había de pedir en las Cortes para mantenerla[253]. Situándonos ya en el siglo XV, hay que señalar que al concilio provincial celebrado en Aranda en 1473 asistieron los obispos de Palencia y Segovia, y los procuradores de los de Jaén, Cuenca, Osma y Sigüenza, faltando sólo el de Córdoba[254].

Debe ser destacada, asimismo, la notable influencia que ejercería la normativa conciliar y sinodal toledana sobre las constituciones sinodales conquenses. Finalmente, además de la presencia del obispo de Cuenca en ciertos concilios provinciales, hay que recordar que en la Congregación general del clero castellano celebrada en Sevilla en 1478 también estuvieron presentes algunos procuradores de la Iglesia de Cuenca[255], al

---

[252]José Sánchez Herrero, <<Los concilios provinciales y los sínodos diocesanos españoles. 1215-1550>>, pp. 116-117.

[253]Ana Arranz Guzmán, <<Reconstrucción y verificación...>>, p. 78.

[254]José Sánchez Herrero, *Concilios provinciales y sínodos toledanos...*, p. 5.

[255]BN, Ms. 13072, f. 199v.

igual que sucedería cuatro años más tarde en la Congregación del clero reunida en Córdoba en 1482[256].

Del mismo modo que los concilios y sínodos toledanos influyeron sobre la normativa sinodal conquense, la celebración de los oficios divinos y liturgia en la Iglesia de Cuenca debía adaptarse a las costumbres y normas que al respecto existían en la Iglesia de Toledo, y así lo estableció a comienzos de 1400 el obispo don Juan Cabeza de Vaca:

"Por quanto la nuestra eglesia es sufraganea a la eglesia de Toledo, e en el ofiçio eclesiastico sigue la su regla, consonante cosa es al Derecho e a los decretos de los santos padres que la siga en todas otras çeremonias, usos, buenas costunbres e ordenanças en quanto tanne al buen regimiento della, asi como la fija devota deve seguir a la religiosa madre"[257]

Para terminar, otro aspecto de la dependencia de la Iglesia de Cuenca hacia la metrópoli toledana es el que vendría dado por la presencia en el sector occidental del obispado conquense, ya en las proximidades con la archidiócesis de Toledo, de una localidad en la que parece ser que los arzobispos toledanos ejercieron su jurisdicción temporal, a modo de señorío eclesiástico. Efectivamente, en una *Relación de los beneficios del arçobispado de Toledo y otras relaciones tocantes al dicho arçobispo y arçobispado*, correspondiente al siglo XVI, se señala que en esta centuria la villa de Belinchón, en el obispado de Cuenca, con 250 vecinos, era un lugar sobre el que el arzobispo de Toledo poseía jurisdicción temporal[258], pareciendo muy probable que dichos derechos jurisdiccionales se remontasen a la Edad Media, aunque no sabemos en qué consistían exactamente ni cuál era su alcance. Ya en el siglo XVIII, sin embargo, la villa de Belinchón estaba integrada en el realengo[259].

---

[256]BN, Ms. 13072, f. 258r-v.

[257]ACC, *Necrologio-Obituario*, f. 66r.

[258]AGS, *Patronato eclesiástico*, leg. 155, s.f.

[259]Salvador de Moxó, *Los antiguos señoríos de Toledo*, p. 115.

B) *Las elecciones episcopales*

La intromisión de los arzobispos toledanos, fundamentalmente durante los siglos XII y XIII, en las elecciones episcopales conquenses constituye una cuestión más a tener muy en cuenta en el estudio de la dependencia de la Iglesia de Cuenca hacia la metrópoli de Toledo, por lo que se hace necesario dedicar algunas páginas al análisis individualizado del tema.

Ya en el siglo XI habían surgido algunas colecciones canónicas partidarias de la intervención del metropolitano en las elecciones de sus obispos sufragáneos, con el fin de contrarrestar la intromisión del poder civil[260]. Durante las dos centurias siguientes, y a medida que se fuesen restaurando las diócesis castellanas, no serán en absoluto infrecuentes las intromisiones de los metropolitanos en algunas elecciones de sus sufragáneos, y un claro ejemplo de ello lo tenemos en la Iglesia conquense, como a continuación se verá.

La intervención indirecta del arzobispo de Toledo en la elección de los obispos de Cuenca parece muy probable fundamentalmente durante los siglos XII y XIII, pues en esta época, tal como ya se señaló en su lugar, casi todos los prelados conquenses procedían de familias mozárabes toledanas muy vinculadas a la sede arzobispal. Tal fue el caso de don Juan Yáñez, electo de Cuenca en 1178 y hasta entonces arcediano de Calatrava en la Iglesia de Toledo; San Julián, obispo de Cuenca desde 1197 y hasta ese momento también arcediano de Calatrava; don García Ruiz, electo conquense a fines de 1208; don Lope Ruiz, elegido como obispo en 1225; don Gonzalo Ibáñez Palomeque, obispo de Cuenca al menos desde 1231; don Gonzalo Pérez Gudiel, elegido por el cabildo catedralicio conquense en 1273; don Gonzalo García Gudiel, elegido asimismo por el capítulo conquense en 1280; y don Gonzalo Díaz Palomeque, también elegido por el cabildo catedralicio en 1289.

En estos tres últimos casos, junto a un intervencionismo indirecto de la Monarquía castellana, también parece indudable

---

[260] Antonio García y García, *Historia del Derecho Canónico. I. El primer milenio*, p. 367.

la intromisión del arzobispo de Toledo en las decisiones del cabildo conquense. Don Gonzalo Pérez Gudiel, por ejemplo, al haber quedado la Iglesia de Cuenca vacante debido a la muerte de don Pedro Lorenzo, fue elegido mediante compromisarios por el cabildo catedralicio de Cuenca el 4 de marzo de 1273, confirmando poco después el arzobispo toledano dicha elección[261]. No obstante, se trató de una elección completamente manipulada, dado que uno de los tres compromisarios nombrados por el cabildo conquense resultó ser el propio don Gonzalo Pérez, que hasta entonces había sido arcediano de Moya en la Iglesia de Cuenca. La intervención de la metrópoli toledana en el proceso electoral se consiguió nombrando también como compromisario al arzobispo de Toledo, don Sancho de Aragón, y tampoco debe desecharse una posible intromisión de la Monarquía castellana, dadas las estrechas relaciones que con ella venía manteniendo desde hacía tiempo la familia de los Gudiel. Don Gonzalo Pérez Gudiel aún era electo el 6 de septiembre de 1273[262], teniendo lugar su consagración el 22 de octubre de este mismo año, día en el que también hizo promesa de obediencia al arzobispo de Toledo[263].

Otro ejemplo relevante de esta intromisión toledana lo constituye la polémica elección como obispo de Cuenca de don Gonzalo García Gudiel llevada a cabo por el cabildo catedralicio conquense en 1280. Se trató de una elección tremendamente discutida y en la que confluyeron múltiples intereses. El cabildo conquense primero transfirió la potestad electiva al maestrescuela Domingo Lobo y a Juan López, concanónigo de Cuenca y canónigo de Toledo, determinándose que si estos dos no se pusieran de acuerdo en elegir como obispo a un solo miembro del propio cabildo conquense, se tendría que proceder de nuevo a la elección. Esto último es lo que sucedió, puesto que inicialmente resultaron elegidos dos candidatos: Gonzalo García Gudiel, arcediano de Cuenca; y Fernando López, canónigo conquense. De este modo se convocaría una nueva reunión para llevar a cabo la

---

[261] ACT, X.1.E.2.6 / BN, Ms. 13035, ff. 124r-129v.

[262] ACC, caj. 9, nº 164.

[263] ACT, X.1.E.1.1a / BN, Ms. 13035, f. 104r.

elección definitiva. El cabildo eligió el sistema de compromisarios, siendo nombrado como tal el concanónigo conquense Juan Pérez, el cual, en nombre del cabildo, eligió definitivamente como nuevo obispo de Cuenca a don Gonzalo García Gudiel el 19 de marzo de 1280[264].

Poco después, el 18 de abril del mismo año, el deán de Toledo don Sancho Martínez, el arcediano de Moya Álvaro Juanes, y el canónigo toledano Pedro Pérez Bonet, aprobarían el acta de elección de don Gonzalo García Gudiel como nuevo obispo de Cuenca, examinando el acta de aceptación del electo y confirmando a éste en su nuevo cargo con autoridad metropolitana[265]. Pero ahí no se quedarían las cosas, puesto que algunos días más tarde el canónigo conquense Fernando López, cuya elección como obispo había sido finalmente rechazada, apelaría al papa contra el nombramiento de don Gonzalo García Gudiel. De este modo, con fecha 23 de abril, el maestro Juan de Montealbano, deán de Cuenca, Rodrigo García, arcediano de Huete, Álvaro Juanes, arcediano de Moya, Domingo López, maestrescuela, junto con otros canónigos de Cuenca, nombrarían como procurador al maestro Gonzalo Alfonso, canónigo de Toledo y Cuenca, para que les representase en la Curia romana en la causa que se movía entre ellos, por un lado, y el canónigo Fernando López y sus partidarios, por otro, debido a la apelación que estos últimos habían presentado contra la elección como obispo de Cuenca de Gonzalo García Gudiel[266]. No obstante, al final dicha apelación no surtiría ningún efecto, permaneciendo definitivamente don Gonzalo García como obispo conquense.

A la hora de interpretar esta elección episcopal y los múltiples factores que confluyeron en ella, se hace necesario apuntar algunos datos sobre don Fernando Rodríguez de Covarrubias, arzobispo de Toledo durante el desarrollo inicial de estos

---

[264] ACT, X.1.E.2.4a / BN, Ms. 13035, ff. 106r-110v.

[265] ACT, X.1.E.1.3.

[266] ACT, X.1.E.2.3 / BN, Ms. 13035, ff. 112r-113r. A través de otro documento fechado el 23 de abril de 1280 el propio don Gonzalo García Gudiel, electo de Cuenca, nombraría también como su procurador al maestro Gonzalo Alfonso para que le defendiese en la Curia romana frente a la apelación interpuesta contra su nombramiento por el canónigo conquense Fernando López <<et sibi adherentes>>. ACT, X.1.E.1.4a.

acontecimientos. Recomendado por Alfonso X, el cabildo toledano le había elegido como arzobispo en 1276, pero su elección nunca llegaría a ser confirmada por la Santa Sede, debido a que había defendido la candidatura imperial de Alfonso X en contra de los criterios del papa Gregorio X. Por este motivo algunos cardenales, entre ellos Juan Cayetano Orsini, futuro Nicolás III, se opondrían a la elección de Covarrubias como arzobispo de Toledo, debiendo finalmente renunciar éste a sus derechos sobre la mitra, según comunica Nicolás III en una carta del 13 de mayo de 1280, por la que también fue nombrado Gonzalo Pérez Gudiel -entonces obispo de Burgos y anterior obispo de Cuenca- como nuevo arzobispo. Poco tiempo antes, éste había acusado de simoníaco a don Fernando Rodríguez de Covarrubias, denunciando su elección para la mitra toledana[267].

Dadas, pues, estas circunstancias, no sería en absoluto extraño que detrás del intento fracasado de elección de Fernando López como obispo de Cuenca hubiese estado el propio arzobispo Covarrubias. A éste, lógicamente, no le interesaba que Gonzalo García Gudiel, pariente del obispo de Burgos que recientemente la había acusado de simoníaco, lograra hacerse con la mitra de Cuenca, que era sufragánea de Toledo. No obstante, en mayo de 1280, poco después de que se hubiese presentado la apelación contra el nombramiento del obispo conquense, Gonzalo Pérez Gudiel sería elegido como nuevo arzobispo de Toledo, y probablemente su intercesión ante el papa Nicolás III fue decisiva para que su pariente Gonzalo García Gudiel permaneciese definitivamente como obispo de Cuenca. Por último, tampoco hay que olvidar la estrecha vinculación existente entre la familia mozárabe de los Gudiel y la Monarquía castellana, con lo que también entraría en juego una más que posible intromisión del monarca, que habría intercedido a favor de Gonzalo García Gudiel.

En definitiva, el ejemplo recién expuesto pone claramente de manifiesto hasta qué punto podía llegar el complejo entramado de intereses en torno a una elección episcopal como la que acaba de analizarse, en la que confluyeron los intereses del cabildo

---

[267] Juan Francisco Rivera Recio, *Los arzobispos de Toledo...*, pp. 65-67.

catedralicio conquense, del arzobispo de Toledo, del Papado, de la Monarquía castellana y de la propia familia de los Gudiel.

Durante los siglos XIV y XV, en cambio, los prelados conquenses dejarán de proceder de estas familias de mozárabes toledanos, y el grado de intromisión de los arzobispos de Toledo en su elección será casi inexistente, dejando paso a un mayor afianzamiento de la voluntad regia y pontificia, aunque en el caso de don Bernal Zafón, elegido como obispo de Cuenca en 1362, quizá pueda sospecharse un cierto influjo de Toledo por haber ostentado hasta entonces el cargo de tesorero en el cabildo catedralicio toledano.

C) *Algunas situaciones conflictivas*

En las relaciones de los obispos de Cuenca con los arzobispos toledanos en ocasiones se plantearían situaciones de marcado carácter conflictivo, motivadas casi siempre por los abusos del metropolitano en el ejercicio de su potestad.

Un primer ejemplo de ello lo tendríamos durante el pontificado del obispo San Julián (1198-1208). Según Muñoz y Soliva, este prelado tuvo un litigio con el arzobispo toledano don Martín de Pisuerga en cierto momento de su pontificado. Al parecer el obispo conquense había procedido con severidad contra varios eclesiásticos de la diócesis, algunos de los cuales hicieron una apelación al metropolitano de Toledo, que la admitió, declarándose de este modo en contra de la actuación del obispo conquense. Por ello San Julián, al no conseguir que el arzobispo de Toledo don Martín desistiese de su empeño dejándole las primeras instancias en la reforma del clero de su diócesis, apelaría a su vez al papa Inocencio III, que finalmente habría mandado al arzobispo de Toledo que en ningún momento actuase en las primeras instancias de sus sufragáneos, y singularmente en las pertenecientes al obispo de Cuenca Julián[268]. Con todo, al no haber podido ser localizado ningún documento original en que se haga referencia a este litigio, y teniendo en cuenta la enorme

[268] Trifón Muñoz y Soliva, *Noticias de todos los ilustres obispos...*, p. 27.

confusión que caracteriza a Muñoz y Soliva, resulta imposible determinar si el conflicto al que alude este autor se corresponde o no enteramente con la realidad.

El siguiente conflicto de que tenemos noticia tendría lugar en 1220, debido a la pretensión del arzobispo toledano de dividir los antiguos obispados de Ercávica y Valeria, unidos bajo la mitra conquense, así como de incorporar a la diócesis toledana la localidad de Moya, en el extremo oriental del obispado conquense. Dado lo escasamente poblada que estaba la zona de Cuenca en el momento de su ocupación, el arzobispo de Toledo no puso inicialmente ningún reparo en unir las antiguas sedes visigodas de Valeria y Ercávica en una sola. Es a partir de 1215 cuando, pensando en los propios intereses de la mitra toledana, el arzobispo tratará de conseguir la desmembración del obispado conquense, reclamando para sí toda la parte occidental del mismo más la localidad de Moya, a lo que se opondría tajantemente el obispo de Cuenca, don García Ruiz. Por mandato de Honorio III se constituyó un tribunal para resolver el litigio, estando formado por el obispo de Burgos don Mauricio, el abad de Rioseco y el canónigo burgalés don Asensio, quienes dictaminarían en 1220 una resolución contraria a las pretensiones del arzobispo toledano, por lo que la desmembración de las antiguas sedes visigodas y la anexión de Moya finalmente no se llevaría a cabo[269].

Otro conflicto es el que se nos revela mediante un documento fechado el 2 de enero de 1260, y que contiene la apelación a la Santa Sede que interpuso el obispo de Cuenca don Pedro Lorenzo contra la veintena de los beneficios eclesiásticos con que había gravado el arzobispo de Toledo a sus obispados sufragáneos[270], tratándose, por tanto, de un litigio de origen fiscal.

A comienzos de 1300 nos encontraremos ya iniciado un serio conflicto entre don Pascual y el anterior obispo conquense, don Gonzalo Díaz Palomeque, ahora arzobispo de Toledo. El obispo de Cuenca, poco después de ser nombrado para esta sede, había

---

[269]José Manuel Nieto Soria, <<La fundación del obispado de Cuenca>>, p. 16, y <<El intervencionismo pontificio sobre la Iglesia conquense en el siglo XIII>>, p. 50.

[270]AHN, Micr., rollo 14260, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 678.

presentado una querella ante la audiencia pontificia contra don Gonzalo Díaz, acusándole de haber entregado algunas fortalezas y bienes de la mesa episcopal conquense a ciertos nobles, así como de haber cometido algunos abusos en la colación de beneficios y haber sometido al clero diocesano a indebidas exacciones mientras duró su pontificado en Cuenca. Por todo ello Bonifacio VIII, el 18 de enero de 1300, ordenaría abrir una investigación sobre el caso para que le fuesen devueltas al obispo de Cuenca las posesiones arrebatadas, comisionando para tal misión a los obispos de Plasencia y Ciudad Rodrigo, y autorizando incluso el recurso al brazo secular en caso de que hubiese dificultades para el cumplimiento del mandato pontificio[271]. Al año siguiente, el 7 de marzo, el papa tendría que intervenir de nuevo dirigiéndose al arzobispo de Sevilla, al obispo de Plasencia y al abad de San Emiliano de Lara -en la diócesis de Burgos-, para que éstos se encargasen de que el obispo de Cuenca don Pascual no fuese molestado por nadie en la pacífica posesión de sus bienes[272], lo que hace sospechar que el litigio del año anterior aún no había desaparecido del todo.

En 1302 los conflictos aún seguían latentes, y en esta ocasión el motivo de disputa era la pertenencia de ciertos bienes situados en la diócesis de Cuenca -pan, vino, ganado y otros productos- que según don Pascual le estaba arrebatando el arzobispo toledano. Ambos litigantes pondrían finalmente el caso en manos del obispo de Sigüenza don Simón de Cisneros, el cual, el 4 de marzo de dicho año, como juez árbitro nombrado para dar un veredicto, tras las investigaciones oportunas, condenó a don Gonzalo Díaz a pagar al obispo conquense 20.000 mrs. en compensación por los bienes arrebatados, quedando además exento don Pascual de devolver al arzobispo don Gonzalo las 500 libras tornesas que éste le había prestado en la Corte de Roma[273].

---

[271] ASVat., *Reg. Vat.* 49, f. 241r-v, nº 461 / G.Digard, *Les Registres de Boniface VIII*, II, nº 3338.

[272] ASVat., *Reg. Vat.* 50, f. 16r-v.

[273] ACT, X.1.E.2.2 / BN, Ms. 13035, ff. 116r-119v. La entrega del dinero habría de realizarse en dos plazos: 10.000 mrs. el próximo día de Pascua de Resurrección y los otros 10.000 mrs. el día de San Antolín de septiembre.

2-Relaciones con otras diócesis limítrofes

En el marco de las inevitables relaciones, más o menos intensas, según los casos, que las diversas diócesis mantenían entre sí, merecen ser destacados algunos datos relevantes que poseemos concernientes a la relación del obispado conquense con otras dos diócesis además de la toledana: la de Albarracín y la de Cartagena, ambas limítrofes geográficamente con el territorio conquense.

Inicialmente la relación entre la diócesis de Cuenca y su vecina de Albarracín se plantearía con un cierto carácter conflictivo. El obispado de Albarracín hasta 1176 había sido reconocido como el sucesor de Ercávica, lo que lesionaba los derechos de Cuenca, que aún no se había tomado. Fue precisamente pensando en esta inmediata ocupación como se decidió que Albarracín sustituyese a Segóbriga en vez de a Ercávica. Esta sustitución, tanto geográfica como históricamente, era un error, entrando Segóbriga también dentro del espacio conquense, a lo que se uniría el hecho de que las fronteras entre Albarracín y Cuenca en un principio no estarían demasiado claras. Es en este contexto donde debe situarse el conflicto referido a la localidad de Cañete que nos ha quedado recogido en un documento del 7 de noviembre de 1190.

La localidad de Cañete, con sus importantes salinas, se encontraba situada en la parte oriental del obispado conquense y en las proximidades del río Cabriel. Había sido tomada por el señor de Albarracín don Pedro Ruiz de Azagra, pero poco tiempo después de esta ocupación fue cedida a Alfonso VIII, aunque eclesiásticamente permanecería bajo la autoridad del obispo de Albarracín. Es el 7 de noviembre de 1190 cuando se produce la definitiva sustitución de la autoridad eclesiástica segobricense por la de Cuenca. Aunque todo el documento se expresa en términos de convivencia amistosa entre los obispados de Cuenca y Albarracín, también es cierto que se habla de *litigios* para aludir a la cuestión de Cañete. En cuanto a las razones que se expresan para cambiar la jurisdicción eclesiástica del lugar se señala que, al no existir otro obispado en el momento de la ocupación de la

localidad en los territorios inmediatos a ésta, Cañete pasó provisionalmente a depender de la jurisdicción de Albarracín, pero al producirse la restauración de la antigua sede valeriense, a la que se supone que perteneció Cañete en el pasado, fue restituída a su jurisdicción legítima que sería la de Valeria, es decir, el nuevo obispado de Cuenca[274].

Si bien podemos ver cómo la cuestión se resuelve aparentemente sin choques entre las dos partes, no cabe menos que sospechar que el asunto debió pasar por momentos de tensión. Hay que tener en cuenta que desde el momento de restauración de la sede conquense hasta la entrega en su favor de Cañete pasaron varios años, lo cual hace pensar en una cierta resistencia por parte del obispo de Albarracín a la entrega de la localidad. De cualquier modo, en el fondo de la cuestión lo que se está reflejando es, en primer lugar, la arbitrariedad a menudo observada en los procesos de restauración de las antiguas sedes episcopales y, en segundo lugar, la artificialidad de los límites entre los nuevos obispados.

Tiempo más tarde, ya en el siglo XIV, se producirían nuevos conflictos también por cuestión de términos, aunque en esta ocasión los litigios serían entre la Iglesia de Cuenca y el concejo de Albarracín. Así, entre las peticiones dirigidas por el cabildo catedralicio conquense a Enrique II probablemente en las Cortes de Toro de 1371, se señala que en la centuria anterior Alfonso X había entregado al capítulo conquense la aldea de Valtablado con sus términos y salinas, que al parecer después les sería arrebatada forzadamente por la reina de Aragón doña Leonor, y que ahora se encontraba en poder del concejo de Albarracín. Por ello el cabildo catedralicio solicitaría a Enrique II que, puesto que Valtablado estaba situado en territorio conquense, intercediese ante el rey de Aragón para que la localidad arrebatada les fuese devuelta[275]. La proximidad de Valtablado con la frontera de Albarracín fue sin duda el factor que propició el desarrollo del conflicto.

---

[274] José Manuel Nieto Soria, *El obispado de Cuenca en sus relaciones de poder*, pp. 48-50.

[275] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 130v.

Pero ahí no se acabarían las cosas, pues por las mismas fechas también había ciertos litigios por cuestiones limítrofes y de pasto del ganado entre el concejo conquense -cuyo dilatado alfoz llegaba hasta la frontera con Albarracín- y el concejo de de esta última ciudad, lo que haría necesario el establecimiento de una tregua el 20 de diciembre de 1373[276], a pesar de lo cual algunos años después surgirían de nuevo los problemas fronterizos. En efecto, el 19 de abril de 1399 Martín I de Aragón se vería obligado a intervenir para tratar de resolver los conflictos limítrofes existentes entre la ciudad y aldeas de Albarracín, por un lado, y Cuenca, Moya, Molina y otros lugares de Castilla, por otro lado. En la fecha arriba señalada el monarca aragonés mandaría a sus oficiales en Albarracín que mediasen en el conflicto para tratar de buscar una solución, fijándose bien los límites entre las partes en litigio[277], lo cual también suponía, a la vez que establecer con más precisión los límites entre diócesis fronterizas, determinar correctamente la frontera entre los reinos de Castilla y Aragón. A pesar de todo, no se conseguiría dar una solución definitiva al conflicto, y en ciertos momentos del siglo XV los problemas surgirían de nuevo.

También fueron razones de proximidad territorial las que, al menos en una ocasión durante el siglo XIV, motivaron un grave enfrentamiento entre la Iglesia de Cuenca y la de Cartagena, cuyos territorios diocesanos limitaban geográficamente. El conflicto, latente en 1322, no estuvo exento de violencia. Al parecer el obispo de Cartagena don Juan había expulsado por la fuerza a un clérigo que don Pascual, difunto obispo de Cuenca, había puesto hacía algún tiempo al cargo de la parroquia de La Roda, situada en el extremo sur de la diócesis conquense. La razón que el prelado de Cartagena alegaba para tratar de justificar tal acto era que dicha parroquia pertenecía a su diócesis, y no a la de Cuenca. Por este motivo el cabildo catedralicio conquense se sentiría muy agraviado y, el 5 de mayo del mencionado año de 1322, <<veyendo e entendiendo que de

---

[276]AMC, leg. 3, exp. 12 / Antonio Chacón, *Documentación del Archivo Municipal de Cuenca*, III, nº 18.

[277]Archivo de la Corona de Aragón, *Cancillería regia*, Reg. 2230, ff. 168r-169v.

derecho es tirar la fuerça do es fecha por otra fuerça>>, determinó restituir la parroquia de La Roda a la jurisdicción del obispado de Cuenca, proveyéndola a favor de un clérigo conquense. Alfonso Martínez, arcediano de Cuenca, Mateo Pérez y Sancho Pérez, canónigos y provisores de la diócesis conquense, serían los encargados de llevar a cabo tal restitución[278].

Con todo, la presencia ocasional de este tipo de conflictos territoriales y fronterizos entre diócesis no nos debe llevar ni mucho menos a pensar en la existencia de una situación de conflictividad permanente entre la Iglesia conquense y los obispados vecinos de Albarracín y Cartagena, dado que es el elemento contencionso el que casi siempre ha quedado recogido por la documentación, mientras que no resultaba necesario recoger por escrito la existencia de unas frecuentes relaciones pacíficas dentro de un marco de mutua convivencia.

III-RELACIONES EN EL SENO DE LA IGLESIA CONQUENSE

Esta última idea que acaba de señalarse también hay que tenerla muy presente a la hora de abordar el estudio de las relaciones de poder que se daban entre las diversas jerarquías eclesiásticas del propio obispado conquense. Así, también en este caso la documentación sobre la materia recoge muy frecuentemente y con insistencia las situaciones conflictivas que a menudo se producían en el desarrollo de dichas relaciones. Esta conflictividad existió, como pronto se verá, pero ello no nos debe llevar a calificar genéricamente como conflictivas estas relaciones para todo el conjunto del periodo bajomedieval, pues junto a momentos de desarrollo más o menos intenso de dichos conflictos, que a veces fueron muy graves, también hubo otros de pacífica convivencia que por lo general no han quedado recogidos en la documentación con tanta insistencia, puesto que ello no resultaba necesario. Por este motivo, aunque a continuación se aluda a todas estas situaciones de conflictividad que recogen los

[278] ACC, siglo XIV, nº 281.

documentos, a la vez hay que tener muy presentes los límites y matices de dichas situaciones, que frecuentemente alternaban con momentos de convivencia y cooperación.

1-Conflictos entre el obispo y el cabildo catedralicio

El obispo y el cabildo catedralicio de Cuenca representaban claramente las dos élites de máximo poder eclesiástico existentes en el conjunto del territorio diocesano conquense, y el protagonismo ejercido por ambos en el culto catedralicio y gobierno del obispado motivaría desde un primer momento el establecimiento entre ellos de unas estrechas relaciones en muy diversos órdenes de la realidad eclesiástica. A pesar de que muchas veces estas relaciones fueron pacíficas y de mutua ayuda, tampoco faltarían los momentos en que se originaron conflictos de diversa entidad, más o menos intensos y prolongados en el tiempo en función de cada prelado en particular, y debidos casi siempre a un choque de intereses económicos y jurisdiccionales entre obispo y cabildo. Veamos a continuación cuáles fueron las principales situaciones de conflictividad sobre las que tenemos constancia para la época medieval.

Entre 1217 y 1221, según se señaló páginas atrás, tendrá lugar un grave enfrentamiento entre el obispo don García Ruiz y algunos miembros del cabildo catedralicio conquense, que le atribuían una gran diversidad de faltas e inmoralidades de distinto orden, aunque fue un asunto que tuvo implicaciones que iban mucho más allá de la simple moralidad del prelado conquense, pues detrás de todo ello es probable que estuviese el propio arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada[279]. El 15 de diciembre de 1217 Honorio III mandaba al abad de Óvila y al arcediano y al tesorero de Osma que se informaran sobre las

[279]Desde 1215 el arzobispo toledano estaba tratando de conseguir la desmembración del obispado conquense, reclamando para sí toda la parte occidental del mismo. Por ello le interesaba presentar ante el pontífice una mala imagen del obispo don García, que se negaba a la desmembración de su obispado, para de este modo intentar lograr que el pontífice se inclinase del lado toledano. Pero fracasaría en su intento al darse en 1220 una resolución contraria a sus intereses por el tribunal eclesiástico formado al efecto y presidido por el obispo de Burgos. José Manuel Nieto Soria, <<La fundación. .>>, p. 126.

acusaciones de que era objeto el obispo de Cuenca. Al parecer el iniciador de estas acusaciones fue un miembro del propio cabildo catedralicio conquense, el canónigo y arcipreste de Huete don Julián, quien atribuía al obispo don García gravísimas faltas[280].

Al año siguiente, el 22 de junio de 1218, el papa se dirigió de nuevo al abad de Óvila y a los dos eclesiásticos de Osma mencionados para que le enviasen cartas con la información que hubieran recabado sobre el asunto, recomendando además que los documentos le fuesen remitidos a él directamente para evitar así algún intento de falsificación. El conflicto aún se prolongaría durante dos años más hasta que, finalmente, en varios documentos pontificios emitidos entre 1221 y 1222, se reconozca definitivamente la inocencia del obispo conquense respecto a las acusaciones sobre él vertidas, cerrándose así definitivamente el pleito[281].

Por otro lado, también en 1221 tuvo lugar un litigio de este mismo prelado con el clero diocesano conquense, que se negaba a pagarle las procuraciones de visita, lo cual haría igualmente necesaria una intervención de Honorio III en favor del obispo conquense[282].

Habrá que esperar al año 1255 para tener de nuevo noticias sobre otro conflicto de relieve, aunque en esta ocasión la parte contraria al cabildo catedralicio no sería el propio obispo conquense, sino los herederos del anterior prelado. Efectivamente, en dicho año estaba pendiente un pleito entre el cabildo catedralicio de Cuenca y el obispo don Mateo, por una parte, y los herederos del anterior obispo conquense, don Gonzalo Ibáñez, relativo a la posesión de diversos castillos -Azpe el Nuevo, Azpe el Viejo, Nompor y Novella-, varias aldeas, aceñas y molinos en

---

[280] Una gran variedad de faltas eran las que se atribuían al obispo don García: <<Denuntiando itaque predictus archipresbiter coram nobis et fratribus nostris exposuit quod prefatus episcopus simonie lepra repersus vitio dilapidationis effusus, incontinenti libidine inquinatus ac aliis facinoribus multipliciter irretitus, pactum cum morte fecisse videtur eamque manibus et pedibus accersisse>>. José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, p. 49.

[281] José Manuel Nieto Soria, <<El intervencionismo pontificio...>>, pp. 49-51.

[282] AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 33v-38r.

término de Talavera, así como sobre otros bienes muebles e inmuebles. Por este motivo, el 3 de septiembre de dicho año de 1255, el cabildo conquense nombraría como su procurador en dicho pleito al arcediano de Huete don Guillén[283]. Desconocemos cómo se resolvió finalmente el litigio, cuyas causas, como se ve, eran fundamentalmente de tipo económico.

Lo mismo puede decirse respecto a una apelación ante el arzobispo de Toledo, don Gonzalo Díaz Palomeque, que el 8 de noviembre de 1308 presentó el cabildo catedralicio de Cuenca contra el obispo don Pascual, que al parecer pretendía entrometerse en ciertos asuntos del gobierno y distribución de las rentas de la mesa capitular conquense que no eran de su competencia[284]. Tres años más tarde, el 10 de junio de 1311, y quizá con el ánimo de apaciguar las quejas del cabildo en su deseo de una mayor independencia con respecto al poder episcopal, don Pascual mandaría a su provisor que no molestase al deán de Cuenca en su jurisdicción. Así, por tanto, vemos cómo estaba latente la necesidad de llevar a cabo una correcta delimitación de las respectivas competencias económicas y jurisdiccionales del obispo y cabildo catedralicio, poniéndose de manifiesto cómo a veces se producía la incursión de alguna de las partes en el terreno privativo de la otra.

Una prelado que también mantendría serios enfrentamientos con el cabildo catedralicio fue don Bernal Zafón (1362-1372). Esto lo sabemos gracias a un extenso documento carente de fecha en el que se contiene una larga relación de quejas presentadas por el cabildo contra el obispo don Bernal tras la celebración por éste del sínodo diocesano. Las quejas son sobre todo referentes a asuntos económicos, fundamentalmente decimales, pudiendo destacarse las siguientes:

-Protestas por la mala administración de ciertos maravedís de la obra catedralicia.

---

[283] ACC, caj. 6, nº 96.

[284] ACC, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 682.

-Hacía poco que el obispo había otorgado al cabildo los diezmos pertenecientes a los canónigos que estudiaban en la Universidad, y a cambio el cabildo le había hecho entrega de una sepultura. Pero dichos canónigos estudiantes se sentían agraviados por ello, debido a lo cual el cabildo solicitaría al obispo que les hiciese merced de algunos préstamos u otra cosa con que enmendar el daño recibido.

-El cabildo también acusa al obispo de pretender obtener una mayor parte de la renta que le correspondía en los diezmos de Uclés y su tierra.

-El cabildo comunica al obispo que en adelante será preferible que se lleven a cabo en Cuenca las almonedas para el arrendamiento de los diezmos de Alarcón y su tierra, con el fin de evitar así los agravios que cometían los caballeros y hombres poderosos de Alarcón, quienes mediante la fuerza y amenazas lograban arrendar los diezmos a muy bajo precio, con el consiguiente perjuicio para las rentas capitulares y episcopales.

-Se acusa al obispo de privar a las prestameras de la parte que les corresponde en los diezmos de coronados.

-Se exponen quejas contra la intromisión del obispo en la provisión de algunos beneficios servideros y curados de ciertas iglesias.

-Se acusa al obispo de agraviar a los arcedianos en su jurisdicción, así como de tomarles ciertas rentas que solían llevar.

-También se le acusa de entrometerse desde hacía dos años a poner terceros en Utiel y Requena, así como de llevar a cabo la partición de los diezmos en dichos lugares cobrando por ello, cuando al parecer con anterioridad era al arcediano de Moya a quien le correspondía realizar dicha misión recibiendo a cambio como salario cierta porción del diezmo.

-Finalmente, el cabildo señala que antiguamente los diezmos capitulares y episcopales se solían recaudar mediante terceros, hasta que el obispo don Bernal ordenó que se procediese a su

arrendamiento, de lo que se seguían grandes perjuicios para el cabildo y clerecía diocesana[285].

Como puede verse, los abusos del obispo en materia decimal eran el objeto principal de las quejas del cabildo catedralicio, junto con algunos excesos episcopales en la provisión de ciertos beneficios y en el ejercicio de su jurisdicción.

Situándonos ya en el siglo XV, debe ponerse de relieve la importante proliferación de enfrentamientos obispo-cabildo que se produjo especialmente durante la segunda mitad de esta centuria. A veces los conflictos se produjeron entre el obispo y algún miembro en concreto del capítulo catedralicio. Así sucedió, por ejemplo, con el canónigo conquense Alfonso García de San Felices. Este personaje, ya como consejero y capellán real, expondría en 1477 a los Reyes Católicos que, siendo *provisor de la diócesis de Cuenca con el obispo Lope de Barrientos*, <<por causa de los movymientos pasados, en esa çibdad acaesçidos, e porque algunas personas que le non querian byen lo bolvyeron contra don Lope de Barrientos, obispo que era de esa dicha çibdad, que el dicho obispo, contra toda rason, lo prendio e echo de la dicha çibdad, e que despues aca a estado e esta fuera della...>>. Por este motivo Alfonso García de San Felices rogó a los monarcas que, dado que tenía su casa en Cuenca y era canónigo y beneficiado de la catedral, le diesen licencia para poder volver a esta ciudad y servir en su iglesia. En atención a esta petición y a algunos servicios que Alfonso García les había hecho, hacia agosto o septiembre de 1477 los Reyes Católicos mandarían al guarda mayor de Cuenca, Juan Hurtado de Mendoza, y al concejo conquense que otorgaran a Alfonso García consentimiento para poder entrar de nuevo en la ciudad y residir pacíficamente en ella[286].

El conflicto recién aludido debe situarse en el contexto de los alzamientos nobiliarios contra Enrique IV de los años 1464-1465, durante los cuales el obispo Barrientos, que incluso

---

[285] ACC, siglo XIV, nº 262.

[286] AGS, *Registro General del Sello*, VIII ó IX-1477, f. 432.

llegaría a ser hecho prisionero por el marqués de Villena, actuó como firme defensor de la causa de Enrique IV frente a las pretensiones de la nobleza rebelde, e igual puede decirse respecto al provisor Alfonso García de San Felices. En cuanto a la razón concreta por la que éste fue expulsado de la ciudad por el obispo, desconocemos a qué pudo deberse, aunque lo que sí que parece claro es que en esta ocasión los motivos del litigio fueron básicamente de índole política.

Tras la muerte del obispo Barrientos, acaecida el 30 de mayo de 1469, se originaría un grave conflicto por razones económicas entre el cabildo catedralicio conquense y el nuevo prelado nombrado por el papa, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris. Para entender en su plena dimensión el litigio, sobre el que pronto se hablará, conviene recordar primeramente el modo como se produjo el nombramiento del nuevo obispo, a cuya designación se opondrían inicialmente tanto Enrique IV como el cabildo catedralicio y concejo de Cuenca.

El 30 de mayo de 1469 el concejo conquense se dirigió en una carta al rey y al maestre de Santiago para comunicarles la muerte del anciano obispo Barrientos, solicitando además del monarca que entregase la guarda de la ciudad al noble Juan Hurtado de Mendoza[287]. Al día siguiente el concejo escribiría de nuevo al rey para notificarle que habían hablado con el cabildo catedralicio y todos en común habían acordado que sería conveniente para la ciudad que Juan Hurtado de Mendoza fuese nombrado nuevo obispo, pues era un personaje muy fiel al monarca. Por ello el concejo solicitó al rey que suplicase al papa en favor de la provisión de dicho Juan Hurtado como obispo[288].

De este modo, poco tiempo después Enrique IV mandaría una carta al obispo electo de Tuy, su procurador en la Corte de Roma, para que suplicase en su nombre al papa en favor de la provisión del obispado de Cuenca para Juan Hurtado de Mendoza, a la sazón clérigo de órdenes menores. En la carta el monarca califica a éste como un hombre <<a mi muy fiable e acepto>>, lo que ofrece

---

[287] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 42v-43r.

[288] *Ibid.*, ff. 52v-53r.

una clara idea de la importancia que para el rey tenía que, en unos momentos de gran conflictividad política en todo el reino, las sedes episcopales fuesen ocupadas por personas favorables a su causa[289]. En esta ocasión la súplica regia no surtiría el efecto deseado, pues el 6 de octubre de 1469 Paulo II proveía la sede de Cuenca en favor del cardenal Antonio Jacobo de Veneris, hasta entonces obispo de León[290].

El motivo de esta provisión pontificia radicaba en el hecho de que meses atrás, el 2 de mayo de ese mismo año, poco antes de que tuviese lugar la muerte del obispo Barrientos, se había firmado un acuerdo entre el marqués de Villena, don Juan Pacheco, y el entonces obispo de León y legado pontificio, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris, para que éste obtuviese de la Santa Sede la mitra conquense, sin dejar de ser legado, y pasase la Iglesia de León al administrador de Tuy, recibiendo a cambio don Juan Pacheco, para él, el mando de las fortalezas de Cuenca a favor de personas de su confianza que le hicieran pleito homenaje, y para su hijo el arcedianato de Calahorra y otros beneficios[291]. Así, fue en función de este acuerdo por lo que el 6 de octubre Paulo II, conforme a los deseos del marqués de Villena y del cardenal, proveyó la Iglesia de Cuenca en favor de este último.

La protesta concejil no se hizo esperar, y el 4 de diciembre el concejo conquense escribió de nuevo al rey en defensa de Juan Hurtado de Mendoza, quien al parecer había sido finalmente elegido por el cabildo catedralicio conquense, y en contra de la provisión pontificia del cardenal Veneris, que era un extranjero. En esta carta el concejo expondría también al monarca que no debía permitir que el papa le arrebatase su derecho de presentación de los prelados <<aviendo estado e estando como esta vuestra altesa e los gloriosos reyes vuestros progenitores, de esclaresçida memoria, en posesion de nonbrar e presentar prelados en las eglesias de vuestros regnos, a cuya suplicaçion e presentaçion

---

[289] BN, Ms. 13072, ff. 253r-254r. Documento sin fecha.

[290] ASVat., *Reg. Lat.* 700, ff. 50r-52r; *Obl. et Solut.*, vol. 82, f. 27r, y vol. 83, f. 14v.

[291] Pilar León Tello, *Inventario del Archivo de los duques de Frías*, II, nº 326.

el santo padre sienpre los acostunbro ynstituyr e promover>>[292]. Poco después, el 19 de diciembre, Enrique IV respondería al concejo conquense manifestando que seguía estando de acuerdo en que Juan Hurtado fuese obispo de Cuenca, por lo que les mandaba que no se aceptase a ningún otro prelado que no fuese el dicho Juan Hurtado[293].

Mientras tanto, el 17 de diciembre del mismo año, Paulo II, enterado de que el cabildo catedralicio, en contra de las *disposiciones pontificias, había nombrado por su cuenta como* obispo a Juan Hurtado de Mendoza, manifestaría su determinante oposición a este nombramiento, conminando al cabildo y a los alcaides de las fortalezas del obispado a aceptar como prelado al cardenal Antonio Jacobo de Veneris, a quien se le deberían entregar todas las rentas de la mesa episcopal[294]. Además, en aquel momento la situación económica de la sede era complicada, pues los bienes de la mesa episcopal habían sido enajenados, por lo que el papa, en una nueva bula del 13 de enero de 1470, tendría que conminar a los retenedores a que los devolvieran, repitiendo de nuevo el mandato el 27 de enero, fecha en que parece que algunos ya comenzaban a reconocer al obispo nombrado por el papa, pues éste facultaba al nuncio para absolver a quienes así actuasen[295].

Desconocemos cómo se desarrollaron los acontecimientos en los meses siguientes, pero lo cierto es que finalmente Antonio Jacobo de Veneris fue aceptado como nuevo obispo, triunfando de este modo el candidato pontificio en contra de los deseos iniciales del monarca castellano, cabildo catedralicio y concejo conquense.

Todas estas circunstancias que giraron en torno a la elección del cardenal Veneris como nuevo prelado conquense deben ser tenidas muy en cuenta a la hora de comprender en su máxima

---

[292] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 138r-139r.

[293] *Ibid.*, ff. 142v-143r.

[294] ASVat., *Reg. Vat.* 533, ff. 209v-214r.

[295] Tarsicio de Azcona, *La elección y reforma...*, pp. 80-81.

dimensión el grave conflicto concerniente a las rentas de la mesa episcopal que inmediatamente se originaría entre el obispo Veneris y el cabildo catedralicio conquense. Su contenido ha quedado recogido en una copia, redactada en el verano de 1471, del dictamen pronunciado por una comisión del claustro de la Universidad de Salamanca, a petición del deán y cabildo de la catedral de Cuenca, sobre el hecho de que estos últimos habían vendido cierta cantidad de trigo procedente de las rentas de la mesa episcopal, a la muerte del obispo Barrientos, en situación de sede vacante y en un momento en que el hambre se enseñoreaba de la ciudad y de la diócesis, rentas que inmediatamente serían reclamadas por el obispo sucesor, Antonio Jacobo de Veneris. El conflicto en cuestión ha sido objeto de un detallado estudio, en forma de artículo, por parte de Santiago Aguadé, por lo que a continuación se expondrán las ideas esenciales del análisis realizado por dicho autor[296].

Si el cabildo catedralicio se decide a echar mano del cereal de las rentas de la mesa episcopal para ponerlo a la venta, en algún momento que tiene que hallarse entre junio de 1469 y enero de 1470, es con objeto de subvenir a las necesidades más elementales de una muchedumbre hambrienta, necesidades que en aquel momento afectaban tanto a los sectores más bajos de la sociedad como a los que disponían de mayores recursos. Esta situación, lógicamente, tenía uno de sus motivos en la guerra civil crónica que afectaba por entonces a la sociedad castellana, en general, y a la conquense, en particular. A ello venía a sumarse, además, la profunda crisis de la producción agrícola, que constituye un tema de constante referencia en la documentación conquense de estos años.

Angus MacKay ha demostrado la estrecha relación existente en la Castilla del siglo XV entre crisis de subsistencia de base cerealícola, epidemias, inflación, e inestabilidad de la sociedad urbana, teniendo dicha crisis uno de sus puntos culminantes en el periodo 1469-1473. En el caso concreto de Cuenca, la penuria

---

[296] Santiago Aguadé Nieto, <<Crisis de subsistencia, rentas eclesiásticas y caridad en la Castilla de la segunda mitad del siglo XV>>, *En la España Medieval*, II, *Estudios en memoria del profesor don Salvador de Moxó*, I, Madrid, 1982, pp. 21-48, en especial pp. 32-34.

experimentada por la población parece alcanzar su clímax en el verano de 1469, y ello sin duda fue el desencadenante que impulsó al cabildo catedralicio a poner a la venta el trigo correspondiente a las rentas de la mesa episcopal, para de este modo tratar de paliar la especulación, el acaparmiento y en general, las deficiencias y problemas de comercialización que contribuían a agravar la crisis.

Esta actuación del cabildo originaría de inmediato un enfrentamiento con el prelado sucesor en la mitra, Antonio Jacobo de Veneris, a cuyo nombramiento por el papa, según hemos visto, se habían opuesto inicialmente el propio cabildo catedralicio, el concejo conquense y el rey Enrique IV. El nuevo obispo reclamó para sí las rentas episcopales que habían sido enajenadas durante la vancante, motivando ello el inevitable conflicto con el cabildo.

Pero el proceder de éste con los bienes episcopales durante la crisis de 1469 tenía, tal como consta en el mismo dictamen de la comisión del claustro de la Universidad salmantina, unos claros fundamentos y precedentes en la conducta seguida por el prelado anterior, Fray Lope de Barrientos, en algunas ocasiones. Así, sabemos que en súplicas del 20 de octubre de 1438, del 18 de abril de 1447 y del 28 de febrero de 1461, Eugenio IV, Nicolás V y Pío II, respectivamente, le habían autorizado para disponer de sus bienes y hacienda, y aún de algunas rentas eclesiásticas, con destino a obrar benéficas y a la gratificación de sus familiares. Por otro lado, el 29 de diciembre de 1470, el concejo de Cuenca se dirigiría por escrito al obispo de Sigüenza y al colector de la Cámara Apostólica comunicándoles que Lope de Barrientos <<ovo tomado de las alcavalas desta dicha çibdad e su tierra, de los annos pasados de MCCCCLXVIII e LXIX annos, dosçientos e çinco mill maravedis, e de las terçias de los dichos dos annos fasta mill fanegas de pan, trigo e çevada>>. Por consiguiente, a lo largo de dicho bienio, durante el cual la crisis se agudiza en el área conquense, llegó a echar mano, incluso, de las rentas de la Corona en proporción francamente considerable, y si se decidió a hacerlo fue probablemente porque las de la diócesis se hallaban ya exhaustas. De este modo, la

conducta del obispo constituiría una excelente base para los enfrentamientos producidos con su sucesor en 1469 y 1470.

Junto a Antonio Jacobo de Veneris encontraremos desde un primer momento actuando como provisor a Gabriel Condulmario, quien, ya en el mismo año de 1469, obtuvo facultad de aquél para poder recibir los expolios del obispo difunto. Será Condulmario quien, hasta la muerte del cardenal Veneris en 1479, lleve la gestión de los asuntos financieros de la diócesis en beneficio de su patrono y en el suyo propio, obteniendo los nombramientos de protonotario apostólico y consejero real, y arrendando las rentas de la mesa episcopal, poco antes de enero de 1479, por la suma de 4000 ducados anuales.

Tras el nombramiento de Antonio Jacobo de Veneris como obispo de Cuenca, éste y Gabriel Condulmario reclamarían al cabildo catedralicio las rentas de la mesa episcopal correspondientes al periodo en que la sede había estado vacante, negándose a reconocer la validez de la venta de trigo efectuada poco después de morir el obispo Barrientos en mayo de 1469, y exigiéndole incluso el pago del correspondiente interés legítimo, hechos ambos que motivaron el que los miembros del cabildo conquense se dirigieran al claustro de la Universidad de Salamanca en solicitud de un dictamen sobre el particular.

Pero no pararon ahí las cosas. A través de una carta del concejo de Cuenca, fechada el 29 de diciembre de 1470, sabemos que Juan Hurtado de Mendoza y los restantes testamentarios del obispo Barrientos, ante las reclamaciones que el receptor mayor de las rentas reales, el judío David Cohen, planteaba a la apropiación por el prelado de las alcabalas y tercias correspondientes a los años 1468 y 1469, llegaron a un acuerdo con dicho receptor, en virtud del cual se comprometieron a saldar la deuda contraída con el fisco regio mediante la entrega de 30.000 mrs. y 374 fanegas de grano, cantidad que ellos pensaban obtener de las rentas eclesiásticas que, a su vez, los mayordomos del obispo les adeudaban.

Pero, inmediatamente, los colectores eclesiásticos se echaron sobre estas últimas cantidades, embargándolas, y el concejo se vio obligado a solicitar que se respetase el acuerdo

logrado por los testamentarios, ya que lo contrario supondría arrojar sobre la ciudad y su tierra una nueva carga demasiado pesada.

En realidad, no era sólo el prelado italiano quien andaba tras las rentas de su antecesor, pues también el propio Enrique IV las tenía muy en cuenta. Precisamente una de las razones por las que el cabildo hubo de proceder con cierta premura a vender el trigo de la mesa episcopal, que se hallaba almacenado en Mora, fue que el monarca había enviado ya a algunos hombres para apoderarse de él.

Así, pues, durante la situación de carestía extrema que se produjo durante estos años, habría que destacar en primer lugar la atención que, hacia el final de su pontificado, el propio obispo Barrientos mostró por contribuir a paliar las necesidades de una muchedumbre necesitada de alimento. Es probable que una buena parte de las rentas eclesiásticas y reales de las que se apoderó el prelado en 1468 y 1469 fuesen invertidas en la atención de la población más necesitada. De hecho en el propio dictamen de la Universidad de Salamanca se explica que era costumbre suya lanzar al mercado las rentas en grano de la mesa episcopal, con el objeto de ampliar la demanda, facilitando el abastecimiento de la población, evitando o paliando el alza de los precios y tratando de luchar contra los efectos de la especulación y el acaparamiento.

Teniendo en cuenta estos precedentes, la comisión creada por el claustro salmantino para elaborar el dictamen sobre el conflicto empleará dos tipos de argumentos, unos de carácter jurídico o, si se prefiere, jurídico-canónico, y otros teológicos, aunque ambos se entremezclarán hasta cierto punto. Con estos materiales se contruyó la argumentación de la comisión salmantina ante el conflicto, argumentación que será fuertemente favorable al cabildo catedralicio conquense casi desde el primer momento, sólidamente estructurada desde el punto de vista lógico y encaminada en un doble sentido. Por una parte, y utilizando argumentos jurídico-canónicos, a probar la plena licitud de la actuación del cabildo en el marco del derecho eclesiástico. Por otra, apoyándose en razones teológicas, a demostrar la obligato-

riedad moral de tal actuación, de acuerdo con los principios básicos del Cristianismo y, en concreto, con el deber de la caridad. Así, se llegará a la conclusión de que la venta realizada por el cabildo conquense fue lícita y se hizo conforme al *justo precio*, implícitamente contrapuesto al precio del mercado coyunturalmente elevado a causa de la especulación y el acaparamiento.

Tras este importante enfrentamiento entre el obispo Antonio Jacobo de Veneris y el cabildo catedralicio, el arcediano de Alarcón y provisor de la diócesis, Gabriel Condulmario, aún permanecería durante el resto del pontificado a cargo de la administración de las rentas de la mitra en nombre del prelado. Éste, poco antes de enero de 1479, le arrendaría los frutos de la mesa episcopal conquense al precio de 4000 ducados anuales. A pesar de ello, y quizá como reacción contra la prepotencia del provisor, el cabildo no dudaría en entrometerse en la administración de las rentas episcopales, poniendo mayordomos para su recaudación, lo que levantaría de inmediato las protestas de Condulmario, quien expuso sus quejas ante los Reyes Católicos. Finalmente éstos, el 15 de enero de dicho año de 1479, mandarían al cabildo conquense no entrometerse en las rentas de la mitra, permitiendo al provisor cobrar libremente la cantidad en que las tenía arrendadas[297].

Pero ahí no se quedarían los enfrentamientos entre Gabriel Condulmario y el cabildo catedralicio. El obispo Antonio Jacobo de Veneris había dejado en su testamento al cabildo conquense una manda de 2000 ducados para la celebración de misas y aniversarios, que debían ser entregados por Condulmario de los bienes del prelado, fallecido en agosto de 1479. Pero la dilación del protonotario a la hora de efectuar el pago de dicha cantidad motivaría que en 1486 el cabildo catedralicio expresara airadamente sus quejas por dicho retraso[298]. Durante este año se sucederían diversas negociaciones entre el cabildo y Condulmario

---

[297] AGS, *Registro General del Sello*, 15-I-1479, f. 6.

[298] ACC, AC-1486, ff. 50v-51r.

relativas al pago de los 2000 ducados[299], siendo incluso necesaria la mediación del obispo Fonseca en el conflicto[300]. En septiembre de 1491 parece ser que el protonotario todavía no había pagado la totalidad de la deuda[301]. Aún habrían de pasar algunos años para que ésta terminara de satisfacerse, de modo que el 6 de noviembre de 1500 el deán de Cuenca, don Francisco Hurtado de Mendoza, declaraba que él había visto <<pagar hartos de los ducados>>, refiriéndose a la manda testamentaria realizada por el obispo Veneris[302].

Retrocediendo ahora en el tiempo, y situándonos en el pontificado del obispo Fray Alonso de Burgos (1482-1485), hay que aludir también a ciertos choques que mantuvo este prelado con el cabildo catedralicio y clerecía de la diócesis, según se relata en unas declaraciones realizadas por el cabildo en el año 1500. Al parecer Fray Alonso de Burgos se había negado a donar a la Iglesia de Cuenca un pontifical con ornamentos que todos los prelados tenían obligación de entregar. Pero, además, también se le acusaba de haber exigido al clero del obispado la cantidad de 1.200.000 mrs. para el capelo, que aunque era de oro y piedras preciosas no costaba tanto, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los prelados anteriores había exigido por tal concepto más de 400.000 mrs. Otras quejas expuestas contra este obispo consistían en que había acrecentado sus derechos del sello, visitaciones y luctuosa, demandando también de la mesa capitular el pago de 200 castellanos de oro para el capelo, cosa que ningún obispo anterior había exigido a los canónigos. En cambio, no se había preocupado nada en invertir dinero para la reparación de las fortalezas de la Iglesia de Cuenca. Finalmente, el cabildo se quejaría de que este proceder de Fray Alonso de Burgos había servido como precedente a su sucesor al frente de la mitra, Fray Alonso de Fonseca, para escusarse él también de entregar un

---

[299]ACC, AC-1486, ff. 53 y ss.

[300]ACC, AC-1486, f. 68r.

[301]ACC, AC-1491, f. 104v.

[302]AGS, *Cámara de Castilla-pueblos*, leg. 7, nº 39.

pontifical. Por todos estos motivos el capítulo conquense inició un proceso ante el Consejo Real, solicitando el 12 de octubre de 1500 que, puesto que el ya fallecido obispo Alonso de Burgos nunca llegó a donar dicho pontifical, éste les fuese pagado con los bienes dejados por el obispo difunto[303].

También han llegado hasta nosotros algunas referencias indirectas en que se alude a ciertas demandas que el cabildo catedralicio había presentado contra el obispo Alonso de Fonseca y su provisor por motivo de algunos agravios que éstos habían cometido, aunque desconocemos cuál fue el contenido exacto de dichos agravios[304].

Pero será sobre todo durante el pontificado del cardenal de San Jorge y obispo de Cuenca don Rafael Riario (1493-1518) cuando lleguen a su clímax los enfrentamientos entre el cabildo y, en este caso, el provisor que gobernaba la diócesis en nombre del prelado absentista, puesto que éste siempre residió en Roma y ni siquiera se personó en Cuenca para tomar posesión de la mitra. Dicho provisor era el doctor don Pedro de Costa, quien con sus primeras actuaciones al frente del obispado se ganaría en seguida una radical oposición hacia él por parte no ya sólo del cabildo catedralicio, sino también del conjunto del clero diocesano conquense. Hay que tener en cuenta el rechazo que ya de por sí suscitaba un prelado extranjero que, además de ser completamente absentista, se preocupaba fundamentalmente de sacar el máximo partido económico a las rentas de la mitra cuya titularidad ostentaba, tarea de la que se encargaría su provisor. Además, se contaba ya con el precedente bastante cercano en el tiempo de otro obispo extranjero también absentista, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris, cuyas relaciones con el cabildo, según se ha visto, pasaron por momentos de seria conflictividad debido también a razones fundamentalmente económicas.

Al poco tiempo de permanecer el provisor don Pedro de Costa al frente de la diócesis, el cabildo catedralicio y clerecía conquense comenzarían a manifestar muy diversas quejas contra su

---

[303] AGS, *Cámara de Castilla-pueblos*, leg. 7, nº 39.

[304] ACC, s.a. caj. 7, leg. 38, nº 781.

proceder, que culminarían en una apelación a la metrópoli toledana. De este modo, el 21 de octubre de 1496, el bachiller Alfonso Páez, como vicario general en el arzobispado de Toledo y en la Audiencia arzobispal de Alcalá, se dirigiría a la justicia civil de la diócesis conquense para comunicar que ante él había un grave pleito pendiente desde hacía tres años entre el cabildo catedralicio y toda la clerecía diocesana de Cuenca, como demandantes, por una parte, y el provisor don Pedro de Costa, por otra, debido a una gran diversidad de acusaciones que aquéllos presentaban contra este último. En el comunicado Alfonso Páez manda a la justicia laica conquense que, entretanto dure el pleito, no se entrometa en ningún capítulo del mismo, hasta que todo sea juzgado por la justicia eclesiástica, tratándose de preservar de este modo la jurisdicción eclesiástica frente a posibles incursiones del poder civil. La relación de quejas e imputaciones contra don Pedro de Costa que se señalan en el documento es enormemente amplia, pudiendo destacarse las siguientes:

-Se acusa al provisor de agraviar a los beneficiados del obispado exigiéndoles injustamente una décima parte de los frutos beneficiales y de las prestameras, de lo que se seguía gran perjuicio para las fábricas parroquiales, tercias reales y rentas de la mesa capitular.

-Según las constituciones conquenses, la *luctuosa* sólo debía cobrarse cuando fallecía un clérigo que era público concubinario, y sin embargo don Pedro de Costa exigía 600 mrs. de luctuosa a todos los clérigos beneficiados de Cuenca y su obispado sin excepción, aunque fuesen de vida honesta y dispusieran de escasos recursos económicos.

-Se acusa al provisor de no cumplir nunca el deber de predicación, que debía llevar a cabo en nombre del obispo, ni nombrar predicadores para instruir al pueblo.

-También se le acusa de no visitar las parroquias de la diócesis ni pagar un salario a otras personas idóneas para realizar en su lugar tal misión.

-Se le imputa el haber encarcelado a varios clérigos beneficiados sin consultarlo previamente con el cabildo, tal como se venía haciendo <<de inmemorial costumbre>>.

-Se le acusa de arrebatar algunos bienes pertenecientes a la fábrica catedralicia, así como de entrometerse en algunos asuntos de la fábrica sin consentimiento del cabildo.

-Se le acusa de obligar a algunas parroquias extremadamente pobres a contribuir plenamente con lo que les correspondía en los subsidios papales y episcopales, lo que motivaba que a veces dichas parroquias se viesen obligadas a vender sus cálices, ornamentos y campanas para de este modo hacer frente a la carga.

-Se le imputa no celebrar sínodo diocesano para conocer mejor el estado de la diócesis.

-Se le acusa de no respetar una constitución según la cual los beneficiados no debían pagar costas en los pleitos hasta ser sentenciados.

-Se le acusa de arrebatar injustamente los diezmos y beneficios de algunas iglesias.

-Se le acusa de no visitar los bienes de la mesa episcopal, así como de no hacer las reparaciones necesarias en las fortalezas de la Iglesia de Cuenca.

-Finalmente, se señala que recientemente la clerecía del obispado había entregado al provisor la cantidad de 1.240.000 mrs. a cambio de que cesaran los agravios. Pero don Pedro de Costa, tras recibir el dinero, había continuado con dichos agravios, por lo que ahora se le exigía la devolución del importe entregado[305].

Como puede verse, las acusaciones vertidas sobre don Pedro de Costa eran de lo más amplias, afectando a una gran diversidad de aspectos de la normativa y organización diocesana. Algunos días antes, el 17 de octubre de dicho año de 1496, el vicario general del arzobispado de Toledo había mandado comparecer ante él a Francisco Sáiz, que actuaba en el pleito como procurador del provisor de Cuenca. Pero el mencionado Francisco Sáiz se quejó

[305] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 766 bis.

ante el vicario de Toledo diciendo que apelaría a la Santa Sede porque todos los cardenales, y sus familiares y provisores, tenían el privilegio de no poder ser juzgados por un juez inferior al papa. Además, respondió a cada una de las acusaciones del cabildo saliendo en defensa del provisor don Pedro de Costa y diciendo que las actuaciones de éste se justificaban por <<costumbre inmemorial>>. A su vez, el procurador del cabildo catedralicio y clerecía conquense escribiría varias cartas al vicario de Toledo, Alfonso Páez, señalando todo lo contrario. Consecuencia de todo ello fue una primera sentencia dada por este último el 2 de diciembre de 1496, mediante la cual se mandaría comparecer de nuevo a ambas partes presentando las pruebas oportunas.

No obstante, diversas circunstancias harían que el pleito se prolongase durante largos años, hasta el punto de que en 1522 aún no se había resuelto ni se había dictado sentencia definitiva. En este último año Luis de Cuenca, como procurador del cabildo catedralicio y clerecía conquense, apeló al licenciado Diego de Avellaneda, vicario general del arzobispado de Toledo en la Audiencia de Alcalá, señalando que el nuevo obispo de Cuenca, don Diego Ramírez de Villaescusa, y sus oficiales seguían cometiendo muchos agravios, al igual que años atrás hiciera don Pedro de Costa[306]. Las acusaciones que el cabildo y clerecía de Cuenca vertían sobre el obispo don Diego Ramírez eran en concreto las siguientes:

-El obispo pretendía juzgar él sólo a los beneficiados de la catedral que cometiesen algún delito, cuando desde <<tiempo inmemorial>> en dichos casos habían venido actuando conjuntamente el cabildo catedralicio y el obispo o su vicario.

-Los beneficiados del cabildo que poseían otros beneficios en la diócesis de Cuenca, dado que tenían obligación de residir en la catedral, desde siempre habían puesto capellanes en sus otros beneficios para servirlos y administrar los sacramentos a los fieles. Pero ahora el obispo don Diego pretendía expulsar a

[306]ACC, s.a. caj. 7, leg. 38, nº 781.

los capellanes que ellos habían puesto, nombrando él personalmente a otros en sustitución de los anteriores. A su vez, el cabildo expone su deseo de que, cuando los visitadores del obispo visiten las iglesias cada dos años, cada capellán sea examinado y obligado a aprender, de forma que cuando el capellán sea hábil se le otorgue cédula para servir definitivamente el beneficio, sin necesidad de que tenga que acudir cada año a Cuenca antes de Navidad para sacar la licencia.

-El cabildo solicita que el obispo mande moderar los derechos de visitación exigidos por los visitadores y sus notarios, acusando a estos últimos de que <<destruyen las iglesias, que no tienen tanto de renta en todo el año como ellos llevan en un día>>.

-El cabildo acusa al obispo de que recientemente había mandado a los clérigos de Huete pagar la cuarta parte que correspondía a la mesa episcopal en el reparto de los subsidios, a lo cual dichos clérigos se habían negado, siendo excomulgados por el obispo y mandándoseles prender.

-El cabildo acusa igualmente al obispo de entrometerse a proveer algunas capellanías del coro de la catedral, siendo sólo el cabildo quien, <<por costumbre antiquíssima>>, tenía derecho a proveer dichas capellanías en favor de sus criados y familiares.

-Finalmente, el cabildo señala que nunca había tenido obligación de dar posada a los criados del obispo, mientras que ahora este último pretendía que le aposentasen a toda su familia[307].

Aunque no eran tan abundantes como las imputaciones que se achacaban a don Pedro de Costa, no por ello las acusaciones contra el obispo don Diego Ramírez dejaban de revestir un importante relieve, poniéndose de este modo de manifiesto los excesos cometidos por el prelado en el ejercicio de sus privilegios y jurisdicción.

---

[307] BN, Ms. 13035, ff. 122-123.

En definitiva, todos estos enfrentamientos entre los obispos conquenses y el cabildo catedralicio, más o menos graves y prolongados en el tiempo según cada caso, deben ser interpretados como el resultado de la frecuente contraposición de intereses que a menudo se producía entre las dos élites de máximo poder eclesiástico del obispado de Cuenca, élites de poder que, aunque en muchísimos aspectos se compenetraban y complementaban mutuamente, no por ello cesaban en la pretensión de defender y ampliar sus respectivas competencias y derechos dentro del marco de las relaciones de poder que se daban en el seno de la propia Iglesia.

2-Conflictos entre canónigos y el cabildo catedralicio

Una de las cuestiones que no tardaría en motivar que se produjesen enfrentamientos entre algunos canónigos y el cabildo catedralicio es la que venía dada por la obligatoriedad de residencia en la catedral que en teoría afectaba a todos los canónigos, aunque esta norma pronto se vería limitada por numerosas excepciones que solían contar con un claro respaldo legal. Una de ellas era el caso de los beneficiados que acudiesen a estudiar a las universidades, situación que ya se contempla en los estatutos de San Julián de 1201. Ya para épocas posteriores, contamos con numerosos ejemplos de dispensas pontificias otorgadas a favor de estudiantes que poseían prebendas en la catedral conquense[308], y además, durante el siglo XV, serán frecuentes las licencias concedidas por el cabildo catedralicio a algunos de sus miembros para realizar estudios universitarios.

La corriente migratoria del clero conquense, sobre todo del catedralicio, hacia las aulas de las universidades peninsulares y extranjeras ya se había iniciado en pleno siglo XIII, y se

---

[308] Así, por citar algún ejemplo, el 27 de julio de 1327 Juan XXII concede una dispensa pontificia a Juan de Luna, canónigo conquense, para que pueda percibir los frutos de todos sus beneficios por un trienio, tiempo durante el cual cursará disciplinas escolásticas en un Estudio General. G. Mollat, *Jean XXII*, VI, nº 29359. Y el 9 de septiembre de 1330 se otorga de nuevo a Juan de Luna, canónigo conquense, facultad para recibir los frutos de sus beneficios por otro trienio, estando ausente en el Estudio General de París u otro Estudio General. *Ibid.*, IX, nº 50831.

intensificó a partir los decenios centrales del XIV, alcanzando a fines de esta segunda centuria una notable intensidad. Así, durante el transcurso de la Baja Edad Media se detecta la presencia, mayor o menor, según los casos, de miembros del cabildo catedralicio en universidades como Bolonia, Aviñón, Roma, Cahors, Toulouse y Salamanca. Pero dentro de este conjunto de universidades destaca con fuerza el papel de dos de ellas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo: la de Bolonia y la de Salamanca. Seguiría en importancia la de Aviñón, si bien para un periodo mucho más concreto (1309-1377). En cuanto al tipo de estudios realizados, fueron fundamentalmente jurídicos, sobre todo de Derecho Canónico, y en mucha menor medida teológicos, mientras que sólo muy esporádicamente hubo algunos estudiantes de Medicina, Artes y Derecho Civil. Por lo demás, esta clara orientación del clero secular hacia los estudios de Derecho Canónico no es un fenómeno exclusivo del caso conquense, sino que también se percibe en Castilla en general[309].

Pero, dentro de este contexto, hubo casos de clara resistencia por parte del cabildo contra el éxodo masivo de sus miembros hacia las universidades. Así, un primer enfrentamiento se produce, ya en 1335, entre Velasco Alonso, arcediano de Cuenca, a quien Juan XXII había facultado en 1331 para percibir los frutos de su prebenda durante el tiempo que estuviese ausente cursando estudios en la Sede Apostólica, y que a la sazón se hallaba en Roma estudiando Teología, y el cabildo catedralicio que, a pesar de la disposición pontificia, se negaba a pagarle las rentas correspondientes a su beneficio. Finalmente el cabildo, teniendo en cuenta los servicios que el mencionado arcediano le prestaba y le podría prestar en el futuro en la Curia romana, consintió en darle cierta cantidad en metálico contra la entrega del documento de dispensa pontificia y de un

---

[309] Todos estos aspectos sobre la formación cultural del clero conquense, sobre todo del catedralicio, a fines de la Edad Media son analizados con detalle por Santiago Aguadé Nieto y Mª Dolores Cabañas Gonzalez: <<La formación intelectual del clero conquense a fines de la Edad Media>>, *Actas del simposio sobre el horizonte histórico-cultural del Viejo Mundo en vísperas del Descubrimiento de América* (Cuenca, 21-24 de mayo de 1979), Madrid, 1981, pp. 1-61.

justificante extendido por el lector de Teología del Estudio romano, el dominico Fray Armando de Belvis[310].

Otro choque de intereses es el que enfrentó en 1344 al cabildo con García Jiménez, canónigo conquense que se encontraba estudiando en la Universidad de Cahors y que invocaba las concesiones pontificias. El cabildo se negaba a pagarle su ración y derechos de vestuario, aunque finalmente acabaría cediendo y entregando al litigante la suma de 1400 maravedís, concediéndole además una licencia de tres años por estudios y reconociéndole su derecho a percibir durante el mismo plazo de tiempo los frutos correspondientes a su canonjía y prebenda, salvo las pitanzas[311]. La norma que generalmente alegaba el cabildo en los pleitos para negarse al pago de rentas a los beneficiados ausentes era la obligatoriedad de realizar una primera residencia anual íntegra en Cuenca. Ahora bien, esta disposición casi nunca era tenida en cuenta por las concesiones pontificias, y es entonces cuando surgía el pleito.

A fines del siglo XIV y principios del XV el éxodo del clero beneficiado catedralicio hacia los Estudios Generales de dentro y fuera de la Península debió alcanzar proporciones tan amplias que finalmente acabaría afectando a la buena marcha de la institución capitular, situación a la que trataría de poner límite el obispo don Diego de Anaya a través de una constitución promulgada en 1412. Aunque la parte dispositiva del documento resulta actualmente ininteligible debido a la humedad, los otros fragmentos que sí son legibles permiten atisbar una realidad que afectaba en ese momento a la Iglesia de Cuenca: falta de ministros para el culto divino y muchos miembros del cabildo ausentes pretextando ser familiares de algún cardenal de la Iglesia romana o bien habérseles concedido algún privilegio para estudiar en Salamanca o en otro lugar, lo cual frecuentemente se prestaba a la comisión de verdaderos fraudes, puesto que, en

---

[310] Santiago Aguadé Nieto y Mª Dolores Cabañas González, «La formación intelectual del clero conquense...», p. 29.

[311] *Ibid.*, p. 30.

realidad, muchas veces los periodos de ausencia se utilizaban para gestionar los negocios particulares del interesado[312].

No obstante, a pesar de todas estas quejas del obispo y cabildo catedralicio, con posterioridad aún seguirán produciéndose algunos conflictos motivados por la cuestión de la residencia, y prueba de ello es, por ejemplo, la sentencia que el 18 de abril de 1425 se dio en Roma en contra del cabildo catedralicio y a favor del canónigo conquense Diego Martínez, para que éste pudiese ganar los frutos de su prebenda estando ausente[313]. Y, ya a fines del siglo XV y comienzos de la centuria siguiente, sabemos que algunos familiares del cardenal de San Jorge y obispo de Cuenca, don Rafael Riario, residían casi siempre en Roma y a la vez poseían canonjías e incluso dignidades en el cabildo conquense, percibiendo por ello cierta parte de la renta de dichos beneficios a pesar de las quejas del cabildo, que se negaba a entregarles todos los frutos de sus prebendas. Tal fue el caso, por ejemplo, de Agustín de Spínola, que por esa época era canónigo de Cuenca y arcediano de Alarcón[314].

En definitiva, el cabildo catedralicio trataba de que se cumpliese toda una prolija normativa beneficial con la cual no se pretendía otra cosa sino evitar abusos en la percepción del beneficio por parte de los capitulares, que teóricamente debían cumplir con toda una serie de deberes previos a la obtención de las rentas beneficiales. Por ello el cabildo tuvo que legislar pronto muy minuciosamente sobre todos aquellos casos en que, a pesar de la ausencia, se podría cobrar el beneficio, intentando evitar de este modo las ausencias injustificadas que a veces se producían. En última instancia, ello viene a ser un claro exponente del empeño que debía poner la entidad capitular en la *salvaguarda de su patrimonio y rentas*.

Pero, junto a estos conflictos entre algunos canónigos y el cabildo catedralicio motivados por la cuestión de la residencia, en ocasiones también se produjeron otros por razones diferentes.

---

[312] *Ibid.*, pp. 30-31.

[313] ACC, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 693.

[314] BN, Ms. 13071, f. 71r.

Así, por ejemplo, el 13 de junio de 1312 Clemente V tendría que comisionar al prior de Uclés para que actuase como juez en un pleito que había entre el cabildo catedralicio conquense y Álvaro Sánchez, maestrescuela del mismo cabildo, relativo al pago de cierta cantidad de dinero, trigo y otras cosas[315]. Otro ejemplo es el que viene dado por la sentencia que el 25 de marzo de 1428 pronunciaron don Ruy Bernal, arcediano de Alarcón, y Antonio Gil, canónigo conquense, sobre el pleito que había entre el cabildo catedralicio y el maestrescuela Pedro Fernández de Montiel, motivado, entre otras cosas, por el hecho de que el cabildo se negaba a pagar al dicho maestrescuela los gastos que éste había tenido que realizar al actuar como colector en el obispado conquense de un subsidio que el papa había concedido al rey. La sentencia señala que el cabildo deberá entregar al maestrescuela 1300 mrs. como retribución de dichos gastos, cantidad que se descontará de los gastos que, a su vez, tenía que hacer el maestrescuela en la reparación de ciertas posesiones del cabildo[316].

Finalmente, no queda sino aludir a algunos enfrentamientos violentos que a veces se produjeron entre los propios beneficiados del cabildo catedralicio, siendo una buena prueba de ello las severísimas penas que el 9 de diciembre de 1495 impondría el cabildo al canónigo Gregorio Álvarez de Alcalá <<por las injurias que fizo oy dicho dia en cabildo, en presençia de los dichos sennores, al sennor Gil Munnoz, canonigo, e a Iohan Munnoz, su hermano, secretario de los dichos sennores e notario de la audiençia episcopal de Cuenca, poniendo manos violentas en ellos>>[317].

---

[315] AHN, OOMM-Uclés, carp. 98, nº 19.

[316] ACC, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 695.

[317] ACC, AC-1495, ff. 38v-41r.

3-Relaciones del obispo y cabildo catedralicio con el clero diocesano

A) *Derechos económicos del obispo sobre el clero diocesano y algunos conflictos en torno a su pago*

A.1) *El catedrático*

El más representativo de estos derechos era el llamado impuesto del *catedrático*. El pago anual y forzoso de este tributo lo hacían los clérigos en reconocimiento del señorío exclusivo del obispo sobre ellos, y hasta tal punto era importante dicho pago que el obispo podía condicionar su intervención en defensa de los privilegios conculcados a cualquier clérigo -si era necesario mediante la excomunión y el entredicho lanzados contra los representantes de las demás jurisdicciones- precisamente al pago de este tributo.

Esta imposición fiscal, cuyo valor aparte de económico venía a ser ante todo un símbolo del sometimiento del clero a la jurisdicción y señorío episcopal, ya se estableció en Cuenca desde muy poco después de la fundación de la diócesis, y a su pago anual estaban obligados todos los clérigos excepto las personas, canónigos, racioneros y compañeros del cabildo catedralicio. De gran importancia fueron en este sentido toda una serie de acuerdos que se establecieron el 7 de marzo de 1207, por mediación del obispo San Julián y con la aprobación de Alfonso VIII, entre el cabildo catedralicio de Cuenca y los clérigos parroquiales de la ciudad y sus aldeas, dado que entre estos acuerdos figura también uno relativo al modo como desde ese momento se habrá de realizar el pago del catedrático. A través de este importante acuerdo, en primer lugar se rebajaron a dos los tres mencales anuales que pagaban los clérigos de la ciudad y sus aldeas al arcediano de Cuenca en concepto de catedrático, estableciéndose que si una parroquia no pudiese pagar dicha tributación debería asociarse a otra para tal fin. Respecto a los mencales que debía pagar cada clérigo al obispo por el catedráti-

co, su número también se redujo de cinco que hasta entonces se pagaban a cuatro[318].

Algunos años más tarde, el 25 de abril de 1215, se realizaría un acuerdo de similares características entre el obispo de Cuenca don García y todos los clérigos de las aldeas de la Tierra de Huete, a través del cual éstos se comprometieron a entregar anualmente para el día de San Miguel por cada iglesia parroquial la cantidad de siete mencales <<pacifice e sine fraude>>[319], y el 23 de julio del mismo año don García realizaría un acuerdo muy parecido con los clérigos parroquiales de la propia villa de Huete, aunque en esta ocasión el número de mencales a entregar anualmente por cada iglesia para el día de San Miguel se vio reducido a cinco[320].

En adelante el pago del catedrático seguiría siendo siempre forzoso, y habrá que esperar al sínodo celebrado por Fray Lope de Barrientos en 1446 para encontrarnos de nuevo con una legislación sobre el tema. En esta asamblea se reiteró de nuevo la exención de que disfrutaban las personas, canónigos, racioneros y compañeros del cabildo catedralicio con respecto al pago del catedrático. Por esta época, además, las cantidades de mencales antes citadas ya habían sido sustituídas hacía tiempo por los dos reales que debía pagar cada clérigo beneficiado y de orden sacra, y el real único con que debía contribuir cada clérigo no beneficiado. Esta cantidad se mantuvo, y además se estableció que los clérigos no beneficiados ni de orden sacra menores de 18 años no pagasen nada, excepto si sus padres o parientes se lo quisieran pagar. Los arciprestes y vicarios rurales habrían de encargarse de recoger dichos catedráticos hasta ocho días antes de la Pascua de <<çinquesma>> en los lugares de su jurisdicción, apuntando lo recaudado en un libro que se presentaría anualmente al obispo, y pagando los maravedís

---

[318]ACC, caj. 2, nº 34 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 20r-21v. El mencal era una moneda de vellón usual durante el siglo XIII en Castilla, equivalente a 18 pepiones.

[319]AHN, Micr., rollo 14227.

[320]ACC, caj. 3, nº 41.

recaudados al mayordomo episcopal en Cuenca dentro del término de los ocho días siguientes a la Pascua de <<çinquesma>>[321].

Todas estas disposiciones sobre cantidad a pagar, personas exentas y forma de recaudación serán reiteradas por las constituciones sinodales de don Diego Ramírez de Villaescusa de 1531, en las que se insiste en que <<antiguo derecho es que al prelado en cada diocesis paguen el cathedratico, que es renta devida en sennal y reconoscimiento de la cathedra pontifical>>[322]. De este modo, durante las centurias del Antiguo Régimen aún se seguiría manteniendo esta forzosa tributación cuyos orígenes se remontaban al periodo fundacional de la diócesis, y que venía a ser un claro símbolo del reconocimiento de la autoridad episcopal por parte del clero diocesano.

A.2) *La luctuosa*

Otro tributo al que en un principio tuvieron derecho los obispos de Cuenca, pero cuyo pago pronto sería suprimido o sustituído por la entrega de una pequeña cantidad de dinero, fue el de la *luctuosa*. Esta tributación inicialmente consistió en la entrega a la mesa episcopal de una mula o rocín de montar y de un vaso, cifo o taza de plata de los bienes de cada canónigo o clérigo de la diócesis cuando tenía lugar la muerte de éstos. Respecto a su entrega por parte de los canónigos, el 18 de agosto de 1264 el obispo don Pedro Lorenzo realizaría un acuerdo sobre el particular con el cabildo catedralicio, en virtud del cual renunció a la mula y cifo de plata a que tenía derecho a la muerte de cada canónigo o racionero, a la vez que el cabildo renunciaba a la mula y copa de plata que tenía que recibir a la

[321] *Sínodo de 1446*, f. 37v. Respecto a la cantidad con que debían contribuir para el pago del catedrático los clérigos de otras diócesis podría citarse, por ejemplo, el caso de Toledo, en cuya diócesis hacia 1354 este tributo forzoso consistía en el pago anual al arzobispo de la cantidad de 6 maravedíes por parte de la clerecía diocesana. José Sánchez Herrero, *Los concilios provinciales y sínodos toledanos...*, p. 110.

[322] Diego Ramírez de Villaescusa, *Constituciones synodales del obispado de Cuenca*, ff. 33v-34r. Otras constituciones posteriores también seguirán insistiendo en la obligación de pagar el catedrático, tal como sucede en las *Constituciones synodales* de Fray Bernardo de Fresneda de 1566, f. 51v, o en las de don Andrés Pacheco de 1602, p. 204.

muerte de los obispos[323]. Pero además de esto, poco después, el 25 de noviembre del mismo año, don Pedro renunciaría de forma general, en su nombre y el de sus sucesores, al derecho de la luctuosa que sus antecesores venían cobrando de todos los clérigos de la diócesis, tachando esta costumbre de corruptela y calificándola de <<irracionabili consuetudine>>[324].

La siguiente legislación que encontramos sobre el tema tuvo lugar en el sínodo celebrado por el obispo don Bernal Zafón en 1364, en el cual se estableció que todos los arciprestes, vicarios y clérigos de la diócesis y ciudad de Cuenca que tuviesen beneficios entregasen en adelante a él y a sus sucesores la cantidad de 6 mrs. anuales como compensación del pago de la luctuosa, de la que quedaban exentos. Estos 6 mrs. se entregarían para la fiesta de San Andrés del mes de noviembre a los mayordomos y vicarios especialmente designados para esto por el obispo en cada arciprestazgo[325].

En el sínodo celebrado por don Juan Cabeza de Vaca en 1403 de nuevo se plantearía la cuestión, solicitando la clerecía al obispo que, tal como se venía haciendo desde antiguo, les librase del pago de la luctuosa o, en todo caso, si hubiesen de pagarla, les indicase cómo habría de efectuarse su pago que, respetando la <<constitución antigua>>, debía consistir en la entrega de una mula, cama o taza de plata, o en su defecto 500 mrs. y no más[326]. Al parecer fue esto último lo que se determinó, pues en el sínodo de 1409 el clero diocesano rogaría a don Diego de Anaya que excusase del pago de dichos 500 mrs. a todos aquellos clérigos que no fuesen concubinarios públicos, solicitando además al obispo que disminuyese la cantidad a pagar, dado que muchos clérigos no podían hacer frente a su pago en la suma en que estaba tasada. Tras escuchar todas estas consideraciones don

---

[323] ACC, caj. 7, nº 123.

[324] ACC, caj. 7, nº 126 / BN, Ms. 13071, ff. 169r-170r.

[325] BN, Ms. 13071, ff. 235r-236r.

[326] ACC, *Estatutos*, f. 54v.

Diego acabaría accediendo a lo que le habían propuesto[327]. Este es el último testimonio documental que se ha podido localizar referente a la luctuosa, por lo que nada más puede decirse respecto a la posible trayectoria seguida por su pago en épocas posteriores.

A.3) *Las procuraciones de visita*

El otro derecho económico importante de los obispos sobre el cual se hablará a continuación eran las procuraciones de visita. Teóricamente, según la legislación canónica, todos los obispos debían visitar cada cierto tiempo las iglesias no exentas de su diócesis, directamente o, como fue más frecuente, mediante un representante de su jurisdicción, tarea por la cual se cobraban unas procuraciones de visita que no solían ser bien vistas por el clero. Las iglesias de patronato real no podían ser visitadas por el obispo, sino que las visitaba el rey o un representante suyo. Las líneas directrices a seguir en las visitas episcopales quedarían marcadas en el canon 13 del I Concilio de Lyon de 1245[328].

Para la Edad Media no se ha conservado ningún testimonio sobre visitas parroquiales realizadas personalmente por los obispos de Cuenca, pero sabemos que éstos, aunque no muy frecuentemente, en ocasiones las llevaron a cabo. No obstante, lo más frecuente fue que las visitas parroquiales las realizaran los arcedianos o vicarios en los que el obispo delegaba su jurisdicción para tal tarea. Estas visitas tenían como fin esencial supervisar el estado material y espiritual de todas las iglesias de la diócesis, mandando corregir las irregularidades encontradas, y por su realización los vicarios y oficiales

---

[327] *Ibid.*, f. 67r.

[328] En este canon se aborda el problema fundamental de la conservación del patrimonio eclesiástico y de su correcta administración, cuya verificación se encomienda precisamente a las visitas de todas las iglesias a realizar. Se ordena hacer inventarios de bienes de iglesias, conventos y monasterios, que debían ser conservados cautelosamente. Importa ante todo el espíritu del canon, centrado en la defensa y administración de las propiedades y rentas eclesiásticas. Ch. Hefele y H. Lecrerq, *Histoire des Conciles d'après les documents originaux*, VI-1, París, 1914, pp. 649-651, tomado de Iluminado Sanz Sancho, *La Iglesia y el obispado de Córdoba...*, I, p. 400.

visitadores cobraban de las rentas parroquiales ciertos derechos de procuración, cuestión esta última que en ocasiones daría lugar a que se produjeran airadas quejas contra el obispo y sus oficiales por parte del clero de la ciudad y diócesis, que consideraba abusivas dichas procuraciones.

El primer ejemplo de ello lo tenemos en 1221, durante el pontificado del obispo don García, y viene dado por un enfrentamiento que dicho año se produjo entre el obispo y el clero de la ciudad de Cuenca y sus aldeas, y que entre otras cosas estuvo motivado por la negativa de estos últimos al pago de los derechos de visitación del obispo, lo cual finalmente haría necesaria una intervención de Roma, que dictaminó a favor del prelado conquense[329].

En ocasiones posteriores la precariedad económica del bajo clero inclinaría de nuevo a éste a tratar de eludir las visitas episcopales. Así, en el sínodo celebrado por don Juan Cabeza de Vaca en 1399, el clero diocesano solicitará al obispo que cesase por ese año la visita de las parroquias, dado que estaban en muy mal estado a causa de la pobreza de la clerecía:

"Por quanto la vuestra clereçia del vuestro obispado esta pobre por los pechos grandes ansy realengos como eclesiasticos, pedimos vos por merçed que sea la vuestra merçed que çese la visitaçion vuestra y de los arçedianos este anno, porque se puedan rreparar para quando la vuestra merçed quisiere visitar..."[330]

El obispo don Juan accedió, así como a una petición similar de la clerecía que se repitió en el sínodo celebrado en Cuenca en 1403, año en que también se suprimieron las visitas del obispo y arcediano[331]. No obstante, el documento anterior es muy revelador en cuanto que denota la realización efectiva de visitas por parte de este prelado a las iglesias diocesanas durante

---

[329] AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 33v-38r.

[330] ACC, *Estatutos*, f. 49r.

[331] *Ibid.*, f. 54r-v.

algunos años de su pontificado, exceptuando por supuesto aquellos en que la visita fue suprimida.

No ocurriría lo mismo, en cambio, con alguno de sus sucesores, como por ejemplo Fray Alonso de Burgos, el cual en el inicio de las constituciones sinodales de 1484 se lamenta de no poder visitar personalmente cada una de las parroquias de su diócesis <<ansy por nuestra indispusiçion corporal como por la grandeza y numerosidat de los arduos negoçios que el rrey e rreyna nuestros sennores para la governaçion de sus rreynos e sennorios continuamente nos cometen...>>[332].

Un testimonio ya de época posterior sobre el tema de las procuraciones viene dado por las constituciones sinodales de 1531 promulgadas por el obispo don Diego Ramírez de Villaescusa, en las que se establece que todas las iglesias, hospitales y ermitas del obispado sean visitadas por lo menos una vez cada dos años por el obispo o personas comisionadas para ello por éste, mandándose además que si la iglesia visitada fuese tan pobre que no pudiese pagar la procuración, que en este caso el visitador reciba sólo una pequeña cantidad de ella o incluso nada[333]. Es probable que esta disposición sea una consecuencia de las quejas que algún tiempo antes habían expuesto el cabildo catedralicio y *clerecía diocesana contra el obispo, denunciándose, entre otras* cosas, las excesivas procuraciones que a menudo exigían a las iglesias los visitadores[334].

A.4) *Servicios episcopales*

Ocasionalmente, los obispos de Cuenca también podían exigir de la clerecía diocesana el pago global de determinadas cantidades en forma de servicios con el objeto de costear ciertos gastos. Así, por ejemplo, el 31 de mayo de 1346, el obispo don García reconoció haber recibido de Gonzalo Martínez, arcediano de Alarcón, y de Lope Álvarez de Lesa, canónigo conquense, 49.700

---

[332] *Sínodo de 1484*, f. 1r.

[333] Diego Ramírez de Villaescusa, *Constituciones synodales...*, f. 4r.

[334] BN, Ms. 13035, ff. 122-123.

mrs. de los 60.000 que había pedido al clero del obispado como servicio para levantar el embargo del castillo episcopal de Huerta, que algún tiempo antes había sido entregado provisionalmente a don Juan, hijo del infante don Manuel[335].

Ya para una época más tardía, puede recordarse que en las acusaciones que a fines del siglo XV se presentaron contra don Pedro de Costa, provisor de la diócesis en nombre del obispo de Cuenca y cardenal de San Jorge don Rafael Riario, entre otras muchas cosas se señalaba que la clerecía del obispado había pagado recientemente a dicho provisor 1.240.000 mrs. como servicio a cambio de que cesaran los múltiples agravios a que estaba siendo sometido el estado eclesiástico, a pesar de lo cual parece ser que el provisor siguió cometiendo dichos agravios[336].

A.5) *Otros derechos*

Aparte de los derechos económicos sobre el clero ya mencionados, que eran los fundamentales, los obispos de Cuenca también gozaron de otros en forma de tasas sobre el clero por la ejecución de la justicia episcopal, o bien por la colación de beneficios, expedición de documentos, pequeñas multas, etc[337]. Pero el montante global de todas estas rentas debió de ser siempre bastante pequeño en relación a las rentas obtenidas por otras vías.

---

[335]De dichos 49.700 mrs., 47.070 se entregarían al dicho don Juan, 70 serían para la carta de pago de la chancillería de este último, y otros 1710 para Pedro Rodríguez de Quijada, por un mulo que se le había comprado. ACC, siglo XIV, nº 117.

[336]ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 766 bis.

[337]El 25 de febrero de 1350 el obispo don García concedería a todos los miembros del cabildo catedralicio exención del pago de derechos por la colación de beneficios así como por la expedición de documentos en la cancillería episcopal. ACC, siglo XIV, nº 284. En cambio el resto del clero de la diócesis seguiría obligado al pago de los mencionados derechos, lo cual viene a ser una clara muestra de la situación de privilegio ostentada por el cabildo catedralicio.

B) *Algunos conflictos entre el clero diocesano y el cabildo catedralicio*

En las relaciones mantenidas entre el cabildo catedralicio y la clerecía de Cuenca y su obispado en ocasiones, y ya desde fechas tempranas, también se producirían algunos conflictos de diversa entidad debido a razones fundamentalmente económicas y en menor medida jurisdiccionales. Así, por ejemplo, el 7 de marzo de 1207 el obispo San Julián tendría que intervenir como mediador en un conflicto entre los canónigos y el clero parroquial de Cuenca y su término. Este último se sentía agraviado en muchos aspectos por el cabildo catedralicio, lo que le llevaría a solicitar la mediación del prelado conquense. De este modo se llegaría a un acuerdo mediante el cual se limitaron sustancialmente las obligaciones del clero parroquial con respecto al cabildo de la catedral:

-En adelante los canónigos no podrían tomar raciones parroquiales haciendo uso de la violencia.

-No se podrá poner entredicho a las parroquias por razón de las deudas personales de los clérigos.

-El clérigo parroquial no será obligado a recoger el trigo o vino del diezmo perteneciente al obispo y cabildo.

-El clérigo acusado de crimen no podrá ser suspenso de su oficio y beneficio antes de probársele dicha acusación.

-En adelante los clérigos parroquiales no tendrán que entregar nada al cabildo de la renta que percibiesen en concepto de primicias y ofrendas de difuntos, ni tampoco tendrán obligación de ir a la catedral para bautizar.

-El clero podrá seguir agrupado en un cabildo, como hasta entonces.

-Se rebajan a dos los tres mencales anuales que pagaban los clérigos parroquiales al arcediano en concepto de catedrático.

-En adelante sólo será en dos festividades -Purificación y Asunción- cuando tengan que acudir los clérigos de la ciudad a la catedral para vigilias y vísperas[338].

Como puede verse, el clero conquense salió bastante beneficiado con estos acuerdos tras una etapa de cierta conflictividad en sus relaciones con el cabildo catedralicio durante el periodo inicial de andadura del obispado recién creado, pero, desde luego, el cabildo continuó manteniendo su posición de preeminencia en la jerarquía eclesiástica diocesana. Estos conflictos, en el fondo, deben ser interpretados en el marco de un proceso de delimitación de los diversos niveles de poder eclesiástico en la nueva diócesis, lo que provocaría inevitablemente el surgimiento de litigios entre las jerarquías eclesiásticas en su mutuo deseo de ampliar sus privilegios y competencias.

En ocasiones posteriores el cabildo catedralicio también tuvo que ceder en algún punto de sus relaciones económicas con el clero diocesano, para así favorecer a este último, lo cual sucedería sobre todo cuando el clero atravesaba momentos de dificultad. Por ejemplo, al haber sido impuesto al clero castellano en 1291 por Sancho IV un servicio extraordinario para el cerco de Algeciras, y correspondiendo pagar al obispado de Cuenca la cantidad de 25.000 mrs., el 28 de diciembre de ese mismo año el cabildo catedralicio expondría ante el obispo don Gonzalo Díaz que sólo por esta vez estaba dispuesto a contribuir al pago de dicho servicio con más de la cuarta parte, que era lo que en realidad le correspondía pagar, para de este modo hacer merced a la clerecía del obispado[339]. Dado que la norma a la hora de repartir el pago de los pechos reales era que el obispo y cabildo catedralicio pagasen la mitad, cada uno una cuarta parte, y la clerecía diocesana la otra mitad, puede inferirse que si el cabildo se comprometió a entregar algo más por esta vez, sin duda ello estuvo motivado por la difícil situación económica

---

[338] ACC, caj. 2, nº 34.

[339] ACC, caj. 12, nº 225.

que probablemente atravesaba el clero diocesano por aquellas fechas.

Pero lo cierto es que en materia económica el cabildo catedralicio siempre gozó de diversos privilegios especiales que no poseían los clérigos parroquiales de la diócesis. Así, por ejemplo, en 1402 el obispo don Juan Cabeza de Vaca mandó que el diezmo de las heredades y posesiones de las cofradías de laicos de la ciudad de Cuenca fuese a parar íntegro a la obra de la catedral, y no a las parroquias de Cuenca, mientras que en el resto del territorio diocesano el diezmo de las cofradías de laicos se entregaría a las parroquias de los lugares en que estuviesen situadas las posesiones de dichas cofradías[340].

Por otro lado, en el sínodo de 1409 don Diego de Anaya estableció que todos los clérigos que tuviesen prestameras en cualquier iglesia parroquial del obispado deberían contribuir al pago de los pechos reales, papales y episcopales, así como en las procuraciones de visita, junto con los otros clérigos servideros de las parroquias, pero los beneficiados del cabildo catedralicio que tuviesen prestameras quedarían exentos de esta obligación, contribuyendo en dichos pechos, por razón de sus prestameras, directamente con el común de la mesa capitular[341]. Parece probable que esto último beneficiase de algún modo a los canónigos cuando se realizaba el reparto de los pechos, y prueba de ello es que en 1427 había un pleito entre el cabildo catedralicio y el clero diocesano, motivado por la oposición de éste último al antedicho privilegio capitular que le perjudicaba. No obstante, el 5 de noviembre de 1427 el obispo don Álvaro de Isorna dictaría en la villa de Pareja una sentencia favorable al cabildo[342].

Otro conflicto en materia decimal que puede citarse es el que se planteó a fines del siglo XV por cuestión de los diezmos de lana, queso, ganado, dinero de collazos y soldadas correspondientes a los llamados *barraños*, que era el nombre que recibían

---

[340] ACC, *Estatutos*, f. 53r.

[341] ACC, *Estatutos*, f. 65v.

[342] ACC, s.a. caj. 8, leg. 34, nº 694.

las personas no naturales del obispado y que se habían casado fuera de éste. En el sínodo diocesano que celebró en Pareja el provisor don Pedro de Costa, el 13 de noviembre de 1493, se señalaría que desde hacía muchos años dichos diezmos habían pertenecido al abad de Santiago de la catedral, dado que éste y su lugarteniente eran los encargados de administrar los sacramentos a dichos barraños en la catedral. Pero parece ser que algunos clérigos pretendían usurpar dichos diezmos, lo que motivó que el provisor don Pedro de Costa, en el mencionado sínodo, prohibiese dicha usurpación[343].

Finalmente, hay que señalar que también el cabildo catedralicio, al igual que el obispo, en ocasiones exigió de la clerecía diocesana el pago de servicios eclesiásticos con algún fin determinado. Buena prueba de ello es el mandato capitular del 21 de septiembre de 1496 mediante el cual, a pesar de la oposición de algunos clérigos, el cabildo mandó que se repartiesen entre toda la clerecía del obispado 50.000 mrs. para defender la libertad eclesiástica y proseguir ciertos pleitos que había relativos a agravios recibidos por la Iglesia de Cuenca[344].

C) *Un caso particular: el cabildo de clérigos beneficiados de Huete*

Si bien sobre las relaciones concretas que el obispo y cabildo catedralicio conquense mantuvieron con el cabildo de clérigos beneficiados de Cuenca son escasísimos los datos que poseemos, no puede decirse lo mismo respecto a las relaciones con el cabildo de clérigos beneficiados de Huete, cuestión sobre la que ha llegado hasta nosotros un cierto volumen de información.

Huete era uno de los núcleos poblacionales de mayor importancia existentes en la diócesis conquense, y ello explica que muy pronto, ya desde principios del siglo XIII, nos encontremos con diversas intervenciones de los obispos de Cuenca encaminadas a regular sus relaciones con los clérigos optenses,

---

[343]Biblioteca del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, Ms. 340, ff. 69v-70r.

[344]ACC, AC-1496, ff. 68v-69r.

así como con otorgamientos y confirmaciones de privilegios diversos por parte del diocesano. Por otro lado, la existencia en Huete de un palacio perteneciente al obispo de Cuenca para alojarse durante las visitas, así como de una capilla de su propiedad, la de Santa Justa, situada cerca de dicho palacio, constituyen una prueba evidente de la importancia que el prelado otorgaba a la villa[345].

Respecto a las relaciones mantenidas con el cabildo catedralicio conquense, por un lado a veces éste aparece respaldando la actitud del prelado en sus intervenciones sobre los clérigos de la villa, a la vez que también nos encontramos con algunos canónigos realizando donaciones o trueques de bienes a favor del cabildo de beneficiados de Huete, del cual en ocasiones algunos de aquéllos formaban parte en calidad de *compañeros*[346].

Las dos primeras intervenciones conocidas del diocesano conquense sobre Huete tuvieron lugar en 1215, tratándose de los ya aludidos acuerdos del obispo don García con los clérigos de Huete y su Tierra sobre el pago del catedrático. El 25 de abril de dicho año don García llegaría a un acuerdo con los clérigos de las aldeas del término de Huete, según el cual éstos quedaban definitivamente exentos de pagar al prelado la tercera parte de las primicias, oblaciones, mortuorios y minucias de las parroquias que, según ellos, por costumbre antigua no solían pagar, comprometiéndose a cambio a entregar anualmente por cada

---

[345]Este palacio, aunque probablemente ya existiera desde mucho tiempo atrás, aparece por primera vez documentado el 20 de septiembre de 1307. En esta fecha nos encontramos con un documento por el que se aprueba la sentencia compromisal que don Alonso Martínez, arcediano de Cuenca, los arcedianos de Huete y Alarcón, el comendador de Uclés don Pedro Díaz, y el prior del mismo convento, don Pelay Rodríguez, dieron como jueces árbitros en un pleito entre el obispo de Cuenca don Pascual y el cabildo catedralicio, por un lado, y el maestre de Santiago don Juan Osórez y su Orden, por otro, motivado por un incendio del palacio que el obispo tenía en Huete, acaecido mientras lo habitaban temporalmente el comendador mayor de Segura, don Diego Muñiz, y otros caballeros santiaguistas, y también referente a cierto asunto sobre los diezmos de la dehesa de Uclés. AHN, OOMM-Uclés, carp. 98, nº 16.

[346]La primera donación de este tipo que se conserva es la que realizó el 15 de noviembre de 1280 don Juan Domínguez, canónigo de Cuenca y compañero del cabildo de los clérigos de Huete, a favor de éste, consistente en dos casas cerca de la parroquia de San Nicolás de Medina y 300 maravedís, todo ello a cambio de la celebración anual de tres aniversarios por su alma y la de sus padres y algunos bienhechores. AHPC, Pergaminos, nº 2. En épocas posteriores también nos encontraremos con otras donaciones parecidas otorgadas por canónigos conquenses, así como con algunos trueques de bienes.

parroquia, <<pacifice e sine fraude>>, siete mencales para el día de San Miguel[347]. El 23 de julio del mismo año se llegaría a un acuerdo similar con los clérigos de la propia villa de Huete, pero con la diferencia de que en esta ocasión el número de mencales a entregar anualmente por cada parroquia quedaba reducido a cinco[348].

El tributo del catedrático exigido a través de estos acuerdos no sólo poseía importancia económica, sino que ante todo venía a simbolizar la dependencia del clero parroquial con respecto a la potestad jurisdiccional del prelado conquense. Por otro lado, el hecho de que se exija una mayor cuantía de mencales a las parroquias de las aldeas frente a las de la villa viene a ser un claro elemento indicativo de la situación de privilegio que gozaban los clérigos de Huete frente a los de las aldeas de su término, cosa que también sucedía con los clérigos de la ciudad de Cuenca respecto a los de sus aldeas y que, en definitiva, viene a confirmar la situación de superioridad que generalmente se daba del clero urbano frente al rural.

La siguiente intervención con que nos encontramos data del 8 de marzo de 1225. En esta fecha el obispo electo don Lope realizó un acuerdo con el concejo de Huete y con el cabildo de clérigos de la villa de cara a evitar que las parroquias del lugar fuesen devedadas. Se establece que en adelante se ponga a dos hombres de cada collación como jurados, un clérigo y un lego, <<por prendar e por constrenir a aquellos por quien la yglesia fuera devedada>>. Cuando alguno de los hombres nombrados faltase, la collación con el arcipreste habrían de encargarse de poner a otro en su lugar. Estos jurados tendrían la misión de prender a aquél o aquéllos que atentaran contra la jurisdicción e inmunidad eclesiástica de la parroquia de su collación, y en el caso de que ésta fuese devedada por alguno de los propios jurados, entonces la collación junto con el arcipreste se encargarían de prender

---

[347] AHN, Micr., rollo 14227. El documento aparece confirmado por casi todos los clérigos rectores de las parroquias del término de Huete.

[348] ACC, caja 3, nº 41.

al infractor[349]. Con ello entramos de lleno en un problema casi siempre latente durante la Edad Media y aún después: la violación del derecho de inmunidad eclesiástica.

En adelante bastantes de las sucesivas intervenciones episcopales en Huete estarán encaminadas a conceder o confirmar diversos privilegios al cabildo de clérigos beneficiados de la villa. El obispo don Rodrigo (1258-1261) y el cabildo catedralicio de Cuenca, en fecha desconocida, hicieron gracia de las medias annatas a los beneficiados del cabildo de Huete que muriesen desde el día de San Juan, para que de este modo ganasen la renta de todo el año[350], y el 26 de junio de 1263 el obispo don Pedro Lorenzo confirmaría el privilegio anterior[351]. Este último prelado muy pocos días antes, el 17 de junio de dicho año 1263, realizó una confirmación general de diversos privilegios del cabildo de clérigos beneficiados de Huete que le habían sido concedidos por algunos de los obispos anteriores, y cuya relación es la siguiente:

-Los herederos del clérigo beneficiado que muera desde el día de San Juan podrán cobrar toda la renta anual de sus raciones correspondientes al año del fallecimiento, para de este modo poder cumplir las disposiciones testamentarias del difunto y hacer frente a las deudas, si las tuviese. Además, desde el día de la muerte de dicho clérigo hasta treinta días después su familia podrá mantenerse de la renta procedente de sus raciones (se trata del mismo privilegio ya indicado líneas arriba).

-Si una iglesia fuese entredicha, el día de su advocación y la vigilia del día anterior podrán celebrarse con sus horas correspondientes, expulsando previamente fuera de la iglesia a los que estén excomulgados.

-El clérigo del cabildo que predique a los feligreses en el día de la advocación de su parroquia o en los de San Lázaro,

---

[349]ACC, *Estatutos*, privilegio XLV, ff. 13v-14r.

[350]AEH, Inventario, leg. 1º, nº 9. La fecha del regesto tiene que estar necesariamente equivocada, pues se cita el año 1228, que no coincide con los años del pontificado del prelado en cuestión.

[351]*Ibid.*, leg. 1º, nº 12.

Domingo de Ramos, Santas Justa y Rufina, San Clemente o en un día que fuese de rogativas, podrá conceder cincuenta días de perdón.

-Cuando el obispo cobre procuraciones a los clérigos del cabildo, éstos no tendrán que pagar nada a sus oficiales.

-Cualquier clérigo o beneficiado sólo podrá ingresar en el cabildo si éste otorga previamente su beneplácito.

-Cuando algún miembro del cabildo lleve vida perniciosa se le podrá expulsar sin darle ración alguna de su beneficio, y no podrá ser absuelto hasta que haya enmendado sus defectos y recibido de nuevo la aceptación del cabildo con el correspondiente castigo[352].

También en la misma fecha (17-VI-1263), don Pedro Lorenzo concedió cuarenta días de perdón al que acompañase al *Santísimo* al ser llevado para dar la comunión a los enfermos, y otros cuarenta días al que lo acompañase al volver[353].

Toda la normativa y privilegios antedichos, que contaban con el fundamental respaldo de la autoridad episcopal, contribuían sin duda a afianzar la situación de superioridad del clero de Huete frente al de sus aldeas, debiendo ser destacado el hecho de que los propios prelados conquenses, conscientes de esta situación, no dudaban en otorgar su beneplácito de cara a perpetuar el mantenimiento de la misma.

Un nuevo privilegio episcopal fue el concedido al cabildo de clérigos de Huete por el obispo don Gonzalo Díaz Palomeque el 2 de agosto de 1292, y a través del cual se otorgó que el abad del cabildo pudiese dar sentencia definitiva y firme contra todos aquellos que violasen sus rentas y derechos, compeliéndoles al respeto de estos últimos[354].

Durante la primera mitad del siglo XIV los únicos testimonios documentales relativos a las relaciones de los clérigos beneficiados de Huete con la Iglesia de Cuenca sobre los que nos ha llegado alguna referencia se centran en dos situaciones de

---

[352] *Ibid.*, leg. 1º, nº 14.

[353] *Ibid.*, leg. 1º, nº 15.

[354] *Ibid.*, leg. 1º, nº 13.

apelación al obispo diocesano y al cabildo catedralicio sobre asuntos de carácter económico, cuyo desarrollo exacto desconocemos por disponer únicamente de un regesto incompleto y no demasiado fiable de los documentos originales. La primera noticia data del 19 de enero de 1312, fecha en la cual nos encontramos con un testimonio de haberse admitido ante el obispo y cabildo catedralicio conquenses una apelación interpuesta por el cabildo de clérigos beneficiados de Huete junto con el cabildo de clérigos de Cuenca sobre cierta cuestión de agravios en los diezmos[355]. En este caso debe llamarse la atención sobre la actuación conjunta de los clérigos optenses y conquenses, destinada sin duda a otorgar un mayor relieve y fuerza a su petición. La otra apelación a que se hizo referencia se produjo el 22 de abril de 1350, fecha en la cual el cabildo de clérigos beneficiados de Huete apeló ante el cabildo catedralicio de Cuenca sobre el pago de una décima al monarca castellano[356].

Para la segunda mitad del siglo XIV son tres las intervenciones del diocesano conquense que merecen ser destacadas. La primera de ellas se produjo el 23 de octubre de 1366, y consistió en una confirmación que el obispo de Cuenca don Bernal Zafón realizó de una carta del cabildo de clérigos beneficiados de Huete referente a las collaciones de sus parroquianos y al modo de pagar los diezmos cuando se cambiaban de parroquia[357]. Las otras dos estuvieron protagonizadas por el obispo don Álvaro Martínez. Una tuvo lugar el 4 de mayo de 1387, tratándose de la intervención de este prelado referente a la desaparecida parroquia de San Marcos, así como a la construcción de un altar bajo la advocación de este santo en la capilla de Santa Justa y otros asuntos[358], intervención sobre la que aquí no se dirá nada más por haber sido ya analizada detenidamente en la primera parte

---

[355] *Ibid.*, leg. 1º, nº 21. Es la única información que nos proporciona el regesto documental, por lo que desconocemos a qué agravios decimales en concreto se refería el documento original.

[356] *Ibid.*, leg. 1º, nº 23.

[357] *Ibid.*, leg. 1º, nº 22. De nuevo hay que lamentar la exigua información proporcionada por el regesto documental.

[358] *Ibid.*, leg. 1º, nº 8.

de esta obra, cuando se habló sobre la organización parroquial de Huete. La otra intervención tuvo lugar el 5 de abril de 1389, y a través de ella el obispo don Álvaro confirmó al cabildo de clérigos beneficiados de Huete el ya aludido privilegio anterior por el que se le concedía facultad para poder expulsar sin compensación alguna al clérigo que llevase mala vida, que no podría ser acogido de nuevo hasta que enmendase su postura y ganase el beneplácito del cabildo, tras haber recibido el correspondiente castigo por sus faltas[359].

Por último, y centrándonos ya en el siglo XV, hay que hacer referencia a una actuación del obispo don Juan Cabeza de Vaca relativa a un conflicto sobre diezmos del ganado. En el sínodo diocesano que este prelado celebró en 1406, el arcipreste de Huete, abad mayor y clérigos del cabildo de la villa le informaron de que el ganado de Pedro Carrillo *el Viejo*, vecino de Huete, andaba en término de Cervera, por lo que el clérigo beneficiado y arrendadores de este lugar pretendían llevar el diezmo correspondiente a dicho ganado cuando, en realidad, debía pagarse en la villa de Huete, donde era vecino Pedro Carrillo. Tras haber escuchado la exposición de las quejas, el obispo don Juan determinó al respecto que dicho diezmo se pagase en el lugar en que el propietario del ganado hiciese más continuadamente su residencia[360].

4-Conflictos entre el clero diocesano: el diezmo

Los conflictos que frecuentemente se producían entre los clérigos de las diversas parroquias del obispado estuvieron motivados en la mayoría de los casos por asuntos referentes al cobro del diezmo. Una primera disputa de que tenemos noticia es la que viene dada por el pleito que en 1257 estaban pendiente ante el obispo de Cuenca don Mateo Reinal entre los clérigos de la villa de Haro, por un lado, y los clérigos y concejos de las

---

[359] *Ibid.*, leg. 1º, nº 38.

[360] ACC, *Estatutos*, f. 61r.

aldeas de Haro, por otro, referente a las aportaciones de trigo que, por razón del pago de diezmo, debían hacer los concejos de las aldeas a los clérigos de la villa de Haro. Don Mateo, el 6 de noviembre de dicho año, una vez examinado el pleito, dictaminó <<que lleven cada anno los de las aldeas de Faro que labraren por pan, de cada yugo de bueyes un cafiz por medio a la villa de Faro, e de las bestias segunt es costunbre en las otras villas del obispado, e tres çelemines colmados por mediduras cada un cafiz>>[361].

Un motivo que casi siempre dio lugar al surgimiento de conflictos decimales entre parroquias fue el cambio de vecindad de los feligreses. Ciertos clérigos instaban a algunas personas a cambiarse de parroquia y avecindarse en la suya, para de este modo tener derecho a una mayor parte del diezmo, procedimiento que sería prohibido bajo severas penas por el obispo don Álvaro Martínez y, posteriormente, por don Juan Cabeza de Vaca en el sínodo de 1399[362].

En esta última reunión sinodal también se estableció que los diezmos de pan y vino de las personas que se cambiasen de parroquia habrían de pagarse en la parroquia del lugar donde estuviesen situadas las heredades[363], disposición que será reiterada de nuevo por Fray Lope de Barrientos en el sínodo de 1446[364]. No obstante, existía en el obispado una antigua costumbre según la cual la mitad de los diezmos de pan y vino de los vecinos de ciudad o villa que vivían en las aldeas donde tenían sus heredades se quedaba en estas últimas, y la otra mitad debía entregarse en las parroquias de dicha ciudad o villa donde estuviesen avecindados los propietarios de las heredades, exceptuando el caso de la ciudad de Huete, que llevaba dos

---

[361] ACC, caj. 6, nº 105.

[362] ACC, *Estatutos*, f. 38v.

[363] *Ibid.*, f. 38v.

[364] *Sínodo de 1446*, f. 31r.

terceras partes de dichos diezmos, quedando la tercera parte restante en la aldea[365].

De acuerdo con la antedicha costumbre de reparto decimal, y con el objeto de evitar conflictos entre parroquias, también en el *sínodo de 1446* el obispo Barrientos estableció que los vecinos de la ciudad de Cuenca que tuviesen tierras de labranza en los términos de Arcas, Villar de Olalla, Sotos y otros lugares cercanos a la ciudad deberían pagar a su parroquia la mitad del diezmo de lo que labrasen, y la otra mitad a la parroquia del lugar en que estuviesen situadas dichas tierras[366]. Pero algunos años más tarde, en el sínodo celebrado en 1457, el obispo don Lope mandará que todas las personas que desde 1446 dejaron de ser vecinos en sus aldeas para pasar a avecindarse en las villas y ciudades del obispado gozando de las exenciones de éstas, a pesar de lo cual continuaban viviendo la mayor parte del tiempo con su familia en las aldeas donde antes eran vecinos, tendrían que pagar enteramente sus diezmos en la parroquia de la aldea donde morasen y no en la ciudad o villa donde se hubiesen avecindado, excepto en el caso de que dichas personas fuesen hijos de vecinos de ciudades o villas[367]. Como puede verse, con esta medida no se intentaba otra cosa que ayudar algo a las parroquias de aldeas, que en general estaban más desfavorecidas económicamente que las de las ciudades y villas.

Otro conflicto entre parroquias era el que a veces se producía cuando un parroquiano vendía o dejaba en herencia algunos bienes, siendo los compradores o herederos parroquianos en otras iglesias, lo que motivaba entre los clérigos disputas sobre en qué parroquia se debía pagar el diezmo. Por este motivo don Juan Cabeza de Vaca, en el sínodo de 1399, determinó que los compradores y herederos de tales bienes dezmasen por este

---

[365] *Ibid.*, f. 33v.

[366] *Ibid.*, f. 36v.

[367] *Sínodo de 1457*, f. 134r-v.

concepto en la parroquia donde estuviesen avecindados, y no en la del vendedor o donante[368].

También se produjeron disputas en torno a las primicias que debían pagar aquellas personas que labraban en términos de diferentes parroquias, debido a que el clérigo de la parroquia donde estaban avecindadas dichas personas reclamaba una primicia por cada heredad de las que labraban sus parroquianos en los términos de otras parroquias, a cuya entrega se negaban los clérigos de estas últimas alegando que se trataba de heredades situadas en su término jurisdiccional. La cuestión acabaría siendo objeto de legislación, estableciendo don Juan Cabeza de Vaca en el sínodo de 1402 que tales primicias se pagasen en las parroquias en cuyo término estuviesen situadas las heredades, exceptuando aquellos lugares donde existiese costumbre en contrario, en los que se guardaría dicha costumbre[369].

El diezmo del ganado, dada la constante movilidad de este último, sería con frecuencia motivo de conflicto entre parroquias, máxime si tenemos en cuenta la gran importancia ganadera que revestía el territorio conquense, en particular la Serranía. En principio, el diezmo del ganado, lana y queso debía pagarse en la parroquia del lugar donde más continuadamente viviese cada persona con su familia. No obstante, según estableció don Juan Cabeza de Vaca en el sínodo de 1399, si un dezmero no viviese habitualmente en la villa donde fuese vecino, sino en alguna aldea, dicho diezmo se entregaría a la parroquia de esta última, excepto en el caso de que el dezmero fuese también hijo de un vecino de la villa, situación en la cual el diezmo se pagaría en la parroquia de dicha villa[370]. En esa misma asamblea sinodal también se determinó que cuando el vecino de una villa esquilase su ganado en alguna aldea, nueve décimas partes del diezmo de la lana se entregarían en la parroquia de la villa donde estuviese avecindado el propietario del ganado, y la décima parte restante

---

[368] ACC, *Estatutos*, f. 40r.

[369] ACC, *Estatutos*, f. 53r-v.

[370] ACC, *Estatutos*, f. 38v. Esta misma disposición será reiterada por Fray Lope de Barrientos en 1446. *Sínodo de 1446*, f. 31r.

sería para la parroquia de la aldea donde se esquilase el ganado[371].

Pocos años después, en el nuevo sínodo diocesano celebrado por el obispo don Juan en 1406, el arcipreste de Huete, abad mayor y clérigos del cabildo de la villa le informaron de que el ganado de Pedro Carrillo *el Viejo*, vecino de Huete, andaba en término de Cervera, por lo que el clérigo beneficiado y arrendadores de este lugar pretendían llevar el diezmo correspondiente a dicho ganado cuando, en realidad, debía pagarse en la villa de Huete, donde era vecino Pedro Carrillo. Tras haber escuchado la exposición de las quejas, el obispo don Juan determinó al respecto que dicho diezmo se pagase en el lugar en que el propietario del ganado hiciese más continuadamente su residencia[372].

Por otro lado, en el sínodo de 1457, Fray Lope de Barrientos establecería también que si un vecino o hijo de vecino de una villa o lugar se fuese a vivir a otra villa o lugar dentro del mismo arcedianato, sus diezmos de corderos, lana y queso se deberían pagar en la ciudad o villa donde estuviese avecindado; pero si se fuese a vivir a una villa o lugar de otro arcedianato tales diezmos habrían de ser pagados en el lugar donde residiese la mayor parte del año[373].

Finalmente, un último tipo de conflicto decimal al que aludiremos es el que se producía cuando el vecino de una parroquia situaba sus colmenas en el territorio jurisdiccional de otra, lo que motivaba disputas entre los clérigos de ambas parroquias sobre dónde debería entregarse el diezmo de cera y miel procedente de dichas colmenas. Tratando de buscar una solución equitativa al problema, en el sínodo de 1404 don Juan Cabeza de Vaca determinará que cuando esto suceda el diezmo se parta por mitades[374].

---

[371] ACC, *Estatutos*, f. 39v.

[372] ACC, *Estatutos*, f. 61r.

[373] *Sínodo de 1457*, ff. 134v-135r. Tiempo después, el obispo Fray Alonso de Burgos reiteraría esta misma disposición. Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Ms. M.II.22, f. 2r.

[374] ACC, *Estatutos*, f. 58r.

5-Relaciones del obispo y cabildo catedralicio con algunos monasterios de religiosos

La información de que disponemos sobre esta cuestión para el periodo medieval es bastante desigual en el sentido de que, mientras que para el caso de algunos monasterios, sobre todo el cisterciense de Santa María de Monsalud, tenemos un cierto volumen de datos al respecto, para otros, en cambio, las noticias que han llegado hasta nosotros son muy pocas o incluso inexistentes. Hecha esta aclaración, veamos a continuación qué tipo de relaciones mantuvieron el obispo y cabildo catedralicio de Cuenca con Monsalud y otros monasterios.

A) *Relaciones con el monasterio de Santa María de Monsalud*

La relación de los cistercienses castellanos con los obispos diocesanos vino dada en gran parte por los privilegios que definían su estatuto especial dentro de las diócesis. El estar exentos de visita diocesana y de acudir a los sínodos salvaguardó su recogimiento y autonomía, a la vez que la absolución de excomuniones por los abades reforzó el autogobierno monástico. Aceptado este estatuto por los obispos y reconocida por los monasterios la autoridad ordinaria de los mismos, no se produjeron roces de importacia con los obispos durante los siglos XII y XIII.

Para el caso de Monsalud, las relaciones con el obispo diocesano serán reguladas básicamente a través de una intervención del papa Inocencio IV, que ha quedado recogida en un documento fechado el 20 de septiembre de 1250. El documento establece que ningún obispo pueda obligar a los monjes a acudir a sínodo ni a juicio ante el tribunal episcopal, y que tampoco les pueda compeler al pago de diezmos, dada su exención. Ningún obispo podrá acudir al monasterio a conferir órdenes ni a juzgar pleitos sin la voluntad del abad, y tampoco podrá entrometerse en las elecciones abaciales y otras cosas tocantes al régimen interno de la comunidad. Sólo con la debida licencia del abad el obispo podrá ordenar a los religiosos del monasterio, así como

consagrar y bendecir los objetos litúrgicos de la iglesia de la abadía[375]. Con todo ello, en definitiva, el monasterio se veía beneficiado con un amplio grado de autonomía respecto a la autoridad episcopal, aunque, en última instancia, Monsalud siempre tuvo que reconocer y aceptar la posición de máxima autoridad eclesiástica que ostentaba el obispo dentro de su diócesis.

La exención del pago de diezmo que gozaban los cistercienses es otro aspecto a tener muy en cuenta al analizar las relaciones mantenidas con el obispo diocesano y el cabildo catedralicio. Los cistercienses estaban exentos del pago de diezmos desde 1132 por concesión de Inocencio II[376]. Esto hizo que algunos obispos se opusieran a la fundación de nuevos monasterios cistercienses en sus diócesis por el quebranto económico que les podía suponer. Este, sin embargo, no fue el caso de la diócesis de Cuenca, ya que el único monasterio cisterciense que en ella había era el de Monsalud, que fue anterior en su fundación a la restauración del obispado conquense. En 1161 Alejandro III comunica a los monasterios castellanos que están exentos del pago de diezmos por todas las tierras que trabajen con sus manos. A su vez, aconseja que para aquellos conflictos que puedan surgir con los obispos se realicen con ellos acuerdos particulares[377]. Si en el canon 55 del IV Concilio de Letrán de 1215 se trató de dar marcha atrás con respecto a la amplitud de estos privilegios, lo cierto es que, en la mayor parte de los casos, los monasterios cistercienses castellanos supieron defender con éxito sus prerrogativas en el tema de los diezmos frente a los prelados.

Al fundarse la diócesis de Cuenca, pronto se plantearía la necesidad de llegar a una avenencia con los cistercienses respecto a su exención del pago de diezmo. Con el monasterio de Santa María de Monsalud el primer obispo conquense, don Juan Yáñez, y el cabildo catedralicio realizaron un acuerdo el 30 de

---

[375] AHN, *Clero*, libro 4235, ff. 8r-9r.

[376] José Manuel Nieto Soria, <<El equipamiento económico de una sede episcopal castellana de nueva creación: Cuenca, 1180-1280>>, p. 325.

[377] AHN, *Clero*, carp. 354, nº 3.

diciembre de 1193, mediante el cual el convento de monjes quedaba exento del pago de diezmos. A cambio de esta exención los cistercienses de Monsalud estarían obligados al pago anual en la fecha de la Natividad de la Virgen de la cantidad simbólica de dos áureos para el cabildo:

"...Ego itaque Ioannes, Dei gratia conchensis ecclesiae instuens episcopus, una cum consensu et beneplacito canonicorum conchensis ecclesiae, pro me et succesoribus meis concedo vobis domno R. Montis Salutis abbati et succesoribus vestris et conventui vestro, scilicet praesenti et futuro, totius agriculturae vestrae quam modo habetis vel habituri estis agrorum scilicet et vinearum et ut aperte loquam totius vastae subtantiae decimas in pace habendas et retinendas, ita tamen quod vos et succesores vestri singulis annis in nativitate beatae Mariae, quae est mense septembris, censualiter pro hac convenientia vel per vos vel per alliquem monachorum vestrorum conventui nostro duos aureos persolvatis. Et ego R. praedicti loci abbas, una cum consensu et beneplacito monachorum nostrorum, pro me et succesoribus nostris praetaxato die promito vel per monachum nostrum conventui canonicorum conchensis ecclesiae singulis annis censualiter pro praedicta convenientia duos aureos persolvere. Ego Ioannes Conchensis ecclesiae..."[378].

Por aquellas mismas fechas el monasterio cisterciense de Óvila había realizado un acuerdo de idénticas características con el obispo y cabildo catedralicio de Sigüenza. Posteriormente, con fecha 3 de febrero de 1270, el obispo y cabildo conquenses realizarían una nueva concordia con el monasterio de Monsalud a través de la cual el número de áureos a pagar anualmente pasó a ser de seis[379].

---

[378] Mateo López, *Memorias históricas de Cuenca y su obispado*, II, pp. 145-146.

[379] José Manuel Nieto Soria, <<El equipamiento económico.. >>, p. 326. En este último acuerdo del año 1270 también se especifica la concesión por Monsalud al arcediano de Alarcón de un aniversario perpetuo por su alma y la de sus parientes en compensación por el perjuicio que pudiese ocasionarle la exención decimal que gozaba el monasterio: <<...Praeterea ad preces et instanciam venerabilis viri Martini Gundissalvi, archidiaconi Alarconis, in cuius archidiachonatum nostrum monasterium est fundatum, prommittimus facere aniversarium pro animabus parentum suorum in die Sancti Blasii, et sequenti die pro eo anuatim>>. AHN, *Clero*, libro 4235, f. 21r. El autor del primer Tumbo de Monsalud del siglo XVI deja constancia de que dicho aniversario por el alma del arcediano de Alarcón, Martín Gonzalo, y la de sus padres y parientes aún se sigue celebrando en el monasterio y siempre se ha celebrado el día de San Blas y el siguiente.

El diezmo era un impuesto que también poseía una significación con respecto a la autoridad episcopal. Cuando el obispo y cabildo catedralicio conquense vieron que, en virtud de las concesiones pontificias, la exención decimal de los cistercienses resultaba inevitable, comenzaron a preocuparse por mantener algún símbolo de su autoridad en el que se representase la dependencia monástica con respecto al poder episcopal. Por eso la pequeña cantidad que, en función de dichos acuerdos, debía entregar anualmente el monasterio al obispo y cabildo catedralicio no posee importancia desde un punto de vista económico, sino que debe ser interpretada ante todo como un símbolo de la dependencia de Monsalud hacia la autoridad episcopal, y ello a pesar de que en la práctica los cistercienses siempre gozaron de un alto grado de autonomía con respecto al obispo diocesano y el cabildo catedralicio.

Esta entrega anual daría lugar a una curiosa ceremonia que se mantuvo a lo largo de los siglos, y que aún se seguía realizando a principios del siglo XIX, poco antes de que tuviera lugar la primera desamortización eclesiástica.

Durante el siglo XV tenemos constacia de que la cantidad a pagar cada año había cambiado ligeramente, y se distribuía en dos entregas anuales, aunque aún seguía siendo algo puramente simbólico. El monasterio pagaba al cabildo catedralicio 24 maravedís el día de la Natividad de Nuestra Señora o en cualquier día del mes de septiembre, en sustitución de los dos primitivos áureos, y 48 maravedís de a dos blancas el maravedí el día de Santa Bárbara, en sustitución de los seis áureos posteriores. La ofrenda la hacía bien el abad de Monsalud o, lo que era más frecuente, un monje enviado por el monasterio, y en ambas entregas anuales se realizaba siempre la misma ceremonia con un rito y diálogo simbólicos que estaban preestablecidos y se repetían todos los años sin apenas variantes. Veamos, a modo de ejemplo, cómo se desarrolló dicha ofrenda el día de Santa Bárbara del año 1449, lo cual ha quedado fielmente recogido en las Actas Capitulares del cabildo catedralicio conquense:

"En la eglesia cathedral de Santa Maria de Cuenca, en el choro açerca del altar et seyendo çelebrada la misa mayor al tienpo que era dicha la ofrenda ese dia martes, dia de la sennora Santa Barbara, dies e seys dias del mes de desienbre, anno de la Natividad del nuestro Salvador Ihesuchristo de mill e quatroçientos e quarenta e nueve annos, en presençia de mi el notario publico e testigos yuso escriptos, peresio un freyle que se dixo frey Pedro, freyle profeso de la orden de Sant Benito del monesterio de Corcoles de la diocesis de Cuenca, et llego al dicho altar mayor de la dicha eglesia et puso ençima del dicho altar quarenta e ocho maravedis de blancas viejas de la moneda usual corrible en Castilla, que fasian dos blancas viejas un maravedi. Et luego incontinenti Miguel Ferrandes, raçionero de la dicha eglesia, en nonbre e asy commo procurador de los honrrados sennores dean e cabillo de la dicha eglesia, pregunto al dicho freyle que de donde era, e el dicho freyle respondio e dixo que era frey Pedro, frayle profeso del monasterio de Corcoles, et que ofreçia aquellos maravedis alli en aquel altar en nonbre e por el dicho monesterio de Corcoles, e el dicho Miguel Ferrandes, en el dicho nonbre de los dichos sennores dean e cabillo, dixo que aquellos maravedis avyan de ser de oro, et el dicho frey Pedro dixo que oro es lo que oro vale, et luego el dicho Miguel Ferrandes, en el dicho nonbre de los dichos sennores dean e cabillo, dixo que prestavan e presto de cobrar los dichos quarenta e ocho maravedis de oro del abbad e bienes espirituales e corporales del dicho monesterio de Corcoles, e el dicho frey Pedro en el dicho nonbre del dicho monesterio dixo que el avya ofreçido e ofreçia la dicha ofrenda segund que sienpre se avya usado e uso e era e es constunbre antigua en tanto tienpo que memoria de omes non es en contrario..."[380].

Durante el siglo XVI la cantidad a pagar seguía siendo la misma que en la centuria anterior, también en dos entregas anuales. El autor del primer Tumbo de Monsalud nos ofrece más detalles sobre cómo transcurría la ceremonia de ofrenda a mediados del siglo XVI:

"Quando los canonigos de Cuenca entran en el coro para la missa mayor, el se entra con ellos y le reçiven y dan silla con toda benivolençia, y al tienpo de la offrenda baxan con el bedel del altar mayor y bienen al coro, y

[380] ACC, AC-1449, f. 108v.

assi juntamente con los canonigos se va al altar mayor y offreçen las dignidades, y el llega al angulo derecho del altar y besa alli y pone alli ençima los dineros, y hecho esto se buelven al choro fasta acabar la missa. Todo passa por ante el notario que lleva el monje, al qual dize que le de por testimonio como se haze la dicha offrenda y no se escribe cossa ninguna"[381].

Por último, resulta también interesante el directo testimonio que nos ha dejado Fray Bernardo Cartes, monje de Monsalud, sobre el modo como transcurría la ceremonia de ofrenda durante la segunda mitad del siglo XVII, época en que escribe. El propio Cartes nos dice cómo él mismo fue enviado en 1675 a Cuenca para hacer la ofrenda en la catedral, por lo cual podemos presuponer que su versión reviste un alto grado de fidelidad. En líneas generales, el desarrollo ofrece similitud con el de épocas anteriores. Cuando llegaba el monje a Cuenca, el Maestro de Ceremonias de la catedral salía a su encuentro y le preguntaba si era el abad, el prior o un simple monje. Una vez situados en el coro, si era el abad se le daba asiento entre las dignidades, si era el prior se le otorgaba el primer asiento entre los canónigos, y si era un simple monje se le colocaba mezclado entre los canónigos.

Al día siguiente se celebraba la misa en la catedral. Entonces tenía lugar el diálogo entre un representante del cabildo y el monje. Éste decía que iba a hacer la ofrenda en nombre del monasterio de Santa María de Monsalud. Entonces el canónigo replicaba que no era ofrenda, sino feudo y censo debido y forzoso, y el monje respondía que ni el monasterio ni él lo reconocían por feudo, sino por ofrenda libre y voluntaria. Luego se mantenía una amistosa discusión entre ambas partes y finalmente el monje realizaba la ofrenda. Entonces el canónigo, levantando algo más la voz, decía: <<Que en caso de ser ofrenda debe hacerse en oro, según la antigua escritura>>, y el monje replicaba: <<oro es lo que oro vale>>. Tras otra amistosa

---

[381] AHN, *Clero*, libro 4235, f. 21v.

discusión, el monje se volvía al coro hasta que finalizaba la misa, y por la tarde regresaba al monasterio[382].

En conclusión, esta curiosa ceremonia de ofrenda que se mantuvo a lo largo de los siglos venía a simbolizar la dependencia de Monsalud hacia la autoridad del obispo y cabildo catedralicio conquenses. En sus orígenes poseía una clara significación de carácter feudovasallático, pero desde fines de la Edad Media pasó a convertirse más bien en una ceremonia amistosa que se seguía celebrando en recuerdo y conmemoración de aquel sentido feudal que poseyó en sus inicios, aunque la idea de reconocimiento hacia la autoridad episcopal nunca dejó de estar presente.

Por lo que respecta a la exención decimal de que gozaban los cistercienses, hay que señalar que durante los siglos XIV y XV, a pesar de los antiguos privilegios existentes, las haciendas cistercienses no estuvieron totalmente a salvo de algunas requisitorias fiscales de la jerarquía eclesiástica por cuestión del diezmo. El 18 de diciembre de 1302 Bonifacio VIII concedió a todos los monasterios del Císter estar a salvo de pagar el diezmo de todas las heredades que nunca lo hubiesen pagado, aunque no estuviesen labradas *propiis expensis* o estuviesen dadas a foro, censo o renta. Los conflictos a que esta imposición dio motivo con la jerarquía eclesiástica durante el siglo XIV hicieron necesaria la determinación general de Martín V, en 1423, de eximir tanto del diezmo de las posesiones adquiridas antes o después del Concilio de Letrán con independencia del modo en que se cultivasen, como del que era percibido por otros sobre tierras de los cistercienses[383].

Para el caso de Monsalud tenemos constancia de que, ya durante el siglo XVI, surgirían pleitos por pretender el obispo de Cuenca los diezmos de la heredad de Langa, propiedad del monasterio, pero, en virtud de las concordias antiguas con la Iglesia de Cuenca y de los privilegios pontificios concedidos a

---

[382]Fray Bernardo Cartes, *Historia de la milagrosa imagen...*, pp. 140-141.

[383]Javier Pérez-Embid Wamba, *El Císter en Castilla y León...*, pp. 557-558.

la Orden, la sentencia fue favorable al monasterio, que no tuvo que pagar contribución decimal alguna[384].

Otro aspecto de las relaciones mantenidas entre Monsalud y el obispo y cabildo catedralicio conquense viene dado por la intervención ocasional de algún miembro de este último en la resolución de pleitos en los que estaba involucrado el monasterio. Así, por ejemplo, el 5 de enero de 1447, don Nicolás Martínez de la Campana, bachiller en Decretos, canónigo de Cuenca y vicario general en toda la diócesis en nombre del obispo don Lope de Barrientos, fue designado juez comisario para sentenciar un pleito sobre los diezmos del lugar de Salmeroncillo. Estuvieron presentes, por un lado, Fray Martín de Sevilla, capellán del rey y monje de Monsalud que actuaba como procurador del monasterio, y por otro Ferrant López de Molina, que acudió como procurador de Juan Rodríguez de Albendea, Sancho González Agudo y Alfonso Ruiz de Priego, vecinos de la villa de Alcocer. El pleito entre ambas partes era sobre 42 almudes de trigo y cebada que los vecinos arriba mencionados, como arrendadores de las rentas del pan de Salmeroncillo de 1446, habían tomado de una casa-heredad que el monasterio tenía en Salmerón de Yuso, aldea de Huete. La sentencia de Nicolás Martínez de la Campana sería favorable a Monsalud, obligándose a dichos vecinos a restituir al monasterio los 42 almudes señalados[385].

Años más tarde, por un documento con fecha 24 de febrero de 1474, sabemos que los diezmos de la heredad que el monasterio tenía en Salmeroncillo aún continuaban siendo fuente de conflictos. En dicha fecha tenemos constancia de la existencia de un pleito entre Juan de Torres, clérigo arrendador del beneficio curado del lugar de Salmeroncillo, y el monasterio ante don Nuño Álvarez de Fuentencalada, chantre de la catedral de Cuenca. Finalmente Juan de Torres acabará quitando el embargo que había puesto en el pan de los diezmos de la heredad que el monasterio

---

[384] AHN, *Clero*, libro 4235, f. 59r. El Tumbo no indica con qué obispo de Cuenca se originó dicho pleito, ni tampoco se precisa de forma exacta la fecha.

[385] AHPC, *Desamortización*, leg. 298.

tenía en Salmeroncillo, para que dichos diezmos sean entregados al monasterio[386].

Un último aspecto de las relaciones entre Monsalud y el obispo y cabildo catedralicio lo tenemos en la presencia de algún caso de enajenación de bienes monásticos a favor del obispo conquense. Efectivamente, un sistema muy usado por los cistercienses, sobre todo durante el siglo XV, para obtener unos ingresos sin necesidad, no ya de poner directamente en explotación unos fundios, sino de recurrir al aforamiento o censo de grandes propiedades, consistió en que los conventos entregaban una granja, villa o heredamiento a un poderoso y éste les daba en contrapartida un *juro* o cantidad de dinero a percibir en alguna renta fiscal que, generalmente por concesión regia, disfrutaban[387].

Algunos bienes de Monsalud también fueron enajenados a favor del obispo conquense. El monasterio había poseído durante mucho tiempo el lugar de El Picazo y la heredad de Paredejas con sus términos, hasta el año 1409, en que el obispo de Cuenca don Diego de Anaya, con permiso del cabildo catedralicio, hizo un trato con Fray Martín, abad de Monsalud, para que, dado que dichas propiedades del monasterio estaban próximas a la villa episcopal de Huerta, pasaran a formar parte de la mesa episcopal a través de algún intercambio, pues el obispo tenía interés en su posesión. El monasterio aceptó dicho intercambio y el lugar de El Picazo y la heredad de Paredejas pasaron a la mesa episcopal, comprometiéndose el obispo a entregar cada año perpetuamente al monasterio 10 cahíces de trigo y 1000 mrs. situados sobre las tercias que la mesa episcopal poseía en la villa de Alcocer[388]. Poco después el papa Benedicto XIII confirmaría dicho enajenamiento[389].

---

[386] AHPC, *Desamortización*, leg. 298.

[387] Javier Pérez-Embid Wamba, *El Císter en Castilla y León*..., p. 390.

[388] AHN, *Clero*, libro 4235, ff. 22v-23v.

[389] AHPC, *Pergaminos*, nº 137-138. Sólo poseemos la referencia de dicha confirmación de Benedicto XIII, pero la fecha no viene indicada. El monasterio recibió durante mucho tiempo dicho juro con normalidad. En 1536, a 8 de mayo, el obispo de Cuenca, don Diego Ramírez de Villaescusa, expuso ante el cabildo catedralicio su

En definitiva, puede concluirse que, si bien Monsalud siempre mantuvo un alto grado de autonomía con respecto a la autoridad del obispo y cabildo catedralicio conquense, tampoco faltarán ejemplos de relaciones con estos últimos y, en última instancia, el monasterio siempre hubo de reconocer la posición de *máxima autoridad eclesiástica que ostentaba el obispo dentro* de la diócesis.

B) *Relaciones con otros monasterios*

Además de las antedichas relaciones con Monsalud, también se produjeron relaciones con otros monasterios, tanto situados en el territorio diocesano conquense como fuera de él. Este último es el caso de algunos monasterios cistercienses de otras diócesis que, a pesar de ello, también poseían algunos bienes en el obispado de Cuenca.

Un primer ejemplo que cabe citar es el del monasterio de Santa María de Huerta, poseedor de propiedades en varias diócesis -Sigüenza, Tarazona, Osma- además de la de Cuenca. En 1179 Alfonso VIII había concedido al monasterio las salinas de Landete, cerca de Moya[390], y en 1189 el mismo monarca confirmaría la donación de una heredad que había sido donada por Nuño Sánchez al monje Pedro López, situada junto al río Piqueras, en la Vega de Valera[391]. Por otro lado, el 28 de junio de 1200 un personaje llamado Munio Sancho, junto con su mujer e hijos, donó al monasterio la heredad de Albaladejo, situada cerca de Cuenca, a cambio de 300 mrs. que dicho Munio Sancho había prometido para la fábrica del dormitorio de la abadía, y de 1000 áureos que

---

preocupación por la disipación en que se encontraban el término de El Picazo y la heredad de Paredejas, que se habían ido quedando baldíos y destruidos. Los labradores a quienes se arrendaban no podían pagar la renta que luego el obispo tenía que entregar cada año al monasterio. Además, siempre había estado prohibida la entrada en dichos lugares a los ganados de los términos comarcanos, que en cambio ahora entraban y dejaban baldías las heredades. AHPC, *Pergaminos*, nº 12-A. Por todo ello, el obispo acabaría pidiendo licencia al monasterio para entregar a censo dicho término de El Picazo y la heredad de Paredejas a alguna persona que lo pudiese labrar bien y pagar puntualmente. El monasterio concedió dicha licencia y en virtud de ella se acensó. AHN, *Clero*, libro 4235, ff. 22v-23v.

[390]Julio González, *El reino de Castilla...*, doc. nº 318.

[391]Julio González, *Repoblación de Castilla La Nueva*, I, p. 245.

debía al abad Martín[392]. La posesión por el monasterio cisterciense de estas propiedades en la diócesis de Cuenca pronto haría necesaria la realización de un acuerdo en materia decimal con el obispo conquense, acuerdo que se firmaría el 12 de agosto de 1237, y a través del cual el monasterio quedó exento del pago de diezmos por los bienes que tenía en el obispado de Cuenca[393].

Ese mismo año de 1237 tuvo lugar un pleito entre los monjes de Huerta y don Arnalt de Pechenina, quien pretendía demandar al abad don Pedro y al convento los molinos de la presa de Albaladejo, junto al Júcar, pensando que eran suyos. El conflicto hizo necesaria la mediación del obispo de Cuenca don Gonzalo Ibáñez, el cual, <<*por amor que avie al monasterio de Uerta*>>, convenció a don Arnalt de que dichos molinos no le pertenecían; no obstante, en adelante el monasterio habría de entregar anualmente a don Arnalt diez cahíces de trigo y otros diez de cebada <<de la medida de Concha>>[394]. En esta misma línea de cooperación entre el obispo conquense y el monasterio debe situarse la dotación que en 1266 hizo el obispo don Pedro Lorenzo de la fiesta de la Anunciación, que habría de celebrarse todos los años en el monasterio[395].

Durante el siglo XV éste aún seguía poseyendo en el obispado de Cuenca la antedicha heredad de Albaladejo, y prueba de ello es que el 10 de octubre de 1413 Fray Pedro, cantor y procurador de los monjes de Huerta, recibió 35 florines de Juan Fernández de Reillo, y otros 15 florines de Juan Sánchez de la Puerta, vecino de Cuenca, como pago de la renta anual de la heredad, molinos y casas propiedad del monasterio en Albaladejo[396].

Otro monasterio cisterciense, el de Óvila, aunque dependía jurisdiccionalmente del obispo de Sigüenza, también poseía

---

[392]José Antonio García Luján, *Cartulario del monasterio de Santa María de Huerta*, nº 65.

[393]AHN, *Clero*, carp. 1981, nº 18. Tomado de José Manuel Nieto Soria, *El obispado de Cuenca en sus relaciones de poder*, p. 72.

[394]AHN, *Clero*, carp. 1981, nº 14.

[395]AHN, *Clero*, códice 1295 B, ff. 70v-71r.

[396]ACC, AC-1413, f. 25v.

algunas propiedades en la diócesis conquense. Por ejemplo, entre las propiedades que el 29 de junio de 1191 había donado Alfonso VIII a la abadía se encontraban la aldea de Morillejo, al norte de la diócesis, y una granja en Piedras Luches, cerca del Tajo[397]. Algún tiempo después el mismo monarca mandaría que en adelante nadie cobrase portazgo a los ganados del monasterio, que podrían pacer libremente por donde lo hacían los del rey, así como en los términos de Cuenca, otorgando además autorización al monasterio para poder cortar madera en los bosques regios y en los del territorio conquense[398]. Por esa misma época don Martín de Trillo y su mujer, doña Sancha, habían entregado a los monjes de Óvila y a su abad Fray Martín de Peñafiel una heredad en Palmiches, situada en el término de Huete, a cambio del pago por parte del monasterio de cierta cantidad de trigo y vino[399]. No obstante, para el caso del monasterio de Óvila desconocemos si se efectuó algún tipo de acuerdo en materia decimal con el obispo conquense, tal como sucedió con Monsalud y Huerta.

La proximidad del monasterio de Óvila con la diócesis de Cuenca motivaría que en ocasiones el papa comisionase a su abad para que actuase como juez pontificio en algunos asuntos internos de la Iglesia conquense. Un ejemplo de ello es la sentencia de absolución que el 14 de enero de 1356, por delegación pontificia, dio don Pascual, abad de Óvila, a favor de la clerecía del obispado de Cuenca por si hubiese incurrido en censuras por no haber cesado la celebración de los oficios divinos cuando prendieron en Toledo al obispo de Sigüenza[400].

Ya a fines de la Edad Media el monasterio se vería involucrado en un conflicto con el concejo de Cuenca relativo a la posesión del lugar de Morillejo, al norte de la diócesis y cerca del Tajo. Tal como antes se indicó, esta aldea figuraba entre las posesiones que el 29 de junio de 1191 había donado Alfonso VIII

---

[397] Agustín Millares Carlo, <<Cartulario del monasterio de Óvila>>, nº 1.

[398] *Ibid.*, nº 11.

[399] *Ibid.*, nº 25.

[400] ACC, s.s.

al monasterio. No obstante, en 1496 el concejo conquense expondría a los Reyes Católicos que desde hacía ya mucho tiempo el lugar de Morillejo pertenecía a la ciudad de Cuenca, cuyo alfoz se extendía hasta el norte de la diócesis, a pesar de lo cual recientemente el abad de Óvila les había usurpado su posesión alegando que se trataba de una propiedad del monasterio. Tras examinar el caso, el 14 de julio de 1496 los monarcas mandarán que el abad de Óvila restituya al concejo conquense dicho lugar[401].

Pero no sólo el concejo conquense tuvo litigios con el monasterio, pues poco después de este último conflicto también se produciría otro entre el administrador de los bienes de la abadía y el maestrescuela del cabildo catedralicio conquense. El litigio vino dado porque el doctor Ignacio de Collantes, vecino de Cifuentes y administrador del monasterio de Óvila, acusaba a Gómez de Mata, maestrescuela de Cuenca, de usurparle su posesión mediante violencias y asonadas. También en este caso fue necesaria la intervención de los Reyes Católicos, quienes el 12 de noviembre de 1499 mandarían a la justicia civil de las villas de Molina, Sigüenza, Cifuentes y Medinaceli que interviniese para que al doctor Ignacio de Collantes nadie le usurpara la libre administración del monasterio[402].

Otro monasterio de la diócesis de Sigüenza que también poseía algunas propiedades en el obispado conquense era el de Santa María de Buenafuente de Sistal, que inicialmente estuvo integrado por una comunidad de canónigos regulares. Así, por ejemplo, el 1 de octubre de 1177 Alfonso VIII donaría al monasterio un solar en Albaladejo[403], y el 26 de diciembre de 1188 varias heredades y molinos en el lugar de Campello, en término de Cuenca[404]. Por otro lado, ya en el siglo XIII, el

---

[401] AGS, *Registro General del Sello*, 14-VII-1496, f. 209.

[402] AGS, *Registro General del Sello*, 12-XI-1499, f. 197.

[403] Archivo del Monasterio de Buenafuente de Sistal, pergamino nº 2.

[404] *Ibid.*, nº 7.

monasterio también poseía algunas heredades en Beteta[405]. No obstante, carecemos de documentación que aluda a posibles pactos de este monasterio con el obispo de Cuenca en materia decimal, desconociéndose si dichos pactos se llevaron alguna vez a cabo.

En lo que respecta a las relaciones del obispo y cabildo catedralicio conquense con otros monasterios de la propia diócesis de Cuenca, exceptuando el caso de Monsalud, sobre el que ya se ha hablado, los datos que poseemos son francamente escasos. Sabemos que el monasterio de Santa Clara de Alcocer estaba exento del pago de diezmos por una bula de Alejandro IV del 31 de julio de 1259[406]. Por otro lado, esta misma comunidad de monjas solicitaría en ocasiones autorización episcopal para ciertos asuntos. Por ejemplo, el 26 de octubre de 1435 Juan Fernández, clérigo de la parroquia de San Miguel de Cuenca y lugarteniente de don Pedro Arias Bahamonde, deán de Orense y vicario general en la diócesis conquense, concedió autorización a Rodrigo Cabeza de Vaca, vecino de Cuenca y procurador de las monjas de Santa Clara de Alcocer, para que éstas pudiesen sacar uno o más traslados de una bula apostólica de Urbano VI (27-III-1379) en la que se concedían diversas mercedes al monasterio[407].

Desde luego, las Órdenes religiosas con posesiones en el obispado que no tuviesen privilegio de exención decimal debían contribuir al pago del diezmo, aunque ello muchas veces daba lugar a conflictos con el clero parroquial. Estos conflictos se producían porque algunos legos hacían donaciones enfitéuticas de bienes a los religiosos, para de este modo no pagar el diezmo a sus parroquias por dichos bienes, puesto que el diezmo lo retenían los religiosos en perjucio del clero parroquial, y ello a pesar de que los donantes continuaban labrando ellos mismos las tierras que habían entregado. Por este motivo el obispo don Juan Cabeza de Vaca, en el sínodo de 1399, mandaría que todas las Órdenes religiosas que no tuviesen privilegios de exención decimal entregasen puntualmente el diezmo correspondiente por las

---

[405] *Ibid.*, nº 29.

[406] I. Rodríguez de Lama, *La documentación pontificia de Alejandro IV*, nº 432.

[407] AHN, *Clero*, carp. 568, nº 16.

tierras que les donasen los legos, y que dicho diezmo se pagara en las parroquias de los labradores de las posesiones[408]. Estas disposiciones serán reiteradas de nuevo por Fray Lope de Barrientos en 1446, mandándose también en esta ocasión que los conservadores de los bienes de las Órdenes religiosas no exigieran por fuerza el pago de diezmo a ningún clérigo ni lego con cartas citatorias sin previa licencia episcopal[409].

Una última cuestión relativa al diezmo y en la que frecuentemente se veían involucrados algunos religiosos es la que venía dada por las absoluciones que a veces estos últimos, por su propia cuenta, otorgaban a favor de las personas que no pagaban correctamente sus diezmos o parte de ellos, sin previamente haberse efectuado la entrega y restitución de los diezmos. Por este motivo, el obispo don Bernal Zafón, en el sínodo de 1364, prohibirá que dichas absoluciones se otorguen sin autorización episcopal para ello[410], y lo mismo dispondrá don Juan Cabeza de Vaca en la asamblea sinodal de 1399[411]. En definitiva, lo que se estaba tratando de dejar claro era la plena potestad jurisdiccional del obispo en materia decimal.

IV-RELACIONES CON LAS ÓRDENES MILITARES

Un último ámbito de manifestación de las relaciones intraeclesiales es el que viene dado por las mantenidas entre la Iglesia conquense y aquellas Órdenes militares que tenían algún tipo de presencia en el obispado. De estas últimas, sin duda era la Orden de Santiago la que mayor presencia y propiedades tenía en territorio conquense, fundamentalmente en el sector occidental de la diócesis, donde se encontraba situado el convento de Uclés, sede principal de la Orden. Ello motivaría desde un primer

---

[408] ACC, *Estatutos*, f. 41v.

[409] *Sínodo de 1446*, ff. 24v-25r.

[410] BN, Ms. 13071, ff. 236v-237r.

[411] ACC, *Estatutos*, f. 46r.

momento el mantenimiento de unas intensas relaciones, muchas veces conflictivas, con la Iglesia conquense. Pero también otras Órdenes militares, aunque en muchísima menor medida, poseían algunas propiedades en la diócesis, llegando a mantener por ello algún tipo de relación con la Iglesia de Cuenca. Veamos a continuación de qué modo se desarrollaron todas estas relaciones.

1-Relaciones con la Orden de Santiago

En torno a Uclés se formó a partir del último cuarto del siglo XII una de las encomiendas santiaguistas más importantes de toda la Península Ibérica, hallándose inmersa en gran parte dentro del ámbito jurisdiccional de la diócesis de Cuenca. Así, desde 1174, año en que los santiaguistas recibieron Uclés, y a lo largo del siglo XIII se iría produciendo la acumulación de numerosas posesiones en el espacio territorial conquense por parte de la Orden, la cual, además, fundaría un buen número de *iglesias propias* que quedarían bajo su dependencia. Esto implicó el mantenimiento de unas muy estrechas relaciones con la Iglesia de Cuenca durante toda la época bajomedieval y también en siglos posteriores. De este modo, ya desde fines del siglo XII y muy poco después de tener lugar la fundación de la diócesis, el obispo y cabildo catedralicio conquense comenzarían a realizar los primeros acuerdos con la Orden de Santiago tanto en materia económica -sobre todo derechos decimales- como jurisdiccional, lo que no evitó que, junto a momentos de pacífica convivencia, también surgiesen frecuentes conflictos que, con mayor o menor intensidad según las épocas, se sucederían a lo largo de los siglos bajomedievales, tal como a continuación se verá.

A) *Relaciones económicas*

Una buena parte de las relaciones entre la Iglesia conquense y la Orden de Santiago tuvieron motivaciones de carácter económico, lo cual, al igual que sucedió con los pleitos de los santiaguistas con la Iglesia de Toledo, haría muy pronto

necesario el establecimiento de diversos acuerdos con el obispo y cabildo catedralicio conquense.

El primero de estos acuerdos fue firmado hacia 1193 entre el obispo de Cuenca, don Juan Yáñez, y el maestre de Santiago Sancho Fernández. En él se trató en general sobre el tema de las iglesias que la Orden edificaba o había edificado en lugares de repoblación dentro de la diócesis de Cuenca. El maestre declaró que eran parroquias exentas por privilegio pontificio, pero reconoció que estaban dentro del obispado conquense, por lo que, en aras a una convivencia pacífica entre las dos instituciones, accedía, de acuerdo con sus freiles, a ceder al obispo y cabildo algunos derechos sobre ellas. El prior de Uclés se comprometió a entregar cada año al obispo la cuarta parte de los diezmos del vino, pan y corderos, y la mitad de las caloñas; se responsabilizó también de decicir cuándo una parroquia de nueva construcción era capaz de tributar diezmo. El obispo se comprometió a proteger a los freiles que se querellaran por agravios cometidos contra ellos dentro de su diócesis. Los santiaguistas se reservaron todos los demás derechos episcopales en las iglesias edificadas o por edificar en la diócesis de Cuenca -tal como les había concedido Alejandro III en 1175-, especificándose los ingresos por administración de los sacramentos y de justicia. Se creó, asimismo, en este acuerdo una comisión mixta de tres canónigos del cabildo catedralicio conquense y tres freiles del convento de Uclés, para que se ocuparan de la resolución pacífica de futuros conflictos. Finalmente, la composición sería confirmada por Alfonso VIII[412].

Antes de 1224, el obispo don García Ruiz quiso modificar este acuerdo, para lo cual lo declaró nulo, ya que no llevaba el sello del cabildo catedralicio conquense. Exigió que se le dieran en las iglesias santiaguistas de Santa Cruz, Belmonte, La Zarza, Cabeza Lebrera, Villaverde, Cabeza Mesada, Villoria, Magaceda y La Muela los mismos derechos episcopales que percibía en las demás iglesias de la diócesis, haciendo caso omiso del privilegio fundacional de la Orden. Demandaba también 6000 mrs., en concepto

---

[412]Milagros Rivera Garretas, *La encomienda, el priorato y la villa de Uclés*..., pp. 208-209.

de frutos y rentas atrasados, por la iglesia de Valtablado[413]. Los freiles apelaron al papa, que nombró como jueces al arzobispo y deán de Toledo y al arcediano de Talavera; éstos encomendaron el asunto al obispo Tello de Palencia y a los arcedianos Pedro y Pedro Martín de Carrión, y más tarde al arcediano de Sigüenza Rodrigo, al arcediano de Cuenca Lope Rodríguez y al freile santiaguista Pedro Vidas, quienes arbitrarían una composición que fue firmada en enero de 1224 en el convento de Uclés.

En ella se determinó que tanto en lo económico como en lo espiritual el prior de Uclés actuaría como intermediario entre el clero de las iglesias de la Orden y el obispo conquense, a quien los freiles reconocieron como prelado. Éste percibiría la cuarta parte de los diezmos de pan, vino y corderos y la mitad de las caloñas, como se había acordado en 1193, quedando encargado el prior de pagar al obispo las sumas que le correspondiesen. Cada vez que accediera al cargo un prior nuevo, el obispo de Cuenca enviaría a Uclés a uno de sus arcedianos con sus cartas con el fin de que ese prior hiciera constar su aceptación de esta cláusula, a cambio de lo cual recibiría del diocesano la cura de almas. De este modo, aunque el obispo conquense obtuvo en las iglesias santiaguistas de su diócesis una parte de sus rentas proporcionalmente menor que el arzobispo de Toledo en las de la suya, lo cierto es que el acuerdo asoció al prior de Uclés con el prelado conquense en el gobierno de las iglesias de la Orden. Parece como si el obispo hubiera dado al prior la cura de almas a cambio de una participación en las rentas y del asegurarse que las villas de repoblación santiaguista en la diócesis conquense no dejarían de formar parte de ésta. Así, las iglesias de la

---

[413]En 1185 la Orden de Santiago había recibido Valtablado por donación de García de Alberit. Algunos años más tarde, en 1201, se llegaría a un acuerdo con el concejo de Cuenca mediante el cual la aldea de Villanueva de los Escuderos quedaba para el concejo, en tanto que los santiaguistas conservaban, sólo de momento, el enclave de Valtablado, que poco después pasaría al concejo de Cuenca para, en 1231, ser entregado por éste al cabildo catedralicio para que se encargase de su repoblación. José María Sánchez Benito, *Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV*, pp. 18-19. No obstante, algún tiempo después Valtablado volvería de nuevo a ser propiedad de la Orden de Santiago, si bien el cabildo catedralicio conquense tendría derecho a percibir la cuarta parte de los diezmos de pan y corderos del lugar, renta a la que se denominó con el nombre de *refitor*.

Orden quedaba integradas dentro de la organización eclesiástica diocesana[414].

Una vez conseguida esta integración, resultaba más fácil para el obispo exigir una ampliación de sus derechos, hasta equipararlos, si era posible, con los que percibía en las villas de realengo. Fue por ello por lo que el obispo don Gonzalo Ibáñez Palomeque y el cabildo catedralicio acabarían exigiendo a los freiles que les pagaran diezmo los quinteros de la Orden y los freiles casados que vivían en la diócesis de Cuenca[415], y que las posesiones que los santiaguistas habían adquirido después de 1214 cotizaran al obispo sin gozar de exención alguna. También pedía el obispo los diezmos de las iglesias de Gúzquez, Alcardete y otras que los freiles habían construído recientemente en términos de Uclés. En 1241 se llegó a un acuerdo sobre todos estos puntos: los santiaguistas cedieron al obispo don Gonzalo la mitad de los diezmos de sus quinteros y freiles casados que residían en la diócesis de Cuenca, y a su vez el obispo renunció a los diezmos de las posesiones adquiridas por la Orden con posterioridad al IV Concilio de Letrán, dándoselos a los freiles para que los emplearan en la defensa del Cristianismo. En lo relativo a las iglesias edificadas recientemente en términos de Uclés, se decidió seguir el acuerdo de 1224, es decir, el obispo obtuvo la cuarta parte de sus diezmos y la mitad de sus calo-ñas[416].

Otra cuestión muy a tener en cuenta en las relaciones económicas de la Iglesia de Cuenca con la Orden de Santiago durante esta época es la que viene dada por la competencia que se dio entre ambas instituciones por el control de los molinos hidráulicos. De hecho, durante los siglos XII y XIII el destinatario más frecuente de las transmisiones de molinos hidráulicos

---

[414]Milagros Rivera Garretas, *La encomienda, el priorato y la villa de Uclés*..., pp. 209-210.

[415]Quinteros serían en este contexto los familiares, cofreiles o donados de la Orden, que entregaban a la misma una parte de sus bienes -por lo general el quinto de libre disposición- a cambio de la participación en los bienes espirituales de la Orden; estos famililares, que generalmente conservaron el usufructo vitalicio de sus tierras, pagaban diezmo a la Orden y no al obispo. Lo mismo sucedía con las heredades de los freiles casados, quienes pagaban diezmo a los freiles clérigos.

[416]*Ibid.*, p. 211.

en Cuenca resultó ser, con mucho, la Orden de Santiago, seguida por el obispo y cabildo catedralicio, si bien, mientras que en el caso de la Orden de Santiago el proceso se inicia de manera muy precoz y se interrumpe en torno a 1225, para no resurgir ya, al parecer, a lo largo del siglo XIII, el cabildo, en cambio, cuyo papel en este sentido comienza más tardíamente, es la entidad que actúa con mayor regularidad[417].

La oposición de intereses fue particularmente dura entre el cabildo catedralicio, representado por el obispo don Gonzalo Ibáñez, y los santiaguistas del hospital de Cuenca en lo que se refiere al control de una serie de molinos situados junto al Júcar en las zonas de Fresneda de Altarejos, La Peraleja y La Parra de las Vegas. Así, en 1237 el obispo llegaría a un acuerdo con Pedro González, maestre de Santiago, en virtud del cual la Orden entregaría la mitad de los molinos de La Peraleja, la mitad de la presa situada encima de los molinos de Fresneda y la mitad de unas aceñas que fueron de Martín de Barcha. A cambio, la Orden recibiría de parte del prelado la mitad de los llamados *molinos del obispo*, la mitad de los molinos de La Parra, la mitad de dos muelas en la presa de Fresneda y la mitad de la presa situada debajo de La Peraleja. Como consecuencia de este acuerdo, el control y propiedad de los molinos situados en esta zona del Júcar pasaría finalmente a manos del obispo y cabildo catedralicio conquense, pues la Orden sólo acabaría manteniendo los molinos situados en la presa del Júcar bajo el puente de Cuenca, que posteriormente serían transformados en batanes, mucho más productivos cuando el desarrollo de la industria textil conquense dé nuevas posibilidades de utilización a los molinos hidráulicos[418].

Pero, a pesar de esta importante presencia del elemento conflictivo, para estas etapas iniciales también contamos con algún que otro ejemplo sobre relaciones cordiales entre el obispo de Cuenca y la Orden de Santiago. Así, el 14 de julio de 1237 se realizaba una permuta entre el obispo don Gonzalo Ibáñez y el

---

[417] Santiago Aguadé Nieto, <<Molino hidráulico y sociedad...>>, pp. 269-270.

[418] Paulino Iradiel Murugarren, <<Bases económicas del hospital de Santiago de Cuenca...>>, pp. 191-192.

cabildo conquense, por un lado, y el maestre de Santiago don Pedro González y el convento de Uclés, por otro, a quienes el obispo y cabildo cedieron el derecho que les pertenecía sobre el portazgo de Uclés a cambio de unas tiendas en Cuenca que pasaron a la fábrica de la catedral, así como unas casas, viñas y heredades que la Orden tenía en Alcocer[419]. Por otro lado, el 28 de septiembre de 1241, el mismo prelado verificaría por mandato de Fernando III el amojonamiento de términos entre Alarcón y Uclés, en presencia del maestre don Rodrigo Íñiguez y de los concejos de Uclés y Alarcón[420].

Paralelamente al mantenimiento de todas estas relaciones con el obispo y cabildo catedralicio conquense, la Orden de Santiago también tendría que establecer desde muy pronto relaciones con el clero de Uclés. Cuando los freiles obtuvieron el castillo y la villa de Uclés en 1174, ésta estaba ya poblada en parte. Por eso sus iglesias pertenecieron al obispado de Cuenca de pleno derecho y no a la Orden, con excepción de la iglesia conventual. Además, dentro de la organización diocesana conquense, Uclés era cabeza de arciprestazgo. Con el fin de hacer frente a posibles presiones de la Orden, los clérigos de las seis collaciones de Uclés -Santa María, San Nicolás, Santiago, La Trinidad, San Pedro y San Andrés- se agruparon en un cabildo o cofradía a cuyo frente había un prior. Además de las iglesias de Uclés y de su término, también dependió de esta cofradía la iglesia de Belinchón. Fue precisamente esta cofradía la que pronto habría de enfrentarse con los clérigos santiaguistas del convento de Uclés.

La fricción entre las dos instituciones se manifestó durante la primera década del siglo XIII, y tal vez estuvo relacionada con un aumento de la población de la villa como consecuencia del *foro optimo* que le había sido concedido en 1179. El obispo de Cuenca no intervino en el conflicto, pues el objeto de la disputa no fue el diezmo ni las procuraciones de visita, sino los derechos por la administración directa de los sacramentos, las

---

[419] AHN, OOMM-Uclés, carp. 98, nº 10.

[420] AHN, *Sellos*, carp. 73, nº 7.

ofrendas de pie de altar, los legados testamentarios y las donaciones vinculadas con la elección de sepultura.

Al entablarse el pleito, los clérigos de Uclés apelaron al papa Inocencio III, quien en 1209 nombraría jueces delegados al deán, chantre y arcediano de Sigüenza. Poco después, en 1210, se firmó un acuerdo. De los legados que hicieran a la Orden los clérigos o feligreses de Uclés o de Belinchón al elegir sepultura en el convento, cedieron los freiles un tercio a los curas de la parroquia a la que había pertenecido el feligrés en vida, con excepción de los caballos y armas del donante, que pasarían íntegros a los santiaguistas; si el feligrés legaba algo a su parroquia o se enterraba en el cementerio a ella anejo, no tendrían participación los freiles; si legaba algo a éstos al enterrarse en la jurisdicción de su parroquia, nada podrían exigir de estos legados los clérigos seculares. Por otro lado, de las posesiones de los parroquianos de Uclés en las aldeas con iglesia santiaguista, los freiles cedieron a los clérigos de la parroquia del difunto un tercio de lo que éste les legara al elegir sepultura, y lo mismo se haría en los lugares en que las iglesias no fueran de la Orden[421].

En el mismo acuerdo también se determina que cuando un parroquiano de Uclés marchara a repoblar otras tierras, conservando sus heredades en Uclés, y al morir se hiciera enterrar en cementerios de la Orden, los freiles darían un tercio de sus legados a los clérigos de la parroquia a la que hubiese pertenecido el difunto.

En cuanto a los vecinos de Uclés y de su término que tomaran el hábito de Santiago, se acordó que si lo hacía cuando estaban enfermos y morían de esa enfermedad, los freiles darían a la parroquia del difunto un tercio de su legado, excepto armas y caballos; si el feligrés tomaba el hábito estando en pleno uso de sus facultades, los clérigos no tendrían participación alguna en lo que el familiar donara a la Orden, aunque mientras viviera pagaría diezmo a la parroquia que le administrara los sacramentos, sin participar de la exención de la Orden. Por último, los

---

[421] Milagros Rivera Garretas, *op. cit.*, pp. 211-212.

quinteros de la Orden se obligaron a pagar la mitad de sus diezmos a sus parroquias respectivas y la otra mitad a los freiles.

Así, pues, aunque la Orden en principio no tenía derechos sobre las parroquias de Uclés, ya existentes cuando se asentó en la villa, finalmente su poder económico y militar en una tierra de reconquista y de frontera harían que se canalizaran hacia ella algunos recursos materiales en detrimento del clero diocesano, que tenía tradicionalmente derecho a ellos. En cambio no fue un conflicto de jurisdicciones en sentido estricto, pues éstas ya estaban claras en Uclés. Este acuerdo de 1210 entre la cofradía de clérigos parroquiales de Uclés y los freiles clérigos del convento de la villa parece que en general se cumplió, y a partir de entonces las relaciones entre los dos grupos fueron normalmente de mutuo respeto y convivencia. En 1276, por ejemplo, acordaron la celebración en común de aniversarios por las almas de un matrimonio de la villa[422].

Situándonos ya en el siglo XIV, a comienzos de esta centuria nos encontramos con un conflicto que estaba latente entre la Orden de Santiago y el obispo conquense don Pascual. En 1306 éste se quejaría al papa de que el maestre de Santiago, Juan Osórez, y el comendador mayor de Segura, Diego Moñiz, le habían agraviado respecto a ciertas casas y rentas, por lo que el 13 de junio de ese mismo año el papa Clemente V comisionó al arzobispo de Toledo para que actuase como juez en el pleito[423]. Pero en otro documento de 1307 se explica que en realidad lo que había sucedido es que el palacio que el obispo de Cuenca tenía en Huete se había incendiado mientras lo habitaban el comendador mayor de Segura y otros caballeros santiaguistas. Finalmente, el 20 de septiembre de 1307, el arcediano de Cuenca Alonso Martínez, los arcedianos de Huete y Alarcón, el comendador de Uclés don Pedro Díaz, y el prior del mismo convento don Pelay Rodríguez, como jueces

---

[422] *Ibid.*, pp. 213-214.

[423] AHN, OOMM-Uclés, carp. 311, nº 21.

árbitros pronunciarían una sentencia compromisal en el pleito, llegándose de este modo a una avenencia entre las partes[424].

Poco tiempo después, el 16 de junio de 1309, sería necesaria una nueva intervención de Clemente V comisionando al deán y al arcediano de Medinaceli en un nuevo pleito que había surgido entre el prior de Uclés, don Pelay Rodríguez, y el obispo don Pascual, motivado por cierta suma de dinero que el anterior prior santiaguista, don Yagüe, había prestado al obispo conquense y ahora arzobispo de Toledo don Gonzalo Díaz Palomeque; este dinero se había gastado en las necesidades de la catedral conquense, y ahora el obispo don Pascual se negaba a restituirlo al prior de Uclés[425]. El 5 de abril de 1311 el papa comisionaría al abad de Santa Leocadia, en la Iglesia de Toledo, para que actuase como juez en un nuevo pleito surgido entre el convento de Uclés y el obispo de Cuenca don Pascual acerca de la iglesia de Cuzques, dependiente de la Orden de Santiago[426]. Desconocemos cuál fue la resolución de estos pleitos, pues la documentación nada señala al respecto.

Ya hacia mediados de siglo tendrían lugar varias intervenciones de Inocencio VI en relación con la Orden de Santiago. La actuación del papa estuvo encaminada a tratar de resolver ciertas disputas que se venían produciendo entre Francisco de San Máximo, notario y secretario papal que poseía una canonjía en la Iglesia de Cuenca, y los santiaguistas. Seguramente los conflictos comenzaron ya en 1352, o quizá antes, pues el 31 de enero de 1353 el papa rogaba al infante don Fadrique, maestre de Santiago, que interviniese a fin de que el comendador mayor Ruy Chacón no impidiese a Francisco de San Máximo la percepción de ciertos prestimonios que le pertenecían en la diócesis de Cuenca, y que estaban situados en territorio santiaguista: <<Corral de Almager, Cabeça Messada, Cuzques et Cabeça Lebrera prestimonia, conchensis

---

[424]AHN, OOMM-Uclés, carp. 98, nº 16.

[425]Milagros Rivera Garretas, *La encomienda...*, nº 238.

[426]AHN, OOMM-Uclés, carp. 98, nº 18.

diocesis>>[427]. En otro documento de idéntica fecha al anterior el papa rogará directamente a Ruy Chacón que no impida a Francisco de San Máximo la percepción de dichos prestimonios[428].

Sin duda lo que más llama la atención de esta primera intervención pontificia en dicho conflicto es la ineficacia que tuvo para resolver el problema en cuestión. Así, en años posteriores no sólo seguirá latente el mismo problema, sino que incluso se agudizará, a pesar de las reiteradas intervenciones de Inocencio VI en el caso. De este modo, durante los años siguientes no sólo será Ruy Chacón el que impida a Francisco de San Máximo la percepción de sus prestimonios, sino que también otros comendadores y el mismo maestre don Fadrique harán lo mismo, siendo ello motivo de nuevas intervenciones pontificias para tratar de cortar el conflicto[429].

Así, pues, a lo largo de los años en que la documentación nos informa sobre este conflicto se puede apreciar, por un lado, la progresiva ineficacia de las intervenciones pontificias para resolver el problema, y por otro lado el fuerte sentimiento de solidaridad que se dio entre los miembros de la Orden de Santiago, siempre dispuestos a defender a toda costa sus intereses económicos en aquellos territorios de la diócesis sometidos a su control.

A partir del último tercio del siglo XIV el diezmo pasará a convertirse en el principal motivo de disputa entre la Orden de Santiago y el obispo y cabildo catedralicio conquense. Así, ya en las peticiones que el cabildo presentó a Enrique II probablemente en las Cortes de Toro de 1371 figura una queja exponiendo que los comendadores y caballeros santiaguistas no

---

[427] José Zunzunegui Aramburu, *Bulas y cartas secretas de Inocencio VI*, doc. 5.

[428] *Ibid.*, doc. 6.

[429] *Ibid.*, docs. 74 (13-IV-1354), 144 (7-III-1355), 215 (29-III-1356), 271 (6-XI-1356). En el conflicto acabaría interviniendo también el noble conquense Fernando Gómez de Albornoz. Prueba de ello es que el 26 de marzo de 1355 Inocencio VI mandaría al arzobispo de Zaragoza, Pedro López de Luna, que hiciese restituir a Francisco de San Máximo el dinero de su canonjía y prebenda conquense que Fernando Gómez de Albornoz había mandado usurpar al mercader que lo llevaba a la Curia aviñonesa. ASVat., *Instrumenta Miscellanea*, nº 2020.

permitían a los canónigos sacar sus rentas decimales de pan, vino y ganado en los lugares dependientes de la Orden[430].

En atención a las constantes protestas del cabildo en materia decimal, el 23 de enero de 1377 el maestre de Santiago, don Ferrand Osórez, mandará a don Alfonso Pérez Ponce, comendador de Uclés, que respete la libre saca de los diezmos de pan y vino de aquellos lugares que desde antiguo habían diezmado al cabildo catedralicio conquense y a las iglesias parroquiales en el Común de Uclés[431]. Y el 25 de marzo de 1378 el comendador don Alfonso Pérez Ponce mandará también que al cabildo no se le cobre portazgo por el pan y vino que saquen de los lugares de la Orden, dado que tenían un privilegio de exención al respecto concedido por Alfonso VIII; previamente el cabildo había presentado al comendador varias quejas diciendo que se les cobraba dicho portazgo, a pesar de estar exentos de su pago[432].

Pero estas primeras medidas no lograrán erradicar definitivamente los conflictos, por lo que en años sucesivos será también necesaria la intervención regia. Prueba de ello es la provisión real de Juan I, dada el 23 de diciembre de 1387, mandando al prior de Uclés, don Ferrand Sánchez, y al comendador don García Ferranz que no impidiesen al cabildo catedralicio conquense sacar libremente el diezmo que les pertenecía en la villa de Uclés y lugares de su Común, y que tampoco se les defraudase en las rentas que les pertenecían en Tarancón y algunos lugares de la Orden que recientemente habían cambiado de nombre, ni se les cobrase portazgo ni peaje[433]. Poco después, el 2 de agosto de 1390, el comendador de Uclés, don García Ferranz de Villagarcía,

---

[430] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 134v.

[431] ACC, siglo XIV, nº 276.

[432] ACC, siglo XIV, nº 278.

[433] <<E otrosi, que por quanto la dicha yglesia a de aver parte de los diesmos en çiertos lugares... disen que los defraudan en su derecho, que agora nuevamente avedes mudado el nonbre de algunos de los dichos lugares en que la dicha iglesia a parte...por el qual mudamiento non les quieren rrecudir con la parte que a la dicha iglesia e a ellos pertenesçen, desiendo que non es el lugar que solian. Otrosi, que de fecho contra derecho les usurpades e ocupades los diesmos de algunas tierras que llamades arroturas, por quanto algunos tienpos se dexaron e agora se tornan nuevamente a labrar por los labradores del lugar de Tarancon, aldea de la dicha villa de Ucles, e de otros lugares de su Comun, en los diesmos de los quales disen que vos nin los de la dicha orden nunca ovieron nin oviestes nin an nin avedes parte alguna...>>. ACC, siglo XIV, nº 308.

mandará que los arrendadores del portazgo de su encomienda respeten al obispo y cabildo catedralicio conquense su exención de pago de portazgo cuando sacaban el diezmo que les pertenecía en los lugares de dicha encomienda[434].

Entrando ya en el siglo XV, el 7 de enero de 1401 el comendador de Santiago, tras haberse realizado un convenio con el obispo y cabildo catedralicio conquense, pronunciaría una sentencia mandando que las tierras de la Orden en el Común de Uclés que se labraban desde antiguo y siempre habían diezmado al cabildo deberían continuar entregando a este último la parte que correspondiese de sus diezmos, mientras que las tierras que fuesen de nuevas arroturas diezmarían a la Orden[435]. Pero, a pesar de esta sentencia, lo cierto es que el propio comendador de Uclés, Ferrant González, sería remiso a la hora de respetar lo establecido, lo que provocaría las quejas del cabildo catedralicio conquense ante el maestre de Santiago don Lorenzo Suárez de Figueroa, quien el 15 de junio de ese mismo año mandaría al comendador de Uclés que respetase la concordia establecida tiempo atrás, permitiendo al cabildo la libre saca de sus diezmos en los lugares que le correspondiese[436]. El 11 de marzo de 1402 el maestre santiaguista tuvo que repetir el mismo mandato[437], y lo mismo sucedería el 1 de julio de 1404[438], lo que da una clara idea de la resistencia ofrecida por el comendador.

Pero no sólo era éste quien impedía al cabildo la percepción del diezmo en los lugares de la Orden, sino que los concejos y alcaldes de la villa y del Común de Uclés también hacían lo mismo, por lo que el 5 de noviembre de 1406 el maestre de Santiago mandaría a estos últimos que no pusieran impedimentos

---

[434]ACC, siglo XIV, nº 277.

[435]Sanz, nº 593.

[436]ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 233.

[437]ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 234.

[438]ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 236.

al cabildo para la libre saca del diezmo del pan que les correpondía en los lugares de la Orden[439].

Mientras tanto el año anterior, a 18 de mayo de 1405, el comendador santiaguista de Haro, Pedro Agudo de Villodre, había ordenado que los recaudadores de los derechos y diezmos en los lugares de su encomienda no percibiesen nada de las tierras *llecas*[440] de Haro, dejando libres sus diezmos al cabildo catedralicio conquense, aunque sólo hasta que se determinase por sentencia si dichos diezmos pertenecían a la Orden o a la Iglesia de Cuenca[441].

Junto a esta conflictividad en torno al diezmo, también continuarán estando presentes algunas disputas sobre el cobro de portazgos. En 1411 el obispo don Diego de Anaya se quejó de que los santiaguistas pretendían cobrar portazgo a la Iglesia de Cuenca alegando ciertos privilegios. Como consecuencia de esta queja, el 22 de diciembre de dicho año el infante don Fernando, tutor y gobernador del reino, mandará al comendador de Uclés que le envíe dichos privilegios para comprobar qué hay de cierto en ello y establecer así una solución al conflicto[442]. Finalmente, mediante un privilegio real emitido el 24 de mayo de 1412, se declarará la plena exención del pago de portazgo en Uclés y los lugares de su Común a favor del obispo, cabildo catedralicio, beneficiados y clérigos de la diócesis de Cuenca[443], por lo que el 4 de junio de ese mismo año el maestre de Santiago don Enrique mandaría que no se cobrase dicho portazgo[444].

Durante la segunda mitad del siglo XV sabemos que el obispo de Cuenca percibía, entre otras rentas, la mitad de los cuartos del diezmo de pan, vino y ganado en los lugares de Cabeza Mesada,

---

[439] ACC, s.a. caj. 4, leg. 16, nº 239.

[440] Tal como ya se señaló con anterioridad, este era el nombre que en el obispado de Cuenca recibían aquellas tierras que no estaban situadas dentro de los límites de ninguna jurisdicción parroquial.

[441] ACC, s.a. caj. 3, leg. 14, nº 196.

[442] AHN, Micr., rollo 14213.

[443] AHN, Micr., rollo 14213.

[444] AHN, Micr., rollo 14213, s.a. caj. 2, leg. 9, nº 105.

La Zarza y Villaverde, compartiendo dicha mitad con el colegio de San Bartolomé de Salamanca, donde estudiaban los futuros dirigentes de la Orden. Además, el prelado conquense también recibía los diezmos completos del lugar de Tarancón[445]. Durante esta época los conflictos decimales entre la Iglesia de Cuenca y la Orden aún continuarán. Así, por ejemplo, el 21 de junio de 1473 el obispo Albanense, Rodrigo, como legado apostólico de Sixto IV, comisionaría al abad de Monsalud para que actuase como juez en el pleito que el obispo, cabildo catedralicio y clerecía conquense tenían contra el prior de Uclés y su Orden, a quienes acusaban de no permitirles la libre saca del diezmo perteneciente a la Iglesia de Cuenca en los lugares del Común de Uclés, tal como establecían los anteriores acuerdos[446] que, como se ve, eran objeto de constante violación por parte de los santiaguistas.

Ya a principios del siglo XVI se produciría otro grave conflicto entre el caballero santiaguista Tristán de Molina y el cabildo catedralicio conquense referente a la renta del *refitor* de Valtablado. Pero previamente ya había tenido lugar otro pleito sobre Valtablado entre Tristán de Molina y Gómez Carrillo, alcaide de la fortaleza de Arbeteta. El lugar de Valtablado había sido donado inicialmente en 1185 por García de Alberit a la Orden de Santiago, para pasar después a posesión del concejo de Cuenca y, en 1231, ser entregado por éste al cabildo catedralicio para que se encargase de su repoblación[447], si bien finalmente volvería a propiedad de la Orden de Santiago.

A fines del siglo XV los Reyes Católicos hicieron merced a su criado Tristán de Molina, caballero santiaguista, de todas las rentas pertenecientes a la Orden en Valtablado <<desde tienpo del infante don Enrique>>, a pesar de lo cual Gómez Carrillo se apropió poco después de dichas rentas. En enero de 1498 Alonso Carrillo, en nombre de su padre Gómez Carrillo, presentaría a la Orden de Santiago una petición quejándose de que la concesión

---

[445] P. A. Porras Arboledas, *Los señoríos de la Orden de Santiago...*, I, p. 411.

[446] ACC, s.a. caj. B, nº 16.

[447] José María Sánchez Benito, *Las tierras de Cuenca y Huete...*, pp. 18-19.

hecha en favor de Tristán de Molina era injusta e iba contra los derechos de su padre, quien alegaba que Valtablado había pertenecido a sus antepasados desde <<tienpo inmemorial>> con la jurisdicción civil y criminal, pechos y derechos. En cuanto a los diezmos de Valtablado, Alonso Carrillo alegaba que <<avian seydo conçedidos a los anteçesores del dicho Gomes Carrillo, e porque en poder e facultad para ello avya tenido antes del conçilio lateranense e por ser la cosa ynmemorial>>.

El 22 de enero de 1498 los Reyes Católicos dieron una sentencia en el pleito contra Gómez Carrillo, determinándose que los diezmos de Valtablado pertenecían a Tristán de Molina en nombre de la Orden de Santiago, y condenando a Gómez Carrillo a restituir en el plazo de treinta días los diezmos por él usurpados. A pesar de la apelación presentada poco después por este último, el 15 de mayo de 1499 la sentencia será ratificada de nuevo, reservándose además en favor de la Iglesia de Cuenca el llamado *refitor* de Valtablado, consistente en la cuarta parte de los diezmos de pan y corderos de dicho lugar que la Orden de Santiago, por la concordia antigua que había sido establecida en enero de 1224 con el obispo y cabildo catedralicio conquense, estaba obligada a pagar a éstos anualmente.

Precisamente por la cuestión del *refitor* acabaría surgiendo un nuevo pleito, en esta ocasión entre Tristán de Molina y el cabildo catedralicio. En 1515 este último se quejaba de que Tristán de Molina no les pagaba dicha renta decimal desde hacía más de doce años, por lo que habían fulminado contra él una sentencia de excomunión. Para la resolución del pleito se formó un tribunal integrado por el prior de Uclés y dos canónigos de Cuenca, quienes de forma conjunta, el 30 de junio del mencionado año de 1515, pronunciarían una sentencia declarando que el *refitor* de Valtablado pertenecía al obispo y cabildo conquense, y condenando a Tristán de Molina a pagar a estos últimos todos los diezmos debidos desde hacía años por este concepto, tras cuyo pago debería ser absuelto de la sentencia de excomunión que recaía sobre él. En adelante Tristán de Molina o la persona que después de él poseyera en nombre de la Orden los diezmos de Valtablado habría de entregar anualmente al cabildo catedralicio

conquense la cuarta parte de los diezmos de pan y corderos, que se conocía con el nombre de *refitor*[448].

B) *Relaciones jurisdiccionales*

El obispo conquense, en sus relaciones con la Orden de Santiago, frecuentemente se preocuparía por dejar bien patente su posición de máxima autoridad eclesiástica dentro de todo el territorio diocesano, aún a costa de ceder a la Orden algunos derechos económicos, como así se hizo. Debido a ello, sobre todo en las etapas iniciales, a veces se producirán algunos forcejeos entre el prelado y la Orden para arrogarse una parcela mayor de autoridad, llegándose finalmente a acuerdos sobre sus respectivas competencias jurisdiccionales.

Así, en la composición que se estableció en enero de 1224 entre la Orden de Santiago y el obispo conquense don García, éste concedió a perpetuidad al prior de Uclés la cura de almas en todas las iglesias en disputa. Tanto en lo espiritual como en lo económico el prior actuaría de intermediario entre el clero de las iglesias de la Orden y el obispo, a quien los freiles reconocieron como prelado, integrándose así en la estructura eclesiástica diocesana. Por otro lado, cada vez que accediera al cargo un nuevo prior, el obispo de Cuenca enviaría a Uclés a uno de sus arcedianos con sus cartas, con el fin de que el prior hiciera constar su obediencia al obispo y su aceptación de entregar a la Iglesia de Cuenca la cuarta parte de los diezmos de pan, vino y corderos y la mitad de las caloñas, a cambio de lo cual recibiría del prelado la cura de almas. Los freiles seguirían presentando a los clérigos de sus iglesias y el obispo los instituiría. El prior de Uclés actuaría como juez eclesiástico en todas las iglesias de la Orden sitas en territorio de la diócesis de Cuenca, aunque en los casos difíciles el obispo y prior juzgarían conjuntamente.

El prelado conquense, además, retendría ciertas procuraciones de visita sobre las iglesias de la Orden como símbolo de su

---

[448]Todo el proceso del conflicto entre Gómez Carrillo y Tristán de Molina, así como el posterior litigio entre este último y el cabildo catedralicio conquense, están recogidos en: AHN, Micr., rollo 14228.

potestad jurisdiccional. Dos procuraciones, de siete maravedís cada una, en dos iglesias de su elección; como catedrático, cuatro mencales en las iglesias de Santa Cruz y Cabeza Lebrera, y dos mencales en las demás. Estas mismas condiciones regularían las relaciones entre la Orden y el obispo en todas las iglesias que los santiaguistas construyeran en el futuro en los lugares que poseyeran dentro de la diócesis de Cuenca[449]. De este modo, las iglesias de la Orden quedaban integradas en el sistema eclesiástico diocesano, manteniendo una cierta dependencia jurisdiccional hacia el obispo conquense.

En adelante, tras la realización de esta composición, en las parroquias dependientes de la Orden fue el prior de Uclés quien se encargó de juzgar en los procesos menores de Derecho Canónico. Sin embargo, fueron el prior y el obispo juntos quienes juzgaban en los procesos mayores[450], con la salvedad de que el prior no ejercía su jurisdicción sobre las parroquias de Uclés, que dependían plenamente del prelado conquense al haber sido fundadas con anterioridad al establecimiento de la Orden en la villa. Dado el importante grado de potestad jurisdiccional que tenía el prior de Uclés, éste incluso llegó a emplear mitra, anillo y báculo como símbolos de su autoridad, confiriendo órdenes menores e instituyendo y destituyendo párrocos con frecuencia en las parroquias dependientes de la Orden[451].

El prior de Uclés ejercía la jurisdicción eclesiástica ordinaria, en el territorio de su priorato, bien personalmente o a través de un subprior. Pero, tal como se ha dicho, no tenía plenas facultades canónicas, estándole vedada, por ejemplo, la administración de la confirmación. Es por ello por lo que estaba obligado a traer el primer año de su mandato un obispo que, contando con licencia de la Orden, discurriese por el priorato confirmando a todos los que estuviesen en edad de recibir dicho sacramento. Aprovechando esta circunstancia, a veces los obispos

---

[449] Milagros Rivera Garretas, *La encomienda, el priorato y la villa de Uclés...*, pp. 209-210.

[450] D. W. Lomax, *La Orden de Santiago (1170-1275)*, pp. 196-197.

[451] D. W. Lomax, <<La Orden de Santiago y el obispo de Cuenca>>, pp. 307-308.

conquenses intentaron inmiscuirse en la jurisdicción del prior[452]. Por ejemplo, el 1 de diciembre de 1423 el prior de Uclés presentaría una protesta ante el obispo de Cuenca, don Álvaro de Isorna, para que éste no tonsurase, confirmase ni ejerciese acto de jurisdicción ordinaria en Villanueva de Alcardete sin su licencia, por tratarse de una parroquia perteneciente al priorato de Uclés, y que tampoco lo hiciese en ninguna otra parroquia dependiente de la Orden sin la previa licencia del prior[453]. Ya a comienzos del siglo XVI, en agosto de 1513, nos encontraremos con otro pleito entre el prior de Uclés y el obispo de Cuenca sobre el conocimiento de las causas matrimoniales de los vecinos del priorato[454].

Finalmente, hay que recordar lo que ya se señaló con anterioridad sobre los encargos que a veces hizo el papa a ciertos obispos de Cuenca para que interviniesen en asuntos relacionados con la Orden de Santiago. La importante presencia santiaguista en la diócesis es sin duda un factor que contribuye a explicar que el papa hiciera a veces este tipo de encargos a los prelados conquenses, a la vez que ello también servía para reafirmar la autoridad del obispo diocesano.

Una intervención de este tipo tuvo lugar el 5 de febrero de 1289, fecha en la cual Nicolás IV comisionaría al obispo de Cuenca para que hiciese restituir al prior y convento de Uclés todos sus bienes y diezmos que estuviesen enajenados[455].

Años más tarde se produciría otra comisión pontificia, en esta ocasión relacionada con el maestre de Santiago Velasco López. Previamente, el 19 de mayo de 1339, Benedicto XII había mandado a los oficiales del reino de Navarra que hiciesen restituir a dicho maestre ciertos bienes que le habían sido usurpados[456], ordenando el 13 de junio del mismo año al obispo

---

[452]P. A. Porras Arboledas, *Los señoríos de la Orden de Santiago...*, I, pp. 293-294.

[453]AHN, OOMM-Uclés, carp. 3, vol. III, nº 20.

[454]AHN, OOMM-Uclés, carp. 3, vol. III, nº 23.

[455]AHN, OOMM-Uclés, carp. 4, vol. II, nº 17.

[456]José Trenchs Odena, «Benedicto XII y las Órdenes militares hispanas...», p. 143, nº 5.

de Pamplona que liberase de la cárcel al mencionado maestre Velasco López y le otorgase un salvoconducto para dirigirse hacia Aviñón[457]. Es precisamente dentro de esta línea de proteccionismo pontificio donde debe situarse la nueva intervención de Benedicto XII que tuvo lugar el 1 de octubre de 1339, y mediante la cual el papa mandaría al arzobispo de Toledo y a los obispos de Cuenca y Jaén que pagasen diariamente cuatro florines de oro al maestre santiaguista Velasco López[458], si bien ninguna noticia tenemos sobre el modo en que los antedichos prelados cumplieron el encargo pontificio.

Un último ejemplo, ya mucho posterior, que puede citarse es el que viene dado por la bula que el 6 de noviembre de 1471 dirigió Sixto IV al arzobispo de Sevilla y a los obispos de Cuenca y Burgos, nombrándoles jueces conservadores de los bienes de la Orden[459]. En lo que atañe al prelado conquense, y si tenemos en cuenta la gran cantidad de propiedades que poseía la Orden en esta diócesis, el nombramiento pontificio venía indudablemente a reforzar la posición de máxima autoridad eclesiástica ejercida por el obispo en su diócesis.

2-Relaciones con otras Órdenes militares

Aunque la Orden de Santiago era, con diferencia, la que mayor presencia tenía en el territorio diocesano conquense, también otras Órdenes militares poseían algunas pocas propiedades en el mismo, lo que ya de por sí implicaba el mantenimiento de algún tipo de relaciones con la Iglesia de Cuenca, aunque no tan intensas como en el caso de los santiaguistas.

En primer lugar podemos citar a la Orden de Calatrava. La presencia calatrava en tierras de Cuenca se iniciaría sobre todo a raíz de la conquista de la ciudad en 1177, derivándose probablemente de la activa participación de la Orden en el cerco

---

[457] *Ibid.*, p. 143, nº 6.

[458] *Ibid.*, p. 144, nº 9.

[459] AHN, OOMM-Uclés, carp. 4, vol. I, nº 25.

de la misma. Así, ya tomada Cuenca, en diciembre de 1177 los señores de Molina, Pedro Manrique de Lara y su mujer, Margarita, dieron a la Orden todas las heredades, molinos, casas y viñas que tenían en Albaladejo, Cañete y el término de Cuenca. En el verano de 1190 las propiedades que la Orden poseía en Cañete aumentaron considerablemente. Primero por mediación de Alfonso VIII, que cedió en aquel lugar una heredad a los calatravos; después, a través de Bermudo Pérez y su mujer María Armíldez, que donaron a la Orden todas las casas y heredades que tenían en la villa.

Cuando los castellanos progresaron en dirección oriental, rebasando la cuenca del Cabriel y los límites de la frontera con los musulmanes, también se vieron implicados los calatravos: García de Aguilar donó a la Orden de Salvatierra dos casas, la mitad de una tienda, dos huertos y un majuelo en Moya. Todo ello fue confirmado por Alfonso VIII en junio de 1212. Con posterioridad las propiedades calatravas en Moya debieron aumentar, ya que en la primera mitad del siglo XIII la Orden cedió a Fernán Pérez y a su mujer doña India unas casas, viñas, heredades, huertas y otros bienes en la villa de Moya y sus aldeas, todo lo cual pasaría de nuevo a poder de los freiles en abril de 1255[460].

Una manifestación de las relaciones mantenidas entre el obispo conquense y esta Orden militar la tendríamos en algunos mandatos pontificios comisionando a aquél para que interviniese en determinados asuntos de la Orden, lo que se explica por la presencia de ésta en tierras conquenses. Tal fue el caso, por ejemplo, de una intervención de Benedicto XII que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1338, y a través de la cual el papa comisionó a los arzobispos de Toledo y Zaragoza y al obispo de Cuenca para que citasen a Alfonso Pérez, que se autotitulaba maestre de Calatrava, y a otro maestre de la misma Orden, Juan Núñez, y resolviesen a quién correspondía realmente al cargo, que ambos personajes se disputaban[461]. Por otro lado, ya hacia el final del siglo, el 12 de octubre de 1394, Benedicto XIII comisionaría

---

[460]Enrique Rodríguez-Picavea Matilla, *La formación del feudalismo en la meseta meridional castellana*, pp. 168-169.

[461]José Trenchs Odena, «Benedicto XII y las Órdenes militares hispanas», p. 145, nº 4.

al arzobispo de Toledo y al obispo de Cuenca para que amparasen en la posesión de su maestrazgo de Calatrava al maestre Gonzalo Núñez de Guzmán, cuya elección se había realizado en virtud de un breve de Clemente VII[462].

Pero sobre todo, y en lo que atañe al caso conquense, deben ser destacadas las relaciones de esta Orden militar con el monasterio cisterciense de Monsalud, situado al norte de la diócesis y en una zona donde los calatravos poseían abundantes dominios. Como es sabido, la Orden de Calatrava fue fundada en 1158 por el abad y monjes de la abadía cisterciense de Fitero, y ello determinó que desde muy pronto quedara afiliada e incorporada al Císter[463].

El primer y más trascendental testimonio que poseemos sobre la relación existente entre la Orden de Calatrava y la abadía de Monsalud viene dado por el documento de la donación a perpetuidad que hizo Alfonso VIII, con fecha 12 de marzo de 1174, de la abadía de Córcoles con todos sus términos y pertenencias al maestre y freiles de Calatrava[464]. Poco después, en el mismo año de 1174, el monarca hará saber a todos sus súbditos la merced hecha a la Orden de Calatrava de la abadía de Córcoles:

"...Universis hanc cartam regali sigillo munitam videntibus notum sit quod ego rex iam prefatus abbatiam de Corcoles cum hereditatibus suis et pertinentiis magistro de Calatrava et fratribus dedi iure habendam hereditario in perpetuam..."[465].

La Orden de Calatrava adquirió sus dominios en La Alcarria durante los primeros años de su existencia, entre 1174 y 1189. El castillo de Zorita, con su tierra, le fue dado por Alfonso VIII en 1174, en calidad de marca fronteriza con los musulmanes

---

[462]AHN, OOMM-Calatrava, carp. 447.

[463]Sobre esta cuestión puede verse: J. F. O'Callaghan, «The affiliation of the Order of Calatrava with the Order of Citeaux», *Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis*, XV, 1-2 (1959).

[464]AHN, OOMM-Calatrava, carp. 418 / AHN, OOMM-Calatrava, códice 813 B, f. 130r / Julio González, *El reino de Castilla...*, II, nº 201.

[465]AHN, OOMM-Calatrava, libro 1341 C-Bis, ff. 22v-23r.

de Cuenca. En el mismo año recibió la población de Vallaga, donada por un particular, y Alfonso VIII les donó Almoguera en 1175. Auñón fue comprada por la Orden en 1178, y Berninches y El Collado se obtuvieron por trueque con el monasterio de Monsalud en marzo de 1189[466]. Efectivamente, en esa fecha se firmó un trueque con el abad de Monsalud por el que la Orden recibió los lugares de Berninches y El Collado entregando a cambio al monasterio once musulmanes, tras un período de contienda por la posesión de dichos territorios:

"Notum sit omnibus hominibus tam presentibus quam futuris hanc cartam legentibus quod ego Raimundus, Dei gratia Montis Salutis abbas, datus consilio et assensu eiusdem loci conventus de contentione quam habebamus cum magistro Nunno Calatrave et cum eius fratribus super Collatum et Berninches, hanc concordiam habuimus. Quod predictus magister Calatrave et eius fratres nobis undecim mauros darent et nos istos mauros recepimus et paccati et absque querimonia de contentione quam habebamus cum illis super Collatum et Berninches liber...recedimus. Facta carta mense martio, regnante rege Alfonso in Toleto et in Castella cum regina Alienore..."[467].

Un elemento de interés lo constituye sin duda la entrega de once musulmanes por parte de la Orden al monasterio a cambio de los lugares de El Collado y Berninches. Efectivamente, una vez conquistada la región alcarreña, aún siguió habiendo allí mudéjares que permanecieron sujetos a los vencedores. Algunas noticias quedan de dicha permanencia en La Alcarria por lo que respecta al reinado de Alfonso VIII, y probablemente sean cautivos de guerra, puesto que son tratados como mercancías de intercambio[468].

Tras realizarse el intercambio, resuelta ya la contienda,

---

[466]Emma Solano Ruiz, *La Orden de Calatrava en el siglo XV...*, pp. 235-236.

[467]AHN, OOMM-Calatrava, libro 1341 C-Bis, f. 63r.

[468]Juan Catalina García López, *La Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista*, p. 46. Análoga idea de servidumbre sugieren ciertas disposiciones del primer fuero de Zorita, que también se otorgó en el reinado de Alfonso VIII, y por las que se daba a los vecinos de la villa el derecho de servirse de los musulmanes cautivos, aún cuando fueran nobles. *Ibid.*, pp. 46-47.

parece ser que en El Collado se constituyó la población, mientras Berninches quedaba reservada a residencia del comendador. La encomienda fue llamada generalmente El Collado de Berninches, y contaba con un hospital para religiosos de la Orden que ya existía por lo menos en 1218[469].

La vinculación existente entre Monsalud y la Orden de Calatrava motivó, por otro lado, que a veces algún freile de la Orden actuase como juez a la hora de resclver algún pleito en que se hallaba involucrado el monasterio. Un ejemplo de ello lo tenemos en la actuación en 1435 del arcipreste de Zurita examinando un proceso de pleito entre Zulemán, arrendador de los diezmos pontificales del lugar de Alocén, señorío del monasterio, del año 1433, y Juan Sánchez de Medina, procurador de los monjes blancos de Monsalud, motivado por cuestión del diezmo de los frutos cogidos en las tierras y heredades del monasterio situadas en el término de Alocén. Zulemán había hecho una demanda diciendo que, como arrrendador, le pertenecía el mencionado diezmo, pero Juan Sánchez de Medina alegaba que las tierras del monasterio estaban exentas del pago de diezmo, tanto si eran labradas por el convento como por otras personas. En el proceso Juan Sánchez presentó el privilegio papal de exención de diezmos, por lo que la sentencia del arcipreste de Zurita, dada en Pastrana el 24 de agosto de 1435, falló que nadie pudiese exigir diezmos al monasterio por sus tierras y frutos de Alocén[470].

Por último conviene indicar que la relación existente entre Monsalud y la Orden de Calatrava, aún teniendo en cuenta la donación hecha por Alfonso VIII de la abadía a la Orden, no produjo en absoluto una situación de dominio sobre el monasterio y sus bienes por parte de los freiles de Calatrava, sino que, por el contrario, en la práctica los cistercienses de Monsalud

---

[469]Emma Solano Ruiz, *La Orden de Calatrava en el siglo XV...*, p. 239. A fines del siglo XII tenía ya la Orden junto al Henares y el Tajo a Zorita, Almoguera, Vallaga, Loratilla, Almonacid, La Pangía, Auñón, El Collado de Berninches, Córcoles y las posesiones de Hueva y Cogolludo, sin contar las de Molina y Mierla. Estos territorios, con aumentos sucesivos, constituirían el que después se llamó partido de Zorita. *Ibid.*, p. 235.

[470]AHPC, *Pergaminos*, nº 139 y 140. La sentencia se conserva a través de un traslado realizado el 25 de junio de 1442.

siempre mantuvieron un alto grado de autonomía con respecto a la mencionada Orden militar.

Otra Orden que también poseyó algunas propiedades en el obispado de Cuenca fue la de San Juan de Jerusalén, o del Hospital. Gracias a su participación en la conquista de la ciudad, se le entregarían la parroquia de San Juan de Cuenca y las aldeas de Poyos -hoy bajo las aguas del pantano de Buendía- y Peñalén, al norte de la diócesis, que acabarían constituyendo sendas encomiendas, y cuyas respectivas parroquias mantuvieron una cierta dependencia hacia los sanjuanistas[471]. En un documento del 29 de agosto de 1317 la parroquia de San Juan Bautista de Cuenca aparece citada como <<Sant Iohan del ospital>>, lo que significa que por esa época aún seguía dependiendo de esta Orden militar[472].

En 1332 sabemos que había algunos pleitos por cuestión de términos entre los sanjuanistas y el concejo conquense. Así, el 5 de marzo de este año Fray Fernando Rodríguez de Valbona, prior de la Orden de San Juan en Castilla y León, nombraría como su procurador a Fray Alfonso Fernández, comendador de la bailía de Cuenca, para que le pudiese representar en los pleitos que tenía con el concejo de la ciudad, al que se acusaba de haber ocupado el término de Peñalén[473]. No obstante, muy poco después, el 8 de abril del mismo año, Fray Alfonso Fernández renunciaría a la demanda puesta contra el concejo conquense[474], llegándose finalmente a una avenencia sobre el conflicto.

En lo que respecta a las relaciones de la Orden de San Juan con el cabildo catedralicio de Cuenca, en ocasiones se produjeron entre ambos algunos pleitos por cuestión de diezmos. Así, en un documento carente de fecha pero que probablemente se sitúe en la primera mitad del siglo XV, y que contiene una lista de agravios recibidos por el cabildo, se señala lo siguiente: <<Item, dixeron

---

[471] A comienzos del siglo XIX las encomiendas de Poyos y Peñalén aún seguían siendo propiedad de la Orden de San Juan de Jerusalén. AHPC, *Desamortización*, leg. 133.

[472] ACC, siglo XIV, nº 205.

[473] AMC, leg. 2, exp. 16 / Antonio Chacón, *Colección documental...*, II, nº 51.

[474] AMC, leg. 2, exp. 16 / Antonio Chacón, *Colección documental...*, II, nº 52.

algunos rendadores del refitor de Pennalen, que es logar de la orden de Sant Juan en la sierra de Cuenca, que el comendador dende fizo algunos perjuysios al refitor en razon del diezmo del pan, ca dizen que non consienten que den al refitor diezmo de todo pan>>[475]. Así, pues, vemos cómo el lugar de Peñalén fue motivo de algunos conflictos tanto con el concejo como con el cabildo catedralicio conquense.

Otra Orden militar que parece que también poseyó algunos bienes en el obispado de Cuenca fue la del Temple, aunque la importancia de estos bienes era ínfima. Según la tradición, los templarios habrían ocupado durante muchos años, a raíz de una donación de Alfonso VIII tras la conquista de Cuenca, el convento extramuros de la ciudad en el que hacia 1313, tras la supresión de la Orden, se instalaron los franciscanos, pero lo cierto es que carecemos de cualquier testimonio documental que avale dicha tradición. Sí es verdad que los franciscanos, presentes en Cuenca ya en el siglo XIII, según se dijo en su lugar, en algún momento de la centuria siguiente pasaron a ocupar el mencionado convento extramuros de la ciudad. Pero lo que no podemos ni afirmar ni negar, ante la absoluta falta de documentación al respecto, es que dicho convento hubiese estado habitado con anterioridad por los templarios.

Por otro lado, aunque la tradición señala que la disolución de la Orden del Temple tuvo lugar en Cuenca en 1313, un análisis reciente parece demostrar que dicha disolución probablemente se llevó a cabo, como muy tarde, entre 1308 y 1310[476]. En torno a este último año, cuando por mandato del arzobispo de Toledo don Gonzalo Díaz Palomeque se hizo un inventario de los bienes templarios en Castilla, el obispo de Cuenca don Pascual informaría al prelado toledano de que, tras haberse realizado una averiguación sobre el particular, en el obispado conquense apenas

---

[475] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 782.

[476] José Iglesias Gómez, *Cuenca Templaria*, pp. 73-87. Sobre la disolución del Temple en Castilla puede verse: Carlos Estepa Diez, <<La disolución de la Orden del Temple en Castilla y León>>, *Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania*, VI (1975), pp. 121-186.

había bienes pertenecientes a la Orden del Temple[477]. Por lo demás, se desconoce todo sobre qué tipo de relaciones pudo haber mantenido esta Orden militar con la Iglesia de Cuenca, relaciones que, sin duda, serían de escasísimo relieve.

Una última Orden militar que también mantuvo algunas relaciones con el obispo y cabildo catedralicio conquense fue la de Santa María de Cartagena. Prueba de ello es que el 16 de agosto de 1279 don Pedro Núñez, maestre de dicha Orden, y Gonzalo Pérez, comendador de la misma, llegarían a un acuerdo con el obispo de Cuenca don Diego Martínez y el cabildo catedralicio, mediante el cual aquéllos se comprometieron a entregar a éstos la cuarta parte del diezmo de pan, vino y corderos de la iglesia del Quebrado. A cambio de ello la Orden tendría derecho a presentar al clérigo que sirviera dicha iglesia, que debería ser investido por el obispo y cabildo, según la costumbre existente en las iglesias de la ribera del Tajo dependientes de la Orden de Santiago. Finalmente, el obispo y cabildo se encargarían de visitar anualmente la iglesia del Quebrado para supervisar su estado material y espiritual, recibiendo de la Orden de Santa María de Cartagena como pago por la visita 5 mrs. anuales durante los diez primeros años, que después habrían de ser 10 mrs[478]. Como puede verse, se trataba de un acuerdo en materia decimal y jurisdiccional bastante parecido a los realizados años atrás con la Orden de Santiago, acuerdo que resultaba del todo necesario al haber quedado constituída la iglesia del Quebrado en una auténtica *iglesia propia* dependiente de la Orden de Santa María de Cartagena.

---

[477]ACT, Catálogo del siglo XVIII. Se trata del regesto de un documento medieval que tuvo la signatura X.4.D.2.0, pero que actualmente se encuentra perdido.

[478]ACC, caj. 10, nº 181.

Capítulo octavo

RELACIONES CON LA SOCIEDAD LOCAL

En este último capítulo nos centraremos en el análisis de las relaciones mantenidas entre la Iglesia conquense, fundamentalmente obispo y cabildo catedralicio, y la sociedad local integrada por los laicos que habitaban en la ciudad de Cuenca y el resto del amplio territorio diocesano. Así, se estudiarán en primer lugar las relaciones establecidas con el concejo conquense y otros concejos del obispado, incluyendo los de señorío episcopal, debiendo ser destacado el particular peso que el elemento conflictivo tendrá en el desarrollo de estas relaciones con la potestad concejil a lo largo de prácticamente todo el periodo bajomedieval. A continuación pasaremos a analizar las relaciones con la nobleza establecida en la ciudad y diócesis de Cuenca, para finalmente ofrecer algunos rasgos básicos sobre las relaciones mantenidas con las comunidades judía y musulmana, cerrándose de este modo la segunda parte de la presente investigación y con ella el estudio de todo el amplio abanico de relaciones de poder mantenidas por la Iglesia conquense durante la Edad Media.

I-RELACIONES CON LOS CONCEJOS DE CUENCA Y SU OBISPADO

La implantación del correpondiente concejo en la ciudad de Cuenca tras su conquista, así como en otras villas y lugares del obispado, motivaría que, ya desde muy pronto, se estableciese un sistema de relaciones entre la Iglesia conquense y el poder concejil, relaciones que, aunque no siempre, sí muy frecuentemente se desarrollarán en el ámbito de lo conflictivo, al tratarse de dos poderes que se limitaban mutuamente en su afán expansivo, siendo por ello muchas veces necesaria la mediación regia para tratar de resolver, a menudo sin éxito, las disputas de índole

tanto económica como jurisdiccional surgidas entre las potestades eclesiástica y concejil.

En efecto, sobre todo a partir de los reinados de Fernando III y Alfonso X comenzaría en Castilla el proceso de decadencia de la autonomía urbana, tratando el poder real de ejercer un control más intenso sobre las ciudades, por lo que pronto los monarcas tendrán cada vez más peso en los asuntos concejiles. Los conflictos que surgen entre las jurisdicciones concejil y eclesiástica raramente encontrarán solución al margen de la intervención real, y más aún si se trata de concejos de realengo, a la vez que la presencia de los agentes reales en las ciudades irá en aumento, incluso en las épocas de mayor debilidad del poder regio.

Por otro lado, es necesario poner de manifiesto que las relaciones de la Iglesia conquense con el concejo de la ciudad y otros concejos del obispado van a tener a su vez un importante componente de relaciones Iglesia-nobleza, en cuanto que una buena parte de la potestad concejil pronto comenzaría a ser ejercida por algunas de las más conspicuas familias de la nobleza local, en la que no faltarán varios importantes linajes de la nobleza territorial castellana. No obstante, las relaciones establecidas directamente con los representantes de la nobleza, tal como ya hemos dicho, serán objeto de análisis individualizado más adelante.

1-Conflictos económicos

Durante la Baja Edad Media, frecuentemente las disputas Iglesia-concejos en todo el reino de Castilla tendrán motivaciones de orden económico. Los importantes privilegios económicos y fiscales de que disponían la mayoría de los prelados y cabildos catedralicios castellanos a menudo dieron lugar a que los concejos, carentes a veces de esos mismos privilegios, no tuvieran más remedio que acudir a la violación de los que poseían los prelados y cabildos con el objetivo de no quedar en inferioridad de condiciones en la competencia económica que de hecho se

daba en las ciudades. La Realeza, muy a menudo, intervendrá a favor de los prelados y cabildos catedralicios, y el caso del obispado de Cuenca viene a corroborar esto último, tal como a continuación tendremos ocasión de comprobar.

A) *Conflictos con el concejo de Cuenca*

Es a partir de mediados del siglo XIII, y contando con pequeños precedentes en los años anteriores, cuando comienzan a abundar más las noticias relativas al surgimiento de conflictos económicos del obispo y cabildo catedralicio con el concejo de Cuenca. Así, el 3 de septiembre de 1255 el cabildo nombraría como procurador a don Guillén, arcediano de Huete, para que les representara en el pleito que, junto al obispo don Mateo, tenían contra el concejo conquense sobre <<Piedras Luches con terminos e con aldeas pobladas e por poblar, e sobre debdas e otras cosas muebles e non muebles>>[1], sin que la documentación precise nada más sobre la disputa ni sobre el modo como se resolvió.

Mientras tanto, los caballeros y hombres buenos del concejo de Cuenca se quejaban de lo gravoso que les resultaba tener que pagar a la Iglesia conquense el portazgo del ganado que pasaba por el castillo de Paracuellos para ir a tierra de moros. Debido a este motivo expondrían sus quejas ante Alfonso X, quien el 5 de agosto de 1257 concedió al obispo y cabildo catedralicio los pozos de agua para hacer sal de Valtablado, Valsalobre y Beamud, con cuatro yugadas de heredad, así como que pudieran vender la sal en todo el obispado, además de 600 mrs. para que pudiesen poner en funcionamiento dichos pozos, todo ello a cambio de que en adelante no cobrasen portazgo al ganado que pasaba por el castillo de Paracuellos[2], lo que sin duda había supuesto hasta entonces un sustancioso ingreso para las arcas del obispo y cabildo.

El disfrute de algunos bienes comunales, que con tanto ahínco defendían los concejos, también dio pronto lugar a algunos

---

[1] ACC, caj. 6, nº 97.

[2] ACC, caj. 6, nº 101 / BN, Ms. 13071, ff. 271v-275r.

conflictos con la Iglesia, siendo necesaria la mediación regia. Así, por ejemplo, el 28 de diciembre de 1271 Alfonso X mandaría al concejo de Cuenca que no impidiese el pasto en sus dehesas a los bueyes que llevaban la piedra para la obra del alcázar y de la catedral conquense[3].

Durante la sublevación del infante don Sancho cada prelado castellano, movido por diversos intereses, hubo de elegir bando, y así quedaron patentes las diferencias entre los obispos castellano-leoneses en cuanto a sus posiciones políticas. No obstante, el infante don Sancho se hizo con el respaldo de la mayor parte de los prelados. El comienzo efectivo de la sublevación se va a producir entre fines del mes de abril y los primeros días de mayo de 1282. Don Sancho convocó una reunión en Valladolid que pretendía tener la fuerza legal de una convocatoria de Cortes, con la que el infante trataría de obtener todo el apoyo necesario para proceder a la deposición de su padre. El infante llevó a cabo toda una campaña de propaganda ante el Episcopado de cara a obtener su confianza, propaganda que resultaba a todas luces necesaria, dado que el Papado se había declarado a favor de los derechos de Alfonso X. Pero la política desarrollada por éste respecto del Episcopado en los últimos años había sido muy criticada por todos los prelados[4].

El cabildo catedralicio y obispo conquense fueron partidarios del infante don Sancho desde un primer momento, lo cual explica la continua protección que éste les otorgó en sus conflictos con el concejo de Cuenca. Esta protección ya se dio incluso antes de que se produjese la sublevación. Así, el 10 de junio de 1280, don Sancho mandará al concejo de Cuenca que no consienta que algunos caballeros de la ciudad entren en la catedral armando alboroto y peleándose mientras se rezan las horas[5].

El 22 de abril de 1282, a raíz de la mencionada reunión de Valladolid, se producirá una nueva intervención del infante don

---

[3]Sanz, nº 145.

[4]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 79-80.

[5]ACC, caj. 10, nº 183.

Sancho. En esta ocasión don Sancho mandará al concejo de Cuenca y a los otros concejos de la diócesis conquense que respeten todos los privilegios, exenciones, libertades y franquicias que sus antecesores habían concedido al obispo y cabildo catedralicio de Cuenca, imponiendo diversas penas pecuniarias a todos los que fuesen contra ellos. Además, el infante confirmará a la Iglesia de Cuenca todos sus privilegios[6].

Esta protección otorgada por don Sancho al obispo y cabildo catedralicio tenía una clara intencionalidad propagandística, pues con ello el infante buscaba consolidar el apoyo de la diócesis de Cuenca a su causa en unos momentos en que se estaba produciendo una coyuntura política de singular trascendencia.

Pocos días después, el 26 de abril de 1282, tendrá lugar una nueva intervención a través de la cual el infante mandará, a petición del obispo don Gonzalo García Gudiel, que ningún alcalde o justicia entre en las heredades del obispo, cabildo catedralicio y clérigos de la diócesis, y que a éstos se les restituya lo que se les hubiese tomado por esta razón[7].

Es probable que esta reiterada protección del infante don Sancho hacia el obispo y cabildo conquense frente a los concejos de la diócesis facilitara el que poco después, el 11 de julio de 1282, se produjese una peculiar hermandad del cabildo catedralicio de Salamanca con el concejo de Cuenca y con todos los otros concejos del obispado, a través de la cual el cabildo salmantino se obligaba a defender a todos los concejos del obispado conquense en la guarda de los privilegios, franquicias y libertades que les habían sido concedidos por los monarcas anteriores[8]. La peculiaridad de esta hermandad reside en que

---

[6] ACC, caj. 11, nº 193.

[7] ACC, caj. 11, nº 195.

[8] <<Nos el dayan et el cabildo de la eglesia de Salamanca iuramos a Deo et a Sancta Maria et prometemos a buena fe, sin mal enganno, a vos el conçeio de Cuenca, por vos et por todos los otros conçeios de las villas del obispado sobredicho, de seer con vos et con ellos en la hermandat que avemos fecha en uno a serviçio de *Dios et de Sancta Maria et a guarda del sennorio de nostro sennor el infante don Sancho et de los reyes que* seran depues dellos, et a pro et a guarda de toda la terra, et prometemos et iuramos de vos aiudar a mantener et a guardar vestros fueros, libertades, franquizas, usos, costunbres, cartas et privilegios... contra todos los reyes que depues dellos venieren et contra otros quales quier que vos passaren o quisieren passar contra vestros fueros, libertades, franquizas...>>. José Luis Martín, *Documentos de los archivos catedralicio y*

ambas partes parecen buscar una ayuda común contra todos los reyes que en un futuro no respetasen sus privilegios y libertades. No sabemos si en alguna ocasión fueron puestos en práctica estos acuerdos, aunque en principio parece ser que no había motivo inmediato de queja contra el monarca, pues el acuerdo se firmó <<a guarda del sennorio de nostro sennor el infante don Sancho et de los reyes que seran depues dellos, et a pro et a guarda de toda la terra>>[9].

No obstante, parece indudable que la reiterada protección otorgada por don Sancho a la Iglesia conquense fue un factor que obligó al concejo de Cuenca y a los otros concejos del obispado a buscar una alianza ante la posibilidad de que se produjese algún tipo de ataque hacia sus privilegios en un futuro inmediato.

Las situaciones de sede vacante de la diócesis constituían de por sí otro motivo propicio para que pudieran producirse nuevos conflictos entre las autoridades eclesiástica y concejil en torno a los bienes de la mesa episcopal. Es quizá por ello por lo que, mediante un documento emitido el 12 de febrero de 1285, el concejo de Cuenca manifestaría su aceptación del privilegio que anteriormente Alfonso X había concedido al cabildo catedralicio conquense (17-X-1255) para que a la muerte de cada prelado todas las posesiones de la mitra fuesen guardadas fielmente por un hombre designado por el rey y otro nombrado por el cabildo, para así ser entregadas al obispo sucesor[10]. Con ello el concejo conquense, en teoría, se comprometía a no inmiscuirse en los bienes de la mesa episcopal durante los futuros periodos de sede vacante.

El 28 de junio de 1286 se producirá otra intervención de don Sancho, ya como rey de Castilla. En esta ocasión Sancho IV, previa petición y protesta del cabildo catedralicio conquense, mandará al alcalde y justicias de esta ciudad que hagan guardar unos privilegios concedidos al cabildo por su padre Alfonso X,

---

diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII), nº 389.

[9] José Luis Martín Martín, *El cabildo de la catedral de Salamanca*, p. 85.

[10] ACC, caj. 11, nº 203.

gracias a los cuales a los canónigos de Cuenca les correspondían las tercias de Iniesta, una aldea del obispado. El rey mandará que todos los recaudadores y arrendadores de las tercias reales que hubiesen tomado algo del cabildo en contra de sus privilegios se lo devuelvan inmediatamente[11]. Hay que destacar el hecho de que, aparte de ser éste un caso de conflictividad cabildo-concejo, también es un ejemplo de uso indebido de las tercias reales por parte de la Monarquía, pues aquí se nos muestran convertidas en un privilegio particular otorgado al cabildo catedralicio de Cuenca.

El 10 de marzo de 1287 Sancho IV, de nuevo a petición de los canónigos conquenses, mandará al concejo de Cuenca que devuelva al cabildo unas casas en Fuent Perenal que les había dejado el chantre don Pascual, y que les habían sido arrebatadas por el concejo[12], y el 26 de septiembre de 1288 el monarca ordenará nuevamente al concejo conquense y a los otros concejos del obispado que respeten los privilegios y franquicias que el cabildo catedralicio tenía confirmados por él[13]. Por otro lado, el 4 de octubre de este último año, Sancho IV también mandaría a los alcaldes y justicias de Cuenca hacer averiguaciones sobre quién quemó unas tiendas que el cabildo tenía en la judería de la ciudad, con el fin de que se satisfaciera a este último el daño ocasionado[14].

De todo lo antedicho puede inferirse que el rey estaba tratando de fomentar una actitud de protección del concejo hacia el cabildo catedralicio conquense, actitud que frecuentemente no se daba. Parece lógico pensar que, si el cabildo solicitó del monarca que mandara al concejo de Cuenca hacer averiguaciones sobre dicho asunto, no pudo ser por otra razón que porque hasta ese momento el concejo había permanecido pasivo, negándose a mediar en el conflicto.

---

[11] ACC, caj. 11, nº 207.

[12] ACC, caj. 11, nº 209.

[13] ACC, caj. 12, nº 217.

[14] ACC, caj. 12, nº 218.

En 1295 se van a formar en la Corona de Castilla diversas hermandades de concejos[15]. Así, el 6 de julio los concejos de Castilla se unirán en hermandad para defender sus privilegios y oponerse a cualquier daño y agravio que pudiesen recibir[16], y el 12 de julio los concejos del reino de León y de Galicia harán lo mismo[17].

Dados los términos en que están redactadas estas cartas de hermandad, no es de extrañar que inmediatamente todos los prelados y cabildos catedralicios se hicieran confirmar sus privilegios por el rey. De este modo, el 11 de agosto de 1295, Fernando IV confirmará al cabildo conquense y al obispo don Gonzalo Díaz Palomeque, para ellos y sus sucesores, todos los privilegios que les habían sido concedidos por los monarcas anteriores, declarando que las franquicias otorgadas a los concejos no implicarán ningún perjuicio para los privilegios de la Iglesia de Cuenca[18]. Efectivamente, el 8 de agosto de 1295, Fernando IV había concedido el amplio uso de todas sus franquezas y privilegios a los concejos de sus reinos[19], lo cual, unido a las hermandades concejiles generales recientemente formadas, hizo que el obispo y cabildo de Cuenca solicitasen del rey plenas garantías de que los privilegios concejiles no afectarían para nada a los intereses de la Iglesia conquense.

Al año siguiente, el 10 de abril de 1296, los miembros del concejo de Cuenca se unirían de forma específica en hermandad para defender sus privilegios y hacer frente a todos cuantos se les opusieran[20]. Aún se formarían nuevas hermandades concejiles

---

[15] Una visión de conjunto sobre el llamado <<movimiento hermandino>> en Castilla y León, y en particular para el periodo que abarca el último cuarto del siglo XIII y primer cuarto de la centuria siguiente, puede verse en: César González Mínguez, <<Aproximación al estudio del "movimiento hermandino" en Castilla y León>>, en *Medievalismo* (Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales), 1 (1991), pp. 35-55, y 2 (1992), pp. 29-60.

[16] A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, doc. nº 3.

[17] *Ibid.*, doc. nº 4.

[18] ACC, caj. 13, nº 231 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 153v-155r.

[19] A. Benavides, *op. cit.*, II, doc. nº 13.

[20] *Ibid.*, doc. nº 55.

en los años siguientes en todo el reino castellano-leonés. Aunque en ninguna de estas cartas de hermandad se alude directamente a las relaciones Iglesia-concejos, sin embargo los prelados vieron en estas corporaciones una posible fuente de conflictos en sus relaciones con los concejos. Para los obispos, que siempre habían sido protegidos por la Monarquía frente a los poderes concejiles, sólo cabía disculpar esta aceptación de las hermandades por la Monarquía debido a su propio estado de debilidad en los comienzos de una minoría.

En este contexto debe ser encuadrada la reunión conciliar celebrada en Peñafiel en 1302, durante el mes de mayo. Asistieron los obispos de la provincia eclesiástica toledana, y entre ellos el obispo de Cuenca don Pascual. Las constituciones que se promulgaron en el concilio reflejan el empeño que puso el Episcopado castellano en defender sus libertades y privilegios, así como el deseo de prestarse mutuo apoyo. En el concilio se pusieron de manifiesto los abusos que sufría el clero por parte de los poderes laicos, ricoshombres, concejos y la propia Monarquía. También se insistió en la obligatoriedad del pago del diezmo eclesiástico, dada la conflictividad que existía en torno a su percepción[21].

Poco después, y quizá en calidad de respuesta ante la amenaza que para los intereses concejiles suponía la celebración de dicho concilio, el concejo de Cuenca solicitará del monarca una nueva confirmación de todos sus privilegios, confirmación que se produjo a través de un documento emitido en Medina del Campo el 5 de junio de 1302[22].

El Episcopado castellano-leonés pronto trataría de comprometer a la Monarquía para que adoptara una política de restricción hacia las actividades de las hermandades concejiles, para luego llegar a alcanzar su objetivo final: su disolución. Ésta llegaría finalmente en las Cortes de Valladolid de febrero de 1326, y se

---

[21] *Ibid.*, doc. nº 203.

[22] AMC, leg. I, exp. 24.

consiguió básicamente gracias a la presión que la Iglesia ejerció sobre el monarca con el objetivo de lograr dicha disolución[23].

El proceso de conflictividad entre la Iglesia conquense y el concejo de la ciudad atravesaría un momento de singular tensión en 1338. El obispo don Odón se quejó ante el monarca de que algunos alcaldes y justicias del concejo de Cuenca y otros concejos de la diócesis hacían pechar a los clérigos coronados <<en las soldadas de los alcaldes et de los alguaçiles et en otros pechos e otras cosas>>. De este modo, el 23 de junio de 1338, dado que estos clérigos coronados tenían privilegios de exención de pechos, Alfonso XI mandará a todos los concejos de la diócesis de Cuenca que respeten a los clérigos coronados dichos privilegios y que les devuelvan todo lo que les hayan tomado al hacer caso omiso de sus exenciones[24].

Pocos días después, el 28 de junio del mismo año, tendrá lugar una nueva intervención de Alfonso XI, en esta ocasión mandando que fuese el almotacén de Cuenca el único que controlase las pesas y las medidas con que se vendían la carne y otros productos, conforme se disponía en el Fuero de Cuenca. El mandato lo dirigió el rey a los alcaldes, alguaciles y al juez de la ciudad, y estuvo motivado por una protesta previa del cabildo catedralicio, que se había querellado ante el rey de que los carniceros les vendían la carne sin el justo peso, <<e que ponen de si mesmos e de su coffradia que dizen de los carniçeros algunos omes por fieles para esto que dizen, que non son bien fieles para requerir las pesas de la carne...la qual cosa es contra derecho et contra el fuero de y de Cuenca, en que dizen que se tome que el almotaçen de su ofiçio deve requerir todas las pesas asi a los carniçeros como a los otros, e todas las medidas del pan e del vino e de todas las otras cosas>>[25].

Efectivamente, en lo referente al oficio de almotacén, en el Fuero de Cuenca se señala lo siguiente:

---

[23]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, p. 194.

[24]ACC, siglo XIV, nº 14.

[25]ACC, siglo XIV, nº 305.

"Almutaçaf sit super mensuras annone, vini, olei, salis, et super pensas et libras, carnifices, tendarios, tabernarios, paneficas, piscatores, montanarios, figulos, ollarum, et tegularum, et laterum, super lixas et lignarios, colones, revenditores, apotecarios. Et iste faciat sacramentum in concilio ut teneat fidelitatem in hiis que carta preceperit vel concilium incautaverit"[26].

Por otro lado, también conviene poner de manifiesto que años atrás la almotacería había causado algunas disputas de orden interno en el propio concejo conquense[27]. En definitiva, parece claro que la almotacería y el control de pesas y medidas con que se vendían los productos eran asuntos de suficiente importancia en la economía local como para dar lugar a serios conflictos de orden interno en el propio concejo de Cuenca, así como a disputas entre el cabildo catedralicio y el concejo al modo de la que tuvo lugar en 1338, y que sin duda ya venía de años atrás.

Aunque en este último conflicto el enfrentamiento se dio en particular entre el cabildo catedralicio conquense y la cofradía de los carniceros, el concejo de Cuenca se vio también implicado al permitir que los carniceros designaran fieles de su propia cofradía para controlar las pesas y medidas de la carne, cosa que, según el Fuero, sólo correspondía al almotacén. Indudablemente, al no intervenir el almotacén en el control de las pesas y medidas con que se vendía la carne, los fieles designados de entre los propios miembros de la cofradía de los carniceros para efectuar dicho control intentarían cometer algunos fraudes frente al cabildo catedralicio, para obtener de este modo los máximos beneficios ecomómicos.

---

[26] *Fuero de Cuenca*, edic. de Rafael Ureña, Forma Sistemática, cap. XVI, nº XXXI, pp. 446-448.

[27] Así lo demuestra un documento fechado en Cuenca a 31 de diciembre de 1290: <<Sepan quantos esta carta vieren como nos el conçeio de Cuenca, todos abenidos, tanbien cavalleros como omes buenos del pueblo de la villa, sobre muchos agravamientos e contiendas que son entre nos el conçeio sobredicho, tanbien sobre fecho de la almotaçeria como sobre todas las otras cosas, damos todo nuestro poder a vos Pero Gomes de Solera et a vos Iohan Blasquez et a vos...et todas aquellas cosas que vos ordenasedes en razon del almotaçeria et en todas las otras cosas que entendieredes que seran serviçio de Dios et de nuestro sennor el rey et a pro et al mantenimiento e a egualamiento de la çibdad de Cuenca, nos el conçeio sobredicho lo otorgamos et lo avremos por firme et por estable et fincaremos por ello en todo tienpo asi como si conçeialmente fuese fecho>>. AMC, leg. 1, exp. 19.

Además, precisamente a fines de los años treinta del siglo XIV se estaba desarrollando en Cuenca una intensa lucha entre los carniceros y su poderosa cofradía, por un lado, y el cabildo catedralicio, por otro, de cara a obtener el control del comercio de la carne en la ciudad. Los carniceros se esforzaban por aumentar el número de puntos de venta en beneficio propio y en detrimento del cabildo, y su cofradía era ya capaz de manipular el nombramiento de los oficiales concejiles que controlaban el comercio, con objeto de obtener de éste beneficios *extraordinarios*. Sobre la evolución del comercio de la carne en Cuenca durante la Baja Edad Media ya se habló en la primera parte de la presente obra, en el apartado dedicado al estudio del patrimonio urbano del cabildo catedralicio, tratándose además de una cuestión para la que contamos con un análisis pormenorizado llevado a cabo por otros autores[28]. Por otro lado, conviene recordar que no se trata en absoluto de un tipo de conflicto exclusivo de la ciudad de Cuenca, sino que también lo encontramos en otros lugares de Castilla[29].

El 18 de enero de 1344 tendrá lugar una nueva intervención de Alfonso XI mandando a todos los arrendadores de las rentas de la Iglesia de Cuenca, tras haber recibido quejas del cabildo

---

[28]Me refiero al artículo de Santiago Aguadé Nieto y María Dolores Cabañas González, <<Comercio y sociedad urbana en la Castilla medieval. La comercialización de la carne en Cuenca (1177-1500)>>, *AEM*, 14 (1984), pp. 487-516. En este trabajo se pone de manifiesto cómo el mercado de la carne en Cuenca a lo largo de la Baja Edad Media evolucionará desde lo que, con todos los matices, podríamos llamar una *situación de competencia* hacia una *situación de monopolio*, a través de la que se impone un creciente control municipal del mercado. El cabildo catedralicio intentará, desde un primer momento, eliminar competidores en el mercado de la carne, y a fines de los años treinta del siglo XIV mantendrá una lucha abierta contra la poderosa cofradía de los carniceros, en la que la entidad capitular no dudará en acudir al uso de las sanciones espirituales más graves ni de la violencia, en caso necesario. A lo largo del siglo XV veremos confluir en Cuenca los intereses del gobierno municipal y los del gremio de carniceros. El primero, ya desde fines del siglo XIV, se nos muestra ejerciendo un importante y creciente control del espacio urbano y de la utilización comercial del mismo, convirtiéndose en propietario de carnicerías y arrendador de las mismas a censo. Se puede decir que buena parte de la ganancia derivada del comercio del mercado de la carne ha pasado de los señoríos, y en concreto del cabildo, al municipio. Los carniceros, por su parte, acceden a la oligarquía urbana que se desarrolla a partir de los siglos XIV y XV, y ven consolidarse su posición monopolística en el mercado urbano con el respaldo del municipio y mediante el sistema de *obligados*, que les asegura la exclusiva de la producción y venta de la carne, así como la estabilidad del número de carnicerías existentes en la ciudad; propietarios ellos mismos de carnicerías o arrendatarios de las del concejo, se convierten, a su vez, en rentistas.

[29]Sobre ello puede verse, para el caso cordobés: J. Padilla González, <<Relaciones y pautas de comportamiento de las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad de Córdoba ante un conflicto de intereses: el monopolio de la carne (1311-1457)>>, *Axerquía*, 4 (1982), pp. 143-182.

catedralicio, que pagaran a éste la cantidad correspondiente a dichos arrendamientos en el plazo fijado y sin demora, dado que se venían produciendo importantes retrasos en los pagos. El cabildo también se había quejado de que la alcabala sobre dichas rentas la tenían que pagar al rey los propios arrendadores y no los canónigos, porque <<sy esto assy ovyesse de passar que ellos que non podran conplir nin avrian de que pagar aquella quantia de maravedis que agora nos dan con serviçio para este mester en que estamos>>. Así, pues, el rey mandará también que sean los propios arrendadores los que paguen la alcabala, ordenando a todos los concejos de la diócesis, que permanecían pasivos ante estas irregularidades, que obligasen a los arrendadores de las rentas de la Iglesia conquense a cumplir este mandato[30].

Para comprender plenamente el conflicto recién aludido conviene recordar lo importantes que fueron las exacciones impuestas por Alfonso XI entre 1342 y 1344 sobre los prelados y cabildos catedralicios con vistas a las campañas llevadas a cabo en el Estrecho, en torno a Algeciras. Apenas hay para estas nuevas empresas guerreras datos cuantitativos, pero sí se sabe que el propio monarca hizo una gira por varias ciudades, entrevistándose con sus representantes laicos y eclesiásticos y obteniendo importantes ayudas, como por ejemplo la entrega de las alcabalas. La Crónica de Alfonso XI también habla de la aportación en plata que para la campaña de 1343 le hicieron al monarca los ricoshombres y prelados. También en este mismo año el rey hizo varias súplicas al papa Clemente VI a fin de obtener diversas rentas eclesiásticas que le permitieran hacer frente a la amenaza de invasión que se preparaba por parte del rey de Marruecos[31]. Un año antes, en 1342, Alfonso XI también había conseguido permiso del papa para recaudar décimas[32].

Todo ello explica que en el mencionado documento del 18 de enero de 1344 se aluda a que <<sy esto assy ovyesse de passar que ellos que non podran conplir nin avrian de que pagar aquella

---

[30] ACC, siglo XIV, nº 5.

[31] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y poder real...*, pp. 64-65.

[32] *Ibid.*, p. 127.

quantia de maravedis que agora nos dan con serviçio para este mester en que estamos>>. De este modo Alfonso XI, al proteger al cabildo catedralicio conquense obligando a los arrendadores a pagar en los plazos fijados y haciendo recaer sobre ellos el pago de la alcabala, a su vez estaba protegiendo los propios intereses económicos de la Realeza, en unos momentos de necesidad material apremiante, en el sentido de que cuanto más correcta y puntualmente recibiese el cabildo el pago de sus rentas, más fácilmente podría hacer frente a las exacciones a que se veía sometido por parte de la Monarquía.

Situándonos a continuación en el reinado de Pedro I, el 5 de octubre de 1351 se producirá una primera intervención de este monarca mandando a los alcaldes y justicias del concejo de Cuenca que hagan todo lo posible para que sean pagadas puntualmente las rentas de las tierras que posee el cabildo catedralicio, en los plazos fijados, y que procedan contra aquellos que no las paguen a tiempo[33]. Así, pues, vemos cómo el cabildo aún continuaba teniendo problemas para el cobro de sus rentas dentro de los plazos establecidos.

El 12 de diciembre de 1358 Pedro I se dirigió nuevamente a los alcaldes y justicias del concejo de Cuenca para que no apremiasen al cabildo catedralicio a comprar los bienes de Alvar García de Albornoz, de Ferrand Gómez y otros bienes, que el monarca había mandado vender[34]. En efecto, cuando Alvar García de Albornoz y Ferrand Gómez se exiliaron al reino de Aragón en busca de alianzas contra el monarca castellano, éste ordenaría confiscar sus bienes y que fueran vendidos. Pero acabamos de ver cómo ello dio lugar a abusos por parte de los oficiales concejiles de Cuenca que, quizá debido a la estrecha relación existente entre los Albornoz y el cabildo catedralicio conquense, obligarán a este último a comprar los bienes confiscados a Alvar García y a su hermano Ferrand Gómez, cuyo valor debía de ser considerable y que sólo una institución económicamente fuerte, como era el caso del cabildo catedralicio, podía pagar. Los diversos abusos

---

[33] ACC, siglo XIV, nº 255.

[34] AHN, Micr., rollo 14216, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 80.

cometidos por los oficiales concejiles darían finalmente lugar a la intervención del monarca en defensa del cabildo catedralicio.

Junto con las propiedades de Alvar García y de Ferrand Gómez, Pedro I también confiscó las pertenecientes a su antiguo vasallo Juan de Luna, que también había marchado al reino de Aragón. Hay que recordar que los Luna eran una poderosa familia de origen aragonés emparentada con los Albornoz y que no tardaría en declararse en contra de Pedro I, pasando pronto a engrosar las filas del bando favorable al futuro Enrique II. A este linaje pertenecía doña Teresa de Luna, madre de Alvar García, de Ferrand Gómez y del cardenal don Gil. Ello explica que el 27 de diciembre de 1359 Pedro I concediese a Alfonso Fernández de Horvonesa, un posible petrista castellano, todos los bienes muebles y raíces confiscados a Juan de Luna en el obispado de Cuenca o en cualquier otro lugar de su reino[35].

Poco después nos encontraremos con un nuevo conflicto entre el concejo conquense y el cabildo catedralicio. El 14 de marzo de 1362 Pero González de Viana, alcalde de Cuenca, dio sentencia en un pleito que había entre el cabildo catedralicio de Cuenca y la aljama de los judíos, condenando a estos últimos a reparar un pedazo de adarve de la judería que amenazaba caerse encima de unas casas que el cabildo tenía en la calle de la Pellejería[36]. Pero otros alcaldes del concejo de Cuenca se mostraron pasivos a la hora de hacer cumplir esta sentencia, lo cual motivaría las protestas del cabildo catedralicio y la intervención de la Monarquía en el asunto. De este modo, el 23 de junio de 1363, Pedro I mandaría a los alcaldes de Cuenca hacer cumplir la sentencia dictada el año anterior por Pero González, y que había sido favorable al cabildo[37].

---

[35]ACC, siglo XIV, nº 272. Sobre el linaje de los Luna puede verse: Francisco de Moxó y Montoliú, *La Casa de Luna (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje aragonés*. Münster, 1990.

[36]ACC, siglo XIV, nº 124.

[37]ACC, siglo XIV, nº 298 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 2, ff. 43r-43v.

El aprovechamiento de los bienes comunales del concejo, que ya en el siglo anterior había dado origen a algunas disputas, también durante estos años motivaría el surgimiento de nuevos conflictos entre el cabildo catedralicio y el concejo de Cuenca. Hay que tener en cuenta que en el Fuero de Cuenca se concedía a los habitantes presentes y futuros de la ciudad recién conquistada el libre disfrute de todos sus términos, montes, ríos, pastos y demás bienes comunales[38]. No obstante, también es cierto que el concejo siempre trató de preservar afanosamente dichos bienes comunales, reteniendo en exclusiva el derecho a disfrutar de los mismos, e impidiendo por ello muchas veces al cabildo catedralicio su libre utilización. Buena prueba de esto último es que, en las peticiones que el cabildo dirigió a Enrique II probablemente en las Cortes de Toro de 1371, entre otras cosas, los canónigos se quejaban de que, a pesar de la mencionada disposición del Fuero de Cuenca, a veces algunos escuderos y vecinos de la ciudad prendían los bueyes y demás ganado del cabildo mientras pacía en las dehesas y pastos del término de Cuenca; por ello el cabildo solicitaría a Enrique II que diese orden al concejo para que éste les permitiese utilizar libremente dichas dehesas y pastos, al igual que hacían los demás vecinos y habitantes de la ciudad[39].

Otro tipo de litigio es el que a veces se producía entre algún señorío episcopal de la diócesis y las aldeas pertenecientes al amplio alfoz del concejo conquense. Por ejemplo, antes de 1392 el obispo de Cuenca, don Álvaro Martínez, y el concejo del señorío episcopal de Pareja se quejarían ante el concejo conquense diciendo que los concejos de La Puerta, Cereceda y Mantiel, aldeas integradas en el alfoz de Cuenca, al norte de la diócesis, habían ocupado contra derecho algunos términos dependientes del concejo de Pareja. Dichas aldeas, junto con algunas otras más, habían sido donadas al concejo conquense por Alfonso VIII el 17 de enero de 1190[40]. De este modo, el 18 de

---

[38] *Fuero de Cuenca*, edic. de Alfredo Valmaña Vicente, cap. I, p. 37.

[39] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 132r.

[40] AMC, leg. 1, exp. 1 / Julio González, *El reino de Castilla...*, II, nº 539 / Antonio Chacón, *Colección documental...*, II, nº 1.

enero de 1392, y a petición del obispo don Álvaro y del concejo de Pareja, el concejo conquense nombraría a Sancho González de Mariana y Martín Díaz de Abia, vecinos de Cuenca, para que, junto con las otras personas designadas por el prelado y el concejo de Pareja, se encargasen de delimitar y amojonar los términos entre este último y las mencionadas aldeas. Finalmente, el apeo tendrá lugar el 23 de enero de ese mismo año[41].

Situándonos ya en el siglo XV, resulta inevitable hacer en primer lugar una breve referencia a la importantísima reforma municipal llevada a cabo en el concejo conquense por Fernando de Antequera a través de unas ordenanzas dadas por éste en 1411. La aplicación de estas nuevas ordenanzas supuso la instauración definitiva en Cuenca del concejo cerrado, pues a partir de su promulgación la institución básica de gobierno municipal será el Ayuntamiento. La reforma redujo la autonomía concejil y supuso una intervención más directa de la Monarquía en el gobierno de la ciudad, no sin la resistencia de la nobleza a la implantación del Ayuntamiento. Su finalidad fue apartar al elemento más popular de una intervención activa en el gobierno local, y también a la alta nobleza. Tras varios años de lucha entre los bandos de Diego Hurtado de Mendoza y de Lope Vázquez de Acuña, el resultado será la consolidación de los caballeros en el gobierno municipal.

A causa de la resistencia inicial a esta reforma, el régimen de corregidores no se consolidaría en Cuenca hasta 1422. Pero pasados los primeros años conflictivos el ordenamiento de Fernando de Antequera se pondrá en práctica y regulará el gobierno municipal a lo largo de todo el siglo XV, permitiendo a su vez a la Monarquía apoyarse de forma más eficaz en el patriciado urbano compuesto por hidalgos y caballeros[42].

Volviendo de nuevo a los conflictos del cabildo catedralicio con el concejo conquense, a lo largo del primer cuarto del siglo XV las disputas alcanzarían tal relieve e intensidad que

---

[41] AMC, leg. 63, exp. 1 / Antonio Chacón, *Documentación del Archivo Municipal...*, III, nº 50, 51 y 52.

[42] María Dolores Cabañas González, «La reforma municipal de Fernando de Antequera en Cuenca», pp. 382-386.

finalmente sería necesario el establecimiento de un extenso acuerdo sobre muy diversos puntos entre el obispo don Álvaro de Isorna, en nombre del cabildo catedralicio conquense y clerecía del obispado, y don Lope Vázquez de Acuña, en nombre del concejo de Cuenca, acuerdo que sería firmado por ambos en Valladolid el 3 de abril de 1425[43]. Previamente, tanto el concejo como el cabildo se habían comprometido a aceptar todas las cláusulas de la avenencia a que llegaran sus respectivos representantes. A continuación se ofrecen los principales puntos sobre materia económica del acuerdo establecido entre el prelado conquense y don Lope Vázquez, a través del cual se ponen de manifiesto las muchas y diferentes cuestiones que enfrentaban mutuamente desde hacía tiempo al cabildo catedralicio y clero conquense con el concejo de la ciudad:

-El concejo de Cuenca se quejaba de que el cabildo catedralicio y clérigos conquenses <<les eran tenidos e obligados de çiertas contias de maravedis por razon de la sisa del vino que vendieron e fizieron vender en çiertos annos pasados e la descontaron...en las medidas e la non pagaron>>. En el acuerdo se determina llegar a una avenencia para que ninguna parte demande a la otra cosa alguna por este concepto.

-Por otro lado, los beneficiados del cabildo se quejaban de tener que pagar un tributo que el concejo tenía puesto sobre el vino que se vendía en la ciudad, consistente en cuatro cornados por cada cántaro. A pesar de ello, en el acuerdo se establece que los beneficiados y clérigos que vendan vino o lo hagan vender paguen por ello al concejo el mencionado tributo, al igual que hacían los legos.

-El cabildo y clérigos de Cuenca también se quejaban por la veda de venta de vino que a veces imponía el concejo. Respecto a este punto se determina que cuando el concejo vaya a mandar poner veda sobre el vino deberá comunicarlo previamente al obispo y cabildo; una vez establecida la veda, los canónigos y clérigos deberán respetarla so pena de diversas multas. No obstante, en

---

[43] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 765 / Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Ms. M.II.22, ff. 87v-94v.

caso de que algún beneficiado del cabildo o clérigo hubiera menester del vino para su consumo particular, no para venderlo, entonces el concejo sí deberá permitirles llevar el vino a Cuenca a pesar de la veda.

-El cabildo y clérigos se sentían agraviados por razón de un tributo que sus carniceros debían entregar anualmente al concejo de Cuenca. Respecto a esto se establece que en adelante el cabildo y los clérigos podrán tener un carnicero que les venda la carne a ellos y a sus familiares, el cual quedará exento de pagar sisa o cualquier otro tributo al concejo como hacían los demás carniceros; por otro lado, se tomarán medidas para que la carne les sea vendida a precios razonables.

-El cabildo se quejaba de que a los mayordomos de las heredades de la mesa capitular y Arca de la Limosna se les impedía llevar parte de los herbajes de dichos lugares. En el acuerdo se determina que habrá de levantarse una investigación sobre el tema para averiguar qué derechos tenían a dichos herbajes.

-El cabildo también se sentía agraviado porque se ponían tablas de carnicería sin su licencia. Respecto a esto se establece que, mostrando el cabildo el privilegio que decía tener del derecho exclusivo sobre las tablas de carnicería, en ese caso la ciudad no podrá poner nuevas tablas sin su licencia.

-Al contrario de lo que había sucedido años atrás, ahora el concejo acusaba al cabildo catedralicio y clérigos de falsear las pesas y medidas con que se vendían los productos en la ciudad, no consintiendo intervenir al almotacén. En el acuerdo se determina que en adelante sólo sea el almotacén quien controle dichas pesas y medidas.

-También se establece que cuando algún beneficiado del cabildo o clérigo compre una heredad que sea tributaria, que peche por ello los tributos correspondientes, salvo si mostrase privilegio de exención al respecto.

Así, pues, a través de estos acuerdos queda bien patente la gran diversidad de asuntos de orden económico que enfrentaban al cabildo catedralicio y clero conquense con el concejo de la

ciudad. Algunos de estos conflictos, además, ya se venían desarrollando durante la centuria anterior: tal es el caso, por ejemplo, de las disputas sobre el comercio de la carne y el control de las pesas y medidas.

Algunos asuntos recogidos en el acuerdo de 1425 merecen un especial comentario. Así, en primer lugar, habría que llamar la atención sobre las quejas presentadas por el cabildo catedralicio reclamando el derecho exclusivo sobre las tablas de carnicería; y es que por esta época, tal como indicábamos páginas atrás, el control efectivo del comercio de la carne en Cuenca, tras una larga etapa de competencia durante la centuria anterior, estaba pasando del cabildo catedralicio al municipio y a la cofradía de los carniceros, de forma que a mediados del siglo XV ya serían estos últimos quienes ejerciesen un monopolio casi total sobre las tablas de carnicería.

Por otro lado, también hemos visto cómo en 1425 era el concejo quien acusaba al cabildo catedralicio de falsear las pesas y medidas con que se vendían algunos productos en la ciudad, impidiendo la intervención del almotacén, mientras que tiempo atrás, en 1338, como se recordará, el cabildo había acusado a los carniceros de falsear las pesas y medidas con que se vendía la carne.

Asimismo, hay que destacar las diferentes disputas a que daba lugar la venta del vino en la ciudad, producto cuya comercialización, a pesar de los privilegios particulares concedidos al cabildo catedralicio y clero conquense, estuvo fundamentalmente en manos del concejo.

Dada la especial situación de conflictividad que por estos años, como se acaba de ver, atravesaban las relaciones del cabildo y clerecía con el concejo de Cuenca, no es de extrañar que la Iglesia conquense recurriese en ocasiones a argumentaciones de carácter teológico con el fin de justificar su derecho legítimo para poseer numerosos privilegios, al igual que los caballeros de la ciudad, tal como se contiene en un documento emitido por el cabildo catedralicio conquense hacia estas mismas fechas:

"...Segunt derecho dos maneras ay de cavalleria, la una es tenporal e seglar, la otra espiritual e ecclesiastica, las quales ay en esta çibdat para defension della, para que non solo se defienda por armas tenporales, mas por las espirituales que son de oraçiones e sacrifiçios, la qual defension se faze e continua de cada dia por la cavalleria e miliçia ecclesiastica en esta çibdat"[44]

Pero la larga serie de acuerdos establecidos en 1425 entre don Álvaro de Isorna y don Lope Vázquez de Acuña en representación del cabildo catedralicio y concejo de Cuenca, respectivamente, no conseguiría poner fin a las disputas entre las potestades eclesiástica y concejil. Así, por ejemplo, algún tiempo más tarde, en 1434, se produciría un litigio entre el obispo conquense y el concejo sobre los límites que aquél atribuía a cierto <<palacio>> suyo cercano a la heredad de la Mota, prohibiendo el uso del pasto al vecindario y decretando repetidas excomuniones contra los miembros de la corporación concejil. Debido a ello el municipio conquense apelaría al rey, quien envió para investigar el caso un juez comisario, Alfonso Sánchez de San Pedro, el cual pronunciaría una sentencia favorable al concejo mediante la cual sólo se aceptaba la veda del pasto en un determinado prado de los términos del antedicho palacio episcopal[45]. Al contrario de lo sucedido en muchas ocasiones anteriores, en este caso la Monarquía se nos muestra otorgando su apoyo al concejo de Cuenca en el nuevo conflicto que le enfrentaba con la autoridad eclesiástica.

A partir de este momento dejarán de abundar tanto como antes las noticias referentes a enfrentamientos entre la Iglesia y el concejo conquense por razones de índole económica. Quizá la aplicación de los acuerdos de 1425 contribuyese algo a apaciguar el estado latente de enfrentamiento entre las potestades eclesiástica y concejil, aunque, tal como acabamos de ver, las disputas no desaparecieron del todo. Por otro lado hay que tener en cuenta, como más adelante se dirá, que el obispo Fray Lope de

---

[44] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 782.

[45] Yolanda Guerrero Navarrete y José María Sánchez Benito, *Cuenca en la Baja Edad Media...*, p. 250.

Barrientos ejercería, por mandato regio, la guarda de la ciudad de Cuenca durante amplios periodos de su pontificado conquense (1445-1469), con la consiguiente intervención en numerosos asuntos concejiles, factor éste que, sin duda, contribuirá a mitigar algo los conflictos de la Iglesia con el concejo, conflictos que, aunque en menor medida, continuarían produciéndose a pesar de todo durante el resto de la centuria.

Ya a fines de siglo, en 1491, el cabildo catedralicio de Cuenca se quejará ante los Reyes Católicos diciendo que recientemente habían sido derribadas unas casas de su propiedad para edificar en su lugar unas casas del Ayuntamiento. A pesar de este hecho el concejo no había entregado al cabildo ningún tipo de compensación económica, y los regidores de Cuenca se negaban a tomar medidas al respecto. Debido a todos estos motivos, el 13 de agosto del mencionado año de 1491 los monarcas mandarán a la justicia conquense que intervenga para que se pague al cabildo catedralicio el valor de las casas derribadas[46].

Dos años más tarde, al ser nombrado como obispo de Cuenca el cardenal Rafael Riario, el provisor de éste, don Pedro de Costa, celebraría en la villa episcopal de Pareja un sínodo diocesano. Precisamente con motivo de esta celebración, el 2 de noviembre de 1493 el concejo de Cuenca designaría a dos regidores para que acudiesen a dicho sínodo que pronto iba a celebrarse, recayendo el nombramiento en Juan Álvarez de Toledo y Pedro de Alcalá, quien, a su vez, por estar ocupado, nombró en sustitución suya a Juan Ferrández de Chinchilla, también regidor. El concejo les encargó que estuviesen presentes en el sínodo, en especial para que vigilaran que no se cometiera ningún agravio en las rentas de las tercias reales, y también para que no se establecieran innovaciones en materia decimal. A cambio de la tarea encomendada, el concejo pagaría a cada uno de estos regidores 150 mrs. diarios por espacio de diez días[47].

Esta actitud vigilante del concejo con respecto a las posibles determinaciones que se fueran a tomar en el sínodo de

---

[46] AHN, Micr., rollo 14223, s.a. letra H, nº 8.

[47] AMC, leg. 211, exp. 3, f. 31r-v.

Pareja pone de manifiesto la posición de recelo del concejo hacia la autoridad episcopal, máxime cuando, como sucedía en este caso, se trataba de una reunión sinodal convocada por el provisor que actuaba en nombre de un prelado extranjero que pronto se preocuparía fundamentalmente de obtener el máximo partido económico de las rentas de la mitra conquense. Por ello el concejo, sin duda consciente de esto último, trataría de intervenir a fin de que la normativa emanada del nuevo sínodo no perjudicase sus intereses económicos.

El progresivo surgimiento de nuevos y diferentes litigios entre las autoridades eclesiástica y concejil acabaría motivando que en 1498 el cabildo catedralicio de Cuenca presentase ante los Reyes Católicos una serie de capítulos acusando de diversas cosas a los regidores de la ciudad. De este modo, el 10 de marzo de dicho año los monarcas mandarían al licenciado Juan Rodríguez de Mora hacer una pesquisa sobre el contenido de los mencionados capítulos para averiguar qué había de verdad en las acusaciones del cabildo[48]. Aunque en el documento no se indica cuáles eran estas acusaciones, sin duda el asunto debía revestir el suficiente relieve y gravedad como para dar lugar a la consiguiente intervención regia.

B) *Conflictos con otros concejos del obispado*

Pero el obispo y cabildo catedralicio no sólo mantuvieron enfrentamientos por razones económicas con el concejo de Cuenca; por el contrario, aunque en menor medida, también se produjeron disputas diversas con otros concejos de la diócesis.

Así sucedió, por ejemplo, ya durante el reinado de Alfonso X, pues el 25 de febrero de 1267 este monarca mandaría de forma general a todos los concejos del obispado conquense que no pusieran coto a los diezmos de pan y vino del cabildo catedralicio ni impidiesen su libre saca del obispado para poder venderlos fuera[49], repitiéndose similar mandato el 24 de julio de 1274[50].

---

[48] AGS, *Registro General del Sello*, 10-III-1498, f. 411.

[49] Sanz, nº 134.

Sin duda como consecuencia de esta orden regia, el 11 de junio de 1275 el concejo de Alarcón prometería no poner coto alguno sobre el pan ni ningún otro bien perteneciente al cabildo catedralicio en Alarcón y su término, exceptuando el diezmo del pan que correspondía a la villa de Alarcón[51].

Así, pues, vemos cómo el diezmo era un primer motivo de conflictos entre el cabildo y los concejos del obispado, que a menudo trataban de evitar que parte de los frutos de la cosecha -los pertenecientes al cabildo catedralicio- se sacaran de las tierras de su ámbito jurisdiccional con destino a la ciudad de Cuenca u otros lugares de fuera del obispado. Esta actitud de algunos concejos sin duda se veía favorecida por su considerable distancia geográfica con respecto a Cuenca, tal como sucedía, por ejemplo, con Alarcón, dado que éste era un factor que dificultaba al cabildo la vigilancia de sus rentas. Por todo ello sería necesaria la mediación regia en apoyo del cabildo, a pesar de lo cual en épocas posteriores continuarían los conflictos.

Así, el 26 de marzo de 1288 Sancho IV dirigiría a todos los concejos del obispado un mandato similar a los anteriores[52], haciendo lo mismo el 6 de enero del año siguiente[53]. Esta actitud de algunos concejos impidiendo al cabildo la libre saca de sus diezmos aún se mantendría, con mayor o menor intensidad, durante el resto de la Baja Edad Media e incluso después[54], constituyendo uno de los conflictos Iglesia-concejos más característicos de este periodo.

Otro tipo de disputa con algunos concejos de la diócesis, y que también se daba con el concejo de Cuenca, era la que muchas veces se producía por el aprovechamiento de ciertos bienes

---

[50] ACC, caj. 9, nº 166.

[51] ACC, caj. 10, nº 172.

[52] ACC, caj. 12, nº 216.

[53] ACC, caj. 12, nº 220.

[54] Así, por ejemplo, el 8 de marzo de 1531 el emperador Carlos V mandaría a los concejos y regidores del obispado de Cuenca que no impidiesen al obispo y cabildo catedralicio la libre saca del pan de sus rentas. ACC, s.a. letra J, nº 3. Y similar disposición será dada por Felipe II el 21 de junio de 1578. ACC, s.a. letra J, nº 4.

comunales. Así, por ejemplo, previa protesta del cabildo catedralicio, el 24 de septiembre de 1290 Sancho IV mandó que no se pusiera ningún tipo de impedimento para cortar madera en los montes vecinales con destino a la obra de los molinos de Valdeganga y Olivares, propiedad del cabildo, ordenando también que a éste no se le cobrase ningún tipo de tributo por la conducción de la madera[55].

El derecho que, por concesión real, tenía el cabildo catedralicio conquense para percibir anualmente 52 cahíces de sal para su mantenimiento en las salinas de Fuente el Manzano, en término de Moya, originó también frecuentes conflictos a lo largo de los siglos XIV y XV, motivados por la negativa de los arrendadores de dichas salinas a entregar al cabildo los cahíces que le correspondían, así como por la permisividad que con respecto a ello a menudo mostraba el concejo de Moya. La primera intervención regia en el asunto ya se produjo durante el reinado de Alfonso XI, quien el 16 de junio de 1338, sin duda como consecuencia del ordenamiento general sobre la sal promulgado ese mismo año, mandará al concejo de Moya y a los arrendadores de las salinas de Fuente el Manzano que respeten el privilegio que tenía el cabildo para recibir anualmente 52 cahíces de sal en dichas salinas[56]. Por otro lado, Pedro I volverá a reiterar el mismo mandato en dos documentos emitidos el 8 de agosto de 1356[57] y el 30 de mayo de 1364[58], debido a que los arrendadores se resistían a entregar al cabildo la sal que le correspondía.

Pero los conflictos aún continuaron en años sucesivos. Así, el 12 de marzo de 1384 Juan I dará sentencia a favor del cabildo catedralicio de Cuenca y contra Abraham Buhardo, judío arrendador de las salinas de Fuente el Manzano y de Monteagudo, para que el cabildo siguiese cobrando los 52 cahíces anuales de sal de las primeras y 620 mrs. de las segundas a que tenía derecho según

---

[55]ACC, caj. 12, nº 223.

[56]ACC, siglo XIV, nº 62.

[57]ACC, siglo XIV, nº 274.

[58]ACC, siglo XIV, nº 270.

privilegios de los reyes anteriores, que ahora Juan I les confirma de nuevo[59].

No obstante, esta intervención de Juan I, al igual que las de los monarcas anteriores, no lograría poner término definitivamente a las disputas. Así, varios años después, el 29 de octubre de 1396, el procurador del cabildo catedralicio conquense presentará una demanda ante el deán contra los arrendadores de las salinas de Fuente el Manzano, porque no pagaban con medida colmada los 52 cahíces de sal que por privilegios anteriores, ahora confirmados por Enrique III, correspondían anualmente al cabildo catedralicio conquense[60].

Durante el siglo XV aún continuarían los conflictos, y prueba de ello es la autorización que el 2 de enero de 1459 dio el deán de Cuenca, don Nicolás Martínez de la Campana, para que se sacasen nuevos traslados del privilegio que tenía el cabildo para poder percibir anualmente los mencionados 52 cahíces de sal en las salinas de Fuente el Manzano, situadas en término de Moya[61]. De este modo, el cabildo trataba de preservar a toda costa su derecho sobre la sal -producto básico para el consumo y conservación de alimentos- frente a los arrendadores que a menudo se negaban a entregarle los cahíces correspondientes.

Otro tipo de conflicto es el que podía producirse por la oposición de algunos concejos hacia el prelado de la diócesis. Así, por ejemplo, en 1488 el concejo de Poyos, lugar dependiente de la Orden de San Juan de Jerusalén, expondría ante los Reyes Católicos su recelo contra el obispo de Cuenca <<por el odio que les tenia>>. Como consecuencia de esta queja, el 20 de diciembre de dicho año los monarcas tomarán bajo amparo regio al mencionado lugar de Poyos, prometiendo protección a sus habitantes frente a cualquier posible ataque por parte del obispo de Cuenca o algún caballero poderoso de la zona[62]. En el fondo, no cabe sino

---

[59] Sanz, nº 549.

[60] Sanz, nº 584.

[61] ACC, *Pleitos*, 1/16.

[62] AGS, *Registro General del Sello*, 20-XII-1488, f. 94.

sospechar que detrás de todo el conflicto pudiera haber algún tipo de enfrentamiento entre el prelado conquense y los sanjuanistas, poseedores de la encomienda de Poyos.

Ya a fines de siglo serían necesarias algunas nuevas intervenciones de los Reyes Católicos, en este caso otorgando protección a los concejos de la Tierra de Huete en sus relaciones económicas con el poder eclesiástico.

Un primer ejemplo sobre ello lo tenemos en julio de 1495. Los concejos de los lugares de la Tierra de Huete expusieron sus quejas ante los monarcas diciendo que en dichos lugares no había casas de tercias donde situar el fruto de los diezmos que los arrendadores habían de cobrar. Además, cuando algún año la tasación decimal resultaba baja, dichos arrendadores postergaban el cobro del diezmo, dejándolo para uno, dos o más años después, con lo cual a menudo sucedía que cuando acudían a reclamar el diezmo los concejos ya no tenían con qué pagar, porque los labradores de la zona se habían aprovechado del producto, cosa que no ocurriría si los arrendadores pusieran casas de tercias adonde acudir con los diezmos desde la viña y la era. Además, los concejos también expusieron que <<desde tiempo inmemorial>> el diezmo de los ganados se acostumbraba a pagar para el día de San Juan, hasta fines de junio de cada año, pero en cambio desde hacía 4 ó 5 años los arrendadores de dicho diezmo dilataban mucho su cobro con respecto a la fecha indicada, de lo cual se seguían daños y costas a la hora de hacer frente a su pago, sucediendo también que los arrendadores demandaban más de lo que en justicia les correspondía.

Por todo ello los Reyes Católicos, con fecha 13 de julio de 1495, mandarán a los arrendadores de los diezmos de los lugares de la Tierra de Huete que cobren el diezmo de pan hasta el día de Santa María de septiembre, y el de la uva hasta la época de la vendimia, y si no lo cobrasen en estos plazos siendo requeridos para ello por los dezmeros, éstos no podrán ser obligados a seguir conservando después dichos diezmos, excepto si pudiesen guardarlos en su parroquia para que de allí los arrendadores los tomasen cuando quisieran. Por último, respecto al diezmo del

ganado, los monarcas mandan guardar la costumbre antigua ya mencionada[63].

Otras intervenciones de los Reyes Católicos en relación a Huete estarían encaminadas a evitar los abusos por parte del provisor de la diócesis don Pedro de Costa, que actuaba en nombre del cardenal de San Jorge. La primera actuación regia con este fin tuvo lugar el 1 de octubre de 1495, fecha en que los monarcas, a petición de Juan de la Muela, vecino de Huete, mandarán al provisor de la diócesis que no perturbe a éste en el arrendamiento de los frutos y rentas de los beneficios de Carrascosa del Campo, Villaverde y Tarancón, en el obispado de Cuenca, los cuales eran de don Juan Mejía, canónigo sevillano[64].

Dos años más tarde se producirá una nueva intervención regia motivada por una protesta de los concejos de la Tierra de Huete, los cuales expusieron que desde hacía poco tiempo el provisor, en nombre del obispo de Cuenca, y los clérigos de Huete obligaban a cada vecino de los lugares de su Tierra a llevar a la ciudad un cahíz de pan a su propia costa de los diezmos y primicias, no teniendo derecho a ello. El 16 de abril de 1497 los monarcas mandarán al corregidor de Huete que remita al Consejo información sobre dicha nueva imposición y que, entretanto se resuelva el litigio, si descubre que se trata de un tributo nuevo exigido contra derecho, lo anule y suspenda prohibiendo su cobro[65].

Todo ello, en última instancia, debe ser encuadrado dentro del contexto general de oposición hacia el provisor del cardenal de San Jorge, oposición que, entre otras razones, estaba motivada por los diferentes abusos de índole económica y fiscal que el provisor don Pedro de Costa cometía en nombre del obispo de Cuenca, el cardenal Rafael Riario.

Finalmente, cabe aludir también a otro conflicto que estaba latente en 1495 entre la villa episcopal de Paracuellos y el provisor don Pedro de Costa, por un lado, y el lugar de Campillo de Altobuey, aldea dependiente del concejo conquense, por otro,

---

[63] AGS, *Registro General del Sello*, 13-VII-1495, f. 289.

[64] AGS, *Registro General del Sello*, 1-X-1495, f. 49.

[65] AGS, *Registro General del Sello*, 16-IV-1497, f. 151.

en razón de la posesión de diversos términos. Recientemente había habido un pleito por cuestión de términos entre Campillo y Paracuellos, y el bachiller Francisco Ortiz, corregidor de Cuenca, había dado sentencia contra Paracuellos, sentencia que poco después sería revocada por el Consejo Real, encargándose de nuevo el pleito al licenciado de Frías, corregidor de Huete, quien mandaría restituir a Paracuellos los términos que le habían sido arrebatados. Pero Francisco Ortiz, junto con algunos regidores de Cuenca, se opuso a esta sentencia, y por su mandado los vecinos de Campillo, según expuso ante los monarcas Juan de Ortega, como procurador del provisor de la diócesis y del concejo de Paracuellos, <<juntos fasta sesenta onbres armados, dandose favor e ayuda los unos a los otros e los otros a los otros, fueron a la dicha villa [Paracuellos] e que le corrieron todo su termino fasta las puertas, e commo non salio ninguno contra ellos prendaron çiertos onbres veçinos de la dicha villa que fallaron en sus lavores, e que llevaron robadas las azemilas e hatos e ganado que hallaron por los terminos de la dicha villa, e que oy dia los tienen>>.

Por todo esto, el 6 de octubre de 1495 los Reyes Católicos mandarían al corregidor de Huete que, de acuerdo con la sentencia por él dada, hiciese restituir a los vecinos de Paracuellos todos los términos y bienes que les habían usurpado los de Campillo[66], y el 15 de abril de 1496 otorgarían una carta de amparo regio en favor de Paracuellos para que pudieran poseer libremente los términos arrebatados[67]. Así, pues, aunque se trató de un conflicto territorial entre Paracuellos y Campillo de Altobuey, la Iglesia de Cuenca también se veía implicada de lleno al ser Paracuellos una villa de señorío episcopal, e igual sucedía con el concejo de Cuenca, en cuyo alfoz estaba integrado Campillo.

---

[66] AGS, *Registro General del Sello*, 6-X-1495, f. 296.

[67] AGS, *Registro General del Sello*, 15-IV-1496, f. 27.

2-Conflictos jurisdiccionales

La otra parte de los conflictos que enfrentaron a la Iglesia conquense con los concejos del obispado, especialmente el de la ciudad de Cuenca, tuvo motivaciones de índole jurisdiccional. En efecto, la existencia de dos jurisdicciones, una laica y otra eclesiástica, motivaría ya desde fechas muy tempranas el surgimiento de frecuentes conflictos entre ambas a la hora de determinar qué potestad jurisdiccional debía encargarse de juzgar a los individuos que cometían determinados delitos, conflictos que, con mayor o menor intensidad, se sucederán a lo largo de todo el periodo bajomedieval, y ello a pesar de los acuerdos y compromisos iniciales tomados al respecto, como a continuación se verá.

El 7 de marzo de 1207, a instancias del obispo San Julián, se realizó una concordia entre el cabildo catedralicio de la Iglesia de Cuenca y el concejo de la ciudad que, además de contar con la aprobación del prelado conquense, también sería ratificada por Alfonso VIII y el arzobispo de Toledo don Martín. El acuerdo quedó recogido en un documento de procedencia real, y a través del mismo se tratarían de regular las relaciones entre los clérigos, familiares, paniaguados y demás hombres dependientes del cabildo, por un lado, y los vecinos de Cuenca y sus aldeas, por otro, dada la casi total falta de medidas al respecto en el Fuero de Cuenca. Con esta normativa se estaba intentando delimitar qué materias serían competencia de la jurisdicción laica y cuáles lo serían de la eclesiástica en todos aquellos pleitos en que se daba la presencia de una parte laica y otra eclesiástica, definiéndose de este modo los cauces que en el futuro habrían de seguir estas querellas. Así, se establece que para los casos de justicia mayor los dependientes del cabildo habrán de regirse por lo seglar, mientras que para la justicia menor se guiarán por lo eclesiástico. La normativa judicial recogida en el documento vino definida por los siguientes puntos

que, dada su importancia y repercusiones futuras, se indican aquí en su integridad[68]:

-Todos los hombres de los canónigos que comieran de su pan y vivieran en sus casas, si tuvieran querella con los vecinos de la ciudad por muerte de alguien, por hurto, por mujer forzada o por quebrantamiento de casa, habrán de acudir ante la presencia de los alcaldes.

-Si la razón del litigio fuera por otras causas de las antes mencionadas, habrán de ir ante la presencia del deán y de los canónigos, y luego al obispo. Así, para la justicia mayor deben regirse por lo seglar, mientras que para la justicia menor se guiarán por lo eclesiástico.

-Los yugueros, pastores, hortelanos y molineros de los canónigos se presentarán ante los alcaldes. Además, así como los ciudadanos vecinos eximen a sus hombres de pechos, del mismo modo lo podrán hacer los canónigos con los hombres sometidos a su dependencia.

-Cuando tengan querella porque no hayan pagado bien el diezmo, juren por su cabeza pagarlo.

-Si un clérigo tuviera querella con un laico porque éste lo hubiese golpeado o hubiera cometido sacrilegio, si fuese de la ciudad, nombre a ocho de su collación y jure con cuatro. Si fuese de aldea, nombre igualmente a ocho de su collación y jure con cuatro.

-Todo hombre que fuese dependiente de los canónigos, si dejara de serlo podrá tener de nuevo la condición de pechero y ser alcalde o jurado como cualquier vecino de Cuenca.

-Si algún vecino de Cuenca tuviera causa con clérigo por la que fuera llamado ante el obispo o el arzobispo, habrá de presentarse a ellos.

-De igual modo, si un clérigo tuviese querella con un laico siendo llamado ante el rey, habrá de acudir a la llamada.

---

[68] ACC, caj. 2, nº 33 / Mateo López, *Memorias históricas de Cuenca y su obispado...*, I, pp. 206-207.

Así, pues, vemos cómo los hombres dependientes del cabildo catedralicio no tenían la condición de vecinos, pues no eran pecheros, si bien se contemplaba la posibilidad de que pudieran abandonar su estado de dependencia hacia el cabildo para pasar a ser pecheros y, por tanto, vecinos de pleno derecho. De este modo, su peculiar situación social, a caballo entre el estado laico y el eclesiástico, hizo necesaria la elaboración de una normativa jurídica que rigiese, al menos en teoría, en qué casos debían someterse a la jurisdicción laica y en qué otros a la eclesiástica.

Pocos años después el monarca castellano Alfonso VIII, a través de un nuevo documento dado el 20 de enero de 1210, otorgará seguridades personales a los canónigos y racioneros de la catedral conquense, prohibiendo toda acción violenta contra ellos por parte de los laicos y determinando las penas que se aplicarán a todos aquellos que les causen algún daño corporal[69].

Pero la normativa jurídica recogida en estos documentos de 1207 y 1210 será con posterioridad objeto de violación por parte del concejo conquense y la justicia laica, aunque tampoco faltarán los casos en que sea el concejo de Cuenca quien acuse al obispo y cabildo catedralicio de entrometerse en asuntos que no son de su competencia jurisdiccional.

Así, por ejemplo, en 1282 el obispo conquense, don Gonzalo García Gudiel, se quejará ante el infante don Sancho diciendo que a veces los alcaldes y justicias de Cuenca hacían comparecer a los clérigos ante el tribunal secular por pleitos motivados por la posesión de heredades y otros asuntos que no eran de su competencia jurisdiccional. De este modo, el 26 de abril de dicho año, don Sancho mandará los alcaldes y justicias de Cuenca y su obispado que no obliguen a comparecer ante ellos a los clérigos por asuntos ajenos a su competencia jurisdiccional, aludiéndose en el documento a la necesidad de respetar las concordias establecidas en tiempos de Alfonso VIII[70].

---

[69] ACC, caj. 2, nº 37 / ACC, *Estatutos*, priv. XXI, f. 4v / BN, Ms. 13071, f. 126.

[70] ACC, caj. 11, nº 195.

Pocos años después Sancho IV, ya como rey de Castilla, tendrá que intervenir de nuevo en defensa de la jurisdicción eclesiástica. Así, el 28 de enero de 1288, previa protesta del cabildo catedralicio, mandará a los alcaldes y justicias de Cuenca que defiendan a los clérigos para que nadie les desafíe ni les haga daño, ordenando también que si alguien tuviera querella contra ellos se les emplace ante el tribunal del deán o del obispo[71]. Por otro lado, el 1 de mayo de 1291, el rey mandará a Alfonso Pérez, su alcalde en Cuenca, que haga respetar las antiguas concordias entre el concejo y el cabildo catedralicio[72], refiriéndose indudablemente a los acuerdos de 1207 y 1210 establecidos en tiempos de Alfonso VIII.

Pero esta conflictividad de orden jurisdiccional no fue ni mucho menos algo privativo del obispado conquense, sino que se dio de forma generalizada en todo el reino castellano-leonés. Así, en las Cortes de Valladolid de 1295, los prelados presentes protestarían por las frecuentes ocasiones en que se impedía a los clérigos ampararse en la justicia eclesiástica[73], y años más tarde, en el Concilio Provincial de Peñafiel de 1302, se presentarían quejas similares.

Una nueva intervención de la Monarquía castellana en el obispado conquense por cuestiones de índole jurisdiccional es la que se produjo el 31 de marzo de 1301. El obispo don Pascual se había quejado ante el monarca de que había algunas personas que no respetaban las sentencias de excomunión que ponía la Iglesia de Cuenca y, estando excomulgados, entraban en la catedral mientras se rezaban las horas del oficio divino. Además había algunos que, pasados treinta días desde que se pronunciase su sentencia de excomunión, no querían acudir a reconciliarse ante la Iglesia. Fernando IV castigará a los excomulgados recalcitrantes mandando que, a los que estuviesen así por espacio de más de treinta días, los prendiesen los merinos y los alcaldes y les hiciesen pagar 60 sueldos; y todos aquellos que, estando

---

[71] ACC, caj. 12, nº 215.

[72] ACC, caj. 12, nº 224.

[73] A. Benavides, *Memorias de don Fernando IV de Castilla*, II, doc. nº 17.

excomulgados, fuesen a la iglesia sin querer salir durante el rezo de las horas, siendo amonestados por ello, manda que paguen la cantidad de 100 mrs. de multa, la mitad para el rey y la otra para la Iglesia; por último, ordena que a todos aquellos que, aun así, continuaran reincidentes por el espacio de un año se les tomen los cuerpos y todas sus posesiones[74]. Así, pues, vemos cómo la Monarquía aparece respaldando en todo momento las sentencias de excomunión emitidas por la jurisdicción eclesiástica conquense.

Años más tarde, en las Cortes de Madrid de 1329, se producirían algunas reclamaciones como consecuencia de este castigo pecuniario que llevaba aparejado la pena de excomunión. Sin embargo, Alfonso XI se negó a cambiar el procedimiento que hasta entonces se había venido dando[75].

Situándonos ya en la época Trastámara, puede afirmarse que ésta en su conjunto supuso un pleno reconocimiento por la Monarquía castellana de los privilegios jurisdiccionales de la Iglesia, produciéndose indudables manifestaciones que denotaban la presencia de un cierto compromiso por parte de la Realeza para garantizar el ejercicio de tales privilegios jurisdiccionales.

Así, Enrique II adoptó una posición de decidido compromiso con la Iglesia en este sentido, tal como sucedió en las Cortes de Toro de 1371. Consecuencia de ello sería que el rey se *comprometiera a exigir a los señores laicos y a los concejos* que se abstuvieran de convocar ante sus tribunales a los vasallos eclesiásticos y a los clérigos por causas tocantes a la jurisdicción de la Iglesia y, en general, a impedir cualquier quebrantamiento de estos privilegios jurisdiccionales. Por otro lado, años más tarde esta misma línea de actuación sería ratificada en las Cortes de Guadalajara de 1390. Las convulsiones políticas de tiempos de Juan II y Enrique IV contribuyeron a dificultar la aplicación de normas proteccionistas en favor de la jurisdicción de la Iglesia, lo que explicaría el que el papa Eugenio IV

---

[74] ACC, siglo XIV, nº 328.

[75] *Cortes*, I, p. 426.

expresase su preocupación por la violación de que era objeto en Castilla la jurisdicción eclesiástica[76].

Precisamente durante el reinado de Juan II es cuando se firmó en Valladolid el ya mencionado acuerdo del 3 de abril de 1425 entre el obispo de Cuenca, don Álvaro de Isorna, y don Lope Vázquez de Acuña, como procuradores del cabildo catedralicio conquense y del concejo de la ciudad, respectivamente, a través del cual, además de establecerse numerosas avenencias sobre cuestiones de índole económica, también se llegaría a un *compromiso sobre temas de carácter jurisdiccional*. Así, por ejemplo, el concejo conquense se quejaba de que los clérigos y sus hombres llevaban armas públicamente, determinándose por ello que en adelante no las llevaran, salvo el alguacil del obispo y cuatro hombres que le acompañasen. Por otro lado, el concejo también se sentía agraviado porque los vicarios y jueces del obispo prendían a algunos legos sin razón alguna, por lo que se establecerá que en adelante esto no se haga. Finalmente, en el documento también se señala que seguía habiendo problemas sobre a qué jurisdicción debían someterse los familiares y paniaguados del cabildo, aludiéndose a la concordia establecida en tiempos del obispo San Julián, que debería ser respetada[77].

Años más tarde, en cambio, en el sínodo celebrado por Fray Lope de Barrientos en 1446, el obispo se quejará de que algunos jueces seglares de los concejos y señoríos de Cuenca y su obispado obligaban a comparecer ante ellos en juicio a los clérigos por asuntos que no eran de su competencia jurisdiccional, prohibiéndose que en adelante esto se siga haciendo[78].

El enjuiciamiento de los clérigos ante los tribunales seculares era tan sumamente problemático que, también en la mencionada reunión sinodal, se prohibirá que los clérigos de *orden sacra comparezcan personalmente ante los jueces seglares*, mandándose que lo hagan por medio de procuradores, y en las causas en que su presencia fuese absolutamente necesaria habrían

---

[76] José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, pp. 110-111.

[77] ACC, s.a. caj. 9, leg. 38, nº 765.

[78] *Sínodo de 1446*, ff. 53v-54r.

de notificarlo previamente al obispo o a sus vicarios generales. Pero se prohíbe terminantemente que los clérigos actúen ellos mismos ante los jueces seglares como procuradores de otras personas sobre causas ajenas a ellos. Todo esto se manda porque <<en las quales presençias de juyzios por sus personas suelen ser injuriados e denostados, agora por fechos o por palabras, de lo qual viene inominia a la orden clerical en vituperio de sus personas e grant sentimiento a nos e a toda la Iglesia>>, lo que viene a ser un claro exponente del estado latente de enfrentamiento entre las jurisdicciones laica y eclesiástica[79].

A partir del reinado de Enrique IV una de las cuestiones de índole jurisdiccional que más conflictos ocasionaría en la ciudad de Cuenca es la que venía dada por una disposición de este monarca mandando que el alguacil del obispo conquense no pudiese llevar vara de justicia ni ir acompañado de hombres armados, con lo cual no se pretendía sino poner freno a los intentos de extralimitación en sus atribuciones jurisdiccionales por parte de la justicia episcopal, que a veces se inmiscuía en parcelas propias de la jurisdicción real. Por ello el 15 de septiembre de 1477 Isabel la Católica mandará a Juan de Anaya, alguacil del obispo de Cuenca, que, en cumplimiento de la anterior disposición de Enrique IV, no lleve vara de justicia, como hasta ahora hacía, ni vaya acompañado de hombres armados porque ello <<es deservimiento e perjuysio de mi juridiçion real>>[80].

A fines de siglo se producirían nuevas intervenciones regias por el mismo motivo. Así, el 19 de junio de 1493, a petición de los regidores de Cuenca, los Reyes Católicos prohibieron al alguacil del obispo conquense llevar vara de justicia y prender a personas seglares en Cuenca y su Tierra, salvo en los casos expresamente permitidos por el Derecho Canónico[81], y el 26 de noviembre del mismo año nos encontraremos con otro mandato de procedencia real estableciendo que se levantase una investigación

---

[79] *Ibid.*, f. 7r-v.

[80] AGS, *Registro General del Sello*, 15-IX-1477, f. 462.

[81] *Ibid.*, 19-VI-1493, f. 100.

sobre lo de la vara del alguacil del obispo, que hacía contra derecho ejecuciones en personas seglares[82].

Durante el mandato del provisor don Pedro de Costa, que gobernaba la diócesis en nombre del cardenal de San Jorge y obispo de Cuenca, don Rafael Riario, también tuvieron lugar nuevos conflictos por la cuestión de la vara del alguacil. Antes de febrero de 1495 el provisor notificó a los monarcas cómo hacía unos dos meses que, cuando el alguacil del obispo fue a expulsar a ciertas personas de una iglesia porque estaban debatiendo, el corregidor de Cuenca entró en la iglesia y, tomando la vara al alguacil, la hizo pedazos manifestando su enemistad hacia el cardenal de San Jorge, y además mandó prender a un clérigo de corona, beneficiado en dicha iglesia, alegando que éste había tenido cierto enfrentamiento con un laico. Por ello, el 1 de febrero del mencionado año, los Reyes Católicos mandarán al corregidor de Huete que se informe sobre la verdad de lo sucedido, para así poder tomar una determinación al respecto[83].

A pesar de todo, tres años más tarde, con fecha 6 de abril de 1498, los monarcas insistirán de nuevo en que se respeten las anteriores disposiciones por las que se prohibía al alguacil del obispo de Cuenca llevar vara de justicia y prender a los legos, salvo en los casos permitidos por el Derecho Canónico[84], lo cual, en definitiva, no venía a ser sino una nueva manifestación del deseo de los monarcas de preservar a toda costa la jurisdicción real frente a posibles intromisiones por parte de la justicia episcopal que, como hemos visto, se producían con cierta frecuencia.

Pero estas intromisiones no sólo las protagonizaba el alguacil del obispo, sino que también podían manifestarse de otras maneras. Prueba de ello es, por ejemplo, el mandato realizado por los Reyes Católicos el 15 de marzo de 1492, a petición de los escribanos públicos del número de Cuenca, para

---

[82] *Ibid.*, 26-XI-1493, f. 89.

[83] *Ibid.*, 1-II-1495, f. 509.

[84] *Ibid.*, 6-IV-1498, f. 145.

que los notarios eclesiásticos no interviniesen en escrituras y procesos seglares, cosa que a veces hacían[85].

Así, pues, de todo lo antedicho se deduce el empeño puesto por la Monarquía en la defensa de su potestad jurisdiccional frente a la eclesiástica, si bien ello no impedirá que, llegado el caso, los monarcas actúen también como protectores de la jurisdicción de la Iglesia. Así, por ejemplo, el 23 de diciembre de 1497, los Reyes Católicos mandarían que los corregidores de Cuenca y Huete y toda la justicia laica del obispado conquense otorgasen su ayuda al provisor don Pedro de Costa cuando fuesen requeridos por éste para auxiliarle al ir a prender a algunos clérigos malhechores[86]. Vemos, por tanto, cómo en ocasiones la jurisdicción eclesiástica necesitaba del respaldo de la justicia secular.

Otro conflicto que, sobre todo desde mediados del siglo XV, también enfrentará a veces a la justicia eclesiástica con la secular, es el que se producía cuando algunos jueces seculares entraban en casa de ciertos clérigos para prender a la mujer que vivía con ellos, acusándola de concubina, sin que previamente se hubiese demostrado que tal mujer era realmente una manceba y no una simple parienta del clérigo. Ya Fray Lope de Barrientos, en el sínodo de 1446, prohibiría tales actuaciones por parte de los jueces seglares[87].

Años más tarde, en las Cortes de Toledo de 1480, los Reyes Católicos tomarían severas medidas contra las mancebas de los clérigos, a las que se condenó a penas pecuniarias, de azotes o de destierro por un año, en función de su grado de reincidencia en tal delito. Después, mediante una pragmática dada en Córdoba el 18 de agosto de 1490, los monarcas reiteraron estas mismas disposiciones. Fue sin duda ello lo que propiciaría que la justicia secular se extralimitara en sus atribuciones entrando muchas veces sin razón y por la fuerza en las viviendas de los clérigos para ver si éstos tenían mancebas, tal como sucedió en

---

[85] *Ibid.*, 15-III-1492, f. 472.

[86] AGS, *Registro General del Sello*, 23-XII-1497, f. 160.

[87] *Sínodo de 1446*, f. 58r-v.

la ciudad y diócesis conquense, dando ello lugar a la lógica protesta del cabildo catedralicio. Por este motivo, el 13 de agosto de 1491, a petición de los canónigos conquenses, los Reyes Católicos mandarían a los jueces seglares de Cuenca y su obispado que no entrasen en las casas de los clérigos para ver si tenían mancebas con la intención de cobrar las penas pecuniarias con que la ley castigaba a éstas[88].

3-Un caso especial: los concejos y aldeas de señorío episcopal

Las relaciones mantenidas entre los obispos de Cuenca y los concejos y vasallos de sus señoríos jurisdiccionales merecen, por sus especiales características, un tratamiento particular. Cuando hablamos de *señorío jurisdiccional* nos referimos a la coexistencia de la titularidad del dominio territorial y de la jurisdicción sobre el mismo, debiendo entenderse que se trata en realidad de evidentes manifestaciones del llamado señorío *jurisdiccional-territorial o pleno*. De este modo, las tierras y colectividades vecindales de un señorío jurisdiccional eclesiástico constituyen verdaderas demarcaciones autónomas dentro del territorio del reino, sustraídas a la acción directa de los oficiales de la Corona y sometidas a la potestad de la mitra episcopal[89].

Al igual que sucedió en otras diócesis, gracias a las donaciones regias del proceso de dotación inicial, durante el reinado de Alfonso VIII, los obispos de Cuenca pronto se convirtieron en dueños y señores de varios señoríos claramente jurisdiccionales en los que tenían potestad para ejercer la justicia, y cuyos habitantes y concejos pasaron a ser vasallos episcopales obligados a pagar anualmente determinados tributos a su señor. Pero si bien los obispos de Cuenca eran los que en última instancia ostentaban la titularidad de estos señoríos, también es cierto que el cabildo catedralicio ejercía sobre ellos

---

[88]AHN, Micr., rollo 14215.

[89]Juan Ignacio Ruiz de la Peña, <<Esquema para el estudio de un señorío eclesiástico medieval>>, p. 224.

un cierto grado de potestad junto con el obispo pues, como ahora se dirá, el rey hizo estas donaciones al obispo e Iglesia conquense. A continuación convendrá recordar cómo había tenido lugar la formación inicial de estos dominios señoriales.

La primera donación regia, con la que además se inició el proceso de dotación de la nueva diócesis, se produjo el 24 de febrero de 1182, y a través de ella Alfonso VIII donó al electo don Juan Yáñez y al futuro cabildo de canónigos los castillos de Peñas Alcatenas y Piedras Luches (Peralveche), situados en el extremo norte de la diócesis, junto al Tajo, con todas sus tierras y aldeas próximas para repoblar[90]. Sobre estos territorios los obispos de Cuenca tendrían derecho a ejercer en adelante un señorío territorial y también jurisdiccional, pues en el documento se indica que, con excepción del rey, nadie sino el obispo poseerá potestad alguna sobre esta donación: <<ut nullus de cetero rex, nec dominus terre, nec merinus, nec aliquis alius homo habeat potestatem in ipsis>>.

Al año siguiente tendrán lugar otras dos importantes donaciones. La primera de ellas el 14 de noviembre de 1183, a través de la cual Alfonso VIII donó a don Juan Yáñez y a la Iglesia de Cuenca la aldea de Huerta con todos sus términos, para él y todos sus sucesores[91]. La siguiente tuvo lugar el 24 de diciembre, y en esta ocasión Alfonso VIII donó a don Juan y a su Iglesia la aldea de Abia, situada muy cerca de la anterior, con todos sus términos[92].

Otra donación de señorío es la que nos encontramos el 12 de abril de 1187, y mediante ella Alfonso VIII entregó a la Iglesia de Cuenca y al obispo don Juan y sus sucesores los castillos de

---

[90] ACC, *Estatutos*, privil. VII, ff. 2v-3r (es una copia, pues el original se ha perdido). Se trataba de un antiguo emplazamiento musulmán que había quedado desocupado ante el avance cristiano. La idea de abandono de antiguas aldeas y castillos que ahora interesa repoblar queda reflejada cuando el documento se refiere a <<aldeis populatis et heremis>>, mientras que la intención repobladora queda manifiesta en el término <<populandis>>.

[91] ACC, caj. 1, nº 6. Se trata de una aldea de repoblación episcopal que había sufrido el abandono de sus pobladores cristianos ante una incursión almohade.

[92] ACC, *Estatutos*, privil. X, f. 3r. Se trata de una antigua aldea musulmana que había sido abandonada ante el avance castellano. En torno a esta aldea los obispos de Cuenca llevarían a cabo una importante actividad repobladora, contando también para ello con la colaboración del concejo de Cuenca.

Monteagudo, con sus salinas y términos, y Paracuellos, con el portazgo sobre todos los ganados que pasasen por el castillo y sus términos[93]. La donación se hace sin duda pensando en su inmediata repoblación.

El siguiente testimonio documental importante es ya algo posterior a los anteriores, pues data de 1198, y a través de él sabemos que entre esta fecha y la de la última donación antes mencionada la Iglesia de Cuenca había adquirido nuevos señoríos. De este modo, el 11 de abril de dicho año 1198 Alfonso VIII confirmaría a la Iglesia de Cuenca y a su obispo San Julián la posesión de Pareja con sus aldeas (Parejuela, Chillarón, Halit, Trasfontanella y Tabradiella), así como la de Huerta, Abia, Monteagudo, Paracuellos y las heredades de Castillejo y Peantes[94]. En 1198, por tanto, los obispos de Cuenca ya poseían un nuevo dominio, el de Pareja, que con el tiempo se convertiría en el señorío episcopal más importante de la diócesis. De este modo se cerraba la formación inicial de los dominios señoriales de la Iglesia conquense.

Pero todas estas donaciones regias no obedecían simplemente a un deseo del monarca de dotar a la nueva Iglesia, sino que con ello Alfonso VIII también buscaba obtener de esta última una fuerte colaboración para una tarea de importancia capital en la política regia: la repoblación de las tierras recién conquistadas.

Ante todo debe destacarse que fue en torno a algunos centros importantes de repoblación donde los obispos consiguieron formar sus señoríos jurisdiccionales. Así, el rey, tratando de animar por todos los medios al obispo y cabildo para que se integrasen en la actividad repobladora, les concedió los derechos más amplios en aquellos puntos cuya repoblación le interesaba desarrollar. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, la empresa

---

[93] ACC, caj. 1, nº 10. Tiempo después nos encontramos con otros privilegios relacionados con las rentas a percibir en estos señoríos. Así, el 25 de abril de 1220 Fernando III donará al obispo don García y a todos sus sucesores una renta anual de 300 mrs. en las salinas de Monteagudo: ACC, caj. 3, nº 46, mientras que el 23 de septiembre de 1234 mandará de nuevo que se pague al obispo de Cuenca el portazgo del ganado que pase por el castillo de Paracuellos, sin duda debido a la reticencia que debía de existir a la hora de efectuar este pago: ACC, *Estatutos*, privil. LIV, f. 16r.

[94] ACC, *Estatutos*, f. 3v.

repobladora no se vio coronada por un éxito pleno. Así, en 1257 aún continuaba la labor repobladora, pues dicho año el obispo don Mateo otorgaba una *carta puebla* a los nuevos pobladores del lugar de Vallermoso[95], mientras que tan sólo cinco años más tarde, en 1262, el obispo Pedro Lorenzo se quejaba de la tendencia a la despoblación en la diócesis de Cuenca en favor de las tierras que acababan de ser incorporadas en la región andaluza[96].

De todos estos señoríos episcopales, los castillos de Peñas Alcatenas y Peralveche a lo largo del siglo XIII irían cayendo en franco declive al perder la funcionalidad militar con que fueron creados. De este modo se explica el hecho de que el 1 de febrero de 1305 el obispo don Pascual y el cabildo catedralicio conquense realizasen un trueque con la infanta doña Blanca, hija del rey de Portugal, a través del cual ésta recibió del obispo y cabildo el castillo de las Peñas de Viana (Peñas Alcatenas) que les había donado Alfonso VIII, haciendo entrega a cambio de la aldea de Gascoñuela, cerca de Alcocer[97], en la cual el cabildo veía una mayor fuente de provecho.

El resto de los señoríos se mantendrían a lo largo de toda la Edad Media e incluso Antiguo Régimen, debiendo ser destacada la importancia prioritaria que pronto adquirió el señorío de

---

[95]El 19 de septiembre de 1257 el obispo don Mateo, con consentimiento del cabildo catedralicio, entregó a los pobladores de Vallermoso la heredad que poseía en el cañizar de Yémeda y el Ero Hermoso, con la condición de que los que tuviesen dicha heredad le pagasen 40 mrs. alfonsíes cada año. Los habitantes de Vallermoso que no disfrutasen de dicha heredad también deberían pechar al obispo en función de lo que tuviesen, y hacer todos los otros servicios que hacían al obispo los habitantes de los señoríos de Paracuellos y Monteagudo. El nombre de Vallermoso (*Valfermoso*) le fue puesto a este nuevo pueblo por el propio obispo, el cual otorgó además a sus habitantes el Fuero de Cuenca según lo tenían los de Paracuellos y Monteagudo. En adelante todos los hornos y molinos que se construyesen en la villa y su término serían del obispo, estando además obligados sus habitantes a pagar siempre el diezmo <<e que non ayan poder de dexar la heredat por razon ninguna>>. Por último se establece que ninguno de los nuevos pobladores pueda vender nada de su parte de heredad hasta pasados cinco años. ACC, caj. 6, nº 103. El mismo día en que fue emitido el documento anterior don Mateo concederá al cabildo catedralicio conquense parte de los mencionados 40 mrs. que habría de recibir el obispo con la condición de que el cabildo pusiese su sello en la carta puebla. ACC, caj. 6, nº 104. No obstante, a pesar de todos los derechos que tendría el obispo en el lugar, lo cierto es que no acabaría constituyéndose en un auténtico *señorío jurisdiccional, pues en la documentación de épocas posteriores nunca se le mencionará como tal.*

[96]José Manuel Nieto Soria, *El obispado de Cuenca en sus relaciones de poder*, p. 218.

[97]ACC, siglo XIV, nº 326 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 3, ff. 159r-160v.

Pareja[98]. También debe hacerse una referencia a otros dos señoríos episcopales que aparecen documentados como tales desde fines del XV, las pequeñas aldeas de Poveda y Vindel, sobre cuya formación no se ha conservado ningún dato. Aunque parece probable que fuesen adquiridas a través de alguna donación regia durante el proceso inicial de dotación, resulta imposible confirmar esta hipótesis ante la falta de información documental.

Tal como se acaba de señalar, Pareja pronto se convirtió en el más importante de los señoríos episcopales de la diócesis. En la villa los obispos tenían una fortaleza y un palacio con una capilla donde se celebraban algunos oficios litúrgicos. Una clara muestra de esta importancia adquirida por Pareja lo constituye el hecho de que algunos sínodos diocesanos se celebraron en este lugar: así los de 1364 y 1413, en la parroquia de Santa María; el de 1409 en la capilla del palacio episcopal; y el de 1484, también celebrado en Pareja. Por otra parte, en la vecina aldea de Casasana los obispos de Cuenca tenían un castillo al menos a fines de la Edad Media. Esta temprana predilección episcopal hacia Pareja motivaría, entre otras cosas, que el 7 de octubre de 1255 Alfonso X, sin duda a instancias del obispo conquense, concediese a la villa la celebración de una feria anual durante los 15 días anteriores a la fiesta de la Cincuesma. A dicha feria podrían acudir para comprar y vender cuantos compradores de Castilla u otros reinos quisieran, tanto cristianos como musulmanes o judíos[99].

En su señorío de Pareja, así como en el resto de los señoríos episcopales de la diócesis, los obispos de Cuenca, como señores, cobraban de sus vasallos toda una serie de derechos feudales que se venían a unir a las rentas de la mesa episcopal, y además intervenían junto con el cabildo catedralicio en el

---

[98] Como recuerdo de la potestad señorial ejercida por los obispos de Cuenca en Pareja durante siglos, tras la supresión de dicha potestad en el siglo XIX los obispos de Cuenca aún seguirían añadiendo a sus títulos el simbólico de «señor de Pareja y Casasana», hasta que muy recientemente el obispo de Cuenca don Inocencio Rodríguez Díez decidiera suprimir definitivamente dicho título.

[99] ACC, *Estatutos*, f. 16v. Cinco años más tarde el monarca concedería igual merced a Guadalajara, aunque en esta ocasión se otorgó que fuesen dos las ferias anuales, una 15 días después de la Cincuesma, para no perjudicar a los de Pareja, y otra la semana de antes y la de después de la fiesta de San Lucas, en el mes de octubre. Juan Catalina García López, *La Alcarria en los dos primeros siglos de su reconquista*, p. 81.

nombramiento de los oficiales concejiles y del alcaide de la fortaleza.

Sobre los derechos que cobraba el obispo en sus señoríos nos han llegado algunos testimonios. Así, el 11 de julio de 1281 el obispo don Gonzalo García Gudiel realizaría un acuerdo con sus vasallos de Paracuellos a través del cual éstos habrían de pagarle cada año, por el pecho de San Miguel, el horno, la dehesa de conejos y por el molino del obispo en la hoz de Huércemes, 210 mrs. de la moneda blanca <<que façen quinçe dineros blancos el maravedi>>, más quince pares de conejos con sus pieles. Esta cantidad a pagar sería fija, independientemente de que aumentase o disminuyese la población del lugar, y se entregaría anualmente en Cuenca al obispo o a su mayordomo. Además se establece que los ballesteros que moren en el lugar y maten venado estén exentos de pagar el pecho de San Miguel, mientras que los nuevos pobladores que acudan al lugar tampoco habrían de pagarlo durante los tres primeros años. Por último, se determina que el obispo mantendrá sus derechos de yantar, pedido y fonsadera[100].

Sin duda todo ello constituía una notable fuente de ingresos para el mantenimiento de la institución episcopal, aunque de mucho menor relieve que la obtenida por otras vías, debiendo llamarse también la atención sobre las facilidades iniciales concedidas a los nuevos pobladores que acudiesen al lugar, poniéndose así de manifiesto el interés de los obispos por fomentar la repoblación de sus señoríos. En algunos de ellos, además, los prelados retenían ciertos derechos especiales frente al concejo del lugar. Así sucedía por ejemplo en Pareja, donde el obispo de Cuenca tenía vedada para la pesca una parte del río[101].

Aunque son de época mucho posterior, también resultan ilustrativos ciertos datos que sobre estas contribuciones señoriales nos ofrece el llamado *Libro del Becerro de la Dignidad episcopal*. Así, sabemos que en 1573 los concejos de Monteagudo y Paracuellos entregaban cada uno anualmente al obispo, para

---

[100] ACC, caj. 11, nº 191.

[101] AHPC, *Desamortización*, leg. 296, s.f.

Pascua de Resurrección, 400 huevos, 4 ó 6 cabritos, dos carneros y dos cántaros de miel[102].

Esta potestad señorial en ocasiones dio lugar a importantes conflictos entre el obispo y sus vasallos. El primer conflicto serio de que tenemos noticia se produjo en el siglo XIV, durante el *pontificado del segundo obispo don García*, y la gravedad alcanzada por el asunto hizo incluso necesaria la mediación del Papado. Aunque sobre ello ya se habló páginas atrás, convendrá recordarlo aquí de nuevo.

Efectivamente, el conflicto señorial más destacado acaecido en la diócesis durante el mandato de este prelado fue el gravísimo y escandaloso incidente que, según firmes acusaciones contra él vertidas, protagonizó don García en sus señoríos episcopales de Pareja y Casasana. Tras ser realizada por mandato pontificio una investigación por parte de Pedro, cardenal de Santa Susana, éste descubrió que, al parecer, el obispo conquense trabajaba en negocios que se calificaban de infames. Además don *García, y he aquí lo más grave del asunto, había mandado ejecutar* a quince vasallos de su señorío de Casasana, encarcelando por otra parte a un médico llamado Pedro y dándole poco después muerte ante el temor de que revelara sus crímenes. También se le acusaba de cometer adulterio, incesto y de tener públicamente concubinas, así como de haber violado la inmunidad de la iglesia de San Juan de Pareja. Ante la gravedad de las acusaciones, el 1 de marzo de 1352 Clemente VI comisionará al arcediano de Talavera y al tesorero de Cuenca para que citen al obispo don García y le manden comparecer personalmente ante la curia pontificia en el plazo de dos meses, para ser juzgado por los delitos de que se le acusaba[103].

---

[102] ADC, *Libro del Becerro de la Dignidad Episcopal*, f. XLVIII.

[103] «Dudum proposito in consistorio coram nobis quod Garsias, episcopus conchensis, inter cetera crimina et excessus per eum seu de mandato suo commissa olim ad ecclesiam Sancti Iohannis de Paralia, conchensis diocesis...vulnerarat seu vulnerari fecerat in ipsam ecclesiam et cimiterio contiguo...et quod insuper in quadam sua domo vocata Casasana, dicte diocesis tunc existens, procuraverat, mandaverat et fecerat interfici quindecim homines et per medium secari aliquos ex eisdem, quodque adulteria et incestus commiserat, et habuerat et tenuerat plures publice ac notorie concubinas...». ASVat., *Reg. Vat.* 145, ff. 200v-201r / Cit. E. Déprez, *Clément VI (1342-1352). Lettres closes*, I, nº 2590.

En agosto de este mismo año el concejo de Pareja, respaldado por Pedro I, prohibiría a don García, pero no al cabildo catedralicio, la entrada en el lugar, así como en Casasana, hasta que se resolviese el pleito pendiente ante la Santa Sede[104]. Sabemos que en agosto de 1353 don García se encontraba en Aviñón[105], probablemente compareciendo ante el Consistorio a causa de las gravísimas acusaciones contra él vertidas. Desconocemos cuál fue el veredicto dado por el tribunal pontificio, pero lo cierto es que los serios incidentes protagonizados por el obispo conquense ponen de manifiesto los momentos de conflictividad no exenta de violencia por los que a veces pasaban las relaciones de los obispos con sus vasallos, aunque acontecimientos de tanta gravedad no volverán a darse durante el resto de la Edad Media.

En la centuria siguiente, aunque sin revestir tanto relieve, los conflictos serán constantes en todos los señoríos fundamentalmente a partir del pontificado de Fray Lope de Barrientos, llegando hasta principios del siglo XVI, y estuvieron motivados por toda una serie de nuevos tributos que se exigieron a los vasallos: imposiciones de paja, leña, pan, peones, carros y bestias, posada al séquito del obispo, velas de las fortalezas, entre otras cosas. Veamos a continuación cómo se desarrollaron estos conflictos, en los cuales sería necesaria la mediación regia, ya durante el reinado de los Reyes Católicos, para intentar encontrarles una solución, que no siempre se conseguirá de forma definitiva.

Según se recoge en algunos documentos de procedencia real del último decenio del siglo XV, el obispo Fray Lope de Barrientos había impuesto un importante número de nuevos tributos a los vasallos de sus señoríos a lo largo de su pontificado conquense (1445-1469), tributos cuya supresión sería solicitada años más tarde a los Reyes Católicos por los concejos de los señoríos episcopales conquenses. El concejo de Pareja, por un lado,

---

[104] Juan Catalina García López, *Relaciones topográficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen hoy a la provincia de Guadalajara*, p. 116.

[105] AHN, OOMM-Uclés, carp. 206, nº 5.

señalaba que los nuevos tributos que les había exigido a los vecinos de la villa el obispo Barrientos eran los siguientes:

-Una carga de leña que cada vecino de la tierra de Pareja que tuviese bestias debería llevar una vez al mes a la fortaleza de la villa.

-Tres camas de ropa para los habitantes de la fortaleza de Pareja, cuando fuere menester, a entregar por los vecinos de la tierra de la villa.

-Peones y bestias de los vecinos para recados y mensajes cuando ello fuese necesario, sin pagarles nada a cambio, ni siquiera para el alimento de las bestias[106].

-Seis velas cada noche para velar las fortalezas de Pareja y Casasana: cuatro para aquélla y dos para ésta. El obispo Barrientos al parecer alegó como causa de esta nueva imposición el tener <<diferençias e vandos e ocasyones asy con cavalleros de la dicha çibdad [Cuenca] e guerreros>>[107].

-Posada gratuita a los miembros del séquito del obispo.

-Dos jergas de paja al año a entregar por cada vecino que labrase con un par de bueyes, y una jerga quien labrase con un buey[108].

Por otro lado, según los concejos de Huerta, Paracuellos y Monteagudo, Fray Lope de Barrientos les había exigido a ellos estos nuevos tributos:

-Ciertas cantidades anuales de paja y leña para el mantenimiento de los alcaides y personal de la fortaleza de cada una de dichas villas.

-Cuatro velas cada noche para la guarda de cada fortaleza.

-La mitad de lo que rindiese el horno de la Poya, que pertenecía al concejo de Monteagudo, para el alcaide de la fortaleza del lugar.

---

[106] AGS, *Registro General del Sello*, 13-II-1494, f. 156.

[107] *Ibid.*, 13-II-1494, f. 326.

[108] *Ibid.*, 29-I-1497, f. 305.

-Cuatro cargas de leña anuales y sendas cargas de paja a entregar por los vecinos de Huerta y Monteagudo, y la mitad los de Paracuellos, con destino a sus respectivas fortalezas, además de nueve cahíces de trigo que deberían dar los vecinos de Huerta[109].

Todas estas nuevas imposiciones del obispo Barrientos sin duda respondían a la necesidad de un mejor aprovisionamiento y defensa militar de los señoríos episcopales de la diócesis durante los largos periodos de enfrentamiento del obispo -como defensor de la causa regia- con la nobleza rebelde en el contexto de las turbulencias políticas de los reinados de Juan II y Enrique IV.

Una vez establecidos los nuevos tributos, los prelados sucesores a menudo continuarían también cobrándolos, y en especial, como era de esperar, el provisor del cardenal de San Jorge nada más iniciarse su gobierno de la diócesis en 1493, lo que *provocaría de inmediato airadas protestas concejiles ante los* Reyes Católicos solicitando la supresión de estos impuestos excesivos, que ya no debían considerarse como necesarios al haber desaparecido hacía tiempo las luchas y turbulencias sociales que asolaron el obispado conquense en tiempos del obispo Barrientos, y que habían obligado a reforzar la defensa militar de los señoríos episcopales.

Así, el 13 de febrero de 1494, y a petición del concejo de Pareja, los Reyes Católicos mandarán al provisor don Pedro de Costa que no exija de esta villa las seis velas de la fortaleza que el obispo Barrientos les había exigido hacía treinta y seis o treinta y siete años, pues dichas velas ya no eran necesarias dada la paz del reino[110]. Por otro lado, en la misma fecha, los *monarcas también mandarán al corregidor de Cuenca que les informe* sobre todos los nuevos tributos que años atrás les había exigido el obispo Barrientos, y que ahora les pedía el provisor de la

---

[109] *Ibid.*, 16-X-1494, f. 372.

[110] AGS, *Registro General del Sello*, 13-II-1494, f. 326.

diócesis[111]. Dos días más tarde, el 15 de febrero de 1494, se otorgaría un seguro regio a favor del concejo de Pareja, que recelaba del provisor don Pedro de Costa y de los mayordomos y alcaldes del cardenal de San Jorge y obispo de Cuenca, debiendo destacarse la alusión que en el documento se hace al <<odyo e enemistad>> que enfrentaba al concejo y todos estos últimos[112].

Pero el provisor de la diócesis no tardaría en reaccionar ante todas estas primeras intervenciones regias en el conflicto, solicitando de los monarcas que retirasen del caso al corregidor de Cuenca porque <<le hera odioso e sospechoso>>, poniendo a otra persona en su lugar. Ello motivaría que el 19 de marzo de 1494 los Reyes Católicos accediesen a esta petición, encargando que en adelante fuese el corregidor de Huete quien se informase sobre las imposiciones señoriales que recaían sobre los vecinos de Pareja y su tierra[113].

Con todo, la intervención del corregidor de Huete, que era el licenciado Sancho de Frías, tampoco favorecería demasiado al provisor, pues el corregidor dio una sentencia a favor del concejo de Pareja suprimiendo las velas de la fortaleza y mandando, además, que el alcalde mayor del obispo en Pareja no pudiese conocer de los pleitos en primera instancia, sentencia que sería apelada por el provisor, por lo que el 9 de septiembre de 1494 los monarcas mandarían al concejo de Pareja comparecer ante la Real Audiencia de Valladolid para continuar el pleito[114].

Mientras tanto, los concejos de los señoríos episcopales de Huerta, Paracuellos y Monteagudo también se quejarían de los nuevos tributos que tenían que pagar desde época del obispo Barrientos. Además, hacía no mucho el obispo don Alonso de Fonseca había exigido que se pagasen al alcaide de Huerta 4800 mrs. para las velas de la fortaleza del lugar. Todo ello

---

[111] *Ibid.*, 13-II-1494, f. 156.

[112] *Ibid.*, 15-II-1494, f. 325.

[113] *Ibid.*, 19-III-1494, f. 244.

[114] *Ibid.*, 9-IX-1494, f. 283.

motivaría que se presentasen protestas ante los Reyes Católicos, quienes comisionarían el 16 de octubre de 1494 al bachiller Francisco Ortiz, corregidor de Cuenca, para que se informase sobre el grado de legitimidad de los nuevos impuestos que estos señoríos pagaban desde tiempos de Fray Lope de Barrientos[115].

A su vez, el concejo de Pareja se quejaría de nuevo a los monarcas acerca de los <<muchos agravyos e estorsyones e amenazas>> cometidos por el provisor, sobre todo porque el alcalde mayor nombrado por éste conocía en las causas en primera instancia, y también porque el provisor no respetaba una costumbre <<ynmemorial>> según la cual la villa de Pareja, para el día de San Miguel de cada año, presentaba ante el obispo doblados a los candidatos que al año siguiente ostentarían los cargos de alcalde, regidor, alguacil y escribano, debiendo elegir el prelado de entre estos candidatos presentados por la villa a los que finalmente ejercerían el cargo. Pero al parecer el provisor don Pedro de Costa, el día de San Miguel de 1494, había elegido a su antojo dos alcaldes, un regidor, un alguacil y un escribano, e igual había hecho en 1495, nombrando de este modo a oficiales que no eran de los propuestos por la villa. De este modo, el 24 de noviembre de ese año de 1495 los monarcas mandarían al provisor que en adelante eligiese a los oficiales concejiles de entre aquellos candidatos presentados por la villa, respetando así la costumbre que siempre se había seguido en esta materia[116].

Por otro lado, en la misma fecha los Reyes Católicos también otorgaron licencia al concejo de Pareja para repartir entre sus vecinos y moradores 12.000 mrs. para los gastos del pleito que sostenían ante el Consejo Real contra el provisor del obispo de Cuenca y cardenal de San Jorge a causa de las injustas imposiciones que se les demandaban[117].

Poco después, el 27 de enero de 1496, y en cumplimiento de una primera sentencia dada en dicho pleito, los monarcas

---

[115] *Ibid.*, 16-X-1494, f. 372.

[116] *Ibid.*, 24-XI-1495, f. 103.

[117] *Ibid.*, 24-XI-1495, f. 21.

mandarían a Francisco Gudiel, alcaide de la fortaleza de Pareja, que en adelante no cobrase velas ni otros impuestos a los vecinos de la villa y su tierra, y que además les devolviese todas las prendas y dinero que les había cobrado desde el día 22 de febrero de 1494[118].

Pero la sentencia definitiva en el largo pleito sería pronunciada en el Consejo Real algún tiempo más tarde, siendo en cumplimiento de esta sentencia como los Reyes Católicos, el 29 de enero de 1497, determinaron lo siguiente respecto a las imposiciones que se exigían a los vecinos de Pareja y su tierra: cada vez que el provisor del obispo acudiese a la villa, se habría de dar posada a su séquito sólo mientras permaneciese en el lugar; los vecinos de Pareja no estarán obligados a dar sal, candelas, paja, leña ni agua a los huéspedes, salvo en el caso de que les pagasen por ello; se suprimen las jergas de paja que cada año debían entregar los vecinos de la villa y su tierra al obispo; también quedan eliminadas las velas de la fortaleza, salvo cuando los reyes mandasen de forma general velar las fortalezas de todo el reino; se suprimen, asimismo, las entregas de ropa y leña que hasta entonces se habían exigido a los vecinos de la tierra de Pareja, e igual se establece respecto a la obligación de entregar peones y bestias; finalmente, se determina que el alcalde mayor del obispo no pueda conocer en los pleitos en primera instancia salvo por vía de apelación[119]. Así, pues, vemos cómo el veredicto emitido por el tribunal regio fue claramente favorable al concejo de Pareja, lo que motivaría que pocos meses después el provisor don Pedro de Costa presentase ante el Consejo una suplicación contra esta sentencia[120].

Ya para terminar, conviene aludir a un nuevo pleito que estaba pendiente en 1502 entre el obispo de Cuenca y el alcaide de la fortaleza de Huerta. En efecto, el 3 de noviembre de dicho año de 1502 el fiscal del cardenal de San Jorge presentó una denuncia ante Guido de Cordonibus, nuevo provisor general en el

---

[118] *Ibid.*, 27-I-1496, f. 128.

[119] *Ibid.*, 29-I-1497, f. 305.

[120] *Ibid.*, 29-V-1497, f. 181.

obispado de Cuenca en nombre del cardenal, contra Alonso de Piedrahita, alcaide de la fortaleza de Huerta, porque éste se había entrometido en la jurisdicción del cardenal: tomaba bienes de los vasallos de Huerta y sobre todo había acaparado contra derecho la guarda de los términos, montes y ganados de los alrededores de la villa, cuando todo ello eran cosas que no le correspondía hacer a él, sino a la persona que designase el provisor al efecto. Se presentaron varios testigos que, bajo juramento, respondieron ante el provisor a un formulario de preguntas relacionadas con el tema del conflicto, coincidiendo la mayoría de ellos en que el alcaide de Huerta nunca había tenido los derechos de los que ahora intentaba apropiarse. Finalmente, se decidió llevar el asunto ante el Consejo Real para que fuese examinado más detenidamente[121].

En conclusión, parece claro que las relaciones de los obispos de Cuenca con sus concejos vasallos en ocasiones estuvieron caracterizadas por un marcado grado de conflictividad, tal como sucedió durante el pontificado del obispo don García a mediados del siglo XIV -en este caso conflictividad con una fuertísima carga de violencia-, y en la centuria siguiente a partir del pontificado del obispo Barrientos y muy en especial durante el gobierno del provisor don Pedro de Costa, siendo necesaria la mediación regia a la hora de intentar resolver unos conflictos que siempre estaban motivados por los abusos tanto económicos como jurisdiccionales que, según los concejos de señorío episcopal, cometía el obispo sobre sus vasallos.

4-La colaboración Iglesia-concejo y la particularidad del caso del obispo Barrientos

A pesar del carácter conflictivo que muchas veces revistieron las relaciones Iglesia-concejos en el obispado conquense, tampoco faltarán en determinados momentos de la Baja Edad Media algunos claros ejemplos de cooperación entre ambos poderes, lo

[121] AGS, *Cámara de Castilla-pueblos*, leg. 7, nº 60.

que se observa de manera especialmente acusada durante el pontificado del obispo Fray Lope de Barrientos.

Ya durante la primera mitad del siglo XIII contamos con algunos ejemplos relevantes de colaboración entre el cabildo catedralicio conquense y el concejo de la ciudad, colaboración que inicialmente se manifestaría en el proceso repoblador de la diócesis. Sin duda el ejemplo más claro en este sentido vendría dado por la donación que el 25 de abril de 1231 hizo el concejo de Cuenca al cabildo catedralicio de la aldea de Valtablado con el fin de que éste se encargara de su repoblación[122]. Esta aldea se encontraba situada en el extremo norte de la diócesis, en una zona repobladora donde, según ya se dijo, tanto la Iglesia como el concejo de Cuenca tenían un importante número de posesiones cuya repoblación estaba a su cargo.

No mucho tiempo después, en 1238, el obispo don Gonzalo Ibáñez Palomeque intervendría en la conquista de la localidad de Requena en unión de las tropas del concejo conquense[123], con lo que finalizaría el proceso de expansión de la diócesis hacia el este, siendo ello otra evidente manifestación de la colaboración entre la Iglesia y el concejo de Cuenca.

También debe señalarse que en ocasiones este último llegó a emplear algunas dependencias de la catedral como lugar de reunión. Así, por ejemplo, el 23 de noviembre de 1390 varios miembros del concejo conquense se reunieron en los palacios episcopales para tratar cierto asunto de apeos de la Sierra[124]. Dos años más tarde, el 18 de enero de 1392, el concejo se reuniría en el corral de la catedral <<segunt que lo avemos de uso e de costunbre de nos juntar>>[125]. Por otro lado, la sesión municipal celebrada el miércoles 29 de septiembre de 1417 tuvo lugar en la capilla de Corpore Christi, situada en el claustro de la catedral, asistiendo, entre otros, García Álvarez de

---

[122]ACC, caj. 4, nº 69 / BN, Ms. 13116, f. 7r.

[123]José Manuel Nieto Soria, <<El carácter feudal de las relaciones...>>, p. 215.

[124]Antonio Chacón Gómez-Monedero, *Documentación del Archivo Municipal...*, III, nº 46.

[125]*Ibid.*, nº 50.

Albornoz, guarda mayor de Cuenca y su tierra, y Lope Vázquez de Acuña[126]. De todas formas, el lugar más habitual de reunión del concejo conquense eran las llamadas *casas de los Ayuntamientos*, propiedad del municipio.

Pero, sin duda, cuando más intensamente se produjeron relaciones de colaboración entre la Iglesia de Cuenca y el concejo de la ciudad fue durante el pontificado del obispo Fray Lope de Barrientos (1445-1469), estando ello motivado sobre todo por el hecho de que este prelado ejerció durante amplísimos periodos de tiempo, por encargo regio, la guarda de la ciudad de Cuenca, cargo que normalmente solía recaer en personajes laicos. Ello posibilitó a menudo la intervención del obispo en numerosos asuntos concejiles, sobre lo cual pueden citarse varios ejemplos.

Pero antes de nada hay que destacar la defensa militar de la ciudad de Cuenca que, por encargo de Juan II, llevaría a cabo el obispo Barrientos en 1447 y 1449, al frente de las tropas del concejo conquense, contra don Diego Hurtado de Mendoza y sus partidarios, en el contexto de las luchas de bandos y agitaciones nobiliarias del reinado de Juan II. Sobre todo ello se hablará detenidamente más adelante.

Un primer ejemplo del control que este prelado ejerció sobre muchos asuntos concejiles vendría dado por la carta que el 22 de octubre de 1452 dirigió el concejo de Cuenca al obispo comunicándole la gran necesidad de pan que había en la ciudad, para que interviniese al efecto[127]. Algún tiempo después, el 30 de octubre de 1456, el obispo Barrientos mandaría al concejo que celebrase procesiones y plegarias en conmemoración de la victoria recientemente obtenida por los cristianos frente al turco[128].

También sabemos que fue el obispo quien dio licencia al concejo para que éste construyese una ermita en honor de San Sebastián en la cruz del Campo de San Francisco, extramuros de la ciudad, en un lugar donde ya antes existía una pequeña

---

[126] *Ibid.*, nº 122.

[127] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas de don Fray Lope de Barrientos...*, apéndice documental, nº 74.

[128] *Ibid.*, nº 89.

capilla. En 1459 la construcción de dicha ermita estaba a punto de concluirse[129].

Situándonos ya en el años 60 del siglo XV, entre otras cosas habría que destacar que durante esta época Pedro de Barrientos, sobrino del obispo, colaboraría frecuentemente con su tío en la guarda y defensa militar de Cuenca y su castillo en favor de Enrique IV, participando asimismo en algunos asuntos concejiles[130]. Este personaje, además, en la década siguiente llegaría a ser regidor de Cuenca e incluso consejero real.

El 8 de noviembre de 1462 el concejo conquense rogó al obispo que diese disposiciones para la paz de la ciudad y resolución de los muchos males que sus vecinos recibían, lo que constituye otro claro ejemplo de la intervención del prelado en el gobierno de la ciudad[131].

Una manifestación particularmente sintomática de la colaboración que se dio entre Barrientos y el concejo conquense fue el enorme empeño que éste puso para que el obispo fuese liberado de la prisión a que le había sometido el marqués de Villena en el transcurso de los alzamientos contra Enrique IV de los años 1464-1465, asunto sobre el que se hablará detenidamente más adelante.

Asimismo, también fue decisiva la intervención de Fray Lope para la promoción del mercado de la ciudad. La defensa de la autoridad real protagonizada por el obispo en unión del concejo conquense frente a la nobleza del obispado sublevada contra Enrique IV contribuiría a crear una grave crisis económica debido al descenso de la población agrícola, a los gastos efectuados en acciones defensivas y a la pérdida demográfica producida por la emigración. El concejo, a instancias del obispo, trató de paliar esta situación adoptando, entre otras medidas, la de fomentar el desarrollo del comercio urbano. Para ello estableció la exención de impuestos municipales a favor de aquellas mercancías que se vendiesen el día del mercado. Gran importancia, dentro de esta

---

[129] Yolanda Guerrero Navarrete y José María Sánchez Benito, *Cuenca en la Baja Edad Media...*, p. 258.

[130] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 134.

[131] *Ibid.*, nº 102.

línea, cabe atribuir a la concesión hecha por Enrique IV en 1465, gracias a la mediación del obispo Barrientos y de Andrés Cabrera, de un día de mercado franco a celebrar el jueves de cada semana[132].

En ocasiones la colaboración de Fray Lope también sería de importancia capital a la hora de proveer de trigo a la ciudad en periodos de crisis. El concejo de Cuenca, dada su orientación ganadera, a veces se veía afectado por un déficit de trigo. Sin embargo, el obispo y algunos nobles cuyos dominios eran limítrofes con el término municipal tenían una mayor abundancia de grano en sus tierras, por lo que la ciudad dependía de ellos en gran medida para su aprovisionamiento. En lo que atañe al obispo Barrientos, el 9 de de febrero de 1465, por ejemplo, en una etapa de profunda crisis económica, el concejo le pediría que les vendiese tres o cuatro mil fanegas de trigo a un precio razonable para aprovisionamiento de la ciudad, y preferiblemente trigo de los señoríos episcopales de Huerta, Monteagudo u otros lugares próximos a Cuenca[133].

En este punto también conviene recordar el conflicto que a la muerte de Barrientos se produciría entre su sucesor, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris, y el cabildo catedralicio conquense, debido a que éste había vendido al concejo de la ciudad a un bajo precio, en época de crisis, cierta cantidad de trigo procedente de las rentas de la mesa episcopal durante el periodo que duró la vacante, cantidad que sería reclamada de inmediato por el obispo sucesor. El asunto acabó dando lugar a un pleito ante una comisión del claustro de la Universidad de Salamanca, que sentenciaría en favor del cabildo conquense por haber realizado la venta de trigo al *justo precio*, contribuyendo de este modo a paliar las necesidades de una población hambrienta. Sobre todo ello, como se recordará, ya se habló mucho más detenidamente *páginas atrás*.

---

[132] María Dolores Cabañas González, <<Ciudad, mercado y municipio en Cuenca durante la Edad Media (siglo XV)>>, p. 1705.

[133] AMC, leg. 197, exp. 2, ff. 52v-53r.

La última intervención del obispo Barrientos en asuntos concejiles de que tenemos constancia es la que tuvo lugar el 1 de mayo de 1469, pocas semanas antes de su muerte. En esta fecha el prelado, junto con el corregidor y regidores de Cuenca, *otorgaría una carta de poder en favor de Diego de Albornoz*, regidor, para que éste acudiese a la fortaleza de Arbeteta, propiedad del concejo, y pusiese en ella un nuevo alcaide, tomándole juramento de fidelidad al rey y al concejo[134].

La muerte del octagenario obispo Fray Lope de Barrientos tuvo lugar el 30 de mayo de 1469, escribiendo ese mismo día el concejo una carta al rey para darle cuenta de la triste noticia y solicitar, además, que entregase el cargo de guarda mayor de la ciudad al noble conquense Juan Hurtado de Mendoza[135]. Al día siguiente el concejo escribiría de nuevo al monarca pidiéndole que suplicase ante el papa para que la mitra conquense fuese proveída en favor de Juan Hurtado de Mendoza, pues tanto ellos como el cabildo catedralicio consideraban que era la persona más idónea para ostentar la titularidad de la sede, dada su fidelidad hacia la Corona[136]. No obstante, el papa acabaría proveyendo la sede en favor del cardenal Antonio Jacobo de Veneris, a quien se opondrían inicialmente tanto el concejo conquense como el cabildo catedralicio, siendo ésta una cuestión sobre la cual ya se habló páginas atrás.

En conclusión, contando con pequeños precedentes durante los siglos anteriores, las relaciones de cooperación entre la Iglesia de Cuenca y el concejo de la ciudad atravesarían un momento de particular intensidad durante los años del pontificado del obispo Barrientos, quien gracias al cargo de guarda mayor de Cuenca conseguiría ejercer un notable control e influencia sobre gran cantidad de asuntos concejiles, actuando además como defensor militar de la causa regia en unión al concejo conquense durante los reinados de Juan II y Enrique IV. Todo ello, en definitiva, viene a ser una faceta más del enorme grado de proyección social

---

[134] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 158.

[135] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 42v-43r.

[136] AMC, leg. 198, exp. 3, ff. 52v-53r.

y política que se observa en la trayectoria vital de ese singular prelado medieval que sin duda fue Fray Lope de Barrientos.

II-RELACIONES CON LA NOBLEZA CONQUENSE

Tanto en la ciudad de Cuenca como en el territorio de su obispado pronto destacaría la presencia de toda una serie de importantes familias nobles que, evidentemente, desempeñarán un destacado papel dentro del juego de relaciones de poder con el estamento eclesiástico, teniendo dichas relaciones una manifestación palpable tanto en el ámbito de lo conflictivo como en el de la convergencia y mutua cooperación. Veamos a continuación cómo se desarrollaron estas relaciones de la Iglesia conquense con la nobleza durante el periodo bajomedieval.

1-Conflictos económicos: el diezmo

Una buena parte de los conflictos económicos que se produjeron entre la Iglesia de Cuenca -fundamentalmente obispo y cabildo catedralicio- y la nobleza del obispado estuvieron motivados por los muchos impedimentos que algunos nobles ponían al cobro o arrendamiento del diezmo eclesiástico, y también por la simple negativa a su pago. De este modo, y haciendo a menudo uso de la fuerza, la nobleza trataba de ejercer un mayor control en su propio beneficio de los recursos agrarios de la zona. Es a partir del siglo XIV cuando tenemos las primeras noticias sobre conflictos económicos entre la Iglesia conquense y la nobleza local.

El 23 de marzo de 1333 el papa Juan XXII comisionó al deán de Albarracín, a Andrés Sánchez, canónigo de la misma Iglesia, y a los oficiales de Albarracín para que prestasen ayuda al cabildo catedralicio conquense contra don Juan Manuel, Rodrigo Jiménez de Mesna y García Álvarez de Albornoz, nobles que habían usurpado algunos de los bienes de la mesa episcopal dejados años

atrás por el difunto obispo de Cuenca don Pascual[137]. Hay que recordar que a comienzos de dicho año el cabildo conquense aún no había terminado de pagar a la Cámara Apostólica la totalidad del importe correspondiente al expolio de don Pascual, fallecido en 1320, y frutos de la vacante, siendo así como adquiere pleno sentido el mandato pontificio.

Un tipo de conflicto muy frecuente es el que se producía cuando algunos caballeros y hombres poderosos impedían por la fuerza y violencia que otras personas arrendasen las rentas decimales del cabildo catedralicio cuando éstas se subastaban en almoneda pública, para así poder arrendarlas ellos a muy bajo precio. Esto es algo que sucedía en especial en Alarcón, Castillo de Garcimuñoz y otros lugares del Marquesado de Villena situados al sur de la diócesis conquense, siendo muchas veces necesaria la intervención regia o del marqués de Villena en defensa del cabildo catedralicio conquense. Así, por ejemplo, el 20 de octubre de 1361 Pedro I, a petición del cabildo, mandará a los alcaldes y alguaciles de Cuenca, Castillo de Garcimuñoz y Alarcón que intervengan para que ningún caballero u hombre poderoso arriende las rentas del cabildo catedralicio conquense, dado que, por miedo, las demás personas se contenían a la hora de pujarlas y de ello se seguía gran perjuicio para la Iglesia[138].

En las peticiones que el cabildo catedralicio dirigió a Enrique II probablemente en las Cortes de Toro de 1371, entre otras cosas se expusieron quejas acerca de la extremada violencia de los poderosos cuando se arrendaban en Alarcón las rentas del cabildo. Por ello éste solicitaría al monarca que mandara que ningún poderoso arrendase dichas rentas[139]. Precisamente en estas mismas Cortes el estamento eclesiástico presentaría quejas generalizadas al rey contra los poderosos que arrendaban las rentas decimales de la Iglesia a bajos precios, tratándose, pues,

---

[137] G. Mollat, *Jean XXII*, XII, nº 59884.

[138] AHN, Micr., rollo 14217, s.a. caj. 2, leg. 7, nº 87.

[139] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 133v.

de un fenómeno bastante generalizado en el conjunto del reino[140]. Por todos estos motivos, a partir de esta época el cabildo catedralicio conquense a veces intentará, frecuentemente sin éxito, arrendar en la ciudad de Cuenca sus rentas de Alarcón, para así tratar de evitar las actitudes violentas de los poderosos de esta villa.

Pero los conflictos aún continuarán en los años siguientes. Así, en 1383 el obispo y cabildo se quejarán a don Alfonso, marqués de Villena, diciendo que en los lugares del Marquesado les tomaban las bestias que llevaban a Cuenca las rentas del cabildo, les querían cobrar portazgo, estando exentos de su pago, y además los poderosos de Alarcón les impedían arrendar libremente sus rentas decimales en dicha villa. De este modo, el 18 de septiembre del mencionado año de 1383, el marqués de Villena mandará a los oficiales de sus villas y lugares en el obispado de Cuenca que no embarguen las rentas del cabildo, y a los caballeros, hidalgos y otros hombres poderosos de Alarcón que no impidan el libre arrendamiento de los diezmos pertenecientes al cabildo en dicha villa, diezmos de los que, además, una determinada parte correspondía al propio marqués[141], repitiéndose de nuevo este último mandato el 17 de diciembre de 1387[142].

Mientras tanto, el cabildo catedralicio se había quejado también de que Ferrand Ruiz de Alarcón, señor de Valverde, y sus antepasados venían usurpando desde hacía unos cuarenta años los diezmos pertenecientes a la mesa capitular en los lugares de Talayuelas y Valverde, situados dentro del arcedianato de Alarcón, mientras que Ferrand Ruiz alegaba tener derecho a recibir dichos diezmos <<de tanto tienpo aca que memoria de omes no es en contrario>>. Finalmente, el 21 de julio de 1385, Andrés Ferrández, canónigo conquense y vicario general en el obispado, daría en juicio sentencia definitiva sobre el pleito, condenando a Ferrand Ruiz de Alarcón a restituir los diezmos usurpados al cabildo en los últimos diez años, y reconociendo que la tercera

---

[140] *Cortes*, II, pp. 204-206.

[141] ACC, siglo XIV, nº 307.

[142] ACC, siglo XIV, nº 309.

parte de todos los diezmos de los lugares situados en el arcedianato de Alarcón pertenecía al cabildo catedralicio, con destino a la renta de los *vestuarios*[143].

Durante la centuria siguiente los conflictos por razones decimales aún continuarían. Así, en una carta promulgada por el obispo don Diego de Anaya el 17 de mayo de 1409, en el transcurso del sínodo diocesano celebrado en la villa episcopal de Pareja, el prelado expuso cómo en esta reunión sinodal se habían quejado ante él varios clérigos del obispado diciendo que algunas personas poderosas, tanto eclesiásticas como seglares, en aquellos lugares donde tenían potestad jurisdiccional tomaban por la fuerza los diezmos pertenecientes a las iglesias parroquiales o a otras personas haciéndose pasar por los arrendadores de dichos diezmos. Por este motivo el obispo don Diego prohibiría bajo pena de excomunión que dichos diezmos fueran usurpados[144].

En el mencionado sínodo, además, también se señaló que los arrendadores de las rentas de la Iglesia no se atrevían a ir a ciertos lugares del obispado por temor a algunos hombres poderosos que allí habitaban, por lo que se perdían las rentas en dichos lugares. De este modo, don Diego de Anaya mandó que todos los dezmeros de estos lugares acudiesen a entregar sus diezmos a los arrendadores en algún otro sitio cercano y seguro[145].

Especial interés es el que también reviste la carta que el 24 de mayo de 1427 dirigió don Enrique de Villena al cabildo catedralico conquense en defensa de algunos de sus vasallos que estaban excomulgados por un atraso en el pago de sus diezmos. En esta carta don Enrique señala que la voluntad de sus vasallos era pagar la deuda correspondiente, para lo que incluso habían tenido que vender algunos de sus bienes, a pesar de lo cual el cabildo se había apresurado a excomulgarles sin ni siquiera darles un breve plazo de tiempo para efectuar el pago. Así, en el documento

---

[143] ACC, siglo XIV, nº 123.

[144] ACC, *Libros de rentas de la Santa Iglesia de Cuenca*, años 1409, f. 1; 1410, f. 1; 1412, f. 1; 1414, f. 1; 1415, f. 1; 1416, f. 1.

[145] ACC, *Estatutos*, f. 63r.

se dice que dichos vasallos <<non creen ante Dios ser maculados de ynobediençia nin fedados de rebelion arrogante, nin se tienen por vilipensores de los eclesiasticos mandamientos, pues que con todas sus fuerças se disponen a conplir lo a ellos mandado>>, por lo cual don Enrique de Villena pidió al cabildo que usara <<de aquella piedat que se predica de la eclesiastica madre>>[146].

Mientras tanto continuarían los conflictos en las villas de Alarcón y Castillo de Garcimuñoz. Prueba de ello es que el 8 de marzo de 1445, previa queja del obispo de Cuenca don Álvaro de Isorna, el príncipe de Asturias don Enrique tuvo que mandar a los oficiales y hombres poderosos de Alarcón y El Castillo que permitieran al cabildo catedralicio sacar libremente sus rentas decimales en dichos lugares, prohibiéndoles además que arrendasen dichas rentas por la fuerza a un bajo precio[147].

Dada la persistencia de los problemas, en el sínodo celebrado por Fray Lope de Barrientos en 1446, como era de esperar, se legislaría sobre la materia. Así, se expuso cómo algunos señores temporales del obispado, y también ciertos concejos y sus oficiales, a veces dictaban normas impidiendo que en los territorios de su jurisdicción se arrendasen o sacasen las rentas de los diezmos y primicias <<poniendoles e faziendoles e conminandoles sobre ello grandes penas e terrores e amenazando e prendiendo e injuriando e feriendo e dannando a los que van o enbian a demandar e arrendar e cojer e sacar los dichos diezmos>>, llegando incluso a exigir contra derecho la quinta parte del diezmo a los arrendadores. Por todo ello el obispo Barrientos prohibiría bajo pena de excomunión mayor que tales señores o concejos impidiesen la correcta percepción del diezmo[148].

Pero este mandato episcopal no impidió que los conflictos continuasen en los años siguientes. Así, por ejemplo, el 7 de mayo de 1450 nos encontramos con un breve monitorio del deán de Segovia, legado apostólico de Nicolás V, contra Gómez Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, en el obispado de

---

[146] ACC, signatura desconocida.

[147] AHN, Micr., rollo 14213.

[148] *Sínodo de 1446*, ff. 26r-29r.

Cuenca, debido a que había robado ciertos diezmos de la Iglesia[149].

En enero de 1453 sabemos que estaba pendiente un pleito entre el cabildo catedralicio conquense y dicho Gómez Carrillo referente a las rentas y derechos que el cabildo tenía en las villas señoriales de Torralba y Beteta[150], llegándose el 24 de marzo del mencionado año a una concordia mediante la cual, bajo amenaza de excomunión, Gómez Carrillo y su mujer, Teresa de Toledo, juraron cumplir los siguientes puntos:

-A los vasallos de Gómez Carrillo que alquilaron o dieron casas y bodegas para guardar los diezmos de Torralba y Beteta les será restituído todo lo que se les tomó, y además se les recompensará por cualquier daño que por dicha causa hubieran sufrido.

-Los diezmos de pan y vino del cabildo catedralicio podrán circular libremente sin impedimento en todo el territorio de los señoríos de Torralba y Beteta.

-No se podrá poner impedimento a la recaudación de las rentas del obispo y cabildo.

-Gómez Carrillo no impedirá que cada año en sus señoríos se alquilen casas para guardar los diezmos de la Iglesia de Cuenca. No deberá arrebatar nada de dichos diezmos sino que, por el contrario, velará para que se custodien correctamente.

-Gómez Carrillo tendrá que entregar al cabildo todas las deudas atrasadas en el pago de diezmos.

-Los curas y beneficiados de las parroquias de dichos señoríos podrán coger libremente sus diezmos[151].

Mientras tanto, el 3 de agosto de 1452 Nicolás V había otorgado facultad al obispo don Lope de Barrientos para que pudiese promulgar estatutos contra los usurpadores de los bienes de la Iglesia, imponiendo las penas correspondientes, y fue en

---

[149] BN, Ms. 13071, f. 72v.

[150] ACC, *Pleitos*, 1/14.

[151] AHN, Micr., rollo 14231.

función de este permiso pontificio como el 31 de agosto de 1453 el obispo Barrientos promulgó un estatuto con censuras contra dichos usurpadores[152].

Ya hacia fines de siglo el arrendamiento de los diezmos de Alarcón ocasionaría nuevos problemas. El concejo y oficiales de la villa de Alarcón expusieron a los Reyes Católicos que desde hacía más de cien años tenían un privilegio de Enrique II para que las rentas de las iglesias de Alarcón se arrendasen cada año dentro de la propia villa y no en otras partes del obispado, privilegio que había sido confirmado por los monarcas posteriores. El motivo de la concesión de este privilegio radicaba en el hecho de que el obispo don Bernal Zafón (1362-1372) había intentado que las rentas decimales de Alarcón se arrendasen fuera de la villa, para así evitar las actitudes violentas de los poderosos que se quedaban con los diezmos a muy bajo precio, a pesar de lo cual, ante las protestas del concejo de Alarcón, Enrique II mandó que los diezmos se arrendasen dentro de la villa. Por ello un siglo más tarde el concejo y oficiales de Alarcón solicitaron a los Reyes Católicos que les fuese confirmado este privilegio ante el temor de que alguien intentara ir contra él. De este modo, el 10 de julio de 1483 los monarcas mandarán al obispo Fray Alonso de Burgos, al cabildo catedralicio y a toda la justicia laica de Cuenca y su obispado que respeten y hagan respetar dicho privilegio que poseían los de Alarcón[153].

Hay que llamar la atención sobre la peculiaridad de esta intervención regia, pues Reyes Católicos aparecen otorgando protección al concejo de la villa de Alarcón frente a posibles ataques a sus privilegios por parte de la Iglesia de Cuenca. Ello explica que al año siguiente, en el sínodo diocesano celebrado por Fray Alonso de Burgos, se mandara bajo pena de excomunión que ninguna persona, clérigo o seglar, perturbase las almonedas y arrendamientos de las rentas de la Iglesia, señalándose expresamente que deberá haber completa libertad para que dichas rentas se arrienden por quien más puje en las almonedas; aunque no se

---

[152] ACC, s.a. caj. 5, leg. 21, nº 294.

[153] AGS, *Registro General del Sello*, 10-VII-1483, f. 50.

mencionan de forma directa los frecuentes conflictos que se originaban en Alarcón, es evidente que al promulgarse el antedicho mandato se estaba pensando en ellos[154].

El último conflicto al que aludiremos tuvo lugar en 1486. Así, en el mes de mayo de este año los Reyes Católicos, a petición del canónigo conquense Juan Alonso de Ocaña, tendrán que intervenir a favor de éste y contra Gómez Carrillo de Sotomayor, alcaide de la fortaleza de Arbeteta, el cual había arrebatado al mencionado canónigo un beneficio que poseía en el lugar de Poveda de la Sierra[155].

2-La Iglesia conquense y las agitaciones nobiliarias del siglo XV

Además de los abundantes conflictos económicos, sobre todo decimales, sobre los que se acaba de hablar, a partir del siglo XV se producirán también importantes y violentos conflictos de marcada significación social y política entre el obispo y cabildo catedralicio y algunos destacados representantes de la alta nobleza conquense, lo cual sucederá de forma especialmente acusada en ciertos años del pontificado de Fray Lope de Barrientos, debiendo enmarcarse todo ello en el contexto de las frecuentes y violentas agitaciones nobiliarias tan características de los reinados de Juan II y Enrique IV.

A) *Las revueltas de 1429*

En 1429 tuvieron lugar en la ciudad de Cuenca algunas importantes revueltas que contaron con una destacada participación eclesiástica. Así, el 21 de enero de dicho año el concejo conquense escribiría a Juan II para informarle sobre ciertos incidentes protagonizados por el canónigo conquense Rodrigo de Mendoza y algunos beneficiados de la catedral.

---

[154] *Sínodo de 1484*, f. 8r-v.

[155] AGS, *Registro General del Sello*, V-1486, f. 108.

Previamente, hacía unos quince días, el concejo ya había informado al rey de que Rodrigo de Mendoza, acompañado de ciertos beneficiados del cabildo, fue de noche <<con grant armada e conbatyeron la casa de Alonso Paes de Eçija, vuestro alguaçil>>. Iban armados con lanzas y piedras, y habrían matado al alguacil y a los que con él estaban si éstos no se hubieran defendido. Los alcaldes de Cuenca hicieron una pesquisa sobre el asunto e informaron al monarca de lo acaecido.

Tras estos incidentes, Rodrigo de Mendoza se había refugiado en la ermita de San Miguel de Ortaleza, situada a una legua de la ciudad, <<e los omes que con el yvan sallian a robar por los montes demandando cabritos a los omes que guardavan los ganados, e tomando a los que yvan por lenna las capas e los punnales...que levavan en las bolsas, disiendo que non podian alli paçer nin cortar lenna e que era defendido, lo qual los dichos montes nunca fueron guardados nin defendidos, antes ser fue e es tierra comun desta çibdat para paçer e cortar>>. Debido a ello los alcaldes de Cuenca decidieron prenderles, pero ese mismo día por la noche el canónigo Rodrigo de Mendoza regresó a Cuenca y se refugió en su casa con los suyos, y al día siguiente se refugiaron todos en los palacios episcopales, por lo que no pudieron prenderles.

Más tarde, un día salieron de los palacios y algunos de ellos pelearon con tres hombres que iban con Vasco, hijo de Lope Vázquez de Acuña, para llevarle a la escuela, uniéndose pronto a la pelea muchos hombres del provisor de la diócesis, Pedro Arias Bahamonde, así como del propio Rodrigo de Mendoza, de Ruy Bernal, arcediano de Alarcón, y de otros beneficiados de la catedral, y también otros hombres del bando de Lope Vázquez de Acuña, resultando heridas varias personas y armándose gran bullicio en la ciudad, que fue puesta en entredicho por el provisor, privándose a todos los ciudadanos de recibir los sacramentos. Precisamente a causa de esto último fue por lo que el 21 de enero de 1429 el concejo conquense solicitó al rey que interviniese para que este entredicho fuese levantado, puesto que la pelea había tenido lugar tan sólo entre personas singulares,

y el resto de los vecinos no tenían por qué ser castigados con motivo del incidente protagonizado por unos pocos[156].

Para entender plenamente el conflicto recién aludido hay que tener en cuenta que durante la primera mitad del siglo XV los dos bandos nobiliarios claramente enemistados que había en la ciudad de Cuenca eran los de las familias Hurtado de Mendoza y Vázquez de Acuña, de suerte que el violento enfrentamiento del canónigo Rodrigo de Mendoza y otros miembros del cabildo catedralicio contra los hombres de don Lope Vázquez de Acuña puede interpretarse como un claro reflejo de las luchas de bandos que por entonces se daban, y no simplemente como un conflicto entre laicos y eclesiásticos.

Por otro lado, parece ser que por esos mismos días algunos hombres de armas y ballesteros habían entrado en la catedral conquense y en los palacios episcopales con la intención de matar al provisor Pedro Arias Bahamonde, arcediano de Bivero y deán de Orense, y a los que con él estaban, resultando muertos a causa del conflicto un mozo sobrino del obispo don Álvaro de Isorna y un criado del provisor. Después se seguirían cometiendo en Cuenca muchos robos y muertes <<por causa de los bandos que son en la dicha çibdad>>. Como consecuencia de todo ello, el 26 de enero Juan II mandaría a Sancho Ferrández de Castro, vecino de Miranda de Ebro, que fuese a Cuenca para informarse de la verdad de todo lo sucedido en las últimas semanas y averiguar quiénes eran los auténticos culpables. Además, el rey suspendió de su oficio por sesenta días a los alcaldes y alguaciles de Cuenca, tiempo durante el cual la justicia en la ciudad sería ejercida en nombre del monarca por el mencionado Sancho Ferrández de Castro, a quien el concejo debería entregar como salario 7200 mrs. más otros 20 mrs. cada día. El sábado 12 de febrero, Sancho Ferrández fue recibido en las casas de los Ayuntamientos de Cuenca por el concejo de la ciudad, que se comprometió a acatar las órdenes regias[157].

---

[156] AMC, leg. 187, exp. 4, ff. 10r-11r.

[157] AMC, leg. 187, exp. 4, ff. 14r-16v.

Poco después, el 18 de febrero, el concejo nombraría como sus *procuradores* a Alfonso Álvarez de Toledo, Sancho de Jaraba y Martín García de Sacedón, regidores de Cuenca, y al maestro Alfonso de Guadalajara, físico del rey, para que en su nombre presentasen una apelación ante el arzobispo de Toledo contra el provisor don Pedro Arias, a causa del entredicho que éste había puesto sobre la ciudad sin causa legítima[158]. Y algunos días más tarde, el 5 de marzo, el concejo solicitaría a Juan II que prorrogase por algún tiempo a Sancho Ferrández de Castro el plazo de dos meses que le había concedido para que hiciese pesquisas sobre los graves incidentes recientemente acaecidos en la ciudad, pues las investigaciones requerirían de un mayor tiempo[159].

En definitiva, lo que ante todo debe ponerse aquí de manifiesto es que los violentos enfrentamientos acaecidos en enero de 1429, y que contaron con un fuerte protagonismo eclesiástico, se enmarcan en el contexto más amplio de las frecuentes luchas de bandos que por entonces se daban en Cuenca, de tal manera que, como acaba de verse, a veces las élites eclesiásticas de la ciudad se veían implicadas de lleno en unos conflictos que, en el fondo, iban mucho más allá de un simple enfrentamiento entre laicos y eclesiásticos.

B) *El obispo Barrientos como defensor de la autoridad regia frente a la nobleza rebelde*

B.1) *Reinado de Juan II*

Hacia fines de este reinado Fray Lope de Barrientos, recientemente nombrado como obispo de Cuenca, actuaría en unión del concejo conquense como firme defensor de la causa regia frente a las pretensiones de algunos nobles agrupados en torno a la figura de don Diego Hurtado de Mendoza.

En 1447 el comendador de Segura, Rodrigo Manrique, sin contar con el beneplácito pontificio ni del rey de Castilla, se

---

[158] AMC, leg. 187, exp. 4, ff. 18r-19v.

[159] AMC, leg. 187, exp. 4, f. 37r-v.

había alzado con el título de maestre de Santiago a pesar de la elección que recientemente se había hecho en favor de don Álvaro de Luna. Debido a ello, éste notificaría lo ocurrido al monarca castellano, rogándole que interviniese a fin de que Rodrigo Manrique *no tomase las tierras del maestrazgo de Santiago*, muchas de las cuales estaban situadas en territorio de la diócesis conquense. Por otro lado don Álvaro, según señala la *Crónica del Halconero*, <<le pedio por merçed que mandase dar cargo a alguna persona de la guarda e defension de Cuenca e su comarca, porque el dicho Rodrigo Manrique no las ocupase...E el rey tovolo por bien e dio cargo de la guarda e defension de la dicha çibdad de Cuenca e su comarca a don Lope de Varrientos, obispo de la dicha çibdad>>[160].

El 15 de abril de 1447 Juan II mandaría a todos los súbditos de su reino que no apoyasen en ningún momento a Rodrigo Manrique y sus partidarios, que estaban atacando diversas ciudades, prometiendo el concejo conquense, con fecha 8 de mayo, obedecer las órdenes regias[161]. Por otro lado, el día 30 del mismo mes, el monarca mandó al concejo que ayudasen en todo al obispo Barrientos, *puesto que le había encomendado la guarda de la ciudad*[162], y poco después, el 17 de junio, el rey mandaría a todos sus súbditos de la ciudad y obispado de Cuenca que no obedeciesen los llamamientos de su hijo, el príncipe don Enrique, requiriendo ayuda y armas en favor de Rodrigo Manrique. El 2 de julio el concejo de Cuenca prometió acatar el mandato real[163]. Poco antes, el día 27 de junio, por orden del concejo se había pregonado en la Plaza de la Picota de la ciudad que todos los vecinos de Cuenca estuviesen preparados con sus armas para acudir

---

[160]Pedro Carrillo de Huete, *Crónica del Halconero...*, pp. 479-480.

[161]AMC, leg. 191, exp. 3, ff. 18r-19r.

[162]*Ibid.*, ff. 41r-42r.

[163]*Ibid.*, ff. 1r-2r (2ª foliación).

al llamamiento del obispo en defensa del rey cuando fuese necesario[164].

Dentro de este clima de tensión política no tardaría en entrar en escena el noble conquense don Diego Hurtado de Mendoza, que inicialmente se mostró como un claro oponente de la voluntad regia. Así, durante el verano de este año de 1447 ya tuvieron lugar los primeros enfrentamientos armados entre el obispo Barrientos y don Diego Hurtado, motivados por el hecho de que este último se había negado a abandonar la ciudad, según se lo había mandado Juan II. Se combatió fundamentalmente en las proximidades del castillo regio de Cuenca, que tenía en guarda Diego Hurtado de Mendoza, y en el mes de agosto el obispo y las tropas concejiles lograrían vencer a don Diego y sus partidarios, que se vieron obligados a huir provisionalmente de la ciudad[165].

Pero ello no impediría que estos últimos continuaran cometiendo todo tipo de estragos. Así, el 2 de octubre el concejo conquense escribiría una patética carta a Juan II poniéndole en conocimiento de todos los robos y escándalos protagonizados por don Diego Hurtado de Mendoza y sus hombres:

"...los muchos e grandes dannos e trabajos que esta vuestra çibdad e veçinos e moradores della han resçebido e de cada dia resçiben por causa de Diego Furtado de Mendoça, vuestro montero mayor, non aver querido conplir vuestras cartas e reales mandamientos por vuestra sennoria a el enbiados, e asy mesmo sobre rason de los furtos e robos e fuerças e opresiones de personas que los del dicho Diego Furtado avyan fecho e fasian...ca despues aca los del dicho Diego Furtado, continuando su mal obrar, no han çesado nin çesan de faser otros muchos males e dannos e furtos e robos e fuerças e ynsultos, e asy prendiendo e levando presos muchas personas desta dicha çibdad e su tierra e de los vasallos del sennor obispo desta dicha çibdad al castillo della, el qual el dicho Diego Furtado por vuestra Altesa tyene, commo a la villa de Cannete, commo a otras partes, e robando muchas casas de los batanes e de los ortelanos desta dicha çibdad...levando mugeres e moços por fuerça al dicho

---

[164]Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas de don Fray Lope de Barrientos...*, apéndice documental, nº 16.

[165]Pedro Carrillo de Huete, *Crónica del Halconero de Juan II*, pp. 482-487.

castillo e robando las ortalisas e frutos de los huertos desta dicha çibdad..."[166]

Todo ello explica que el 21 de enero de 1448, en la capilla del Espíritu Santo, situada junto al claustro de la catedral, el concejo conquense y el obispo Barrientos realizasen un solemne juramento de defender la ciudad en favor de Juan II contra cualquier persona que se opusiera a la voluntad regia[167].

El 15 de marzo de este mismo año el concejo se quejaría de nuevo al rey contra los abusos cometidos por los hombres de don Diego Hurtado de Mendoza en el castillo regio de la ciudad[168], lo que acabará motivando que el 9 de junio el concejo mande a don Diego Hurtado que cese las obras que llevaba a cabo en dicho castillo y saque todas las armas y a la gente alborotadora que estaba introduciendo en el mismo[169]. Por otro lado, el 17 de diciembre el concejo se dirigió nuevamente al rey para comunicarle que por tierra de Molina y Moya habían entrado hacía poco gentes armadas procedentes del reino de Aragón cometiendo numerosos excesos[170].

El 11 de enero de 1449 el concejo mandaría otra carta, en este caso al maestre de Santiago, notificándole que Diego Hurtado de Mendoza y su hijo Juan Hurtado, con todas sus gentes, habían tomado el castillo de Cañada del Hoyo, cerca de Cañete, que era propiedad del municipio conquense, y asimismo habían fortalecido el castillo de Cuenca e introducido en él a gentes de armas. Además, las tropas del rey de Navarra se encontraban en Teruel dispuestas a entrar en tierras de Cuenca[171]. Por otro lado, al día siguiente el concejo ordenó a Diego Hurtado y a su hijo que abandonasen el mencionado castillo de Cañada, puesto que

---

[166]AMC, leg. 191, exp. 3, f. 5r-v (tercera foliación).

[167]AMC, leg. 191, exp. 4, ff. 22r-23v.

[168]Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 30.

[169]*Ibid.*, nº 33.

[170]*Ibid.*, nº 35.

[171]*Ibid.*, nº 37.

pertenecía a la ciudad de Cuenca para la defensa de su tierra[172].

De este modo, como era de esperar, acabaría produciéndose otro violento enfrentamiento entre las tropas concejiles de Cuenca, encabezadas por el obispo Barrientos, y los partidarios de don Diego Hurtado de Mendoza. Según nos narra nuevamente la *Crónica del Halconero*, el martes 25 de febrero de este año de 1449 llegaron a la ciudad don Alfonso, hijo del rey de Navarra, Gómez Manrique, Juan Hurtado de Mendoza, el comendador Íñigo de Mendoza y otros capitanes, junto con mucha gente de a pie y a caballo, traídos todos ellos por don Diego Hurtado de Mendoza con el objetivo de apoderarse definitivamente de la ciudad. Se luchó intensamente durante todo ese día y las dos jornadas siguientes, venciendo casi siempre las tropas concejiles a cuyo frente estaba don Lope de Barrientos, por lo que el viernes don Diego Hurtado y sus partidarios tendrían que huir nuevamente de la ciudad[173].

Por su parte, la *Crónica de don Álvaro de Luna* aporta nuevos datos referentes al auxilio militar prestado por el maestre de Santiago a la ciudad de Cuenca durante el transcurso de esta última contienda bélica:

"E llegando el maestre alli a Mondejar, luego otro dia que ende llego, que fueron veynte e siete dias de febrero de aquel anno, fue çertificado como las gentes que el rey de Navarra avia ayuntado e ayuntaba estaban sobre la çibdad de Cuenca, las quales eran alli venidas con trato que tenian con algunas personas de aquella çibdad, espeçialmente con Diego Furtado de Mendoça, que tenia el castillo de aquella çibdad por el rey, e acogiera en el a don Alfonso, hijo bastardo del rey de Navarra, que venia por capitan de aquellas gentes, los quales eran fasta noveçientos o mill honbres de caballo e fasta quatro o çinco mill peones, la mayor parte dellos armados a la guisa de Aragon, assi que aquella çibdad de Cuenca estaba en grand peligro de se perder, ca de fuera tenia aquellas gentes que la tenian çercada, e dentro de si tenia el castillo contra ella...en tal manera que peleaban de noche e de

---

[172] *Ibid.*, nº 38.

[173] Pedro Carrillo de Huete, *Crónica del Halconero...*, pp. 513-516.

dia, assi de parte de dentro de la çibdad con los del castillo como de fuera con las gentes que avian venido"[174]

Como era de esperar, esta misma Crónica hace recaer todo el peso de la victoria sobre don Diego Hurtado en el maestre de Santiago, don Álvaro de Luna: <<Pues segund el estrecho en que aquella çibdad estuvo, bien pudo dezir aqueste virtuoso maestre que la su apresurada venida mas fue dar al rey aquella çibdad que socorrerla>>[175]. Por otro lado, también sabemos que entre los hombres que entonces defendieron la ciudad de Cuenca en favor de Juan II se encontraba Andrés de Cabrera, futuro marqués de Moya[176].

Pero, al igual que había sucedido dos años atrás, esta nueva victoria de Barrientos no impediría que don Diego Hurtado de Mendoza y sus parciales continuasen cometiendo todo tipo de estragos, sin desistir en su empeño de tomar la ciudad, lo que el concejo comunicó por carta a Juan II el 12 de abril de 1449[177]. Dos meses más tarde, el 9 de junio, el concejo conquense se dirigiría de nuevo al monarca castellano solicitando que les enviase gentes de armas y dinero para terminar la construcción de una lombarda con la que defender la ciudad de los ataques de don Diego Hurtado de Mendoza, don Alfonso, hijo del rey de Navarra, Gómez Manrique, Íñigo López de Mendoza y otros caballeros navarros y aragoneses que, con muchas gentes de a pie y a caballo, dezmaban la ciudad y su comarca. El relato que el concejo hace al monarca sobre las violencias y estragos cometidos por don Diego Hurtado y sus partidarios reviste una fuerte carga de patetismo:

"Çercaron esta dicha çibdad e la tovieron e se trabajaron por la tomar, seyendo causa e movedor de ello prinçipal Diego Furtado, dando logar como las

---

[174] *Crónica de don Álvaro de Luna*, pp. 223-224.

[175] *Ibid.*, p. 229.

[176] María del Pilar Rábade Obradó, *Los judeoconversos en la Corte y en la época de los Reyes Católicos*, p. 567.

[177] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 42.

dichas gentes viniesen e pasasen por sus logares e tierras, los quales robaron el arraval desta dicha çibdad e quemaron çiertas casas e desonraron a sus mujeres, e asy mesmo robaron muchos logares e yglesias de la tierra de la dicha çibdad. E despues desto el dicho Diego Furtado e los dichos Juan Furtado e Nunno Lopes, sus fijos, e Gomes Manrique e sus gentes e omes han fecho e de cada dia fasen guerra a esta dicha çibdat e su tierra, asy desde el castillo desta dicha çibdad como de otras fortaleças, e han tomado e tienen en espeçial del castillo de la Cannada, que es desta dicha çibdat, e de la torre de Valdecabras, que es de Sancho de Jaraba, e del castillo e su villa de Cannete, e del castillo de Huelamo, que es de la Orden de Santiago, e de otros logares e fortalesas, e tanto en tal manera la han opremido que ya ningunas personas no osan salir por vituallas e bastemientos para esta vuestra dicha çibdat...e asy mesmo los omes que llevan e asy han tomado e toman les han dado e dan tormentos colgandolos por los sobacos e poniendoles contrapesas de piedra a los pies e açotandolos e avizandolos se han ferido por las barrigas, asy que en tanto grado esta dicha vuestra çibdat e su tierra es mucho forsada e destruida que muchos logares della son despoblados e de cada dia se despueblan"[178]

Finalmente, pocos días después, el 15 de junio, se firmaría una tregua momentánea entre el obispo Barrientos y el concejo de Cuenca, por un lado, y don Diego Hurtado de Mendoza y sus parciales, por otro, en espera de que se llegase a una avenencia definitiva entre ambas partes[179], y el 2 de julio el rey Juan II emitió un mandato poniendo tregua entre los contendientes por espacio de un año[180]. Como consecuencia de ello, y en prevención de posibles incidentes, el 13 de septiembre el concejo conquense mandaría dar un pregón estableciendo que ninguna persona de cualquier condición portase armas en la ciudad sin previo permiso del obispo, que estaba encargado de su guarda[181].

---

[178] *Ibid.*, nº 43.

[179] *Ibid.*, nº 44.

[180] *Ibid.*, nº 47.

[181] *Ibid.*, nº 48.

Aún surgirían después algunos conatos de lucha, pues sabemos que en junio de 1450 las tropas del rey de Navarra se disponían a hacer de nuevo la guerra a Cuenca[182], aunque en octubre de este mismo año Rodrigo Manrique, maestre de Santiago, Diego Hurtado de Mendoza y su hijo Juan Hurtado llegarían a un acuerdo para establecer una paz perpetua con Cuenca[183].

El 2 de noviembre el obispo Barrientos, el almirante mayor de Castilla, don Fadrique, y don Rodrigo Manrique se dirigieron al concejo conquense para que les enviasen a donde ellos estaban al arcediano de Alarcón, al canónigo Francisco Bordallo, y a dos vecinos de Cuenca, con los cuales querían hablar para comunicarles todas las cosas que el rey había encomendado hacer respecto a la ciudad. Pero al día siguiente el concejo respondería diciendo que habían hablado con el arcediano de Alarcón y con Francisco Bordallo y éstos habían dicho que, puesto que el obispo no les había escrito a ellos personalmente sobre el asunto, por el momento no podrían acudir; en cambio el concejo sí les envió a los dos vecinos de Cuenca: Juan Sánchez de Teruel y Juan Alfonso de Mota[184].

Poco después, el 9 de noviembre, en la capilla de Caballeros de la catedral, Fray Lope de Barrientos, que ya había regresado a Cuenca tras varios meses de ausencia por servicios al rey, presentaría al concejo una carta de Juan II (Ávila, 31-VII-1450) a través de la cual el monarca le encomendaba de nuevo la guarda y defensa de Cuenca, comprometiéndose acto seguido el concejo a acatar las órdenes regias y del obispo[185].

Mientras tanto, por entonces también había entrado en escena el marqués de Villena, don Juan Pacheco. El 26 de noviembre el conde don Rodrigo Manrique, dado que ya estaba en paz con la ciudad de Cuenca, se dirigió al concejo rogándole que permitiese entrar libremente en Cuenca a ciertos vecinos de la ciudad que

---

[182] *Ibid.*, nº 54.

[183] *Ibid.*, nº 56, 57, 58, 59.

[184] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 26r.

[185] AMC, leg. 192, exp. 1, ff. 28r-29r.

estaban en su compañía y en la de don Diego Hurtado de Mendoza, puesto que eran hombres fieles al rey que no causarían ningún problema[186], y tan sólo dos días después el conde don Rodrigo escribiría de nuevo al concejo pidiéndoles, en nombre del rey, que enviasen lo más pronto posible hombres de a pie y a caballo a la villa de Castillo de Garcimuñoz para luchar contra don Juan Pacheco, marqués de Villena, e intentar tomar sus tierras y villas[187]. El 1 de diciembre el obispo Barrientos también instó al concejo conquense para que ayudasen al conde Rodrigo Manrique a luchar contra el marqués de Villena, comprometiéndose poco más tarde el concejo a otorgar el auxilio demandado[188]. Además, dada la nueva situación bélica que se avecinaba, el 8 de diciembre Fray Lope de Barrientos y el cabildo catedralicio hicieron juramento de defender firmemente la ciudad a favor de Juan II[189].

Parece ser que fue hacia estas fechas, poco antes o después, cuando el obispo Barrientos acudió a Utiel con las huestes concejiles para tratar de ocupar la villa, que se había declarado a favor del príncipe don Enrique, aunque el prelado no lograría la rendición del lugar[190], que algunos años más tarde, en 1455, pasaría a formar parte del Marquesado de Villena bajo la dependencia de don Juan Pacheco[191].

Pero el 27 de febrero de 1451 Juan II informó al concejo conquense de que recientemente había pactado en Tordesillas una concordia con su hijo, el príncipe don Enrique, el maestre de Santiago, el arzobispo de Toledo y el marqués de Villena mediante la cual se había decidido poner paz entre todos ellos, por lo que

---

[186] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 38v.

[187] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 39r-v.

[188] AMC, leg. 192, exp. 1, ff. 40v-41r.

[189] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 69.

[190] M. Ballesteros Viana, *Historia de Utiel*, pp. 155-156.

[191] *Ibid.*, p. 163.

el concejo ya no debería luchar contra el marqués de Villena[192]. Como consecencia de esta concordia, el 6 de marzo se presentaría ante el concejo conquense Lope de Priego, escudero del maestre de Santiago, mandando en nombre del rey que en adelante no se acogiese en la ciudad a ningún caballero ni hombre poderoso, y en especial al conde don Rodrigo Manrique, al hijo del rey de Navarra, a Diego Hurtado de Mendoza y sus hijos ni al obispo Barrientos. El concejo recibió con alegría la noticia de la nueva paz, celebrándose al día siguiente una solemne procesión por toda la ciudad[193]. El 14 de marzo, por mandato del concejo, se pregonó en la Plaza de la Picota que ningún vecino de Cuenca acudiese al llamamiento de cualquier persona poderosa, sino que permaneciesen en la ciudad para su buena defensa[194].

Como puede verse, las alianzas habían cambiado rápidamente, siendo ello algo muy propio de las constantes fluctuaciones políticas de estos años. No obstante, don Diego Hurtado de Mendoza y su hijo Juan Hurtado no tardarían en llegar a un acuerdo con el concejo de Cuenca, de suerte que en septiembre de ese mismo año de 1451 realizaron juramento y pleito homenaje en manos de Mosén Diego de Valera comprometiéndose a no hacer ningún daño a la ciudad, y el 4 de octubre el concejo les otorgó un seguro para que durante todo ese mes no recibiesen ningún daño ni ellos ni los suyos en Cuenca y su comarca[195]. En cuanto al obispo Barrientos, no tardaría en volver a la ciudad y ser admitido en ella.

B.2) *Reinado de Enrique IV*

Para los años iniciales de este reinado, antes de que tuviesen lugar los alzamientos contra el monarca de 1464-1465, la documentación municipal de Cuenca apenas alude al desarrollo

---

[192] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 58r-v.

[193] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 59r-v.

[194] *Ibid.*, f. 61r.

[195] AMC, leg. 192, exp. 1, f. 9 (segunda foliación).

de revueltas nobiliarias tan constantes como las recién señaladas. Sabemos que el 27 de junio de 1452 el concejo conquense pidió al obispo Barrientos que terminase sus contiendas con Juan Hurtado de Mendoza; aunque el documento no indica a qué contiendas en concreto se está refiriendo, lo que sí que parece claro es que por entonces aún se producían algunos conflictos entre Fray Lope y los Hurtado de Mendoza[196].

En 1464, y a nivel general de todo el reino, la confrontación del partido formado alrededor del príncipe don Alfonso con los que se mantenían leales al poder real era imparable, produciéndose pronto una polarización de la Iglesia castellana en torno a estas dos opciones. La diócesis de Cuenca estaría desde un primer momento entre las partidarias de Enrique IV. Ese mismo año, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el rey movilizó a las hermandades, poniéndolas en guardia ante la inminencia de un levantamiento. En este llamaniento de fidelidades y de utilización de las hermandades en defensa del poder real se incluirá la llamada al obispo Lope de Barrientos, quien se reincorporará al Consejo Real, jugando un importante papel en la coordinación y puesta a punto de estas hermandades[197].

En efecto, el 21 de septiembre de 1464 Enrique IV mandaría a los concejos de Cuenca, Huete, Uclés, Requena, Moya y Huélamo que se uniesen en hermandad bajo la dirección del obispo Barrientos, y que todos sus procuradores se reuniesen en la ciudad de Cuenca para la realización de dicha hermandad de mutua protección en defensa de la autoridad real, dados los recientes escándalos acaecidos en el reino[198].

Además, ese mismo día, a raíz del reciente alzamiento que había habido en Valladolid contra Enrique IV, Fray Lope de Barrientos compareció ante el concejo de Cuenca para exponer su deseo de que la ciudad permaneciese fiel al rey, a quien deberían hacer juramento de fidelidad aquellos que deseasen permanecer en Cuenca. De este modo, acto seguido todos los presentes juraron

---

[196]Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 101.

[197]José Manuel Nieto Soria, *Iglesia y génesis...*, p. 278.

[198]AHN, Micr., rollo 13281: AMC, leg. 196, exp. 2, ff. 115v-116r.

permanecer fieles a Enrique IV y defender firmemente la ciudad en favor de la autoridad real. Entre los que realizaron dicho juramento cabe destacar a las siguientes personas, aparte del propio obispo: el corregidor de Cuenca, Pedro de Salcedo, y los regidores de la ciudad; el deán de la catedral, Nicolás Martínez de la Campana; el arcediano de Cuenca, Juan Carrillo; el chantre don Nuño Álvarez de Fuentencalada; el provisor de la diócesis, Alfonso García de San Felices; el arcediano de Alarcón, Ruy Gómez de Anaya; Francisco Bordallo, abad de la Sey; el bachiller Ferrand Sánchez de Cuenca; otros eclesiásticos y muchos vecinos de la ciudad[199].

También en 1464 el concejo conquense daría orden de destierro de la ciudad de todos los sospechosos o desafectos al rey, y tras señalarse los excesos cometidos contra los intereses regios por Íñigo López de Mendoza y Juan de Albornoz, se mandó derribar las fortalezas de estos últimos en cinco leguas a la redonda, siendo casi seguro que detrás de este mandato estuviese el propio obispo Barrientos.

A lo largo del año siguiente las noticias se suceden en el mismo sentido, prohibiendo el concejo a Lope Vázquez de Acuña, Juan de Albornoz, Juan de Haro, Pedro Manrique e Íñigo López de Mendoza que se dirijan, como pretendían, contra la ciudad[200]. Durante este año de 1465 los conflictos alcanzarían un elevado grado de intensidad. El 9 de febrero el concejo conquense escribió al obispo Barrientos, que había salido de la ciudad a causa de la tensa situación en ella existente, pidiéndole que hiciese algo para defender Cuenca de los enemigos del rey que iban contra ella, y que pusiese remedio a los robos perpretados por el comendador Mosén Juan de la Pandla desde su fortaleza de la Torre del Aceite, situada a siete leguas de la ciudad. Asimismo, el concejo rogaría al prelado que les vendiese a un precio razonable tres o cuatro mil fanegas de trigo procedente de sus señoríos para provisión de la ciudad, que, debido a la

---

[199] *Ibid.*, ff. 107r y ss.

[200] Santiago Aguadé Nieto, <<Crisis de subsistencia...>>, pp. 24-25.

situación de crisis crónica, se encontraba extremadamente necesitada de los alimentos básicos[201].

Apenas dos meses más tarde el obispo Barrientos fue hecho prisionero cerca de Uclés por algunos hombres del marqués de Villena, entre los que se encontraba Diego de Haro, siendo después llevado el prelado a la villa de Uclés. De este modo, el 4 de abril el concejo conquense escribirá al rey informándole de lo sucedido y pidiéndole que hiciera todo lo posible para la liberación del obispo. Además, en la misma fecha, el concejo también escribió al marqués de Villena y a Diego de Haro, pidiéndoles que liberasen al prelado; al conde de Osorno y a Juan de Haro, rogándoles que intercediesen en favor de la liberación del obispo; al propio Barrientos, comunicándole que harían todo lo posible para que fuese puesto pronto en libertad; y a las villas de Moya, Huete y Requena, para que luchasen en favor de la libertad del obispo[202].

En respuesta a esta llamada, el 7 de abril el concejo de Huete escribió al de Cuenca confirmándole su cooperación para conseguir la libertad de Barrientos[203]. El 9 de abril el rey escribiría también al concejo conquense informándoles de que les enviaba a su vasallo Juan Hurtado de Mendoza para que junto con él todos colaborasen en la defensa de la ciudad[204], y el 17 del mismo mes el monarca escribió de nuevo al concejo recomendándole que se aliasen con el mencionado Juan Hurtado, el provisor de la diócesis y Pedro de Barrientos, sobrino del prelado, para hacer la guerra a don Juan Pacheco, marqués de Villena[205].

El provisor que en aquel momento gobernaba la diócesis en nombre del obispo era Alfonso García de San Felices, maestrescuela de Calahorra y canónigo conquense. De cara a hacer frente a la defensa de Cuenca contra el marqués de Villena no sólo fueron

---

[201] AMC, leg. 197, exp. 2, ff. 52v-53r.

[202] AMC, leg. 197, exp. 3, ff. 20r-22v.

[203] Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 108.

[204] AMC, leg. 197, exp. 3, f. 24r.

[205] *Ibid.*, f. 26r-v.

necesarias las rentas reales que Enrique IV ofreció a la ciudad, sino también otras eclesiásticas y seglares de cuya percepción se encargarían el provisor y Pedro de Barrientos. Además, se requisaron los bienes muebles de algunos vecinos que se habían pasado al bando de don Juan Pacheco, entre los que se encontraban el regidor García de Alcalá y su hermano Pedro Suárez de Alcalá, los cuales estaban fuera de Cuenca bajo las órdenes del marqués de Villena y de Lope Vázquez de Acuña, que tenían sitiada la ciudad. Finalmente, los defensores de la autoridad regia de Enrique IV lograron hacerse con la victoria, tomando el castillo de la ciudad, que hasta entonces había permanecido en poder del bando enemigo[206].

Por otro lado, durante el desarrollo de estos disturbios parece ser que algunas personas tratarían de poner al provisor en contra del obispo Barrientos y, lo consiguieran o no, lo cierto es que el prelado mandó su destierro de la ciudad y privación de beneficios, aunque años más tarde, el 12 de enero de 1478, los Reyes Católicos ordenarían a Juan Hurtado de Mendoza, entonces guarda mayor de la ciudad, que consintiese a Alfonso García de San Felices residir de nuevo en Cuenca y servir su canonjía[207].

El 14 de octubre de 1465 Fray Lope de Barrientos, aún prisionero, escribió al concejo conquense informándoles de la tregua establecida con el marqués de Villena, y cinco días más tarde el concejo respondería al obispo dándose por enterado de las negociaciones para dicha tregua[208]. Mientras tanto, el momento de la liberación de Barrientos se iba acercando, y el 19 de diciembre este último escribiría de nuevo al concejo comunicándole que acababa de llegar a donde él se encontraba prisionero el obispo de Ciudad Rodrigo, que había sido enviado por el

---

[206] AGS, *Registro General del Sello*, 12-I-1478, f. 72. Años más tarde García de Alcalá, Pedro Suárez y otros que habían luchado contra Enrique IV moverían un pleito contra el provisor Alfonso García de San Felices a causa de los bienes muebles que éste les había enajenado para posteriormente proceder a su venta. Pero el 12 de enero de 1478 los Reyes Católicos mandarían que al provisor no se le pudieran poner pleitos por razón de dichos bienes, excepto en lo relativo a los que no llegaron a venderse. *Ibid.*

[207] AGS, *Registro General del Sello*, 12-I-1478, f. 91.

[208] AMC, leg. 197, exp. 1, f. 7r-v.

marqués de Villena para tramitar su liberación, que ya era segura[209].

Otro problema que por esas mismas fechas estaba pendiente era el motivado por el embargo de bienes eclesiásticos que el marqués de Villena, al iniciarse sus enfrentamientos con el obispo conquense, había decretado en todas las villas y lugares de sus señoríos. De este modo, el 20 de diciembre, el cabildo catedralicio de Cuenca nombraría como procurador al canónigo Gil Ramírez de Villaescusa para que, junto con el obispo Barrientos, intercediese ante el marqués para que éste en adelante no consintiera que en sus villas los oficiales y alcaides embargasen las rentas eclesiásticas, y para que también mandara devolver todas las rentas arrebatadas[210].

Aunque con algo de retraso, el papa también intervendría a modo de mediador en el desarrollo de estos disturbios. Así, el 29 de enero de 1466 Paulo II mandó a su nuncio apostólico en Castilla, Leonoro de Leonoris, que trabajase para obtener la libertad de Lope de Barrientos, y asimismo la de Alfonso de Fonseca, arzobispo de Santiago, y el obispo de Osma, quienes también habían sido encarcelados en el transcurso de las agitaciones políticas del momento[211].

El 15 de marzo de este año, ya liberado el octagenario obispo Barrientos, Enrique IV le entregaría de nuevo la guarda de la ciudad, que por mandato regio había estado provisionalmente en manos de Pedro de Barrientos y el provisor de la diócesis durante el tiempo que el prelado estuvo prisionero[212], y el 16 de diciembre el obispo Barrientos y el concejo juraron conjuntamente defender Cuenca en favor del monarca[213].

Durante los años siguientes, y hasta el advenimiento de su muerte, Fray Lope trabajará junto con el cabildo catedralicio y

---

[209]Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 143.

[210]ACC, AC-1465, ff. 53r-54r.

[211]Justo Fernández Alonso, *Legaciones y nunciaturas...*, I, nº 2 / Beltrán, *Bulario*, III, nº 1211.

[212]AMC, leg. 197, exp. 5, ff. 37v-38r.

[213]Claudio Galindo y Guijarro, *Andanzas políticas...*, nº 149.

el concejo por conseguir mantener la paz en la ciudad y evitar a toda costa el surgimiento de nuevos conflictos nobiliarios o de otro tipo. Así, el 28 de noviembre de 1468 se cerró un acuerdo entre el concejo y el cabildo catedralicio, realizado a instancias del obispo, mediante el cual juraron permanecer siempre al servicio de Enrique IV defendiendo la ciudad de cualquier poderoso, obedecer siempre al prelado, estar en mutua concordia y, en caso de que se levantase algún nuevo escándalo en la ciudad, no dar <<favor e ayuda al levantador o levantadores del dicho roydo o roydos direte vel indirete, nin faremos ayuntamiento de gentes en nuestras casas nin fuera dellas por qualquier manera o color que sea para ayudar e favoresçer al levantador o levantadores...>>[214].

El 2 de mayo de 1469, muy poco antes de la muerte de Barrientos, se realizaría un acuerdo entre el marqués de Villena, don Juan Pacheco, y el entonces obispo de León y legado pontificio, Antonio Jacobo de Veneris, para que éste obtuviese de la Santa Sede la Iglesia de Cuenca cuando se quedara vacante, pasando la Iglesia de León al administrador de Tuy y recibiendo a cambio don Juan Pacheco, para él, el mando de las fortalezas de Cuenca a favor de personas de su confianza que le hicieran previamente pleito homenaje, y para su hijo el arcedianato de Calahorra y otros beneficios[215].

Ello explica que algún tiempo después de morir Barrientos, lo que sucedió el 30 de mayo de ese mismo año, Paulo II trasladase al cardenal Antonio Jacobo de Veneris desde León a Cuenca en atención, lógicamente, a los deseos del propio cardenal y del marqués de Villena. Pero, como ya se ha dicho con anterioridad, el cabildo catedralicio conquense elegiría como nuevo obispo, a instancias del concejo de la ciudad y contando con el beneplácito regio, al noble Juan Hurtado de Mendoza, originándose de este modo un serio conflicto, con evidentes implicaciones nobiliarias y de otro tipo, en torno a la designación del nuevo prelado

---

[214] AHN, Micr., rollo 13305: AMC, leg. 198, exp. 2, ff. 58v-59v.

[215] Pilar León Tello, *Inventario del Archivo de los duques de Frías*, II, nº 326.

conquense, que finalmente sería, de acuerdo con el criterio pontificio, el cardenal Antonio Jacobo de Veneris.

Vemos, pues, cómo los graves enfrentamientos acaecidos tiempo atrás, durante el alzamiento contra Enrique IV, entre el marqués de Villena y Fray Lope de Barrientos trascendieron incluso más allá de la muerte de este último, pues fue sin duda gracias al mencionado acuerdo entre don Juan Pacheco y Antonio Jacobo de Veneris como éste obtuvo del papa la mitra conquense, evitando de este modo el marqués de Villena que el cargo episcopal, de fuertes implicaciones políticas, fuese a parar a manos de un candidato afín al concejo conquense y al monarca castellano, como era Juan Hurtado de Mendoza, el cual, además, había sido en 1465 una de las cabezas visibles de la defensa de la autoridad real en Cuenca contra el bando formado en torno al marqués de Villena.

3-El cabildo catedralicio como plataforma de promoción social de la oligarquía urbana conquense

Otra importante manifestación de las relaciones mantenidas entre la Iglesia conquense y la nobleza es la que viene dada por la destacada presencia de algunos representantes de la alta y mediana nobleza conquense ocupando cargos de diverso relieve en el cabildo catedralicio, siendo este un proceso que, si bien sus raíces se remontan al siglo XIII, es sobre todo a partir de la centuria siguiente cuando se manifiesta de manera mucho más palpable.

Así, algunos miembros de los linajes Albornoz -entre ellos el futuro cardenal don Gil-, ya desde el siglo XIV, Carrillo y Hurtado de Mendoza, sobre todo a partir del siglo XV, ostentarán canonjías y fundamentalmente dignidades en el cabildo catedralicio conquense, lo que estaba acorde con la elevada posición social que tenían en la ciudad. Por otro lado, también consiguieron acceder al cabildo catedralicio, en especial desde el siglo XV, algunos personajes pertenecientes a ciertas familias hidalgas de Cuenca como eran los Cañizares, Chirino, Cañaveras, Molina,

Dones, Torralba o Valera; estos hidalgos a veces ocuparon canonjías, raciones y mediasrraciones, pero casi nunca dignidades.

De este modo, el cabildo catedralicio pronto se convertiría en una excelente plataforma de promoción social para algunos miembros tanto de la alta nobleza como del grupo de los hidalgos, si bien conviene dejar muy claro que a lo largo de la Baja Edad Media el cabildo catedralicio no sólo estuvo integrado por representantes de estas familias conquenses, sino que también hubo en él personas pertenecientes a otras familias castellanas de diverso relieve social e incluso algunos extranjeros.

Como se recordará, todas estas cuestiones ya fueron analizadas con mucho más detalle en el capítulo segundo de la presente obra, dentro del apartado dedicado al estudio de la extracción social de los miembros del cabildo catedralicio conquense, por lo que remito al lector a dicho apartado, donde se recoge un análisis más pormenorizado sobre el tema.

4-El mecenazgo nobiliario hacia la Iglesia

Las relaciones de la nobleza conquense con la Iglesia, y al contrario de lo sucedido en los casos conflictivos antes analizados, también se desarrollarían muchas veces en el marco del mecenazgo hacia la Iglesia por parte de algunos miembros destacados de la nobleza, tanto de la ciudad de Cuenca como del resto del obispado, manifestándose frecuentemente dicho mecenazgo mediante la realización de donaciones diversas y fundación de capellanías, aniversarios e incluso nuevos centros monásticos, lo cual no sólo poseía una significación estrictamente religiosa, sino que también venía a ensalzar el elevado rango social de ciertas familias. Así, pues, a continuación expondremos varios ejemplos sobre estas actitudes de mecenazgo hacia la Iglesia por parte de algunos miembros de determinados linajes.

A) *Albornoz*

Quizá fue éste el linaje que más estrechamente vinculado estuvo a la Iglesia de Cuenca, en particular al cabildo catedralicio, durante la Baja Edad Media, en especial a lo largo del siglo XIV. Sobre el desarrollo y elevación social de este linaje durante esta última centuria contamos con el excelente estudio que hace ya años realizara Salvador de Moxó[216]. A comienzos del siglo XIV García Álvarez de Albornoz, padre del cardenal don Gil, ya era un señor de vasallos con solar conocido y cierto, y resulta indudable su posición relevante en Cuenca, cuya nobleza local encabezaban durante este siglo los caballeros del linaje Albornoz, que ejercía un fuerte influjo en la vida del municipio. García Álvarez, además del señorío de Albornoz y alguna otra villa en la llanura, como Naharros, disfrutó del señorío de las villas serranas de Uña, Valdemeca, Aldehuela, Cañizares, el Hoyo de Cuenca, Ribagorda, Poyatos, Portilla, Valdecabras, Valsalobre, Sacedoncillo, Arrancacepas y Villaseca[217].

Dueño, pues, de un importante dominio solariego, García Álvarez incrementó la fuerza del linaje con un matrimonio ventajoso al casarse con Teresa de Luna, cuya familia, de origen aragonés, poseía señoríos cercanos a la frontera con Castilla. Es a partir de ahora cuando la casa de los Albornoz va a iniciar un notable ascenso en el orden social. De este enlace nacerán Alvar García, conocido como *el Viejo*, primogénito y cabeza de familia, Ferrand Gómez, comendador de Montalbán, y el futuro cardenal don Gil, quienes con sus relevantes cualidades formarán la más brillante generación de linaje y harán posible el auge del mismo. Para este ascenso fue muy importante el apoyo de la Iglesia, que resultará decisivo concretamente para la carrera de Gil Álvarez, quien encontró abiertos los cuadros de la Iglesia gracias al apoyo del hermano de su madre, don Jimeno de Luna, arzobispo de Tarragona y luego de Toledo. A partir de ahora el

---

[216] Salvador de Moxó, «Los Albornoz. La elevación de un linaje y su expansión dominical en el siglo XIV», *Studia Albornotiana*, XI (1972), pp. 17-80.

[217] *Ibid.*, pp. 30-32.

influjo del linaje rebasará el área local conquense para extenderse por toda Castilla y ser partícipe en la gran política del reino[218].

A su vez, se fueron adquiriendo nuevos señoríos, como Torralba, Tragacete y Beteta, todos ellos en plena Sierra de Cuenca, área natural del señorío familiar. Con Enrique II de Trastámara el engrandecimiento del linaje fue rápido, al igual que sucedió con otras familias de la *nobleza nueva* enriquecidas gracias a las mercedes enriqueñas; así, este monarca donaría al linaje de los Albornoz las villas de Utiel y Moya, que más tarde se perderían[219].

Pero debido a la extinción biológica de la línea principal de la estirpe, el patrimonio de los Albornoz se fraccionó y dislocó al mediar el siglo XV, ya que mientras parte va a los Mendoza, señores de Cañete, parte pasa a los Luna y finalmente otra tercera parte, compuesta por numerosos lugares serranos y prestigiada con el señorío de Torralba y Beteta, irá a manos de los Carrillo, que con ello pasaron a denominarse Carrillo de Albornoz, recordando así su parentesco con el cardenal don Gil y su prestigioso linaje. De este modo, a partir de ahora el influjo de los Albornoz se reducirá al ámbito local conquense[220].

Las inevitables relaciones de este linaje con la Iglesia de Cuenca se iniciarían ya desde fechas muy tempranas. Así, el 7 de enero de 1314 García Álvarez de Albornoz y su mujer, Teresa de Luna, entregaron al cabildo catedralicio las posesiones que tenían en Las Zomas, aldea de Cuenca, a cambio de dos casas propiedad del cabildo en la ciudad[221].

Pero como realmente se intensificaron estas relaciones fue a través de la figura de Gil Álvarez de Albornoz, que muy pronto accedería a la cúpula del cabildo catedralicio conquense. Así,

---

[218] *Ibid.*, pp. 34-35.

[219] *Ibid.*, p. 41.

[220] *Ibid.*, p. 63.

[221] ACC, siglo XIV, nº 242.

al menos desde 1325 ya era canónigo y arcediano de Huete. Como se recordará, al año siguiente el cabildo catedralicio, a pesar de su corta edad y de no haber recibido aún las órdenes sagradas, le elegiría como nuevo obispo, oponiéndose el papa a esta elección. En 1327 sucedería lo mismo y con idénticos resultados, por lo que finalmente Gil Álvarez no llegaría a ser obispo de Cuenca, lo cual no impidió la imparable progresión de su brillante carrera eclesiástica, llegando a ser arzobispo de Toledo y cardenal, puesto este último desde el cual, según ya hemos estudiado, Gil Álvarez de Albornoz ejercería un notable control sobre los beneficios del cabildo catedralicio conquense.

El 10 de septiembre de 1348, siendo arzobispo de Toledo, don Gil donó al cabildo de Cuenca la parte que le correspondía en los molinos de Mariana y 8000 mrs., con cargo de que rezasen por el alma de sus padres, la salud del rey y la suya propia[222]. Y en su testamento, otorgado el 29 de septiembre de 1364, el cardenal se mostraría ampliamente generoso con el capítulo conquense, haciéndole las siguientes donaciones: unos molinos en el Júcar, cerca de la ciudad, que tiempo atrás había comprado a Miguel Sánchez; la llamada dehesa del Hendibo, para la dotación de dos capellanías perpetuas por su alma y la de sus padres en la capilla familiar de la catedral conquense donde estaban enterrados estos últimos; un cáliz de plata dorada, de tres marcos de peso, una pequeña cruz y dos casullas, una blanca y otra colorada jaspeada, con sus albas, amitos, estolas, manípulos y cíngulos, todo ello para dicha capilla familiar; una cabeza de plata, de cuarenta y ocho marcos de peso, con las reliquias de San Blas, y su mejor pluvial, de factura inglesa, lo cual nunca podrá ser enajenado por el cabildo, sino guardado en la sacristía junto con las demás joyas y reliquias, debiendo ser utilizado únicamente en determinadas fiestas solemnes y bajo ciertas condiciones; finalmente, deja establecido que se restituyan al cabildo una Biblia manual y unos comentarios de Santo Tomás sobre San Lucas y San Juan que el capítulo conquense le había prestado. Además, de las cincuenta mil misas que encargó por su alma, dos mil

[222]ACC, siglo XIV, nº 222.

deberían ser celebradas por los religiosos mendicantes y clérigos seglares de la ciudad y diócesis de Cuenca, conforme a una ordenación y distribución hecha por el anterior obispo conquense don Fernando y por el deán don Martín Fernández[223].

Asimismo, conviene recordar la estrecha colaboración que se produjo entre el cabildo catedralicio conquense y los hermanos del cardenal don Gil, Alvar García y Ferrand Gómez, en el transcurso de los enfrentamientos contra Pedro I, cuestión ésta sobre la cual ya se habló detenidamente páginas atrás.

En épocas posteriores otros miembros del linaje también aparecen otorgando su protección al cabildo catedralicio conquense. Así, por ejemplo, el 2 de agosto de 1419 doña María Álvarez de Albornoz introdujo un codicilo en su testamento dando la extensa dehesa de Valsalobre, en la Sierra de Cuenca, al cabildo catedralicio para la dotación de una capellanía perpetua en la catedral conquense, que debería ser cantada en la capilla familiar de los Albornoz[224]. Esta capilla también se conocía como *capilla de Caballeros*, y se encontraba bajo la advocación de Santa María de la Sey[225].

Por último, hay que llamar también la atención sobre las donaciones que algunos miembros del linaje de los Luna, en función de su vinculación con los Albornoz, hicieron a favor de la Iglesia de Cuenca. Tal fue, por ejemplo, el caso de Juan de Luna, canónigo conquense, que el 5 de octubre de 1340 obligó su vestuario y la prebenda de su refitor para pagar al cabildo catedralicio 40 mrs. anuales para la dotación de las fiestas de Santo Tomás de Aquino y San Pedro Mártir, de cuatro capas cada una, donando además otros 800 mrs. para que el cabildo comprara posesiones[226].

---

[223] Juan Beneyto, *El cardenal Albornoz...*, pp. 296-298.

[224] ACC, AC-1419, ff. 89v-90r.

[225] ACC, caj. 8, leg. 32, nº 652.

[226] ACC, siglo XIV, nº 245. El 23 de agosto de 1326 Jaime II de Aragón rogó a su yerno, don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel, que hiciera todo lo posible para que al clérigo Juan de Luna, hijo del difunto Pedro Martínez de Luna y deudo del rey, se le otorgase una prebenda en Cuenca, tratándose sin duda del mismo personaje que en 1340 aparece como canónigo de esta Iglesia. Francisco de Moxó y Montoliú, *La Casa de Luna...*, apéndice documental, nº 212.

Mucho más significativo es, sin embargo, el testamento que doña Teresa de Luna, tía de don Álvaro de Luna y prima de doña Teresa Carrillo, otorgó en Alcázar de San Juan el 10 de noviembre de 1430, realizando, entre otras, las siguientes mandas: 1500 mrs. anuales al cabildo catedralicio para dos aniversarios, y otros 1500 para una capellanía perpetua en la capilla de los Albornoz de la catedral de Cuenca, situándose dichos maravedís en la dehesa de la Muela de Pancrudo, en la Sierra conquense; manda ser enterrada en dicha capilla de los Albornoz, en la sepultura donde llace su tía doña Urraca de Albornoz, y con el hábito de Santa María de La Merced; el día de su entierro saldrán a recibir su cuerpo el cabildo catedralicio, los clérigos y capellanes de todas las iglesias de Cuenca, y los frailes de los monasterios de San Francisco y Santa María de La Merced de la ciudad, debiendo hacer todos ellos los oficios de difuntos acostumbrados; encarga tres treintenarios, uno por su alma, otro por la de sus padres y otro por la de sus criados, que habrán de ser cantados por Fray Juan de Huete, su padre espiritual, en el monasterio de la Fuent Santa de Cuenca (Santa María de La Merced); dona a la obra de Santa María de Toledo, a la obra de Santa María de Guadalupe, a la Cruzada, a Santa Olalla de Barcelona y a La Trinidad, a cada una de ellas 5 mrs.; a la obra de Santa María de la Fuent Santa de Cuenca, 200 mrs., y varias telas preciosas para el monasterio; a los hospitales de Cuenca, a cada uno 10 mrs.; al monasterio de San Francisco de Cuenca, 50 mrs.; a la obra de Santa María de la Puente, en Cuenca, 50 mrs.; a la ermita de la Cruz, cerca de Cuenca, 50 mrs.; a Santa María de la Sey, 10 mrs. y una libra de cera[227]. A través de todas estas disposiciones testamentarias queda patente, por tanto, la eminente posición social de la otorgante.

B) *Carrillo*

La presencia de la familia Carrillo en el proceso de señorialización de las tierras conquenses tuvo lugar en 1298

[227]ACC, s.a. caj. 8, leg. 32, nº 652.

cuando, por concesión de Fernando IV a Alfonso Ruiz Carrillo, consiguieron los *pechos e derechos* reales en Priego de Escabas, aldea de Cuenca situada en el sector alto de la Sierra. La constitución del señorío de Priego, uno de los más antiguos y caracterizados del panorama señorial nobiliario en la Tierra de Cuenca, estuvo ligada al proceso de implantación del propio linaje en este territorio. Priego, convertido en señorío solariego, y después jurisdiccional desde 1355, por concesión de Pedro I, constituía el centro del patrimonio del linaje, y desde entonces la desvinculación del lugar respecto a la jurisdicción de la ciudad de Cuenca fue un hecho irreversible[228].

Después, poco a poco los Carrillo irían aumentando su patrimonio señorial en tierras conquenses mediante la incorporación de nuevas propiedades y territorios, entre los que cabe destacar las villas de Cañaveras y Villar del Saz de don Guillén, donde, al igual que en Priego, los condes cobraban diversos tributos señoriales a sus vasallos que allí habitaban[229].

El 6 de noviembre de 1465 Enrique IV concedió el título condal de Priego a Diego Hurtado de Mendoza, miembro del Consejo real y alcaide del alcázar de Molina, que estaba casado con doña Teresa Carrillo, hija de Pedro Carrillo de Huete, el célebre *Halconero mayor* de Juan II. El siguiente heredero del Condado de Priego fue Pedro Carrillo de Mendoza, a quien sucederían Diego Carrillo Hurtado de Mendoza, su primogénito, y posteriormente, ya en el siglo XVI, Luis Carrillo de Mendoza, cuarto titular del Condado[230].

Donde más claramente se manifiestan las actitudes proteccionistas de esta familia hacia la Iglesia, y en particular hacia aquellas parroquias y monasterios con los que se encontraban especialmente vinculados, es a través de algunos testamentos que han llegado hasta nosotros. Uno de los más antiguos que se conserva es el de Juan Ruiz Carrillo, señor de Priego, casado con Isabel Fernández, que está fechado en Borja a 20 de enero de

---

[228] María Concepción Quintanilla Raso, «El Condado de Priego de Cuenca...», p. 382.

[229] *Ibid.*, pp. 394-396.

[230] *Ibid.*, pp. 389-393.

1364, y en el cual aparecen alusiones a la fundación de una capilla en la iglesia parroquial de Priego, donde disponía su enterramiento[231].

Mucho mayor interés reviste, sin embargo, el testamento de Pedro Carrillo de Huete, señor de Priego y Halconero mayor de Juan II, autor de la conocida crónica[232]. Fue otorgado en la villa de Cañaveras, el 19 de marzo de 1446[233]. Se inicia con una serie de extensas consideraciones sobre la miseria de la presente vida y lo importante que debe ser para todo cristiano estar bien preparado para cuando llegue el incierto momento de la muerte:

"In Dei nomine, Amen. Por quanto la presente vida es muerte llena de miseria y en ella no moramos en nuestra ciudad, mas en peregrinacion, ni aqui tenemos lugar ni morada manente y perpetua, mas temporal, triste y vana y caduca, mientras pensamos tener paz y seguridad el travajo y caida repentinamente a desora sobreviene, y por esto Nuestro Señor no nos quiso certificar el dia ni la hora de nuestra muerte, porque siempre seamos sospechosos y temerosos de aquel dia incierto y no conocido fasta que viene aquella hora, atendiendo no pequemos y traigamos a la memoria la espantosa y terrible muerte de que naturalmente no podemos escapar, e podamos evadir a escusar la amargura y aflicion de las penas del infierno, conociendo a Nuestro Señor, que nos fizo y amo con tanto fervor y caridad que no solamente nos constituyo sobre todas las cosas de sus manos por el criarlas [sic], aquellas a nos sometiendo, pero aun nos quiso redimir y librar del poderio infernal su sangre por nos derramando y cruel muerte padeciendo, por ende yo, Pedro Carrillo, falconero mayor del muy alto y mui esclarecido mi señor el rey don Juan de Castilla, de Leon, e de su consejo, conociendo gravemente esta vida aver pecado contra Nuestro Señor y contra sus mandamientos, pero no desesperando de la grande e inmensa misericordia de Dios, mas teniendo en mi corazon esperanza y miedo, y assi esperando en su piedad que tema su justicia, y la vida del home savio e intendido es pensamiento de la muerte, e queriendo proveer a la salud de mi anima en tanto que yo he libre albedrio, estando sano por la gracia de Dios

---

[231] AHN, *Nobleza*, Diversos-Títulos y Familias, leg. 2198.

[232] Pedro Carrillo de Huete, *Crónica del Halconero de Juan II*. Edición de Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1946.

[233] AHN, *Nobleza*, Diversos-Títulos y Familias, leg. 2198. Copia del siglo XVIII.

de la voluntad e del cuerpo, e de mi seso y entendimiento, otorgo e conozco que fago e ordeno este mi testamento y postrimera voluntad..."

No hace falta insistir en la enorme carga ideológica que encierra este fragmento, que sin duda viene a ser un clarísimo exponente de la mentalidad medieval que tiende a sobrevalorar lo divino frente a lo humano y la *otra vida* frente a la presente que es valle de lágrimas.

Después Pedro Carrillo expresa su voluntad de ser enterrado en el coro del monasterio de San Francisco de Huete, mandando además que en su sepultura no se entierre a nadie más que a él. Siguen luego otras disposiciones y mandas religiosas cuyo contenido se reproduce a continuación de forma literal:

-"Item, mando que en el dia de mi enterramiento bengan todos los clerigos e capellanes y religiosos y monjas de la dicha ciudad de Huete y digan vigilias y fagan oficios acostumbrados, segun que a mi estado pertenece, y les den pitanza y salarios acostumbrados, y en los nueve dias digan vigilias y oficios, y assimismo en fin del año que les den su pitanza y salario acostumbrado con su nobenario".

-"Item, mando que el dia de mi sepoltura den de comer a todos los pobres que fueren fallados en la mi villa de Priego, y den de bestir a doce pobres sendas sayas de buriel de cada quatro varas, e sendas camissas de lienzo".

-"Item, mando que desde el dia de mi sepoltura fasta un año cumplido sean dichas mil misas rezadas por mi anima y de mi padre y mi madre, y que las digan clerigos y frailes como bien visto fuere a mis cabezaleros. Mando, otrosi, que se digan por mi anima quatro treintanarios rebecados en el dicho año, y los digan clerigos y frayles como bien visto fuere a mis cabezaleros, y les den su salario acostumbrado".

-"Item, mando que echen en cada una lampara del monasterio de San Francisco y de la iglesia de Priego y de las ermitas en redor, el dia de mi sepoltura, en cada una una libra de aceyte. Y mando que un paño de aceituni que tiene empeñado Alvaro Rodriguez de Aillon, que sea quitado y lo den a la dicha iglesia de Priego para una bestimenta para decir missa".

-"Mando, otrosi, que fasta un año cumplido lleven y sea llevado anual de pan y vino y cera al dicho monasterio, segun requiere mi estado".

-"Y mando a la Trinidad, y a la Cruzada, y a Santa Maria de Cuenca, y a Santa Olalla de Barzelona, y a Santa Maria de la Sey, cada una diez maravedis".

-"Otrosi, mando a las ermitas e santuarios de en redor de la villa de Priego, a cada una diez maravedis".

-"Item, mando al dicho monasterio de San Francisco dos marcos de plata para un caliz y la fechura de costare".

-"Otrosi, mando a Santa Maria de Guadalupe y de Nieva y de los Foyos y de la Peña de Francia, a cada una diez maravedis".

-"Otrosi, mando a los hospitales de la dicha villa de Priego, a cada uno cada cinquenta maravedis para ropa".

-"Otrosi, mando por cargo que yo tengo de algunos daños que se ficieron en algunas possadas donde yo pose yendo y andando con el rey nuestro señor, que den a pobres seiscientos maravedis...".

Es fácil deducir de las cláusulas precedentes hasta qué punto la gran cantidad de misas y oficios religiosos que se encargan, así como el carácter de las donaciones realizadas, son elementos que denotan la eminente posición social y condición noble del testador. Así, pues, todo ello no sólo debe ser interpretado desde el punto de vista de un ineludible deber religioso, sino también desde la perspectiva de su significación en cuanto a deber social.

En último término, y aparte de todas estas disposiciones religiosas, a través del testamento Pedro Carrillo también manda que su mayorazgo de las villas de Priego y Cañaveras, con otras posesiones suyas que se mencionan, lo herede su hija doña Teresa Carrillo, mujer de Diego Hurtado de Mendoza, y en su defecto otros miembros del linaje cuyo orden de prioridad se especifica detalladamente.

Un poco posterior es el testamento de doña María Carrillo, mujer de Martín Ruiz de Alarcón, señor de Valverde, que fue otorgado el 8 de diciembre de 1451, y a través del cual donó 4000 mrs. para que se construyese una capilla en la iglesia de Valverde, donde habría de ser enterrada, legando también a dicha

iglesia diversos ornamentos litúrgicos y 10 florines de oro para la construcción de un retablo[234].

Por otro lado la primera condesa de Priego, doña Teresa Carrillo, casada con don Diego Hurtado de Mendoza, instituyó el 15 de junio de 1476 una capellanía en la capilla familiar que los Carrillo tenían en la parroquia de San Nicolás de Priego, nombrando como primer capellán a su hijo don Pedro Carrillo[235]. Y en su testamento, otorgado en Priego el 1 de mayo de 1482, mandaría ser enterrada en dicha capilla[236].

Dejando ya a los condes de Priego, también resulta de interés el acuerdo que el 23 de febrero de 1487 se cerró entre Pedro Carrillo de Albornoz, alcalde mayor de los fijosdalgo de Castilla y señor de Torralba y Beteta, y el cabildo catedralicio conquense, a través del cual aquél donó a este último 9600 mrs. de juro situados sobre las alcabalas y tercias de ciertos lugares del obispado conquense, a cambio de que el cabildo distribuyese dicha cantidad en los siguientes fines: 1000 mrs. para la celebración de un aniversario por Enrique IV; 2000 mrs. para otros dos aniversarios por sus padres; 1000 mrs. para la conservación de la capilla de los Albornoz de la catedral; y el resto para la dote y fundación de una capellanía en dicha capilla, sobre la que Pedro Carrillo tendría derecho de patronato para poder presentar capellán, el cual habría de decir cada semana cuatro misas y también servir en el coro. Pero los primeros 9600 mrs. se determina que se gasten íntegramente en alargar la capilla y arreglarla[237].

Finalmente, no queda sino aludir a la intervención ocasional de algunos miembros del cabildo catedralicio conquense como árbitros de ciertos pleitos en los que se vio involucrada la

---

[234] M. Lasso de la Vega, *El señorío de Valverde*, doc. nº 26. En 1472 Lope de Alarcón, señor de Valverde, mandará en su testamento que se le entierre en la iglesia de Santa María Magdalena de la villa de Valverde, y que se vendan algunos bienes de su propiedad para costear la construcción de una capilla en dicha iglesia, donde habría de ser enterrado junto con su mujer, ya fallecida. *Ibid.*, doc. nº 29.

[235] P. Cruz Ocaña, *El convento de San Miguel...*, p. 3.

[236] AHN, *Nobleza*, Diversos-Títulos y Familias, leg. 2198.

[237] ACC, AC-1487, ff. 103v-104v.

familia de los Carrillo. Así, un claro ejemplo de ello lo constituiría la sentencia arbitral que el 31 de marzo de 1474 pronunciaron Gabriel Condulmario, arcediano de Alarcón, don Nuño Álvarez de Fuentencalada, chantre, y don Gonzalo Barroso, tesorero, en un pleito que había entre Pedro Carrillo de Albornoz, señor de Torralba y Beteta, y Pedro de Alarcón, señor de Valverde[238].

C) *Hurtado de Mendoza*

Este es un linaje que, sobre todo desde el siglo XV, cada vez tendrá un mayor peso en la ciudad de Cuenca. Como se recordará, algunos de sus integrantes llegaron a ocupar dignidades en el cabildo catedralicio conquense. Así, pues, no es de extrañar que la familia poseyese su propia capilla en la catedral conquense para la celebración de numerosas misas y aniversarios.

Se trata de la capilla del Espíritu Santo, situada junto al claustro. Hacia el final del siglo XV el patrono de esta capilla era don Juan Hurtado de Mendoza, marqués de la villa de Cañete, que tenía instituídas y dotadas dos capellanías perpetuas. Los clérigos encargados de cada una de ellas eran nombrados por el patrono, y el obispo y cabildo se encargaban de su provisión. Así sucedió, por ejemplo, el 17 de junio de 1483, fecha en que don Juan Hurtado presentó dos capellanes perpetuos, clérigos de la diócesis de Cuenca, al obispo y cabildo catedralicio para que los examinaran y les diesen posesión de las dos capellanías[239].

Este mismo Juan Hurtado de Mendoza otorgaría su testamento el 18 de enero de 1505 realizando, entre otros, los siguientes encargos: ser enterrado en la capilla del Espíritu Santo, junto a donde yace su mujer, doña Inés Manrique; que el día de su entierro el cabildo catedralicio en pleno y todos los clérigos, capellanes y religiosos de Cuenca acompañen en procesión su cuerpo hasta dicha capilla, y le digan los oficios acostumbrados, debiendo encontrarse también presentes tres pobres vestidos de

---

[238] M. Lasso de la Vega, *El señorío de Valverde*, doc. nº 37.

[239] ACC, original, s.s.

blanco que portarán tres cirios cubiertos de blanco y pintados con las cruces de La Trinidad; también el día de su entierro se dirá una misa cantada de La Trinidad y posteriormente otras misas; también encarga tres treintenarios por su alma, y que se le digan misas de requiem cada día durante todo el año, y responsos sobre su sepultura; deja a cada una de las ermitas de Cuenca 5 mrs., y lo mismo a Santa María de Guadalupe y a Santa Olalla de Barcelona. Todo ello, en definitiva, estaba plenamente acorde con el elevado rango social del testador[240].

D) *Pacheco*

Durante el siglo XV varios miembros de este linaje, y en especial el marqués de Villena don Juan Pacheco, desarrollarían algunas actividades de carácter proteccionista hacia la Iglesia, manifestándose dicho proteccionismo a través de diversas fundaciones eclesiásticas realizadas sobre todo en la villa de Belmonte, señorío de los marqueses de Villena, situada al sur del obispado conquense.

El marqués de Villena don Juan Pacheco, que, como hemos visto páginas atrás, se enfrentaría abiertamente al obispo de Cuenca Fray Lope de Barrientos durante el alzamiento contra Enrique IV de 1464-1465, con anterioridad había llevado a cabo importantes fundaciones en su villa de Belmonte. Sobre ello ya se habló en la primera parte de la presente obra.

Como se recordará, el 14 de mayo de 1446 el papa Eugenio IV había concedido licencia a don Juan Pacheco para fundar un monasterio de franciscanos observantes en la ciudad o diócesis de Cuenca[241]. Pero parece ser que esta fundación no debió de llevarse a cabo en los años inmediatos, puesto que el 4 de febrero de 1457 Calixto III otorgó a don Juan Pacheco otra autorización para fundar un monasterio de franciscanos observantes en Belmonte, eximiéndole de la licencia del diocesano[242].

---

[240] ACC, s.a. caj. 8, leg. 33, nº 655.

[241] Ulricus Hüntemann, *Bullarium franciscanum*, I, nº 995.

[242] *Ibid.*, II, nº 245.

Por otro lado, dos años antes, con fecha 23 de marzo de 1455, Calixto III también había concedido autorización a don Juan Pacheco, previa súplica de éste, para fundar un hospital de pobres en Belmonte, estableciendo que el nuevo centro fuese dotado con los correspondientes bienes[243]. A través de un nuevo documento, el 27 de enero de 1456 el mismo pontífice mandaría al obispo de Burgos que se informase sobre el carácter de las donaciones y concesiones hechas por don Juan Pacheco en favor de este hospital y, una vez habida la oportuna información, las confirmase con autoridad pontificia[244], lo que nos indica que para entonces el nuevo centro hospitalario estaba iniciando su funcionamiento.

Pero sin duda la fundación más importante realizada en Belmonte a instancias de don Juan Pacheco es la que vino dada a través de la erección en Colegiata de la antigua iglesia parroquial de San Bartolomé, que se llevó a cabo, previa súplica del marqués de Villena, mediante la bula *Ex Supreme Providentia Maiestatis* de Pío II, fechada el 1 de diciembre de 1459[245]. En adelante la nueva iglesia colegial permanecería bajo el patronato de los marqueses de Villena, costeando don Juan Pacheco gran parte de las obras de mejora de la antigua parroquia, en la que se construyó una capilla mayor donde se colocarían las seputuras de sus padres y abuelos.

También en la villa de Castillo de Garcimuñoz, señorío de los marqueses de Villena, éstos otorgarían durante el siglo XV una amplia protección al monasterio de San Agustín, fundado en la centuria anterior por don Juan Manuel, hijo del infante don Manuel. Fue precisamente en respuesta a una petición del marqués de Villena don Juan Pacheco por lo que Pío II, a través de un documento emitido el 18 de enero de 1459, se dirigió al arzobispo de Toledo para que éste mandase al provincial de la Orden de San Agustín en Castilla que en un plazo de tiempo razonable se encargara de reformar al prior y frailes del monasterio de la

---

[243]ASVat., *Reg. Vat.* 457, f. 2r-v.

[244]ASVat., *Reg. Vat.* 446, f. 176r-v.

[245]Luis Andújar Ortega, *Belmonte, cuna de Fray Luis de León...*, pp. 54-56.

villa de El Castillo, o bien les sustituyese por otros frailes agustinos ya reformados conforme a la Observancia de la Orden[246].

Por otro lado, ya hacia fines de siglo, el 16 de junio de 1483, Sixto IV concedería licencia a Isabel Pacheco, viuda del conde de Medellín, para que pudiese fundar dos conventos de hermanas terciarias de la Orden de San Francisco, uno en Belmonte y otro en la diócesis de Toledo, los cuales permanecerían bajo la dependencia del vicario general de los franciscanos observantes y del provincial de Castilla[247]. Y algún tiempo más tarde, en 1490, Inocencio VIII autorizaría a don Diego López Pacheco, marqués de Villena, para fundar un monasterio de clarisas en Belmonte[248], desconociéndose en qué momento exacto se llevó a cabo la fundación efectiva del nuevo centro. Desde luego, lo que resulta evidente es que, a través de todas estas fundaciones monásticas, los marqueses de Villena otorgarían desde mediados del siglo XV un notable impulso al desarrollo de la Observancia franciscana y agustiniana en el obispado de Cuenca.

E) *Cabrera*

Ésta es una familia de origen judío que, por méritos propios, logró acceder a la nobleza, culminando su engrandecimiento mediante las fructíferas relaciones matrimoniales establecidas con algunos importantes linajes castellanos. Siempre ocultaron sus antecedentes hebreos a través de una falsa genealogía cristiana vieja[249].

Sin duda, el miembro más destacado del linaje fue Andrés de Cabrera, cuyos antepasados habían decidido instalarse en Cuenca. Andrés de Cabrera fue un oficial de la Corte de los Reyes Católicos que, gracias a sus méritos y servicios, logró acceder

---

[246] ASVat., *Reg. Vat.* 502, f. 60r-v.

[247] *Ibid.*, III, nº 1756.

[248] Manuel de Castro y Castro, «Monasterios hispánicos de clarisas», p. 107.

[249] Mª Pilar Rábade Obradó, *Los judeoconversos en la Corte y en la época de los Reyes Católicos*, pp. 522-523.

hasta los más altos peldaños de la escala social. Nació, según Pinel y Monroy, su biógrafo, en Cuenca, en el año 1430, siendo bautizado en la parroquia de San Miguel de la ciudad, a la que pertenecían sus padres. Algunos de sus hermanos, como Lope Velázquez de Cabrera, fueron también oficiales regios al servicio de los Reyes Católicos. Sin embargo, extraña algo la escasa orientación eclesiástica de la familia, en la que se observa la presencia de un único religioso, Juan Pérez de Cabrera, arcediano de Toledo, hombre que, además, no se vinculó por ese sistema a su tierra natal, en la que no ocupó ningún cargo eclesiástico. En 1449 Andrés de Cabrera participaría en la defensa de Cuenca apoyando al obispo Barrientos frente a don Diego Hurtado de Mendoza y sus aliados, en el transcurso de los disturbios acaecidos dicho año[250]. La culminación de su carrera se produjo en 1480 cuando, en las Cortes de Toledo, los Reyes Católicos recompensaron a él y a su mujer, Beatriz de Bobadilla, con el título de Marqueses de Moya, en señal de gratitud por los numerosos serviciosa prestados[251].

Sabemos que Andrés de Cabrera y el arcediano de Toledo Juan de Cabrera encargaron a fines del siglo XV la edificación de una capilla sepulcral, la de San Andrés, en el trascoro nuevo de la catedral conquense. Estaba concebida como la capilla funeraria del conjunto de la familia Cabrera, a la que serían trasladados los restos mortales de sus padres y hermanos ya difuntos, dejándose también sitio suficiente para las sepulturas de los restantes miembros de la familia. La capilla fue dotada con dos capellanías perpetuas, cuyos capellanes y sacristán serían nombrados por el patrono de la misma. Además, se colocó en la capilla el escudo de armas del linaje, dotándola también con altares, pinturas, imágenes y ornamentos litúrgicos. El cabildo catedralicio, por su parte, se comprometió a celebrar a perpetuidad cada año dos aniversarios con misa, procesión y responso, por los difuntos de la familia[252]. De este modo, el 12 de febrero de

---

[250] *Ibid.*, pp. 565-567.

[251] *Ibid.*, p. 575.

[252] *Ibid.*, pp. 738-739.

1489, Andrés de Cabrera, marqués de Moya, prometería pagar en el plazo de 15 meses al cabildo 7000 mrs. de juro situados sobre ciertas rentas de las alcabalas de la ciudad de Cuenca, 3000 para la fábrica de la catedral y 4000 para la celebración de los dos aniversarios anuales[253]. En función de ello, el 5 de abril de 1490 le sería otorgado al cabildo el privilegio de dichos 7000 mrs. de juro[254]. Y algunos años después, el 2 de marzo de 1498, el papa Alejandro VI confirmaría a Andrés de Cabrera su derecho de patronato sobre esta capilla de San Andrés de la catedral[255].

Finalmente, también hay que destacar que en 1517 el arcediano de Toledo Juan de Cabrera dotaría con diversos bienes el colegio de Santa Catalina Mártir que había fundado en la ciudad de Cuenca[256], siendo ello, pues, otra manifestación más del proteccionismo de esta familia para con la Iglesia.

F) *Chirino*

Ésta era también una familia hidalga de orígenes judíos, cuyos miembros a veces desempeñaron regidurías en el concejo conquense. Sin duda el representante más destacado de esta familia fue el doctor Alonso Chirino, padre de Mosén Diego de Valera y médico de Juan II. Los Chirino poseían una capilla familiar en el monasterio de San Francisco de Cuenca, al que otorgarían una amplia protección y numerosas donaciones. Ello explica que el doctor Alonso Chirino, en su testamento, otorgado en la villa de Medinaceli el 12 de agosto de 1429, dejara encargado a su mujer y sus hijos que se le enterrase en dicho monasterio con las exequias de difuntos acostumbradas, indicando además que todo ello se hiciera <<sin roydo e sin lloro e ningun luto traer por mi e sin fazer otra vana gloria alguna, ca a ellos non conviene tristeza de lo que yo so gozoso, ca esta partida es

---

[253]ACC, AC-1489, ff. 15r-16r.

[254]ACC, AC-1490, ff. 51v-52v.

[255]Pilar León Tello, *Inventario del Archivo de los duques de Frías*, II, nº 2192.

[256]ACC, s.a. caj. 8, leg. 33, nº 660.

que yo me vo adelante dellos algunos dias, onde los esperare, lo que ellos aca non pueden a mi...>>[257].

G) *Álvarez de Toledo*

Los Álvarez de Toledo eran también otra familia conversa de Cuenca que durante el siglo XV ejercería un importante control sobre algunas regidurías del concejo. Sabemos que Alfonso Álvarez de Toledo mandó construir junto al claustro de la catedral una capilla familiar que tendría un capellán perpetuo encargado de cantar dos misas semanales por su mujer y sus padres, estableciendo poco después el cabildo catedralicio, con fecha 2 de septiembre de 1481, que dicho capellán pudiera ganar en las horas del coro del mismo modo que los capellanes del número de San Ildefonso[258].

III-RELACIONES CON LAS COMUNIDADES JUDÍA Y MUSULMANA

Saliendo ya del ámbito de la comunidad cristiana, resulta imprescindible dedicar un último punto al estudio de las inevitables relaciones que la Iglesia de Cuenca mantuvo con las otras comunidades religiosas que habitaron la ciudad y el territorio diocesano conquense durante la Edad Media, es decir, judíos y, en menor medida, musulmanes. Aunque la información disponible sobre esta cuestión es escasa, algunos datos sí que pueden aportarse.

En septiembre de 1290, y por mandato de Sancho IV, se elaboró en Huete un padrón de lo que tributaban las aljamas de los judíos de Castilla. Se trata de un documento fundamental para el estudio de las juderías hispanas. Las cifras relativas al obispado de Cuenca son las siguientes:

---

[257]Ángel González Palencia, *Miscelánea conquense*, p. 182.

[258]ACC, s.a. caj. 3, leg. 14, nº 206.

-Cuenca: 70.882 mrs.
-Uclés: 28.514 mrs.
-Huete con Alcocer: 46.680 mrs.

En comparación con otros lugares de Castilla estas cifras son de cierta consideración, lo cual denota una nada desdeñable presencia hebrea en Cuenca y su obispado[259].

En la ciudad de Cuenca la judería se localizaba en el área del alcázar, y estaba cercada por un adarve, que en el siglo XIV limitaba con la Zapatería Vieja, por donde se abría una de las puertas, y también con la Alcaicería, Correría, Concejo Viejo y Pellejería. Tenía, pues, una extensión considerable, varias puertas de acceso y en su interior una torre por lo menos. Más tarde, en el siglo XV, transformada ya la sinagoga en parroquia de Santa María La Nueva, el barrio perderá completamente su antigua condición de aljama, pasando a albergar un número creciente de caballeros, la mayoría de ellos conversos[260].

Sabemos que al menos los judíos de las aljamas de Cuenca y Uclés estaban obligados a pagar anualmente cierta pequeña cantidad de dinero al cabildo catedralicio. Así, en una reunión capitular que se celebró el 29 de mayo de 1301, el cabildo rogó al obispo don Pascual que permitiese anejar a la tesorería el préstamo de los 30 dineros que pagaban anualmente los judíos de Cuenca y Uclés para las candelas que se ponían en la catedral en los aniversarios de los obispos y para determinadas fiestas solemnes, accediendo acto seguido don Pascual a la petición[261]. Un siglo más tarde, en un acuerdo capitular fechado el 2 de abril de 1417, dicho préstamo continuaba anejo a la tesorería, si bien en esta ocasión se señala además que los moros habitantes de Cuenca también tenían obligación de entregar cada uno anualmente treinta dineros viejos al cabildo[262]. Esta entrega anual puede

---

[259]Carlos Carrete Parrondo, <<El repartimiento de Huete de 1290>>, p. 127.

[260]José María Sánchez Benito, *Las tierras de Cuenca y Huete en el siglo XIV*, p. 49.

[261]ACC, *Necrologio-Obituario*, f. 65r-v.

[262]ACC, caj. 11, nº 197, f. 67v.

ser interpretada como un símbolo de reconocimiento de la máxima autoridad religiosa que ejercían el obispo y cabildo catedralicio, autoridad que estaba por encima de las demás creencias religiosas, a la vez que como una pequeña compensación económica que los judíos y musulmanes entregaban por permitírseles practicar su religión.

En las relaciones mantenidas entre la Iglesia de Cuenca y los judíos y musulmanes a lo largo de la Baja Edad Media no faltarán las situaciones de conflictividad, como a continuación se verá. Uno de los primeros conflictos de que tenemos noticia es el que tuvo lugar en 1362 entre la aljama de los judíos de Cuenca y el cabildo catedralicio, viéndose implicado asimismo el concejo conquense. En efecto, el 14 de marzo de dicho año de 1362 Pero González de Viana, alcalde de Cuenca, dio sentencia en un pleito que había entre el cabildo y la aljama de los judíos, condenando a estos últimos a reparar un pedazo de adarve de la judería que amenazaba caerse encima de unas casas que el cabildo tenía en la calle de la Pellejería[263]. Pero otros alcaldes del concejo de Cuenca se mostraron pasivos a la hora de hacer cumplir esta sentencia, lo cual motivaría las protestas del cabildo catedralicio y la intervención de la Monarquía en el asunto. De este modo, el 23 de junio de 1363, Pedro I mandaría a los alcaldes de Cuenca hacer cumplir la sentencia dictada el año anterior por Pero González, y que había sido favorable al cabildo[264].

Mucha mayor importancia tendrían, sin embargo, los conflictos que de nuevo se producirían entre el cabildo catedralicio y los judíos de Cuenca durante los años inmediatamente posteriores, de tal suerte que en las peticiones que el cabildo dirigió a Enrique II probablemente con ocasión de las Cortes de Toro de 1371 los canónigos expusieron al monarca cómo hacía poco se les habían quemado hasta un total de ochenta casas propiedad del capítulo catedralicio que producían gran renta, acusando además a los judíos de ser los causantes del daño, por lo que se

---

[263]ACC, siglo XIV, nº 124.

[264]ACC, siglo XIV, nº 298 / AHN, *Estado*, leg. 3190, nº 2, ff. 43r-43v.

solicitaba del rey que dichas casas fuesen reparadas a costa de los bienes de los judíos[265].

Además, en las mismas peticiones el cabildo también expuso a Enrique II que, a causa de los muchos pechos que habían tenido que pagar en tiempo de Pedro I, se vieron obligados a <<enpennar lanparas e inçensarios e caliçes e otros ornamentos de plata a los judios a logro>>, por lo que ahora se rogaba al monarca que mandase a los oficiales de Cuenca que, pagando el cabildo el principal del empeño, obligasen a los judíos a devolverles dichos ornamentos y objetos litúrgicos[266]. Ello demuestra, en definitiva, que por entonces las relaciones con la comunidad hebrea atravesaban unos momentos de cierta tensión.

Los conflictos aún aparecerán nuevamente en años posteriores. Así, el 12 de marzo de 1384 Juan I dará sentencia a favor del cabildo catedralicio de Cuenca y contra Abraham Buhardo, judío arrendador de las salinas de Fuente el Manzano y de Monteagudo, para que el cabildo siguiese cobrando los 52 cahíces anuales de sal de las primeras y 620 mrs. de las segundas a que tenía derecho según privilegios de los reyes anteriores, que ahora Juan I les confirmaría de nuevo[267].

Aunque no poseemos testimonios directos sobre el grado de intensidad alcanzado en la ciudad de Cuenca por los movimientos antijudíos de 1391, sí que hay indicios de que debieron de ser lo suficientemente importantes como para que en muy pocos años la comunidad hebrea de Cuenca desapareciese casi por completo. Buena prueba de ello es la conversión en iglesia de la antigua sinagoga, que desde 1403 sería parroquia de Santa María La Nueva. Por otro lado, también se recordará cómo el obispo don Álvaro Martínez, poco después de los movimientos de 1391, había reformado las cofradías de San Francisco, San Pedro y San Pablo de Cuenca para que en ellas se integrasen los numerosos neoconversos del judaísmo. Y en las constituciones sinodales promulgadas por don Juan Cabeza de Vaca en 1399 se manda que todos los

---

[265] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, f. 129r-v.

[266] ACC, siglo XIV, nº 288 / BN, Ms. 13072, ff. 134v-135r.

[267] Sanz, nº 549.

clérigos sepan bien la doctrina cristiana para poder enseñarla a los fienes y, en particular, a los <<nuevamente convertidos>>[268], lo que constituye un claro indicio de que después de 1391 las conversiones debieron de ser masivas.

La rápida decadencia de la aljama conquense llegaría hasta tal punto que en 1441 el recaudador real, ante la imposibilidad de encontrar en Cuenca a alguien a quien cobrar el impuesto de 20.000 mrs. correspondiente a la aljama judía, llevó a cabo una investigación para tratar de saber a dónde habían ido a parar los antiguos miembros de dicha comunidad. El resultado que se obtuvo fue una declaración jurada de los oficiales y hombres buenos del concejo de Cuenca, quienes afirmaron que desde hacía años no vivían judíos en la ciudad, debiendo destacarse que entre los testigos que corroboran esta afirmación se encuentran algunos miembros de importantes familias conversas, como Castillo, Molina o De la Flor[269]. Ya hacia fines de siglo esta falta de presencia hebrea en Cuenca se consolidaría aún más mediante un mandato de los Reyes Católicos, dado el 12 de diciembre de 1483, prohibiendo la estancia en la ciudad a los judíos durante más de tres días, a petición del concejo conquense[270].

En cambio la pequeña y pobre aljama musulmana de Cuenca sí que consiguió perdurar durante el siglo XV. De dimensiones mucho más reducidas que la aljama judía, al menos hasta fines del siglo XIV se localizaba también en la zona del alcázar y junto a aquélla[271], poseyendo una pequeña mezquita y un cementerio propio. Entre 1414 y 1416 el cabildo catedralico otorgaría algunos censos enfitéuticos de bienes raíces en favor de ciertos moros de la ciudad. Pero la población mudéjar conquense era exigua en extremo. Así, en 1450 había en Cuenca 25 familias moras, y en 1483 tan sólo 7, casi todas ellas muy humildes y dedicadas fundamentalmente a los oficios de herrería y caldere-

---

[268] ACC, Estatutos, f. 31v.

[269] AMC, leg. 190, exp. 3, ff. 43v-44r.

[270] AGS, *Registro General del Sello*, 12-XII-1483, f. 20.

[271] José María Sánchez Benito, *Las tierras de Cuenca y Huete...*, p. 50.

ría. En 1485 se les asignó como morería el Barrio Nuevo, en la Puente Seca, lindando con la muralla pero dentro del recinto ciudadano, dándoles también permiso para construir allí cerca, pero fuera de la muralla, una nueva mezquita, abandonando la que antes poseían dentro de la ciudad[272]. Por otro lado, sabemos que en 1463 la aljama musulmana de Cuenca pechó 2000 mrs. en concepto de <<servicio y medio servicio>>; al año siguiente pecharía 1500 mrs., y en 1501 tan sólo 600 mrs., lo que nos indica que este último año el número de mudéjares en Cuenca debía de encontrarse reducido al mínimo[273].

En otros lugares del obispado conquense, sin embargo, sí que persistirían las juderías durante el siglo XV. Tal fue el caso de Uclés, Belinchón, Tarancón, Castillo de Garcimuñoz, Moya y, sobre todo, Huete.

En el siglo XV casi todos los judíos de Huete que no se convirtieron al Cristianismo tras las violencias antisemitas de 1391 vivían en el castillo de la villa o en sus alrededores, ya que fueron pocos los que habitaron otros barrios, como el de la calle de Civera. Durante la guerra que sostuvieron Juan II y don Álvaro de Luna contra los nobles sublevados, los judíos optenses no dudaron en apoyar a la Corona entregando el castillo al rey, quien en agradecimiento les confirmó todos sus privilegios y costumbres[274]. Tiempo después, el 29 de diciembre de 1476, los Reyes Católicos confirmarán de nuevo todos los privilegios, franquezas, libertades y mercedes que poseía la aljama de judíos de Huete[275], y el 25 de agosto del año siguiente los mismos monarcas se dirigirán al concejo y vecinos de Huete, a petición de la aljama de los judíos moradores en el castillo de la ciudad, ordenándoles que no echen sisa sobre éstos[276].

---

[272] Mercedes García-Arenal, <<La aljama de los moros de Cuenca>>, pp. 45-47.

[273] Miguel Ángel Ladero Quesada, *Los mudéjares de Castilla...*, pp. 92-94.

[274] Juan Blázquez Miguel, *Huete y su Tierra: un enclave inquisitorial conquense*, p. 43.

[275] AGS, *Registro General del Sello*, 29-XII-1476, f. 841.

[276] *Ibid.*, 25-VIII-1477, f. 373, 2º.

En 1492, con el Decreto de Expulsión, los judíos de Huete tuvieron que optar entre abandonar el reino o convertirse. Muchos eligieron esta última solución, lo cual determinaría la presencia de un importante contingente de conversos en la ciudad durante la Edad Moderna, sobre los cuáles en ciertas etapas la Inquisición actuaría activamente[277].

Del paso de la comunidad hebrea por Huete pocos son los restos materiales que nos han llegado. Su sinagoga tradicionalmente se ha venido ubicando en el Arco o Puerta de Daroca, aunque ningún vestigio de ella se ha podido encontrar. Respecto a su cementerio, parece ser que se encontraba hacia la Cruz del Matadero, muy cerca de la Puerta de Daroca[278].

También existió en Huete durante la Baja Edad Media una pequeña comunidad musulmana, aunque nunca alcanzaría la importancia que llegó a tener la aljama judía. El Fuero de Huete, que fue otorgado con posterioridad a 1281, hace continuas referencias a los musulmanes que allí habitaban. A principios del siglo XIV la documentación alude a casas de mudéjares en la calle del Rey. Esta calle aparece durante más de un siglo como centro de vecindad musulmana, lo que hace sospechar que su aljama estuviese ubicada cerca de allí. También tenían su propia mezquita, así como un cementerio que estaba en la Puerta de los Carros, junto al convento de los mercedarios. Los musulmanes no podían cerrar ni tapiar su *fonsario*, lo cual motivaba no pocos problemas; para remediar esta situación, el miembro más influyente de la comunidad, el alfaquí Muhammed, en nombre y representación de la misma, llegó en 1430 a un acuerdo con el monasterio de La Merced,

---

[277]Establecido en Cuenca el Tribunal de la Inquisición a partir de 1489, ya desde la última década del siglo XV contamos con la existencia de procesos inquisitoriales centrados en la ciudad de Huete y su Tierra, en algunos de los cuales fueron clérigos las personas juzgadas. Así sucedió con Alonso de Madrid, cura de Peraleja, aldea de Huete, a quien se acusaba de enviar aceite para las lámparas de la sinagoga, y que fue procesado y absuelto en 1492. Más interés ofece, sin embargo, el proceso seguido contra Diego González de Madrid, cura de San Nicolás de Huete. En 1490 el fiscal le acusa de que <<rogo e importuno a un fiel christiano que se fuese con el donde no los conosçiesen y donde pudiesen predicar y andar entre judios, diziendo este buen clerigo que diria que era judio, y en este abito que les predicaria su ley en su lengua ebrayca, e ansy que sacaria dinero...>>. La sentencia, pronunciada en 1491, declara que el procesado incurrió en delito de excomunión mayor, pérdida y confiscación de bienes, y que había de ser relajado al brazo secular. Sobre ello puede verse: Carlos Carrete Parrondo, <<Los clérigos judaizantes de Huete>>, *AEM*, 12 (1982) pp. 411-418.

[278]Juan Blázquez Miguel, *op. cit.*, pp. 43-44.

a través del cual se cedió a éste una casa que lindaba con él a cambio de poder levantar una cerca alrededor del *fonsario*.

Durante todo el siglo XV la pequeña comunidad mudéjar de Huete vivió una época, si no de prosperidad, al menos de una relativa tranquilidad. En 1463 los mudéjares de Huete, junto con los que habitaban en Valdeolivas, Alcocer, Salmerón, Albendea y Pareja, pecharon en concepto de <<servicio y medio servicio>> 1600 mrs., y 1200 mrs. al año siguiente, mientras que en 1501 los mudéjares optenses y los de Salmerón y Valdeolivas pecharon 2000 mrs. por el mismo concepto[279]. Fue precisamente este último año cuando los musulmanes de Huete fueron obligados a convertirse, al igual que los del resto del reino, concediéndoseles ciertos privilegios. Por estas mismas fechas la aljama musulmana de Huete contaba con poco más de cien habitantes. A los convertidos se les concedieron veinte años de gracia durante los cuales la Inquisición no podría actuar contra ellos, pero transcurrido dicho plazo comenzarían los procesos[280].

También tuvo cierta importancia la comunidad judía de Castillo de Garcimuñoz, señorío de los marqueses de Villena, aunque en este lugar los movimientos de 1391 forzarían muchas conversiones. Con todo, durante el siglo XV aún persistió la aljama judía, existiendo constancia para esta centuria de prácticas judaizantes por parte de los cristianos nuevos de esta localidad[281], en la que también hubo una pequeñísima comunidad mudéjar[282].

En cuanto a Uclés, su población mudéjar alcanzó proporciones relativamente considerables durante el siglo XV si se la compara con las cifras globales de vecinos de la villa en la misma época. Así, según el padrón de 1495, había en Uclés 74 vecinos moros, cifra que multiplicada por el coeficiente 5 arroja un total de unos 370 individuos. Respecto a la aljama judía, a lo largo del

---

[279] Miguel Ángel Ladero Quesada, *Los mudéjares de Castilla* .., pp. 92-94.

[280] Juan Blázquez Miguel, *op. cit.*, pp. 33-36.

[281] Yolanda Moreno Koch, <<La comunidad judaizante de Castillo de Garcimuñoz>>, p. 353.

[282] Miguel Ángel Ladero Quesada, *Los mudéjares...*, p. 92.

siglo XV experimentaría cierta decadencia, aunque menor que la de otras aljamas de la diócesis. Hasta comienzos del siglo XV los judíos de Uclés vivieron mezclados con la población cristiana, pero en 1415 el infante don Enrique, maestre de Santiago, mandó al concejo de la villa que diera a los judíos un lugar apartado donde vivir, tal como se hacía en Ocaña y en otros lugares de la comarca. Esta nueva aljama estaba ya formada en 1440, y poseía sinagoga. Por otro lado, a fines de la Edad Media la aljama judía de Uclés tenía a su cargo la conservación y reparo de 61 de las 650 almenas de que constaban las murallas de la villa[283].

Esta persistencia de las aljamas judías y musulmanas en ciertos lugares del obispado conquense motivaría que también durante el siglo XV se produjesen algunas relaciones entre la Iglesia y estas otras comunidades religiosas. De este modo, a través de ciertas constituciones sinodales se tratarían de articular determinados aspectos de dichas relaciones. Así, don Juan Cabeza de Vaca, en el sínodo de 1406, ordenó que ningún judío ni moro de la diócesis celebrara sus oficios religiosos públicamente en Domingo o en otra fiesta cristiana de guardar[284]. Por otro lado, en el sínodo de 1411, don Diego de Anaya prohibiría a los carniceros, so pena de excomunión, que entregasen sus animales a los judíos y moros para que éstos los matasen en sacrificio, devolviéndoselos posteriormente a sus dueños, cosa que al parecer sucedía con cierta frecuencia[285].

Fray Lope de Barrientos, en el tantas veces mencionado sínodo de 1446, también legisló sobre algunas cuestiones tocantes a judíos y musulmanes. Así, en esta asamblea sinodal ratificaría la prohibición de que los judíos y moros trabajasen públicamente los Domingos y otras fiestas de guardar en que el trabajo estaba prohibido a los cristianos para que así <<non fuese vituperiada la nuestra sancta Fe Catholica, la Yglesia e Mandamientos de Dios e se non causase mal enxienplo a los fieles christianos>>. Además, don Lope prohibió también a su alguacil hacer pactos con

---

[283] Milagros Rivera Garretas, *La Encomienda...*, pp. 70-75.

[284] ACC, *Estatutos*, f. 60v.

[285] ACC, *Estatutos*, f. 69r.

los infieles para que éstos pudieran trabajar públicamente sin pagar caloña, y en caso de que se hicieran dichos pactos se establece que los vicarios del obispo y los curas parroquiales manden prender a los infieles que trabajen públicamente los días de fiesta[286].

En definitiva, la presencia de judíos y musulmanes en el obispado conquense durante la Edad Media hizo inevitable el establecimiento de ciertas relaciones con la Iglesia, y más en concreto con la autoridad eclesiástica representada por el obispo y cabildo catedralicio, relaciones que, como se ha visto en las páginas anteriores, no pocas veces se desarrollaron en el ámbito de lo conflictivo, tanto debido a motivaciones de carácter económico como por otras razones de índole estrictamente religiosa.

[286] *Sínodo de 1446*, ff. 8v-9r.

ABRIR CONCLUSIONES 